

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025
MINISTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD EJECUTORA 370101- 370102

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2025.....	8
1. ASPECTOS GENERALES.....	8
2. ANTEPROYECTO DE INGRESOS (\$696.357.718.244)	9
2.1. FONSECON (\$687.026.702.527)	9
2.2. RECAUDO MULTAS – LEY 2197/2022 (\$9.331.015.717)	14
3. ANTEPROYECTO DE GASTO (\$2.764.028.453.689).....	16
3.1 UNIDAD EJECUTORA 37-01-01 MINISTERIO DEL INTERIOR – GESTIÓN GENERAL. (\$2.649.527.270.384)	16
3.1.1 FUNCIONAMIENTO (\$1.136.878.972.977).....	16
3.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL (\$52.174.661.804).....	16
3.1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (\$1.057.737.565.938)	42
3.1.1.3.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. (\$8.287.752.000)	42
3.1.1.3.2 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON. (\$615.899.554.799)	46
3.1.1.3.3 FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. LEY 985 DE 2005 Y DECRETO 4319 DE 2006. (\$158.268.000)	58
3.1.1.3.4 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL. (\$16.232.825.000)	60
3.1.1.3.5 IMPLEMENTACIÓN LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS (\$2.995.429.000)	69
3.1.1.3.6 FONDO DE PROTECCIÓN JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03. (\$871.223.584).	75
3.1.1.3.7 APOYO A LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 1618 DE 2013). (\$2.619.250.000).....	76
3.1.1.3.8 OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO (\$9.066.987.000)	83
3.1.1.3.9 PUEBLO NUKAK MAKU - ARTÍCULO 35 DECRETO 1953 DE 2014. (\$7.221.433.000)	84
3.1.1.3.10 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (\$4.802.100.000).....	84
3.1.1.3.11 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAINIA (\$3.412.300.000)	84
3.1.1.3.12 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE (\$2.656.200.000)	84

3.1.1.3.13 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VAUPES (\$3.408.900.000)	84
3.1.1.3.14 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VICHADA (\$5.394.200.000)	85
3.1.1.3.15 FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA - ARTICULO 96 LEY 1757 DE 2015 (\$101.893.728.791)	86
3.1.1.3.16 PAGO DE APORTES SOBRE LOS VOLUNTARIOS ACREDITADOS Y ACTIVOS DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE PRIMERA RESPUESTA AFILIADOS AL SGRL - DECRETO 1809 DE 2020 (\$9.147.164.000).	105
3.1.1.3.17 APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SENTENCIA T-025 DE 2004 (\$3.781.988.019)	107
3.1.1.3.18 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 – VICTIMAS (\$8.920.268.284)	116
3.1.1.3.19 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 – DERECHOS HUMANOS. (\$16.931.513.080)	123
3.1.1.3.20 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004.- COMUNIDADES NARP (\$12.061.154.235).	130
3.1.1.3.21 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 – COMUNIDAD INDIGENA (\$14.368.420.725)	136
3.1.1.3.22 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES.	141
3.1.1.3.23 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. (\$48.720.300.000)	143
3.1.1.3.24 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, MINORÍAS Y ROM. (\$142.857.400.000).	155
3.1.1.3.25 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS - DECRETO 1397 DE 1996. (\$ 9.418.530.000)	187
3.1.1.3.26 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (\$3.542.839.421)	191
3.1.1.3.27 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS Y LAS ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE COMO ACTORES SOCIALES TRASCENDENTES EN EL MARCO DE LA LEY 133 DE 1994 (\$1.826.412.000)	192
3.1.1.4 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (\$3.152.432.945)	204

3.1.1.4.1 IMPUESTOS (\$204.784.945).....	204
3.1.1.4.2 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (\$2.947.648.000)	206
3.1.2. SERVICIO A LA DEUDA (\$19.635.475.503)	207
3.1.2.1 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (\$19.635.475.503).....	207
3.1.3 INVERSIÓN (\$1.493.012.821.904).....	208
3.1.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN COLOMBIA. (\$59.378.570.300)	208
3.1.3.2 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA. (\$ 88.891.291.181).....	216
3.1.3.3 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO Y EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL. (\$180.992.000.000)	223
3.1.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS KUMPAÑY RROM A NIVEL NACIONAL. (\$945.873.782)	228
3.1.3.5 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS Y QUILLACINGAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (\$45.248.000.000)	235
3.1.3.6 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN ESPACIOS DE DIÁLOGO A NIVEL NACIONAL. (\$2.180.000.000).....	240
3.1.3.7 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA LA VIDA, PERMITIENDO EL BIENESTAR Y LA PAZ TOTAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (\$6.540.000.000)	245
3.1.3.8 FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$20.431.268.073).....	248
3.1.3.9 FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL NACIONAL Y REGIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES TENDIENTES A ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LOS TERRITORIOS NACIONAL. (\$77.362.110.000).....	257
3.1.3.10 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS COMO RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN NACIONAL. (\$6.347.414.705)	262
3.1.3.11 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES A NIVEL NACIONAL. (\$50.000.000.000)	268
3.1.3.12 FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. (\$21.100.445.201).....	273

3.1.3.13 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD HUMANA A NIVEL NACIONAL. (\$9.760.961.113).....	278
3.1.3.14 MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ LIDERADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR A NIVEL NACIONAL. (\$56.334.053.376).	283
3.1.3.15 FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL. (\$134.135.488.315).....	293
NECESIDAD DE RECURSOS 2025.....	293
3.1.3.16 FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE TRATA PERSONAS. (\$1.120.458.000)	308
3.1.3.17 FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CORPORACIONES PÚBLICAS Y LÍDERES LOCALES EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y DESCENTRALIZACIÓN. (\$23.038.019.200).	316
3.1.3.18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL. (\$ 2.795.667.437).....	327
3.1.3.19 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE SUS PROPÓSITOS Y ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES EN EL MARCO DE LA LEY 2166 DE 2021 A PARTIR DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NACIONAL. (\$234.300.000.000).	332
3.1.3.20 MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPESINADO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$15.080.088.609).....	339
3.1.3.21 FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA COORDINACIÓN DE ENTIDADES, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL CONOCIMIENTO, PARA BRINDAR GARANTÍAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (\$ 3.566.722.740.).....	346
3.1.3.22. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS, EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. (\$11.399.299.384)	362
3.1.3.23 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO AMPLIANDO LA COBERTURA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$ 2.957.400.000.)..	366
3.1.3.24 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$2.705.066.237)...	374

3.1.3.25 FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL. (\$10.765.710.000).....	376
3.1.3.26 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS. (\$6.322.528.029).....	388
3.1.3.27 IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL MIPG DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A NIVEL NACIONAL. (\$ 5.061.898.122)	396
3.1.3.28 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR NACIONAL. (\$5.152.580.000.)	405
3.1.3.29 FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS PROPIOS, SISTEMAS ORGANIZATIVOS Y AUTOSOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS A NIVEL NACIONAL. (\$176.000.000.000)	411
3.1.3.30 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS EN LOS ESCENARIOS DE DIÁLOGOS SOCIALES CON LAS COMUNIDADES NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS DE LA REGIÓN PACÍFICA COMO APOORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. (\$100.000.000.000)	423
3.1.3.31 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, PALENQUERAS Y RAIZALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$98.650.000.000).....	428
3.1.3.32 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL PARA LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL. (\$34.449.908.100)	434
3.2. UNIDAD EJECUTORA 37-01-02 MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA CONSULTA PREVIA (\$114.501.183.305)	444
3.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (\$110.778.397.526)	444
3.2.1.1 GASTOS DE PERSONAL (\$10.726.221.626).....	444
3.2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (\$5.012.952.000).....	445
3.2.1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (\$94.942.657.900)	450
3.2.1.3.1 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993. (\$84.937.418.000).....	450
3.2.1.3.2 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993- FRISCO (\$ 10.005.239.900).....	459
3.2.1.4. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA. (\$96.566.000).....	464

3.2.1.4.1. CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (\$96.566.000)	464
3.2.2 INVERSIÓN (\$3.722.785.779).....	464
3.2.2.1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES CON QUE CUENTAN LOS GRUPOS ETNICOS, EJECUTORES E INSTITUCIONALIDAD INTERVINIENTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA NACIONAL. (\$3.722.785.779)	464

ANEXO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

1. ASPECTOS GENERALES

Mediante este documento se presenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los textos de justificación, las bases legales y los cálculos de los ingresos y gastos del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio del Interior para la vigencia fiscal 2025, que incluye las Unidades Ejecutoras; 37-01-01 Gestión General y 37-01-02 Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa.

En una primera parte se hará mención al anteproyecto de ingresos de la Entidad, información que detallada los datos reportados en los formularios 1.1, 1.1A, 1.2 y 1.2A, que hacen parte de este ejercicio de programación presupuestal.

La segunda parte se dedicará al anteproyecto de gastos, el cual será presentada para cada una de las unidades ejecutoras, empezando por la 37-01-01 Gestión General y continuando con la 37-01-02 Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa, y que corresponden a la información detallada de los formularios; 2, 2.A, 2.B, 3, 4, 5 y 6.

Durante la elaboración de este ejercicio de anteproyecto se contemplaron los criterios y aspectos a considerar, que fueron establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante circular externa No 009 del 26 de febrero de 2024, dentro de los cuales se destacan; la implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal y la Presupuestación Orientada a Resultados, que se reflejó en la clasificación programático del gasto. En cuanto a la identificación de los trazadores presupuestales el Ministerio del Interior viene fortaleciendo esta labor no solo en la etapa de planeación presupuestal sino también en la de seguimiento a la ejecución, utilizando los sistemas que el MHCP y el DNP han dispuesto para tal fin.

Es de anotar que las cifras presentadas en este documento corresponden a la totalidad de las necesidades de la Entidad, que fueron calculadas en un contexto de manejo responsable con la sostenibilidad fiscal del país y que guardan consistencia con la información registrada en el aplicativo SIIF, que contemplan los techos indicativos de gasto de funcionamiento e inversión establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2024 – 2027. A continuación, se presenta el resumen de las necesidades presupuestales para la próxima vigencia.

UNIDAD EJECUTORA	COMPONENTE	APROPIACIÓN VIGENTE 2024	NECESIDAD PRESUPUESTAL 2025	TECHOS INDICATIVOS SIIF
37-01-01 Ministerio del Interior - Gestión General	FUNCIONAMIENTO	790.090.900.000	1.136.878.972.977	490.996.218.694
	INVERSIÓN	589.383.750.314	1.493.012.821.904	189.057.728.887
	SERVICIO A LA DEUDA	-	19.635.475.503	4.613.863.368
	SUBTOTAL	1.379.474.650.314	2.649.527.270.384	684.667.810.949
37-01-02 Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa	FUNCIONAMIENTO	68.451.800.000	110.778.397.526	25.343.577.261
	INVERSIÓN	4000000000	3722785779	0
	SERVICIO A LA DEUDA	0	0	0
	SUBTOTAL	72.451.800.000	114.501.183.305	25.343.577.261
TOTAL MINISTERIO DEL INTERIOR		1.451.926.450.314	2.764.028.453.689	710.011.388.210

2. ANTEPROYECTO DE INGRESOS (\$696.357.718.244)

2.1. FONSECON (\$687.026.702.527)

Para estimar la proyección del recaudo del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon para el año 2025 se presenta inicialmente un análisis de comportamiento del recaudo histórico del periodo 2019-2023, al igual que su tendencia desde el año 2013 a 2023. Los datos aquí registrados agregan variables externas que afectan directamente el recaudo como:

- Ley General de Presupuesto Colombiano.
- Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ubicó al cierre del 2023 en 9,28%.
- Marco fiscal de mediano plazo.
- Inflación.

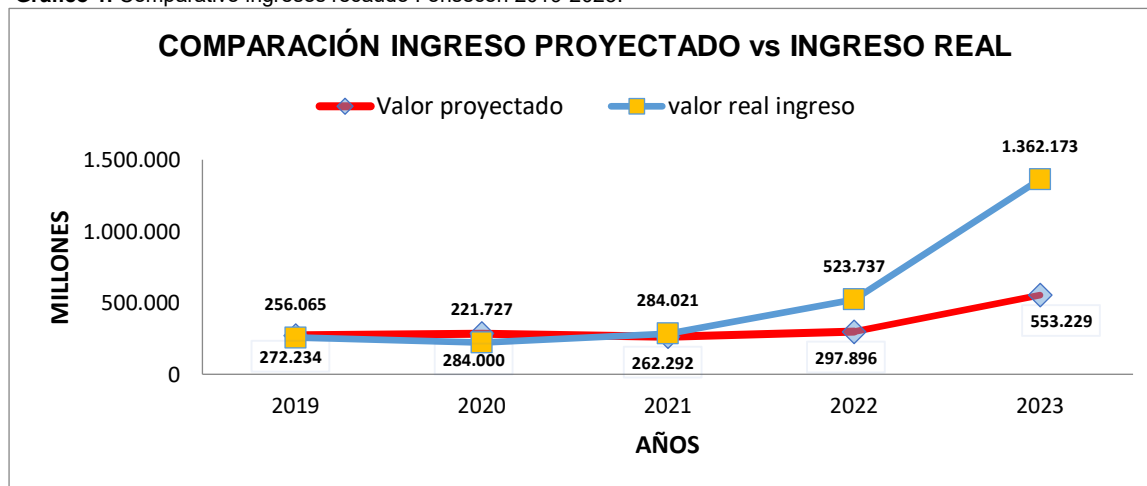
1. Análisis del comportamiento del recaudo histórico FONSECON:

Tabla 1. Comparativo presupuestal de proyección

PROYECCIÓN vs INGRESO REAL FONSECON		
AÑO	VALOR PROYECTADO	VALOR REAL INGRESO
2019	\$ 272.234.172.386	\$ 256.065.040.622
2020	\$ 284.001.307.172	\$ 221.727.243.193
2021	\$ 262.292.653.575	\$ 284.021.471.069
2022	\$ 297.896.445.837	\$ 523.737.361.934
2023	\$ 553.229.600.000	\$ 1.362.173.214.702

Fuente: Cifras pesos. SIIF-Nación

Gráfico 1. Comparativo ingresos recaudo Fonsecon 2019-2023.



Fuente: Grupo Recaudo Fonsecon.

Las proyecciones de ingreso por contribución en obra pública y concesiones se han realizado con base en la regresión lineal y el análisis de los cambios de gobierno al igual que diferentes factores

de la economía y las tendencias de mercado, políticas fiscales y otras variables que afectan la contribución especial del Recaudo.

Dado el comportamiento de los ingresos reales se evidencia que la técnica utilizada no vincula las variables externas de los factores que se vuelven atípicos para algunas vigencias como la del 2020 (Pandemia), 2022 (reactivación) y 2023¹ refleja un recaudo significativo frente a los otros años, por la sentencia a favor del Ministerio del Interior para los recaudos provenientes de la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A, por lo que el histórico del recaudo no se acerca a lo realmente proyectado.

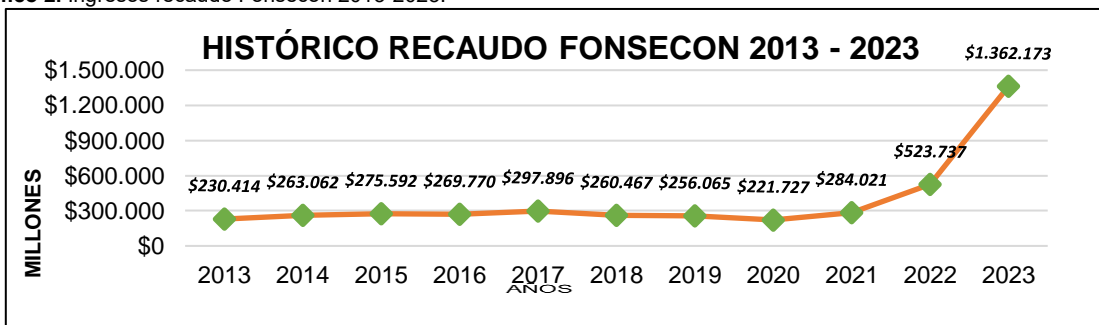
Mediante una herramienta de análisis estadístico denominado “solver” la siguiente formulación se determina la media y la desviación estándar respectivamente para los periodos 2019-2023:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n}{N} \quad S_X = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - Media(X))^2}{N - 1}}$$

\$ 479.853.230.691

Al realizarse una revisión de los recaudos al final de la vigencia 2013-2023, se observa una tendencia estable del recaudo entre los años 2014 al 2023, excepto en el 2017, 2020, 2022 y 2023; en el que para el año 2017 el Ministerio de Hacienda habilitó los pagos completos a todas las entidades públicas contratantes del orden nacional y territorial al cierre del año, y por ende éstas causaron el recaudo de contribución en el mismo año, evidenciándose en \$20.000 millones más frente al comportamiento del mismo mes en periodos anteriores, siendo este un comportamiento atípico en el periodo observado, nombrado (movimiento atípico)².

Gráfico 2. Ingresos recaudo Fonsecon 2013-2023.



¹ CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020)

Referencia: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

Radicación: 25000-23-37-000-2014-00721-01(22473) (IJ)

Demandante: Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Temas: Hecho generador de la contribución sobre los contratos de obra pública respecto de entidades con régimen especial de contratación.

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

2020-CE-SUJ-SP-001

(...) En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, **DIAN**.

Por consiguiente, la Empresa Colombiana de Petróleos, **ECOPETROL S.A.** el 30 de mayo de 2023 y acatando el fallo expuesto por el CONSEJO DE ESTADO, consigna a favor del Ministerio del Interior, a través del Banco Agrario CTA Cte. 30230000026-2 la cual es administrada por la Dirección del Tesoro Nacional – DTN la suma de \$ 675.236.283.785,00 por el concepto de contribución Especial de Obra Pública del 5%, los valores adeudados más los intereses de los procesos que tuvieron sentencias definitivas, litigios y demandas fiscales.

² Un movimiento atípico son los cambios significativos en la situación de ingreso durante una vigencia, en comparación con los patrones históricos del recaudo.

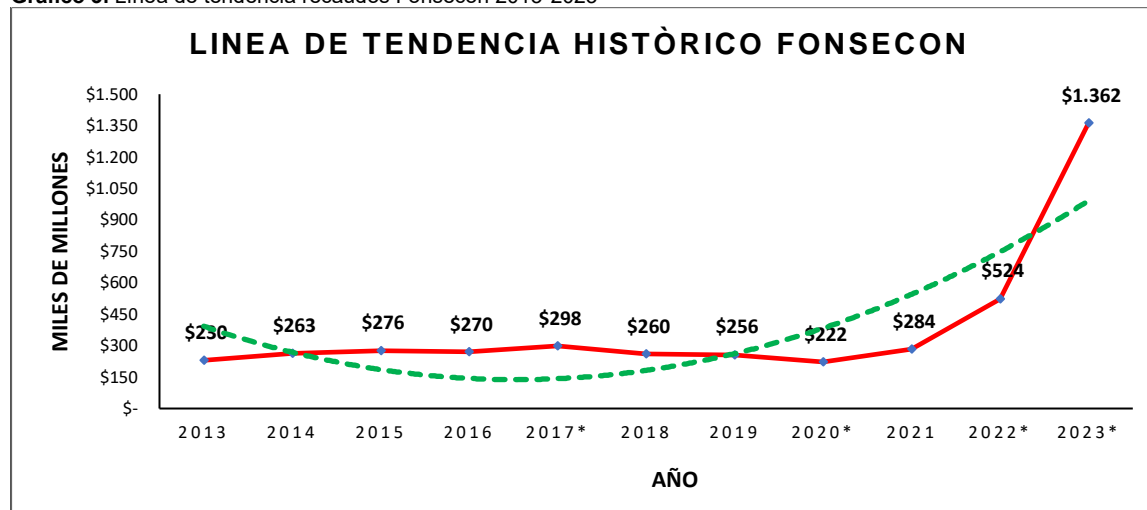
En el año 2020, se declara un Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, motivado por el Covid-19, generando un decrecimiento en el Producto Interno Bruto en 6.8% en dicha vigencia, respecto al año 2019.

Para 2022, si bien la dinámica de la reactivación permitió un fuerte crecimiento económico desde de la vigencia 2021, este impacto se vio reflejado en los ingresos de los recaudos por obra pública y concesiones debido a las políticas de “reactivación y repotenciación”, promulgadas por el gobierno nacional y que mediante documento CONPES 4023 de 2021, expedido por el Departamento Nacional de Planeación, fue implementado como estrategia para reactivar el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, encaminado hacia un crecimiento más sostenible e incluyente que permita responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto.

Para el año 2023, el recaudo de contribución aumento de manera considerable respecto al año 2022, debido a la Sentencia 2020-CE-SUJ-SP-001 de Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a favor del Ministerio del Interior para los recaudos provenientes de la empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A, pago la suma de \$675.236.283.785,00 por el concepto de contribución Especial de Obra Pública del 5%, los valores adeudados más los intereses de los procesos que tuvieron sentencias definitivas, litigios y demandas fiscales.

Dentro del recaudo, la progresión periódica se evidencia incrementos y disminuciones de recaudo, mostrando una tendencia lineal creciente (ver Gráfico 3) así:

Gráfico 3. Línea de tendencia recaudos Fonsecon 2013-2023



Fuente: SIIF-Nación

- 2013-2014 el comportamiento en los ingresos por contribuciones creció en un 14%
- 2014-2015 el comportamiento en los ingresos por contribuciones creció en un 5%
- 2015-2016 el comportamiento en los ingresos por contribuciones decreció en un 2%
- **2016-2017³** creció en un 10% influenciado por el movimiento atípico.

3 Ministerio de Hacienda habilitó los pagos completos a todas las entidades públicas contratantes del orden nacional y territorial

- 2017-2018 como consecuencia del crecimiento desproporcionado del periodo anterior, se evidencia un decrecimiento del 13%
- 2018-2019 el comportamiento en los ingresos por contribuciones decreció un 2%
- **2019-2020⁴** el comportamiento en los ingresos por contribuciones decreció un 13%
- 2020-2021 el crecimiento fue de 30% influenciado por la reactivación económica en el sector de la construcción a nivel nacional.
- 2021-2022⁵ el comportamiento en los ingresos por contribuciones creció en un 82%
- **2022-2023⁶** el comportamiento en los ingresos por contribuciones creció en un 160%

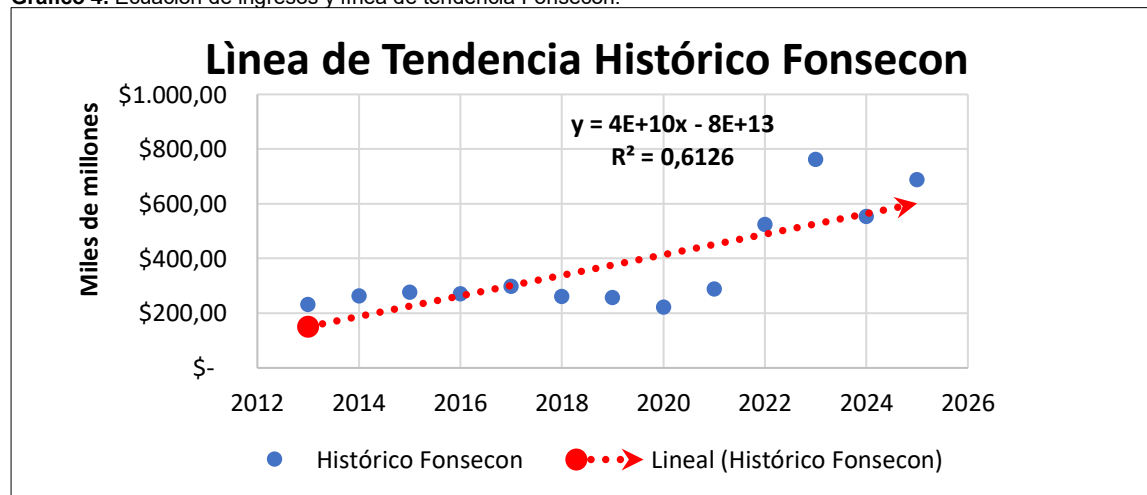
La proyección para el año 2025, se estima en **\$687.026.702.527** pesos M/Cte., mediante el proceso de regresión lineal, la cual proyectaría un aumento porcentual equivalente al 10%.

Proyección de Ingresos por Contribución especial FONSECON 2025.

Después de conocer el comportamiento de la contribución anual para el periodo 2013-2023 y el comportamiento del presupuesto de inversión en infraestructura, se procede a estimar el recaudo para la vigencia 2025.

Mediante el modelo de regresión lineal⁷, se realiza la correlación de datos, determinados y ordenados en forma cronológica, los cuales tienen una tendencia ascendente.

Gráfico 4. Ecuación de ingresos y línea de tendencia Fonsecon.



Fuente: SIIF-Nación

Así, para \hat{X}_{n+k} predecir se tienen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} S_t^{(1)} &= \alpha X_t + (1 - \alpha) S_{t-1}^{(1)} \\ S_t^{(2)} &= \alpha S_t^{(1)} + (1 - \alpha) S_{t-2}^{(2)} \\ \hat{X}_{n+k} &= b_0 + b_1 k \\ b_0 &= 2S_n^{(1)} - S_n^{(2)} \\ b_1 &= \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_n^{(1)} - S_n^{(2)}) \end{aligned}$$

- Covid19

gobierno nacional y que mediante documento CONPES 4023 de 2021, expedido por el Departamento Nacional de Planeación

realizada por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso

los recaudos provenientes de la empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A.

modelo de regresión (ecuación de una recta) que permita explicar la relación lineal que existe entre dos variables. A la variable
la variable predictora o independiente como X.

Se incluyen los datos como variables de proyección estimada por el Banco de la República, cuya inflación para el año 2025 se estima en un 3.8%; el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronóstico un PIB mundial de 3,1% y 3,2% para el 2024 y 2025, respectivamente y por su parte la OCDE⁸ estima un crecimiento del 3.0% para el PIB Colombiano en 2025. De acuerdo a la información anterior se procede a modelar:

Resumen

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,78
Coefficiente de determinación R ²	0,61
R ² ajustado	0,58
Error típico	121586613465,85
Observaciones	13

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1	257126247121943000000000	257126247121943000000000	17,39	0,16%
Residuos	11	162616350315037000000000	147833045740943000000000		
Total	12	419742597436981000000000			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%	
Intercepción	- 75.512.013.087.679,10	18.196.469.465.440,90	-	4,15	0,16%	-115562172347175,00	-35461853828183,00	-115562172347175,00	-35461853828183,00
AÑO	37.586.986.811,84	9.012.599.414,67		4,17	0,16%	17.750.389.246,30	57.423.584.377,37	17.750.389.246,30	57.423.584.377,37

Análisis de los residuales

Observación	Pronóstico Histórico Fonsecon	Residuos	Residuos estandarizados
1	150.591.364.545,77	79.822.548.440,23	0,69
2	188.178.351.357,59	74.884.139.188,41	0,64
3	225.765.338.169,42	49.826.930.717,46	0,43
4	263.352.324.981,27	6.417.245.200,73	0,06
5	300.939.311.793,09	3.042.865.955,41	0,03
6	338.526.298.604,94	78.059.261.005,89	0,67
7	376.113.285.416,77	120.048.244.794,48	1,03
8	413.700.272.228,61	191.973.029.035,26	1,65
9	451.287.259.040,44	162.975.837.638,44	1,40
10	488.874.245.852,28	34.863.116.081,44	0,30
11	526.461.232.664,11	235.711.982.037,82	2,02
12	564.048.219.475,95	10.818.219.475,95	0,09
13	601.635.206.287,78	85.391.496.239,18	0,73

Resultados de datos de probabilidad

Percentil	Histórico Fonsecon
5	230413,913
15	263062,4905
25	275592,2689
35	269769,5702
45	297896,4458
55	260467,0376
65	256065,0406
75	221727,2432
85	288311,4214
95	523737,3619
105	762173,2147
115	553230,0000
125	687026,7025

Con base a las anteriores variables, se realizan los cálculos de Ingreso para el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, estimando un Ingreso por concepto de la contribución especial del 5% para contratos de obra Pública y 2.5 por mil para concesiones en:

⁸ "Estima que el crecimiento del PIB mundial se desacelere hasta 2,9% al cierre de 2024, desde 3,1% en 2023, antes de recuperarse hasta 3,0% en 2025 a medida que se relajen las condiciones financieras; es decir, hasta que se complete una temporada de reducción de tasas de interés entre los bancos centrales."

\$687.026.702.527 M/Cte., el cual corresponde al 10% respecto al año 2023 con un margen de error de +o- 5%.

Tabla 2. Margen de error

-	MARGEN DE ERROR 5% (Cifras pesos)	+
\$ 652.675.367.400	\$ 34.351.335.126	\$ 721.378.037.653

Fuente:

Grupo Recaudo Fonsecon

Una vez realizado el análisis del comportamiento del recaudo histórico del periodo 2013-2023 e incluyendo las variables externas tales como el presupuesto de inversión en infraestructura y pronósticos económicos, se estima que el monto a recaudar durante la vigencia 2025 será aproximadamente de **\$ 687.026.702.527** de pesos M/Cte., respectivamente con un rango de error de +o- 5% por ejecución real de lo asignado por la nación a las entidades.

Fuentes:

1. FMI, Actualización de perspectivas de la economía mundial, enero 2024.
2. Banco de la República, Informe Política Monetaria, diciembre de 2023.
3. Perspectivas Económicas OCDE, diciembre 2023

2.2. RECAUDO MULTAS – LEY 2197/2022 (\$9.331.015.717)

PROYECCIÓN RECAUDO 2025

CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS 2024	INGRESOS ESTIMADOS 2025	DIFERENCIA % 2025 / 2024
Recaudo por Comparendos y Medidas Correctivas en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana- Ley 2197 de 2022, Arts. 44 y 45.	8.802.845.016	9.331.015.717	6%
TOTAL	8.802.845.016	9.331.015.717	6%

Es importante mencionar en este ejercicio de anteproyecto que a la fecha no se ha iniciado con este recaudo, toda vez que se encuentra en elaboración y construcción el Sistema de Información que se requiere para este fin, por tal razón la proyección de recaudo 2025 únicamente se incluirá en el documento justificativo del anteproyecto, dejando sin diligenciar los formularios y el registro SIIF Nación, con el fin de no generar distorsión en los cálculos a nivel nación, por la incertidumbre que a la fecha se mantiene sobre el ingreso real para el próximo año por este concepto.

El cálculo de ingresos 2025, presentado en este documento, se estima como un incremento del 6% del cálculo realizado en el anteproyecto 2024, implementando el porcentaje de crecimiento económico de los supuestos macroeconómicos de la circular 009, del 26 de febrero de 2024 del MHCP.

BASE LEGAL

El 25 de enero de 2022 se expidió la Ley 2197 de 2022, “Por medio de la cual se dictan normas

tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, el cual estable en el Artículo 45 lo siguiente:

“ARTÍCULO 45. ADICIÓNASE A LA LEY 1801 DE 2016 EL ARTÍCULO 185B.

Artículo **185B**. Recaudo y administración del dinero por concepto de multas. Los recursos provenientes de las multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ingresarán al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), en cuenta independiente dispuesta por las administraciones distritales y municipales, distinta de aquella a la que ingresan los recursos a que se refiere la Ley **418** de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes **548** de 1999, **782** de 2002, **1106** de 2006, **1421** y **1430** de 2010 y **1738** de 2014.

En cumplimiento del párrafo del artículo **180** de la Ley 1801 de 2016, el sesenta por ciento (60%) de los recursos provenientes del recaudo por concepto de multas se destinará a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad, de los cuales un treinta por ciento (30%) será para financiar programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana, un quince por ciento (15%) a la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas, como elemento necesario para garantizar la prevención a través del recaudo y almacenamiento de información detallada, georreferenciada y en tiempo real del estado de las multas en todo el territorio nacional, lo cual constituye un instrumento imprescindible para el cumplimiento de su función legal, y un quince por ciento (15%) para financiar el servicio de Policía en la modalidad de vigilancia. El cuarenta por ciento (40%) restante se utilizará en la materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía, donde un quince por ciento (15%) se destinará para la implementación del Sistema de información que permita articular el recaudo, registro, transacción y monitoreo a nivel nacional, de que trata el artículo 39 de la presente ley.

PARÁGRAFO 1o. El Departamento Nacional de Planeación, la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, tendrán un semestre a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para incorporar en la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario CUIPO o el sistema de captura de información establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación, en aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales CCPET, con el fin de incluir un aparte en el que los alcaldes reporten el valor total del recaudo anual por concepto de multas que dispone el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de la transferencia a la Policía Nacional y al Ministerio de Interior, de las sumas a que se refiere el inciso 2 del presente artículo, así como los proyectos de inversión y gastos en los que se ejecutaron dichos recursos.

PARÁGRAFO 2o. Las administraciones distritales y/o municipales deberán transferir mensualmente el quince por ciento (15%) destinado a la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas y el quince por ciento (15%) para financiar el servicio de Policía en la modalidad de vigilancia que trata el presente artículo, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes a la cuenta que para tal fin establezca la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 3o. Las administraciones distritales y/o municipales deberán transferir mensualmente el quince por ciento (15%) destinado a la administración, funcionamiento e

infraestructura del Sistema Único de información para articular el recaudo, registro y transacción a nivel nacional por concepto de pago de multas impuesta por los inspectores de policía en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes a la cuenta que para tal fin establezca el Ministerio del Interior.

3. ANTEPROYECTO DE GASTO (\$2.764.028.453.689)

3.1 UNIDAD EJECUTORA 37-01-01 MINISTERIO DEL INTERIOR – GESTIÓN GENERAL. (\$2.649.527.270.384)

paz

3.1.1 FUNCIONAMIENTO (\$1.136.878.972.977)

3.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL (\$52.174.661.804)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
\$45.210.500.000	\$52.174.661.804	\$6.964.161.804	15%
\$45.210.500.000	\$52.174.661.804	\$6.964.161.804	15%

CONTEXTO ACTUAL

Actualmente la planta de personal del Ministerio del Interior, unidad 370101, presenta el siguiente escenario:

DENOMINACIÓN DE CARGO	Grado	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacantes
			Libre Nombramiento	Carrera Administrativa			
				Propiedad	Provisionales		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
Empleados Públicos							
MINISTRO		1	1			1	0
VICEMINISTRO		2	2			2	0
SECRETARIO GENERAL	24	1	1			1	0
DIRECTOR TÉCNICO	23	7	7			7	0
SUBDIRECTOR TÉCNICO	23	5	5			5	0

DENOMINACIÓN DE CARGO	Grado	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacantes
			Libre Nombramiento	Carrera Administrativa			
				Propiedad	Provisionales		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
Empleados Públicos							
JEFE DE OFICINA	22	2	2			2	0
JEFE DE OFICINA ASESORA	16	2	2			2	0
ASESOR	18	1	1			1	0
ASESOR	17	6	6			6	0
ASESOR	16	5	5			5	0
ASESOR	15	7	7			7	0
ASESOR	14	2	1	1		2	0
ASESOR	11	5	5			5	0
ASESOR	6	1				0	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	23	6	1	5		6	0
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	22	8	1	6		7	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	21	11		9		9	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	20	8	1	5		6	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	19	13	1	9		10	3
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	18	13	2	8		10	3
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	17	20	1	19		20	0
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	16	7	2	2		4	3
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	15	7		4		4	3
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	14	21	1	13	2	16	5
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	13	10		8	1	9	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	12	15		6	3	9	6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11	13		2	4	6	7
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	3	1		2	3	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	4		3		3	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	8	2	1			1	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	2			2	2	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	9			7	7	2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5	3			1	1	2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4	1				0	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3	1			1	1	0

DENOMINACIÓN DE CARGO	Grado	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacantes
			Libre Nombramiento	Carrera Administrativa			
				Propiedad	Provisionales		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
Empleados Públicos							
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	6			5	5	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	2			2	2	0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	18	14	3	7		10	4
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	17	7	1	4		5	2
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	16	4	1	2		3	1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	15	1	1			1	0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	13	3			1	1	2
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	11	1		1		1	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23	1	1			1	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	2	1	1		2	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17	6		5		5	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16	2	1			1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	3			1	1	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	1				0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	1	1			1	0
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14	2				0	2
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13	14		2	7	9	5
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10	1			1	1	0
CONDUCTOR MECÁNICO	19	7	5	2		7	0
CONDUCTOR MECÁNICO	18	4	3	1		4	0
CONDUCTOR MECÁNICO	16	1		1		1	0
CONDUCTOR MECÁNICO	15	7	1	3	3	7	0
OPERARIO CALIFICADO	20	1		1		1	0
OPERARIO CALIFICADO	19	1		1		1	0
OPERARIO CALIFICADO	13	2		1	1	2	0
SECRETARIO	12	1				0	1
SECRETARIO EJECUTIVO	24	6		5		5	1
SECRETARIO EJECUTIVO	23	1				0	1

DENOMINACIÓN DE CARGO	Grado	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacantes
			Libre Nombramiento	Carrera Administrativa			
				Propiedad	Provisionales		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
Empleados Públicos							
SECRETARIO EJECUTIVO	22	9	1	5	1	7	2
SECRETARIO EJECUTIVO	19	1		1		1	0
SECRETARIO EJECUTIVO	18	1		1		1	0
SECRETARIO EJECUTIVO	15	1		1		1	0
SECRETARIO EJECUTIVO DESPACHO MINISTRO	26	7	5			5	2
SECRETARIO EJECUTIVO DESPACHO MINISTRO	24	1	1			1	0
SECRETARIO EJECUTIVO DESPACHO VICEMINISTRO	25	3	3			3	0
Total Empleados Públicos		349	86	145	45	276	73

*Fuente: Subdirección de Gestión Humana

La información del cálculo del presupuesto del anexo 1, se realizó con sueldos del 2024 e incrementados en 15%, de acuerdo con el Anexo 1 de la circular externa 009 del 26 de febrero de 2024, suscrita por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto al cumplimiento de las directrices dadas por el Gobierno Nacional respecto al Plan de Formalización del Empleo Público, y en continuidad con los ejercicios preliminares de presupuestación que se vienen adelantando para tal fin desde el año pasado y que fueron presentados en el anteproyecto 2024 y el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024 – 2027, se actualizó la necesidad presupuestal a 2025, dando como resultado el siguiente:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NECESIDAD PRESUPUESTAL 2025 (\$)
1.567	50.809.197.608

Con el fin de concretar en acciones esta iniciativa en la formalización del empleo, el Ministerio del Interior tiene programado para esta vigencia iniciar el estudio técnico y cargas de trabajo correspondiente, resultados que serán puesta en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administración de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades involucradas.

3.1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (\$23.814.312.290)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON RESPECTO A 2024
A-02	8.778.100.000	23.814.312.290	15.036.212.290	171%
TOTAL	\$ 8.778.100.000	\$ 23.814.312.290	\$ 15.036.212.290	171%

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Adquisición de Bienes y Servicios:

La necesidad presupuestal 2025 de este rubro, desagregada en adquisición de activos no financieros y adquisiciones diferentes de activos, es la siguiente:

RUBRO	Asignación Presupuestal 2024	Necesidad Presupuestal 2025	Diferencia 2025 / 2024	
			\$	%
A – 02	8.778.100.000	23.814.312.290	15.378.671.855	171,29%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
A-02-01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.350.000.000	4.350.000.000	100%
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.778.100.000	19.464.312.290	11.028.671.855	126%

La proyección presupuestal para adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2025, se realizó acorde con las necesidades básicas y prioritarias para el normal funcionamiento de la Entidad, teniendo en cuenta las políticas de austeridad en el gasto y en materia ambiental, sumando un valor total de 23.814 millones de pesos, lo que representa un incremento del 171% frente al presupuesto apropiado 2024.

Es importante tener en cuenta que en la vigencia 2024 se presentó un incremento general del 7,52% en el presupuesto para Adquisición de Bienes y Servicios frente a como cerró el año 2023. Sin embargo, este aumento no permite cumplir con las metas en materia logística, tecnológica, social y de formación programadas por la Entidad, teniendo en cuenta que el IPC al cierre de la vigencia 2023 fue de 9,28%.

Basado en las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda mediante la Circular Externa 009 de 26 de febrero de 2024, la proyección de recursos presupuestales en general se hizo con el supuesto de inflación doméstica fin de periodo, IPC, 3%, para el 2025, señalada en el anexo 1, de la circular en mención. Sin embargo, las necesidades a cubrir en materia de bienes y servicios del Ministerio en el 2025 muestran variaciones en el porcentaje a incrementar, en los diferentes rubros, según las actividades desarrolladas por cada dependencia:

Secretaria General (\$1.798.742.189):

La Secretaria General es la oficina que al interior del Ministerio del Interior dirige la ejecución de los programas financieros y contables, los servicios administrativos y la gestión documental, además traza y ejecuta las políticas y programas de administración de personal y contratación pública.

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02-02	Adquisiciones diferentes de activos	\$1.798.742.189
A-02-02-02	Adquisición de servicios	\$1.798.742.189
A-02-02-02-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$1.798.742.189
A-02-02-02-008-003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	\$1.798.742.189
Contratación de Servicios Profesionales, Asistenciales y Técnicos como apoyo a la gestión del Ministerio del Interior.	<p>Como responsable de los temas indicados anteriormente, el Despacho de la Secretaría General no tiene asignado el personal suficiente para gestionar adecuadamente todos los asuntos a su cargo, haciendo necesario contratar algunas asesorías y apoyos administrativos de profesionales y técnicos por la modalidad de prestación de servicios.</p> <p>La estimación inicial contempla o se estima sobre la base de 1 asesor grado 4 para apoyo en temas de derecho administrativo y laboral y 2 asesores grado 1 de apoyo en temas de derecho disciplinario y actividades de planeación y control y 2 técnicos de apoyo administrativo en temas de archivo y manejo de bases de datos con honorarios tasados con base en la Resolución 0003 de 2024 y un incremento de 8.35% para 2025.</p> <p>Así mismo se estimó el costo de la unidad de cumplimiento o Delivery Unit, que es una estrategia de innovación organizacional, diseñada y liderada por la Secretaria General para facilitar el seguimiento a la ejecución de los principales programas, proyectos y presupuestos o recursos del ministerio de manera eficaz y oportuna. La estimación en este caso se hizo sobre la base de 1 asesor grado 4 para liderar la estrategia y contempla el costo de los 9 profesionales de apoyo para la gestión de la estrategia de la unidad de cumplimiento con honorarios tasados igualmente sobre la base en la Resolución 0003 de 2024 y un incremento de 8.35% para 2025.</p>	\$1.798.742.189

Subdirección Administrativa y Financiera - SAF (\$ 17.582.215.625)

Como es de conocimiento la Subdirección Administrativa y Financiera según funciones asignadas por el Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011, debe “Coordinar y supervisar el funcionamiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles puestos a disposición del Ministerio o sus Fondos, a cualquier título”, en consecuencia, se debe contar con los recursos suficientes que garanticen durante toda una anualidad los bienes y servicios que permitan articular de manera eficiente la Entidad.

La SAF, en la presente anualidad, con la apropiación presupuestal inicial ha priorizado las necesidades que le permitan amparar la funcionalidad de los bienes y servicios hasta el 31 de diciembre de 2024, sin embargo, los recursos no son suficientes para atender el total de las necesidades. Por lo tanto, la proyección 2025, se efectuó incluyendo recursos adicionales acorde a las necesidades identificadas y en busca de reducir el gasto público a largo plazo.

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$4.350.000.000
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$4.350.000.000
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.050.000.00
Muebles para oficina	La Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Gestión Administrativa, le compete brindar el apoyo necesario a todas las dependencias de la Entidad proporcionando y garantizando que se cuenten con todos los elementos necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de manera oportuna, eficiente y eficaz.	\$1.050.000.000

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
	<p>La Entidad cuenta con seis sedes en la ciudad de Bogotá, dentro de sus instalaciones cuenta 950 puestos de trabajo los cuales se encuentran en alto grado de deterioro, renovados por última vez, hace más de 11 años, <u>los cuales no son suficientes para los funcionarios actuales que desempeñan funciones y actividades en cumplimiento a la Misionalidad del I Ministerio del Interior.</u></p> <p>Se precisa que actualmente se tiene una sede en arrendamiento que contempla la inclusión de bienes muebles, adicional en cumplimiento a la misión del Ministerio del Interior, se crearon tres Grupos de trabajo (Grupo de Genero, Grupo de Paz y Grupo de Jóvenes en Paz) en la vigencia 2024, que conlleva a tener a disponibilidad de Mobiliario.</p> <p><u>Por lo anterior, se requiere la adquisición de mobiliario con el fin de garantizar un mejor espacio de trabajo, que se cuenten con todos los elementos necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de manera oportuna, eficiente y eficaz, en cada una de las sedes asignadas al desarrollo de las funciones y/o actividades propias que se derivan para cumplir con el objeto misional del Ministerio del Interior y que cumplen sus colaboradores, tanto funcionarios, como contratistas:</u> los precios en el mercado de estos se encuentran en un promedio aproximado de \$700.000, razón por la cual es necesario en la vigencia 2025, contar con un presupuesto de \$1.050.000.000 (\$700.000X 1500).</p>	
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.300.000.000
Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	<p>El Ministerio del Interior, en su parque automotor cuenta con 15 vehículos de propiedad, de los cuales 11 son modelos entre 2005 y 2009 (matriculados entre el 2005 y 2008); lo que refiere que son vehículos que cumplieron su vida útil, acorde con las políticas públicas del Ministerio del Interior el cual establece para este tipo de bienes 10 años de vida útil, además estos vehículos tienen más de 6 años por obsolescencia (Art. 14 del Decreto 199 de 2024), ya que cuentan entre 16 y 18 años de servicio, con un kilometraje superior a los 400.000 Kms, además se pudo establecer que el gasto en los últimos 5 años por mantenimiento del parque automotor supera los 1.200 millones. Ahora bien, con la adquisición del nuevo parque automotor se reduciría drásticamente el gasto en mantenimiento de vehículos, recursos que podrían ser utilizados en la compra de los nuevos, adicionalmente existen otras razones que justifican la compra, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alto consumo de combustible por ser una tecnología en desuso. ✓ Mayor demanda de repuestos por mantenimiento correctivo (durante los últimos seis (6) años se ha destinado \$1.600.000.000 en mantenimiento de los vehículos). ✓ Alteración en el comportamiento de los sistemas, produce averías costosas (fugas en los sistemas de refrigeración y presión de aceite, obliga a reparaciones mes a mes) y alta frecuencia de varadas en operación. <u>lo que no permite el desplazamiento de los Directivos en estos vehículos para salidas a territorios cuyo desplazamiento es largo, en cumplimiento a las funciones propias para cumplir con el objeto misional del Ministerio del Interior</u> ✓ Desgaste general de sistemas básicos (vidrios, silletería, temperatura interna, etc.) ✓ Por modelo son fuente de contaminación y producción de altos niveles de gases contaminantes y la revisión técnica los puede marginar del servicio, a menos que se empleen más recursos. ✓ Tapicería, pinturas, farolas y accesorios en deterioro por uso continuo normal (años de servicio). <p>Por lo señalado, el Ministerio tiene la necesidad de renovar el parque automotor, con la finalidad de disminuir los costos de funcionamiento (mantenimiento, combustible, etc.) y contar así, con vehículos renovados, generando mayor seguridad al personal que se transporta,</p>	\$3.300.000.000

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
	<p>y empezar la transición de vehículos de gasolina a híbrido para la vigencia 2025, los cuales en el mercado actual oscila un valor aproximado de \$300.000.000 cada uno , esto a razón de vehículo que tenga representación de la marca en el país.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la Directiva Presidencial 08 de 2022 la cual señala: “Cuando sea estrictamente necesario, para cumplir con la misionalidad, adquirir o arrendar vehículos para el servicio de los funcionarios de las entidades públicas, se avanzará en la transición energética en todos los casos en que sea posible, reemplazando los vehículos que funcionen con combustibles fósiles por vehículos eléctricos, o vehículos que funcionen con otras fuentes alternativas de energía”, el Ministerio del Interior requiere adquirir nuevos vehículos con las características contempladas en la directiva, que permita continuar en marcha y garantizar el servicio de transporte de sus altos funcionarios dentro del territorio local y nacional acorde a las diversas actividades que deben efectuar, dando cumplimiento a las agendas institucionales acorde a la misionalidad de la Entidad.</p> <p>Dando así, cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, que señala:</p> <p>“(…) Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad”; garantizando de esta manera la seguridad de los funcionarios que utilizan los vehículos para movilizarse. (...)”.</p> <p>La Subdirección Administrativa y financiera en aras de avanzar en la transición energética, con el fin adquirir nuevos vehículos con las características contempladas, para la vigencia 2025, requiere contar con 11 nuevos vehículos, a razón de \$300.000.000 cada vehículo, para un total de asignación para este rubro de recursos por \$3.300.000.000.</p>	
A-02-02	ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS	\$12.972.303.725
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$642.687.126
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$449.451
Adquisición de insumos mantenimiento locativo	<p>Las instalaciones de las seis sedes con las que cuenta el Ministerio se encuentran expuestas a un desgaste normal a consecuencia de su antigüedad y al tráfico diario de funcionarios, contratistas y visitantes, que existe en ellas, así mismo, con la reorganización de las diferentes dependencias, se requiere que se realicen adecuaciones a nivel eléctrico, hidráulico, sanitario, entre otras y para esto se requiere contar con los materiales para llevarlas a cabo.</p> <p>Para su adquisición la Subdirección Administrativa y Financiera realiza un contrato que permite contar con los diferentes insumos, los cuales se adquieren además de este rubro (A-02-02-01-001-005) por el A-02-02-01-003-005, el A-02-02-01-003-006, el A-02-02-01-003-007, el A-02-02-01-004-002 y el A-02-02-01-004-006; durante la vigencia 2024 y de acuerdo a las necesidades identificadas durante la vigencia 2024, se tiene destinado a la adquisición de insumos el valor de \$135.429.658 y para el 2025 se espera que sea de \$139.492.547,94.</p> <p>Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$449.451, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\\$436.360 \times 3\%) = 13.091 + 436360]$.</p>	\$449.451

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$561.493.953
Papelería Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	<p>Para la vigencia 2025, la Subdirección Administrativa y Financiera requiere contar con recursos que le permita adquirir insumos de papelería y útiles de escritorio para uso y consumo de las 22 dependencias del Ministerio del Interior y contribuir a su normal funcionamiento.</p> <p>Teniendo en cuenta que para la vigencia 2024, no fue posible a la SAF contar con los recursos adicionales solicitados durante la vigencia 2023 para la suscripción del contrato que permita la adquisición de los insumos, se solicitó apoyo a las dependencias de la entidad con el fin de garantizar recursos por valor de \$120.000.000 y suplir así la necesidad de suministro de elementos de papelería y artículos relacionados durante la vigencia 2024. De forma tal que para la proyección de recursos para la vigencia 2025, se ajustó el valor proyectado para el 2024 con el IPC del 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1) [$\\$120.000.000 \times 3\% = \\$3.600.000$], requiriendo así un total de recursos por valor de \$123.600.000.</p>	\$123.600.000
Combustible Productos de hornos de coque; productos de refinanciación de petróleo y combustible nuclear	<p>El Ministerio cuenta con 34 vehículos dentro de su parque automotor (entre propios 15, convenio 4, comodato 3 y provisionalidad 12), a los cuales se les debe garantizar el suministro de gasolina que permita el desplazamiento de los directivos dentro de la ciudad de Bogotá, en el marco del cumplimiento de las diferentes agendas institucionales; para la vigencia 2023 el consumo de combustible fue de aproximadamente \$234 millones de pesos, para un promedio mensual aproximado de \$20 millones de pesos. Para la vigencia 2024 se espera que el promedio se incremente en aproximadamente \$23 millones debido a la variación de precios en el combustible en lo que lleva de corrido el año, teniendo así asignado un total de recursos por valor \$280.769.920 para ejecutar hasta finalizar la presente vigencia.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, para la vigencia 2025, se toma el valor asignado en la vigencia 2024, ajustándolo con el IPC 3 % (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1) así: [$\\$280.769.920 \times 3\% = \\$8.423.098 + 280.769.920$], obteniendo una necesidad de recursos por valor de \$289.193.018, para un consumo promedio mensual de \$24.099.418.</p> <p>Es importante señalar que acorde a la Ley 2155 de 2021, el Ministerio del Interior ha implementado controles para que el consumo de combustible no se incremente durante la presente vigencia, es así que actualmente el promedio en consumo de galones es de 1620, mientras en la vigencia 2023 fue de 2042 galones aprox, sin embargo, el incremento del precio del combustible ha llevado a una variación en el valor promedio mensual consumido.</p>	\$289.193.018
Vales Productos de hornos de coque; productos de refinanciación de petróleo y combustible nuclear	<p>Teniendo en cuenta que el acuerdo marco para suministro de gasolina, en la categoría A, bajo el cual se realiza el proceso contractual de combustible, no abarca estaciones de servicio a nivel de todo el territorio nacional, el Ministerio requiere celebrar otra orden de compra para adquirir vales de combustible que permita el suministro de gasolina en zonas diferentes a la ciudad de Bogotá, cuando la agenda ministerial requiera del desplazamiento del Ministro y directivos por fuera de esta; para la presente anualidad vigencia 2024 se asignó recursos por valor de \$54.545.000.</p> <p>Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$56.181.350, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [$\\$54.545.000 \times 3\% = 1.636.350 + 54.545.000$].</p>	\$56.181.350

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR						
Recarga de Extintores Otros productos químicos; fibras artificiales	<p>Anualmente se debe efectuar mantenimiento y carga de los extintores que se encuentran ubicados en las diferentes áreas del Ministerio, bajo este rubro se asignan recursos para la recarga, para la presente anualidad vigencia 2024 se asignó recursos por valor de \$6.576.887</p> <p>Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$6.774.194, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% % (%) (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1)), al valor actual asignado $[(\\$6.576.887 \times 3\%) = 197.307 + 6.576.887]$.</p>	\$6.774.194						
Consumibles de impresión	<p>La Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Gestión de Bienes, es responsable de la compra de los consumibles de la Entidad; igualmente le compete brindar el apoyo necesario a todas las dependencias de esta, proporcionando y garantizando que se cuenten con todos los insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de manera oportuna, eficiente y eficaz. Por lo anterior, se requiere la adquisición de consumibles de impresión.</p> <p>Para la vigencia 2025, el presente rubro se proyecta en \$11.343.832, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\\$11.013.429 \times 3\%) = 330.403 + 11.013.429]$.</p> <p>Nota: En la vigencia 2023, la disponibilidad de estos recursos está en la desagregación del presupuesto asignado a la Oficina de Información Pública del Ministerio (OIPI), a partir del 2024, la responsabilidad quedara bajo la SAF, con acompañamiento de la OIPI.</p>	\$11.343.832						
Adquisición de insumos mantenimiento locativo	<p>De los \$139.492.547,94, requeridos para la compra de insumos que permitan realizar el mantenimiento locativo para la vigencia 2025, le corresponden al presente rubro los siguientes valores , ajustándolos con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1).</p> <table><tr><td>A-02-02-01-003-005: \$39.548.424 [2024: \$39.548.424 + 3%= \$1.186.453]</td><td>\$40.734.877</td></tr><tr><td>A-02-02-01-003-006: \$16.760.190 [2024: \$16.760.190 +3%= \$ 502.806]</td><td>\$17.262.996</td></tr><tr><td>A-02-02-01-003-007: \$15.925.909 [2024: \$15.925.909 +3%= \$ 477.777]</td><td>\$16.403.686</td></tr></table>	A-02-02-01-003-005: \$39.548.424 [2024: \$39.548.424 + 3%= \$1.186.453]	\$40.734.877	A-02-02-01-003-006: \$16.760.190 [2024: \$16.760.190 +3%= \$ 502.806]	\$17.262.996	A-02-02-01-003-007: \$15.925.909 [2024: \$15.925.909 +3%= \$ 477.777]	\$16.403.686	
A-02-02-01-003-005: \$39.548.424 [2024: \$39.548.424 + 3%= \$1.186.453]	\$40.734.877							
A-02-02-01-003-006: \$16.760.190 [2024: \$16.760.190 +3%= \$ 502.806]	\$17.262.996							
A-02-02-01-003-007: \$15.925.909 [2024: \$15.925.909 +3%= \$ 477.777]	\$16.403.686							
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$80.743.722						
Adquisición de insumos mantenimiento locativo	<p>De los \$139.492.547,94, requeridos para la compra de insumos que permitan realizar el mantenimiento locativo para la vigencia 2025, le corresponden al rubro A-02-02-01-004-002 el valor de \$25.852.410, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\\$25.099.427 \times 3\%) = 752.983 + 25.099.427]$.</p>	\$25.852.410						
Extintores Maquinaria para uso General	<p>El Ministerio debe garantizar que los extintores ubicados en sus diferentes dependencias, se encuentre en buen estado para su funcionamiento en cualquier eventualidad, y debe identificar los espacios en donde se debe reforzar la disponibilidad de estos, anualmente se deben renovar los extintores que no cumplan con las condiciones apropiadas, adquiriendo los que sean necesarios.</p> <p>Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$3.232.334, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\\$3.138.188 \times 3\%) = 94.146 + 3.138.188]$.</p>	\$3.232.334						
Adquisición de insumos mantenimiento locativo	<p>De los \$139.492.547,94, requeridos para la compra de insumos que permitan realizar el mantenimiento locativo para la vigencia 2025, le corresponden al rubro A-02-02-01-004-006, el valor de \$38.789.128, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\\$37.659.348 \times 3\%) = 1.159.780 + 37.659.348]$.</p>	\$38.789.128						

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
Servicio Lector PCT	<p>La Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Gestión de Bienes cuenta con sistema PCT-ENTERPRICE, el cual se le debe garantizar el soporte de software para el buen funcionamiento de la toma física, validación y control del inventario integrado con el sistema PCT Enterprise, durante la vigencia 2025.</p> <p>Para la vigencia 2025, el presente rubro se proyecta en \$12.869.850, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% % (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1) al valor actual asignado $[(\\$12.495.000 \times 3\%) = 374.850 + 12.495.000]$.</p>	\$12.869.850

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$12.589.528.499
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$2.420.000.000
Reparaciones mantenimiento y conservación Casa Giralda / Servicios de construcción	<p>Para dar cumplimiento a las funciones asignadas al Ministerio, teniendo en cuenta que por disposición del numeral 22 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, son deberes de todo servidor público “vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados (...)”. El Ministerio del Interior tiene como sede principal la Casa Giralda, el citado predio corresponde a Bienes de interés Cultural del Distrito Capital, en virtud que tiene asignada la categoría B (Conservación Arquitectónica) , la cual presentó averías por el siniestro presentado el 17 de agosto de 2023, a razón de la afectación de la Póliza respectiva y <u>del levantamiento del análisis patológico y de diagnóstico realizado se recomienda emprender acciones con obras de mantenimiento y conservación de la Casa Giralda , las cuales no fueron ocasionadas por el sismo si no por deterioro normal.</u></p> <p>Así mismo para permitir la inclusión de personas en condición de Discapacidad o de movilidad reducida y garantizando su libre circulación por los dos niveles que componen el inmueble Sede principal del Ministerio del interior, la entidad ve necesario la adquisición de un ascensor y sus obras civiles de adecuación para el ascensor en la CASA LA GIRALDA, por lo anterior se requieren recursos para realizar estas adecuaciones y mantenimientos por valor de \$1.500.000.000</p>	\$1.500.000.000
Modernización Ascensor N°4 ubicado en la Sede Edificio Bancol piso 1,2 y 3/ servicios de construcción	<p>Modernización tecnológica, operativa del ascensor Marca OTIS , el cual pertenece al Ministerio del Interior , sede Bancol piso 1,2 y 3 que <u>coadyuva a una mejor disponibilidad de servicio para la atención de usuarios internos y externos , por desplazamiento a los diferentes Pisos, así como de asistencia a los auditorios , por temas de trabajo propios de la Misionalidad.</u></p>	\$60.000.000
Servicio instalación /servicios de construcción	<p>Corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera, según funciones asignadas por el Decreto 2893 de agosto 11 de 2011, “coordinar y supervisar el funcionamiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles puestos a disposición del Ministerio o sus fondos, a cualquier título”, por tanto es responsabilidad de ésta Subdirección mantener en estado óptimo de funcionalidad las plantas eléctricas de la Entidad de tal manera que se garantice el servicio de fluido eléctrico constante ante cualquier interrupción por daños o suspensiones en el suministro de energía eléctrica, permitiendo así el normal funcionamiento de manera continua de la red corporativa de voz y datos y la conexión a la red pública conmutada, así como el funcionamiento de los equipos eléctricos, electrónicos y la iluminación.</p> <p>Actualmente, el Ministerio del Interior cuenta con las plantas eléctricas: Power Lovol de 75KVA instalada en la sede de la Casa de la Giralda y planta eléctrica Link C6/6 de 156 KVA instalada en el Edificio Bancol piso 4 y sus equipos asociados, sin embargo la planta eléctrica de la sede de Bancol garantiza cuando hay interrupción del fluido eléctrico , el funcionamiento de la red corporativa de la entidad y los pisos 8 y 6 de este edificio, <u>razón por la cual para el caso de interrupción por daños o suspensiones en el suministro de energía eléctrica poder garantizar el normal funcionamiento de todas las sedes y pisos de la Entidad, por lo que se requiere</u></p>	\$860.000.000

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
	<u>la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas para las sedes Camargo, Hurtado y los 9 pisos que son de propiedad de la sede Edificio Bancol, sedes asignadas al desarrollo de las actividades propias que se derivan del objeto misional del Ministerio del Interior y sus colaboradores.</u>	
A-02-02-02-006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$829.373.212
Caja Menor Alojamiento; Suministros de Comidas y Bebidas	Los gastos imprevistos por reuniones, comités, juntas, asambleas entre otros, que están coordinados por el despacho del Ministro, requieren efectuar gastos por suministro de comidas y refrigerios, a través de la caja menor. Para la vigencia 2025, acorde con los lineamientos de austeridad del gasto, por lo cual para su constitución vigencia 2025 se requieren de \$250.00.000.000.	\$250.000.000
Caja Menor Servicios de transporte de pasajeros	Previendo que el Ministro y sus directivos deben realizar desplazamientos por fuera de la Ciudad de Bogotá, se dispone de este recurso para solventar los gastos por peajes. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$25.451.500 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [(\$24.710.194x 3% = 741.305 + 24710194)].	\$25.451.500
Servicios de Postales y de Mensajería Correo Certificado	Con el fin dar respuesta y tramite a las diferentes solicitudes allegadas al Ministerio de manera física, se debe contar con el servicio de correo, que para el caso del Ministerio se realiza una contratación directa con Servicios Postales Nacionales, para los servicios de correo Nacional y de difícil acceso y correo certificado. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$8200.855 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [(\$7.961.995x 3% =238.860 + 7.961.995)].	\$8200.855
Servicios Públicos Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta Propia)	Para determinar el valor de los recursos que permitan el pago de los servicios por consumo de electricidad y agua en las diferentes sedes del Ministerio. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$545.720.858 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [(\$529.826.075x 3% =15.894.782+529.826.075)], a razón de \$45.476.738 promedio mensuales.	\$545.720.857
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$1.358.160.870
Seguros / Servicios financieros y conexos	Con el fin de contar con los seguros que amparan los bienes del Ministerio y las pólizas por responsabilidad civil para los Directivos del Ministerio, durante la vigencia 2025 el valor a solicitar se proyecta en \$700.000.000 , se justifica en la obligación que se tiene desde la Subdirección Administrativa y Financiera, y teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior al tener a su cargo bienes muebles e inmuebles, estos requieren ser asegurados y se hace indispensable contar con un mecanismo que asegure la adquisición de pólizas que amparen sus bienes e intereses patrimoniales. En ese sentido a través del contrato de seguros, las Entidades Estatales buscan proteger su patrimonio contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto. Los seguros que amparan los intereses patrimoniales actuales y futuros del Ministerio del Interior como los bienes propiedad que están bajo su responsabilidad y custodia y lo que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad. <u>Ahora bien se proyecta el recurso mencionados en atención a no poder contar con el apoyo de disponibilidad de recursos de las dependencias del Ministerio del Interior que no cuentan con el recurso de gastos generales y de funcionamiento, así mismo, para un proceso cuyo cronograma es mínimo amparar 1 año de aseguramiento por estudio de mercado, se requiere contar con disponibilidad presupuestal del valor de \$700.000.000 tomando como experiencia el presupuesto base para adquisiciones actual y de anteriores vigencias.</u> Es importante precisar que la Subdirección Administrativa y Financiera para la adquisición actual 2024, del programa de seguros, se vio en la necesidad de realizar	\$700.000.000

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
	traslado presupuestal, desfinanciando el rubro asignado para la constitución de la Caja Menor 2024.	
Gastos Financieros/ Servicios financieros y conexos	Para la vigencia 2024, se asignaron a este rubro el monto \$16.363.500 valor que se prevé cubra los gastos por cheques y otros costos financieros que se generan por el trámite de los movimientos en las diferentes cuentas del Ministerio; para el 2025 se requiere el valor de \$ 16.854.405, resultado de aplicar el IPC 2025 sugerido por MINHACIENDA en la Circular 009 de 2024 anexo 1 del 3%, [$16.363.500 + 3\% = 16.854.405$].	\$16.854.405
Administración Servicios Inmobiliarios	Las sedes del Ministerio del Interior ubicadas en los edificios BANCOL y DANSOCIAL requieren pagar el servicio de administración, para la vigencia 2024, se asignó recursos por valor de \$578.317.910. Sin embargo, una vez aprobada mediante asamblea el incremento a aplicar para la vigencia 2024 al canon de administración de las dos sedes, para la vigencia 2024 estas se proyectan en:	\$553.408.997
	Bancol [$40.971.990 + 9,28\% = 44.774.191 \times 12$ meses 2024 = \$537.290.292] Dansocial [$2.400.000 + 9,28\% = 222.720 \times 12$ meses 2024 = \$29.022.720]	\$29.893.402
	Sede Bancol: Para proyectar el valor de la vigencia 2025, de la administración de la sede Bancol, se toma como referencia el valor de los 12 meses de la vigencia 2024 de la cuota ajustada, necesitando el Valor de \$553.408.997 resultado de, aplicar el IPC 2025 sugerido por MINHACIENDA en la Circular 009 de 2024 anexo 1 del 3%, [$537.290.292 + 3\% = 553.408.997$]. Piso 8 Sede Dansocial: Para proyectar el valor de la vigencia 2025, de la administración del Piso 8 ubicado en el Edificio Dansocial, se toma como referencia el valor de los 12 meses de la vigencia 2024 de la cuota ajustada, necesitando el Valor de \$29.893.402 , resultado de aplicar el IPC 2025 del 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), [$29.022.720 + 3\% = 29.893.402$]. Adicionalmente en el presente rubro se deben proyectar los recursos destinados al pago de parqueadero para los vehículos al servicio del Ministerio que se encuentran asignados a los conductores de planta, en la vigencia 2024 se apropiaron recursos por valor de \$30.314.627 y aplicando el ajuste con el 3% ((IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1) [$30.314.627 \times 3\% = 909.439$], requiriendo para el 2025, recursos por valor de \$31.224.066 , para un promedio mensual de \$3.435.658.	\$31.224.066
Outsourcing Fotocopiado Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	El Ministerio requiere para el efectivo cumplimiento de sus funciones el servicio de fotocopiado y escaneo de documentos, con el fin de expedir copia de los documentos que soliciten los usuarios o para dar trámite a los asuntos de competencia del Ministerio, coadyuvando de esta manera en el cumplimiento de los objetivos ministeriales relacionados con transparencia. En la vigencia actual se han apropiado recursos por valor de \$26.000.000, con los que se espera cubrir las necesidades hasta el 31 de diciembre 202. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$26.780.000 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [$(26.000.000 \times 3\% = 780.000 + 26.000.000)$], a razón de \$2.231.666 promedio mensual.	\$26.780.000
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$7.981.994.417
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	La Subdirección Administrativa y Financiera, cuenta entre su planta de personal con un total de 49 funcionarios, de los cuales el 37% pertenecen al grupo de conductores y el 63% restante se encuentran distribuidos en los cinco grupos con que desempeñan las funciones la dependencia. Pero estas 29 personas no son suficientes para atender y dar cumplimiento a las múltiples tareas que le corresponde desarrollar a la SAF, en función de todas las dependencias y áreas del Ministerio; la planta global de personal de la Entidad es limitada, lo que no permite el libre movimiento entre las diferentes dependencias. Es por ello que se requiere recursos para contratar personal a través de la modalidad de servicios profesionales y de	\$3500.000.000

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
	<p>apoyo a la gestión, que cumplan con los perfiles y competencias necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las diferentes dependencias frente a los procesos a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, y evitar así atrasos que entorpecen la funcionalidad del Ministerio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que la Subdirección en su apropiación no tiene asignado recursos en este rubro, por ser un presupuesto limitado que se destina al cubrimiento de necesidades relacionadas con el funcionamiento logístico del Ministerio, se requiere contar con un recurso humano fortalecido y para ello requiere en la vigencia 2025, de 52 personas adicionales, que coadyuven al cumplimiento de las tareas propias de la Subdirección, los cuales se distribuirán de acuerdo a la necesidad y perfil (profesional, técnico, asistencial) entre los cinco grupos (Grupo Gestión Administrativa 8/ Grupos Bienes e Inventario 3/ Grupo Conservación Documental 6/ Grupo Gestión de Correspondencia 5/ Grupo Gestión Financiera y contable 30/), para lo cual se requiere de un total de recursos por \$3.500.000.000.</p> <p>Teniendo en cuenta que entre los perfiles del personal a contratar se encuentran profesionales especializados y universitarios, así como técnicos y auxiliares administrativos que de acuerdo a su experiencia y requisitos exigidos, varía el valor de honorarios a cancelar, por lo cual basados en la tabla de honorarios para la vigencia 2024 del Ministerio se pudo establecer que la contratación del personal suma el valor total señalado anteriormente, para un valor promedio para contratista por valor de \$5.608.974, multiplicado por meses de servicio y a su vez por la cantidad de personas a contratar (\$5.608.974X12m X 52 personas).</p>	
<p>Otros servicios profesionales, científicos y técnicos /Servicios De Consultoría Prestados A Las Empresas</p>	<p>El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamenta que las edificaciones institucionales, deberán contar con estudios de vulnerabilidad sísmica y propuestas de reforzamiento estructural, acorde a la norma sismo resistente NSR-10, y ley 400 de 1997, acondicionándolos a niveles de seguridad ante posibles sismos, en especial en Bogotá, que se encuentra en la zona de amenaza sísmica intermedia¹. Por lo anterior, se requiere de realizar la consultoría para actualizar La Casa Giralda, sede Edificio Bancol, Sede Camargo y Sede de Hurtado, a esta normativa.</p> <p>Para lo anterior para la vigencia 2025 se contempla realizar la consultoría estructural para determinar la vulnerabilidad ante sismos, a cada uno de los inmuebles², de acuerdo a los precios del mercado y experiencia al respecto, de manera cualitativa y cuantitativa del estado de cada edificación, ya que presentan incertidumbre en la calidad de los materiales, que pueden perder sus propiedades con el paso de los años, por lo cual se debe realizar análisis de sus lesiones y patologías, ensayos de laboratorio destructivos y no destructivos, para caracterizar las propiedades de mecánicas de los materiales, que permitan el análisis matemático-sísmico, cálculos, las cargas reales que actúan sobre la estructura (muerta, viva y de sismo) y el espectro de diseño y determinar su vulnerabilidad de manera integral, siguiendo las especificaciones de la NSR-10.</p> <p><u>El mencionado estudio permitirá que el Ministerio del interior conozca las carencias en funcionalidad, seguridad o habitabilidad de las Sedes.</u></p>	<p>\$700.000.000</p>
<p>Servicios Públicos Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información</p>	<p>Para la vigencia 2024, se asignó la suma de \$103.635.000 para cubrir los servicios de telefonía en las diferentes sedes del Ministerio, para un consumo mensual promedio de \$8.613.650.</p> <p>Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$106.465.950, el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [(\$103.635.000x 3% =3.109.050+\$103.635.000)], a razón de \$8.895.338 promedio mensual.</p> <p>Es importante mencionar que el Ministerio, a partir de la vigencia 2022 tomo medidas para la reducción del gasto en telefonía, principalmente en telefonía celular, es así que la asignación para este rubro se redujo en un 70%, del valor inicial desagregado en el 2022 (\$341.484.697), frente a la asignación inicial del 2024.</p>	<p>\$106.465.950</p>
<p>Radio Frecuencia Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información</p>	<p>El esquema de seguridad del Ministerio cuenta con 18 equipos de radios de comunicación, para los cuales se contrata el servicio de Radio Frecuencia con cobertura en toda la sabana de Bogotá. El servicio en el contrato actual se ofrece a un costo mensual por valor de \$835380, el cual al ajustar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado [(\$835.380+3% =860.441x 12 meses vigencia 2025)] , requiriendo la suma de \$10.325.297, para la vigencia 2025, para un promedio mes de \$860.441</p>	<p>\$10.325.297</p>
<p>Toquen - SIIF Servicios de telecomunicaciones, transmisión y</p>	<p>El grupo de Coordinación Financiera y Contable del Ministerio del Interior tiene a cargo la administración del SIIF del Mininterior y requiere contar con los toquen para el ingreso a los usuarios. Para la vigencia 2024, se encuentran asignados recursos por valor de \$17.180.273.</p>	<p>\$17.695.681</p>

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
suministro de información	Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$17.695.681 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\$17.180.273 \times 3\% = 515.408 + 17.180.273)]$.	
Vigilancia Servicio de Soporte	El Ministerio, requiere contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada para las diferentes sedes donde funciona y se desarrollan sus actividades, el cual es esencial para el normal funcionamiento de la entidad. Actualmente se cuenta con el contrato 2139/2022, celebrado por un valor total de \$3.184.179.173 con vigencia hasta el 30/11/2024; con recursos de la Unidad Ejecutora de gastos generales del Ministerio (\$2.591.168.106) y de la Unidad Ejecutora de Autoridad Nacional de Consulta Previa (\$593.011.067), los recursos aportados por el Ministerio contemplan vigencias 2022, 2023 y 2024, es así que para el 2024 se encuentra comprometido vigencias futuras por valor de \$1.140.649.855, sin embargo este valor no contempla los ajustes por ley de la vigencia 2024, el cual para la actual vigencia el valor mensual es de \$123.800.868. Así las cosas, para la vigencia 2025, se requiere contar con recursos por un valor total de \$1.530.168.000 el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual mensual, por los 12 meses de la vigencia 2025 $[(\$123.800.000 \times 3\% = 3.714.000 + 123.800.000)] \times 12$ meses, nos arroja una proyección de \$1.530.168.000.	\$1.530.168.000
Aseo y Cafetería Servicio de Soporte	El servicio de aseo y cafetería para las diferentes sedes donde funciona el Ministerio es esencial para el normal funcionamiento de la entidad. Para la vigencia 2024 por los ajustes del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación de ley por IBC para el 2024 del 12,07% y por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería del 9,28%, generó el valor mensual para la vigencia 2024 de \$112.097.750. Para el 2025, este servicio se proyecta por valor de \$1.385.528.190 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual mensual, por los 12 meses de la vigencia 2025 $[(\$112.097.750 \times 3\% = 3.362.932 + 112.097.750)] \times 12$ meses, nos arroja una proyección de \$1.385.528.190.	\$1.385.528.190
Plantas Eléctricas Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	El Ministerio cuenta con plantas eléctricas en la sede BANCOL (Red Corporativa, piso 6 y piso 8) y Casa Giralda, para evitar la suspensión del suministro de luz, al presentarse un corte de luz por algún daño, a las cuales se debe estar realizando mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar su funcionamiento oportuno. Para la vigencia 2024 se han destinado recursos por valor \$20.251.978. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$26.347.581 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\$25.580.176 \times 3\% = 767.405 + 20.251.978)]$.	\$26.347.581
Vehículos Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	La Subdirección Administrativa y Financiera, debe velar por el buen estado de funcionamiento de los vehículos al servicio del Ministerio, para lo cual suscribe un contrato para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de repuestos. En la vigencia 2024, este rubro cuenta con una asignación de recursos por valor de \$403.565.555, de los cuales el 92% se encuentra comprometido en las 10 órdenes de compra Vehículos convencionales y 1 contrato para vehículos no convencionales, con los cuales se espera atender las necesidades preventivas y correctivas del parque automotor al servicio del Ministerio del Interior que por su desgaste y obsolescencia requieren un constante mantenimiento, lo anterior hasta el 31/10/2024. Para la proyección de recursos vigencia 2025, que permita continuar con la actividad de mantenimiento de vehículos, se aplicó el IPC del 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor asignado actualmente, al valor actual asignado $[(\$403.565.555 \times 3\% = 12.106.967 + 403.565.555)]$ obteniendo un valor de proyectado para este servicio por \$415.672.522, para un valor promedio mensual de \$45.737.429, es importante mencionar que los costos de las ordenes se ajustan al catálogo ofertado bajo la modalidad de acuerdo marco de CCE.	\$415.672.522
Plantas Telefónicas Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	El Ministerio cuenta con plantas telefónicas que permite la comunicación externa e interna entre las diferentes áreas y el cliente externo del Ministerio, a las cuales para garantizar su funcionalidad ininterrumpida se debe estar realizando mantenimiento preventivo y correctivo, la proyección de recursos para la vigencia 2024, se realizó teniendo en cuenta el valor del servicio durante la vigencia 2024 el cual es de \$101.879.901. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$104.936.298 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor actual asignado $[(\$101.879.901 \times 3\% = 3.056.400 + 101.879.901)]$.	\$104.936.298
Mantenimiento Ascensor Servicios de	La Sede del Ministerio, ubicada en la calle 12B 8-46, cuenta con un ascensor marca OTIS, el cual es usado por los funcionarios del Ministerio que desempeñan sus labores en las instalaciones, para trasladarse entre los cinco pisos más mezanine	\$25.936.746

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	con los que cuenta esta sede. Para mantenerlo en funcionalidad se debe realizar un contrato directo con la Compañía OTIS Elevator, quien tiene la exclusividad de mantenimiento de estos ascensores. Para la vigencia 2024, OTIS, ofrece el servicio por un valor mensual de \$2.289.210, el cual incluye el servicio de mantenimiento incluyendo repuestos al ascensor privado marca OTIS N° 211358 del Ministerio del Interior, ubicado en el inmueble de la Calle 12 B No. 8 – 38, Sede Camargo. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$25.936.746 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor mensual actual $[(\$2.289.210 \times 3\% = 68.676 + 2.289.210)] \times 11$ meses de la vigencia 2025, resultando una proyección por valor de \$25.936.746.	
Certificación Ascensor Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	Según el artículo 2 del Acuerdo 470 de marzo 14 de 2011, "Por el cual se establece como obligatoria la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", acuerda que (...) Los administradores y/o propietarios de sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas que estén al servicio público o privado en el Distrito Capital, contratarán el diagnóstico y la revisión del funcionamiento de tales aparatos con personas naturales y/o jurídicas calificadas y acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC o entidad que la reemplace o sustituya, las cuales certificarán su óptima operación de conformidad con la correspondiente Norma Técnica Colombiana (...) y teniendo en cuenta que el ascensor de la sede Camargo del Ministerio del Interior ubicado en la calle 12B 8-46, tiene una antigüedad de aproximadamente 80 años y que hasta la fecha no se le ha efectuado la certificación, se proyecta para la vigencia 2025, cumplir con este requisito y así garantizar su seguridad en el transporte vertical de los funcionarios, contratista y visitantes en las seis paradas, evitando así sanciones y accidentes posibles.	\$108.980.592
Caja Menor Otros servicios de fabricación; Servicios de Edición, Impresión y Reproducción; Servicios de recuperación de materiales	Este recurso se dispone, previendo los gastos judiciales requeridos por la Oficina Asesora Jurica que se realizan través de la Caja Menor del Ministerio, tomando para el 2025, la misma base asignada durante el 2024 [\$8'395.200].	\$8.395.200
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$41.542.360
Servicios públicos – Aseo	Para la vigencia 2024, se tiene proyectado un consumo mensual promedio de \$3.361.032 en servicios de aseo y alcantarillado para las diferentes sedes del Ministerio, es decir \$40.332.388 para la actual vigencia. Para el 2025, el presente rubro se proyecta en \$41.542.360 , el cual se obtuvo de incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025 circular 009-2024 Anexo 1), al valor asignado para la actual vigencia 2024 $[(\$40.332.388 \times 3\% = 1.209.972 + 40.332.388)]$	\$41.542.360

De acuerdo con lo expuesto el rubro A-02-01-01, el incremento para la vigencia 2025 se relacionan a nuevas adquisiciones, frente a la apropiación con corte al 29 de febrero de 2024 la cual el valor es \$0, variación que se sustenta en:

Nuevas adquisiciones de activos descrita anteriormente, por \$4.350.000.000 adicionales a solicitar que soportan la necesidad ya que son inherentes al cumplimiento de las funciones propias para cumplir con el objeto misional del Ministerio del Interior, así:

- ✓ El incremento del 24% permitirán la mejora de los puestos de trabajo de los colaboradores, brindando mejor ergonomía en los espacios laborales, espacios acogedores en todos los aspectos necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de manera oportuna, eficiente y eficaz, en cada una de las sedes asignadas al desarrollo de las funciones y/o actividades propias que se derivan para cumplir con el objeto misional del Ministerio del Interior y que cumplen sus colaboradores, tanto funcionarios, como contratistas, así como disminución de costos de arrendamiento de estos que contribuyan a la austeridad del gasto.

- ✓ El Incremento del 76% corresponde a la Renovación del parque automotor de vehículos de propiedad del Ministerio, y en consecuencia optimizando el consumo de combustible y la reducción de gasto de recursos destinados al mantenimiento, avanzando en la transición energética en todos los casos en que sea posible, reemplazando los vehículos que funcionan con combustibles fósiles por vehículos eléctricos, o vehículos que funcionen con otras fuentes alternativas de energía. La razón de renovación del parque automotor entre otras mencionadas, obedece también a que por los años de servicio de este, y la alteración en el comportamiento de los sistemas, que produce averías costosas (fugas en los sistemas de refrigeración y presión de aceite, obliga a reparaciones mes a mes) y alta frecuencia de varadas en operación, **que no permite el desplazamiento de los Directivos en estos vehículos para salidas a territorios cuyo desplazamiento es largo, en cumplimiento a las funciones propias para cumplir con el objeto misional del Ministerio del Interior.**

Respecto al rubro A-02-02, muestra un incremento de \$7.549.858.134, frente a la apropiación con corte al 29 de febrero de 2024 la cual el valor es \$5.682.357.491, variación del 133% de incremento, variación que se sustenta en:

- a) Adquisición de insumos de papelería para las diferentes sedes del Ministerio en el 1% sobre el valor del incremento total del rubro A-02-02 proyectado para el 2025.
- b) Inclusión de la necesidad de recursos para servicios profesionales y de apoyo a la gestión, puesto que no se tiene asignado el personal suficiente para gestionar adecuadamente todos los asuntos de la SAF, haciendo necesario contratar por la modalidad de prestación de servicios en el 56% sobre el incremento total del rubro A-02-02 proyectado para el 2025.
- c) Servicios de construcción en un 32% sobre el valor del incremento total del rubro A-02-02 proyectado para el 2025 en:
 - ✓ Reparaciones locativas para atender las recomendaciones del análisis patológico y de diagnóstico realizado a la Casa Giralda para emprender acciones con obras de mantenimiento y conservación de esta, atendiendo a los requerimientos que por deterioro se han generado, de manera oportuna, con personal idóneo, medida tendiente a reducir los gastos que se puedan llegar a presentar a futuro, así como poner a disposición un ascensor para permitir la inclusión de personas en condición de Discapacidad o de movilidad reducida y garantizando su libre circulación por los dos niveles que componen el inmueble Sede principal del Ministerio del interior.
 - ✓ Mantenimiento, certificación del ascensor de la sede Camargo, así como modernización del ascensor Piso 1, 2 y 3 sede Bancol que coadyuva a una mejor disponibilidad de servicio para la atención de usuarios internos y externos, por desplazamiento a los diferentes Pisos, así como de asistencia a los auditorios, por temas de trabajo propios en cumplimiento a la Misionalidad del Ministerio del Interior
 - ✓ Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas para las sedes Camargo, Hurtado y los 9 pisos que son de propiedad de la sede Edificio Bancol, sedes asignadas al desarrollo de las actividades propias que se derivan del objeto misional del Ministerio del Interior y sus colaboradores.
- d) Programa de seguros, en atención a poder adquirir, un proceso cuyo cronograma contemple mínimo amparar 1 año de aseguramiento por estudio de mercado, poder contar con disponibilidad presupuestal del valor total, tomando como experiencia el presupuesto base para adquisiciones de anteriores vigencias el 4% sobre el valor del incremento total del rubro A-02-02 proyectado para el 2025

e) Solicitud de recursos para la certificación del ascensor de la sede Camargo en un 3% sobre el valor incremento total del rubro A-02-02 proyectado para el 2025.

f)

El 37% restante corresponde al incremento en las demás actividades que contempla el Rubro A-02-02 con la aplicación del IPC (3%) proyectado para el 2025.

De acuerdo a lo anterior, para la vigencia 2025, la Subdirección Administrativa y Financiera requiere de un total recursos por adquisición de bienes y servicio por valor de **\$17.582.215.625**

Rubro	Concepto	Valor
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 17.582.215.625
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.350.000.000
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 4.350.000.000
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.050.000.000
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.300.000.000
A-02-02	ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 13.232.215.625
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 642.687.126
A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 449.451
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 561.493.953
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 80.743.722
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.589.528.499
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 2.420.000.000
A-02-02-02-006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 829.373.212
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 1.358.160.870
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 7.940.452.057
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 41.542.360

Subdirección de Gestión Humana -GH (\$3.676.696.408)

La proyección presupuestal para adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2025, se realizó acorde con las necesidades básicas y prioritarias para el normal funcionamiento de la Entidad, teniendo en cuenta las políticas de austeridad en el gasto y en materia ambiental, así como los compromisos propios de la Subdirección de Gestión Humana en el marco del Plan Estratégico Institucional vigente, cuyo horizonte de planeación incluye la vigencia 2025. El valor total al que asciende el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025, es de \$3.676.696.408.

Se toma como referencia el comportamiento de las variables macro proyectadas para el desempeño de la economía en lo que hace referencia a la vigencia 2024. Fundamental, el comportamiento esperado del IPC, que acorde a las directrices del Ministerio de Hacienda se estima en un 3%.

Para la mayoría de los rubros aplicables a la gestión de la Subdirección de Gestión Humana, se tomó este parámetro de referencia para la proyección. No obstante, dado a temas de índole particular, en algunos rubros se tomó otro tipo de parámetros de referencia, en consistencia con el ciclo económico, la coyuntura social que se vive, compromisos Institucionales adquiridos y otros aspectos fundamentales, que serán presentados a continuación en la justificación de cada rubro.

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02	Adquisición de bienes y servicios	\$3.676.696.408
A-02-02-01	Materiales y Suministros	\$117.225.486
A-02-02-01-002-08	Dotación (Prendas de vestir y calzado)	\$117.225.486
Dotación (Prendas de vestir y calzado)	<p>Con el fin de dar cumplimiento al Art. 1 de la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, el cual determina que los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, etc., tienen derecho a que la entidad les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente, igualmente establece que esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora.</p> <p>Para la vigencia 2024 se estableció un presupuesto de \$110,496,263. Para el 2025, se considera pertinente el ajuste del 3%</p> <p>Igualmente, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo legal vigente para la vigencia 2024 el tope para la entrega de dotación de vestuario y calzado de labor es de 2 millones seiscientos mil pesos, por lo que la cantidad de funcionarios que tendrán derecho es mayor, toda vez que ingresa 1 funcionario con derecho y esto equivale aproximadamente a 43 funcionarios con derecho a dotación para caballero.</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 117.225.486,00
A-02-02-02	Adquisición de servicios	\$3.559.470.922
A-02-02-02-006-004	Servicio de transporte de pasajeros	\$608.698.461
Contratar el suministro de servicio de transporte aéreo nacional e internacional para los funcionarios y contratistas del Ministerio del Interior y miembros de la Policía Nacional que presten sus servicios de protección y seguridad en el Ministerio del Interior	<p>La labor institucional del Ministerio del Interior exige actividad ininterrumpida en la prestación de la oferta de servicios a la ciudadanía, sin que ésta se vea afectada por el cambio de año calendario, ni por factores externos, con la finalidad de garantizar el desplazamiento del Ministro del Interior, los esquemas de seguridad de acompañamiento, funcionarios y contratistas que requieren prestar servicios inherentes a las tareas encomendadas directamente por ese despacho.</p> <p>Tomando como base la asignación para la vigencia 2024 de \$573.756.679,00, se calculó un incremento del 3% para la vigencia 2025, obteniendo un valor de \$ 590.969.379</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 608.698.461
A-02-02-02-007-01-03-3	Servicio de Seguros sociales y riegos laborales	\$2.088.535

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02	Adquisición de bienes y servicios	\$3.676.696.408
Riesgo laboral para pasantes y judicantes	Se debe dar cumplimiento al Decreto 055 de 2015, "Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones" y a la Resolución No. 1140 de 2019, "Por la cual se adopta la reglamentación establecida en la Resolución 3546 de 2018 expedida por el Ministerio de Trabajo que regula la vinculación formativa de práctica laboral y se hace una delegación."	\$ 2.088.535
	Tomando como base la asignación para la vigencia 2024 de \$ 2.027.704,00, se calculó un incremento del 3% para la vigencia 2025, obteniendo un valor de \$2.088.535	
A-02-02-02-08-05	Servicios de soporte (CNSC)	\$8.240.000
Proceso de convocatoria para proveer empleos en carrera administrativa	Se debe dar cumplimiento a lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC en la CIRCULAR No: 20181000000027 del 7 de febrero de 2018, en donde se establece que, las entidades del nivel nacional deberán apropiar los recursos para adelantar los concursos de méritos, en consonancia con lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo.	\$ 8.240.000
	En consecuencia, las entidades destinatarias de la referida norma, durante el mes de febrero deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos, teniendo en consideración el valor estimado por vacante establecido por la CNSC según el modelo de agrupación de entidades y aplicando la etapa de verificación de requisitos mínimos, las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales, así como la de valoración de antecedentes de hoja de vida laboral.	
	Sobre los \$8.000.000 requeridos para atender los gastos derivados de los concursos de la CNSC en el 2024, se aplica un ajuste del 3% para estimar necesidades en el 2025, ya que será recurrente la convocatoria de concursos en la medida que se generen vacantes en las entidades.	
A-02-02-02-008-009	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	\$2.060.000
Amparar los gastos correspondientes a publicación en medio masivo de fallecimiento de funcionarios	Se requiere contar con recursos para amparar los gastos correspondientes a publicación en medio masivo de fallecimiento de funcionarios	\$ 2.060.000
	Sobre los \$2.000.000 requeridos se aplica un ajuste del 3% para estimar necesidades en el 2025 en \$2.060.000.	
A-02-02-02-009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$2.334.923.117
A-02-02-02-009-02	Servicios de educación	\$135.310.362
Plan Institucional de Capacitación	Fortalecer las competencias laborales de los servidores públicos del Ministerio del Interior, a través de una oferta de capacitación que permita el mejoramiento en la prestación del servicio y el logro de los objetivos institucionales.	\$ 135.310.362
	Con la ampliación de las actividades y temáticas dentro del PIC se busca mejorar el conocimiento, las habilidad y destrezas, las competencias blandas de cada uno de los servidores, logrando así	

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02	Adquisición de bienes y servicios	\$3.676.696.408
	que cada uno de ellos incremente su sentido de pertenencia por la Entidad.	
	Para la vigencia 2024, el presupuesto es de \$127.542.994,00, para dar continuidad a la estrategia propia en la materia y fortalecimiento de competencias en los servidores, se hace un ajuste del 3% para la vigencia 2025, obteniendo un valor de \$ 131.369.284.	
	Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.	
A-02-02-02-009-003	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	\$185.286.356
Exámenes Médicos Ocupacionales (Periódicos- Ingreso y Retiro)	<p>Dar cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Salud, "por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y el contenido de las historias clínicas ocupacionales."</p> <p>Así como al Decreto 1072 de 2015, el cual establece las directrices para la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la vigencia 2023, se realizó ajuste del Profesiograma incluyendo pruebas psicotécnicas para conductores.</p> <p>para la vigencia 2024 se asignó \$ 27.037.500, sin embargo, por el ajuste anteriormente mencionado se incrementa a 30.000,000, equivalente a un 10;96%.</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 31.827.000
Realizar la Intervención en el marco de los resultados obtenidos de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial a todos los colaboradores del Ministerio del Interior, en cumplimiento a la normativa vigente	<p>Dar cumplimiento a la Resolución. 002646 de 2008, "Por la cual se establecen las disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional" y a la Resolución 2724 de 2022 "Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.", mediante las cuales se evidencia la necesidad de realizar acciones puntuales de intervención Psicosocial, de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la batería.</p> <p>Por lo anterior, se estima un costo de \$ 65.232.301</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 69.204.948
capacitación para nuevos auditores internos y actualización para Auditores Internos antiguos bajo la Norma NTC: ISO 45001:2018 y	De la misma manera y de acuerdo a las necesidades individuales presentadas por algunos funcionarios, se evidenció la necesidad de gestionar el fortalecimiento e integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual debe realizarse por medio de la formación y certificación de los funcionarios como Auditores Internos del SG-SST frente al Decreto 1072 de 2015, en	\$ 19.096.200

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02	Adquisición de bienes y servicios	\$3.676.696.408
el decreto 1072, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	<p>esta ocasión mediante la certificación de la Norma ISO 45001. Es de anotar que para atender la necesidad descrita no se cuenta con el personal profesional especializado para satisfacer esta necesidad</p> <p>El Ministerio del Interior, requiere mantener un alto grado de conocimiento y actualización de sus funcionarios con el fin de fortalecer en forma integral las dimensiones de las competencias laborales y así generar una mayor eficiencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así pues, gracias a que la capacitación es un proceso organizado, relativo a la educación formal, para el trabajo y desarrollo humano, dirigido a prolongar y a complementar la educación inicial, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva que conlleve a contribuir al cumplimiento de los objetivos Institucionales.</p> <p>Por lo anterior, se estima un costo de \$18.000.000</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	
Diagnóstico y elaboración de la señalización de seguridad, señalización de emergencias y elaboración planos de evacuación para todas las sedes del Ministerio del Interior	<p>Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. "Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.", en donde se establece que, el empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.</p> <p>Por lo anterior, se estima un costo de \$23.917.860</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 25.374.458
Adquisición de los elementos de protección personal para los colaboradores del Ministerio del Interior.	<p>Dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015, en donde se estipula la obligación de adoptar medidas de prevención y control efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, y especialmente en lo referente al suministro de equipos y elementos de Protección Personal y Colectivo, los cuales son dispositivos, accesorios y vestimentas con el fin de proteger a los trabajadores contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Frente a las responsabilidades se establece que el empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes y que los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Por lo anterior, se estima un costo de \$18.000.000.</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 19.096.200

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02	Adquisición de bienes y servicios	\$3.676.696.408
Realizar exámenes médicos y capacitación, para certificar y recertificar en trabajo en alturas a los funcionarios del Ministerio del Interior, que por necesidad del servicio realizan esta labor, de acuerdo a con la normatividad legal vigente.	<p>Dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, la cual establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.</p> <p>Por lo anterior, se estima un costo de \$1.500.000</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 1.591.350
Realizar la Pre auditoria y Auditoria de certificación bajo la norma ISO 45001:2018 para el Ministerio del Interior	<p>Teniendo en cuenta que la entidad proyectó para el 2023 contar con la certificación bajo la NTC: ISO 45001 se hace necesario proyectar la realización de la auditoria de seguimiento para el mantenimiento de dicha certificación.</p> <p>Por lo anterior, se estima un costo de \$18.000.000</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 19.096.200
A-02-02-02-009-06	Servicios de Esparcimiento, culturales y deportivos	\$2.014.326.399
Programa de Bienestar Social.	<p>El presupuesto asignado se destina hacia la gestión que cubre las necesidades de los servidores públicos en cuanto a actividades recreativas, deportivas y culturales, como por ejemplo contar con eventos de desvinculación asistida (pre pensionados), conmemoración del día del servidor público (Decreto 2865 de 2013), jornada de integración familiar (ley 1857 de 2017), vacaciones recreativas, día del niño, etc.</p> <p>La Subdirección de Gestión Humana continuará con la intervención del área de calidad de vida laboral con el fin de crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión organizacional.</p> <p>Así mismo, con la intervención del área de protección y servicios sociales se busca estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y su familia para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.</p> <p>Respecto al monto asignado para la vigencia 2024, por valor de \$211.356.248, se hace un ajuste del 3% para la vigencia 2025, obteniendo un valor de \$ 217.696.935.</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 224.227.843
Plan Institucional de Incentivos	Con la provisión de empleos producto de la convocatoria 428 de 2016, el Ministerio cuenta ya con una planta consolidada de servidores con derechos de carrera administrativa.	\$ 178.845.637

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	VALOR
A-02	Adquisición de bienes y servicios	\$3.676.696.408
	<p>Para la vigencia 2023, se requiere contar con presupuesto que garantice mejorar la calidad de los incentivos, logrando con esto generar en los servidores un alto grado de pertenencia por la entidad y optimizar la prestación de sus servicios como poder contar con diferenciadores respecto de otras entidades y así lograr retener el talento humano. Por esto se debe contar con presupuesto para incentivos no pecuniarios a nivel individual y pecuniario para los proyectos por equipo.</p> <p>Respecto al presupuesto de la vigencia 2024, por valor de \$168.579.166, sobre este valor, se hace un ajuste del 3% para la vigencia 2025, obteniendo un valor de \$ 173.636.541.</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	
Transporte de funcionarios y Educación Formal	<p>Teniendo en cuenta el pliego petitorio presentado por las organizaciones sindicales del Ministerio del Interior, es necesario contar con este presupuesto y con esta línea dentro del programa de bienestar, ya que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida del funcionario, asociado a la disminución de costos de transporte, garantía de seguridad frente al sistema masivo de transporte de Bogotá, mayor calidad de tiempo para compartir con la familia, etc.</p> <p>A la fecha el Ministerio del Interior no ha asignado recursos para este fin, sin embargo, de lograr dicho presupuesto, se fortalecería a nivel general y se da atención a las solicitudes sindicales.</p> <p>Para la vigencia 2024, no se asignaron los recursos, pero se solicitaron 1,611,252,919, correspondiente a Transporte de los funcionarios por valor de \$844,087,720 y la educación formal correspondiente a \$ 767,165,199, se hace un ajuste del 3% para la vigencia 2025, obteniendo un valor de \$ 1.659.590.507, correspondiente a Transporte de funcionarios 869.410.352 y Educación Formal 790.180.155.</p>	\$ 1.611.252.919
A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$603.460.809
Apropiación para amparar los viáticos y gastos de viajes de los funcionarios del Ministerio del Interior	<p>Garantizar el pago de viáticos y gastos de viaje al Ministro del Interior, los esquemas de seguridad de acompañamiento, funcionarios y contratistas en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Respecto al presupuesto de la vigencia 2024, por valor de \$568.819.690, sobre este valor se aplica un ajuste del 3% para la vigencia 2024, obteniendo un valor de \$ 585.884.280</p> <p>Adicionalmente se incrementa un 3% para un total del 6% con el fin de poder contar con recursos ante la posible creación de la planta temporal en el Ministerio.</p>	\$ 603.460.809

En síntesis, la Subdirección de Gestión Humana para la vigencia 2025 requiere presupuesto por un valor de \$3.676.696.408 para adquisición de bienes y servicios.

Oficina de Información Pública -OIPi (\$756.658.068,00)

Para la vigencia 2025, la Oficina de Información Pública requiere recursos por el funcionamiento de: \$ 756.658.068,00 por la cuenta 02 - Adquisición de Bienes y Servicios con el fin de garantizar la operación de la Oficina de Información Pública la cual es de apoyo a la Entidad y así no generar contratiempos y dar cumplimiento a la misión de la Entidad. Así mismo, las proyecciones fueron realizadas teniendo en cuenta las orientaciones dadas a través de la Circular Externa No 009 del 26 de febrero de 2024, frente al contenido del anexo 1. Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2025: Supuestos Macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar, sin obviar que existen procesos que su crecimiento de una vigencia a otra su comportamiento de variables tales como es el IPC y la tasa representativa del mercado.

Rubro	Concepto	Valor
A-02-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 756.658.068
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 151.181.134
Software Nomina, Sistema de Inventarios y Oracle	<p>Es necesario contar con el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del Sistema de información para nómina y seguridad y salud en el trabajo - Kactus-HR, este Sistema de información debe renovarse anualmente, dado que el Ministerio del Interior no cuenta con los programas fuentes que le permitan realizar las adecuaciones necesarias para el normal funcionamiento del software en mención para la vigencia 2024 el software está proyectado con recursos por \$104.381.910, para la vigencia 2025 se solicita los recursos de \$115.321.134 cuyo incremento se realiza con el 10.48% que corresponde al cierre del IPC 2023 teniendo en cuenta que este es servicio es incrementado en cada anualidad basado en dicho indicador según el cierre de cada vigencia, cuya cifra es dado por el DANE</p> <p>Se requiere continuar con el funcionamiento del sistema PCT para el cumplimiento de las funciones de administración de bienes y reporte de información requerida por contabilidad para alimentar el sistema SIIF Nación. Para esta vigencia se cuenta con recursos de \$ 25.000.000, pero para la vigencia de 2025 se solicitan recursos por el valor de \$27.650.000, cuyo incremento se realiza con el 10.48% que corresponde al cierre del IPC 2023 teniendo en cuenta que este es servicio es incrementado en cada anualidad basado en dicho indicador según el cierre de cada vigencia, cuya cifra es dado por el DANE</p> <p>Adicionalmente el Ministerio debe contar con el soporte técnico y las actualizaciones de los productos Oracle, de manera continua, que garantice su adecuado funcionamiento, con el fin de permitir la disponibilidad y óptima operación del sistema de información de Almacén, para la vigencia de 2024 se cuenta con recursos por \$8.000.000 para la vigencia 2025 se solicitan recursos por el valor de \$8.240.000 incrementando el 3%.</p> <p>Para vigencia 2025 se incrementó el valor de este rubro en un 3% en la relación con la vigencia 2024 ya que es importante contar con estos Sistemas de Información para el cumplimiento de las funciones del Ministerio.</p>	\$ 151.181.134
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 181.308.573
Transporte aéreo / Terrestre personal del Ministerio del Interior	Es necesario contar con los recursos pertinentes para atender y cumplir con la misionalidad del Ministerio asociada con la transformación y componentes del Plan Nacional de Desarrollo y propósitos del Gobierno Nacional, garantizando el suministro de transporte aéreo en vuelos Nacionales e Internacionales para todo el personal del Ministerio del Interior, para el año 2024 se cuenta con recursos por \$176.027.741, la proyección realizada para el 2025 corresponde a un valor de \$181.308.573 con un porcentaje de incremento del 3%.	\$ 181.308.573
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 134.926.229
Servicio de centro de datos (colocación / housing)	Con el objeto de cubrir las necesidades de la Entidad y teniendo en cuenta la importancia del buen funcionamiento de la plataforma tecnológica con la que cuenta el Ministerio del Interior, se requiere los servicios de colocación de equipos debido a que la entidad no cuenta con un sitio dotado técnicamente para alojar la totalidad de los equipos que conforman las plataformas LAN /WEB de la entidad. En este rubro se ha presentado un comportamiento histórico así: para el 2016 se ejecutó presupuesto de \$104,540,628, para la vigencia 2017 se	\$ 134.926.229

	comprometió \$113,265,529 y ejecutó \$103,629,528 para vigencia del 2018 se comprometió y obligó \$88,525,570, para la vigencia 2019 se comprometió y Obligó \$73,871,354, para vigencia 2021 se comprometió 53,173,960, para el 2022 se comprometió \$79.306.360, en la vigencia 2023 se comprometieron recursos por \$93.205.871 y se obligaron recursos por \$65.419.405, para la vigencia 2024 se cuenta con recursos por \$122.127.289 y para la vigencia 2025 se proyectan recursos por \$ cuyo incremento se realiza con el 10.48% que corresponde al cierre del IPC 2023 teniendo en cuenta que este es un servicio cuyo valor es incrementado en cada anualidad basado en dicho indicador según el cierre de cada vigencia, cuya cifra es dado por el DANE	
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 134.116.059
Servicios de internet y enlaces dedicados, soporte técnico	La contratación de canales de transmisión de datos e internet es imprescindible para el Ministerio del Interior, ya que a través de estos recursos es posible dar un buen servicio al público y entidades estatales a través de sistemas de información web y demás portales desarrollados por la Entidad para el cumplimiento de su misión. Así mismo, este recurso permite el acceso a Internet con el cual se transmite información del Ministerio a entidades de control y se consultan diversas fuentes oficiales y de medios de comunicación. Los canales de transmisión de datos son un recurso crítico y estratégico para la operación y misión del Ministerio, por lo cual no es posible dejar de utilizarlo y su continuidad es vital para el cumplimiento de las tareas diarias, para garantizar la continuidad en el servicio es importante el soporte técnico en todo lo relacionado al servicio de conectividad como como es el soporte a las redes de telecomunicaciones, equipos tecnológicos, y demás soportes técnicos que se puedan presentar en el Ministerio del Interior. Su comportamiento de los últimos tres a los ha sido el siguiente: para la vigencia 2021 se comprometió 19,959,870, para la vigencia 2022 se comprometió \$31.880.690, para la vigencia 2023 se asignaron recursos por el valor de \$38.982.454 incrementando el recurso en un 285%. Para el año 2024 se cuenta con recursos por \$121.393.971. Para la vigencia 2025 se realiza una proyección de recursos necesarios por \$134.116.059 para atender este servicio cuyo incremento se realiza con el 10.48% que corresponde al cierre del IPC 2023 teniendo en cuenta que este es un servicio cuyo valor es incrementado en cada anualidad basado en dicho indicador según el cierre de cada vigencia, cuya cifra es dado por el DANE.	\$ 134.116.059
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 82.336.000
Mantenimiento de Aires Acondicionados y UPS	<p>Actualmente, el Ministerio del Interior cuenta con varias marcas de aires acondicionados instalados en los diferentes centros de cableado de los edificios Bancol, Camargo, Dansocial y Casa de la Giralda (HiRef, LG, Blue Line) a los cuales se les debe realizar mantenimiento, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento; con el objetivo de proteger los equipos activos de red (switchs, patch panels, controladoras inalámbricas, eléctricos (UPSs) instalados y funcionando actualmente en las áreas en mención, de tal forma que se extienda la vida útil de los equipos y además permita la continuidad de servicios de red, internet, correo electrónico, impresión y de fluido eléctrico regulado, para todos los equipos de cómputo que utilizan todos los servidores públicos que laboran en las sedes del Ministerio del Interior y así de esta forma puedan cumplir cabalmente con las funciones asignadas de manera oportuna y eficaz.</p> <p>Actualmente, el Ministerio del Interior cuenta con varias marcas de UPSs instaladas en los diferentes centros de cableado de los edificios Bancol, Camargo, Dansocial y Casa de la Giralda (APC, EATON, TITAN, POWERSUN, TRIPLITTE, SOCOMEC) a las cuales se les debe realizar mantenimiento, con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones de funcionamiento; con el objetivo de proteger los equipos activos de red (switchs, patch panels, controladoras inalámbricas, eléctricos (UPSs) instalados y funcionando actualmente en las áreas en mención, de tal forma que se extienda la vida útil de estos equipos; además de proporcionar servicios de energía eléctrica regulada a todos los equipos de red, comunicaciones, computadores instalados y funcionando en el Ministerio del Interior y así el personal del Ministerio del Interior pueda cumplir cabalmente con las funciones asignadas de manera oportuna y eficaz.</p> <p>Para la vigencia de 2024 se cuenta con recursos por el valor de \$70.000.000, para la vigencia 2025 se realiza una proyección de recursos por \$82.336.000 con un 18% de incremento debido a que se basa tomando inicialmente de base el incremento del IPC cierre 2023 10,48% y un valor adicional de \$5.000.000 ya que ese servicio requiere repuestos que su valor se estima con la tasa</p>	\$ 82.336.000

	representativa del mercado, la cual es fluctuante y puede generar un costo adicional.	
A-02-02-02-0010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 72.790.073
Movilidad personal del Ministerio del Interior	Es necesario contar con los recursos pertinentes para atender y cumplir con la misionalidad del Ministerio asociada con la transformación y componentes del Plan Nacional de Desarrollo y propósitos del Gobierno Nacional desde el accionar de la Oficina de Información Pública, garantizando los gastos de viaje para el personal del Ministerio del Interior. para el año 2024 se cuenta con recursos por \$70.669.774 donde la proyección realizada para el 2025 corresponde a un valor de \$72.790.073 con un porcentaje de incremento del 3%.	\$ 72.790.073

Para la vigencia 2025, la Oficina de Información Pública requiere de **(\$756.658.068)**, para la adquisición de bienes y servicios.

3.1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (\$1.057.737.565.938)

3.1.1.3.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. (\$8.287.752.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 /PRESUPUESTO 2025
A-03-03-01-009	\$7.142.500.000	\$8.287.752.000	\$1.145.252.000	16%
TOTAL	\$7.142.500.000	\$8.287.752.000	\$1.145.252.000	16%

BASE LEGAL

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: E. Justicia para el cambio social, democratización del estado y garantía de Derechos y libertades. 4. Justicia transicional e implementación de las sanciones y medidas de reparación para la reconciliación social

- Ley 975 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
- Decreto 3570 de 2007: por medio del cual se crea el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005.
- Decreto 1737 de 2010 por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007.
- Decreto 1066 de 2015, sector administrativo del Interior.

- Decreto 660 de 2018 por el cual se crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

En el proceso reincorporación de miembros armados organizados al margen de la ley con miras a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, se emitió la Ley 975 de 2005, con el objeto de facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil, de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Con el objeto de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de amenaza o riesgo como consecuencia directa de su participación en calidad de víctima o testigo dentro del proceso de Justicia y Paz, se creó el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, mediante el decreto 3570 de 2007, modificado por el decreto 1737 de 2010, el cual fue incorporado en el decreto 1066 de 2015, sector administrativo del Interior.

Este Programa cuenta con los siguientes órganos para su dirección, ejecución, evaluación y seguimiento:

- **Dirección:** el artículo 6º, establece que la **Dirección ejecutiva** del programa está a cargo de la **Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior**, dependencia que dentro de sus funciones sirve de enlace con las entidades del Estado responsables de adoptar las medidas tendientes a la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de las víctimas y testigos para garantizar su participación en las diferentes etapas del proceso de justicia y paz, así como el que las entidades que implementan el programa, Policía Nacional de Colombia y Fiscalía General de la Nación incorporen y apropien en su accionar los lineamientos de la política en materia de protección, prevención, enfoque diferencial, competencias, y responsabilidades, por los responsables de la ejecución operativa del Programa, a través de la puesta en marcha de los dispositivos de seguridad individual y colectiva, en la aplicación de medidas de protección.
- **Grupos Interinstitucionales de Apoyo:** son grupos asesores de la Dirección del programa, constituidos por:
 - **Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo**, integrado por la Policía Nacional y el Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, tiene como función el recopilar información, elaborar y actualizar el Mapa de Riesgo para presentación ante el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, y para ser utilizado como insumo para la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos que conforman este Programa.
 - **Grupo Interinstitucional de Protección:** integrado por representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien ejerce la secretaría técnica, Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tiene dentro de sus funciones la adopción de las medidas de protección colectivas, de acuerdo a lo establecido en el protocolo, las cuales

se coordinarán con el Grupo Departamental de Medidas Complementarias, para su ejecución, y el sugerir a las entidades encargadas de la ejecución de medidas de protección, la adopción de otras medidas de protección, además de las existentes, que considere pertinentes.

- **Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo:** conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, cuenta con siete (7) regionales con cobertura de los 32 departamentos. Este grupo tiene dentro de sus funciones el evaluar y determinar el nivel de riesgo de las víctimas y/o testigos definidos en la Ley 975 de 2005, reportado por cualquier funcionario público o autoridad territorial, tomando como base la gravedad e inminencia de la amenaza, el grado de vulnerabilidad y los factores diferenciales presentes en la persona afectada, adoptar las medidas que correspondan, de acuerdo con el nivel de riesgo en cada caso y resolver en primera instancia, los recursos de reposición interpuestos en contra de las decisiones de este Grupo, sobre vinculación o no al Programa y las medidas adoptadas.
- **Grupo Departamental de Medidas Complementarias:** integrado por el Gobernador o Secretario de Gobierno departamental, la Policía Nacional, la Dirección Seccional de Fiscalías y la Defensoría del Pueblo, tiene dentro de sus funciones el definir e implementar las medidas complementarias, a las medidas de protección individuales asignadas por cada una de las instancias del Programa de Protección.

La Dirección de Derechos Humanos, como Dirección del programa, tiene dentro de sus funciones:

- Servir de órgano de articulación interinstitucional con otras entidades para proveer atención integral a la población beneficiaria, teniendo en cuenta criterios de enfoque de género y diferencial.
- Hacer seguimiento y evaluación al Programa de Protección para Víctimas y Testigos, al funcionamiento y determinaciones del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER y al impacto de las medidas.
- Brindar asistencia técnica a las autoridades de orden territorial en la aplicación de los diferentes dispositivos de prevención y protección previstos en el decreto.
- Coordinar estrategias de capacitación, orientación y asistencia técnica necesaria y oportuna a entidades encargadas de operar el Programa.
- Orientar las acciones de prevención a nivel departamental y municipal, a desarrollar por parte de las entidades territoriales responsables, a partir del mapa de riesgo aprobado.
- Servir de órgano de segunda instancia que conocerá y decidirá las impugnaciones a las decisiones que sean adoptadas por los Grupos Técnicos de Evaluación de Riesgo - GTER, sobre la vinculación o no al Programa, las medidas adoptadas y la desvinculación.

En este marco la Dirección requiere de presupuesto para continuar desarrollando su misionalidad a través de las siguientes actividades:

Realizar cincuenta y seis (56) jornadas de seguimiento a los grupos Interinstitucionales de Apoyo, Técnico de Valoración de Riesgos - GTER, Departamental de Medidas Complementarias y autoridades de orden nacional y territorial.

En este marco se realizará seguimiento al proceso de evaluación y calificación de riesgo acorde con las ordenes de las sentencias Rad. 110012252000201400027 (Salvatore Mancuso Gómez y otros), Rad. 110016000253200883626 (Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros) y Rad. 11001600025320068001803 (Ramiro Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”), proferidas por las Salas

de Justicia y Paz - Tribunales Superiores de Bogotá y Medellín, respectivamente, en las que se “exhorta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Policía Nacional para que se adelanten estudios de riesgo y programas de protección a las víctimas”.

Por la naturaleza del programa, este tiene cobertura 32 departamentos, dividido en siete (7) regionales, razón por la cual se requiere de personal para prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero en el nivel central, además de asesoría y asistencia técnica en los departamentos, aunado la necesidad de recursos para desplazamientos, operación logística, que permitan hacer el seguimiento permanente de las decisiones que se toman con base en el análisis de cada caso, de las medidas implementadas en los casos individuales y colectivos y la coordinación con las instituciones que participan en la implementación de las medidas complementarias.

En consideración a que desde mediados de 2007, varias mujeres víctimas de los actores armados han venido reclamando sus derechos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, solicitando medidas de protección debido a las constantes amenazas y atentados que habían sufrido, y ante la precariedad de las respuestas dadas por el Gobierno, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-496 de 2008, estudió esta solicitud y recordó que el conflicto armado implicaba formas de violencia de género muy extendidas, como el uso de la violación como arma de guerra, aunado a que las mujeres víctimas que reclamaban sus derechos, enfrentan además riesgos graves y desproporcionados, como muertes y amenazas. De igual forma la Corte verificó que el programa carecía de medidas específicas de protección para las mujeres y no cumplía requisitos mínimos de racionalidad, como identificar y valorar apropiadamente los riesgos o prever respuestas oportunas y adecuadas a las circunstancias, por sólo mencionar algunos de sus defectos.

En este marco se espera contar con recursos que permitan cofinanciar treinta (30) iniciativas territoriales en materia de Derechos Humanos con enfoque diferencial dirigidos a estas víctimas con miras a fortalecer sus procesos organizativos y productivos

El decreto 660 de 2018 por el cual se crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, con el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios, en su articulado final señala que los recursos que se apropian en la Ley de Presupuesto General de la Nación a las instituciones comprometidas en la ejecución de las medidas del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, podrán financiar el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.

Con base en este marco normativo, se espera contar con recursos que permitan cofinanciar treinta (30) iniciativas con miras a apoyar la implementación de 30 planes integrales de prevención y autoprotección generados con las comunidades y organizaciones seleccionadas por el Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales, con miras a fortalecer sus procesos organizativos y productivos.

Los costeos de las actividades tienen como base: para el caso de las prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para este tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; para las iniciativas cofinanciadas, los valores históricos del programa con incremento del número de iniciativas a fin de ampliar la cobertura territorial.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar seguimiento a los grupos Interinstitucionales de apoyo, técnicos de valoración de riesgos - GTER, departamental de medidas complementarias y autoridades de orden Nacional y Territorial.	\$2.642.472.000	56 jornadas de seguimiento a los grupos Interinstitucionales de Apoyo, Técnico de Valoración de Riesgos - GTER, Departamental de Medidas Complementarias y autoridades de orden nacional y territorial.	\$2.887.752.000	56 jornadas de seguimiento a los grupos Interinstitucionales de Apoyo, Técnico de Valoración de Riesgos - GTER, Departamental de Medidas Complementarias y autoridades de orden nacional y territorial.
Apoyar iniciativas territoriales dirigidos a mujeres víctimas del conflicto, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional.	\$1.800.000.000	20 iniciativas territoriales dirigidos a mujeres víctimas del conflicto por un valor máximo de 90 millones.	\$2.700.000.000	30 iniciativas territoriales dirigidos a mujeres víctimas del conflicto por un valor máximo de 90 millones.
Apoyar iniciativas territoriales como acción de contribución a la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección de comunidades en el marco del decreto 660 de 2018	\$2.700.000.000	30 iniciativas territoriales como acción de contribución a la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección de comunidades por un valor máximo de 90 millones.	\$2.700.000.000	30 iniciativas territoriales como acción de contribución a la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección de comunidades por un valor máximo de 90 millones.
TOTAL	\$7.142.500.000		\$8.287.752.000	

3.1.1.3.2 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON. (\$615.899.554.799)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

PRESUPUESTO (pesos):

RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento porcentual necesidad 2024 en relación con 2025
A-03-03-01-032	\$400.000.000.000	\$ 615.899.554.799	\$215.899.554.799	54%
TOTAL	\$400.000.000.000	\$ 615.899.554.799	\$215.899.554.799	54%

BASE LEGAL

De acuerdo con la resolución No.1803 del 18 de noviembre de 2022 del Ministerio del Interior, “Por la cual se compila y actualiza la reglamentación del Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON”, se establecen las directrices que deben seguirse para la financiación o cofinanciación de proyectos o programas, entre las que se consideran aquellos proyectos cuya ejecución tienda a propiciar la seguridad y convivencia

ciudadana, preservar el orden público, el fortalecimiento de la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, los que además se ajustarán, entre otros, a los siguientes criterios:

“Artículo 4. Programas y proyectos para financiar o cofinanciar con recursos FONSECON, Se considerarán proyectos cuya ejecución tiende a propiciar la Seguridad y convivencia ciudadana, preservar el orden público, el Fortalecimiento de la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, los siguientes:

[...]

4.2 Proyectos o programas que propician la seguridad y convivencia ciudadana.

- a. Prevención del delito, para contribuir con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que pretende la neutralización, control y reducción de los riesgos específicos e inminentes de la ocurrencia de delitos, desde un enfoque social y situacional.
- b. Programas y proyectos que fortalezcan la convivencia ciudadana y la cultura de la legalidad, encaminados a incentivar el respeto a los demás, la transformación pacífica de conflictos, basados en la apropiación de normas de conducta elementales aceptadas en la sociedad en el marco del Estado social de derecho, las instituciones y los principios democráticos, de acuerdo con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- c. Generación de escenarios en los cuales se puedan desarrollar actividades lúdicas, pedagógicas, de integración social y ciudadana, para la prevención de la violencia y el delito, a partir de espacios integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad,
- d. Demás actividades autorizadas Por la ley.

4.3. Proyectos o programas tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, que resuelvan problemas de inexistencia de las sedes administrativas de las entidades territoriales, instalaciones inadecuadas o en peligro inminente por el mal estado de la edificación o que afecten el desarrollo de las actividades propias, de manera que garanticen la institucionalidad local (...)

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la preservación del orden público son prioridades nacionales y es deber del Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades territoriales, velar porque los recursos del FONSECON y los FONSETT se asignen de manera adecuada, y contribuyan de manera efectiva al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y a la recuperación del orden público.

Para el cumplimiento del objetivo institucional de apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana, es esencial el apoyo a las entidades territoriales, Policía Nacional y Fuerzas Militares de Colombia, mediante la financiación y/o cofinanciación con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON, para proyectos de infraestructura, tecnología y movilidad, los cuales permitan el fortalecimiento en materia de convivencia, gobernabilidad y seguridad.

El Ministerio del Interior al ser parte activa de un Gobierno Nacional tiene por mandato aplicar las políticas públicas establecidas, en este caso las definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, específicamente en el capítulo relacionado con la Seguridad Humana y la Justicia Social, en donde se evidencia el escaso acceso a los deportes y a la actividad física, lo que representa inequidades poblacionales y territoriales,

excluyendo a poblaciones de territorios más alejados de la oferta institucional. Solamente el 10,7% de esta población accede a prácticas o escuelas deportivas (fútbol, gimnasia, natación, tenis, atletismo, etc.); de igual forma, la brecha de género se evidencia en la asistencia a estos cursos en donde la asistencia de niñas y mujeres es 6,7%, mientras que el porcentaje de niños y hombres es del 14,3%, generando estereotipos y roles de género desde temprana edad (Min Deporte & Mujeres, 2022), de igual manera estos espacios de convivencia contribuyen con la protección de la vida y asegura el control institucional de los territorios para la construcción de una sociedad sin violencias.

Igualmente, es importante precisar, que con la cofinanciación de estos proyectos se le apunta directamente al plan de gobierno, como “Infraestructura como medio para la atención de las necesidades colectivas”: El Gobierno nacional promoverá a través del despliegue de infraestructura con participación privada y la prestación de sus servicios asociados, la protección y realización de los derechos de los ciudadanos con enfoque de género, interseccional, territorial, con inclusión social de todas las personas, como medio habilitante para orientar el accionar del Estado.

Por una vida libre de violencias y la construcción de la convivencia para la paz, se hacen estos proyectos, que son espacios que permiten desarrollar la estrategia de un plan integral para prevenir y atender integralmente las violencias interpersonales (intrafamiliar, de pareja y comunitaria), autoinfligidas (suicidios), por razones de sexo y basadas en género, entre otras violencias, generando la transformación de imaginarios culturales y sociales asociados a la violencia y discriminación en todos los entornos de desarrollo como apuesta para la construcción de convivencia y paz. Por otra parte, en estos espacios se realizarán acciones intersectoriales orientadas a la construcción de la convivencia social y reducción de la discriminación en poblaciones en vulnerabilidad.

Finalmente, con la cofinanciación de los proyectos para la gobernabilidad y la seguridad se busca la protección de la vida y el control institucional de los territorios para la construcción de una sociedad segura y sin violencias desde la prevención y garantías para el ejercicio de los derechos y libertades. Lo anterior, implica que el país reorientará el abordaje del problema de las drogas ilícitas, dismantlará el multicitines haciendo especial énfasis en los nodos estratégicos del sistema criminal, transitará hacia un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana bajo el principio de corresponsabilidad, consolidará la defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y el orden constitucional, y transformará el sector defensa para aumentar su legitimidad y bienestar.

El Ministerio del Interior a través del FONSECON en su tarea de promoción, divulgación y prevención, en temas relacionados con la Convivencia y Cultura Ciudadana, incluyó dentro de su oferta institucional el Proyecto de Infraestructura PARA LA CONVIVENCIA que le apunta al desarrollo y la innovación, con los cuales se pretende brindar herramientas pedagógicas y lúdicas a los jóvenes y a la comunidad en general para que puedan implementar y desarrollar estrategias a fin de contrarrestar comportamientos ciudadanos que trasgreden las normas de convivencia ciudadana en todo el territorio nacional, así como fortalecer la cultura ciudadana. También es importante mencionar que debido a la falta del escenario que permita llevar a cabo encuentros deportivos en los municipios, perdiendo la oportunidad de contribuir con el crecimiento y desarrollo de la economía local e incurriendo en gastos de transporte y tiempo en cada desplazamiento a otros municipios.

Los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos deben entrenar en zonas verdes que no son aptas para la práctica de las actividades deportivas que ofrecen los proyectos sacúdete al parque

y el proyecto de infraestructura para la convivencia “Paz a lo Bien”, aumentando el riesgo de generar algún tipo de lesión física.

Además, la oferta institucional actual de infraestructura física destinada a estos fines mencionados no ofrece los bienes y espacios requeridos para la realización de las diversas necesidades recreativas, deportivas y culturales de los habitantes, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en relación a la cultura, convivencia, deporte, cultura y por ende que contribuyan con la reactivación económica de los municipios.

Así mismo, a partir de la construcción de estos espacios, se busca fomentar el emprendimiento, dado que estos espacios propuestos fortalecerán el desarrollo de programas para la integración y fortalecimiento de las comunidades a través de estrategias para desarrollar, fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes y la sociedad en su conjunto, promoviendo proyectos de emprendimiento que faciliten la inserción al mercado productivo de esta población y con ello promover el mejoramiento del desarrollo social y la convivencia ciudadana.

Con estos recursos se busca financiar a las entidades con la oferta del FONSECON, así:

a). PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA “Paz a lo Bien”:

Este proyecto se encuentra dirigido a la sana convivencia, el cual fue diseñado por el grupo de Viabilidad de la Subdirección de proyectos y aprobado por el COMITÉ FONSECON No. 02 de 2023, son espacios multifuncionales de convivencia e interacción social, donde las comunidades encuentran la oportunidad de fortalecer su relación con los demás miembros de su comunidad, a través de lo que pasa en dichos espacios, algunas de las actividades que se pueden desarrollar en estos espacios son, entre otras:

- Práctica y presentación de la cultura y el folclor del lugar (Danza, teatro, música, entre otros).
- Reuniones entre los diferentes grupos de la comunidad.
- Comercialización de bienes y servicios propios de la comunidad (Ej. Mercados campesinos).
- Espacios de trabajo comunitario para la fabricación de productos. (Artesanos, productos tejidos, productos alimenticios, entre otros).
- Educación y capacitación en saberes autóctonos y ancestrales de las comunidades.
- Centros de interpretación comunitario.

En estas infraestructuras se desarrollan diferentes tipos de actividades en cada uno de los elementos que la conforman estas funcionan en algunos casos de manera independiente y en otras se complementan entre sí:

Actividades que se pueden desarrollar:

- Actividades lúdicas y formación de niños y jóvenes.
- Encuentros comunitarios.
- Comercio y ferias.
- Comunidades autóctonas.
- Muestras culturales.
- Ferias de cine y arte.

- Fiestas municipales.
- Culto y oración.
- Expresión artística.
- Eventos para la infancia y adolescencia.
- Jornadas de salud.
- Mercado campesino.
- Juegos tradicionales.
- Elecciones.
- Actividades deportivas.

b). PROYECTO DE SEGURIDAD – ESTACIONES DE POLICIA:

Este proyecto forma parte de la línea denominada infraestructura para la seguridad, de acuerdo con las estrategias definidas por el mando institucional de la Policía Nacional, en el debido cumplimiento de la política integral de seguridad y defensa para prosperidad definida por el gobierno Nacional, y con el objetivo de aumentar el pie de fuerza policial, se identifica la necesidad de construir nuevas Estaciones de Policía que garanticen espacios idóneos y suficientes, como solución definitiva en aquellas poblaciones donde la estación funciona provisionalmente en condiciones deficientes, indignas e inseguras para el personal policial.

Estos proyectos se orientan al mejoramiento del servicio policial en los Municipios, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La ubicación estratégica de la estación de policía, que contribuya a lograr una mayor acción preventiva y a controlar más eficientemente a los grupos delincuenciales.
- Prestar un mayor nivel de atención a la comunidad y a los turistas de los diferentes Municipios, y se obtendrá un mejor manejo de la seguridad, logrando igualmente mayores niveles de confianza hacia la institución.
- Se fortalecerán a los organismos de la policía con la infraestructura necesaria, la cual incluirá nuevas tecnologías para contrarrestar la delincuencia y prestar un servicio óptimo de seguridad ciudadana. Igualmente se logrará un acercamiento de la población con las nuevas tecnologías implementadas.
- Estos proyectos constituirán un factor determinante en el crecimiento económico, industrial y comercial de los Municipios, reflejando en un mejor nivel de vida de la población del municipio.
- El aumento del pie de fuerza en los municipios traerá beneficios en términos de cobertura policial y movilidad.
- Se tendrá un mejor control de las responsabilidades de cada una de las dependencias que funcionarían en estos nuevos bloques por parte de cada uno de los funcionarios encargados de cada área.
- Se logrará una distribución estratégica de la cobertura policial, disminuyendo los delitos de mayor afectación, tales como homicidios.

Se contempla la construcción de edificaciones que tengan espacios funcionales y lineamientos institucionales establecidos por la Policía Nacional para la prestación del servicio de forma eficiente y eficaz.

Este tipo de proyectos está compuesto por Zona o área administrativa, Zona o área restringida, Zona o área social, Zona o área de alojamientos y Zona o área de servicios generales.

c). PROYECTO DE GOBERNABILIDAD – CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM):

Estos proyectos apoyan la gobernabilidad y la convivencia ciudadana en los municipios, con instalaciones que cumplan con los requisitos mínimos para prestar servicios de atención al público, para el personal de atención preferencial (adulto mayor, personal con discapacidad, mujeres embarazadas, etc.), por lo cual es necesario contar con instalaciones que cumplan con los requisitos mínimos de fácil acceso y seguridad; de acuerdo a lo anteriormente expuesto, es necesario eliminar el riesgo generado por fallas estructurales construyendo estructuras que cumplan con los requisitos de seguridad de acuerdo con la norma sismorresistente.

Así mismo, la ejecución de este tipo de proyecto tiene justificación en la necesidad del fortalecimiento de la gobernabilidad de las autoridades territoriales y la consolidación de la presencia institucional en una zona donde la problemática es la escases, cumpliendo con la responsabilidad constitucional de preservar el mantenimiento del orden público, la estabilidad y la convivencia ciudadana, dentro del marco del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en coordinación con los organismos de seguridad a nivel nacional, de ahí parte la necesidad urgente de que las Alcaldías de los Municipios, cuenten con una adecuada infraestructura administrativa, como parte del compromiso del Gobierno Nacional de reforzar y consolidar la gobernabilidad en las regiones del País.

Se proyecta construir edificios con el fin de mejorar la infraestructura, reuniendo las dependencias administrativas en un solo conjunto, brindando una mejor eficiencia para el desarrollo de las actividades laborales y atención al ciudadano mediante el acceso a las instalaciones teniendo en cuenta las limitaciones, dando un enfoque de accesibilidad al proyecto y un enfoque moderno visualizando su armonía con el entorno.

Estas nuevas edificaciones se construirán con el fin de mejorar la infraestructura, reuniendo las dependencias administrativas en un solo conjunto, brindando una mejor eficiencia para el desarrollo de las actividades laborales y atención al ciudadano mediante el acceso a las instalaciones teniendo en cuenta las limitaciones, dando un enfoque de accesibilidad al proyecto y un enfoque moderno visualizando su armonía con el entorno, generando para las entidades un desarrollo económico, físico y social.

En su mayoría estos proyectos vienen diseñados en dos pisos, donde la administración cuente con sus oficinas y dotaciones apropiadas para la atención al público en general, la edificación debe permitir el acceso a personas aún con movilidad reducida por lo que además de escaleras se construirán rampas para la comunicación entre el primer y segundo piso. Las nuevas tecnologías exigen mejorar las edificaciones tanto para que los funcionarios se sientan cómodos y tengan mejor calidad en el servicio, como que la población del municipio, así como los viajeros cuenten con una confortable instalación, donde sea fácil el acceso y se sientan alegres de llegar allí, igualmente cuentan con zonas duras de acceso y una zona de parqueadero, oficinas para la Gestora Social, Secretaría de Salud, Predial, Sisben, Batería de Baños, Comisaria de familia, Saneamiento Ambiental, Deporte, Sala de crisis, Enlace de las TIC, Familias en Acción, Secretaría de Cultura, Víctimas, Inspección Central, Atención a la comunidad, Humana y Cafetería, oficina del alcalde, Asesores, Secretaría de Gobierno, Servicios Públicos, Secretaría General, Tesorero, Archivo General, Banco de proyectos, Control interno, Presupuesto, Auxiliares Servicios generales, Archivo Planeación, Talento Humano, Asesor Planeación, Secretaría Planeación, Sala de espera y Batería de Baños.

d). PROYECTO DE SEGURIDAD – MOVILIDAD:

Este proyecto está encaminado a la reposición de los medios logísticos a cargo de la Policía Nacional y Fuerza Pública, que le permitan a la Institución, mejorar su capacidad de respuesta y generar una atención asertiva a las problemáticas de la sociedad colombiana, a través de un servicio más cercano a la comunidad en entornos urbanos y rurales, fortaleciendo la Convivencia y Seguridad Ciudadana, corresponsable y participativa, dentro del marco de ejecución de la estrategia “Seguridad humana y justicia social”, igualmente, se busca fortalecer a la Policía y Fuerza Pública En atención al Plan Nacional de Desarrollo (PND), guía que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de gobierno, siendo el instrumento formal y legal, por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno, se busca priorizar la adquisición de equipo automotor tipo motocicletas uniformada y no uniformada, camionetas, camiones, bicicletas y demás automotores, por reposición, que le permita a las Instituciones, mejorar la movilidad estratégica orientada al servicio en todas sus modalidades con cubrimiento específico en entornos urbanos y rurales de alta, media y baja complejidad en materia de orden público y de accesibilidad.

5). PROYECTO DE SEGURIDAD – CAMARAS:

Con estos proyectos se busca implementar el sistema integrado de emergencia y seguridad con el fin de incrementar la percepción de seguridad en los municipios, mediante la puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia que contribuyan a la prevención, reacción y atención de hechos en materia de seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios, emergencias, desastres y eventos masivos en el territorio para la correcta toma de decisiones por parte de los responsables del tratamiento de la seguridad y la convivencia.

Igualmente, disminuir las estadísticas de criminalidad en el territorio nacional, a través del fortalecimiento de la plataforma de atención de emergencias SIES CCTV/123, permitiendo la integración de video vigilancia, comunicaciones y cartografía, en una única herramienta que permita mejorar la atención de las emergencias y así mismo mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Fortalecer las capacidades operacionales de la policía en el territorio, para efectos de mejorar la respuesta institucional, ante el flagelo de la delincuencia, mediante la guía de un sistema de cuadrantes ante la ocurrencia de un hecho delictivo que sea observado por las cámaras, garantizando con esto la presencia oportuna de la Policía Nacional, logrando con esto promover el cumplimiento de las normas, fomentar espacios seguros y confiables entre sus pobladores, generar un ambiente de confianza entre la institucionalidad y los pobladores del municipio.

Objetivos específicos

- ✓ Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la reincidencia de los victimarios, y dificultar la comisión de delitos, en especial de alto impacto.
- ✓ Mejorar la prevención y respuesta de la Policía Nacional, así como su capacidad disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación de redes criminales.
- ✓ Incrementar la judicialización y la condena de los responsables de delito, la orientación y atención a víctimas de delitos graves, y las resocializaciones viables.
- ✓ Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la ley que favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las diferencias y los conflictos.
- ✓ Concienciar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo dentro de la comunidad.

- ✓ Lograr decisiones de política pública a partir de un mejor sistema nacional de información del delito, el estudio y evaluación de las políticas sobre el tema.
- ✓ Facilitar la labor de las autoridades en las luchas contra el delito por medio de la adecuación del régimen penal y las disposiciones sobre convivencia ciudadana.

Con este tipo de proyecto se potenciará los sistemas de seguridad en tres campos, Infraestructura e instalaciones, software y hardware, esto permitirá generar prevención creando zonas seguras y brindará mayor rapidez y eficiencia en la prevención y atención policial, como consecuencia se incrementará la atención oportuna y efectiva. Además, se dispondrá de una infraestructura tecnológica que permita la identificación y judicialización de hechos delictivos por medio virtual, el cual lo permite la video vigilancia y atendiendo oportunamente los casos de emergencia de la ciudad.

Adicionalmente, se contara con unas adecuadas instalaciones y componentes tecnológicos de estos sistemas, que sumado al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes Permite la atención a todos los eventos de emergencias policiales y de desastres de manera coordinada; la ampliación y fortalecimiento del sistema en mención, permitirá mejorar la capacidad operativa y evaluar el impacto del mismo en factores como la reducción de las tasas de criminalidad, la efectividad de la atención, identificación de la demanda y mejoramiento de la seguridad y por ende el bienestar social.

Otros beneficios que se buscan con estos proyectos son los siguientes:

- ✓ Preservar la tranquilidad, convivencia y seguridad ciudadana.
- ✓ Reactivar la inversión de capital en la industria a través del mejoramiento de la seguridad en la ciudad.
- ✓ Incrementar la presencia policial con mejores medios logísticos y operativos.
- ✓ Dotar de instalaciones y puestos de trabajo a los operadores de estos componentes.
- ✓ Disminuir los altos índices delincuenciales.
- ✓ Incrementar los resultados policiales en el área urbana.
- ✓ Reducir la tasa de homicidios.
- ✓ Monitorear las zonas críticas de la ciudad en todas las manifestaciones criminales.
- ✓ Mejorar la capacidad operativa y de reacción para el control y reducción del delito.
- ✓ Incrementar la judicialización de los delitos

En los últimos años se ha incrementado el número de atracos en las calles, negocios y robos en viviendas, impidiendo que los barrios sean espacios de tranquilidad y convivencia, mostrando así incremento en la inseguridad y disminución de los ingresos económicos entre los comerciantes que a diario observan como las calles se van convirtiendo en focos de delincuencia, ilegalidad, drogas y caos, debido a que la autoridad policial no cuenta con un sistema robusto y eficiente, que permita a la autoridad policial actuar en tiempo real y de manera eficiente atender casos delictivos y realizar actividades preventivas.

ACTIVIDADES:

Los objetivos misionales del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON son:

- Canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a

fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la Política y la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

- Fortalecer la capacidad de la infraestructura física y tecnológica de la Policía (Estaciones de Policía, Cámaras de Seguridad y Líneas 123), y las Fuerzas Armadas de Colombia, para mejorar su despliegue funcional en los centros urbanos y sus áreas de influencia.

De acuerdo con lo establecido por el Comité Evaluador de FONSECON, se presentan los siguientes tipos de proyectos que serán financiados:

Proyectos o programas tendientes a preservar el orden público

- a. Proyectos de reconstrucción de sedes administrativas de autoridades públicas territoriales: o nacionales afectadas por actos terroristas.
- b. Proyectos o programas a través de los cuales se pretenda apoyar fuerza pública, mediante el diseño, la construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o manteniendo y/o reconstrucción de infraestructura.
- c. Proyectos o programas con los cuales se apoye a la fuerza pública a través del suministro de vehículos, lanchas y/o botes para la seguridad marítima o fluvial y equipos que permitan cumplir las tareas en materia de prevención y conservación de orden público, reacción contra la delincuencia y la disminución de los índices de criminalidad.
- d. Proyectos o programas de diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de información y vigilancia; que apoyen actividades de inteligencia que faciliten el cumplimiento de las tareas en materia de prevención y conservación de orden público y reacción contra la delincuencia, que permitan la disminución de los índices de criminalidad.
- e. Demás actividades autorizadas por la ley.

Proyectos o programas que propician la seguridad y convivencia ciudadana

- a. Proyectos o programas para la prevención del delito, que contribuyan a la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la neutralización, control y reducción de los riesgos sociales e inminentes que afecten la seguridad y la convivencia y los comportamientos contrarios a la convivencia, desde un enfoque social y situacional.
- b. Programas, proyectos, capacitaciones, seminarios y cualquier actividad pedagógica, relacionados con temas de seguridad y convivencia, proyectos que promuevan la convivencia ciudadana con enfoque étnico y diferencial, proyectos que propicien la cultura de la legalidad encaminados a incentivar el respeto a los demás, el cumplimiento de los deberes ciudadanos, la transformación pacífica de los conflictos basados en la apropiación de normas de conducta elementales aceptadas en la sociedad en el marco del Estado Social de Derecho, las instituciones y los principios democráticos, de acuerdo con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- c. Generación de obras de infraestructura para la convivencia ciudadana que contemplen la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación, y/o adecuación y/o dotación, y/o mantenimiento y/o ampliación, que faciliten la integración social, con espacios para la salud, cultura, capacitación, deporte, tecnología y emprendimiento, a través de espacios tendientes al desarrollo de la convivencia ciudadana, con enfoque étnico y diferencial.
- d. Proyectos o programas tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, que resuelven problemas de inexistencia de las sedes administrativas de las entidades territoriales, instalaciones inadecuadas o en peligro inminente por el mal estado

- de la edificación o que afecten el desarrollo de las actividades propias, de manera que garanticen la institucionalidad local.
- e. Demás actividades autorizadas por la ley.

De acuerdo con lo anterior, a través de FONSECON se ha programado para la vigencia 2025 la realización de las siguientes actividades:

Estudio, diseño y construcción Proyectos de Infraestructura que apoyen la seguridad, gobernabilidad y la convivencia ciudadana.

ACTIVIDAD	TIPO DE PROYECTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desarrollar proyectos de infraestructura para la convivencia ciudadana	Infraestructura para la convivencia – Paz a lo Bien	70	\$3.000.000.000	\$210.000.000.000
Desarrollar proyectos de infraestructura que apoyen la gobernabilidad.	Centro Administrativo Municipal	22	\$5.100.000.000	\$112.200.000.000
Desarrollar proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad.	Estación Policía	20	\$8.500.000.000	\$170.000.000.000
Desarrollar proyectos de movilidad que apoyen la seguridad.	Movilidad		\$0	\$ 37.722.568.155
Desarrollar proyectos de movilidad que apoyen la seguridad.	Cámaras	10	\$ 5.800.000.000	\$58.000.000.000
Realizar seguimiento a los proyectos FONSECON	NA		\$ 18.476.986.644	\$ 18.476.986.644
Mantener el Seguro contra accidentes que ampara a los Miembros Voluntarios de los Organismos de Socorro (*)	NA	1	\$9.500.000.000	\$9.500.000.000
VALOR TOTAL				\$ 615.899.554.799

(*) Seguro contra accidentes que ampara a los Miembros Voluntarios de los Organismos de Socorro

Es de aclarar que los valores unitarios en cada tipología de proyecto, es aproximado; toda vez que el valor final de cada uno depende de factores como zona geográfica, rutas de acceso, tipología del terreno donde será construido el proyecto, mano de obra, valores de los materiales de construcción.

Considerando el Artículo 4, numeral 4.4 de la Resolución 1898 del 25 de noviembre de 2019, el FONSECON contratará anualmente un seguro contra accidentes que ampare a los miembros voluntarios de los organismos de socorro que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Este seguro se cubre con recursos de FONSECON, de acuerdo a lo que prevé el artículo 39 de la Ley 782 de 2002 y lo establecido en la Resolución 1803 de 2022, en el cual se estableció que los recursos para la contratación del seguro voluntario serán aportados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON-, creado por la Ley 418 de 1997, y administrados por el Fondo Nacional de Calamidades, creado a través del Decreto 1547 de 1984,

hoy FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD, para amparar a 90.000 voluntarios de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres—CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y BOMBEROS DE COLOMBIA.

Gastos operativos y apoyo profesional

Considerando el Artículo 4, numeral 4.3 de la Resolución 1803 del 18 de noviembre de 2022, en el cual se manifiesta que FONSECON podrá destinar recursos para gastos operativos, logísticos y de administración (los cuales no deben superar el 3.0% del Plan Anual de Inversiones), y que estén directamente relacionados, para la evaluación, aprobación y seguimiento de los programas y proyectos, el Ministerio del Interior programó estos recursos para los fines antes mencionados.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se requiere el personal profesional y los gastos de traslado que, para el seguimiento a la ejecución de los convenios, con el fin de cumplir los cronogramas establecidos por las entidades territoriales.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR		NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Desarrollar proyectos de infraestructura para la convivencia ciudadana	Fortalecimiento de las entidades territoriales con obras nuevas de infraestructura y movilidad para la convivencia ciudadana	\$144.000.000.000	100%	\$210.000.000.000	100%
Desarrollar proyectos de infraestructura que apoyen la gobernabilidad	Fortalecimiento de las entidades territoriales con obras nuevas de infraestructura y movilidad	\$ 49.200.000.000	100%	\$112.200.000.000	100%
Desarrollar proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad	Fortalecimiento de las entidades territoriales con obras nuevas de infraestructura y movilidad	\$ 153.000.000.000	100%	\$170.000.000.000	100%
Desarrollar proyectos de movilidad que apoyen la seguridad.	Fortalecimiento de las entidades territoriales con obras nuevas de infraestructura y movilidad	\$ 31.600.000.000	100%	\$ 37.722.568.155	100%
Desarrollar proyectos de Cámaras que apoyen la seguridad.	Fortalecimiento de las entidades territoriales con obras nuevas de	\$ 0	0%	\$ 58.000.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR		NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
	infraestructura y movilidad				
Realizar seguimiento a los proyectos FONSECON	Ejecución de los recursos destinados para gastos operativos, logísticos y de administración	\$ 12.000.000.000	100%	\$ 18.476.986.644	100%
Mantener el Seguro contra accidentes que ampara a los Miembros Voluntarios de los Organismos de Socorro	Adquirir el seguro contra accidentes que ampara a los Miembros Voluntarios de los Organismos de Socorro. Póliza	\$ 10.200.000.000	1	\$ 9.500.000.000	1
TOTAL		\$400.000.000.000		\$615.899.554.799	

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por las diferentes entidades territoriales durante los últimos cinco (5) años y los proyectos radicados a través de la plataforma Sistema de Información de Proyectos de Infraestructura (SIPI), y de igual manera las necesidades en materia de seguridad presentadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia, se realizó la proyección de los recursos para la vigencia 2025.

A continuación, se relaciona el promedio de proyectos (por tipo de proyecto) radicados por las entidades del nivel territorial y nacional durante los últimos cinco (5) años, así:

TIPO DE PROYECTO	PROYECTOS RADICADOS	APORTES DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES	VALOR SOLICITADO A FONSECON
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEGURIDAD	64	\$ 622.337.664.733	\$ 550.915.349.767
MOVILIDAD	36	\$ 132.485.503.619	\$ 119.458.237.333
SACUDETE AL PARQUE	290	\$ 1.837.071.908.972	\$ 2.532.187.505.154
SEDES ADMINISTRATIVAS	47	\$ 324.477.358.097	\$ 272.581.544.231
SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES	39	\$ 324.631.894.770	\$ 295.709.257.984
TOTALES	476	\$ 3.241.004.330.191	\$ 3.770.851.894.469

Finalmente, se tuvo en cuenta la proyección de recaudo del FONSECON que realiza la Subdirección Administrativa y Financiera para vigencia 2025, la cual después de realizar el

proceso de regresión lineal, para hallar el pronóstico de ingreso de la contribución del FONSECON, el resultado es el siguiente:

INGRESO 2025: \$ 687.026.702.526,96

Margen de error:

-	MARGEN DE ERROR 5%	+
\$ 652.675.367.400,61	\$34.351.335.126,35	\$ 721.378.037.653,31

3.1.1.3.3 FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. LEY 985 DE 2005 Y DECRETO 4319 DE 2006. (\$158.268.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-01-033	\$ 145.200.000	\$ 158.268.000	\$ 13.068.000	9,0%
TOTAL	\$ 145.200.000	\$ 158.268.000	\$ 13.068.000	9,0%

BASE LEGAL

Ley 985 de 2005, “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”. Dando cumplimiento a la Ley 985 de 2005 en el Art 20 establece que: “El Ministerio del Interior y de Justicia queda autorizado para administrar por medio de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas una cuenta especial, sin personería jurídica, como un sistema de cuenta que canalizará recursos para la lucha contra la trata de personas, los cuales se ejecutarán según los lineamientos y programas que se definen en la Estrategia Nacional”.

"Decreto 4319 de 2006, “Por el cual se establece la organización y el funcionamiento de la cuenta especial creada para la Lucha Contra la Trata de Personas”.

En el Art. 1 se establece que: El “Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas” es una cuenta especial sin personería jurídica a cargo del Ministerio del Interior.

En el Decreto 4319 de 2006, Art. 3 se establecen las funciones específicas asignadas al Ministerio del Interior: “Administración del fondo nacional para la lucha contra la trata de personas: La dirección, administración y ordenación del gasto del Fondo estará a cargo de la secretaria técnica del comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, quien deberá atender los lineamientos y programas que definan que se definan para la correspondiente vigencia. Parágrafo: La Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional está a cargo del Ministerio del

Interior, quien podrá delegarla en un empleado público de nivel directivo o en la dependencia que para el efecto aquel designe.”

”Y en el Artículo 4 se plantean las funciones administrativas de dicho Fondo: “Funciones de Dirección, Administración y ordenación del gasto del fondo Nacional para la lucha contra la trata de personas: 1. Realizar las operaciones y las actividades administrativas, financieras y contables del fondo, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. 2. Velar para que ingresen efectivamente al Fondo los recursos provenientes de las distintas fuentes de financiación. 3. Ejecutar los recursos del Fondo, atendiendo las directrices que le señale el comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas acorde con la estrategia Nacional. 4. Velar por la adecuada y cumplida ejecución de los recursos del Fondo que hayan sido destinados a la financiación o cofinanciación de proyectos o programas. 5. Elaborar la proyección de ingresos y gastos y los indicadores de gestión. 6. Rendir informes que requieran los organismos de control y otras autoridades del Estado. 7. Las demás inherentes a la administración y ordenación del gasto del Fondo”.

Que de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 985 de 2005, es necesario desarrollar y reglamentar los programas de asistencia y protección de la política pública contra la trata de personas, en consideración a que la asistencia a las víctimas de la trata de personas es uno de los ejes que integran la política nacional e internacional de lucha anti trata de personas, dando lugar de esta manera al decreto 1069 de 2014 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 985 de 2005". Cuyo objeto es reglamentar las competencias, beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades responsables en la adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del delito de la trata de personas.

Así mismo se establece en el Decreto 2893 de 2011, en el Capítulo III Fondos como Sistema de Manejo Especial de Cuentas, Artículo 27. Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. El Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, creado mediante la Ley 985 de 2005, continuará funcionando como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es atender gastos tendientes a propiciar la prevención, protección y asistencia de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, el fortalecimiento de la investigación judicial y la acción policiva y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La implementación de la Estrategia Nacional tiene varios frentes, uno de los cuales es la protección y asistencia para las víctimas de trata de personas, puntualmente en lo que atañe a la coordinación y articulación de las entidades del orden nacional y territorial en cuanto a la prestación de servicios, y específicamente en el traslado de las víctimas, servicio que se presta con cargo al Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas.

Los recursos del Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas son invertidos en la implementación de la Ley 985 de 2005 principalmente en los programas de protección y asistencia a las víctimas de trata y la estrategia nacional para la lucha contra la Trata de Personas.

Y también conforme lo que establece el Decreto 1066 de 2015, en su artículo 2.2.2.2.13. “Servicio de transporte. El Ministerio del Interior, con cargo al Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas de que trata la Ley 985 de 2005 y los artículos 2.7.1.3.1 al 2.7.1.3.6 o la norma que

los modifique, derogue o sustituya, o al rubro establecido para el efecto, destinará recursos para la prestación del servicio de transporte a las víctimas de la trata de personas, ya sea directamente o mediante contrato o convenio, a fin de brindar este servicio en los traslados que deban realizar para efectos del desarrollo del programa de asistencia inmediata y/o mediata. (Decreto 1069 de 2014, artículo 13)".

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de las acciones realizadas, se hace necesario continuar con la financiación a través de los recursos asignados para el programa misional de funcionamiento con los cuales se promoverá la realización de actividades tendientes a la implementación de la política pública en materia de trata de personas en la vigencia 2025 en el territorio nacional.

El valor definido como costo proyectado corresponde al valor requerido históricamente para el cumplimiento de esas las obligaciones misionales de la Subdirección.

Se considera un incremento porcentual del 9% respecto del valor destinado para la vigencia 2024, esto considerando que la variación del índice de precios al consumidor IPC del año 2023, equivalente a la inflación del año 2022, cerró en 9.28 %, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, y según la variación anual reportada por el DANE para el mes de febrero de la presenta anualidad se espera que para el año 2024 se tenga una inflación cercana a la del año 2023.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Brindar asistencia inmediata a las víctimas del delito de trata de personas.	\$ 145.200.000	100%	\$ 158.268.000	100%
Total	\$ 145.200.000		\$ 158.268.000	

3.1.1.3.4 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL. (\$16.232.825.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-01-035	\$ 14.892.500.000	\$ 16.232.825.000	\$ 1.340.325.000	9%
TOTAL	\$ 14.892.500.000	\$ 16.232.825.000	\$ 1.340.325.000	9%

BASE LEGAL

La Constitución Política de 1991, recoge un sentimiento descentralizador sentando las bases para profundizar en un proceso que ya se venía gestando en el país, en este sentido el artículo 1 de la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, participativa, pluralista. El fortalecimiento del proceso de descentralización en Colombia, ha requerido el desarrollo de marcos institucionales, que permiten el fortalecimiento de la gestión territorial, reconociendo la diversidad regional y promoviendo un mejoramiento generalizado de las condiciones socioeconómicas de las entidades territoriales.

El Ministerio del Interior, a través de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra la Trata da inicio al cumplimiento del proyecto teniendo como línea las bases de el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA y que según lo establecido en la Sección II EL AGUA Y LAS PERSONAS, EN EL CENTRO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en donde se especifica que el ordenamiento del territorio parte de fortalecer la gobernanza y la participación para construir visiones comunes y visibilizar cuales son las intervenciones más estratégicas en los territorios, y con ello, ayudar a ordenar la compleja institucionalidad y simplificar los instrumentos que la acompañan, de manera que las decisiones que se tomen tengan implicaciones en el mediano y largo plazo en la sostenibilidad, en la productividad y en la calidad de vida de la población y la paz total se logrará cuando la justicia ambiental sea verdaderamente un hecho en todo el territorio nacional.

A raíz de la expedición de la Ley 1454 de 2011, "por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones de ordenamiento Territorial" es el parámetro legal para afianzar la descentralización como un modelo de gobierno local que facilite el cumplimiento de los fines del Estado. Se trata de una normativa que propicia la integración territorial para generar mayor competitividad e inversión estratégica de los recursos público en el nivel más próximo al ciudadano, promueve la participación ciudadana y defiende la unidad nacional, a la vez que mantiene la integralidad y autonomía territorial, facilitando el crecimiento socioeconómico equitativo en lo local.

El fortalecimiento a la gestión territorial, la profundización de la descentralización y ordenamiento territorial se consolidan como uno de los ejes de mayor desarrollo en la gestión del Ministerio del Interior, lo cual ha permitido un sustancial empoderamiento de las entidades territoriales para hacer del buen gobierno un modelo de gestión de impacto directo al ciudadano. Es por ello que el Ministerio del Interior es el ministerio de las regiones, un rol que se sustenta en la confianza mutua entre las regiones y el poder central, pero más aún entre los mandatarios y la ciudadanía.

De esta manera, se viene trabajando en la formulación, articulación y ejecución de políticas en materia territorial, las que promueven el fortalecimiento de departamentos, municipios y resguardos indígenas, el aumento de sus capacidades y márgenes de gobernabilidad, la seguridad y convivencia ciudadana, y, entre otros, el apoyo a la coordinación territorial en materia de política de víctimas del conflicto armado y lucha contra la trata de personas.

El Decreto 1152 de 2022, en su Artículo 18, asigna a la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial, entre otras funciones: la asesoría en la formulación de políticas públicas en temas territoriales, ordenamiento territorial, desarrollo institucional y gestión pública territorial, la promoción de la asociatividad territorial para el ejercicio de competencias y la planificación regional, la promoción y seguimiento a los procesos de descentralización territorial en

coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial, así como la de asistir técnicamente a las corporaciones y los líderes locales.

Por consiguiente, la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra La Trata a través del Programa Misional de Funcionamiento “Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local”, continuará con el fortalecimiento de la gestión territorial, mediante el desarrollo y continuidad de actividades tendientes a lograr la integración territorial, la planificación regional, el fortalecimiento de competencias, la consolidación de la descentralización política y el desarrollo endógeno territorial y social; de conformidad con Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El proceso de descentralización que ha liderado el Gobierno Nacional en los últimos cuatro años ha tenido grandes avances, en cuanto a la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios. La Ley tiene por objeto establecer los principios rectores del ordenamiento, definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial, definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las Áreas Metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial.

Con la expedición de esta Ley y la Ley 1962 de 2019 “Ley de Regiones”, se han fortalecido las competencias otorgadas a las entidades territoriales; de tal manera que se reglamentó el Régimen Municipal- Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”; el Régimen de Áreas metropolitanas - Ley 1625 de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas” y el Régimen Especial de Distritos- Ley 1617 de 2013 “Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.”, entre otra normatividad.

El Decreto 2893 de 2011, “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”; suministra facultades al Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial de promover el desarrollo endógeno territorial y social de las entidades territoriales que conduzca al fortalecimiento de los principios estructurales de la descentralización política y administrativa y al afianzamiento de la gobernabilidad.

Por consiguiente, la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial, a través del programa misional de funcionamiento “Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local”, busca generar estrategias que le permitan a la entidad dar cumplimiento a las obligaciones misionales consagradas en el Artículo 18 del Decreto 2893 de 2011 y de esta manera, impulsar el fortalecimiento de las administraciones territoriales para la formulación de políticas y actividades que promuevan la profundización de la descentralización, el desarrollo de experiencias piloto en mejor gestión y gobierno local; la convivencia y seguridad ciudadana y la coordinación de acciones tendientes a la descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas. Acciones que ameritan un fuerte acompañamiento y asistencia técnica a las diferentes entidades territoriales (Departamentos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Distritos, esquemas asociativos territoriales).

Igualmente, en cumplimiento de su objetivo estratégico, el cual está orientado a fortalecer la Gobernabilidad y afianzar la relación Nación - Territorio, con el propósito central de fortalecer la gestión y el buen gobierno local, ha diseñado para 2024, una agenda acorde con el plan de acción de la entidad, la cual desarrollará a través del acompañamiento y asesoría técnica y jurídica a las entidades territoriales y corporaciones públicas sobre ejes temáticos centrales en el marco de la descentralización y Ordenamiento territorial.

Es preciso indicar que acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1152 de 2022, artículo 18, relacionado inicialmente y del cual asigna las funciones a la dependencia, en materia de Descentralización política administrativa, así como la elaboración, implementación y seguimiento del marco normativo del régimen departamental, régimen municipal, régimen de distritos y de áreas metropolitanas, y el fortalecimiento a las entidades territoriales y corporaciones públicas, brindándoles asistencias técnicas, asesorías y acompañamiento con el propósito de incrementar las capacidades institucionales como herramienta para la buena gestión territorial, en el territorio. Así las cosas, para continuar con dicha implementación de acciones para fortalecer y articular los procesos con los territorios, a través de la ejecución de las siguientes actividades la vigencia 2024:

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES TERRITORIALES

- Asistencias Técnicas, asesorías jurídicas y acompañamiento
- Participación en la cumbre de Gobernadores.
- Participación en la cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales

ARTICULACIÓN CORPORACIONES PÚBLICAS

- Concejos Municipales y Distritales
- Asambleas departamentales
- Juntas Administradoras Locales JAL
- Gran Encuentro Nacional: Conmemoración día del concejal.
- Conmemoración del día del alcalde.
- Encuentro Nacional de mujeres lideresas.
- Apoyo y participación en el VI Congreso Nacional de Ediles.
- Encuentro nacional de Juntas Administradoras Locales donde se trabajan temas relacionados con el fortalecimiento de las JAL y sus competencias constitucionales y legales.

Por otra parte, la transformación digital en las instituciones públicas es crucial para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos. Es importante resaltar que la transformación digital no se limita a la implementación de herramientas tecnológicas; también implica un cambio cultural profundo.

Desde la perspectiva de la cultura digital en las personas, existen razones sólidas para impulsar esta transformación digital en los procesos misionales de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata:

- Alineación con las necesidades de las personas: la transformación digital se sintoniza con las demandas de los actores en territorio, las víctimas de trata de personas y las organizaciones externas; y además a las necesidades de los funcionarios y

contratistas al Ministerio del Interior. La cultura digital se refleja en agilidad, autonomía, crecimiento y equilibrio entre esfuerzo y resultados.

- Cambio de mentalidad: la transformación cultural implicará un cambio en la mentalidad dentro del equipo de trabajo de la Subdirección; en especial, la aleación de la digitalización con comportamientos de adaptabilidad, experimentación e innovación.
- Mejora de eficiencias y resultados: se considera la transformación digital como una gran oportunidad para mejorar la eficiencia y lograr mejores resultados por parte de las personas. Al abrazar la digitalización, las personas pueden crear un entorno dinámico, innovador y competitivo.
- Compromiso de la dirección: el liderazgo de la Subdirección se reflejará en la apuesta firme por la digitalización y transmitir esta visión al resto de la Institución.

Desde la perspectiva de los procesos y la tecnología la transformación digital, existen razones sólidas para impulsar esta transformación digital en la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata:

- Mejora de procesos internos: La digitalización permitirá automatizar tareas, reducir la burocracia y agilizar los procedimientos administrativos; proteger los datos y la trazabilidad de la información.
- Optimización de recursos: La transformación digital ayudará a hacer uso de los recursos de manera más eficiente, reduciendo el trabajo operativo y el uso del papel como instrumento transaccional y de reportes.
- Mayor transparencia y participación ciudadana: la digitalización facilitará la publicación de información relevante en línea, lo que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la implementación de herramientas de participación ciudadana en línea facilita la colaboración entre la administración pública y los ciudadanos.
- Mejora en la toma de decisiones: la disponibilidad de datos en tiempo real permitirá tomar decisiones informadas y ayudará a identificar asuntos de mejora y a diseñar políticas públicas más efectivas.
- Adaptación a las demandas actuales: la sociedad está cada vez más digitalizada, y los ciudadanos esperan servicios ágiles y accesibles. La transformación digital permite satisfacer estas demandas y mejorar la experiencia del usuario.

En el marco de la transformación digital y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de las administraciones en los territorios y en consonancia con uno de los objetivos del Gobierno Nacional en el marco de la Transformación Digital como motor de oportunidades e igualdad, y una fuente de desarrollo para impulsar la sostenibilidad de las regiones, innovación territorial, eficiencia en la gestión pública y así implementar soluciones digitales en facilite la prestación de servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología y hacer de nuestro territorio un lugar más competitivo en la era digital. En ese orden y dirección, se propone desarrollar y/o potenciar herramientas tecnológicas que permita mejorar significativamente la Gestión de las relaciones con los actores democráticos en todo el territorio nacional.

Es preciso indicar que la Subdirección trabaja con Entidades Territoriales, Corporaciones Públicas y líderes locales, a través de la implementación del programa misional de funcionamiento, generando estrategias que le permitan a la entidad dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en el Artículo 18 del Decreto 1152 de 2022 y de esta manera impulsar y fortalecer a las administraciones territoriales, corporaciones públicas y líderes locales, en la profundización

de la descentralización y el desarrollo de experiencias que promuevan la gestión, el buen gobierno local y en el territorio nacional.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de las acciones realizadas, se hace necesario continuar con la financiación a través de los recursos asignados para el programa misional de funcionamiento en referencia, con los cuales se promoverá la realización de actividades descritas previamente.

El valor definido como necesidad corresponde al valor requerido históricamente para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subdirección en sus distintas actividades. Además, es importante indicar que el valor de cada una de los acompañamientos técnicos está compuesto por el valor de los gastos de operador logístico, tiquetes, viáticos, honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica, entre otros.

Respecto los costos asociados al operador logístico se tiene que durante la vigencia anterior se celebró el contrato interadministrativo No. 1077 de 2023 suscrito entre el Ministerio del Interior y la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío Ltda., cuyo objeto es: “Prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”. Donde según la ejecución de la Subdirección se puede establecer que una asistencia técnica en un evento de pequeña magnitud requiere aproximadamente un valor mínimo de \$363.315, valor promedio de \$ 3.604.779 y un valor máximo de \$ 11.557.528, en lo que se refiere a gastos de operador logístico.

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores que están en comisión de servicios, con el fin de cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo, gastos que incluyen algunos traslados de transporte terrestre, hospedaje y alimentación. Según la ejecución presupuestal del año 2023 del Ministerio del Interior, especialmente esta Subdirección se puede evidenciar que el valor de viáticos por persona en promedio es de \$ 561.156, valor minino \$ 28.034 y valor máximo \$ 2.380.928. Valor que depende entre otras cosas, del lugar de realización de la asistencia técnica, número de días de comisión y honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica.

El ministerio del interior mediante la resolución No. 0003 del 23 del 3 de enero de 2024, aclarada mediante resolución 0020 del 9 de enero de 2024, se adoptó la tabla de honorarios del Ministerio del Interior para la vigencia 2024, se establece el valor de los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales de acuerdo con su perfil académico y experticia o conocimiento. Así las cosas, en la siguiente tabla se exponen los valores definidos para algunos profesionales según dicha resolución:

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 17.912.214	ASESOR 7	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Maestría, Doctorado o Posdoctorado.	66 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 102 meses de experiencia profesional O 78 meses de experiencia profesional y título de

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
				posgrado modalidad especialización.
\$ 11.508.813	ASESOR 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	42 meses de experiencia profesional.	Título profesional 66 meses de experiencia profesional.
\$ 10.273.876	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	36 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 60 meses de experiencia profesional.
\$ 9.639.276	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 5	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	30 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 54 meses de experiencia profesional.
\$ 8.481.332	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	24 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 48 meses de experiencia profesional.
\$ 7.487.316	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	18 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 42 meses de experiencia profesional.
\$ 6.281.321	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	12 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 36 meses de experiencia profesional.
\$ 5.417.495	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	6 meses de experiencia profesional.	N/A
\$ 5.106.281	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6	Título profesional.	30 meses de experiencia laboral.	Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y 6 meses de experiencia profesional.
\$ 4.738.302	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5	Título profesional.	24 meses de experiencia laboral.	Título profesional y Título de postgrado en la modalidad de especialización.
\$ 4.327.589	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4	Título profesional.	18 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.984.704	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3	Título profesional.	12 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.577.404	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	Título profesional.	6 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.096.652	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A
\$ 2.920.239	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A

Con lo cual, es evidente que el costo del recurso humano empleado es altamente variable ya que depende de la complejidad de la temática a desarrollar.

Lo concerniente con el valor de los tickets de avión dependen del lugar donde se desarrollará el acompañamiento técnico y el punto de partida del vuelo, así como de la demanda de tickets que se presente en el momento de la compra.

Es imperativo resaltar que cada acompañamiento técnico tiene una naturaleza distinta dependiendo de la complejidad de la temática a desarrollar, la cual está relacionada directamente con los honorarios que deben ser cancelados al personal que realiza la capacitación, la tipología de asistencia técnica, el lugar geográfico donde se desarrollara el acompañamiento, la magnitud del evento donde se expone la asistencia técnica, y la cantidad de público que asiste al evento. Variables que indiscutiblemente hacen que los costos de cada asistencia técnica sean diferentes.

Se considera un incremento porcentual del 9% respecto del valor destinado para la vigencia 2024, esto considerando que la variación del índice de precios al consumidor IPC del año 2023, equivalente a la inflación del año 2022, cerró en 9.28 %, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, y según la variación anual reportada por el DANE para el mes de febrero de la presenta anualidad se espera que para el año 2024 se tenga una inflación cercana a la del año 2023.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Apoyar la modernización de la administración pública municipal para una gestión eficiente, participativa y transparente.	\$ 2.250.000.000	13	\$ 3.379.000.000	20
Brindar apoyo administrativo y operativo para el cumplimiento de la misionalidad de la Subdirección y el fortalecimiento institucional para la gestión territorial.	\$ 4.630.000.000	1	\$ 5.046.700.000	1
Acompañar a las entidades territoriales y corporaciones Públicas de elección popular en la construcción de los Planes de Desarrollo Municipal.	\$ 850.000.000	126	\$ 0	0
Fortalecer la gestión de las corporaciones públicas de elección popular a nivel nacional como instrumento de gobernanza.	\$ 800.000.000	200	\$ 872.000.000	200
Realizar proyectos para mejorar la gestión y gobernanza territorial con los actores democráticos y las comunidades.	\$ 2.500.000.000	8	\$ 2.725.000.000	8

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Fortalecer las herramientas tecnológicas para la gobernanza y descentralización territorial.	\$ 1.500.000.000	1	\$ 1.635.000.000	1
Atender las peticiones y/o consultas requeridas por la comunidad e instituciones a la Subdirección.	\$ 280.000.000	1	\$ 305.200.000	1
Apoyar la elaboración del marco normativo, proyectos de Ley, lineamientos en materia de ordenamiento territorial, gobernanza y descentralización.	\$ 400.000.000	7	\$ 436.000.000	7
Implementación de mecanismos para la articulación de entidades territoriales y corporaciones para potenciar la gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del agua.	\$ 620.000.000	6	\$ 675.800.000	6
Implementar una estrategia diferenciada para el ordenamiento territorial en los territorios fronterizos coordinada con países vecinos, las áreas no municipalizadas o territorios marino-costeros.	\$ 216.000.000	4	\$ 235.440.000	4
Atender las solicitudes de registro, actualización y renovación de los Esquemas Asociativos Territoriales.	\$ 100.000.000	1	\$ 109.000.000	1
Acompañar a las entidades territoriales para la consolidación de las instancias de asesoría y gestión del ordenamiento territorial.	\$ 320.000.000	70	\$ 348.800.000	70
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los Esquemas Asociativos Territoriales - EAT.	\$ 426.500.000	50	\$ 464.885.000	50
Total	\$ 14.892.500.000		\$ 16.232.825.000	

3.1.1.3.5 IMPLEMENTACIÓN LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS (\$2.995.429.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-01-039	\$ 2.748.100.000	\$ 2.995.429.000	\$ 247.329.000	9,0%
TOTAL	\$ 2.748.100.000	\$ 2.995.429.000	\$ 247.329.000	9,0%

BASE LEGAL

De acuerdo a las bases del Plan de desarrollo 2022 – 2026 Colombia Potencia Mundial para la vida en donde se define el Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades, se denota la necesidad de enfrentar las diferentes necesidades en la lucha contra la trata de personas y se priorizará el fortalecimiento de capacidades organizativas para la autoprotección y denuncia de las comunidades. Estos esfuerzos, además de estar sustentados en el diálogo permanente entre autoridades, comunidades y liderazgos sociales, buscarán garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de la población vulnerable haciendo especial énfasis en los enfoques diferenciable.

Dentro de los lineamientos establecidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial para la Vida” se identifica un plan integral de prevención, atención integral y monitoreo de las violencias. Así mismo, en el centro de la agenda su pone la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda, para recuperar la legitimidad de lo público y la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

De acuerdo con el pacto por la legalidad contenido en el Plan Nacional de Desarrollo “(...) B. Imperio de la ley: derechos humanos, justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos” (...) este Pacto busca generar y liderar estrategias de gobierno que robustezcan la administración de justicia como un bien público indispensable que permita, a través de la garantía del acceso a la justicia, materializar los derechos de las personas, asegurar el cumplimiento de la ley y castigar sus transgresiones. Para esto, es fundamental generar una transformación del sistema de justicia desde una perspectiva de digitalización y del acercamiento a las necesidades de la población y de los territorios”.

Decreto 2893 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”. Artículo 18. Funciones de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial. Son funciones de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, las siguientes: 5. Coordinar y fortalecer acciones tendientes a la descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas. 12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 13. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

La Trata de Personas ha sido catalogada como una de las formas de esclavitud contemporánea. Es una práctica que degrada al ser humano, convirtiéndolo en un objeto con el que se negocia y trafica. La Trata de Personas violenta de manera directa, la dignidad de hombres y mujeres; restringe las libertades individuales y vulnera la igualdad. La Organización de la Naciones Unidas, en particular en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los protocolos adicionales sobre la trata de personas y tráfico de inmigrantes, estableció que la trata de personas se perfila como una actividad que tiene como características: a) El reclutamiento, transporte, transferencia o recepción de personas; b) El uso de medios impropios, como la fuerza, la obducción, el fraude, o la coerción; y c) tiene como objetivo la explotación, bien sea sexual, bien por trabajos forzados, servilismo o esclavitud. Estas características han sido adoptadas por el Estado colombiano en la Ley de Trata de Personas que reforma al Código Penal Colombiano (Ley 985 de 2005). Dichas conductas no agotan sus posibles modalidades, aunque constituyen una base común, que se reconoce nivel mundial como las conductas mínimas a reprimir.

En el año 2005 el Estado Colombiano profirió la Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”, con el objetivo de prevenir, proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, con la presente ley se hace más gravosa la situación para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y de acuerdo con el artículo 188A de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 747 de 2002 y modificado por la Ley 890 de 2004, quedando así:

"Artículo 188A. Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.

"El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal".

Mediante el Decreto 1036 de 2016 fue adoptada la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, cuyo objetivo principal es combatir el delito de trata de personas y garantizar los derechos humanos de las víctimas, a través de la prevención, investigación y judicialización, asistencia y protección, la cual además incorpora los ejes de coordinación y sostenibilidad, generación y gestión del conocimiento y de seguimiento y evaluación.

La Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas fue creada como herramienta para combatir el delito de la Trata de Personas, y garantizar los derechos humanos de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, asistencia, persecución y sanción penal, para ser implementada en el orden nacional, departamental y municipal, bajo los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad.

A partir del mes de septiembre de 2019, el Ministerio del Interior, en ejercicio de la presidencia y secretaría técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, inició el proceso de evaluación de la actual estrategia, para lo cual realizó dos encuentros con Organizaciones de la Sociedad Civil en los que se aplicaron dos instrumentos para de recolección de información para evaluar la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2016-2018.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Ministerio del Interior ejerce la presidencia y la secretaría técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas. Adicionalmente, lidera la implementación de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas.

Con cargo a los recursos provenientes del Proyecto Misional de Funcionamiento, este Ministerio ofrece a las entidades territoriales asistencias técnicas para fortalecer las capacidades de los funcionarios a cargo de prevenir la comisión del delito a través de la implementación del Plan Nacional Prevención; proteger y asistir a las víctimas de trata de personas mediante la formación y utilización del Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas y la articulación de casos mediante el Centro Operativo Anti-Trata y atención a través de la línea gratuita nacional antitrata 018000522020; acompañamiento a las entidades territoriales en la formulación de planes de acción para implementar la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de las acciones realizadas, se hace necesario continuar con la financiación a través de los recursos asignados para los programas misionales de funcionamiento con los cuales se promoverá la realización de actividades tendientes a la implementación de la política pública en materia de trata de personas en la vigencia 2025 en el territorio nacional.

El valor definido como costo proyectado corresponde al valor requerido históricamente para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subdirección, además es importante indicar que el valor de cada una de las asistencias técnicas está compuesto por el valor de los gastos de operador logístico, tiquetes de avión, viáticos, honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica, entre otros.

Respecto los costos asociados al operador logístico se tiene que durante la vigencia anterior se celebró el contrato interadministrativo No. 1077 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA. Cuyo objeto es: “Prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”. Donde según la ejecución de la Subdirección se puede establecer que una asistencia técnica en un evento de pequeña magnitud requiere aproximadamente un valor mínimo de \$ 363.315, valor promedio de \$3.604.779 y un valor máximo de \$11.557.528, en lo que se refiere a gastos de operador logístico.

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores que están en comisión de servicios, con el fin de cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo, gastos que incluyen algunos traslados de transporte terrestre, hospedaje y alimentación. Según la ejecución presupuestal del año 2023 del

Ministerio del Interior, especialmente esta Subdirección se puede evidenciar que el valor de viáticos por persona en promedio es de \$561.156, valor mínimo \$28.034 y valor máximo \$ 2.380.928. Valor que depende entre otras cosas, del lugar de realización de la asistencia técnica, número de días de comisión y honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica.

El ministerio del interior mediante la resolución No. 0003 del 23 del 3 de enero de 2024, aclarada mediante resolución 0020 del 9 de enero de 2024, se adoptó la Tabla de Honorarios del Ministerio del Interior para la vigencia 2024, se establece el valor de los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales de acuerdo con su perfil académico y experticia o conocimiento. Así las cosas, en la siguiente tabla se exponen los valores definidos para algunos profesionales según dicha resolución:

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 17.912.214	ASESOR 7	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Maestría, Doctorado o Posdoctorado.	66 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 102 meses de experiencia profesional O 78 meses de experiencia profesional y título de posgrado modalidad especialización.
\$ 11.508.813	ASESOR 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	42 meses de experiencia profesional.	Título profesional 66 meses de experiencia profesional.
\$ 10.273.876	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	36 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 60 meses de experiencia profesional.
\$ 9.639.276	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 5	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	30 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 54 meses de experiencia profesional.
\$ 8.481.332	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	24 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 48 meses de experiencia profesional.
\$ 7.487.316	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	18 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 42 meses de experiencia profesional.
\$ 6.281.321	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	12 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 36 meses de experiencia profesional.
\$ 5.417.495	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	6 meses de experiencia profesional.	N/A
\$ 5.106.281	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6	Título profesional.	30 meses de experiencia laboral.	Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y 6 meses de experiencia profesional.
\$ 4.738.302	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5	Título profesional.	24 meses de experiencia laboral.	Título profesional y Título de postgrado en la modalidad de especialización.

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 4.327.589	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4	Título profesional.	18 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.984.704	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3	Título profesional.	12 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.577.404	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	Título profesional.	6 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.096.652	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A
\$ 2.920.239	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A

Con lo cual, es evidente que el costo del recurso humano empleado es altamente variable ya que depende de la complejidad de la temática a desarrollar.

Lo concerniente con el valor de los tiquetes de avión dependen del lugar donde se desarrollará el acompañamiento técnico y el punto de partida del vuelo, así como de la demanda de tiquetes que se presente en el momento de la compra.

Es imperativo resaltar que cada acompañamiento técnico tiene una naturaleza distinta dependiendo de la complejidad de la temática a desarrollar, la cual está relacionada directamente con los honorarios que deben ser cancelados al personal que realiza la capacitación, la tipología de asistencia técnica, el lugar geográfico donde se desarrollara la asistencia, la magnitud del evento donde se expone la asistencia técnica, y la cantidad de público que asiste al evento. Variables que indiscutiblemente hacen que los costos de cada asistencia técnica sean diferentes.

Se considera un incremento porcentual del 9% respecto del valor destinado para la vigencia 2024, esto considerando que la variación del índice de precios al consumidor IPC del año 2023, equivalente a la inflación del año 2023, cerró en 9.28 %, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –Dane, y según la variación anual reportada por el Dane para el mes de febrero de la presenta anualidad se espera que para el año 2024 se tenga una inflación cercana a la del año 2023.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar acciones de divulgación de la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas.	\$ 400.000.000	100%	\$ 436.000.000	100%
Acompañar a las entidades territoriales en la creación y seguimiento de los planes de acción territorial de lucha contra la trata de personas.	\$ 690.000.000	80	\$ 752.100.000	80
Implementar actividades de fortalecimiento dirigidas a servidores públicos de investigación y judicialización sobre el delito de trata de personas.	\$ 0	150	\$ 0	0
Desarrollar el programa de asistencia mediata para los sobrevivientes del delito de trata de personas.	\$ 0	1	\$ 0	0
Fortalecer el Sistema Nacional de Información Sobre Trata de Personas – SNITP.	\$ 500.000.000	1	\$ 545.000.000	0
Desarrollar el plan nacional de prevención contra el delito de trata de personas.	\$ 500.000.000	5	\$ 545.000.000	5
Gestionar los canales de comunicación para la lucha contra el delito de trata de personas.	\$ 165.000.000	100%	\$ 179.850.000	100%
Brindar acompañamiento a las entidades competentes para la activación y seguimiento de la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.	\$ 350.000.000	100%	\$ 381.500.000	100%
Aunar esfuerzos en la lucha contra el delito de trata personas entre Estados y organismos internacionales.	\$ 143.100.000	5	\$ 155.979.000	0
Total	\$ 2.748.100.000		\$ 2.995.429.000	

3.1.1.3.6 FONDO DE PROTECCIÓN JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03. (\$871.223.584).

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025 PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON RESPECTO A 2024
A-03-03-01-053	\$1.769.200.000	\$ 871.223.584	-\$ 897.976.416	-50,76%

BASE LEGAL

- Decreto 1890 de 1999 “*Por el cual se reorganiza el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones sobre la materia relacionadas con las entidades que integran el Sector Administrativo de Justicia*”
- Decreto 200 de 2003 “*Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, y se dictan otras disposiciones*”

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS

Bajo este ítem, son asignados los recursos para el esquema de seguridad del Ministro(a) del Interior, con los cuales se celebra convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección, cuyo valor depende del resultado que arroje el estudio de las medidas de seguridad que realice la policía nacional junto a la Unidad Nacional de Protección.

Para la vigencia 2024, fueron asignados recursos por valor de \$1.769.200.000, de los cuales, acorde al esquema fijo actual del Ministro tiene un costo mensual \$70.487.345, que proyectado a los 12 meses de la actual vigencia nos da un resultado de \$845.848.140 lo cual permitirá cubrir el servicio hasta el mes de diciembre del 2024, esto sin tener en cuenta los gastos adicionales (viáticos de escoltas, tiquetes, peajes, entre otros), Sin embargo conforme al valor actual y su ejecución, no se ejecutarían el total de los recursos asignados a la actual vigencia.

Por lo anterior, para la vigencia 2025 este se proyecta en \$871.223.584, tomando como referencia los costos mensuales para la vigencia 2024, del actual esquema asignado al Ministro del Interior e incrementar con el 3% (IPC proyectado para la vigencia 2025), $[(\$70.487.345 \times 3\% = 2.114.620 + 70.487.345)]$ y su resultado de \$72.601.965 x 12 meses de la vigencia 2025.

RUBRO PRESUPUESTAL					Concepto	Presupuesto 2024	Recursos 2025	% Incremento
TIPO	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJ GTO PROJ	ORD SPRY				
A	03	03	01	53	FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03	\$1.769.200.000	\$871.223.584	-50,76

Es importante mencionar que el decrecimiento entre la vigencia 2025 y 2024 se muestra en un -50.76%, son en ocasión al costo actual del esquema asignado para garantizar el servicio hasta

finalizar la presente vigencia, en concordancia con las medidas de seguridad para el actual Ministro del Interior.

METAS Y LOGROS POR ALCANZAR 2025

Garantizar la implementación de las medidas de seguridad asignadas al jefe de cartera.

3.1.1.3.7 APOYO A LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 1618 DE 2013). (\$2.619.250.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-01-065	\$ 2.095.400.000	\$ 2.619.250.000	\$ 523.850.000	25%
TOTAL	\$ 2.095.400.000	\$ 2.619.250.000	\$ 523.850.000	25%

BASE LEGAL

No.	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Constitución Política	1991	Brinda protección efectiva a las poblaciones vulnerables y entre ellas, a las personas con discapacidad, partiendo del concepto de dignidad humana, Artículos 13, 42, 47, 54 y 68
2	Ley 361	1997	"Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones".
3	Ley 1145	2007	"Por medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad y se dictan otras disposiciones".
4	Ley 1346	2009	"Por medio de la cual se aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas".
5	Ley Estatutaria 1618	2013	"Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".
6	Ley 1752	2015	"Por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad".
7	Decreto 2177	2017	Artículo 12, se integra, el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, articulado al Sistema Nacional de Discapacidad, cuyo objeto será coordinar las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.
8	Decreto 1350	2018	Artículo 11. Establece que el Ministerio del Interior, desde el ámbito de sus competencias, adoptará medidas para acompañar el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.
9	Resolución 0316	2021	"Por la cual se reestructura el Grupo de Gestión en Discapacidad y se deroga la Resolución N° 0599 del 21 de abril de 2017" "Por la cual se crea un grupo interno de trabajo dentro de la estructura funcional del Ministerio del Interior".
10	Resolución 0285	2023	Por la cual se hace una delegación ante el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad (CID)
11	Ley 1618	2013	Busca garantizar el desarrollo y la continuidad de actividades que le permitan contribuir a la inclusión social efectiva, la participación ciudadana, la participación política y la no discriminación de las personas con discapacidad, en cumplimiento de sus obligaciones misionales de fortalecer la incidencia de las Organizaciones de Personas con Discapacidad en las políticas y programas que afectan a la población, consolidando los espacios de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel local, regional, nacional e internacional

No.	NORMA	AÑO	OBJETO
12	Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"		El sector de discapacidad se encuentra incluido en la Transformación 7 "Garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad", Numeral 6 "un movimiento social de discapacidad cohesionado que incida en los asuntos públicos", siendo este un numeral de cumplimiento con las obligaciones misionales del Ministerio del Interior en lo que concierne a la participación ciudadana, electoral, política y el movimiento asociativo de las personas con discapacidad

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

En la Bases del Plan Nacional de Desarrollo indicadores de primer nivel, se incluyó un indicador denominado eventos de formación y capacitación a las personas con discapacidad en aspectos de participación ciudadana, electoral y política, el cual permite medir el número de eventos de formación y capacitación a las personas con discapacidad en términos de participación ciudadana, electoral y política desarrollados. Su meta definida comprende 100 espacios desarrollados en el cuatrienio, es decir, 25 espacios por año.

De igual forma, esta cartera ministerial desde el ámbito de sus competencias establecidas en el Decreto 1350 de 2018, tiene las siguientes obligaciones para acompañar el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad: a) desarrollar actividades de capacitación dirigidas a las organizaciones de personas con discapacidad, b) garantizar la participación de las personas con discapacidad en los programas y capacitaciones sobre mecanismos de participación ciudadana, c) fortalecer y empoderar a las mujeres con discapacidad en la participación política, social, comunitaria, cívica y en el direccionamiento de organizaciones de personas con discapacidad, d) promover la conformación de semilleros de formación de organizaciones de personas con discapacidad para la participación en la vida política, e) asesorar y acompañar la conformación y puesta en marcha de Federaciones, Confederaciones y Redes de organizaciones de personas con discapacidad, f) respaldar la gestión de las organizaciones de personas con discapacidad para que accedan a programas y proyectos en busca de su fortalecimiento y sostenibilidad y g) establecer un protocolo de consulta que permita facilitar el diálogo entre las organizaciones de personas con discapacidad, sus representantes y el gobierno en los diferentes niveles territoriales.

En cuanto a las entidades territoriales, el Ministerio del Interior debe asesorar en la definición, adopción e implementación de planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad y promover espacios de encuentro, intercambio y diálogo de saberes entre las organizaciones de personas con discapacidad.

Por lo tanto, se requieren recursos que aseguren la permanencia en el tiempo de estos espacios de fortalecimiento y acciones de inclusión social, además de asegurar que sean accesibles, implementando los ajustes razonables y acciones afirmativas que se requieran para que las personas con discapacidad y sus organizaciones puedan acceder a la información y se beneficien en igualdad de condiciones y en términos de equidad con las demás personas.

Así mismo el Ministerio del Interior integra el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, articulado al Sistema Nacional de Discapacidad, mediante el cual se coordinan las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

De acuerdo al incremento en la necesidad de recursos, se presentan las actividades más relevantes que conllevan al incremento de necesidades:

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad en materia de participación ciudadana y en normatividad sobre discapacidad e inclusión social.	\$1.758.199.250	\$2.325.420.000

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
Implementar estrategias de sensibilización en materia de derechos humanos, de promoción de la no discriminación y de equiparación de oportunidades	\$337.200.700	\$293.830.000

Aunado a lo anterior, el incremento del presupuesto 2025 del Programa Misional de Funcionamiento frente a la vigencia anterior obedece a los aumentos en las tablas salariales para la contratación de servicios profesionales del Ministerio del Interior y a la necesidad de incluir gastos administrativos recurrentes como lo son tiquetes, gastos de viaje, viáticos e insumos de papelería, entre otros.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2024 2025

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad en materia de participación ciudadana y en normatividad sobre discapacidad e inclusión social.					
Promover la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.	Mayor implicación de la participación efectiva de las personas con discapacidad en los asuntos públicos				
5.1 Apropiar las competencias necesarias para aplicar los mecanismos, instancias y espacios de participación ciudadana (Ley Estatutaria 1757 de 2015) y el control social (Ley 850 de 2003).	Incrementar la participación y representatividad de las organizaciones de personas con discapacidad	\$107.363.080	2	-	0

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
5.2 Promover el acceso a programas y proyectos desarrollados por ministerios u organismos de cooperación internacional dirigidos a personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional y en territorios donde se adelanten procesos de paz urbana. BANCO PROYECTOS 2023		-	38	-	0
5.3 Impulsar el desarrollo y gestión de las organizaciones de personas con discapacidad que impacten a los territorios a través de un estímulo y/o acompañamiento a sus proyectos, iniciativas y actividades.	Acciones desarrolladas para el reconocimiento a iniciativas, actividades y proyectos dirigidos a la población con discapacidad.	\$490.217.170	18	612.771.462	20
5.4 Promover espacios de encuentro, intercambio y diálogo de saberes entre la población con discapacidad que contribuyan a la participación y generación de conocimiento.		\$249.218.800	1	-	0
5.5 Fortalecer y empoderar a las mujeres con discapacidad en la participación política y ciudadana.	Reducir la brecha de conocimientos de la participación ciudadana y política, entre las mujeres con discapacidad de las zonas rurales y urbanas.	\$104.126.750	10	130.158.437	12

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
5.6 Desarrollar estrategias que faciliten los procesos de coordinación y articulación de las instituciones nacionales, territoriales y Organizaciones No Gubernamentales para el fomento de la participación política de las personas con discapacidad.	Aportar a la reducción de barreras y desigualdades para el ejercicio de la participación política de las personas con discapacidad	\$50.696.600	2	\$ 106.000.000	2
5.7 Incentivar la gestión de los semilleros de formación de personas con discapacidad para la participación en la vida política.	Colaboración en la gestión de semilleros de formación de personas con discapacidad para la participación en la vida política.	\$177.675.000	2	\$222.093.750	1
5.8 Desarrollar acciones para empoderar a las personas con discapacidad con enfoque diferencial (niñas, niños, jóvenes, población étnica, LGTBI, mujer, adulto mayor, víctimas y/o entre otros), para la participación en la vida política y pública.	Visibilizar los liderazgos de las personas con discapacidad desde un enfoque interseccional de los grupos menos representados.	\$150.000.000	2	\$180.000.000	2
5.9 Construir el protocolo de consulta y democrático que facilite el diálogo entre las organizaciones de personas con discapacidad, sus representantes y el gobierno en los diferentes niveles territoriales en concordancia con el Artículo 2.3.3.11 del Decreto 1350 de julio 31 de 2018	Facilitar la participación de las personas con discapacidad en la construcción del protocolo de consulta para la toma de decisiones.	\$ 428.901.850	1	-	0

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Crear materiales audiovisuales accesibles y con enfoque diferencial por tipo de discapacidad que permitan apropiar las competencias necesarias para aplicar los mecanismos, instancias y espacios de participación ciudadana (Ley Estatutaria 1757 de 2015) y el control social (Ley 850 de 2003).	Incrementar las competencias de los líderes con discapacidad para su representación y participación efectiva en espacios de toma de decisiones	-	0	\$117.363.080	3
Promover espacios de encuentro, intercambio y diálogo de saberes entre las organizaciones de personas con discapacidad de orden departamental y nacional, que contribuyan a la participación y generación de conocimiento.	Reconocimiento de las experiencias, las buenas prácticas, el trabajo de las comunidades desde las organizaciones y el movimiento asociativo	-	0	\$450.000.000	2
Socializar el protocolo de consulta y democrático que facilita el diálogo entre las organizaciones de personas con discapacidad, sus representantes y el gobierno en los diferentes niveles territoriales en concordancia con el Artículo 2.3.3.11 del Decreto 1350 de julio 31 de 2018	Fortalecer las competencias de las personas con discapacidad para ejercer su derecho a ser consultados.	-	0	\$397.033.271	1
Desarrollar talleres para promover el movimiento asociativo de las personas con discapacidad que las representan a nivel local, municipal, distrital, departamental, nacional e internacional.	Avanzar en la consolidación de las estructuras organizacionales territoriales y nacionales que representan a las personas con discapacidad	-	0	\$110.000.000	11

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
6. Implementar estrategias de sensibilización en materia de derechos humanos, de promoción de la no discriminación y de equiparación de oportunidades	Promover acciones para empoderar a las personas con discapacidad con enfoque diferencial en materia de derechos humanos				
6.1 Asesorar a las entidades territoriales en la definición, adopción e implementación de planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.	Identificación de medidas para la adopción e implementación de políticas, planes, programas y proyectos desde las entidades territoriales, orientadas al fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.	\$73.830.000	1	\$73.830.000	1
6.2 Construir una ruta nacional para identificar y promover la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en espacios poblacionales, sectoriales y territoriales de participación.		\$200.000.000	1	-	0
6.3 Diseñar una guía metodológica que facilite orientar la conformación de Federaciones, Confederaciones que representan a las personas con discapacidad ante instancias de toma de decisiones.		\$63.370.750	1	-	0
Socializar en territorio la ruta para acceder a los espacios poblacionales, sectoriales y territoriales de participación.	Socialización de rutas de espacios de participación institucionales.	-	0	\$150.000.000	1

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Desarrollar un módulo de formación en temas de promoción de la no discriminación y de equiparación de oportunidades.	Incluir en la escuela de participación ciudadana módulo formación en temas de promoción de la no discriminación y de equiparación de oportunidades para consulta de la población en general.	-	0	\$ 70.000.000	1
TOTAL		\$2.095.400.000	79	\$2.619.250.000	57

El incremento del 25% en la necesidad de recursos de la vigencia 2025 frente a la vigencia 2024, presenta una diferencia de \$523.850.000, debido a la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, especialmente el derecho a la participación ciudadana, lo cual conlleva a establecer prioridad en abordar territorios lejanos, de mayores índices de pobreza y debilidad institucional. Por lo tanto, este recurso adicional permitirá al Ministerio del Interior adoptar las medidas necesarias para asegurar la participación plena de la población con discapacidad en las instancias y espacios de participación política y pública mediante el aseguramiento de los ajustes razonables, medidas afirmativas y de inclusión para el acceso a la información en igualdad de condiciones.

3.1.1.3.8 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO (\$9.066.987.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025 ^[1] _{SEP}

RUBRO	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2025 /Asignación 2024	
			\$	%
Otras transferencias - Distribución previo concepto DGPPN	8.802.900.000	9.066.987.000	264.087.000	3%
TOTAL	8.802.900.000	9.066.987.000	264.087.000	3%

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS

Teniendo en cuenta que este rubro ha mantenido una ejecución importante en las últimas vigencias y que ha permitido al Ministerio del Interior atender situaciones que no son previsibles y que por lo tanto no se pueden planear con detalle de manera anticipada, es fundamental para la Entidad continuar con dicho rubro, por lo cual fue incluido en las necesidades 2025. Es importante resaltar que el detalle del gasto que no es posible informar con anticipación, como en este ejercicio de anteproyecto, es informado y justificado en el momento de solicitar el previo concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

El valor de necesidad 2025 corresponde a un incremento del 3% del valor apropiado en el 2024 (\$8.802.900.000), el porcentaje aplicado es menor al establecido como inflación doméstica

proyectada para 2025, en el “Anexo 1 circular externa 009: Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2025: Supuestos Macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar”, en coherencia con las indicaciones de proyectar unas necesidades de manera austera, en un contexto de manejo responsable con la sostenibilidad fiscal del país.

3.1.1.3.9 PUEBLO NUKAK MAKU - ARTÍCULO 35 DECRETO 1953 DE 2014. (\$7.221.433.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIFERENCIA \$ NECESIDAD 2025 - PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON PRESUPUESTO 2024
A-03-03-02-014	\$7.011.100.000	\$7.221.433.000	\$210.333.000	3%
TOTAL	\$7.011.100.000	\$7.221.433.000	\$210.333.000	3%

Para determinar los valores de la vigencia 2025 en términos del presente rubro se asume un incremento del 3%, el cual estará sujeto a las disposiciones de ley.

3.1.1.3.10 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (\$4.802.100.000)

La necesidad presupuestal para atender la transferencia al departamento del Amazonas se presenta de manera unificada con los demás departamentos, incluidos en el rubro “A-03-03-02 A Entidades Territoriales Distintas al Sistema General de Participaciones”.

3.1.1.3.11 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAINIA (\$3.412.300.000)

La necesidad presupuestal para atender la transferencia al departamento del Guainia se presenta de manera unificada con los demás departamentos, incluidos en el rubro “A-03-03-02 A Entidades Territoriales Distintas al Sistema General de Participaciones”.

3.1.1.3.12 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE (\$2.656.200.000)

La necesidad presupuestal para atender la transferencia al departamento del Guaviare se presenta de manera unificada con los demás departamentos, incluidos en el rubro “A-03-03-02 A Entidades Territoriales Distintas al Sistema General de Participaciones”.

3.1.1.3.13 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VAUPES (\$3.408.900.000)

La necesidad presupuestal para atender la transferencia al departamento del Vaupés se presenta de manera unificada con los demás departamentos, incluidos en el rubro “A-03-03-02 A Entidades Territoriales Distintas al Sistema General de Participaciones”

3.1.1.3.14 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VICHADA (\$5.394.200.000)

La necesidad presupuestal para atender la transferencia al departamento del Vichada se presenta de manera unificada con los demás departamentos, incluidos en el rubro “A-03-03-02 A Entidades Territoriales Distintas al Sistema General de Participaciones”.

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO PRESUPUESTAL					Concepto	Presupuesto Apropriado 2025
TIPO	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJ GTO PROY	ORD SPRY		
A	03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$19.673.700.000
A	03	03			A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$19.673.700.000
A	03	03	02		A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19.673.700.000
A	03	03	02	024	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	4.802.100.000
A	03	03	02	025	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	3.412.300.000
A	03	03	02	026	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	2.656.200.000
A	03	03	02	027	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	3.408.900.000
A	03	03	02	028	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VICHADA	5.394.200.000

BASE LEGAL

Para la vigencia 2025, al presente rubro se le dejo el valor asignado a la presente vigencia, acorde a la circular externa No. 009 de 2024 del Ministerio de Hacienda: “Las erogaciones por transferencias se liquidarán de conformidad con las respectivas normas que las han creado, y en 2025 su monto programado debe disminuir en un porcentaje no inferior a 5% respecto a 2024, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021”

A-03-03-02 A Entidades Territoriales Distintas al Sistema General de Participaciones

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS

Es importante mencionar que los pagos realizados bajo este ítem, son efectuados por el Grupo de Gestión de Coordinación Financiera y Contable, previa presentación de la cuenta de cobro de cada una de las entidades territoriales favorecidas.

3.1.1.3.15 FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA - ARTICULO 96 LEY 1757 DE 2015 (\$101.893.728.791)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-04-035	\$ 79.100.000.000	\$ 101.893.728.791	\$ 22.793.728.791	28,82%
TOTAL	\$ 79.100.000.000	\$ 101.893.728.791	\$ 22.793.728.791	28,82%

BASE LEGAL

No.	NORMA	AÑO	OBJETO	GRUPO DE ACCIÓN
1	Constitución Política de Colombia	1991	Artículo 2, Artículo 13, Artículo 38, Artículo 270.	Dirección de Democracia
2	Decreto 2893	2011	Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.	Dirección de Democracia
3	Resolución 2434	2011	Por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior.	Dirección de Democracia
4	Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026	2022	Colombia Potencia Mundial de la Vida.	Dirección de Democracia
5	Decreto 1140	2018	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior.	Dirección de Democracia
6	Decreto 1152	2022	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones.	Dirección de Democracia
7	Ley Estatutaria 1475	2011	Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.	Asuntos Electorales
8	Ley 1757	2015	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.	Asuntos Electorales
9	Ley 1885	2018	Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones	Asuntos Electorales
10	Decreto 2851	2013	Por la cual se crea la Comisión Nacional de coordinación y seguimiento electoral y otras disposiciones.	Asuntos Electorales
11	Ley 134	1994	Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.	Participación Ciudadana
12	Ley Estatutaria 581	2000	Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.	Participación Ciudadana
13	Ley 850	2003	Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.	Participación Ciudadana
14	Ley 1757	2015	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.	Participación Ciudadana
15	Ley 1885	2018	Por la cual se modifica la ley estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones	Participación Ciudadana
16	Decreto 1535	2022	Por el cual se adiciona el capítulo IV del título II de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1066 de 2015, único reglamentario del sector administrativo del interior para adoptar la política	Participación Ciudadana

No.	NORMA	AÑO	OBJETO	GRUPO DE ACCIÓN
			pública de participación ciudadana y se dictan otras disposiciones.	
17	Resolución 1556	2023	Reglamento operativo de la mesa de diálogo y participación de tenderos y comerciantes de la economía popular y del gobierno nacional.	Participación Ciudadana
18	Decreto 1649	2023	Por el cual se crea el programa nacional Jóvenes en Paz.	Participación Ciudadana
19	Constitución Política	1991	El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales, Artículo 64	Asuntos Campesinos
20	Ley 2219	2022	"Por la cual se dictan normas para la constitución operación de las asociaciones campesinas y de las asociaciones agropecuarias, se facilitan sus relaciones con la administración pública, y se dictan otras disposiciones".	Asuntos Campesinos
21	Ley 2294	2023	"Por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"	Asuntos Campesinos
22	Resolución 0727	2020	"Por la cual se modifica el Artículo 1 de la Resolución 1817 de 2017, se traslada un grupo Interno de Trabajo y se dictan otras disposiciones"	Asuntos Campesinos
23	Directiva No. 007	2019	"Lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del campesinado"	Asuntos Campesinos
24	Decreto 1066	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.	Acción Comunal
25	Ley 2166	2018	Por la cual se deroga la ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la constitución política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones.	Acción Comunal
26	Ley 1551	2012	Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios	Acción Comunal
27	Sentencia C-100	2013	La Corte Constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 6, 31 y 35 de la Ley 1551 de 2012. Señaló que la expresión "departamental y" el parágrafo 4 del artículo 6 de la ley 1551 de 2012, al regular la posibilidad de que las JAC celebren convenios de solidaridad con entes territoriales del orden departamental, no desconoce el principio de unidad de materia.	Acción Comunal
28	Sentencia C-126	2016	La Corte Constitucional estableció la legalidad de la expresión "hasta por mínima cuantía", contenida en el parágrafo 4 ° del artículo 6 ° de la Ley 1551 del 2012, mediante el cual se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las JAC, con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía	Acción Comunal
29	Bases Plan Nacional de Desarrollo	2022	Pacto por Colombia. Pacto por la equidad XIV. Pacto de equidad para las mujeres	Acción Comunal
30	Decreto 1501	2023	Por el cual se sustituyen los Capítulos 1 y 2 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para reglamentar la Ley 2166 de 2021, referente a la acción comunal	Acción Comunal

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, contribuye al fortalecimiento de un Estado más democrático mediante el apoyo y la promoción de programas de impacto Nacional, Departamental, Distrital o Municipal en participación ciudadana; orientando sus programas, planes y proyectos a ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a organizaciones, sociales, comunales, campesinas, comunitarias, y políticas, integradas por jóvenes, mujeres, población con discapacidad y veedurías ciudadanas.

Grupo de Asuntos Electorales:

La dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior se encuentra normada bajo las funciones establecidas en el decreto 1152 del 2022 que establece:

“ARTÍCULO 7. Modificar el artículo 12 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 7 del Decreto 1140 de 2018, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 12. Funciones de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal. La Dirección para la Democracia, la participación Ciudadana y la Acción Comunal, dependerá del Despacho del Viceministro General del Interior y sus funciones son las siguientes:

- 1. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia participativa, la organización y participación de la sociedad civil y la garantía de los derechos y deberes electorales.*
- 2. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas en materia de organismos de acción comunal, tendientes al fortalecimiento de la organización y de sus espacios de participación, así como ejercer la función de inspección, control y vigilancia de los organismos de acción comunal de tercero y cuarto grado, y de aquellos cuyo control y vigilancia no han sido descentralizados, en los términos consagrados en la legislación que rige la actividad comunal y demás normas que la modifiquen.*
- 3. Promocionar y auspiciar, en coordinación con los entes territoriales, la participación ciudadana y el seguimiento de la gestión administrativa pública, mediante programas de difusión y capacitación de las comunidades.*
- 4. Evaluar el comportamiento político y participativo de los ciudadanos en el marco de los procesos electorales, a nivel nacional y territorial.*
- 5. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de apoyo institucional para el fortalecimiento de la democracia local y territorial, que permita realizar un control social efectivo.*
- 6. Aprobar, suspender y cancelar la personería jurídica de las federaciones de acción comunal y de la Confederación Nacional de Acción Comunal.*
- 7. Propugnar por la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y el cumplimiento de las garantías para el normal desarrollo de los procesos electorales, y propender por la modernización de las instituciones y procedimientos electorales.*
- 8. Generar alianzas con entidades del orden nacional y territorial para coordinar y articular programas en materia de participación política y social para el fortalecimiento de la democracia.*
- 9. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en materia de su competencia.*

10. Resolver conceptos en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos electorales, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.
11. Apoyar la gestión estratégica y operativa del Fondo para la participación y el Fortalecimiento de la Democracia
12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
13. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.”
(Negrillas fuera del texto)

De igual manera, desde el Grupo de Asuntos Electorales, las funciones establecidas se encuentran estipuladas en la resolución 2434 del 2011:

- “1. Formular, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de las políticas públicas en materia de las garantías para el desarrollo de los procesos electorales.
2. Realizar la difusión y promoción de los estímulos electorales para asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso democrático.
3. Coordinar y monitorear los procesos electorales que permitan asegurar su normal desarrollo y determinar el comportamiento e incidencia de la participación ciudadana y de los partidos y movimientos políticos.
4. Realizar la convocatoria y ejercer la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, con el fin de adoptar las políticas, mecanismos y medidas para asegurar el normal desarrollo de los procesos electorales.
5. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos electorales y sobre las inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos a cargos de elección popular, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.
6. Evaluar el comportamiento político y participativo de los ciudadanos en el marco de los procesos electorales, a nivel nacional y territorial.
7. Coordinar con las autoridades competentes la agilización de trámites y de investigaciones penales, disciplinarias, fiscales, que atenten contra la transparencia de los procesos electorales.
8. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza para la cual fue creado el grupo.” (Negrillas fuera del texto)-

Que el decreto 2821 del 2013 dispone que el Ministro del Interior preside la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, así como también el Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal ejerce la secretaría técnica de dicha comisión.

El Plan nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026 en su capítulo número 5.6 “Efectividad de los dispositivos de participación ciudadana, política y electoral” dispone lo siguiente:

“También se robustecerá el sistema político y electoral del país. Además, el Consejo Nacional Electoral conservará su autonomía administrativa y presupuestal, así como las facultades administrativas que le corresponden para el cumplimiento de sus funciones consagradas en el artículo 265 de la Constitución Política”

Que los procesos electorales en Colombia son citados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, tanto los ordinarios, como atípicos, así como los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con lo estipulado en la ley.

Que la ley 1885 del 2018 establece que se eligen por voto popular en todos los municipios del país los Consejeros de Juventud, a excepción de los distritos, donde se conformarán consejos locales de juventud, que también serán electos por voto popular.

Que en concordancia con las elecciones que se desarrollaron el 5 de diciembre del 2021, para el 2025 se deberá citar la próxima elección de consejos de juventud en todo el territorio nacional, lo que ocasiona que el Ministerio del Interior, en el marco de dicho certamen active la Comisión Nacional Para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Por lo anterior, se dispone que las acciones enmarcadas en el grupo de asuntos electorales son permanentes y no están supeditadas a inversiones ocasionales o actividades dirigidas a proyectos específicos; esto ocasiona que se considere pertinente generar un programa misional de funcionamiento para el grupo.

Grupo de Participación Ciudadana:

Dirige su trabajo al fortalecimiento de organizaciones sociales, a través entre otras herramientas, de asistencias técnicas que promueven la participación ciudadana en territorio su divulgación como medio de vinculación Estado-ciudadanía.

El Grupo de Participación Ciudadana trabaja bajo un enfoque diferencial, en clave de ejes temáticos y diversos grupos poblacionales, los primeros responden a la necesidad de fortalecer a organizaciones sociales de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad e infancia y adolescencia en temas de control social y veedurías ciudadanas, presupuestos participativos, liderazgo en participación ciudadana y socialización, capacitación e implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 a nivel nacional y territorial, así como la asistencia técnica a las entidades territoriales desde la articulación misional del sistema nacional de acompañamiento social e infraestructura social al programa de vivienda gratuita.

El Plan Nacional de Desarrollo es producto por primera vez en la historia, de su construcción a partir de la participación ciudadana, concretamente a través de la participación de la ciudadanía en los diálogos vinculantes regionales, que permitieron la construcción colectiva desde las propuestas individuales y necesidades comunes más sentidas entre la población. Todos estos sentidos, demandas y propuestas fueron consolidados en cinco grandes transformaciones, una de estas, la Convergencia Regional, que versa sobre el esfuerzo de reducir las brechas territoriales y socioeconómicas que fragmentan el tejido social, lo que generando inequidad en el acceso a oportunidades y provisión de bienes y servicios públicos.

Necesariamente la convergencia regional está estrechamente relacionada con el fortalecimiento de la relación Estado-ciudadano, especialmente, involucra al ciudadano y ciudadana como agentes promotores de su propio desarrollo y reivindica este rol activo de la ciudadanía en el cambio de sus propias realidades. Esta relación se configura también a partir de la confianza ciudadana, en la cual se considera al Estado como actor hacedor y garante de derechos ciudadanos, y es desde allí también, desde donde la participación ciudadana, se convierte en una puerta para la posibilidad de demandar derechos y ser veedor de los procesos públicos en el territorio, vigilando que sus necesidades y demandas sean escuchadas y efectivamente resueltas, y es a través de esta participación activa de la ciudadanía que, indudablemente desembocara en una disminución de las brechas sociales en los territorios.

En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” concentra, de manera específica en la transformación 5, Convergencia regional el espíritu misional del Grupo

de Participación Ciudadana, en dos de sus literales; *a. Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana y b. Efectividad de los dispositivos de participación ciudadana, política y electoral*. Es decir, desde el Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce la institucionalidad como motor de cambio para la recuperación de la ciudadanía y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía.

Se mencionan también allí, las condiciones y capacidades organizativas e institucionales para el ejercicio de la participación ciudadana, que representa las acciones diarias del Grupo de Participación Ciudadana, a través de la implementación de la Ley 1757 de 2015 que, genera por primera vez toda una coordinación para la participación, siendo su máximo órgano el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, integrado por diversos actores, procurando la “democracia multicolor” de igual forma la implementación de dicha Ley, genera espacios de diálogo para la participación, a partir de la conformación de los consejos territoriales de participación en distintos partes de nuestro país, estos como núcleos articuladores de la participación ciudadana en el territorio con los actores y su diversidad territorial.

Y es en el propósito de recuperar la confianza ciudadana, dicha en el Plan, que se invita a la reformulación de la Política Pública de Participación Ciudadana y Electoral (*Artículo 91. Participación Democrática para la reconstrucción del tejido social y la planeación participativa del desarrollo, articulado PND*) lo que para este grupo significa el apoyo desde el nuevo gobierno a las acciones y esfuerzos que ha venido realizando para lograr el goce efectivo de la participación ciudadana, desde el fortalecimiento de la participación política, social y ciudadana juvenil, promoviendo el liderazgo político de nuestras mujeres y robusteciendo el control social. Esta política contiene en el Plan Nacional de Desarrollo un indicador de segundo nivel que responde a su implementación denominado “*Política Pública de Participación Ciudadana implementada*”.

Por otra parte, en la vigencia 2025 se incorpora dentro de la gestión del Grupo de Participación, la realización de asistencias técnicas a diferentes instancias de participación, en el marco de la Normatividad vigente en temas de participación.

Desde el Ministerio del Interior, en especial la Dirección de Democracia, participación ciudadana y acción comunal, a partir de la expedición del Decreto 1649 de 2023 adelanta y promueve acciones orientadas a la vinculación de jóvenes en el trabajo comunitario para la construcción de paz en sus territorios y el fortalecimiento como agentes transformadores en la construcción del tejido social. Este ejercicio además propende por una coordinación institucional a partir del Manual Operativo del programa.

De acuerdo con lo anterior, se requiere el aseguramiento de recursos que permitan al Ministerio del Interior, a la Dirección para la Democracia, la participación ciudadana y la acción comunal y particularmente al Grupo de Participación, materializar el mandato colectivo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto a participación ciudadana refiere.

Grupo de Asuntos Campesinos:

El Ministerio del Interior, específicamente la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, mediante la Resolución No 1817 del 20 de noviembre de 2017 creó el Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Campesinos, para formular, implementar y apoyar la política pública de atención a la población campesina. Consecuencia de esto, se emitió la Resolución No 0727 del 25 de junio de 2020, que definió las funciones del Grupo de Asuntos campesinos, entre las que se encuentra: i) el fortalecimiento a los procesos de política pública

para el campesinado; ii) fortalecimiento de los procesos organizativos y de las instancias de participación; y iii) articulación territorial y acceso a la oferta por parte de la población campesina.

Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de julio 5 de 2023, modificó el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia y reconoció al campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional, lo que incluye la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado colombiano, esto implica que en cumplimiento de este artículo las instituciones diseñen programas específicos que atiendan los diferentes derechos del campesinado, de manera particular en el caso del Ministerio del Interior lograr materializar el derecho a la participación reforzada, las territorialidades campesinas y el fortalecimiento organizativo.

De manera complementaria, la adhesión del Estado colombiano a la “Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales”, se convierte en un marco de referencia para la construcción de políticas dirigidas al campesinado, la declaración hace un especial énfasis en el derecho a la participación reforzada del campesinado, reconociendo su calidad como sujeto político. En este sentido, establece el deber de garantizar en condiciones de igualdad la participación de los campesinos y campesinas en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo. Además, asegura que se debe consultar al campesinado frente a la explotación de los recursos naturales de sus comunidades. Finalmente, hace un llamado a promover su participación en la creación de normas en materia de seguridad alimentaria, trabajo y medio ambiente que puedan concernirles.

De igual forma, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, contempla en el numeral 8, denominado “El campesinado colombiano como actor de cambio” del Subtítulo 4, “Mayor participación del campesinado con fortalecimiento de los mecanismos de interlocución”, promueve el fortalecimiento de las asociaciones campesinas y agropecuarias, así como el avance en la garantía de derechos para las organizaciones y movimientos sociales y la presencia del campesinado en espacios de toma de decisión, dándole prioridad a las mujeres rurales y a los jóvenes.

Bajo este marco, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, a través del Programa Misional de Funcionamiento del Fondo de Participación en su iniciativa: *Realizar fortalecimiento y reconocimiento del campesinado y sus organizaciones como sujetos de derechos*, busca garantizar el desarrollo y la continuidad de actividades que le permitan contribuir al fortalecimiento organizativo, la participación reforzada, el reconocimiento y la incidencia en los procesos de política pública consolidando los espacios de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel local, regional, nacional e internacional, en cumplimiento de sus obligaciones misionales.

Grupo de Acción Comunal:

El gobierno del *Cambio* ha resaltado y valorado la labor solidaria de los organismos comunales como actores fundamentales para el desarrollo del país, la construcción de la paz total y la creación de *Colombia como potencia mundial de la vida*. Por ello, desde la Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal, se han realizado diferentes estrategias en materia de desarrollo de los organismos y sus comunidades, priorizando el acompañamiento en territorio de acuerdo con el marco jurídico.

La ley 2166 de 2021, es la base legal de un nuevo escenario para el fortalecimiento de la Acción Comunal a nivel nacional específicamente en sus artículos 84, 93,94,95,101,106 y 108, que

implica incrementar los esfuerzos por parte del Ministerio del Interior para el desarrollo de sus organizaciones, motivo por el cual, se requiere contar con recursos de inversión para las próximas vigencias que respalden propósitos conjuntos y el mejoramiento de la calidad de vida en sus comunidades.

La acción comunal es una forma de organización y representación social que ha contribuido significativamente al desarrollo social, económico y democrático del país (Ministerio del Interior, 2007).

Este tipo de organizaciones encuentran su legitimidad no solamente en la elección democrática de sus representantes sino también en el hecho de que, al ser sus dignatarios miembros mismos de la comunidad, conocen a profundidad las necesidades de sus representados. De esta manera, en gran parte del territorio nacional son los organismos de acción comunal los principales actores a través de los cuales pueden canalizarse las solicitudes comunitarias. Así, esta forma de participación ciudadana se constituye en un mecanismo importante de representación e interacción entre actores sociales y políticos en el país (Jaramillo, 2009).

De igual manera, su estructura democrática de representación social logra que se posicionen a nivel nacional los temas que preocupan a los habitantes de las veredas más remotas del país. Por lo anterior, los organismos de Acción Comunal forman parte del engranaje de las estructuras de poder local y micro - local, en la medida en que tienen que ver con la toma de decisiones, la construcción de alianzas, la distribución de beneficios, los vínculos con instituciones o actores sociales o políticos desde las comunidades pequeñas hasta el nivel nacional. Estas relaciones se sustentan en el liderazgo, los lazos de vecindad y el reconocimiento social.

En virtud de lo anterior, la necesidad de recursos del Fondo para la Participación para la vigencia 2025 correspondiente a un incremento del presupuesto del 28.82% respecto a la vigencia 2024 y representados en la suma de \$ 22.793.728.791, se proyecta con base en la necesidad de dar continuidad a la contratación de un proveedor en Operación Logística, figura que, históricamente acompaña la operación de la dirección desde hace 12 años y que para la siguiente vigencia se requiere para la operación y ejecución de aproximadamente el 49% de las actividades del programa en mención. Asimismo, la contratación de Convenios que permiten el desarrollo del 30% de las actividades programadas del Fondo.

Por otra parte y con base en la Resolución 003 del 3 de enero de 2024 *“Por la cual se adopta la tabla de honorarios para la contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio del Interior con personas naturales, y se dictan otras disposiciones”*, los recursos permitirán acceder a la contratación de profesionales con los nuevos perfiles diseñados y estructurados que apoyen las labores misionales, administrativas y operativas de los Grupos que componen el Programa Misional de Funcionamiento, con quienes se logrará la eficiencia y oportunidad en el proceso de articulación con las entidades, jóvenes, mujeres, organizaciones campesinas y organismos comunales, entre otros; priorizando el acompañamiento en territorio, esto, apoyado en los diferentes conceptos de gasto como desplazamientos aéreos y terrestres, pago de viáticos y gastos de viaje de funcionarios, contratistas y comunidad en general.

Lo anterior, guardando coherencia con la base de incremento anual de Ley, así como el costo de los eventos cotizados por el operador para vigencias anteriores, no obstante, el aumento de recursos en estas contrataciones se refleja en un mayor número de requerimientos para dichos procesos, los cuales proyecta 1.534 acciones adicionales entre las que se encuentran asistencias técnicas, capacitaciones, fortalecimiento a organizaciones y consejos territoriales de participación, talleres de formación a la población en general, encuentros y conmemoraciones, implementación de mecanismos de control, acompañamientos a diferentes organismos,

formaciones en liderazgo, concertación de políticas públicas, visitas de inspección, inscripciones al RUC, entre otros.

Este presupuesto facilitará el desarrollo del programa y ejecución de cada una de sus acciones permitiendo mediante la operación logística, la organización y producción de los eventos, la ampliación de espacios de concertación y diálogo involucrando mayor número de personas, entidades y organizaciones, generando así una extensa cobertura y presencia de la Dirección y del Ministerio en el territorio nacional para llevar a cabo las estrategias de implementación y socialización de Política Pública de Participación Ciudadana, estrategias de promoción para la Paz Total, estrategias de divulgación, promoción y visibilización de las acciones comunales del territorio nacional, estrategias de promoción y visibilización de la labor realizada por las organizaciones campesinas; así como un mayor número de asistencias técnicas para la construcción de políticas de participación territorial y priorizando la participación ciudadana desde el fortalecimiento de la participación política, social y ciudadana juvenil, promoviendo el liderazgo político de las mujeres y jóvenes y robusteciendo el control social.

Agregando a lo anterior y en el marco de los compromisos adquiridos por el Ministerio frente al Plan Nacional de Desarrollo, se identifica la necesidad de garantizar el derecho a la participación reforzada, lo cual conlleva a establecer prioridad en abordar territorios con mayor presencia del campesinado, fortalecer sus procesos organizativos y los espacios de interlocución y concertación como la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos. Por lo tanto, este recurso adicional permitirá al Ministerio del Interior adoptar las medidas necesarias para asegurar la participación plena de la población campesina, apoyar sus iniciativas en territorio y la incidencia pública mediante un razonable ajuste institucional y de las instancias de participación que permitan avanzar en la inclusión para la igualdad de derechos.

Así mismo, en virtud de que el gobierno del Cambio ha resaltado y valorado la labor solidaria de los organismos comunales como actores fundamentales para el desarrollo del país, la construcción de la paz total y la creación de Colombia como potencia mundial de la vida. Por ello, desde la Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal, se han realizado diferentes estrategias en materia de desarrollo de los organismos y sus comunidades, priorizando el acompañamiento en territorio, así como, asistencias técnicas territoriales, visitas de inspección control y vigilancia de los organismos, acompañamientos y capacitaciones.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1. Propender por la transparencia electoral por medio de la herramienta URIEL					
1.1 Actualizar e implementar las mejoras de la plataforma URIEL	Brindar mayor accesibilidad a la ciudadanía en la plataforma URIEL.	\$393.000.000	2	\$486.600.000	2

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1.2 Realizar mesas de trabajo con las entidades integrantes de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral - URIEL para fortalecer el trabajo colaborativo entre los responsables.	Realizar seguimiento a las quejas allegadas en el marco de los procesos electorales.	\$289.915.925	2	\$757.400.000	4
1.3 Realizar informes trimestrales de las quejas y/o denuncias recibidas y tramitadas en la plataforma de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral "URIEL".	Contar con un consolidado de información de los diferentes tipos de quejas o denuncias y conductas de delitos electorales.	\$71.500.000	4	\$85.800.000	12
2. Coordinar las elecciones ordinarias y mecanismos de participación y promover la transparencia electoral por medio de procesos pedagógicos					
2.1 Realizar talleres de formación política electoral que estimulen la participación electoral	Formar a hombres y mujeres en participación política electoral.	\$611.397.002	40	\$1.084.800.000	50
2.2 Elaborar diagnóstico de leyes o normas a modificar en aspectos electorales y presentar el borrador de proyectos de ley enviados a la Dirección de Asuntos Legislativos.		\$71.500.000	3	-	0

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
2.3 Realizar actividades de divulgación de las normativas electorales con la ciudadanía, mediante la creación de una ruta de divulgación y cronograma de ejecución para la normas y generalidades electorales vigentes.	Dar a conocer a la ciudadanía las normas electorales vigentes.	\$746.500.000	11	\$910.800.000	15
2.4 Realizar talleres de formación política electoral a los partidos y movimientos políticos	Formar a partidos políticos en participación política electoral.	\$173.000.000	10	\$231.600.000	20
3. Tramitar todas las solicitudes recibidas por medio de la VUEP. (Ventanilla Única Electoral Permanente)					
3.1 Actualizar e implementar las mejoras de la plataforma VUEP	Automatizar la ventanilla única electoral permanente de manera que se pueda dar respuesta los partidos y movimientos políticos de manera oportuna.	\$71.500.000	1	\$85.800.000	1
3.2 Realizar mesas de trabajo con las entidades integrantes de la VUEP para fortalecer el trabajo colaborativo entre los responsables	Consolidar la información con la que cuenta las distintas entidades integrantes de la VUEP.	\$71.500.000	1	\$105.800.000	4
3.3 Realizar informes trimestrales de las quejas y/o denuncias tramitadas en la plataforma VUEP	Realizar seguimiento a la cantidad de solicitudes realizadas por los partidos y movimientos políticos y las respuestas otorgadas por las entidades de la ventanilla.	\$71.500.000	4	\$85.800.000	12
4. Brindar acompañamiento a las comisiones departamentales y nacionales para la coordinación y seguimiento a los procesos					

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
electorales y de mecanismos de participación					
4.1 Acompañar las comisiones departamentales para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales.	Establecer rutas de trabajo a nivel territorial en el marco de los procesos electorales.	\$253.000.000	1	\$625.000.000	66
4.2 Implementar puestos de mando unificado a nivel departamental, municipal y/o nacional, de acuerdo con el tipo de elección, para coordinar y monitorear las elecciones 2024.	Se realizarán los puestos de mando unificado de acuerdo con las elecciones atípicas y mecanismos de participación que se programen	\$85.750.000	1	\$242.900.000	1
4.3 Elaborar informes relativos de cada proceso electoral que contenga la información preelectoral, electoral y postelectoral.	Realizar un seguimiento en materia de orden público y logística electoral para cada proceso que se adelante.	\$35.750.000	1	\$42.900.000	1
Realizar comisiones nacionales para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales	Articular las distintas entidades que hacen parte de la comisión nacional de coordinación y seguimiento electoral con los partidos y movimientos políticos.	-	0	\$423.300.000	4
7. Desarrollar acciones que promuevan la implementación de la Ley de Participación ciudadana					
7.1 Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la normativa de participación ciudadana.	Socialización e implementación de acciones de la normatividad de participación ciudadana.	\$2.586.462.660	100%	\$3.621.047.724	100%
7.2 Realizar asistencias técnicas en participación ciudadana, mecanismos de participación y consejos territoriales de participación.	Desarrollar la creación, implementación y puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Participación ciudadana, así como realizar asistencias técnicas a las instancias de participación como	\$1.261.376.093	60	\$2.144.339.358	80

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
	voluntariado, adulto mayor, SNAIS, Niños, Niñas y Adolescentes, veteranos y mesa de tenderos.				
7.3 Realizar evento de Reconocimiento al Fomento Empresarial, Estatal y Social a la Participación Ciudadana.	Desarrollo de los Premios Colombia Participa	\$472.000.000	1	\$708.000.000	1
7.4 Realizar la Semana Nacional de la Participación Ciudadana.	Resaltar las experiencias exitosas de participación ciudadana en jóvenes, mujeres, control social, consejos de participación ciudadana de todo el país.	\$1.341.481.162	4	\$2.012.221.743	5
7.5 Desarrollar fortalecimiento de capacidades organizacionales, territoriales, de control social a nivel nacional y en territorios donde se adelanten procesos de paz urbana. BANCO 2023		-	61	-	0
7.6 Apoyar iniciativas para el desarrollo del fortalecimiento de capacidades organizacionales, territoriales, de control social a nivel nacional.	Desarrollar el programa reconociendo las iniciativas que trabajan en temas de participación ciudadana	\$2.224.340.000	61	\$4.003.812.000	80
7.7 Fortalecer la Escuela Virtual de Participación a través de la creación, implementación y actualización de Módulos de formación.	Fortalecer la escuela virtual, como herramienta a la ciudadanía en participación ciudadana y en especial los temas acordes al plan nacional de desarrollo 2022 - 2026	\$ 419.300.000	100%	-	0
7.8 Realizar acompañamiento a las acciones para el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.	En el marco de la Ley 1757 de 2015, desarrollar 3 sesiones ordinarias al año y las sesiones extraordinarias que sean requeridas por los consejeros.	\$960.000.000	100%	\$1.920.000.000	100%

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
8. Fortalecer la participación política, social y ciudadana juvenil					
8.1 Realizar formación de liderazgo ciudadano y políticas públicas para jóvenes a través de talleres y escuela virtual.	Desarrollar asistencias técnicas a jóvenes en formación y liderazgo político al igual que políticas públicas	\$ 492.389.720	41	\$984.779.440	70
8.2 Apoyar las acciones a cargo de la dirección del Programa Nacional Jóvenes en Paz.	Desarrollo de acciones en el marco de la corresponsabilidad el programa.	\$1.000.000.000	100%	\$3.000.000.000	100%
8.3 Socializar mediante estrategia de comunicación el "Documento con la definición del contenido de los materiales e instrumentos para la estrategia de promoción de información de las instancias de participación formal para la juventud relacionadas con las áreas misionales del Ministerio del Interior e información general sobre el control social y las veedurías ciudadanas conforme la normatividad vigente"	Asistencias técnicas para socializar las generalidades del CONPES 4040, funciones, presupuesto y entidades involucradas	\$ 92.400.000	1	-	0

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Elaboración de informes que reflejen el avance en la implementación de la estrategia de promoción de información de las instancias de participación formal para la juventud relacionadas con las áreas misionales del Ministerio del Interior e información general sobre el control social y las veedurías ciudadanas conforme la normatividad vigente. Se elaborarán 2 informes cada uno con un peso porcentual de 30% los cuales serán presentados uno en la vigencia 2027 y 2030 (2025-2030)=60%.	Acciones realizadas sobre el avance en la implementación de la estrategia de promoción de información de las instancias de participación			\$100.000.000	100%
8.4 Realizar el Encuentro de Participación y Liderazgo Juvenil.	Promover la vinculación de los jóvenes a los procesos de elección de los consejos de juventud	\$1.084.800.000	1	\$1.518.720.000	1
9. Fortalecer la participación política, social y ciudadana de las mujeres					
9.1 Realizar formación sobre los derechos políticos y formas de participación política y ciudadana de la mujer.	Realizar asistencia y fortalecimiento en liderazgo político con enfoque en los derechos que las mujeres tienen al participar políticamente.	\$ 715.309.720	71	\$1.001.433.608	90
9.2 Realizar formación de liderazgo político y social para miembros de partidos y organizaciones sociales.	Capacitar y acompañar a los partidos políticos y organizaciones sociales en su ejercicio de liderazgo y participación	\$ 372.078.000	25	\$520.909.200	40
9.3 Realizar asistencias técnicas a la Mesa Multipartidista de Mujeres para promover al interior	Continuar con las Mesas Multipartidistas enfocadas en un ejercicio político libre de violencia contra la	\$45.000.000	2	\$54.000.000	1

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
de las organizaciones políticas los mecanismos de paridad de género, generación de protocolos y lineamientos internos sobre paridad y sanción de la violencia contra las mujeres en el escenario político.	mujer en política. CONPES 4080				
9.4 Aumentar la vinculación de las mujeres en las escuelas de liderazgo con el fin de promover su participación y la de sus organizaciones en instancias de participación y en espacios políticos.	Continuar con el fortalecimiento y promoción de la escuela virtual de participación para lograr el aumento en la vinculación de las mujeres en las escuelas de liderazgo. CONPES 4080	\$ 135.000.000	7%	\$189.000.000	5%
9.5 Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para promover la participación ciudadana y política de las mujeres.	Capacitar a las entidades municipales y departamentales en temas de participación ciudadana y política con enfoque de género	\$49.200.000	12	\$68.880.000	12
9.6 Crear y fortalecer centros de pensamiento y escuelas de formación propia presenciales para el liderazgo, participación política y organizativa de la mujer, familia y generación indígena en el marco del gobierno y los sistemas propios de los pueblos originarios.	Fortalecimiento en liderazgo y participación política para la mujer indígena en el marco de los talleres de formación propia presenciales.	\$41.000.000	3	\$53.300.000	3
10. Fortalecer el Control Social					
10.1 Avanzar en las acciones del Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas, mediante asistencias técnicas a organizaciones sociales, comunitarias, redes y entidades territoriales.	Asistencias técnicas en el marco de la Ley 850 de 2003 a todos los ciudadanos interesados en ser veedores ciudadanos	\$412.920.000	100%	\$660.672.000	100%

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
10.2 Realizar asistencias técnicas a organizaciones sociales, comunitarias, redes y entidades territoriales.	Asistencias técnicas en el marco de la Ley 850 de 2003 a todos los ciudadanos interesados en ser veedores ciudadanos	\$ 418.229.720	60	\$669.167.552	80
10.3 Apoyar la sesión de la red interinstitucional de apoyo a veedurías nacional.	Realizar el encuentro anual de veedurías ciudadanas en el marco de la RIAV - Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas con las entidades del orden Nacional	\$172.920.000	100%	\$345.840.000	100%
10.4 Implementar mecanismos de control y veedurías ciudadanas que se prevean con participación de mujeres.	Impulsar a las mujeres de cualquier edad a ser veedoras ciudadanas en el marco de la Ley 850 de 2003	\$172.920.000	3	\$276.672.000	3
11. Realizar fortalecimiento y reconocimiento del campesinado y sus organizaciones como sujetos de derechos.					
11.1 Fortalecer las instancias y proceso de participación y decisión de las organizaciones campesinas.	Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en el proceso de formulación e implementación de la política pública para el campesinado.	\$ 1.630.378.327	94	\$1.793.416.160	94
11.2 Fortalecer a las organizaciones y asociaciones campesinas a nivel nacional y en territorios donde se adelanten procesos de paz. BANCO 2023		-	32	-	0
11.3 Fortalecer a las organizaciones y asociaciones campesinas a nivel nacional a través del apoyo de iniciativas.	Fortalecer las organizaciones campesinas mediante la financiación de iniciativas en sus territorios.	\$1.000.000.000	40	\$2.600.000.000	65
11.4 Promover y visibilizar la labor realizada por las	Desarrollar una estrategia de visibilización de las	\$768.000.000	6	\$1.168.000.000	14

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
organizaciones campesinas en los territorios.	organizaciones campesinas que permitan la transformación de los imaginarios estigmatizantes sobre su labor				
11.5 Fortalecer la participación de la juventud campesina y la participación de Mujeres Campesinas como potencial de la vida.	Fortalecer los procesos organizativos de jóvenes y mujeres que permitan incrementar su interlocución e incidencia en la política pública.	\$650.000.000	4	\$800.000.000	5
11.6 Socializar el portafolio de la oferta institucional con las organizaciones campesinas.	Desarrollar una estrategia que permita el acceso de las organizaciones campesinas a la oferta del estado a nivel nacional y territorial.	\$200.000.000	10	\$210.000.000	10
11.7 Coordinar espacios de articulación interinstitucional del sector campesino.	Garantizar y acompañar los procesos de diálogo del sector campesino con las instituciones del estado.	\$ 577.500.000	100%	\$450.000.000	100%
11.8 Realizar jornadas de sensibilización del campesinado como sujeto político y de derechos.	Incidir en la agenda pública territorial y nacional para el desarrollo de los instrumentos normativos en favor del campesinado.	\$150.000.000	6	\$200.000.000	8
11.9 Apoyar el proceso de participación y concertación de la política pública sobre el campesinado.	Garantizar el funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo	\$2.500.000.000	11	\$600.000.000	3
12. Fortalecer a las organizaciones de Acción Comunal del territorio nacional en su capacidad administrativa, jurídica, técnica y sistematización de procesos					
12.1 Realizar visitas de asistencia técnica y jurídica a las entidades de segundo nivel (Gobernaciones y	Fortalecer las entidades territoriales para el proceso de inspección, vigilancia y control.	\$ 1.583.495.027	95	\$1.900.194.032	120

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Alcaldías delegadas de manera presencial y virtual.					
12.2 Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a las organizaciones de tercer y cuarto grado y visitas de Inspección y vigilancia a Gobernaciones y Alcaldías de manera presencial y virtual.	Fortalecer los organismos de acción comunal de tercer y cuarto grado y realizar inspección y vigilancia a Gobernaciones y Alcaldías delegadas.	\$935.215.027	40	\$1.122.258.032	40
12.3 Diseñar, estructurar e implementar el Sistema de Información Comunal (Plataforma cumplimiento Ley 2166/2021)	Realizar la implementación y mantenimiento del sistema de información comunal	\$1.623.000.000	1	\$1.000.000.000	4
12.4 Realizar inscripción y actualización del Registro Único Comunal Sistematizado de los Organismos de Acción Comunal.	Realizar la inscripción de los organismos de acción comunal en el RUC	\$2.736.928.361	14000	\$3.284.314.033	15000
12.5 Diseñar e implementar estrategias de promoción para la Paz Total, Derechos Humanos y respeto por la vida de los líderes comunales (Foro, Mesas de Seguridad, Divulgación y Promoción).	Realizar programas de fortalecimiento enfocados a la promoción de los derechos humanos de los líderes comunales.	\$1.114.848.361	4	\$1.337.818.033	4
12.6 Realizar acciones de fortalecimiento organizativo a través del programa Acción Comunal para la Construcción de Paz.	Generar estrategias a desarrollar con los organismos comunales para la construcción de la paz total	\$1.451.561.694	100%	\$1.741.874.033	100%
12.7 Diseñar e implementar estrategia de divulgación, promoción y visibilización de las acciones comunales del territorio nacional.	Visibilizar y resaltar las gestiones realizadas por los organismos de acción comunal para fomentar la participación.	\$3.024.133.200	1	\$3.628.959.840	1

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
12.8 Apoyar iniciativas identificadas en los Planes de Desarrollo Comunal y Comunitario de las Organizaciones de Acción Comunal a nivel nacional y en territorios donde se adelanten procesos de paz urbana. BANCO 2023		-	435	-	0
12.9 Apoyar iniciativas identificadas en los Planes de Desarrollo Comunal y Comunitario de las Organizaciones de Acción Comunal a nivel nacional.	Apoyar iniciativas presentadas por los organismos de acción comunal de acuerdo con las líneas estratégicas definidas.	\$21.740.000.000	253	\$51.035.600.002	500
12.10 Apoyo y acompañamiento a los Organismos de Acción Comunal para la ejecución de las actividades misionales, gestión de proyectos y apoyo en la ejecución de los Planes de Desarrollo Nacional, Territorial y Comunitario.		\$20.000.000.000	100%	-	0%
	TOTAL	\$ 79.100.000.000	15528	\$101.893.728.791	16534

3.1.1.3.16 PAGO DE APORTES SOBRE LOS VOLUNTARIOS ACREDITADOS Y ACTIVOS DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE PRIMERA RESPUESTA AFILIADOS AL SGRL - DECRETO 1809 DE 2020 (\$9.147.164.000).

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024 (a)	Valor \$ Necesidad 2025 (b)	Diferencia \$ Necesidad 2025 - (c) (b-a)	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto (d) ((b/a)-1)%
Rubro 03 03 04 060 "PAGO DE APORTES SOBRE LOS VOLUNTARIOS ACREDITADOS Y ACTIVOS DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE PRIMERA RESPUESTA AFILIADOS AL SGRL - DECRETO 1809 DE 2020	8.629.400.000	8.888.282.000	258.882.000	3%
TOTAL	8.629.400.000	8.888.282.000	258.882.000	3%

BASE LEGAL

Decreto 1809 de 2020 “Por el cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta”

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS

Esta necesidad de recursos es incluida en el anteproyecto 2025 en cumplimiento con el Artículo 3.2.8.13. del Decreto 1809 de 2020 y el compromiso número uno de la cláusula cuarta del convenio 2135 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora).

El Artículo 3.2.8.13. del Decreto 1809 de 2020, establece textualmente que:

“Artículo 3.2.8.13. Obligaciones del Ministerio del Interior. Son obligaciones del Ministerio del Interior, las siguientes: 1. Incluir en su anteproyecto anual de presupuesto, los recursos necesarios para trasladar, mediante convenio, los recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, para que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 3.2.8.4. del presente Decreto, se efectúe el pago de los aportes de los voluntarios acreditados y activos al Sistema General de Riesgos Laborales. 2....”

Para cumplir con esta obligación el Ministerio del Interior solicitó a la UNGRD informar la necesidad presupuestal para la vigencia 2025 y su análisis de cálculo, que en coherencia con lo establecido en el decreto dicho cálculo debería contemplar la información actualizada en la base única de datos de los voluntarios activos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los parámetros dados para afiliación y pago.

Teniendo en cuenta que esta información no fue suministrada por la UNGRD, desde el Ministerio del interior se estimó que, para atender en 2025, lo establecido en el decreto 1809 de 2020, se requeriría una asignación presupuestal de \$8.888.282.000. Este valor corresponde a un incremento del 3% del valor apropiado en el 2024 (\$8.629.400.000), el porcentaje aplicado es menor al establecido como inflación doméstica proyectada para 2025, en el “*Anexo 1 circular externa 009: Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2025: Supuestos Macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar*”, teniendo en cuenta las limitaciones que se han presentado en la ejecución de este rubro y en coherencia con las indicaciones de proyectar unas necesidades de manera austera, en un contexto de manejo responsable con la sostenibilidad fiscal del país.

Un aspecto relevante a incluir en este anteproyecto, es que el compromiso adquirido por la UNGRD de liderar una modificación al Decreto 1809 de 2020, para dar solución a algunos inconvenientes que se han presentado durante su implementación. Esta modificación podría generar cambios en la necesidad presupuestal 2025, lo cual se estará comunicando oficialmente al MHCP en los siguientes momentos de la planeación presupuestal.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
	(a)		c	
Necesidad presupuestal para atender lo establecido en el decreto 1809 de 2020, incluida en el anteproyecto anual de presupuesto del Ministerio del Interior	0	1	0	1
Traslado de recurso del Mininterior al FNGRD, según decreto 1809 de 2020, realizado	8.629.400.000	1	8.888.282.000	1
	8.629.400.000		8.888.282.000	

En virtud de las dos obligaciones establecidas para el Ministerio del Interior en el decreto 1809 de 2020, se establecen los anteriores logros y metas.

3.1.1.3.17 APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SENTENCIA T-025 DE 2004 (\$3.781.988.019)

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento % necesidad 2024 con presupuesto 2025
A-03-03-04- 062	\$2.800.000.000	\$ 3.781.988.019	\$ 981.988.019	35%
TOTAL	\$ 2.800.000.000	\$ 3.781.988.019	\$ 981.988.019	35%

BASE LEGAL

La Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno cuenta con el grupo de trabajo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas- CIPRAT, la cual fue creada y se rige por la normatividad consignada en el Decreto 2124 de 2017, la cual tiene el objetivo de coordinar y articular la respuesta oportuna a las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas por la Defensoría del Pueblo para las diferentes entidades involucradas, ejerciendo una gestión por parte del Gobierno con el fin de prevención y mitigar los riesgos asociados en dichas alertas tempranas, adicionalmente, cumplir con la normatividad descrita a continuación:

En la **Constitución Política de 1991** se consagra a Colombia como un Estado Social de Derecho y prioriza la protección de derechos humanos y respeto a la vida; establece que las autoridades de la República “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”; la prevención a las violaciones a los Derechos Humanos, en sus componentes de prevención temprana, prevención urgente y de garantías de no repetición, es una obligación del Estado y de las autoridades públicas en todos los niveles territoriales.

La **Sentencia de Tutela T-025 de 2004**, emitida por la Honorable Corte Constitucional, declara el Estado de Cosas Inconstitucional, en el marco de la violación generalizada y permanente a los derechos humanos, y a la falta de atención integral del Estado colombiano a las víctimas por desplazamiento del conflicto armado; exhorta al Estado colombiano a generar acciones de coordinación con las entidades nacionales y territoriales, destinar presupuestos específicos, aplicar el enfoque diferencial y garantizar el goce efectivo de derechos a la población víctima del desplazamiento, de manera integral con políticas públicas, programas y estrategias.

A partir de esta sentencia se reciben los recursos de funcionamiento de la Secretaría Técnica de la CIPRAT, estos corresponden al Presupuesto General de la Nación y son asignados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de atender de manera oportuna las sesiones de seguimiento de alto nivel, las sesiones técnicas de fortalecimiento a las entidades territoriales y el equipo de profesionales.

Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de Corte Constitucional

- Auto 007 del 26 de enero de 2009 - Medidas de coordinación interinstitucional.
- Auto 009 del 26 de enero de 2009- Medidas de protección a algunos líderes y representantes de la población desplazada.
- Auto 314 del 29 de octubre de 2009 - Medidas en materia de coordinación Nación territorio y convocatoria a sesiones técnicas.
- Auto 383 del 10 de diciembre de 2010 - Medidas en materia de coordinación y corresponsabilidad.
- Auto 098 del 21 de mayo de 2013- Sala Especial de Seguimiento T-025 de 2004. Auto 098 del 21 de mayo de 2013, Protección y atención a mujeres desplazadas líderes y mujeres que trabajan por las víctimas del conflicto armado interno.
- Auto 894 de 2022, numeral 9 de fecha 30 de junio de 2022.

Así mismo, se cita el Decreto 2124 de 2017, que reglamenta la CIPRAT *“Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”*.

Frente al Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

- El Gobierno Nacional suscribió con las FARC-EP, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera el 24 de noviembre de 2016 (en adelante el “Acuerdo Final”).
- El Acuerdo Final estableció (puntos 2.1.2.1 en el capítulo de “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y 3.4.9 en el capítulo “Fin del Conflicto”) la creación por parte de la Defensoría del Pueblo, de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, un nuevo sistema de prevención y Alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales allí mencionados, el cual fue incorporado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política regulado por el Decreto Ley 895 de 2017.
- Así mismo, el Acuerdo Final establece que el Estado colombiano garantizará el financiamiento adecuado acorde con los requerimientos del Sistema y su funcionamiento integral.
- A partir del Acuerdo Final, nace el Decreto 2124 de 2017 que tiene por objeto reglamentar el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
- En particular sobre los riesgos y amenazas por la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, y conductas criminales, incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y nuevos factores de riesgo, que afecten a la población, a sectores de esta, a miembros y actividades de organizaciones sociales o de partidos y movimientos políticos, en especial aquellos que se declaren en oposición, que surjan de

procesos de paz, así como miembros de organizaciones firmantes de acuerdos de paz, y que se presenten en municipios o zonas específicas del territorio nacional, de modo que se promueva una reacción rápida según las competencias constitucionales y legales de las diferentes entidades.

Frente a los Decretos donde el Eje Central es la paz

Decreto Ley 893 de 2017

El Acuerdo Final señala como eje central de la paz impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno, específicamente en los 170 municipios priorizados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET.

Ley 2272 de 2022 “Paz Total”

El Gobierno Nacional adoptó la “Paz Total” como una política de Estado, está consistente en la búsqueda, prioritaria y transversal, de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para los colombianos y de garantía de sus derechos para las víctimas.

Establece como una obligación del Estado colombiano garantizar la seguridad humana, con un enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total. Asimismo, profundiza en las acciones preventivas centradas en personas y en comunidades para reforzar su protección, atendiendo cada contexto y de naturaleza exhaustiva.

La “Paz Total” es una política que vincula a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deben orientar sus actuaciones a su implementación y cumplimiento, y que cada uno de los Ministerios que conforman el Gobierno Nacional deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia.

Puntualiza que mientras el Gobierno Nacional adelanta fases previas, diálogos, negociaciones o firmas de acuerdos con grupos al margen de la ley, las autoridades y entidades deben continuar garantizando los derechos de los colombianos.

La protección de los derechos fundamentales, en particular, los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal exigen mecanismos institucionales con procedimientos ágiles, coordinados, transparentes y eficaces en toda la estructura del Estado, pilar esencial para garantizar la construcción de la “Paz Total”.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

El programa de funcionamiento presenta una Alineación estratégica con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”

El alcance misional de la respuesta oportuna desde la CIPRAT se asocia con la política de Seguridad Humana y Justicia Social, del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia potencia Mundial de la Vida, y de manera específica, con la línea de Protección de la vida y control institucional de los territorios para la construcción de una sociedad segura y sin violencias.

Por otro lado, cabe resaltar la gestión de la CIPRAT, desde la entrada en vigor del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido 260 Alertas Tempranas, correspondientes a 32

departamentos en 538 municipios, con más de 12.000 recomendaciones. En este sentido, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas- CIPRAT, ha efectuado 410 sesiones de seguimiento, en las cuales ha impulsado acciones de coordinación interinstitucional con las entidades nacionales y territoriales, para atender de manera rápida y oportuna las situaciones de riesgo advertidas.

En la anterior vigencia 2024, se recibieron 39 Alertas Tempranas. Por lo anterior, la Secretaría Técnica de la CIPRAT, en el marco de la estrategia de seguimiento frente a las recomendaciones establecidas por la Defensoría del Pueblo, realiza los Talleres Regionales de Seguimiento por la vida (TRS), como acción de seguimiento y acompañamiento a las entidades territoriales como primeros respondientes. A través de los TRS por la vida se verifica el estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas por parte de los municipios, departamentos, y entidades concernidas con recomendaciones en cada región, con el objetivo de articular las entidades del orden nacional y territorial para materializar las recomendaciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la reacción rápida con enfoque territorial, diferencial y de género.

Para continuar desarrollando los TRS por la vida se requiere contar con servicios profesionales de expertos que brinden asistencia técnica a las entidades territoriales, las cuales están obligadas a cumplir recomendaciones contenidas en Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en el marco del Decreto 2124 de 2017, y llevar a cabo las gestiones institucionales para mitigar los riesgos, que permitan en el marco de la prevención, garantizar la vida, libertas, seguridad e integridad de los sectores sociales en riesgo. Es por ello, que se justifica en tema presupuestal la siguiente necesidad.

Análisis de Costos de Operación

De acuerdo al requerimiento de análisis de costos, se relacionan los siguientes para la gestión y funcionamiento de la CIPRAT.

Requerimientos Actividad 1:

Sesiones CIPRAT de Primer Seguimiento (Forma Presencial): Sesión realizada durante los 10 días siguientes a la emisión de la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.

Para ello, se requiere de lo siguiente:

Mano de obra Calificada y Mano de Obra no calificada: En la actualidad, la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, no cuenta con la planta de personal necesaria para la ejecución de todas las actividades misionales de la dependencia. Es por ello, que se debe recurrir a la contratación de personal idóneo para la ejecución de actividades mediante la figura de Prestación de Servicios Profesionales, donde se establecen los honorarios mensuales de acuerdo a su nivel educativo, teniendo como base los siguientes rangos salariales, descritos en la Resolución 1970 del 23 de diciembre de 2022 *“Por el cual se adopta la tabla de honorarios para la contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio del Interior con personas naturales, y se dictan otras disposiciones”*.

Tabla 1. Descripción de tipos de personal que conforma el equipo para realizar sesiones

CIPRAT

TIPO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN CARGO	VALOR HONORARIOS
A	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6	\$ 4.738.303 -\$ 5.106.281
B	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 05	\$ 8.481.333- \$ 9.639.276

El personal contratado para la realización de sesiones CIPRAT destina 70% a la realización de éstas en territorio y el 30% a la realización de trabajo en oficina.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta costos adicionales para la realización de sesiones CIPRAT en el territorio, dichos costos se describen a continuación:

Tiquetes: Desplazamiento en avión de ida y vuelta a territorio para el equipo que realiza la sesión CIPRAT.

Gastos de Desplazamiento o Viáticos: Remuneración en dinero reconocido al contratista o funcionario, por realizar su labor en un lugar diferente a su lugar habitual de trabajo, con el cual se cubre la alimentación y el hospedaje del personal.

Gastos de Viaje: Costos asociados para el pago transporte terrestre (taxi expreso, servicio especial, buses, chalupa, etc.) dado que para llegar a algunos territorios se requiere usar otro medio de transporte adicional al transporte aéreo.

La siguiente estimación para la realización de la sesión CIPRAT, se realiza con base en el valor diario de honorarios para cada tipo de profesional (profesional universitario y profesional especializado), que conforma una unidad técnica de 2 personas, que hará parte del Grupo de la CIPRAT. El cálculo se realiza con base a los promedios de los salarios de la **tabla N° 1**, dividido por el valor diario de salario para cada tipo.

Tabla 2. Cálculo de valores de mano de obra para sesiones CIPRAT equipo (2 personas)

ITEM	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Salario Min	\$ 4.738.303	\$ 8.481.333
Salario Max	\$ 5.106.281	\$ 9.639.276
Promedio de Salario	\$ 4.922.292	\$ 9.060.305
Valor Día cada profesional según su estudio. (promedio salario/30 días)	\$ 164.076	\$ 302.010
Valor total día por el equipo de trabajo. (valor día x 2 días)	\$ 328.153	\$ 604.020

Valor Mano de obra promedio del equipo a diario. (sumatoria de valor total por 2 días)	\$ 932.173	
---	------------	--

Teniendo en cuenta la Guía de Apoyo para la formulación de proyectos de inversión Pública y diligenciamiento de la MGA (Metodología General Ajustada); se observa en la Tabla de Razones Precio Cuenta – RPC, los siguientes insumos sobre los cuales se distribuyó el monto definido para las sesiones CIPRAT:

Tabla 3. Tabla de Razones Precio Cuenta – RPC (Sesiones CIPRAT)

Insumos MGA	Valor
Operación y Logística (Alimentación, Salón, etc.)(aprox 40 personas)	\$ 5.800.000
Mano de obra Calificada y Mano de Obra no calificada. (2 Personas x 2 días)	\$ 932.173
Tiquetes: 2 (ida y vuelta)	\$ 2.000.000
Gastos de desplazamiento o Viáticos (Por 2 Días)	\$ 1.500.000
Gastos de viaje (por 2 días)	\$ 500.000
Total	\$10.732.173

Cada asistencia técnica tiene un valor aproximado de \$10.732.173; teniendo en cuenta los servicios profesionales de quienes realizan la sesión CIPRAT. También hay que tener en cuenta el conocimiento, experticia, experiencia e idoneidad, destreza en temas relacionados con seguridad y convivencia ciudadana del personal. Así mismo, hay que presupuestar, el transporte o gastos de desplazamiento que son diferentes a los gastos de viaje.

Teniendo en cuenta los antecedentes de alertas tempranas realizadas, se promedia que alrededor de 44 alertas tempranas se reciben en el año, por lo cual, se realiza la siguiente operación para el valor de la actividad de realizar sesiones CIPRAT:

Costo sesión CIPRAT: \$ 10.732.173* 44 alertas tempranas (proyección de alertas que se reciben)
= **\$ 472.215.612.**

Profesionales para la conformación de la Secretaria Técnica CIPRAT- Seguimiento a recomendaciones

Debido a la carencia de personal en planta de personal para la conformación de la Secretaria técnica, es necesario llevar a cabo la contratación de personal mediante la modalidad de Prestación de Servicios, siendo así se requiere personal es carreras afines a Derecho, Sociología, Gobierno y Relaciones políticas, Trabajo social, con postgrados relacionados. Es por ello, que se relaciona la siguiente tabla teniendo en cuenta la Resolución 1970 de 2022, de honorarios para la contratación con el Ministerio del interior.

Perfil Profesional	Cant.	Valor honorarios	Valor por número de personas	Tiempo (meses)	Valor total # personas*12 meses
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 05	10	\$ 9.639.276	\$ 96.392.760	12	\$ 1.156.713.120
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	9	\$ 7.487.316	\$ 67.385.844	12	\$ 808.630.128
Profesional Especializado 2028-14	9	\$ 6.281.321	\$ 56.531.889	12	\$ 678.382.668
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6	6	\$ 5.106.281	\$ 30.637.686	12	\$ 367.652.232
Número de personas requeridas	34	Valor requerido para personal			\$ 3.011.378.148

Se requiere la asignación de 1 persona por seguimiento a cada departamento, es decir, 32 por departamentos a nivel Nacional, y 2 personas que brinden apoyo a los diferentes en los departamentos donde se presenten mayores alertas tempranas.

Requerimientos Actividad 2:

Asistencia Técnica mediante Talleres Regionales de Seguimiento / TRS

Es una asistencia técnica donde se brinda la socialización del Decreto 2124 de 2017 a las entidades territoriales, el personal que realiza dicha asistencia ya ha sido costeado en la anterior actividad, por lo cual, se realiza el costeo de tiquetes, viáticos y gastos de viaje por desplazamiento al municipio.

Tabla 4. Tabla de Razones Precio Cuenta – RPC (TRS)

Insumos MGA	Valor
Tiquetes: 1 (ida y vuelta)	\$ 1.000.000
Viáticos (proyección max por 0,5 días)	\$ 291.971
Gastos de viaje (traslados aeropuerto -ciudad- aeropuerto/ traslados terrestres adicionales requeridos)	\$ 200.000
Total	\$ 1.491.971

Para la vigencia 2025, se ha proyectado un total de 200 Talleres Regionales de Seguimiento por la vida, a ser dirigidos a 200 entidades territoriales a lo largo de la vigencia 2025, priorizando aquellos que cuentan con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del pueblo.

Asistencia Técnica TRS: \$ 1.491.971 * 200 talleres = \$ 298.394.259.

-

Tabla 5. Resumen de requerimientos para gestión y/o funcionamiento de la CIPRAT

ITEM	CONCEPTO	TALENTO HUMANO	PROYECCION CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANNUAL
Requerimiento actividad 1.	Realización Sesiones CIPRAT de primer seguimiento.	2 profesionales (Universitario y Especializado)	44 sesiones en 2024	\$10.732.173	\$ 472.215.612
	Profesionales de apoyo a la Secretaría Técnica de CIPRAT	34 profesionales (Universitarios y Especializados)	Profesionales por 12 meses	Ver tabla	\$ 3.011.378.148
Requerimientos actividad 2.	Asistencia técnica de Talleres Regionales por la vida (incluye tiquetes ida y vuelta, viáticos por 0,5 días, etc)	No aplica (el personal ya fue costado en la Act 1)	200 TRS por 12 meses	\$1.491.971	\$298.394.259
TOTAL					\$3.781.988.019

*Los valores anteriores, realizando un cálculo de gestión al contar con el personal necesario para el cumplimiento misional de la CIPRAT, el promedio de sesiones que se pueden presentar en el año, y así mismo, la realización de los Talleres Regionales de Seguimiento en un mismo día, con una sola persona en territorio.

Con la proyección del presupuesto para el programa de funcionamiento de la CIPRAT para la siguiente vigencia, se pueden cumplir los siguientes objetivos:

Fortalecer la asistencia técnica a las entidades territoriales y llevar a cabo las gestiones misionales, en el marco de la estrategia de seguimiento frente a las recomendaciones establecidas por la Defensoría del Pueblo, al realizar los Talleres Regionales de Seguimiento por la vida (TRS).

Generar incidencia en territorio de forma presencial con las entidades concernidas, que tienen recomendaciones para que realicen los respectivos reportes misiones de respuesta a las Alertas Tempranas en la Plataforma SIGOB - CIPRAT.

Realizar sesiones técnicas de la CIPRAT, a través de los Talleres Regionales de Seguimiento por la Vida -TRS, con enfoque territorial y diferencial, teniendo en cuenta los contextos de riesgo y de amenazas a líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y a los distintos sectores sociales identificados por la Defensoría (NNA, líderes comunales, servidores públicos, población migrante, mujeres, etc).

Generar incidencia con las distintas entidades concernidas, con enfoque Nación Territorio, procurando la apropiación de la ruta metodológica de respuesta rápida a las Alertas Tempranas, mediante la pedagogía institucional y la participación de los representantes de las comunidades en riesgo, en la orientación de la respuesta institucional.

Fortalecer las instancias territoriales de respuesta rápida a las Alertas Tempranas, en el marco de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), priorizados por el Acuerdo de Paz, establecidos por el Decreto Ley 893 de 2017.

Los incrementos del presupuesto del 35% frente a la vigencia anterior corresponden a dos motivos principales, El primero al cambio de la tabla salarial del Ministerio del Interior y los ajustes salariales frente al tipo de profesional adicionalmente se ve la necesidad de realizar un cambio del tipo de profesionales requeridos para la vigencia 2025.

Como segundo motivo se desarrollará una actividad que no tenía meta en la vigencia 2024 como lo son “Talleres Regionales de Seguimiento (TRS) llevando a cabo la socialización del Decreto 2124 del 2017. Por valor de \$ 298.394.259.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025.

A continuación, se presentan las actividades del programa de funcionamiento con la comparación entre vigencias. Cabe resaltar que algunas actividades se modificaran para la vigencia 2025, por lo cual, aquellas actividades en negrilla son las proyectadas para 2025.

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR		RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	META
1. Atender y hacer seguimiento a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las amenazas allegadas a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – CIPRAT, de conformidad con el Decreto 2124 de 2017.	1.1 Realizar sesiones de seguimiento de la CIPRAT, para coordinar y articular la respuesta institucional que contribuye a la mitigación de los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas.	\$ 1.500.000.000	100%	\$ 1.700.000.000	100%
	1.2 Seguimiento a las recomendaciones emitidas y la evolución del escenario de riesgo descrito en las Alertas Tempranas.	\$ 1.000.000.000	100%	\$ 1.311.378.148	100%
2. Realizar el seguimiento al Tempranas a través de la Estrategia de Talleres Seguimiento (TRS).	Talleres Regionales de Seguimiento (TRS) llevando a cabo la socialización del Decreto 2124 del 2017.	\$ 0	0%	\$ 298.394.259	100%
3. Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales para una respuesta efectiva a las Alertas Tempranas, mediante la realización de Talleres Regionales de Seguimiento por la vida TRS a nivel presencial en territorio.	3.1 Brindar asistencia técnica en la formulación del plan de acción, el reporte de la gestión misional en la plataforma SIGOB- CIPRAT y la articulación con las distintas entidades concernidas con un enfoque Nación Territorio.	\$ 300.000.000	100%	\$ 472.215.612	100%
TOTAL		\$ 2.800.000.000		\$ 3.781.988.019	

3.1.1.3.18 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 – VICTIMAS (\$8.920.268.284)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON RESPECTO A 2024
A-03-04-01-012	\$ 8.061.699.331	\$ 8.920.268.284	\$ 858.568.953	11%
TOTAL	\$ 8.061.699.331	\$ 8.920.268.284	\$ 858.568.953	11%

BASE LEGAL

Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Decretos Ley 4633 de 2011 (Pueblos y Comunidades Indígenas), 4634 de 2011 (Pueblo Rrom), 4635 de 2011 (Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras), Decretos reglamentarios 4800 de 2011 y 2569 de 2014.

Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento, “Para la recuperación y el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento, consagrados en la Constitución Política y amparados por la Ley 1448 de 2011.

Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Decreto 2460 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación

Decreto 2078 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1448 DE 2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, Prorrogando por 10 años su vigencia”.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

Mediante el Decreto 2893 de 2011 que modifica la estructura del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior, se determinaron dentro de sus objetivos y funciones, i) formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales (ii) coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional (iii) Formular y hacer seguimiento a la política de atención a la población en situación de vulnerabilidad, para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.

La Corte Constitucional, al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno en el país, mediante Sentencia T-025 de 2004, impartió varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación y a avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de los desplazados, señalando, entre otros, como ejes para la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional los siguientes: a. “Corrección de las causas estructurales del estado de cosas inconstitucional, en especial (i) la insuficiencia de recursos y (ii) la precaria capacidad institucional. Estas causas deben ser corregidas a nivel nacional y territorial, según las prioridades departamentales y locales fijadas con base en la expulsión y recepción de desplazados. b. Demostración de que las políticas públicas relacionadas con cada uno de los derechos constitucionales de los desplazados conducen efectivamente a lograr el goce efectivo de los derechos por parte de los desplazados, lo cual comprende tres aspectos esenciales reiterados por la Corte en numerosas providencias: (i) la orientación de manera racional de las políticas públicas para alcanzar dicha finalidad (ii) la introducción de un enfoque diferencial, en especial respecto de mujeres, menores, adultos mayores, indígenas, afrocolombianos y personas con discapacidad y, iii) Contribución suficiente de las entidades territoriales a la superación del estado de cosas inconstitucional.

En el marco del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, a la fecha la Corte Constitucional ha proferido aproximadamente 495 autos de seguimiento. En los autos de seguimiento, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte se ha pronunciado sobre los diversos problemas que afectan la realización de la política pública encaminada al goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Así, parte de los Autos se refieren en particular, al seguimiento de las órdenes emitidas por la Corte en la sentencia T-025 de 2004, algunos Autos hacen seguimiento a órdenes específicas en materia de los componentes de la misma Política Pública de Víctimas, otros se refieren a la prevención y protección especial y prioritaria que, por sus condiciones de mayor vulnerabilidad estructural, merecen algunos grupos poblacionales como son las comunidades étnicas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

La Corte Constitucional desde la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento ha señalado expresamente al Ejecutivo cuáles han sido las falencias que continúan impidiendo la superación del Estado de Cosas Inconstitucional e impartió órdenes concretas, fijando parámetros para valorar la respuesta estatal. Señaló también que uno de los aspectos que generó la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional, fue la existencia de: “(...) un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implementarla.” (...); situación que ha sido reiterada en Autos (176 de 2005, Auto 008 de 2009, Auto 385 de 2010, Auto 219 de 2011, Auto 373 de 2016, Auto 266 de 2017, Auto 620 de 2017, Auto 331 de 2019, Auto 756 de 2021, Auto 811 de 2021, Auto 214 de 2022, Auto 894 de 2022 y demás providencias relacionadas con la materia (Auto 175 de 2019, etc.).

Por otra parte, la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, busca establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de dicha Ley. Dentro estas se encuentra la población en situación de desplazamiento, lo que implica, entre otros, la definición y desarrollo, por parte de las entidades territoriales, de

acciones dirigidas a su fortalecimiento -tanto en la capacidad institucional como presupuestal-, para atender a la población víctima del conflicto armado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, Decreto Ley 4633 de 2011 (Pueblos y Comunidades Indígenas), 4634 de 2011 (Pueblo Rrom), 4635 de 2011 (Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y el Decreto reglamentario 4800 de 2011, el Ministerio del Interior, en el nuevo marco institucional y normativo de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas contempla obligaciones enmarcadas entre otros, en (i) formulación de política pública, (ii) acompañamiento a los procesos de coordinación, (iii) Enfoque Diferencial, y (iv) Prevención y protección. Asimismo, la política pública de víctimas estableció la necesidad de reglamentar e implementar el grado de corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales dando aplicación a los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. En este sentido, el Sistema de corresponsabilidad se entiende como el conjunto interrelacionado de entidades (del orden nacional, departamental, municipal y distrital), recursos, reglas, procedimientos, criterios y mecanismos que permiten una mejor coordinación en la aplicación de los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad necesarios para la gestión de las diferentes acciones de la política pública de víctimas del conflicto armado, con miras a garantizar el goce efectivo de sus derechos.

La vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1148 de 2011) fue prorrogada por la Ley 2078 de 2021 hasta el 10 de junio de 2031, junto con los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, y demás decretos reglamentarios; por lo cual las competencias del Ministerio del Interior, y particularmente del Grupo de Víctimas, en el marco del cumplimiento de sus disposiciones y funciones deben continuar siendo ejecutadas.

Dar Cumplimiento a las acciones 4.4 y 4.5 del CONPES 4031 de 2021, mediante el cual se establece la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a la Población Desplazada.

4.4. Brindar servicios de asistencia técnica diferenciada con énfasis en las ciudades capitales y gobernaciones en los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de la política, que incorpora los aspectos técnicos, financieros y administrativos reconociendo el enfoque diferencial. Meta: 1133 entidades territoriales por vigencia hasta 2031.

4.5. Desarrollar proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la capacidad de las entidades territoriales para la atención y reparación a víctimas. Meta: 20 entidades territoriales con proyectos de fortalecimiento institucional implementados por vigencia, para un total de 245 a 2031.

Desarrollar la acción 2.7 del CONPES 4100 de 2022.

2.7 Realizar acompañamiento técnico al DAPRE para fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales en la atención e integración de la población migrante, a través de la estrategia de intervención territorial y de coordinación nación-territorio de la política pública de víctimas del conflicto.

Por último, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 especifica que se prevé fortalecer espacios de diálogo con diferentes actores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas desde las regiones para que las garantías del goce efectivo de las víctimas en materia de prevención, protección, atención y reparación sea efectivas e integrales, para construir una cultura de paz, protección de la vida y garantías de no repetición.

Transformación: Colombia, sociedad para la vida: Actores diferenciales para el cambio.
Catalizador:

3. Reparación efectiva e integral a las víctimas

Componentes:

4. Vida, seguridad y libertad de los territorios.

Construcción de la cultura de paz para reconstruir el tejido social y la confianza en los territorios.

5. Colombia potencia de la vida a partir de la no repetición.

Acciones de protección a niños, niñas, adolescentes con una oferta integral que valore y fortalezca procesos educativos formales y no formales, actividades culturales y deportivas a nivel nacional, atendiendo las costumbres y procesos comunitarios para la reconstrucción del tejido social.

Macrometa del Gobierno Nacional:

Tránsito hacia la paz total

Desarrollar actos de reconocimiento y de reparación simbólica para la reparación individual de las víctimas, difusión de lo ocurrido, para no volver a permitir.

En este marco se hace indispensable la intervención del Ministerio del Interior y del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado, el cual tiene como funciones: (1) Apoyar y asesorar a las direcciones del Ministerio en la Implementación de las líneas de política pública para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno contenidas en el marco normativo nacional. (2) Articular al interior del Ministerio las respuestas que se brinden sobre acciones constitucionales al público en general y a los órganos de control sobre la implementación de esta política; así como realizar el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T025 de 2004 y sus autos de seguimiento proferidos por la Honorable Corte Constitucional. (3) Promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios territoriales en materia de prevención, asistencia, atención y reparación a la población víctima de infracciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado.

(4) Diseñar e implementar estrategias que permitan sensibilizar a las autoridades locales a desarrollar acciones tendientes a garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que le asisten a la población víctima del conflicto armado. (5) Asesorar a las autoridades territoriales en la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. (6) Desarrollar y divulgar los lineamientos para que las autoridades locales incluyan dentro de sus planes los derechos de las víctimas. (7) Apoyar a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas en el desarrollo de las actividades tendientes a la coordinación nación territorio para la implementación y puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011.

Para la vigencia 2025, se presentan grandes retos en el marco de la implementación de la política pública de víctimas y, por ende, para el Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado, los cuales se pueden resumir en:

Ampliación de la Ley de Víctimas y compromisos asumidos en el Plan de Acción y Seguimiento del CONPES.

Articulación institucional e interinstitucional para definir las estrategias que permitan el acompañamiento a las entidades territoriales en el marco de la ampliación de la Ley.

Ajustar las herramientas de seguimiento territorial de acuerdo con el ajuste al Decreto de Corresponsabilidad.

Fortalecer la capacidad técnica de los municipios que pertenezcan a municipios PDET, ZOMAC Y PATR

Respuestas e intervenciones a las sentencias de Justicia y Paz.

Ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para el Pacífico Nariñense creada como cumplimiento del Auto 620 de 2017 emitido por la Corte Constitucional.

Seguimiento a los Autos 266 y 620 de 2017 y al Auto 165 de 2020, los cuales se impulsan con el acompañamiento técnico de las Direcciones DACNARP y DAIRM del Ministerio, así como con otras entidades obligadas.

Articulación con Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Departamentos (FND) para el acompañamiento técnico a las entidades territoriales.

ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base, este indicador es calculado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Variación anual últimos tres años:

AÑO	IPC %
2.021	5,62 %
2.022	13,12%
2.023	9,28 %

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%, es decir, 3,84 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,12%

En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%. El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. La división Transporte

registró una variación anual de 15,42%, siendo esta la mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (44,80%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (20,19%) y compra y cambio de aceite (15,85%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,03%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-1,30%).

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 13,22%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,98%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,84%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (comida, bebidas, cover) (8,29%), servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (12,11%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (12,93%).

La división Información y comunicación registró una variación anual de 0,12%, siendo esta la menor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (1,10%) y servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,05%).

Parte del presupuesto solicitado para el programa misional de funcionamiento se destinará para los gastos recurrentes administrativos como lo son viáticos, desplazamientos terrestres y aéreos, apoyo transporte aéreo del demandante de la cartera, papelería, gastos de computador entre otros, adicionalmente se destinarán parte de los recursos para suscribir un convenio de cooperación internacional que dará cumplimiento a lo pactado en la sentencia T-025 y sus autos de seguimiento.

La programación de necesidades de Adquisición de Bienes y Servicios que presenta la coordinación de víctimas en la vigencia 2025 asciende a \$ 8.626.018.284 compuesta de la siguiente manera: Servicios Administrativos \$ 2.383.608.924 millones que abarca transporte aéreo, contratos de prestación de servicios, insumos de papelería Por este concepto se adquieren elementos para garantizar la operación de la coordinación en elementos relacionados con elementos de oficina y servicios de licenciamiento de equipo, dentro de lo más representativo en los incrementos se presentan debido al aumento de salario realizado a los servidores públicos en la vigencia 2024 con un porcentaje del 2,5 %.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO	RECURSOS 2024		NECESIDAD RECURSO 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META
Asistir a los subcomités técnicos nacionales del SNARIV y a las sesiones del equipo técnico interinstitucional de asistencia técnica	\$ 162.469.701	31	\$ 173.842.580	31

ACTIVIDAD/LOGRO	RECURSOS 2024		NECESIDAD RECURSO 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META
Elaboración de documentos técnicos en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento	\$ 177.437.126	10	\$ 189.857.725	10
Coordinar las acciones requeridas con entidades del orden nacional y territorial para el cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional	\$ 438.490.269	22	\$ 469.184.588	22
Contratación de Servicios Profesionales, Asistenciales y Técnicos como apoyo a la gestión del Ministerio del Interior.	\$ 1.533.271.892	30	\$.640.600.924	35
Suministrar el transporte aéreo en vuelos Nacionales e Internacionales para los funcionarios, contratistas del Ministerio del Interior y funcionarios de la Policía Nacional que prestan sus servicios de protección y seguridad en el Ministerio del Interior.	\$ 200.000.000	70	\$ 214.000.000	80
Compra de Útiles de Escritorio y derivados del cartón para todas las Dependencias del Ministerio del Interior.	\$ 15.000.000	1	\$ 16.050.000	1
Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, con el concurso de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A: para atender los requerimientos básicos que demande el desplazamiento aéreo del titular de la cartera y los funcionarios que este autorice, dentro del territorio nacional en desarrollo de las actividades propias de su cargo.	\$ 154.400.000	1	\$ 165.208.000	1
Adquisición de licenciamiento Microsoft Office 365, como plataforma de productividad y colaboración para el Ministerio del interior en cumplimiento al anexo técnico dispuesto por la entidad.	\$ 25.000.000	1	\$ 321.000.000	1
Adquisición de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI), en cumplimiento de las especificaciones técnicas determinadas en el anexo dispuesto por la Entidad	\$ 50.000.000	1	\$ 53.500.000	1
Brindar acompañamiento técnico al DAPRE para fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales para la atención de población migrante víctima del conflicto.	\$ 87.602.275	40	\$ 93.734.434	40

ACTIVIDAD/LOGRO	RECURSOS 2024		NECESIDAD RECURSO 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META
Generar espacios de concertación y articulación para la implementación de las iniciativas PDET-PATR focalizadas en conjunto con las entidades territoriales, esquemas asociativos territoriales en el marco de la estrategia de asociatividad territorial para la paz facilitando la ejecución de la PPV.	\$ 300.000.000	20	\$ 321.000.000	20
Promover la gobernanza territorial propiciando condiciones habilitantes para la planeación, implementación y seguimiento de la política pública de víctimas y en situaciones que se requiera poder brindar atención para la subsistencia mínima de las víctimas.	\$ 742.800.000	5	\$ 794.796.000	5
Apoyar espacios de coordinación interinstitucional para la participación e implementación de iniciativas en conjunto con las entidades territoriales	\$ 3.625.228.068	20	\$ 3.878.994.033	20
Disponer de almacenamiento para el funcionamiento de las herramientas de seguimiento a las entidades territoriales y fortalecimiento de la cultura de paz.	\$ 300.000.000	1	\$ 321.000.000	1
Tramitar y pagar viáticos para funcionarios y Contratistas del Grupo de Víctimas en el marco del desarrollo de la estrategia.	\$ 250.000.000	70	\$ 267.500.000	80

3.1.1.3.19 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 – DERECHOS HUMANOS. (\$16.931.513.080)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2023- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2023 CON PRESUPUESTO 2024
A-03-04-01-012	\$ 6.544.546.388	\$16.931.513.080	\$ 10.386.966.691	159%
TOTAL	\$ 6.544.546.388	\$16.931.513.080	\$ 10.386.966.691	159%

BASE LEGAL

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: Actores diferenciales para el cambio. 1. El cambio es con las mujeres. 2. Mujeres en el centro de la política de la vida y la paz.

Sentencia T-025 de 2004 emitida por la Corte Constitucional por la cual se declara el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

Auto 620 de 2017. Adopción de medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena de la Costa Nariñense, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios 004 y 005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 2016, especialmente la población residente de los municipios de Barbacoas, El Charco, Cumbitara, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payan, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payan y Santa Bárbara de Iscuande.

Auto 373 de 2016. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Ordena al Ministerio del Interior, en el marco del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no repetición, la construcción de una ruta urgente de identificación y mitigación de riesgos en los diez (10) municipios más expulsos.

Auto 373 de 2016, orden décimo novena. Ordena al Ministerio del Interior el incorporar la Ruta de Protección Colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y poblaciones consagrada en el decreto 2078 de 2018, en el Decreto 1066 de 2015, sector administrativo del Interior.

Auto 737 de 2016. Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. Mediante la orden séptima indica que el Ministerio del Interior, en su calidad de presidente de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras los Derechos Humanos, debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la puesta en marcha del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos.

Auto 009 de 2015. Orden decimoséptima, la H Corte Constitucional solicita al Ministerio del Interior, presentar un informe detallado sobre las acciones emprendidas para desarrollar el diagnóstico sobre los principales factores asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que inciden en la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia.

Auto 894 de 2022, mantiene la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional y emite ordenes en torno a la política de prevención indicando al Ministerio del Interior que, en calidad de coordinador de la política pública de prevención, presente a la Sala Especial la estrategia de articulación y racionalización de la política pública de prevención.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El desplazamiento forzado es un fenómeno que tiene dentro de sus causas factores económicos, políticos y sociales, pero al margen de los motivos, las consecuencias son las mismas, y se traducen en dinámicas históricas de desigualdad, inequidad, injusticia y demás falencias que sufren las poblaciones más vulnerables del país, que en últimas se constituye en el factor principal que anima el desplazamiento forzado y la violencia en sí.

La Honorable Corte Constitucional en enero de 2004 con ocasión de la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado y ante la falta de respuesta real y pertinente por parte de las diferentes agencias del gobierno, profiere la sentencia T-025, por la cual se declara el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

En el proceso de verificar la superación de tal estado la Corte ha venido expidiendo diferentes autos de seguimiento a través de los cuales ha ordenado diversas acciones específicas en las comunidades y pueblos donde existe mayor índice de desplazamiento y victimización, algunas de las cuales están relacionadas con las obligaciones del Ministerio del Interior y en particular con la Dirección de Derechos Humanos. Así mismo se genera una relación de conexidad entre la sentencia, los acuerdos y las acciones en materia de posconflicto que deben desarrollarse de manera coordinada y coherente al momento de efectuar las acciones de cumplimiento de las órdenes en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional.

Entre los autos priorizados de apoyo a cumplimiento por la Dirección de Derechos Humanos, se encuentran:

Auto 620 de 2017. Adopción de medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena de la Costa Nariñense, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios 004 y 005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 2016, especialmente la población residente de los municipios de Barbacoas, El Charco, Cumbitara, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payan, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payan y Santa Bárbara de Iscuande

Auto 373 de 2016. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004. Ordena al Ministerio del Interior, en el marco del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no repetición, la construcción de una ruta urgente de identificación y mitigación de riesgos en los diez (10) municipios más expulsos.

Auto 373 de 2016, orden décimo novena. Ordena al Ministerio del Interior el incorporar la Ruta de Protección Colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y poblaciones consagrada en el decreto 2078 de 2018, en el Decreto 1066 de 2015, sector administrativo del Interior.

Auto 737 de 2016. Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. Mediante la orden séptima indica que el Ministerio del Interior, en su calidad de presidente de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras los Derechos Humanos, debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la puesta en marcha del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos, dados los riesgos que éstas aún enfrentan, conforme fue advertido en la sección II de la presente providencia.

Auto 009 de 2015. Orden decimoséptima, la H Corte Constitucional solicita al Ministerio del Interior, presentar un informe detallado sobre las acciones emprendidas para desarrollar el diagnóstico sobre los principales factores asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que inciden en la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia; al igual que adjuntar un plan para la difusión de este diagnóstico, en el que se dé cuenta como mínimo de: (i) la fecha de su lanzamiento, (ii) las entidades destinatarias de los ejercicios de difusión, y (iii) las propuestas metodológicas para

sensibilizar a los funcionarios públicos sobre la discriminación y violencia estructural de género como causante de la violencia sexual con ocasión al conflicto armado y al desplazamiento forzado.

Auto 894 de 2022, mantiene la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional y emite ordenes en torno a la política de prevención indicando al Ministerio del Interior que, en calidad de coordinador de la política pública de prevención, presente a la Sala Especial la estrategia de articulación y racionalización de la política pública de prevención

En este marco, y con el fin de generar acciones que aporten al cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional en sus autos, la Dirección de Derechos Humanos requiere de presupuesto para desarrollar las siguientes actividades:

Autos 620 de 2017 y 373 de 2016: Los municipios objeto de las órdenes emanadas por la Corte Constitucional para estos autos son en su mayoría municipios categoría 5ª y 6ª. Por las condiciones de vulnerabilidad que estos territorios presentan y por ende el nivel de riesgo de vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de sus pobladores, la Dirección de Derechos Humanos, en el marco de su competencia misional y legal desarrolla asesoramientos para la formulación o actualización del Plan Integral de Prevención, instrumento de gestión territorial que permite la identificación de los riesgos locales, con miras a la prevención de su ocurrencia, el cual integra los componentes de: prevención temprana, prevención urgente y contingencia y garantías de no repetición.

En consideración a que las ordenes de la Corte están enfocadas a desarrollar medidas de prevención de vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de los pobladores de los municipios focalizados, se requiere contar con recursos dirigidos a apoyar la implementación de quince (15) Planes Integrales de Prevención formulados o en proceso de formulación o actualización, a través de la cofinanciación de quince (15) iniciativas dirigidas a prevenir los riesgos identificados en el mapa de riesgos que hace parte del Plan, los cuales en la mayoría de los casos corresponden al fortalecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mediante acciones enfocadas en la prevención del reclutamiento forzado, consolidación de entornos protectores y aprovechamiento del tiempo libre; generación de proyectos productivos dirigidos a las víctimas del conflicto armado, población vulnerable y adultos mayores, madres cabeza de hogar y al fortalecimiento de concejos comunitarios y de colectivos entre otros.

Auto 373 de 2016, orden décimo novena. Ordena al Ministerio del Interior el incorporar la Ruta de Protección Colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y poblaciones consagrada en el decreto 2078 de 2018, en el Decreto 1066 de 2015, sector administrativo del Interior.

El decreto 2078 de 2018 por el cual se crea la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y comunidades, establece que la Dirección de Derechos Humanos tiene como obligación el seguimiento de las medidas de protección colectiva otorgadas en el marco del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM Colectivo, para lo cual solicitará información a los entes territoriales y demás entidades encargadas de la implementación de las medidas.

A la fecha se han generado doscientos veinte (220) CERREM colectivos, donde el número de medidas otorgadas por colectivos oscilan entre 10 a 36 medidas. Por lo anterior se requiere de

recursos para contratar profesionales que apoyen el proceso de seguimiento, a fin de evitar omisiones, retrasos o cualquier acción negligente por parte de las entidades encargadas de la implementación de las medidas, y de ser necesario dar traslado a los organismos competentes.

Auto 737 de 2016. Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. Mediante la orden séptima indica que el Ministerio del Interior, en su calidad de presidente de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras los Derechos Humanos, debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la puesta en marcha del **Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos**, dados los riesgos que éstas aún enfrentan, conforme fue advertido en la sección II de la providencia.

En consideración a los riesgos que afrontan las mujeres, los cuales se derivan no solo en razón del género, sino por la labor que desarrollan, la Dirección de Derechos Humanos inicialmente centró sus esfuerzos en la implementación y operatividad del **plan de acción** de este programa, el cual consta de tres ejes estratégicos tales como; Prevención, Protección y Garantías de no repetición, bajo los cuales se articula a 27 entidades del orden nacional, 144 acciones y el acompañamiento de las plataformas nacionales de mujeres con el objetivo de generar acciones que permitan la construcción de un entorno propicio para la labor del ejercicio libre y seguro de su labor en todo el territorio nacional.

Aunado a lo anterior el decreto 1314 de 2016, crea la **Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras de los Derechos Humanos**, presidida por el Ministerio del Interior y cuya la secretaría técnica es ejercida por la Dirección de Derechos Humanos.

Como parte del proceso de implementación del Programa integral de Garantías, la Dirección espera desarrolla las siguientes líneas estratégicas:

Avanzar en la implementación del nuevo Plan de Acción Nacional del Programa Integral de Garantías para Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos.

Continuidad de los **procesos de territorialización de este Programa en 24 departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, Valle y la región de Montes de María (Bolívar y Sucre)**; al igual que el desarrollo de procesos de territorialización de este Programa en zonas prioritizadas y que estarán sujetas a la situación de riesgo o demanda relacionada a garantías de Líderesas y Defensoras de DD.HH a la que se considere prioritario responder.

Seleccionar e implementar iniciativas cofinanciadas para la promoción y prevención de los derechos humanos de las mujeres lideresas defensoras de derechos humanos, con lo cual se espera cofinanciar para la vigencia 2025, setenta y dos (72) iniciativas en los territorios donde el programa se ha territorializado.

Fortalecer los espacios del Programa a través del impulso a la generación de mesas nacionales y territoriales de coordinación de implementación en los departamentos donde desarrolle el proceso de territorialización.

Realizar dos (2) sesiones de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderas y Defensoras de los Derechos Humanos.

Es de anotar que este programa y sus actividades, hacen parte del plan de acción del **CONPES 4031 de 2021: “Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”**, por el cual se prorroga la Ley 1448 de 2010, además de ser la respuesta del indicador **CG-1 del Plan Marco de Implementación, con marcadores género y construcción de paz.**

Auto 894 de 2022, mantiene la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional y emite ordenes en torno a la política de prevención indicando al Ministerio del Interior que, en calidad de coordinador de la política pública de prevención, presente a la Sala Especial la estrategia de articulación y racionalización de la política pública de prevención. **En la vigencia 2025 se espera desarrollar diez (10) encuentros regionales con delegados de la sociedad civil y funcionarios.**

Auto 009 de 2015. Orden decimoséptima, la H Corte Constitucional solicita al Ministerio del Interior, presentar un informe detallado sobre las acciones emprendidas para desarrollar el diagnóstico sobre los principales factores asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que inciden en la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia.

Con tal propósito se realizará la revisión y actualización conceptual del documento diagnóstico sobre los principales factores asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que inciden en la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia.

Aunado a lo anterior se continuará la edición e impresión de las tres (3) ediciones anuales de la revista “Defensoras de Nuestra Colombia” enfocada en el abordaje del campo cultural y buen uso de los medios de comunicación, como herramienta de prevención y transformación cultural, siendo esto uno de los campos estructurales de las denominadas violencias basadas en género identificado en el diagnóstico realizado por el Ministerio del Interior.

También se espera cofinanciar treinta (30) dirigidas al fortalecimiento de organizaciones que promuevan la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado o en el proceso de superación de este.

Los costeos de las actividades tienen como base: i) para el caso de prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para ese tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; ii) para las jornadas de trabajo, talleres, mesas y espacios dirigidos a la territorialización del programa, los costos se basan en los históricos de operación logística que incluyen participación de sociedad civil, los cuales incluyen gastos relacionados con eventos, alimentación, hospedaje, tiquetes y apoyo de transporte, entre otras, con ampliación de la cobertura territorial en consideración a los compromisos asumidos por la Dirección; iii) para las impresiones se basa en los históricos de las previamente realizadas con la Imprenta Nacional; y iv) para las iniciativas cofinanciadas, se basa en los valores históricos del programa con incremento del número de iniciativas a fin de ampliar la cobertura territorial.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar seguimiento de los autos y órdenes a cargo de la Dirección de Derechos Humanos que conforman la sentencia T-025, para avanzar en su cumplimiento.	\$2.457.975.391	4 informes de seguimiento de las acciones de apoyo al cumplimiento de los autos priorizados para la vigencia: Autos 620 de 2017, 894 de 2022 y 373 de 2016.	\$ 2.042.970.670	4 informes de seguimiento de las acciones de apoyo al cumplimiento de los autos priorizados para la vigencia: Autos 620 de 2017, 005 de 2009 y 373 de 2016, especialmente en los departamentos de Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Guaviare y Nariño.
Apoyar la implementación del Plan de Acción Nacional del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de DDHH, en el marco del auto 737, sentencia T-025	\$3.655.783.173	<p>Territorialización del programa en Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Sucre, Meta, Valle, Norte de Santander, Antioquia y la región de Montes de María (Bolívar y Sucre)</p> <p>Realización de 10 mesas de articulación con entidades nacionales y/o territoriales y plataformas nacionales.</p> <p>Selección e implementación de 14 iniciativas para la promoción y prevención de los derechos humanos de las mujeres lideresas defensoras de derechos humanos en los territorios donde se ha territorializado el Programa.</p> <p>Informes de Secretaría Técnica del Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos</p>	\$ 11.577.279.900	<p>Territorialización del programa en Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Sucre, Meta, Valle, Norte de Santander, Antioquia y la región de Montes de María (Bolívar y Sucre)</p> <p>Realización de 10 mesas de articulación con entidades nacionales y/o territoriales y plataformas nacionales.</p> <p>Selección e implementación de 14 iniciativas para la promoción y prevención de los derechos humanos de las mujeres lideresas defensoras de derechos humanos en los territorios donde se ha territorializado el Programa.</p> <p>Informes de Secretaría Técnica del Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos</p>
Apoyar al avance del auto 373 a través del seguimiento a la implementación de la ruta de protección colectiva en el marco de las garantías de los derechos humanos.	\$430.787.825	12 informes del avance al seguimiento de la implementación de la ruta de protección colectiva, medidas ordenadas por el CERREM colectivo mediante acto administrativo suscrito por la UNP	\$ 692.409.560	12 informes del avance al seguimiento de la implementación de la ruta de protección colectiva, medidas ordenadas por el CERREM colectivo mediante acto administrativo suscrito por la UNP
Impulsar el cumplimiento de la orden décimo séptima del auto 009 de 2015, en el marco de la sentencia T-025.	N/A	N/A	\$ 2.618.852.950	Realizar y actualización conceptual del documento diagnóstico sobre los principales factores asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que inciden en la violencia sexual contra

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
				<p>las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia.</p> <p>Editar e imprimir las tres (3) ediciones anuales de la Revista "Defensoras de Nuestra Colombia".</p> <p>Cofinanciar iniciativas dirigidas al fortalecimiento de organizaciones que promuevan la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado o en el proceso de superación de este.</p>
TOTAL	\$6.544.546.388		\$ 16.931.513.080	

3.1.1.3.20 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004.- COMUNIDADES NARP (\$12.061.154.235).

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento porcentual necesidad 2024 en relación con 2025
A-03-04-01-012	\$ 7.094.796.609	\$ 12.061.154.235	\$ 4.966.357.626	70 %
TOTAL	\$ 7.094.796.609	\$ 12.061.154.235	\$ 4.966.357.626	70 %

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	SENTENCIA T-025	2004	Generar garantías de derechos de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera desplazada por la violencia y al goce efectivo de los mismos atendiendo consideraciones de enfoque diferencial y de género.
2	Auto 005	2009	
3	Auto 008	2009	
4	Auto 100	2010	
5	Auto 45	2012	
6	Auto 112	2012	
7	0Sentencia T- 823	2012	
8	Auto 299	2012	
9	Auto 096	2013	
10	Auto 005	2009	Ordena la formulación de Planes Específicos de Protección y Atención, la caracterización de Territorios Colectivos y Ancestrales, la puesta en marcha de una Ruta Étnica, la atención integral a las niños, mujeres y

			personas con discapacidad, la atención humanitaria a población confinada, el diseño de un Plan Integral de Prevención
11	Constitución Política de Colombia	1992	Medidas para proteger y reconocer la diversidad étnica
12	Convenio 169 OIT	1991	Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".
13	Ley 21	1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 DE 1991
14	Ley 70	1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
15	Ley 1753	2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".
6	Decreto 1320	1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
7	Ley 22	1981	Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
8	Ley 1955	2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Dentro del marco de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T- 025 de 2004, la Honorable Corte Constitucional expidió el Auto 092 de 2008, Auto 005 de 2009, Auto 008 de 2009, Auto 266 de 2009, Auto del 18 de mayo de 2010, Auto 100 de 2010, Auto 045 de 2012, Auto 112 de 2012, Auto 299 de 2012, y el Auto 096 de 2013, además de la Sentencia T-823 de 2012 , todos referidos a la garantía de derechos de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera desplazada por la violencia y al goce efectivo de los mismos atendiendo consideraciones de enfoque diferencial y de género.

En particular, el Auto 005 ordena formulación de Planes Específicos de Protección y Atención, la caracterización de Territorios Colectivos y Ancestrales, la puesta en marcha de una Ruta Étnica, la atención integral a las niños, mujeres y personas con discapacidad, la atención humanitaria a población confinada, el diseño de un Plan Integral de Prevención, informes periódicos sobre el avance en la restitución de los derechos de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, entre otras. Adicionalmente, los autos de seguimiento referidos a Jiguamiandó y Curvaradó, establecen los procedimientos conducentes a la restitución efectiva de los territorios colectivos de las cuencas de los ríos.

Finalmente, la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas, sus decretos reglamentarios en particular el Decreto 4635 de 2011 -, y lo establecido en los preceptos constitucionales – Sentencia T-025 de 2004, el artículo 16 de la Ley 1450 de 2011, indica que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del el Ministerio del Interior, en el marco de competencias, debe entre otros, coordinar los procesos de preconsulta y consulta previa de los Planes Integrales de Reparación Colectiva de la comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Art. 76 y 104), para posteriormente identificar los daños y afectaciones colectivas de las Comunidades a través de una caracterización de los daños colectivos de las comunidades (Art 77).

El Decreto 2893 de 2011, por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior, señala las funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, siendo la principal la de asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública orientada al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural en favor de dicha población, así como coordinar interinstitucionalmente la realización de los espacios de participación para las comunidades

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras previstos por ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representan.

Por lo cual, se hace necesario generar garantías de derechos de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera desplazada por la violencia y al goce efectivo de los mismos atendiendo consideraciones de enfoque diferencial y de género. Fortalecer los procesos de concertación y consulta entre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con el Gobierno Nacional en los temas que tengan relación con los derechos fundamentales de las comunidades.

Justificación incremento de recursos en las subactividades

ACTIVIDAD	COSTOS	COSTOS
	2024	2025
Realizar la Caracterización de 4 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Córdoba en Fase 5	\$ 150.000.000	\$ 255.000.000
Realizar la Caracterización de 45 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Cauca en Fase 4 y 5	\$ 2.160.000.000	\$ 3.672.000.000
Realizar la Caracterización de 15 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Antioquia en todas sus fases 1, 2, 3, 4 y 5	\$ 1.932.398.305	\$ 3.285.077.119
Realizar la Caracterización de 15 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Sucre en todas sus fases 1, 2, 3, 4 y 5	\$ 1.932.398.305	\$ 3.285.077.119

Teniendo en cuenta lo establecido en la orden cuarta del Auto 005 de 2009, la cual reza lo siguiente: “Cuarto. - ORDENAR al Ministro del Interior y de Justicia, diseñar, a más tardar para el 30 de octubre de 2009, un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana de conformidad con los lineamientos señalados en la sección VIII del presente Auto. En esa fecha, el Ministro del Interior y de Justicia deberá enviar un informe a la Corte Constitucional con el plan diseñado y con un cronograma de implementación para la caracterización efectiva de los territorios colectivos y ancestrales. El Ministro del Interior y de Justicia también deberá presentar un informe sobre la culminación del proceso de implementación del plan de caracterización de territorios el 1 de julio de 2010”.

Teniendo en cuenta lo anterior se priorizan ciertos departamentos que a continuación se describen: “Dentro de este segundo grupo fueron mencionados expresamente los siguientes casos que enfrentan las siguientes comunidades: (i) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en las ciudades de Cali y Buenaventura y en los territorios colectivos de los ríos Calima, Yurumanguí, y Anchicaya en el departamento del Valle del Cauca; (ii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en los municipios de Curvaradó, Jiguamiandó, Bojayá, Bagadó, Ungía, Cacarica, Alto y Bajo Mira, Carmen del Darien, Alto y Bajo Baudó, Juradó, Sipí, Tadó, Nóvita, Frontera, Riosucio, Itsmina, Condoto, y Quibdó en el departamento del Chocó; (iii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en la Costa Pacífica Nariñense, en los municipios de La Tola, El Charco, Iscuandé, Mahguí Payán,

Tumaco, Pizarro y Barbacoas, en el departamento de Nariño; (iv) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en los municipios de Guapí, Timbiquí, López de Micay, en el departamento del Cauca; (v) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en el Urabá Antioqueño y Chocoano, en particular en los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Mutatá, Caucasia, Murindó y Vigía del Fuerte; (vi) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en Cartagena, María la Baja, Turbaco y Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar; (vii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en San Onofre, Chengue, Chinulito, Macayepo, El Salado, Pigiguay y Coloso en el departamento de Sucre, (viii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en Montelíbano, Uré, Valencia, Puerto Libertador, Tierra alta, Cerromatoso en el departamento del Córdoba; (ix) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar; y (x) las comunidades afrocolombianas desplazadas en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca, provenientes de los municipios de Bagadó, Atrato, Lloró, Quibdó, Medio Atrato, Murindó, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bajirá, Bojayá, Riosucio, Ungía, Acandí, Napipí, Opagadó, Domingodó, Murri, Truandó, Salaquí, y Cacarica, entre otras.”

Una vez analizado el contenido de la orden es menester indicar que es de obligatorio cumplimiento teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucionales declarado en la sentencia T – 025 de 2004 y sus respectivos Autos de seguimiento (Auto 005 de 2009, Auto 073 de 214, Auto 620 de 2017, expedidos por la Honorable Corte Constitucional Colombiana, entre otros), desde el Grupo de Protección de Derechos Fundamentales una vez evaluados los criterios de priorización y sujetos que no hayan recibido intervención por parte de esta Dirección se concluye que para el 2025 se atenderán los departamentos de Córdoba, Cauca, Antioquia y Sucre.

Realizando un análisis de las vigencias 2023,2024 plasmadas en las matrices del Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, y demás instrumentos de planeación, se evidencia que se requiere lo equivalente a \$10.497.154.238 para la realización de las caracterizaciones proyectados en todas sus fases, se requiere \$544.000.000, para la contratación de profesionales para seguimientos y monitoreos de las fases de caracterizaciones y recursos por valor de \$ 765.000.000 para Suministro de tiquetes y gastos de logísticos para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres, conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación.

Subtotal fase 1	\$ 8.785.791.357
Subtotal fase 2	\$ 1.133.362.878
Subtotal fase 3 y 4	\$ 1.156.000.000
Subtotal fase 5	\$ 986.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 12.061.154.235

Variación IPC anual últimos tres años:

AÑO	IPC %
2.021	5,62 %
2.022	13,12%
2.023	9,28 %

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%, es decir, 3,84 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,12%

En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%. El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. La división Transporte registró una variación anual de 15,42%, siendo esta la mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (44,80%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (20,19%) y compra y cambio de aceite (15,85%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,03%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-1,30%).

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 13,22%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,98%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,84%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (comida, bebidas, cover) (8,29%), servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (12,11%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (12,93%).

La división Información y comunicación registró una variación anual de 0,12%, siendo esta la menor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (1,10%) y servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,05%).

Parte del presupuesto solicitado para el programa misional de funcionamiento sentencia T025-2004 se destinará para los gastos recurrentes administrativos como lo son viáticos, desplazamientos terrestres y aéreos, apoyo transporte aéreo del demandante de la cartera, papelería, gastos de computador entre otros, adicionalmente se destinarán parte de los recursos para suscribir un convenio de cooperación que dará cumplimiento a lo pactado en la sentencia T-025 y sus autos de seguimiento.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2024-2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar el Plan de Caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la población NARP en el marco de la sentencia T- 025 de 2004 y sus autos de seguimiento.	\$ 6.174.796.609	100%	\$ 10.497.154.238	100%
Realizar la Caracterización de 4 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Córdoba en Fase 5	\$ 150.000.000	100%	\$ 255.000.000	100%
Realizar la Caracterización de 45 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Cauca en Fase 4 y 5	\$ 2.160.000.000	100%	\$ 3.672.000.000	100%
Realizar la Caracterización de 15 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Antioquia en todas sus fases 1, 2, 3, 4 y 5	\$ 1.932.398.305	100%	\$ 3.285.077.119	100%
Realizar la Caracterización de 15 Consejos Comunitarios priorizados del Departamento de Sucre en todas sus fases 1, 2, 3, 4 y 5	\$ 1.932.398.305	100%	\$ 3.285.077.119	100%
Desarrollo e implementación de un sistema de Información que documente las acciones realizadas por el Ministerio del Interior en cumplimiento de las órdenes a su cargo conforme a la sentencia T 025 de 2004	\$ 150.000.000	100%	\$ 255.000.000	100%
Adelantar gestiones tendientes a la construcción e implementación de un sistema que documente todas las acciones adelantadas para dar cumplimiento a la sentencia T- 025 de 2004 y sus autos de seguimiento	\$ 150.000.000	100%	\$ 255.000.000	100%
GESTIÓN Y DESARROLLO LOGÍSTICO DEL PROGRAMA	\$ 770.000.000	100%	\$ 1.309.000.000	100%
Gestionar y apoyar las actividades de la dirección (Prestación de Servicios)	\$ 320.000.000	100%	\$ 544.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Suministro de tiquetes y gastos de logísticos para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres, conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y seguimiento, etc., en cumplimiento de las necesidades propias de la Dirección.	\$ 450.000.000	100%	\$ 765.000.000	100%
TOTAL	\$ 7.094.796.609	100%	\$ 12.061.154.238	100%

3.1.1.3.21 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 – COMUNIDAD INDIGENA (\$14.368.420.725)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIFERENCIA \$ NECESIDAD 2025 - PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON PRESUPUESTO 2024
A-03-04-01-012	\$10.263.157.661	\$14.368.420.725	\$4.105.263.054	40%
TOTAL	\$10.263.157.661	\$14.368.420.725	\$4.105.263.054	40%

BASE LEGAL

Sentencia T-025 de 2004, “Para la recuperación y el goce efectivo de los derechos fundamentales de los desplazados, consagrados en la Constitución Política y amparados por la Ley 387/97”.

La Corte declaró que persiste el Estado de cosas inconstitucional y que no se ha alcanzado un avance significativo e integral en el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Con el fin de hacer seguimiento a las órdenes de la T-025, la Corte Constitucional desarrolló dos caminos:

El primero, realizar audiencias públicas en las que cada cierto tiempo, cita al Gobierno y le pide cuentas de lo que ha hecho. El segundo camino consiste en expedir providencias, conocidas como AUTOS DE SEGUIMIENTO, con el fin de ampliar o aclarar las órdenes al Gobierno, solicitar informes, definir indicadores o señales para comparar los avances, etc., todo con el objeto de que se supere el estado de cosas inconstitucional. Desde el 2004, año en que se dictó la sentencia T-025; hasta principios del año 2010, la Corte Constitucional había expedido alrededor de 80 AUTOS y había hecho 14 audiencias públicas de discusión. Uno de esos autos es el 092 de 2008, referido a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento. Dentro de ese contexto

la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional, crear trece programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, dentro de esos trece programas, le correspondió al Ministerio del Interior atender el punto 8, referente a la Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas.

Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “*Colombia Potencia Mundial de Vida*”, con los pueblos Indígenas y con el pueblo Rom.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025:

Auto 004 de 2009

La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025 de 2004, establece medidas para proteger a la población víctima de desplazamiento, así como aquella que se encuentra en riesgo de estarlo, dadas las violaciones de DDHH y DIH que se presentan en el territorio nacional, especialmente por causa del conflicto armado y otras situaciones que se viven en nuestro país de tipo socioeconómico, ambiental y territorial.

Por lo cual en temas de asuntos indígenas y ROM tiene, entre otras, las siguientes funciones: Asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los pueblos indígenas y ROM en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y culturales.

La Corte Constitucional a través de su sentencia, busca proteger a la población víctima de desplazamiento, así como a aquella que se encuentra en riesgo de estarlo, dadas las violaciones de DDHH y DIH se presentan en el territorio nacional, especialmente por causa del conflicto armado y otras situaciones que se viven en nuestro país de tipo socioeconómico, ambiental y territorial. Cinco años después de esto la Corte Constitucional profiere diferentes autos de seguimiento entre estos el 382, 004 y 005 concernientes a las minorías étnicas, por una parte, por las afectaciones de tipo diferencial que les aquejan, y por otra, por el inminente riesgo de ser extinguidas y desaparecidas tanto física como culturalmente.

Así las cosas, el Auto 004 de 2009 emite dos órdenes para las entidades nacionales y territoriales a saber: i) Diseñar e implementar un Programa de Garantía de Derechos para todos los pueblos indígenas del país; y ii) Formular e iniciar la implementación de 36 Planes de Salvaguarda Étnica, teniendo en cuenta aspectos como las políticas públicas vigentes, la necesidad de desarrollar un enfoque étnico diferencial para los mismos, así como unos mínimos de racionalidad para lo que a la formulación se refiere.

En lo que respecta a la formulación de los planes de salvaguarda étnica, se diseñó y concertó una ruta metodología que en cada una de sus fases reconoce como sujetos activos a los pueblos indígenas.

El primer momento de esta ruta es de preconsulta y vincula a las autoridades del pueblo, a sus líderes, representantes y organizaciones. En este momento, a través de encuentros y asambleas, cada pueblo decide las dinámicas para la elaboración comunitaria del diagnóstico y la construcción de las líneas de acción, siendo particularmente compleja la preconsulta con pueblos como el Wayuu por su densidad demográfica y organización social y política, Embera por dispersión geográfica, características especiales por su forma de vida itinerante, por conservar su lengua materna, por su educación cíclica y por sus particularidades cosmogónicas de los pueblos Awa, Makaguan, Jiw, Hitnü y Nukak .

En la segunda etapa de la ruta se elabora comunitariamente un diagnóstico y unas líneas de acción desde las bases y a partir del marco lógico concertado en la etapa de preconsulta, esto con el fin de conocer el estado actual y las principales afectaciones de derechos como al territorio, la salud, la educación, la autonomía y el gobierno propio, así como las propuestas que surgen desde las comunidades para dar respuesta a estas afectaciones.

La tercera etapa es de concertación de programas e implementación de proyectos que implica la participación de las instituciones de Gobierno a nivel departamental y nacional en un ejercicio de diálogo con las autoridades y representantes de los pueblos indígenas que tiene como referente el documento diagnóstico y las líneas de acción. En esta etapa, el Gobierno provee los recursos y garantiza los espacios de encuentro que permitan avanzar en el aprendizaje de doble vía y avanzar en la consolidación de una oferta institucional con enfoque diferencial. Finalmente, está la etapa de implementación que contiene el diseño de los instrumentos de evaluación y seguimiento.

El grueso de los planes de salvaguarda comenzará la fase de implementación en la cual la DAIRM tiene el compromiso con cada uno de los pueblos de trabajar en el diseño y la implementación de acciones y proyectos en el corto plazo que permitan el fortalecimiento de la autonomía, el gobierno y la justicia propia. Esta fase, igual que las anteriores, requerirá del trabajo concertado con las autoridades de cada uno de los pueblos.

El gobierno tiene el compromiso de acelerar el proceso de cumplimiento de los Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, especialmente el 004 de 2009, el 173 de 2012 y el 382 de 2012.

De acuerdo con los avances reportados por las instituciones, y partiendo de los Ejes de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional, sobre los cuales la Corte emitió la T025/04 y sus autos de seguimiento se propuso desarrollar un plan de choque que permita avanzar en la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas amparados por el Auto 004 de 2009, especialmente para los pueblos Awá, Hitnü, Makaguan, Nükak, Jiw, y algunos de las comunidades del pueblo Embera (Autos 382/12, 174/11, 173/12).

Finalmente, La Corte Constitucional emite el Auto de seguimiento 266 de 2017, en el cual da una serie de ordenes al Ministerio del Interior, en concordancia con la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos de Seguimiento 004 de 2009 y 382 de 2012, teniendo en cuenta lo anterior se establecen los siguientes; i) en un primer momento, la Orden Séptima;

“Diseñar e implementar una estrategia de evaluación de la situación de los pueblos indígenas que no cuentan con un Plan de Salvaguarda Étnica, priorizando aquellos pueblos identificados en este pronunciamiento. Esta evaluación deberá permitir concluir: (i) cuáles de ellos se encuentran en un riesgo de exterminio físico y cultural por el fenómeno de desplazamiento forzado, en los términos descritos en el auto 004 de 2009, para con posterioridad (ii) desplegar la atención que sea más adecuada a su situación de vulnerabilidad, discriminación y marginalidad, y con la que se garantice una (iii) respuesta estatal planificada, integral y sin daño.”

ii) en un segundo momento, la Orden Octava;

“Formular e iniciar la implementación de Planes de Salvaguarda Étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para los pueblos Tukano, Barí y Kisgó”

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario generar la disposición para adelantar acciones en el marco de la Orden Séptima, que ameritan adelantar un proceso de evaluación del riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran los Pueblos Indígenas que no están relacionados con Planes de Salvaguarda y a su vez generar acciones de protección y prevención en el marco de sus Derechos fundamentales.

Para la Orden Octava, se debe adelantar un proceso de concertación en el marco de la Consulta Previa, teniendo en cuenta las Rutas establecidas con los Pueblos Indígenas Kisgo, Tukano y Barí. Lo anterior refiere a que cada una de las realidades de estos grupos étnicos genera particularidades al momento de la construcción de un proceso identificado como Pueblo, por tal razón, las barreras territoriales y geográficas.

Los recursos solicitados para la vigencia 2025, se requieren para dar cumplimiento a los diferentes acuerdos adquiridos en la concertación del PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*, con los Pueblos Indígenas.

La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías para la vigencia 2025, se realiza una solicitud con un incremento del 40%”, tomó en cuenta los costos históricos de las diferentes asistencias técnicas realizadas y de los diferentes Planes de Salvaguarda que ha realizado esta Dirección y a esto se le realizó un respectivo incremento. La solicitud para de recursos aumentó a comparación de la proyección de 2024, debido a la dinámica del buen dialogo que se viene teniendo con la población objetivo y a su vez se requiere dar cumplimiento a los diferentes acuerdos adquiridos en la concertación del PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*.

Los recursos adicionales solicitados con respecto al presupuesto de 2025 permitirán realizar lo siguiente:

El incremento se presenta debido a las acciones que se deben llevar a cabo para diseñar implementar de manera concertada los proyectos en el marco de la línea misional referido al componente de fortalecimiento organizativo, de la autonomía y gobierno propio de los siguientes pueblos: Wayuu, Kogui, Awá, Kichwa y Totoró, Wiwa, Uitoto, Yukpa, Uwa, Chimila, Siona, U’wa, Cofán, Embera, Nukak, Jiw, Makagüan, Hitnü, Murui, Yanacona, Kamentza, Kokonuko, Misak, Wounaan, Tule, Inga, Caño Mochuelo, Sikuni, Betoy, Pijao, Coreguaje, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Zenú Nasa, en el marco de los Planes de Salvaguarda que permita garantizar su supervivencia, pervivencia y vivencia étnica.

A lo anterior las acciones que se deben realizar en el marco del Auto de seguimiento 266 de 2017, el cual ordena adelantar un proceso de concertación en el marco de la Consulta Previa, teniendo en cuenta las Rutas establecidas con los Pueblos Indígenas Kisgo, Tukano y Barí. Lo anterior refiere a que cada una de las realidades de estos grupos étnicos genera particularidades al momento de la construcción de un proceso identificado como Pueblo, por tal razón, las barreras territoriales y geográficas.

A su vez, adelantar un proceso de evaluación del riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran los Pueblos Indígenas que no están relacionados con Planes de Salvaguarda y a su vez generar acciones de protección y prevención en el marco de sus Derechos fundamentales.

Finalmente es de señalar que las acciones previstas en el corto plazo en el componente de implementación del componente de fortalecimiento organizativo y gobierno propio incluyen los compromisos adquiridos con las autoridades, líderes y comunidades en el marco de los planes de salvaguarda. En este sentido es necesario considerar que el recorte presupuestal de 2016,

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 afectó el cronograma de actividades en el corto plazo y llevó a postergar la implementación de dichas acciones, por tales motivos la Corte Constitucional en el Auto 266 de 2017, establece un cumplimiento bajo en los Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

El cumplimiento del Auto 004 de 2009 incluye una ruta concertada para la formulación comunitaria de un diagnóstico y las líneas de acción del plan de salvaguarda de cada una de los 36 pueblos indígenas mencionados por la Corte Constitucional, una fase de formulación programas y proyectos y una fase de implementación. Para el año 2020 una vez formulados los diagnósticos y concertados con las instituciones del orden nacional y territorial, el Ministerio del Interior debe avanzar en la implementación de las acciones, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que de acuerdo a sus competencias misionales son concertados por los pueblos indígenas en el plan de salvaguarda.

Como parte de las afectaciones identificadas por los pueblos indígenas por causa del desplazamiento y el conflicto armado está el debilitamiento de las estructuras tradicionales de gobierno propio y como línea de acción propuesta, acciones programas y proyectos orientados al fortalecimiento del gobierno. El desarrollo de esta línea de acuerdo con los mínimos establecidos por la Corte Constitucional que incluye la implementación de proyectos de fortalecimiento del gobierno propio con las diferentes comunidades que pertenecen a los 36 pueblos indígenas teniendo en cuenta las diferentes comunidades, es competencia del Ministerio del Interior.

La DAIRM se comprometió a iniciar la implementación del componente de autonomía, gobierno y justicia propia con los pueblos indígenas que ya han avanzado en su diagnóstico y en la concertación, resultando de lo anterior el compromiso de diseñar e implementar de manera concertada y acorde al enfoque diferencial las acciones y proyectos que permitan la garantía de este derecho

En el marco de la misionalidad de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior se encuentra la articulación de los espacios de diálogo y concertación interinstitucional para la formulación de planes, programas y proyectos de acuerdo a la competencia de cada entidad del gobierno orden nacional y territorial.

En este sentido, es necesario articular los espacios entre los pueblos indígenas y las instituciones del gobierno para la formulación de planes, programas y proyectos en el marco de los Planes de Salvaguarda Étnica.

Construcción del documento diagnóstico y líneas de acción de manera participativa con las autoridades indígenas y las comunidades del pueblo indígena Wayuu, capítulos Uribí y Manaure, acuerdos que fueron concertados con las autoridades de estos pueblos en el 2015 y comienzos de 2016, sin embargo, dadas las realidades presupuestales de 2019, 2020, 2021 y 2022, para la vigencia 2024 se logró adelantar actividades y para la 2025 se requieren recursos para seguir con el desarrollo de las actividades en el marco del Plan de Salvaguarda.

Construcción del documento diagnóstico y líneas de acción de manera participativa con las autoridades indígenas y las comunidades del pueblo indígena Kisgo, Barí y Tukano, teniendo en cuenta lo ordenado en el Auto 266 de 2008.

El incremento de los recursos en un 40%, para este Programa Misional de Funcionamiento, se debe a varios factores entre ellos el aumento de la Gasolina que se ha venido presentando en el

último año, ya que, para poder llegar a las diferentes comunidades indígenas, se llega por medio de transporte terrestre o en su defecto de transporte fluvial, adicional a esto los productos de la canasta familiar en las zonas alejadas como lo son los departamentos de la Amazonia Colombia, se encaren debido al alto costo de la Gasolina y en alguno de ellos solo se puede llegar por medio aéreo, por esta razón se solicita el referido aumento.

Estos recursos se requieren para dicho cumplimiento, toda vez que son para desarrollar los acuerdos del PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025:

TIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
	PROYECTADO (Pesos)		PROYECTADO (Pesos)	
Apoyar a los pueblos indígenas en el fortalecimiento del Gobierno Propio.	\$ 10.263.157.661	100%	\$ 14.368.420.725	100%
Informar en el marco de las competencias de la DAIRM acerca de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, con base en los seguimientos a los autos relacionados con la sentencia.	\$ 0	2	\$ 0	2
TOTAL	\$ 10.263.157.661		\$ 14.368.420.725	

3.1.1.3.22 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES. LEY 73 DE 1981 Y DECRETO 1320 DE 1982. (\$1.241.425.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-06-01-001	\$ 1.079.500.000	\$ 1.241.425.000	\$ 161.925.000	15%
TOTAL	\$ 1.079.500.000	\$ 1.241.425.000	\$ 161.925.000	15%

BASE LEGAL

No.	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Ley 73	1981	Par la cual el Estado interviene en la distribución de bienes y servicios para la defensa del consumidor, y se conceden unas facultades extraordinarias.
2	Decreto 1320	1982	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 73 de 1981.
3	Decreto 1441	1982	Por el cual se regula la organización, el reconocimiento y el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de consumidores y se dictan otras disposiciones.
4	Ley 182	1995	Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.
5	Ley 1480	2011	Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.
6	Decreto 1152	2022	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la Acción Comunal dando cumplimiento a los objetivos propuestos por el Ministerio y contribuyendo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, tiene para la vigencia 2025 el propósito de fortalecer a las asociaciones y ligas de consumidores del país, brindando información relevante a través del espacio institucional “El Boletín del Consumidor” otorgado exclusivamente a la Confederación Colombiana de Consumidores.

Adicionalmente y mediante el trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Confederación Colombiana de Consumidores, se podrá divulgar mensajes institucionales a través del espacio televisivo el “Boletín del Consumidor”, generando un canal de comunicación con la ciudadanía y logrando el desarrollo de acciones que promuevan la implementación de la Ley de Participación ciudadana.

La acogida en el pueblo colombiano y la alta audiencia del boletín del consumidor garantiza un beneficio para el Ministerio y los ciudadanos, toda vez que la ciudadanía conocerá de primera mano y oportunamente los programas, proyectos e iniciativas que se difundan por este medio de comunicación.

El incremento del presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento - Fortalecimiento de las asociaciones y ligas de consumidores. (Ley 73 de 1981 y Decreto 1320 de 1982) correspondiente al 15% para la vigencia 2025 y representados en la suma de \$161.925.000, se proyecta con base en los contratos y convenios suscritos durante los últimos 20 años, desde la vigencia 2003. Asimismo, con base en la Resolución No. 6564 del 16 de marzo de 2022, “*Por medio de la cual se asignan los espacios institucionales especiales de protección del consumidor para el período comprendido entre el 31 de marzo de 2022 y el 30 de marzo de 2023*”, mediante la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones asignó a la Confederación Colombiana de Consumidores 247 espacios institucionales especiales de un minuto y treinta segundos diarios y sobre la cual se pretende el incremento de estos espacios, según el acuerdo final, para el abordaje de temas como: La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, el acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los

términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas, la educación del consumidor, la libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2024-2025

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
7.9 Suscribir contrato para la producción y realización del espacio institucional del “Boletín del Consumidor” para la vigencia 2024.	Asociaciones y ligas de consumidores fortalecidas a nivel nacional mediante la información brindada por conducto del espacio institucional “El Boletín del Consumidor”.	\$1.079.500.000	1	\$1.241.425.000	1
	TOTAL	\$1.079.500.000	1	\$1.241.425.000	1

3.1.1.3.23 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. (\$48.720.300.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento porcentual necesidad 2024 en relación con 2025
A-03-06-01-012	\$ 28.659.000.000	\$ 48.720.300.000	\$ 20.061.300.000	70%
TOTAL	\$ 28.659.000.000	\$ 48.720.300.000	\$ 20.061.300.000	70%

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Constitución Política de Colombia	1992	Medidas para proteger y reconocer la diversidad étnica

2	Convenio 169 OIT	1991	Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.
3	Ley 21	1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 DE 1991
4	Ley 70	1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
5	Ley 1753	2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
6	Decreto 1320	1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
7	Ley 22	1981	Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
8	Ley 1955	2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
9	Ley 2160	2021	Por medio de la cual se modificó la Ley 80 de 1993, permitiendo la contratación de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de base con entidades del Estado.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Estado social de derecho que adoptó la Constitución Política de 1991, instituyó como principio fundamental del Estado Colombiano el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, con lo cual queda plasmado la nueva concepción del Estado Colombiano, modelo en el cual se privilegia al hombre y la sociedad por encima de las leyes y del Estado mismo.

En desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución, el 27 de agosto de 1993 se expide la Ley 70, “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, como el primer instrumento de derecho interno que permite un reconocimiento y una materialización de la política pública en beneficio de la población Afrodescendiente de Colombia.

Dentro de este contexto se diseñan programas de asistencia técnica y social, conservación de costumbres, la protección de conocimientos tradicionales y ancestrales que propenden por la protección y promoción de los derechos de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

En este sentido para continuar en el cumplimiento de la ejecución de las actividades y eventos que se requieran y en aras del mejoramiento continuo, en cumplimiento de la misionalidad de esta dirección, en lo dispuesto y establecido en el decreto 1152 de 2022, “Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones”, se diseñan programas de asistencia técnica y social, conservación de costumbres, la protección de conocimientos tradicionales y ancestrales que propenden por la protección y promoción de los derechos de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Por lo cual, se hace necesario fortalecer los procesos de concertación y consulta entre las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras con el Gobierno Nacional en los temas que tengan relación con los derechos fundamentales de las comunidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2025 se ajustó el Programa Misional de Funcionamiento en un 70%, equivalente a un incremento de \$20.061.300.000

Justificación de incremento en las subactividades

ACTIVIDAD	COSTOS	COSTOS
	2024	2025
Coordinar y realizar los procesos de Consulta Previa para la adopción de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de Afectar a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Espacio Nacional de Consulta Previa - ENCP y Sesiones de las Comisiones)	\$ 1.500.000.000	\$ 2.550.000.000

La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Se fundamenta la consulta previa en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 de la OIT).

Así mismo en línea del gobierno central y dando alcance a los indicadores PMI, y cumplimiento para la vigencia solicitada y cumpliendo con lo establecido con la normatividad legal se prevén decisiones y acciones que afectan directamente a los Pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que requiere mover el aparato logístico y técnico para atender las antes mencionadas, basados en datos históricos, análisis de las líneas bases plasmadas en el plan de acción de la vigencia 2024, y los costos de operación que conllevan la realización de una consulta previa estimada por valor de \$1.500.000.000 en las 5 fases, (certificación, coordinación y preparación, preconsulta, consulta, seguimiento).

ACTIVIDAD	COSTOS	COSTOS
	2024	2025
Impulsar acciones para fortalecer la participación de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y la población LGBTII de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que conduzcan a la inclusión en los escenarios sociales, económicos, educativos, ambientales y culturales.	\$ 2.950.000.000	\$ 5.015.000.000

Siendo la principal función de la Dirección, el asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública orientada al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural en favor de los pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, así como coordinar interinstitucionalmente la realización de los espacios de participación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras previstos por ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representan.

Realizando un análisis de las vigencias 2023 - 2024 plasmadas en las matrices del Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, y demás instrumentos de planeación se requiere apoyar a las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y participación de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y la población LGBTI de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que conduzcan a la inclusión en los escenarios sociales, económicos, educativos, ambientales y culturales de las correspondiente al 37.83% para la vigencia 2024 y representados en la suma de \$2.950.000.000.

Lo anterior se proyecta con base en la necesidad de dar continuidad a la contratación del Operador Logístico quien históricamente acompaña la operación de la dirección desde hace 11 años y quien para la siguiente vigencia operará la ejecución de aproximadamente el 73% de las actividades del programa en mención.

Así mismo, la contratación de Convenios que permiten el desarrollo del 18% de las actividades programadas. Lo anterior, guardando coherencia con la base de incremento anual de Ley, así como el costo de los eventos cotizados por el operador para vigencias anteriores, no obstante, el aumento de recursos en estas contrataciones reflejará un mayor número de requerimientos para dichos procesos, los cuales proyectan 6 acciones adicionales entre las que se encuentran asistencias técnicas, fortalecimientos institucionales, encuentros subregionales y nacionales, entre otros.

ACTIVIDAD	COSTOS	COSTOS
	2024	2025
Acompañar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos sociales con las comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras, como son entre otras: Chocó Buenaventura, Pacífico Nariñense, Cauca, San Andrés, Mesa de Dialogo permanente por Tumaco y el pacífico Nariñense, Mesa Regional del pacífico afro caucano y Nariñense	\$ 1.529.000.000	\$ 2.599.300.000

Se hace necesario fortalecer los procesos de concertación y consulta entre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con el Gobierno Nacional en los temas que tengan relación con los derechos fundamentales de las comunidades.

Así mismo en atención a las disposiciones del Decreto 766 de 2018, es necesario generar un espacio de trabajo interinstitucional para establecer tiempos y acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos suscritos desde el 2016 entre el Gobierno Nacional y el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó con ocasión al Paro Cívico del Chocó 2016 – 2017. Por otro lado, están pendiente la Mesa de Diálogo con ACONC, PCN, ASOM y se hace necesario reactivar dicha mesa.

A la fecha existen 112 compromisos en materia de Salud, Educación, Servicios Públicos, Deporte, Cultura, Comunicaciones, entre otros temas pendientes por lo que se hace necesario tener un diálogo sincero con ellos que les demuestre el compromiso del Gobierno Nacional por cumplirle al Departamento del Chocó.

Realizando un análisis de las vigencias 2023, 2024 plasmadas en las matrices del Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, y demás instrumentos de planeación, se evidencia que se requiere un 20% del valor solicitado para la contratación profesional que articulan y reportan los avances de los compromisos por valor de \$ 519.860.000 y un 80% de lo solicitado equivalente a \$ 2.079.440.000 para la operación logística y desplazamientos, mesas de trabajo, y demás atenciones a compromisos.

ACTIVIDAD	COSTOS	COSTOS
	2024	2025
Gestión y desarrollo logístico del programa misional de funcionamiento	\$ 6.200.000.000	\$ 10.540.000.000

Este incremento se debe a que un porcentaje de estos recursos pertenecen a la operación logística, organización y producción de los eventos, tiquetes, papelería, Gastos de transporte del Ministerio, Viáticos, OPS entre otros) para el desarrollo de las actividades asociadas a las iniciativas que hacen parte integran de los instrumentos de planeación.

Realizando un análisis de las vigencias 2023,2024 plasmadas en las matrices del Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, y demás instrumentos de planeación y verificando líneas base de vigencias anteriores, se evidencia que se requiere un 20% para la contratación de profesionales, lo que equivale a \$2.108.000.000 y el restante 80% de los recursos solicitados equivalente a \$8.432.000.000 a operación logística, viajes y tiquetes, recursos solicitados por el Ministerio.

Los incrementos del presupuesto frente a la vigencia anterior obedecen a dos motivos principales, los aumentos en las tablas salariales para la contratación de servicios profesionales del Ministerio del Interior, así mismo se ve la necesidad en realizar un cambio del tipo de profesionales requeridos para la vigencia 2025

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%, es decir, 3,84 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,12%. En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%. El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

La división Transporte registró una variación anual de 15,42%, siendo esta la mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (44,80%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (20,19%) y compra y cambio de aceite (15,85%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,03%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-1,30%).

La división restaurantes y hoteles registró una variación anual de 13,22%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores **incrementos de** precio se registraron en las subclases: gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y

autoservicio (14,98%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,84%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (comida, bebidas, cover) (8,29%), servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (12,11%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (12,93%).

La división Información y comunicación registró una variación anual de 0,12%, siendo esta la menor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (1,10%) y servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,05%).

Parte del presupuesto solicitado para el programa misional de funcionamiento se destinará para los gastos recurrentes administrativos como lo son viáticos, desplazamientos terrestres y aéreos, apoyo transporte aéreo del demandante de la cartera, papelería, gastos de computador entre otros.

ACTIVIDAD	COSTOS	
	2024	2025
Realizar el proceso de Registro Público Único Nacional y/o actualización de los Consejos Comunitarios, Formas o Expresiones Organizativas, Organizaciones de Base y las demás que cree la Ley, de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	\$500.000.000	\$ 850.000.000

Por parte de la Dirección se debe dar continuidad permanente a brindar apoyo jurídico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en cuanto al registro público único nacional de consejos comunitarios, organizaciones de base y formas u expresiones organizativas, brindar respuesta a las acciones de tutela y conceptuar sobre proyectos de ley y leyes vigentes en donde se encuentren vinculadas las comunidades objeto de protección por parte de la dirección.

Realizando un análisis de las vigencias 2023,2024 plasmadas en las matrices del Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, y demás instrumentos de planeación y verificando líneas bases de vigencias anteriores y registros de congestión de tramites en los aplicativos de gestión que utiliza el Ministerio, se requiere un 70% de los recursos solicitados equivalente a \$ 595.000.000 para la contratación de personal de apoyo para realizar la descongestión de expedientes, y atender las solicitudes de inscripción, actualización y registros de consejos comunitarios y/o expresiones organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el 30% restante equivalente a \$ 255.000.000 a operación logística, tiquetes y viajes, convocatorias, desplazamiento de la población para Apoyar jurídica y técnicamente los consejos comunitarios y/o expresiones organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2024-2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Aumentar la articulación interinstitucional en el orden municipal, departamental y nacional para la formulación e implementación de acciones institucionales, que garanticen el goce efectivo de los derechos (sociales, económicas, educativas, políticas, ambientales y culturales) de los Pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. (GESTION INTERINSTITUCIONAL)	\$ 8.879.000.000	100%	\$ 15.094.300.000	100%
Asesorar a las entidades territoriales en la formulación y seguimiento de la política pública orientada al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que vele por su integridad y promueva sus derechos.	\$ 900.000.000	100%	\$ 1.530.000.000	100%
Impulsar acciones para fortalecer la participación de: mujeres, jóvenes, adultos mayores y la población LGBTIQ+ de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que conduzcan a su inclusión en los escenarios sociales, económicos, educativos, ambientales y culturales.	\$ 2.950.000.000	100%	\$ 5.015.000.000	100%
Acompañar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos sociales de Chocó Buenaventura, Pacífico Nariñense, Cauca, San Andrés, Mesa de Dialogo permanente por Tumaco y el pacífico Nariñense, Mesa Regional del pacífico afro caucano y Nariñense con las comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras.	\$ 1.529.000.000	100%	\$ 2.599.300.000	100%
Realizar acciones para la consecución de recursos de Cooperación Internacional en coordinación con el Grupo de Gestión de Recursos Internacionales, para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que beneficien a estas comunidades.	\$ 200.000.000	100%	\$ 340.000.000	100%
Fortalecer a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el desarrollo de una estrategia en la	\$ 400.000.000	100%	\$ 680.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
resolución de conflictos de conformidad con sus usos y costumbres.				
Realizar eventos y actividades conmemorativas a: conmemoración del decenio afro, conmemoración - 21 de mayo día de la afrocolombianidad y reconocimiento a líderes y lideresas afrodescendientes.	\$ 700.000.000	100%	\$ 1.190.000.000	100%
Realizar eventos de Conmemoración : 12 de octubre " "DIA DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL DE LA NACIÓN COLOMBIANA""	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Coordinar y realizar los procesos de Consulta Previa para la adopción de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de Afectar a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Espacio Nacional de Consulta Previa - ENCP y Sesiones de las Comisiones)	\$ 1.500.000.000	100%	\$ 2.550.000000	100%
Adelantar acciones para dar cumplimiento al compromiso de continuidad de la Consulta Previa del Estatuto Raizal y curul raizal en el marco del decreto 1211 de 2018.	\$ 500.000.000	100%	\$ 850.000.000	100%
Divulgar la oferta institucional a favor de las Comunidades que esta atiende y fortalecer los procesos organizativos de los pueblos y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	\$ 200.000.000	100%	\$ 340.000.000	100%
Apoyar los procesos de formación, conocimiento, difusión, protección y defensa de los derechos fundamentales, el reconocimiento, salvaguarda de la integridad, diversidad étnica y cultural de los Pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. (DERECHOS FUNDAMENTALES)	\$ 6.380.000.000	100%	\$ 10.846.000.000	100%
Brindar asistencias técnicas para la formulación de rutas de sistemas de Justicia Ancestral de las comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras tradicionales, en coordinación con el Ministerio de Justicia.	\$ 400.000.000	100%	\$ 680.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar acompañamientos a las Consultas previas de POA y la implementación de mecanismos de conservación y protección de usos, costumbres y prácticas tradicionales, en coordinación con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa	\$600.000.000	100%	\$ 1.020.000.000	100%
Acompañar y cumplir con las acciones para la Protección y defensa de Derechos Humanos - Promoción del conocimiento y difusión de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en los espacios de: CERREM	\$800.000.000	100%	\$ 1.360.000.000	100%
Acompañar y cumplir con las acciones para la Protección y defensa de Derechos Humanos - Promoción del conocimiento y difusión de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en los espacios de: CIPRAT, Planes Específicos, Medidas Cautelares.	\$800.000.000	100%	\$ 1.360.000.000	100%
Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores establecidas en el PMI del acuerdo final de paz y en especial, las del capítulo étnico de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	\$900.000.000	100%	\$ 1.530.000.000	100%
Acompañar acciones para la atención a sujetos de reparación colectiva víctimas del conflicto armado en coordinación con la UARIV, en el marco de la Ley de víctimas 1448 y el Decreto Ley 4635 de 2011	\$ 500.000.000	100%	\$ 850.000.000	
Implementar acciones para dar cumplimiento a sentencias, autos, relacionadas con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diferentes a la sentencia T-025-04, (Juzgados de restitución de tierras, Justicia Especial para la Paz)	\$1.700.000.000	100%	\$ 2.890.000.000	100%
Brindar asistencia técnica para la formulación de los Planes de manejo ambiental y agendas ambientales de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en coordinación con las diferentes autoridades ambientales.	\$ 500.000.000	100%	\$ 850.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Coordinar estrategias y programas de formación propia en cultura democrática y DDHH con pueblos y comunidades étnicas	\$ 180.000.000	100%	\$ 306.000.000	100%
Planificar y coordinar el desarrollo de Acciones, políticas, planes y programas apoyando la identificación, formulación y gestión de proyectos que benefician a los Pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; implementando procesos de seguimiento y monitoreo.(SEGUIMIENTO Y MONITOREO)	\$ 8.200.000.000	100%	\$ 13.940.000.000	100%
Expedir las certificaciones de Autorreconocimiento para: 1. Autorreconocimiento como miembro de las Comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras 2. Exoneración del servicio militar establecido en la sentencia 433 de 2021, que se presenten ante la Dirección.	\$ 150.000.000	100%	\$ 255.000.000	100%
Identificar, divulgar y asistir técnicamente a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en la formulación y gestión de proyectos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación	\$150.000.000	100%	\$ 255.000.000	100%
Realizar seguimiento a la implementación de la Catedra de estudios afrocolombianos y de desarrollo de la etnoeducación	\$ 100.000.000	100%	\$ 170.000.000	100%
Participar en la aprobación de las condonaciones del fondo especial de créditos educativos condonables de Comunidades Negras -FECECN, administrado por el ICETEX	\$100.000.000	100%	\$ 170.000.000	100%
Acompañar a los Consejos Comunitarios en la formulación de los planes de ETNODESARROLLO y a las Organizaciones de Base y Formas y/o expresiones organizativas en sus planes de actividades.	\$ 100.000.000	100%	\$ 170.000.000	100%
Diseñar, formular, ejecutar y articular con otras instituciones programas, planes y proyectos a favor de los pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	\$1.000.000.000	100%	\$ 1.700.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar sesiones de trabajo en el marco de la Planeación estratégica de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	\$ 100.000.000	100%	\$ 170.000.000	100%
Realizar estudio de reembolso de transportes para las instancias representativas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para garantizar la participación de los diferentes espacios a nivel Nacional	\$ 300.000.000	100%	\$ 510.000.000	100%
Gestión y desarrollo logístico del programa misional de funcionamiento	\$6.200.000.000	100%	\$ 10.540.000.000	100%
Apoyar el mejoramiento de las capacidades técnicas, jurídicas, para mejorar la gobernabilidad territorial, conocimiento de sus derechos individuales y colectivos; proponer y conceptuar proyectos de ley o decretos que desarrollen los derechos de los Pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. (SOPORTE NORMATIVO)	\$5.200.000.000	100%	\$ 8.840.000.000	100%
Realizar el proceso de Registro Público Único Nacional y/o actualización de los Consejos Comunitarios, Formas o Expresiones Organizativas, Organizaciones de Base y las demás que cree la Ley, de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	\$ 500.000.000	100%	\$ 850.000.000	100%
Expedir los Certificados de Inscripción y/o Actualización en el Registro Público Único Nacional de los Consejos Comunitarios, Formas o Expresiones Organizativas, Organizaciones de Base y las demás que cree la Ley, de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	\$400.000.000	100%	\$ 680.000.000	100%
Acompañar al proceso de Registro Público Único Nacional de los Consejos Comunitarios (de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que se encuentren con mayores deficiencias organizativas y pertinencia de la modificación de requisitos para la inscripción del CC Punta Mulatos y Playas Unidas del municipio de La Tola y adelantar acciones para impulsar el proceso de titulación	\$150.000.000	100%	\$ 255.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
colectiva de comunidades negras en la subregión PDET Macarena Guaviare.				
Atender oportunamente las peticiones y acciones de tutelas, que se presenten contra de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	\$ 700.000.000	100%	\$ 1.190.000000	100%
Atender oportunamente los requerimientos de Entes de control (Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo y fiscalía), Congreso de la República y Altas Cortes.	\$350.000.000	100%	\$ 595.000.000	100%
Acompañar a la Vicepresidencia de la República e instituciones responsables del proceso de Reglamentación de la Ley 70/93.	\$ 250.000.000	100%	\$ 425.000.000	100%
Proponer y concertar proyectos de ley o decretos que desarrollen los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	\$350.000.000	100%	\$ 595.000.000	100%
Modernización de la plataforma tecnológica de Registro Público Único Nacional de los Consejos Comunitarios, (y/o demás) Formas o Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base de las comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras (Todas las fases)	\$ 400.000.000	100%	\$ 680.000.000	100%
Actualización de Registro Público Único Nacional de los Consejos Comunitarios, Formas o Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base de las comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras, en la plataforma tecnológica implementada (Todas las fases)	\$ 300.000.000	100%	\$ 510.000.000	100%
Adelantar acciones para identificar y hacer seguimiento a los diferentes actos o prácticas de discriminación por razones de raza, etnia, religión , genero, orientación sexual, opinión o participación política, discapacidad y demás actos de discriminación, dando traslado al Observatorio “Colombia es de todos”	\$ 100.000.000	100%	\$ 170.000.000	100%
Brindar Asistencia técnica en los procesos de construcción y/o actualización de reglamentos internos de los Consejos Comunitarios y de las	\$ 600.000.000	100%	\$ 1.020.000.000	100%

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Formas o Expresiones Organizativas, mediante la socialización de la metodología, en el marco de la reglamentación de la Ley 70/93 y el derecho autónomo y propio de las comunidades.				
Brindar asistencia técnica para el levantamiento de los censos internos de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y de las Formas o Expresiones Organizativas en el marco de las funciones de la Dirección, según la Resolución 1969 de 2017.	\$ 600.000.000	100%	\$ 1.020.000.000	100%
Realizar la secretaría técnica a la consulta de las Leyes y normas para la implementación del Acuerdo Final que afectan a los, Pueblos étnicos que participan de manera real y efectiva en la construcción y ajustes normativos, relacionados con las garantías a la participación ciudadana.	\$500.000.000	100%	\$850.000.000	100%
TOTAL	\$28.659.000.000	100%	\$ 48.720.300.000	100%

3.1.1.3.24 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, MINORÍAS Y ROM. (\$142.857.400.000).

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIFERENCIA \$ NECESIDAD 2025 - PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON PRESUPUESTO 2024
A-03-06-01-13	\$102.041.000.000	\$142.857.400.000	\$40.816.400.000	40%
TOTAL	\$102.041.000.000	\$142.857.400.000	\$40.816.400.000	40%

BASE LEGAL

- Pacto internacional de derechos civiles y políticos
- Declaración de los derechos humanos
- Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales
- Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas
- Convenio 169 OIT, "Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes"

- Ley 21 de 1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989”.
- Decreto – Ley Número 4633 del 2011, “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.”
- Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
- Decreto 1953 de 2014 “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política”.
- Decreto 632 de 2018 “Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés”.
- Decreto 1232 de 2018 “Por el cual se adiciona el Capítulo 2 del Título 2, de la Parte 5, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para establecer medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural”.
- Decreto 1500 de 2018 “Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras disposiciones”.
- Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”, con los pueblos Indígenas y con el pueblo Rom.

En esa medida, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, estableció dos enfoques de trabajo en aras de dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto 008. Primero, diseñar e implementar el Sistema de Información Indígena de Colombia (SIC), el cual cuenta, por una parte, con un sistema georeferenciado de resguardos y comunidades, denuncias, reglamentos internos y línea base de información etnográfica sobre los ciento dos pueblos indígenas y, por otra, con el reporte de los autos de seguimiento a la sentencia T-025.

Segundo, realizar estudios de caracterización étnico territorial, con el objeto visibilizar las vulneraciones al territorio, a partir de la descripción y relacionamiento tanto de los conflictos directos como de los adyacentes, para lo cual se toma como punto de referencia la visión propia de los pueblos indígenas, en respeto de la Ley de Origen y las dinámicas propias de su organización social. Además, estos estudios impulsarán el desarrollo del SIIC, en el entendido que aportarán a la consolidación de la información geográfica y brindarán lineamientos que permitan comprender desde una perspectiva intercultural, las distintas situaciones que le impiden a la población indígena el goce efectivo del derecho al territorio.

Por lo anterior, desde la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, se han establecidos dos enfoques de trabajo en aras de dar cumplimiento a lo relacionado en la garantía de los derechos étnico-territoriales. En primer lugar, avanzar en la implementación de los decretos 632, 1232 y 1500 de 2018, en segundo lugar, avanzar con el fortalecimiento organizativo de las comunidades y territorios indígenas desde el fortalecimiento del gobierno propio a través del impulso en la implementación del decreto 1953 de 2018.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

El presupuesto solicitado halla su sustento en varios aspectos normativos y políticos que pueden enunciarse de la siguiente manera. Primero encontramos las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley 1444 del 4 de mayo de 2011 donde se produjo la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia, así como las disposiciones del Decreto 2893 del 11 de agosto del mismo año, donde se determinaron los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio del Interior en tanto formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, así como los planes, programas y proyectos para diferentes materias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, razón por la cual la pervivencia integral de los Pueblos Indígenas, sus culturas, sistemas e instituciones de organización social, política y normatividad es criterio fundamental al definir la estructura político-administrativa de la Nación. Estos territorios son el ámbito ancestral de gobierno y vida integral de los pueblos indígenas que hoy los poseen bajo la figura legal de resguardos indígenas, y sus autoridades tradicionales constituyen actualmente la figura legítima y efectiva de gobierno, bajo sus particulares sistemas e instituciones jurídicas, políticas y sociales, de organización social, representando la figura estatal colombiana de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política.

En diciembre del año 2014 se refrendó el compromiso de Estado al ser incorporado formalmente el compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto en la Mesa Permanente de Concertación, en donde se manifestó la necesidad de expedir un Decreto que cobijara las necesidades de los departamentos del Guainía, Amazonas y Vaupés, puesto que no existía aplicabilidad en lo regulado por el Decreto 1953 del 2014. Por otra parte, en sesión de Mesa Regional Amazónica del 18 de diciembre del mismo año, los delegados del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y el bloque territorial conformado por el IGAC, DANE y el antiguo INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras –ANT-, confirmaron su participación en la elaboración del Decreto.

Durante la vigencia del año 2015, se logró coordinar desde la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, las sesiones de trabajo continuas que dieron lugar a un borrador de Decreto, el cual fue socializado en el marco de la consulta previa con las Autoridades Tradicionales Indígenas de los departamentos del Amazonas, Vaupés y Guainía, en el marco de un convenio de asociación entre la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC, financiado por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Los logros de dicho convenio se evidenciaron en el escenario final de concertación citado en diciembre de 2015, donde se logró presentar la versión final del Decreto.

Una vez presentado el borrador del proyecto se logró concertar dicha versión, la cual fue presentada en el escenario citado por la Viceministra de Participación e Igualdad de Derechos, del 14 de marzo del 2016. El decreto logró unificarse y se trabajó en una versión que pasó a revisión jurídica para firma del señor Ministro del Interior el día 1 de agosto, luego de su publicación oficial en la página de la entidad.

De igual manera es necesario avanzar en acciones que promuevan y garanticen los derechos de las comunidades indígenas, como misionalidad de la dirección, en dicho sentido las acciones marco del grupo de promoción de derechos se encuentran en la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA PUEBLOS INDÍGENAS -CDDHHPI y la COMISION NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS; que conlleva consigo el logro de varias metas

La Comisión de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas -CDDHHPI, es una instancia mixta del Gobierno junto con los delegados de las organizaciones nacionales indígenas que forman parte de la Mesa Permanente de Concertación MPC, la cual propende por espacios de diálogo y concertación bilaterales con el fin de promover acciones encaminadas a la prevención de violaciones de derechos humanos y protección de los mismos, creada mediante el Decreto 1396 de 1996.

Dicho espacio se encuentra conformado por cinco organizaciones indígenas de carácter nacional: la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana-OPIAC, la Confederación Indígena Tayrona-CIT, las organizaciones, AICO por la Pacha Mama y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor, fueron invitadas a hacer parte de este espacio de diálogo por representatividad y por acuerdo político interno de los Comisionados Indígenas.

En el marco de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas se ha avanzado a través de reuniones bilaterales entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas en la concertación de medidas de prevención y protección encaminadas en salvaguardar los derechos de pueblos indígenas asentados en territorio nacional en cumplimiento también, con lo establecido en el artículo 7º de la Constitución Política, mediante el cual el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, razón por la cual la pervivencia integral de los Pueblos Indígenas, sus culturas, sistemas e instituciones de organización social, política y normatividad es criterio fundamental al definir la estructura político administrativa de la Nación.

Desde la creación de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los delegados indígenas han solicitado la posibilidad de contar con garantías suficientes que les permitan desarrollar trabajos de articulación y validación con las autoridades indígenas ubicadas en los territorios; asimismo han diseñado estrategias de fortalecimiento de la gestión administrativa del espacio que les permitan tener de manera organizada la trazabilidad de los temas que se abordan en las sesiones ordinarias o extraordinarias y descentralizar la información con sus comunidades.

No obstante, es menester tener en cuenta que, pese al trabajo adelantado en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, persisten situaciones de riesgo en territorio ancestral que afectan de manera directa a miembros de pueblos indígenas y que se hace necesario mitigar sus efectos y prevenir su ocurrencia.

Lo anterior descrito, quedó de manifiesto en la sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas celebrada el día 14 de julio de 2020, en donde las organizaciones indígenas expusieron escenarios de riesgo que desbordan la capacidad de reacción de miembros de las comunidades una vez se materializan las amenazas en el marco de:

- I. Señalamientos y amenazas a defensores de DDHH;
- II. Atentados a los líderes sociales;

- III. Asesinatos de líderes indígenas;
- IV. Confinamiento que varias comunidades están viviendo por la presencia de grupos armados en disputas territoriales;
- V. Desplazamiento forzado;
- VI. Accidentes por presencia de Minas antipersona;
- VII. Abuso sexual;
- VIII. Acciones extractivistas en territorios indígenas;
- IX. Deforestación por terceros en territorios.

Dentro de ese contexto, el Ministerio del Interior ha venido apoyando el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en virtud de la función que tiene asignada mediante el Decreto 2893 de 2011 en el numeral 10 que reza: *“Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom”*, en ese sentido entre los años 2015 y 2018, a través de convenios suscritos con PNUD, se determinaron acciones específicas a desarrollar para mejorar el fortalecimiento y el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas las cuales se centraron en tres ejes, a saber: 1) funcionamiento y operatividad; 2) acompañamiento y visualización y, 3) seguimiento, promoción y prevención.

Estos enfoques estratégicos facilitaron el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas en 2015 y son la base con la cual se viene trabajando en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 para institucionalizar modos de operación que, sin lugar a dudas garantizarán el eficiente funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas como espacio de interlocución directa y concertación de acciones entre el Gobierno Nacional y las cinco organizaciones nacionales indígenas, a saber: i) Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC; ii) Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC; iii) Autoridades Indígenas de Colombia - AICO por la Pacha Mama; iv) Confederación Indígena Tayrona – CIT y, v) Autoridades Tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor.

Ahora bien, en el proceso de consulta previa que se realizó del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*, en particular con los pueblos y organizaciones indígenas, el Ministerio del Interior asumió el compromiso que busca: *“generar acciones afirmativas que garanticen el fortalecimiento y revitalización de las estructuras organizativas propias de defensa de la vida de los pueblos indígenas en Colombia y los espacios de concertación (CDDHHPI y Comisión para la Implementación y seguimiento del DL 4633/11) para promover el acceso de mecanismos de defensa de la vida para pueblos indígenas, tales como procesos de formación e intercambio de saberes, visitas de verificación, acompañamiento humanitario que viabilice acciones de prevención y protección para la pervivencia de los pueblos indígenas”*

Se han dado importantes avances con el Ministerio del Interior para materializar el querer de los pueblos indígenas, no obstante, es necesario continuar trabajando en la consecución de los objetivos. De esta forma se encuentra imperante buscar la concreción de actividades frente a iniciativas de gran importancia para los pueblos indígenas de Colombia, como:

- Realizar el acompañamiento e intervención en casos de especial atención presentados en el marco de la CDDHHPI
- Visibilizar a nivel nacional e internacional la situación de los pueblos indígenas en el país.
- Realizar el seguimiento a los acuerdos generados en el marco de la CDDHHPI y verificar el estado de cumplimiento de estos.

- Impulsar la divulgación del estado de los acuerdos en el marco de la CDDHHPI, promover el conocimiento de la normativa en materia de DDHH de los Pueblos Indígenas y fortalecer esquemas propios de protección.
- Diseñar e implementar el observatorio de DDHHPI mediante el cual se visibilice la vulneración de los derechos humanos en los pueblos indígenas.

No hay que dejar de lado, la complejidad de los territorios en los que están asentados los pueblos indígenas en cuanto al acceso a la información, a la electricidad y la tecnología y la actual coyuntura promovida por la pandemia en el mundo y Colombia, lo cual hace necesario la formulación de estrategias de articulación específicas que respondan a las particularidades de la zona. Los Comisionados indígenas viven de manera dispersa y alejada de los centros poblados en donde muchas comunidades no tienen acceso a internet; la situación de distancia y el difícil acceso a las telecomunicaciones en que se encuentran las comunidades denotan la necesidad de emprender actividades para lograr que los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y los representantes de los pueblos indígenas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, puedan materializarse efectivamente en las comunidades mediante estrategias de prevención y protección urgentes que permitan mitigar los riesgos a los cuales se enfrentan en territorio ancestral y las garantías para su prevención.

De allí la importancia, que se pueda garantizar la conectividad virtual que permita trabajar de manera conjunta con los Comisionados y técnicos indígenas en aras de avanzar en la formulación de medidas de prevención y protección que coadyuven a la salvaguarda de la vida, la seguridad, libertad e integridad de los pueblos originarios, en aras de dar respuesta a las recomendaciones que han realizado tanto los Pueblos Indígenas como la Procuraduría General de la Nación respecto de las garantías con las cuales deben contar los delegados indígenas de forma que se mantenga un diálogo permanente que permita el cumplimiento de los acuerdos suscritos con ellos en los diferentes espacios de diálogo, así como de los instrumentos de política pública.

Es así, como reconociendo la importancia que reviste la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas entendida además como espacio de diálogo y con el ánimo de afrontar los retos del siguiente cuatrienio en relación con el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, es necesario garantizar el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas que no solo está representado en las sesiones que se llevan a cabo en la ciudad de Bogotá según lo establecido en artículo 6º del Decreto 1396 de 1996, sino que también representa un trabajo continuo de un equipo técnico que facilite el desarrollo de los temas, que sirva de puente entre las instituciones del Gobierno y los pueblos indígenas, que realice el seguimiento a los compromisos de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y que promueva las estrategias de comunicación para lograr el acceso a los sistemas de comunicación que permitan dar a conocer los avances y logros que se vienen materializando en la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

DECRETO DE PROTECCION CON LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION:

En cuanto el Decreto de Protección es necesario una vez concertado el mismo a través del diálogo y concertación entre las entidades del gobierno como lo son, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Presidencia de la República – Consejería presidencial de Derechos Humanos, Unidad para la Atención a las Víctimas, así como los técnicos y algunos comisionados de las organizaciones que

por Decreto participan en la Comisión (AICO, OPIAC, ONIC, GOBIERNO MAYOR Y CIT), se pueda comenzar a implementar en el territorio.

PLAN DE EMERGENCIA:

En el marco de la sesión conjunta de la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas y la MPC del 27 de noviembre de 2019, se concertó la formulación de manera conjunta entre las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Dirección de Derechos Humanos, un plan de emergencia para la garantía de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, que permita atender de manera inmediata e integral a los mismos, frente a la vulneración de DDHH y DIH.

En aras de adelantar las gestiones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos suscritos con la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas, en este caso, se espera una vez formulado y concertado el plan de emergencia, pueda comenzarse a implementar en los territorios, en sus tres momentos: prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición y los retos de cada una de ellas; con una metodología utilizada por el Grupo Gestión Preventiva del Riesgo, para llevar a cabo el análisis interpretativo del riesgo a través de la identificación de: i) dinámicas territoriales; ii) dinámicas de violencia; iii) sujetos en riesgo y, iv) sistema de garantías.

Esto tendrá como resultado una vez concertado i) unificar las cinco propuestas de plan de emergencia en un solo plan; ii) la priorización de departamentos en el marco del plan; iii) elaboración de un plan que priorice departamentos en los que se encuentran asentados pueblos indígenas y, por ende, contenga lineamientos para atender las situaciones de emergencia que se presenten en distintas zonas del país.

MUJER Y GENERO:

COMISION NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS, AUTO 092 DE 2008 Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO TECNICO

En el año 2004 la sentencia de tutela T-025 proferida por la corte constitucional declara el estado de cosas inconstitucional, profiriendo varios autos, dentro de los cuales expide el auto 092 de 2008 referido a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento con el propósito de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. De conformidad con lo establecido en el Auto 092 de 2008, se ordenó la creación del Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas. Posteriormente, la Corte Constitucional expidió el Auto 237 de 2008, en el que declaró la “falta de inicio del proceso de cumplimiento de las órdenes de creación de 13 programas, al haberse omitido la realización de reuniones temáticas con las organizaciones enunciadas en el Auto”.

La Corte Constitucional, en el Auto 092 de 2008, ordenó la creación de 13 programas en el marco de la protección de los Derechos de las Mujeres víctimas del desplazamiento forzado y la protección de sus derechos fundamentales.

El Ministerio del Interior cumple lo pactado en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, realizada el 25 y 26 de enero de 2019, así como lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *“Pacto por la equidad de oportunidades*

para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM”, creando jurídicamente la CNMI como instancia que garantiza la participación de las mujeres indígenas en la construcción, implementación y seguimiento de políticas públicas que favorezcan los derechos de las mujeres, familias y generaciones indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1996.

En atención a lo anterior, el pasado 21 de agosto de 2020, a través del Decreto 1158 de 2020 se formaliza y determinan las funciones y coordinación de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, el cual modificó el decreto No 1097 del 09 de agosto de 2020 “por el cual se crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1996.” Con el propósito de fortalecer técnicamente la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, se adoptaron medidas inmediatas, deliberadas y concretas para dar vía y desarrollo a los programas establecidos en el Auto 092 de 2008, generando las condiciones institucionales necesarias para facilitar la participación política de mujeres indígenas, tales como: incrementar la capacidad de interlocución y diseño de agendas propias de las mujeres indígenas y las organizaciones que las representan, además, crear y fortalecer espacios de diálogo entre las líderes comunitarias y los gobiernos.

La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías – DAIRM –, con el fin de apoyar el Plan de Acción del Programa de Protección de Mujeres Indígenas Desplazadas y en riesgo de estarlo, promueve el reconocimiento a la diversidad étnica y el ejercicio de sus derechos.

De igual manera desde la CNMI se impulsarán dos acciones fundamentales, por un lado la política LGBTI y por el otro la política de juventud; en ese sentido, se deberá implementar la POLITICA PUBLICA LGBTI PARA COMUNIDADES INDÍGENAS, basada en el decreto 726 de 2018 en donde se adopta la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Es decir, que el país cuenta con este mecanismo de respaldo y de atención a las personas LGBTI.

En 2020 se lanza el plan de acción de la Política Pública LGBTI en donde se establecen los mecanismos por medio de los cuales se le va a dar efectividad a la implementación de dicha política, siendo necesario incluir el enfoque indígena, dado que es menester visibilizar la participación de todas las personas pertenecientes a estos sectores, como derecho constitucional que debe hacerse efectivo con las diferentes comunidades y pueblos de todo el país.

Ahora bien, en relación a la política de juventud, en el marco de los acuerdos del plan de desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial para la vida, establecidos entre los pueblos indígenas de Colombia y el Gobierno Nacional, puntualmente el acuerdo A34 que señala: “Colombia Joven garantizará la inclusión en la política pública de juventud un capítulo indígena acordado, con el apoyo del Ministerio del Interior para la formulación del capítulo se establecerá una hoja de ruta concertada con la MPC que involucre todos los aspectos necesarios para su implementación operativa”, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías - DAIRM, adelantará con la Consejería presidencial de juventud una agenda técnica con el propósito de continuar con el proceso de implementación una vez la ruta sea protocolizada, en aras de garantizar la participación efectiva de la población joven indígena en el país.

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, por lo que

la pervivencia integral de los Pueblos Indígenas, sus culturas, sistemas e instituciones de organización social, política y normatividad, son un criterio fundamental de la acción estatal.

Los Territorios Indígenas constituyen el ámbito, material e inmaterial, en el cual los pueblos y comunidades indígenas cimientan su identidad e integridad cultural, y en donde realizan sus actividades políticas, sociales, culturales, económicas, entre otras, ya sea que se encuentren o no formalizados bajo la figura de resguardos (artículos 63 y 329 de la Constitución Política). Las autoridades tradicionales ejercen el gobierno y la autoridad en sus respectivos territorios, con base en sus sistemas e instituciones jurídicas, políticas y sociales propias.

El Decreto Ley 632 de 2018, expedido con base en las facultades del artículo 56 transitorio de la Constitución Política, es decir, enfocado en el propósito de facilitar la habilitación de los territorios indígenas como entidades territoriales (artículo 286 constitucional), dicta las normas fiscales transitorias y demás disposiciones para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.

De acuerdo con su objeto, el Decreto Ley se propone avanzar en un proceso progresivo de fortalecimiento de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios, permitiendo que las comunidades y pueblos indígenas ejerzan las competencias reconocidas constitucionalmente, relacionadas con el manejo de los recursos y la toma de decisiones autónomas, de acuerdo a sus particulares sistemas de gobierno, planificación y administración. Acorde con el artículo 330 constitucional, los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos Indígenas, que serán conformados y reglamentados según los usos y costumbres de los pueblos.

Por otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1232 de 2018, donde insta al Estado colombiano a adoptar las medidas indispensables para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, en especial su vida, su territorio y el ejercicio a su derecho a la autodeterminación, para lo cual se crean las instancias y mecanismos de articulación institucional, y se reconoce una importante participación de las comunidades indígenas; necesarias para diseñar e implementar los mecanismos especiales de prevención y protección que son requeridos.

De acuerdo con el Decreto anteriormente mencionado, los pueblos indígenas en aislamiento son aquellos pueblos o segmentos de pueblos que, en ejercicio de su autodeterminación, se mantienen en aislamiento y evitan contacto permanente o regular con personas ajenas a su grupo, o con el resto de la sociedad. Es importante tener en cuenta que el estado de aislamiento no se pierde en caso de contactos esporádicos de corta duración. En el Decreto 1232 de 2018, se reconoce que el pilar de salvaguarda de los pueblos indígenas en aislamiento se basa en la protección de su territorio, porción geográfica con la cual se encuentran directamente relacionados y de la que dependen por completo para su sobrevivencia.

En su mayoría, los pueblos indígenas en aislamiento se han visto forzados a aislarse u ocultarse en las profundidades de sus territorios, limitando cualquier situación de contacto con la sociedad nacional. Son pueblos altamente integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte, manteniendo una relación de interdependencia con el medio ambiente en el que desarrollan su vida y cultura. Muchos de estos pueblos viven en áreas protegidas, sobre todo en parques nacionales de gran extensión, así como también en territorios indígenas. En Colombia existen 2 pueblos indígenas en aislamiento confirmados, estos son los Yuri - Passé registrados respectivamente por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, mediante las

Resoluciones 041 y 042 del 11 de mayo del 2020; y adicionalmente, existe un total de 16 indicios ubicados en Amazonas (8), Guaviare (2), Guainía (1), Vaupés (1), Vichada (1) y Caquetá (3).

De igual manera, el decreto 1500 de 2018 tiene por objeto redefinir el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra –Sheshiza’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, así como establecer medidas y garantías para su efectiva protección, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen de estos pueblos, en desarrollo de la Ley 21 de 1991 y atendiendo lo dispuesto en el Auto 189 de 2013 de la Corte Constitucional.

Asimismo, los principios y las disposiciones de este decreto serán aplicables al territorio tradicional y ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en la Línea Negra – Sheshiza, de acuerdo con la delimitación y fundamentación reconocidas en este decreto, sin perjuicio de los derechos adquiridos, de terceros y de otras comunidades, conforme a la Constitución y la ley.

Se realiza una solicitud con un incremento del 40% para el Programa Misional de Funcionamiento *“FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, MINORÍAS Y ROM”*, tomando en cuenta los costos históricos de las diferentes asistencias técnicas realizadas, de los diferentes espacios de Dialogo (Nacionales y Regionales) y las diferentes consultas previas que ha realizado esta Dirección y a esto se le realizo un respectivo incremento. La solicitud para de recursos aumentó a comparación de la proyección de 2024, debido a la dinámica del buen dialogo que se viene teniendo con la población objetivo y a su vez se requiere dar cumplimiento a los diferentes acuerdos adquiridos en la concertación del PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*, a cargo del Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

Igualmente, el incremento incluye el aumento de la gasolina que se ha venido presentando en el último año, ya que, para poder llegar a las diferentes comunidades indígenas, se llega por medio de transporte terrestre o en su defecto de transporte fluvial, adicional a esto los productos de la canasta familiar en las zonas alejadas como lo son los departamentos de la Amazonia Colombia, se encaren debido al alto costo de la Gasolina y en alguno de ellos solo se puede llegar por medio aéreo.

Este aumento de recursos, también se solicita debido al buen dialogo que se viene presentando entre los Pueblos Indígenas y Rom y el Gobierno Nacional, adicional a esto se han venido creando diferentes espacios de diálogo regional con los diferentes pueblos indígenas en los últimos años, lo cual conlleva a la garantía de dichos espacios como lo son alimentación, logística y transporte multimodal de los delegados indígenas que asisten a estos espacios, por esta razón se solicita el referido aumento de los recursos.

Los recursos solicitados para la vigencia 2025, se requieren para dar cumplimiento a los diferentes acuerdos adquiridos en la concertación del PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*, con los Pueblos Indígenas y el Pueblo Rom.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada sobre las reformas que proponga el Gobierno Nacional a las normas, que afecten los derechos territoriales de los pueblos indígenas, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT1-8 .	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) y mesas regionales, como escenarios de concertación e interlocución con el gobierno nacional, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-58 .	\$ 16.437.700.000	100%	\$ 23.012.780.000	100%
Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de conformidad con el Decreto 1396 de 1996, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-59 .	\$ 2.500.000.000	100%	\$ 3.500.000.000	100%
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior formulará e implementará proyectos de inversión para el fortalecimiento de las 7 organizaciones indígenas que participan en el marco de la MPC, los cuales se ejecutarán a través de sus estructuras organizativas propias, con base en el acuerdo sectorial con la MPC-IT2-64 .	\$ 514.339.442	100%	\$ 720.075.219	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior formulará y coordinará en el marco de sus competencias con las demás entidades, la implementación de un plan de acción y atención inmediata para el goce efectivo de los derechos de los Pueblos indígenas que viven en las ciudades o en espacios urbanos, incluyendo medidas especiales de acuerdo con lo establecido en el literal c del artículo 5 del Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991), previa concertación en la MPC, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-65.	\$ 1.200.000.000	60%	\$ 1.680.000.000	60%
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, formulará la Política Pública para Pueblos indígenas que viven en las ciudades o en espacios urbanos, y garantizará su implementación, a través de un Plan de acción realizando la coordinación y articulación interinstitucional entre las entidades competentes, previa concertación con la MPC, , con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-66.	\$ 2.000.000.000	30%	\$ 2.800.000.000	30%
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior garantizará la financiación de escenarios y encuentros de discusión regionales y nacionales de los pueblos originarios. En los casos que se requiera se garantizará la participación de invitados internacionales en el marco del intercambio cultural de los pueblos originarios, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-67.	\$ 1.000.000.000	100%	\$ 1.400.000.000	100%
Disponer de recursos para la construcción y el fortalecimiento de espacios propios tradicionales de acuerdo a los principios culturales de cada pueblo, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-68.	\$ 1.000.000.000	100%	\$ 1.400.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y demás entidades competentes formulará, concertará y expedirá un instrumento normativo de propiedad intelectual indígena, sobre derechos de autor, derechos colectivos, patrimonio y legados ancestrales de los pueblos indígenas, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-69 .	\$ 0	5%	\$ 0	5%
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, garantizará un proyecto de inversión anualmente para desarrollar procesos de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los Pueblos Indígenas interesados en la administración directa de los recursos del Sistema General de Participación, así como para el fortalecimiento de las estructuras organizativas propias de los pueblos para administrar mediante los mecanismos de contratación pública de conformidad con el Decreto 252 de 2020, ley 2160 de 2021 y demás normatividad que reconozca su capacidad contractual, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-70 .	\$ 1.100.000.000	100%	\$ 1.540.000.000	100%
Fortalecer el gobierno y las estructuras organizativas propias y ancestrales de los cuatro pueblos de la SNSM garantizando la unidad política, cultural y territorial del Gobierno indígena y el ordenamiento ancestral del territorio de la Línea Negra de la SNSM, para lo cual tendrá como interlocutor para los temas de carácter regional en la SNSM al Consejo Territorial de Cabildos conformado por la Confederación Indígena Tayrona; la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarwa Tayrona; la Organización Indígena Kankuama y la Organización Gonawindúa	\$ 1.000.000.000	100%	\$ 1.400.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Tayrona en el marco de la mesa de seguimiento y coordinación para la protección del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-71 .				
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior garantizará la formulación, diagnóstico, protocolización e implementación y, en los casos en los que se considere necesaria, la actualización de los Planes de Salvaguarda y programa de garantías de los pueblos indígenas en cumplimiento de providencias judiciales, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT5-124 .	\$ 642.300.000	Indicador A 60% Indicador B 100%	\$ 899.220.000	Indicador A 60% Indicador B 100%
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior articulará con las entidades competentes de manera concertada con los Pueblos y organizaciones indígenas, la formulación e implementación de un plan de emergencia para garantizar la pervivencia física, territorial y cultural de los Pueblos en Colombia ante las situaciones de urgencia e inminente riesgo contra la vida, integridad y espiritualidad, con base en el acuerdo sectorial con la MPC - IT2-125 .	\$ 1.000.000.000	80%	\$ 1.400.000.000	80%
Fortalecer la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con participación de las siete organizaciones nacionales, para el seguimiento al cumplimiento y la implementación de los dictámenes, recomendaciones, medidas, fallos, judiciales y decisiones de los mecanismos multilaterales que protegen los derechos humanos, colectivos y territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Además de lo que le compete al Ministerio del Interior en materia de financiación, gestionará las garantías de interlocución, técnicas y operativas con las entidades de orden nacional e	\$ 1.200.000.000	100%	\$ 1.680.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
internacional competentes en el tema, con base en el acuerdo sectorial con la MPC - IT5-126.				
El Ministerio del interior en coordinación armónica con la Unidad Nacional de Protección - UNP y demás entidades y organismos del orden nacional y territorial, concertará, expedirá e implementará el instrumento jurídico que reglamenta la adopción de las medidas de protección colectiva e individual para pueblos indígenas, garantizando la incorporación del enfoque de mujer, género, generacional e interseccional, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT5-134.	\$ 0	100% INDICADOR A 100% INDICADOR B	\$ 0	100% INDICADOR A 100% INDICADOR B
Formular e implementar una Política Pública Integral para la Mujer, Familia y Generación Indígena. La Política Pública se articulará con políticas, planes y programas sectoriales con metas, presupuestos y mecanismos de seguimiento, involucrando a todos los sectores del gobierno colombiano, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IM-146.	\$ 5.000.000.000	30%	\$ 7.000.000.000	30%
Expedir el instrumento normativo para la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Jóvenes indígenas (CNJI) de las organizaciones indígenas nacionales como una instancia técnica sobre asuntos relacionados con la juventud indígena, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IM-149.	\$ 350.000.000	50%	\$ 490.000.000	50%
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior garantizará espacios para el intercambio de experiencias que permitan el fortalecimiento cultural, liderazgo, participación Comunitaria, Política y Organizativo de la Juventud indígena a nivel local, regional, nacional e internacional, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IM-160.	\$ 1.000.000.000	100%	\$ 1.400.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Crear y fortalecer centros de pensamiento y escuelas de formación propia presenciales para el liderazgo, participación política y organizativa de la mujer, familia y generación indígena en el marco del gobierno y los sistemas propios de los pueblos originarios, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IM-164 .	\$ 1.480.202.897	100%	\$ 2.072.284.056	100%
El Ministerio del Interior, atenderá la solicitud de articulación que realice El Ministerio de Cultura, quién es la entidad responsable del Acuerdo Intersectorial IT1-5 " Formular, concertar, expedir e implementar una política pública que impulse el reconocimiento, protección y recuperación de los espacios, lugares o sitios sagrados de alto valor cultural para los pueblos indígenas como un sistema de vida. Para ello, se concertarán e implementarán los mecanismos de protección integral de los territorios, a partir de las visiones de ordenamiento ancestral territorial, la Ley de Origen, Deber y Derecho Mayor, ley natural, cosmovisión, espiritualidad y cultura de los pueblos indígenas, para la conservación de la vida, el agua, la bioculturalidad y la paz total con la naturaleza. Teniendo en cuenta el trabajo articulado, interinstitucional e intersectorial requerido para implementar el presente acuerdo".	\$ 0	100%	\$ 0	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
El Ministerio del Interior de manera articulada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de sus competencias y en coordinación con las entidades competentes construirán e implementarán de manera concertada con los pueblos indígenas en sus instancias representativas, los lineamientos y herramientas para la prevención y solución de conflictos territoriales y socioambientales, interétnicos, interétnicos e interculturales. Teniendo en cuenta sus usos y costumbres, ley de origen, derecho mayor, ley natural y todas las normas establecidas en el Bloque de constitucionalidad, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IT1-7.	\$ 0	95%	\$ 0	95%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
<p>El Gobierno Nacional en coordinación con el CTC garantizará la consolidación, recuperación y protección integral del territorio ancestral de la Línea Negra garantizando los derechos ancestrales, territoriales, colectivos y las salvaguardas para su pervivencia física y cultural, orientados desde los principios de la Ley de Origen y la visión de ordenamiento ancestral de los cuatro Pueblos en el marco de la aplicación integral del decreto 1500 del 2018, la Resolución No. 000002 de 1973, y la Resolución N° 837 del 28 de agosto de 1995, a través de las siguientes líneas de acción priorizadas:</p> <p>1. Garantizar la implementación de la integralidad del Decreto 1500 de 2018 sobre la protección del territorio ancestral de la Línea Negra de los cuatro Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por medio de las siguientes líneas priorizadas: A. Adoptará oficialmente y socializará la cartografía establecida en el Decreto 1500 del 2018; B. Garantizará el funcionamiento y fortalecimiento de la Mesa de Seguimiento y Coordinación para la protección del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM; C. Concertará e implementará con el CTC un programa para la salvaguarda, protección y conservación del territorio tradicional y ancestral demarcado en la Línea Negra; D. Construirá e implementará un programa de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua para la protección del uso y valor ancestral del océano y sus sitios sagrados para lo cual los pueblos participarán en los mecanismos de gestión y financiación.</p> <p>2. El Gobierno Nacional garantizará las condiciones y financiamiento en coordinación con el CTC para la creación e</p>	\$ 3.000.000.000	INDICADOR A =80% INDICADOR D=60%	\$ 4.200.000.000	INDICADOR A =80% INDICADOR D=60%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
<p>implementación del sistema propio de información del territorio ancestral de la Línea Negra que administre autónomamente el CTC con el fin de fortalecer la protección y consolidación territorial propia desde la Ley de Origen. El sistema contará con financiación de manera permanente, así como la garantía para equipos técnicos y operativos que el CTC administre de manera autónoma.</p> <p>3. El Gobierno Nacional concertará e implementará las rutas para el saneamiento de mejoras al interior de los resguardos y la regularización de las afectaciones técnico jurídicas de los predios a nombre de los pueblos de la Sierra destinados para la formalización de la propiedad colectiva.</p> <p>4. El Ministerio del Interior establecerá y articulará un proceso de coordinación de alto nivel en donde esté DNP, MinAmbiente, MinVivienda, IGAC, CAR, PNNC, MinCultura, y entes territoriales ubicados en el territorio ancestral de la Línea Negra y el CTC para garantizar la incorporación de la visión del ordenamiento ancestral en los instrumentos de planeación y ordenamiento, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IT1-11.</p>				
<p>El Ministerio del Interior, atenderá la solicitud de articulación que realice El Ministerio de Justicia y del Derecho , quién es la entidad responsable del Acuerdo Intersectorial IT2-18 "El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior radicarán e impulsarán con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena,</p>	\$ 0	100%	\$ 0	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
de acuerdo con el Artículo 246 de la Constitución Política".				
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, con apoyo del Ministerio de Educación y la ESAP garantizará el fortalecimiento en procesos de formación real y efectivo de las Escuelas de Formación Política y/o de Gobierno Propio de los pueblos y organizaciones indígenas, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IT2-63 .	\$ 300.000.000	50%	\$ 420.000.000	50%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y conforme las funciones y responsabilidades de su competencia, garantizará la incorporación e implementación del enfoque indígena en los procesos para la paz, y en la implementación y actualización de cada uno de los 16 Planes Nacionales de Reforma Rural Integral o Planes sectoriales del AFP(Acuerdo Final de Paz); además, formulará e implementará los Planes de Acción Inmediata(PAI) para Pueblos Indígenas en Riesgo de Extinción física y cultural y no priorizados al Decreto 893 de 2017, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IT2-76 y en los aspectos relacionados a la misionalidad y competencias de la DAIRM.	\$ 1.000.000.000	66%	\$ 1.400.000.000	66%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
<p>El Ministerio del Interior, atenderá la solicitud de articulación que realice el DANE, quién es la entidad responsable del Acuerdo Intersectorial IT2-84 "DANE de acuerdo con su misionalidad gubernamental, en coordinación con el Ministerio del Interior y las organizaciones de la MPC, diseñarán e implementarán un plan especial de fortalecimiento técnico, tecnológico, operativo y de talento humano de los sistemas de información propios de las organizaciones indígenas para favorecer el cumplimiento de la Ley 89 de 1890 en su artículo 7 en lo que respecta a censos indígenas. El Plan especial se discutirá en el Comité Técnico de adecuación del Sistema Estadístico Nacional - SEN. Así mismo, se expedirá un acto administrativo que permita la generación de capacidad instalada mediante la vinculación de personal propio en los procesos de recolección de información en territorios indígenas. Una vez las autoridades indígenas cumplan con los procesos técnicos y de calidad requeridos por el DANE, serán incorporados al Sistema Estadístico Nacional - SEN"</p> <p>El Gobierno Nacional, en cabeza del DANE, garantizará los recursos para la implementación en los Pueblos indígenas del piloto del conteo intercensal con enfoque diferencial. Una vez se apropien los recursos para el conteo intercensal y este se implemente, se realizará la actualización de la población indígena en resguardos y territorios indígenas.</p>	\$ 0	100%	\$ 0	100%
<p>El Ministerio del Interior, atenderá la solicitud de articulación que realice el Ministerio de Justicia y del Derecho, quién es la entidad responsable del Acuerdo Intersectorial IT2-86" El Gobierno Nacional, en cabeza</p>	\$ 0	100%	\$ 0	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
del Ministerio de Justicia y del Derecho y en coordinación con el Ministerio del Interior, garantizará la Consulta Previa, Libre e Informada del proyecto de Ley de Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, acorde al acta de la sesión N°4 del 2022 de la MPC, la cual iniciará a partir del mes de abril de 2023. Las garantías presupuestales serán dispuestas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia en el marco de sus recursos de adición del año 2023. En esta Consulta harán parte las Organizaciones Indígenas que participan en el marco de la MPC".				
El Ministerio del interior en coordinación armónica con la Cancillería Colombiana, formulará, concertará e implementará en articulación con las entidades del orden nacional competentes, una política pública integral de acceso y garantía de derechos humanos para los pueblos indígenas plurinacionales y transfronterizos con su participación, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IT1-128 y en los aspectos relacionados a la misionalidad y competencias de la DAIRM.	\$ 0	60%	\$ 0	60%
El Gobierno Nacional expedirá el decreto establecido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 2135 de 2021 (Ley de Fronteras). El Ministerio del Interior garantizará los recursos para que las organizaciones indígenas que participan en la MPC, a través de un equipo técnico, formulen un proyecto de Decreto el cual será presentado, una vez sea aprobado por la MPC, al Ministerio del Interior para su expedición, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IT5-145 .	\$ 0	100%	\$ 0	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
El Gobierno Nacional garantizará, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y en conjunto con la UARIV, el DAPRE, y el DPS, la implementación efectiva y urgente del auto 092-2008 con su programa de Protección integral de mujeres indígenas desplazadas o en riesgo de estarlo y de su Plan de acción integral, en concertación con la CNMI, los pueblos y organizaciones indígenas; identificando y articulando el presupuesto que las entidades del gobierno nacional destinarán y garantizarán de manera específica, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IM-153 .	\$ 3.000.000.000	65%	\$ 4.200.000.000	65%
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior fortalecerá los procesos organizativos de los jóvenes indígenas a nivel regional y nacional a través de planes de acción, en concertación con la Delegación Nacional de Juventudes Indígenas-DENAJI, con base en el acuerdo intersectorial con la MPC - IM-157 .	\$ 700.000.000	100%	\$ 980.000.000	100%
Garantizar la implementación de la hoja de ruta para la caracterización de vulneraciones de derechos de las juventudes indígenas en concertación con la Delegación Nacional de Juventudes Indígenas- DENAJI, con base en el acuerdo intersectorial con la MPC - IM-159 .	\$ 500.000.000	50%	\$ 700.000.000	50%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
<p>El Ministerio del Interior articulará con las entidades competentes del gobierno nacional y las mujeres del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Gonawindúa, los siguientes componentes de trabajo:</p> <p>1. Componente de Paz Territorial: Apoyar el fortalecimiento de los procesos, iniciativas y agendas propias comunitarias e interculturales de construcción de paz territorial desde y para las mujeres y familias indígenas (OACP)</p> <p>2. Componente: Cuidado, conservación y preservación integral de la madre tierra. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de los espacios de transmisión intergeneracional de saberes y protección de la lengua, concertada con las mujeres y la niñez indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. MinCultura</p> <p>3. Componente de salud y armonía psicoespiritual Incluir dentro del plan de acción sobre el cuidado del bienestar mental y las desarmonías espirituales para la atención y prevención del suicidio, consumo de SPA, todo tipo de violencias, explotación sexual, estado de mendicidad en jóvenes indígenas que lidera el Ministerio de Salud, acciones con las mujeres de los cuatro (4) pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.</p> <p>4. Componente de Violencias contra las mujeres indígenas Fortalecer los comités comunitarios o procesos colectivos para la prevención, atención, acompañamiento integral y acceso a la justicia de las mujeres, niñez y familias víctima de todo tipo de violencias contra las mujeres indígenas, en el marco del mecanismo articulador del Decreto 2117 de 2010. Mecanismo articulador: Min</p>	\$ 600.000.000	60%	\$ 840.000.000	60%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Salud - CPEM 5. Componente fortalecimiento y participación política de las mujeres Fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres indígenas de la sierra nevada de Gonawindua. Mininterior, con base al acuerdo intersectorial con la MPC - IM-168.				
El Ministerio del Interior, atenderá la solicitud de articulación que realice la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario , quién es la entidad responsable del Acuerdo Intersectorial IT2-172 "El Gobierno Nacional, con el liderazgo y coordinación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, garantizará la implementación de iniciativas comunitarias de los pueblos indígenas para la prevención	\$ 200.000.000	100%	\$ 280.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes indígenas, en el marco de la CIPRUNNA y las entidades que la conforman, las cuales asignarán los recursos técnicos y financieros de acuerdo con su competencia y capacidad, de manera concertada con la CNMI y la CDDHH.				
Fortalecer la escuela de formación política de la OPIAC para los liderazgos juveniles indígenas que cuente con el apoyo financiero para la capacitación, desarrollo organizacional y programas específicos para la juventud de las comunidades indígenas de la región amazónica, con base al acuerdo intersectorial con la MRA-IT2-206 .	\$ 125.000.000	100%	\$ 175.000.000	100%
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior garantizará el fortalecimiento de la Mesa Regional Amazónica, con base al acuerdo sectorial con la MRA- IT5-227 .	\$ 3.000.000.000	1	\$ 4.200.000.000	1
En el marco de la construcción de la "Política Pública integral de acceso y garantía de derechos humanos para los pueblos indígenas plurinacionales y transfronterizos" concertada en la MPC, se garantizará una ruta de construcción diferencial para los pueblos indígenas amazónicos de frontera, con base al acuerdo Intersectorial con la MRA- IT1-181 .	\$ 125.000.000	100%	\$ 175.000.000	100%
La CND realizará 5 sesiones ordinarias para evaluación, control y seguimiento con las diferentes entidades que hacen parte de la CND, no se sesionara de manera extraordinaria. Asimismo, se realizará la respectiva articulación con las entidades competentes para que hagan parte de las sesiones ordinarias que se convoquen. , con base al	\$ 550.000.000	5	\$ 770.000.000	5

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
acuerdo sectorial con la CND - RT5-60.				
Convocar y garantizar espacios de diálogo y concertación del orden nacional, entre las autoridades de los pueblos indígenas y las entidades del gobierno nacional.	\$ 2.800.000.000	100%	\$ 3.920.000.000	100%
Convocar y garantizar espacios de diálogo y concertación de orden regional y local, entre las autoridades de los pueblos indígenas y las entidades del gobierno nacional.	\$ 2.000.000.000	100%	\$ 2.800.000.000	100%
Espacios de diálogo y concertación atendidos de acuerdo a usos y costumbres de los pueblos indígenas previa solicitud de intervención.	\$ 29.266.457.661	100%	\$ 40.973.040.725	100%
Asistir a los espacios de diálogo social relacionados con el cumplimiento del plan de acción concertado en el marco de la Sentencia T-302 de 2017.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Realizar las acciones pertinentes de acuerdo a la misionalidad de la DAIRM, que resulten de los espacios de diálogo social relacionados con el cumplimiento del plan de acción concertado en el marco de la Sentencia T-302 de 2017.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Realizar las convocatorias a los procesos de Consulta Previa de los Planes Integrales de Reparación Colectiva- PIRC.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Atender a las solicitudes realizadas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado-UARIV, de las jornadas con el fin de realizar el acompañamiento en las diferentes fases de los Planes Integrales de Reparación Colectiva- PIRC, garantizando el diálogo político y la concertación en el marco de la Consulta Previa de los PIRC.	\$ 0	100%	\$ 0	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Asistir a las jornadas o espacios del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- SNARIV, convocados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado-UIARIV, con el objetivo de realizar planes, programas y proyectos para la atención y reparación a las víctimas en el marco de la ley No. 1448 de 2011.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Desarrollar actividades en el marco de medidas de protección del Cerrem Colectivo.	\$ 100.000.000	100%	\$ 140.000.000	100%
Desarrollar actividades de atención en el marco de Alertas Tempranas y Medidas de Protección Colectivas según recomendaciones recibidas por la Defensoría del Pueblo.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Tramitar ante las entidades correspondientes las denuncias, amenazas y violaciones a los derechos humanos y colectivos en contra de los Pueblos Indígenas de Colombia allegadas a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías-DAIRM.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Garantizar técnica y administrativamente el personal para el cumplimiento de los acuerdos del PND 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida", con los grupos étnicos indígenas y ROM.	\$ 12.000.000.000	100%	\$ 16.800.000.000	100%
Garantizar el funcionamiento administrativo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para el cumplimiento misional y estratégico de la misma.	\$ 2.800.000.000	100%	\$ 3.920.000.000	100%
Realizar el registro de autoridades indígenas según solicitudes recibidas.	\$ 180.000.000	100%	\$ 252.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar los trámites asociados al registro y actualización de Asociaciones Indígenas en el marco del decreto No. 1088 de 1.993 y emitir las certificaciones correspondientes.	\$ 180.000.000	100%	\$ 252.000.000	100%
Realizar registros censales de comunidades indígenas de acuerdo con lo estipulado en los artículos 7 y 35 de la ley 89 de 1.980 y las directrices establecidas por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías en concordancia con la circular interna sobre la materia y demás normas aplicables.	\$ 140.000.000	100%	\$ 196.000.000	100%
Adelantar los estudios etnológicos para determinar el registro de comunidades indígenas.	\$ 350.000.000	100%	\$ 490.000.000	100%
Dar cumplimiento a las órdenes judiciales emanadas por las altas cortes.	\$ 800.000.000	100%	\$ 1.120.000.000	100%
. Implementar una matriz para el diligenciamiento y seguimiento a la información relacionada con el cumplimiento de las órdenes emanadas por las altas cortes.	\$ 0	4	\$ 0	4
Atender y dar respuesta a los requerimientos que realicen los entes de control en relación con los pueblos y comunidades indígenas.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Implementar una matriz para el diligenciamiento y seguimiento a la información relacionada con las respuestas de los requerimientos que realizan los entes de control sobre los pueblos y comunidades indígenas.	\$ 0	4	\$ 0	4

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Identificar y focalizar esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de los instrumentos de planeación o gestión local comunitaria como planes de vida, de etnodesarrollo e instrumentos de planeación comunitaria con acciones para la prevención de la deforestación, la gestión sociocultural o el manejo sostenible de los bosques apoyados por las instituciones del Estado competentes en sus fases de formulación, implementación y/o seguimiento, en el marco de la Orden 1 de la Sentencia.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Fomentar el Diálogo Intercultural con el fin de articular, concertar y coordinar entre las autoridades de los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas y otras autoridades públicas, el manejo sostenible de los bosques, en aplicación de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, en el marco de la Orden 1 de la Sentencia.	\$ 200.000.000	100%	\$ 280.000.000	100%
Coordinar estrategias con las autoridades indígenas que aportan a la conservación y fortalecimiento de los sistemas de conocimiento y saberes tradicionales, los cuales, contribuyen a la sostenibilidad de los bosques y la comprensión de la naturaleza como unidad biocultural, en el marco de la Orden 1 de la Sentencia.	\$ 0	100%	\$ 0	100%
Realizar acciones desde la Misionalidad de la DAIRM, en el marco del documento CONPES 4021 "Política Nacional de Deforestación" como estrategia intersectorial, multidimensional y sistémica para frenar el cambio del uso del suelo y la pérdida de bosque natural, para así fomentar la conservación y manejo sostenible de los bosques.	\$ 200.000.000	100%	\$ 280.000.000	100%

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar acciones de los "Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)" para los pueblos y comunidades étnicas, relacionadas con las iniciativas de los departamentos priorizados en el marco de la implementación del Acuerdo en la Política de Paz con Legalidad.	\$ 500.000.000	100%	\$ 700.000.000	100%
TOTAL	\$ 102.041.000.000		\$ 142.857.400.000	

Como complemento se indica que, adicionalmente estos recursos se requieren para atender las funciones asignadas a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en el marco del Decreto 2340 de 2015 y Resolución 2434 de 2011, así mismo para atender los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de concertación con las autoridades indígenas de Colombia y el pueblo Rom, como lo son la Mesa Permanente de Concertación (MPC), Mesa Regional Amazónica (MRA), Mesa Wayuu, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Mixta Decreto 1811 de 2017, Comisión Nacional de Dialogo del Pueblo Rom y demás espacios de Concertación debidamente reglamentados.

A su vez se atenderán las diferentes consultas de medidas administrativas y legislativas que se requieran y que afecten directamente la población indígena y Rom del País.

El incremento también obedece al avance en la estrategia de protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, una vez consultado el documento normativo que desarrolló esta Dirección, se requiere dar aplicabilidad a dicho instrumento y avanzar en la protección de esta especial población indígena en los temas de territorio, salud, planes de manejo, monitoreo, gestión interinstitucional y la coordinación con las autoridades de base vecinas o colindantes a esta población indígena.

Las acciones que desarrollará La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías se realizarán en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 "Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas".

Así mismo para el cumplimiento de las diferentes órdenes judiciales que sean remitidas a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y que tengan concordancia con la Misionalidad de esta Dirección.

Es necesario el incremento de los recursos debido a que, es el cumplimiento del plan nacional de desarrollo, y lograr avanzar en la materialización de derechos de los pueblos indígenas a través de la implementación de medidas concertadas, de esta manera para el 2030, como está planteado Colombia habrá reducido las brechas que enfrentan los diferentes grupos étnicos y transitará hacia una senda que iguale sus oportunidades a las del resto de la población. Todo en el marco del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del

Estado Social y Democrático de Derecho, y con especial apego a los principios de pluralidad étnica y diversidad cultural.

Los Comisionados, comisionadas y líderes indígenas viven de manera dispersa y alejada de los centros poblados en donde muchas comunidades no tienen acceso a internet; la situación de distancia y el difícil acceso a las telecomunicaciones en que se encuentran las comunidades denotan la necesidad de emprender actividades para lograr que los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y los representantes de los pueblos indígenas puedan materializarse efectivamente en las comunidades mediante estrategias de prevención y protección urgentes que permitan mitigar los riesgos a los cuales se enfrentan en territorio ancestral y las garantías para su prevención, dado que la pandemia actual ha afectado seriamente la desigualdad social en numerosas dimensiones, y como estado tenemos la obligación de continuar avanzando con las comunidades en procesos que garanticen sus derechos y sean incluyentes, evitando la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

En ese sentido debe continuarse con los procesos planteados a través de estrategias adecuadas, con vistas tanto en el tiempo presente como en el futuro próximo, que en estas comunidades impulse la prevención de una crisis social en el largo plazo mediante la protección de los intereses de las comunidades más vulnerables, de allí la importancia de continuar avanzando en los procesos de formulación de una política pública de derechos humanos para los pueblos indígenas, y la garantía de su consulta en territorio, las acciones afirmativas que garanticen el fortalecimiento y revitalización de las estructuras organizativas propias de defensa de la vida de los pueblos indígenas en Colombia y los espacios de concertación para promover el acceso de mecanismos de defensa de la vida para pueblos indígenas, tales como procesos de formación e intercambio de saberes, visitas de verificación, acompañamiento humanitario que viabilice acciones de prevención y protección para la pervivencia de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas como instancia que garantiza la participación de las mujeres indígenas en la construcción, implementación y seguimiento de políticas públicas que favorezcan los derechos de las mujeres para tomar medidas inmediatas, deliberadas y concretas que den vía y desarrollo a los programas establecidos en el Auto 092 de 2008, de la cual esta cartera ministerial tiene la secretaría técnica, y las acciones de inclusión en la garantía de un estado social de derecho multicultural y pluralista, que incluya acciones a favor de la juventud, las personas en situación de discapacidad y los jóvenes.

Dicho lo anterior y proyectando una etapa de implementación, en la cual se requiere una socialización en el territorio, con dificultades de acceso, y conectividad como previamente se enuncio, se identifica la necesidad de poder incrementar los recursos destinados al cumplimiento de los indicadores del plan nacional de desarrollo que le apuntan a estas metas.

3.1.1.3.25 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS - DECRETO 1397 DE 1996. (\$ 9.418.530.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIFERENCIA \$ NECESIDAD 2025 - PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON PRESUPUESTO 2024
A-03-06-01-014	\$ 8.562.300.000	\$ 9.418.530.000	\$ 856.230.00	10%
TOTAL	\$ 8.562.300.000	\$ 9.418.530.000	\$ 856.230.000	10%

BASE LEGAL

La Constitución Política de 1991 le permitió a los Pueblos Indígenas contar con instrumentos de exigibilidad de derechos como lo señalan varios de sus artículos, ejemplo de ello, Artículo 7°. *El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.* Después de cinco años de expedida la Constitución y con la toma de la Conferencia Episcopal en 1996, se genera como resultado la firma de los Decretos 1396 y 1397 de 1996 que le dan vida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1397 de 1996 la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones indígenas tiene dos objetivos o propósitos fundamentales: 1) “concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos y; 2) evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se llegue.

La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, creada mediante Decreto 1397 de 1996, tiene por objeto “concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen”.

Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “*Colombia Potencia Mundial de Vida*”, con los pueblos Indígenas y con el pueblo Rom.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Teniendo en cuenta la misionalidad y funciones de la MPC, a través de los 23 años que lleva de existencia ha tenido dificultades para el cumplimiento eficaz y efectivo de su objeto, a causa de múltiples factores, por ejemplo falta de conocimiento por parte de las entidades del Gobierno Nacional de sus funciones; escasos niveles de articulación con las comunidades de base, lo que genera la necesidad permanente de flujos de información que permitan bajar los avances desde lo nacional a lo local, así como, la dificultad, de al ser un espacio político, generar un esquema financiero sostenible, puesto que sus resultados están alrededor del beneficio del mantenimiento de un diálogo político interétnico.

Por esta razón es necesario contar con garantías, que permitan la operatividad y funcionamiento de la MPC y su secretaría técnica, que se pueda hacer el seguimiento a esas medidas legislativas,

evaluar el impacto que estas puedan llegar a tener en los territorios y comunidades, además tener la capacidad de proponer como minimizar esas afectaciones a las que haya lugar.

Por otra parte, que coordine la agenda del movimiento indígena, las reuniones autónomas de los delegados y delegadas con el fin de que se definan, prioricen y den directrices frente a como posicionar la agenda y evaluar la implementación de la política por parte del

Gobierno de turno y del Estado colombiano, además de preparar las sesiones de la Mesa Permanente de Concertación con los insumos que se requieran para el debate y el logro de consensos, facilitando a su vez los mecanismos de diálogo abierto con el Gobierno Nacional.

En esta medida y en la búsqueda de seguir fortaleciendo los procesos organizativos, para el año 2021 se hace necesario avanzar en la implementación de las estrategias encaminadas al fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación -MPC, como son: la estrategia de fortalecimiento, estrategia de sistematización y seguimiento a los acuerdos de la Mesa, estrategia de socialización, apropiación y posicionamiento de la MPC, estrategia de comunicación propia y apropiada.

Tener un dialogo de gobierno a gobierno requiere de que los pueblos indígenas cuente con instrumentos que le permitan la continuidad en el dialogo, por ende fortalecer las vocerías políticas de los dirigentes es una apuesta que debe dar el movimiento indígena constantemente, conocer los temas y apropiarse de ellos facilita el debate y permita ahondar en la materialización de acuerdos, rutas y compromisos encaminados a la defensa de los derechos de nuestros pueblos, que al estar legítimamente relacionados con las comunidades de base blinden los procesos político llevados a cabo con el Gobierno Nacional.

En el 2025 se requiere contar con sesiones de la Mesa Permanente de Concertación –MPC, para avanzar en el cumplimiento de los más de 1400 acuerdos que se han suscrito en los 23 años de existencia de la Mesa, así como en el logro de los acuerdos y metas allegados en el marco del proceso de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en el posicionamiento e implementación de la agenda indígena en temas como:

En materia Territorial:

- Política Pública de Protección a sitios sagrados.
- Acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional.
- Reforma al Decreto 622 de 1977 sobre Parques Naturales
- Implementación del Decreto 2333 del 2014 sobre protección jurídica a tierras y territorios ancestrales.

En materia Ambiental:

- Decreto sobre competencias ambientales de las autoridades indígenas
- Salud
- Plan Decenal de salud pública – capítulo indígena.

Mujer, Familia y Generación:

- Implementación del Programa de protección a las mujeres indígenas -Auto 092 de 2008
- Política pública para la protección de los derechos de las familias, mujeres, niñas y niños, jóvenes y mayores indígenas (artículo 117 de la ley 1753 de 2015).

Autonomía:

- Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas ASGPRI
- Plan decenal de Justicia.
- Impulsar la reglamentación de los articulados correspondientes al Decreto 1953 de 2014.
- Impulsar la Creación de las Entidades Territoriales Indígenas.
- Implementación de los planes de salvaguarda y planes de vida de los pueblos indígenas.
- Derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

Derechos humanos y Paz:

- Implementación del Decreto 4633 de 2011
- Protección de líderes indígenas

Asimismo, se requiere contar con el espacio para poder llevar los procesos de consulta y temas de interés estratégico del Gobierno Nacional y permitirán hacer frente a posibles controversias que puedan desencadenar vías de hecho, siendo esto una manera de contrarrestar momentos de diálogo convulsionado.

La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías para la vigencia 2025, tomó en cuenta los costos históricos de las diferentes solicitudes de recursos para el Programa Misional de Funcionamiento *“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS - DECRETO 1397 DE 1996”* y decidió realizar una solicitud con un incremento del 10% correspondiente a un promedio de incremento del IPC y estos se requieren para dar cumplimiento a los diferentes acuerdos adquiridos en la concertación del PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*.

Los recursos solicitados para la vigencia 2025, se requieren para dar cumplimiento a los diferentes acuerdos adquiridos en la concertación del PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*, con los Pueblos Indígenas.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025:

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) y mesas regionales, como escenarios de concertación e interlocución con el gobierno nacional, con base al acuerdo sectorial con la MPC - IT2-58	\$ 8.562.300.000	100%	\$ 9.148.530.000	100%
TOTAL	\$ 8.154.500.000		\$ 9.148.530.000	

3.1.1.3.26 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (\$3.542.839.421)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento porcentual necesidad 2025 en relación con 2024
A-03-10-01-001 SENTENCIAS	\$4.150.000.000	\$ 3.192.839.421	- \$957.160.579	-21%
A-03-10-01-002 CONCILIACIONES	\$350.000.000	\$350.000.000	\$0	0%
TOTAL	\$ 4.500.000.000	\$ 3.542.839.421	-\$957.160.579	-21%

Nota: Es importante mencionar que respecto a la vigencia 2025 no se evidencia incremento porcentual, al contrario, se refleja una disminución significativa de -21%, en atención al índice de favorabilidad del 92% de las sentencias notificadas de los procesos que hace parte el Ministerio del Interior.

BASE LEGAL

En el artículo 10 del Decreto 2893 de 2011, modificado por el artículo 5 del Decreto 1140 de 2018, se establecen las funciones de la Oficina Asesora Jurídica del ministerio, que tiene a su cargo la representación judicial y extrajudicial en los procesos y actuaciones que se instauran en su contra o que este deba promover, mediante poder o delegación, y supervisar el trámite de los mismos.

En tal sentido, la Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo el rubro de sentencias y conciliaciones, por lo que cada año, en el mes de marzo se presenta la programación de presupuesto de la vigencia siguiente, basados en una valoración aproximada que tiene en cuenta sentencias proferidas en contra del Ministerio del Interior pendientes de pago y aquellos procesos en los cuales se produjeron fallos en contra en primera instancia y que se encuentran en apelación.

Dicha información se extrae de la base de procesos judiciales que maneja la Oficina Asesora Jurídica, la cual contiene una columna denominada "Riesgo Alto". La calificación del riesgo se obtiene de acuerdo al análisis que hace el apoderado del proceso, quien determina de acuerdo a diversos factores, si existe una probabilidad alta, media o baja de que el proceso resulte o no en una condena contra la entidad.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Con el fin de elaborar el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025, se remite la información que contiene el valor aproximado de pago de sentencias y conciliaciones proferidas en contra del Ministerio del Interior que se encuentran pendientes de pago.

Los procesos son los siguientes:

ACTOR	CLASE DE PROCESO	CUANTÍA
NANCY AMPARO SILVA CASTRO	REPARACIÓN DIRECTA	\$740.471.875
UNION TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA	EJECUTIVO	\$678.916.244
LEIDA PUENTES VARGAS	REPARACIÓN DIRECTA	\$500.000.000

JULIA ELVIRA JIMENEZALBARRACIN	REPARACIÓN DIRECTA	\$421.000.000
BELLY ANACONA URRUTIA	EJECUTIVO	\$352.451.302
YINETH PUENTES BORRERO	EJECUTIVO	\$300.000.000
HÉCTOR CAVADÍA PITALÚA	REPARACIÓN DIRECTA	\$200.000.000
	TOTAL	\$3.192.839.421

3.1.1.3.27 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS Y LAS ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE COMO ACTORES SOCIALES TRASCENDENTES EN EL MARCO DE LA LEY 133 DE 1994 (\$1.826.412.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
A-03-11-08-001	\$ 1.534.800.000	\$ 1.826.412.000	\$ 291.612.000	19%
TOTAL	\$ 1.534.800.000	\$ 1.826.412.000	\$ 291.612.000	19%

BASE LEGAL

En el marco de la Constitución Política de 1991, se consagró en su artículo 19, la libertad de cultos, el derecho de toda persona a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva, y la igualdad ante la ley de todas las confesiones religiosas e iglesias.

La personería jurídica especial es el tipo de personería específicamente previsto en el derecho colombiano para las iglesias y confesiones religiosas no católicas que desean ser claramente identificadas como tales en la vida social y que le permite al ente religioso el desarrollo institucional y público de sus actividades, con pleno reconocimiento de su naturaleza religiosa, y la protección específica de su autonomía reconocida por la Ley Estatutaria

En Colombia la libertad de culto se encuentra regulada en la Constitución Política de 1991 artículo 19, establece que "Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley".

En la Ley 133 de 1994 proyectada por el congreso en su artículo 3. el Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales.

Con la expedición de la Ley Estatutaria 133 de 1994, y sus Decretos Reglamentarios 782 de 1995, 1396 de 1997, 1455 de 1997, 354 de 1998 y 505 de 2003, desarrollaron aspecto relativos a la libertad religiosa y de cultos, incluido el reconocimiento de personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas.

El artículo 1° del Decreto 1140 de 2018, se crea la Dirección de Asuntos Religiosos como órgano rector de la libertad religiosa en el país, toda vez que tiene a su cargo el asesoramiento, desarrollo, promoción, acompañamiento, articulación y coordinación de la política pública de libertad religiosa y de cultos en Colombia, frente a todas las entidades nacionales y territoriales, así mismo, el Ministerio del Interior tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley "(...) formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de (...), libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo (...)

Política Pública:

De conformidad con el artículo 1° del Decreto Ley 2893 de 2011, se promulgó la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, mediante el Decreto 437 de 2018, y se creó la Dirección de Asuntos Religiosos con la expedición del Decreto 1140 de 2018.

Habiéndose formulado la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 437 de 2018 que adicionó el Decreto 1066 de 2015, la misma debe ser aplicada por todas las entidades nacionales y territoriales, en desarrollo de los principios y los derechos constitucionales relativos a libertad religiosa y de cultos, para garantizar el ejercicio de éstos.

Programa de Gobierno:

Considerando que, en el Programa de Gobierno, en el Capítulo 4 Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida, numeral 4.2. Por una seguridad humana que se mida en vidas, que reza:

“Protegeremos la diversidad religiosa y de culto. En nuestro gobierno garantizaremos a todas las ciudadanías las condiciones para el ejercicio de la igualdad y la libertad de culto según sus opciones religiosas y espirituales. Toda política pública relativa a la igualdad y libertad religiosa estará armonizada con la Constitución Política y la ley (Página 46)”

Plan de Desarrollo:

De igual manera, en aras de dar cumplimiento a los objetivos del Ministerio del Interior descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” contenidos en la Transformación V. Convergencia regional, Catalizador 7. Consolidación del diálogo, la memoria, y la reconciliación como políticas de estado y reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, para reconstruir el tejido social, en el componente a. Diálogo, memoria, convivencia y reconciliación para la reconstrucción del tejido social (Página 171),

Para atender específicamente la Acción estratégica: 1. Creación y conformación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, y No Estigmatización - "LIBRE"

Mediante la creación de este Sistema, el Ministerio del Interior continuará en la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, además de visibilizar, fortalecer y reconocer las entidades religiosas y sus organizaciones, desde su papel como transformadores y generadores de cambio en medio de la sociedad, por lo cual, para el debido cumplimiento a las metas dispuestas en el plan de acción de la Dirección tanto para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, y No Estigmatización -

"LIBRE, la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos de la Dirección de Asuntos Religiosos, así como el desarrollo de las campañas departamentales que promuevan el respeto y garantía de la libertad religiosa y la no estigmatización.

En desarrollo de estas funciones se hace necesario realizar las siguientes actividades:

- Reconformación de instancias y espacios de participación con enfoque confesional, mujer, juventud y territorial (Consejo Nacional, Mesa Nacional, Mesa de Paz, Mesa de Educación, Mesa de Mujeres, Mesa de Juventud, Espacio con el SENA, y Mesa de articulación con Cancillería).
- Expedir un acto administrativo de creación y conformación del Sistema
- Formular e implementar Plan Estratégico Nacional de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, con mecanismos de seguimiento y monitoreo.
- Territorialización de la Política Pública con enfoque diferencial (confesional, ruralidad, mujer y juventud) con Generación de aportes para la construcción de Paz Total - Asistencia técnica territorial, sectorial e institucional.
- Asistencias técnicas a las entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) de manera presencial y virtual, sobre las metodologías y kit de herramientas proferidas por la Dirección realizadas"
- Red Humanitaria Interreligiosa en articulación con oferta institucional.
- Conformación de la red rural interreligiosa
- Implementar una estrategia de cooperación internacional.
- Estudio, revisión documental y trámite de solicitudes de personerías jurídicas, dignatarios y reformas estatutarias, con una reglamentación actualizada.
- Poner en marcha un Registro Público reglamentado que permita su constante actualización y modificación, mediado por el uso de herramientas TIC.
- Expedir certificados de existencia y representación legal de las entidades religiosas.
- Alistamiento, socialización, Convocatoria y trámite para suscripción de Convenios de Derecho Público Interno.
- Realizar una caracterización de las entidades religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso (de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación y enfoque diferencial).
- Realizar la sistematización, análisis de data y socialización de resultados del proceso de caracterización.
- Ajuste e implementación de Banco de Iniciativas Interreligiosas con enfoque en mujeres, juventud y ruralidad con impacto económico, social y ambiental.
- Fortalecimiento de Iniciativas Interreligiosas con enfoque en mujeres, juventud y ruralidad con impacto económico, social y ambiental.
- Implementar procesos pedagógicos, de transferencia de conocimiento y Campaña de Diálogo Social para la no estigmatización y cero discriminaciones en articulación con la Red Académica, el sector y el territorio.
- Implementar las líneas de acción de la Red Académica para el Respeto y Garantía de la Libertad Religiosa.
- Organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran.

Estrategias:

El Ministerio del Interior implementará la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, garantizando su articulación con los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 437 de 2018.

El Ministerio del Interior, en el marco de la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, fortalecerá las organizaciones del sector religioso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 437 de 2018, buscando garantizar el derecho a la libertad religiosa y de cultos.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, desarrollará programas de capacitación y formación a líderes de distintas entidades religiosas, sin distinción de creencias, y a funcionarios públicos, orientados en la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos. Dichos programas deberán estar acordes con la cultura, hecho y sentir religioso, así como a disminuir las posibles violaciones al derecho de libertad religiosa y de cultos.

En el marco del decreto 437 de 2018, el Ministerio del Interior caracterizará las organizaciones religiosas, teniendo en cuenta su contribución en la construcción de capital social y al desarrollo sostenible.

Cabe anotar que uno de los enfoques de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos es el “territorial”, en busca del fortalecimiento de las facultades de las entidades territoriales, el cual debe estar con el gobierno nacional, principalmente en cabeza del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, de acuerdo con la política pública de libertad religiosa, las entidades de orden nacional y territorial deben estar en permanente coordinación intersectorial, interinstitucional y territorial en los asuntos religiosos frente a la planeación nacional y territorial, la creación y promoción de instancias de participación ciudadana y la coordinación de mecanismos o rutas de seguimiento y acción para la formulación y complementación de dicha política, como así lo establece el Decreto 437 de 2018 .

Convirtiéndose entonces la Dirección de Asuntos Religiosos en órgano rector, no solo en lo que tiene que ver con la implementación de la política pública de libertad religiosa y de cultos y la expedición de actos administrativos frente a las personas jurídicas para las iglesias, confesiones y denominaciones, entre otros, sino también, en impulsor de los proyectos normativos y la emisión de los conceptos en la materia religiosa.

De allí que sean sus principales funciones: i) fortalecer el derecho a la libertad e igualdad religiosa, de cultos y de conciencia; ii) reconocer a los colectivos religiosos; iii) promover lineamientos de la política pública de libertad religiosa; iv) emitir líneas conceptuales como órgano rector en el tema religioso; e, v) impulsar programas nacionales que se deban reflejar en Entidades territoriales.

En ese sentido, el Ministerio mediante la Resolución 0583 de 2018 creó la Mesa Nacional del Sector Religioso como instancia nacional para la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, y de conformidad con el artículo 2.4.2.4.1.4 del Decreto 1066 de 2015, en concordancia con el parágrafo 7 de la Resolución 1195 de 2018, los lineamientos y directrices que surjan del cumplimiento de las funciones de la Mesa Nacional del Sector Religioso, constituirán un marco de referencia para las mesas del sector religioso e instancias de

participación y/o consulta en asuntos de libertad religioso y de cultos, de los niveles departamentales, distrital y municipal

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

A partir de la Constitución de 1991 se abrieron espacios de participación los cuales son necesarios propiciarlos con la apropiación de la Dirección, para visibilizar y reconocer la pluralidad religiosa en la nación colombiana, y como fruto de esto, se establecieron las condiciones constitucionales y legales para la protección de este derecho fundamental.

Sin embargo, entre los funcionarios públicos, las entidades educativas a todos los niveles, miembros de las entidades religiosas y público en general, existe un desconocimiento de su conceptualización, alcance, derechos, deberes y acciones que reconozcan y protejan el actuar en todas las materias y una sana pluralidad de las confesiones, religiones, organizaciones basadas en la fe religiosa y espiritualidades, lo cual se hace necesario para la Dirección de Asuntos Religiosos poder contar con un presupuesto suficiente, con el cual se pueda llegar a todos los niveles del Estado y Sociedad Civil para el conocimiento de las Libertades religiosas y de cultos.

Teniendo en cuenta el excepcional crecimiento del número de iglesias y demás entidades religiosas, que para el 31 de diciembre de 2023 había ascendido a más de 11.000 Entidades Religiosas con personería jurídica reconocida por el Ministerio,⁹ y las situaciones de orden político, social y económico que se pueden derivar de tal número de comunidades religiosas en el entorno nacional, se han presentado periódicos cuestionamientos en la opinión pública sobre el papel del Estado frente al sector religioso, así como la transparencia en el manejo, en algunos casos, de los asuntos al interior de entidades religiosas, por lo cual se ha convertido en una necesidad dar más relevancia y capacidad de acción a las funciones relacionadas con los asuntos religiosos en el Ministerio del Interior.

El presupuesto histórico con el que ha contado la Dirección de Asuntos Religiosos ha registrado el entre el 95% y el 100% de ejecución en cada una de las vigencias puesto que la apropiación ha sido limitada, no obstante, se trabaja y se le cumple al sector religioso. La solicitud que se está realizando a través de este documento para la vigencia 2024 - 2026, es justo lo que se necesita para poder continuar con el fortalecimiento a las entidades religiosas en el marco de la Ley 133 de 1994 y Decreto 437 de 2018, para cumplirle al sector.

Par el propósito tenemos definidas las siguientes actividades:

1. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LO RELACIONADO CON EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE MANERA INTEGRAL (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y PROTOCOLOS EN ASUNTOS RELIGIOSOS \$621.180.000

1.1 Expedir certificados de existencia y representación legal de las entidades religiosas. \$145.180.000.

1.2 Apoyar la actualización del sistema de gestión documental, la generación del sistema de información geográfica, y la custodia de los expedientes de personerías jurídicas. \$279.650.000,00

⁹ Fuente: Registro Público de Entidades Religiosas.

1.3 Realizar asistencias técnicas y acompañamientos a las entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) de manera presencial y virtual, sobre las metodologías y kit de herramientas proferidas por la Dirección. \$196.350.000.

JUSTIFICACIÓN:

Actualmente, se requiere recursos para financiar las tecnologías de la información como también de recurso humano, recurso técnico y el pago de gastos logísticos para la implementación y puesta en marcha de nuevas prácticas y formas de gestionar los documentos los cuales se han vuelto una herramienta para el acceso, consulta transparencia y disponibilidad de la Información.

Por ello contar con información electrónica, para la Dirección de asuntos Religiosos se ha vuelto una prioridad, contar con un componente tecnológico razón por la cual se requiere de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de los expedientes de personerías jurídicas, armonizados con los procesos de la gestión documental como son los documentos en producción, revisión, gestión o trámite de personerías jurídicas.

De otro lado y en cumplimiento a las Líneas de acción para el fortalecimiento de la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial, en el marco de la garantía del derecho de libertad religiosa y de cultos en su Artículo 4.2.4.2.7.1. Asistencia técnica a las entidades territoriales.

El Ministerio del Interior brindará asistencia técnica a las entidades territoriales en el alcance y desarrollo del derecho de libertad religiosa y de cultos, la viabilidad de su inclusión dentro de los planes, programas, proyectos y políticas territoriales y la aplicación de la política pública nacional en esta materia, fortaleciendo la articulación nación - territorio como eje fundamental para el proceso de reconocimiento, fortalecimiento y garantía de este derecho.

Los recursos solicitados se encuentran distribuidos así conforme a la siguiente propuesta:

- a) Para esta labor se realizará la contratación de diez (15) funcionarios del nivel profesional a través de OPS, que lidere y promueva las asistencias técnicas a las entidades territoriales, los cuales tendrán un incremento porcentual de aproximadamente el 19% así 9,28 de IPC y 9,78 por el incremento en el número de solicitudes presentadas, dado que a la fecha se tiene un pendiente de casi 800 solicitudes

La personería jurídica especial es el tipo de personería específicamente previsto en el derecho colombiano para las iglesias y confesiones religiosas no católicas que desean ser claramente identificadas como tales en la vida social y que le permite al ente religioso el desarrollo institucional y público de sus actividades, con pleno reconocimiento de su naturaleza religiosa, y la protección específica de su autonomía reconocida por la Ley Estatutaria

Por lo anterior se requiere continuar con un Plan de Contingencia para mitigar el represamiento de solicitudes de personerías jurídicas especiales y extendidas. Reglamentación mediante decreto presidencial del trámite y requisitos para el reconocimiento de personerías jurídicas especiales y/o extendidas.

- Priorización en la contratación de personal idóneo (profesionales en derecho) para atender las solicitudes de reconocimiento de personerías especiales y extendidas.
- Realizar un proceso de alistamiento para la transición a un sistema informático que permita fortalecer el trámite de personerías jurídicas.

- Sistematización de los expedientes físicos de solicitudes de reconocimiento de personerías jurídicas especiales y extendidas.

De conformidad con la solicitud, se tiene previsto realizar las siguientes actividades según la justificación normativa que se describen a continuación así:

En referencia a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, el proceso de socialización del Convenio se tendrá en cuenta los objetos contractuales relacionados con apoyo logísticos, con el propósito de que estos se ajusten a la norma de austeridad y no permitan interpretaciones erróneas, así mismos se tendrá en cuenta los gastos relacionados con refrigerios y alimentación solo cuando sean estrictamente necesario y con la autorización de Secretaria General del Ministerio del Interior.

El Ministerio del interior fomenta el uso de herramientas tecnológicas para la realización de eventos, reuniones y capacitaciones institucionales en armonía con lo dispuesto en el Artículo 6 "Prelación de encuentros virtuales" del Decreto 371 de 2021.

2. Fortalecimiento de la articulación intersectorial interinstitucional y territorial en el marco de la garantía del derecho de libertad religiosa y de cultos. \$666.400.000

1. Aplicar estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades religiosas y sus organizaciones. \$ 202.300.000
2. Organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio. \$ 464.100.000

JUSTIFICACIÓN:

El Ministerio del Interior tiene el deber de identificar los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; para esto, en el Decreto 437 de 2018 en el artículo 2.4.2.4.4.1.3 se establece que “El Ministerio del Interior, hará las gestiones necesarias para identificar y dar a conocer ante la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones que tengan incidencia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.

Igualmente, la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, cita un artículo que da respuesta a cada una de estas acciones:

Artículo 2.4.2.4.2.1.1. Estrategia de mapeo y caracterización. El Ministerio del Interior, diseñará y aplicará una estrategia de mapeo y caracterización de la labor, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación, de las entidades religiosas y sus

organizaciones, en todo el país, con el fin de identificar y posicionar el trabajo de aporte al bien común que estas formas organizativas desarrollan. Para lo anterior el Ministerio del Interior articulará con las entidades públicas del orden nacional y territorial, buscando optimizar la obtención de los resultados esperados, por lo que se deberá implementar un canal de comunicación que facilite la cooperación armónica entre estas.

Artículo 2.4.2.4.2.5.2. Promoción de la participación ciudadana en las entidades religiosas y sus organizaciones. El Ministerio del Interior incluirá en sus estrategias, la promoción de la participación ciudadana de las entidades religiosas y sus organizaciones, como otro de los sectores de la sociedad civil objeto de estas estrategias, en las instancias de participación nacional, sectorial, poblacional y territorial, donde se traten asuntos que directa o indirectamente se relacionan o afectan el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos.

El Decreto 437 de 2018, que adicionó el Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015, se adopta la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos; en la Sección 4 del mencionado decreto se establecen las “Estrategias para la cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo”, y en la Subsección 1 se fija la estrategia de fortalecimiento de la siguiente manera: “Fortalecimiento de la colaboración, cooperación y coordinación entre las entidades públicas de nivel nacional y territorial, las entidades religiosas y sus organizaciones y los organismos y organizaciones internacionales de cooperación, en la contribución al desarrollo de la Nación en el marco del logro de los objetivos del desarrollo sostenible.”

Así las cosas, el Ministerio del Interior tiene el deber de identificar los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; para esto, en el artículo 2.4.2.4.1.3 se establece que “El Ministerio del Interior, hará las gestiones necesarias para identificar y dar a conocer ante la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones que tengan incidencia en el logro de los Objetivos de Desarrollo.

Es necesario contar con una partida presupuestal para el año 2025 para continuar con el proceso de visibilización del aporte y cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su labor cultural, social, educativa, de convivencia, de paz y reconciliación, conforme a lo establecido en el Decreto 437 de 2018 dentro del marco de sus competencias, en la formulación, adopción, dirección, coordinación y ejecución de la política pública, planes, programas y proyectos en materia de libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo, entre otros; en virtud de tal disposición se promulgó la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos.

Con la primera etapa de “*Diseñar estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades religiosas y sus organizaciones.*” Y el acompañamiento del DNP para la validación del instrumento de caracterización, el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Religiosos aplica a las Entidades Religiosas registradas en el registro público, de todos los departamentos que aún no han sido caracterizados, este instrumento y aplicación en todo el territorio nacional el cual permitirá conocer de manera cercana la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia así como de paz, además de la reconciliación que efectúan las entidades religiosas y sus organizaciones.

Por lo anterior se desarrollarán una serie de acciones que comprenden:

- Revisión, de las herramientas de recolección de información a utilizar en el mapeo y caracterización
- Acompañamiento técnico al proceso administrativo, de sistematización y operativo del proceso de recolección de información.
- Socialización y alistamiento a las entidades religiosas y sus organizaciones frente al proceso de mapeo y caracterización.
- Diseño y planeación de la operatividad del proceso de recolección de información en cada uno de los municipios que sea priorizados para la vigencia 2024.
- Realizar visita a los municipios priorizados para la vigencia.
- Mesas de trabajo y socialización del instrumento de caracterización.
- Reuniones de apoyo en Alcaldías para aplicación de la caracterización.

Logros Vigencias Anteriores

- En la vigencia 2019 se logró caracterizar el departamento de Cundinamarca.
- En la vigencia 2020 se logró caracterizar a los departamentos de valle del Cauca, Risaralda, Bolívar y Norte de Santander.
- En la vigencia 2021 se logró caracterizar los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba, Antioquía, Caldas, Tolima, Choco, Cauca, Meta, Casanare, Caquetá y Guainía.
- En la vigencia 2022 - 2023 se caracterizaron Guajira, Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Guaviare, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, San Andrés y providencia, Vaupés, Vichada, Santander, y Sucre.

Costos:

- 8 contratos de prestación de servicio para Acompañamiento técnico al proceso administrativo, de sistematización la recolección de información en el marco de la estrategia de Mapeo y Caracterización.
- Realización de 32 eventos con las entidades caracterizadas y 2 encuentros nacionales

3. Identificación y posicionamiento del aporte al bien común a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan \$ 422.450.000,00

3.1 Apoyar económicamente iniciativas sociales interreligiosas, que contengan proyectos de impacto social, ambiental, humanitario y de emprendimiento. \$ 422.450.000,00

JUSTIFICACIÓN:

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 de la constitución Política, el Estado colombiano debe propender por garantizarle a todas las personas dentro del territorio nacional, el derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva, en aras de crear una igualdad material y jurídica que permita desarrollar, dentro del marco del principio de legalidad.

Que mediante el Decreto 437 de 2018; el amparar el derecho de las entidades religiosas, sus fieles y sus organizaciones de crear y dirigir iniciativas de aporte al bien común, en forma individual o colectiva, y de inspirar su funcionamiento en el propio ideario moral y religioso, en los términos del artículo 13 de la Ley Estatutaria 133 de 1994; el generar acciones que propendan por garantizar el ejercicio de la participación ciudadana de las entidades religiosas y sus

organizaciones; y el promover la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en los escenarios de perdón y reconciliación, para la construcción de la paz, de conformidad con el artículo 2.4.2.4.1.3., literales e), f) y K) de dicha norma.

Por su parte con el BIIR, se ha podido demostrar de manera tangible que el apoyo a las iniciativas interreligiosas impacta a más de 200 personas por iniciativa, esto indica que proporcionalmente se apoyan nuevas iniciativas, con estos nuevos rubros, no solamente se estarían apoyando más nuevas organizaciones.

Con respecto a la resolución 1274 del 5 de noviembre de 2020, por lo cual se crea y estructura el Programa Banco de Iniciativas Interreligiosas – BIIR y, le atribuye a la Dirección de Asuntos Religiosos la función de promover y articular la inclusión de las organizaciones sociales del sector y entidades religiosas, en los programas, proyectos y acciones de trabajo social, construcción del tejido social y bien común que oferten las entidades gubernamentales o de carácter privado, en términos de igualdad.

Que, en el desarrollo de tales objetivos, se requiere de la continuación del programa de banco de iniciativas interreligiosas el cual se organiza como programa de la Dirección de Asuntos Religiosos, a través del cual se reconoce el sector religioso como un actor clave en pro de la construcción del tejido social y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las diferentes iniciativas e impacto social que ha venido consolidando, con sus distintas acciones a nivel nacional, y en forma histórica a través del tiempo.

Que a través del numeral 11 del artículo 16 A del Decreto de Ley 2893 de 2011, adicionado por el artículo 8 del Decreto 1140 de 2018, le atribuye a la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, la función de promover y articular la inclusión de las organizaciones sociales del sector y entidades religiosas.

Igualmente, en el Decreto 1140 de 2018, le atribuye a la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, la función de promover y articular la inclusión de las organizaciones sociales del sector y entidades religiosas, en los programas, proyectos y acciones de trabajo social, construcción del tejido social y bien común que oferte las entidades gubernamentales o de carácter privado, en términos de igualdad.

Que, son objetivos específicos de la Política pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos adopta mediante el Decreto 437 de 2018: el amparar el derecho de las entidades religiosas, sus fieles y sus organizaciones de crear y dirigir iniciativas de aporte al bien común, en forma individual o colectiva, y de inspirar su funcionamiento en el propio ideario moral y religioso, en los términos del artículo 13 de la Ley estatutaria 133 de 1994; el generar acciones que propendan por garantizar el ejercicio ciudadana de las entidades religiosas y sus organizaciones; y el promover la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones.

Costos

Apoyar Económicamente 34 Iniciativas Sociales: Conforme a la Creación y Estructura del Programa Banco de Iniciativas Interreligiosas - BIIR de la Dirección de Asuntos Religiosos.

En este tema el recurso económico estará asignado a suplir los costos operativos, administrativos y de evaluación, aprobación y seguimiento, así como apoyar económicamente las iniciativas sociales interreligiosas, que constituyan buenas prácticas de impacto social, humanitario y de

emprendimiento, en 5 líneas estratégicas para ser aprobadas a través del Comité técnico del banco de iniciativas Interreligiosas BIIR.

4. Divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia

4.1 Implementar las líneas de acción de la Red Académica para el Respeto y Garantía de la Libertad Religiosa. \$103.500.000

JUSTIFICACIÓN

Mediante la Resolución 987 del 2020 del Ministerio del Interior, se consolida la Red Académica, como herramienta encaminada a facilitar la investigación, estudio y análisis, para conceptuar y orientar acerca de la historia y las realidades del hecho y la cultura religiosa en el país, que permita transferir dicho conocimiento a todos los componentes del sector religioso; lo que evidencia el compromiso del Ministerio del Interior en seguir fortaleciendo el análisis e investigación del derecho de libertad religiosa y sus ámbitos, como una apuesta desde su misionalidad a través de la Dirección de Asuntos Religiosos.

La Red Académica para el Respeto y la Garantía de la Libertad Religiosa, servirá de estrategia investigativa del hecho y el actor religioso, que permita la articulación de grupos, centros, universidades y en general actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se dedican a investigar en relación con los actores, el hecho y los asuntos religiosos en general.

La metodología, funcionamiento y articulación de la Red Académica, estará en cabeza de la Dirección de Asuntos Religiosos, al igual que su planeación y presupuesto.

La Red Académica para el Respeto y la Garantía de la Libertad Religiosa, tuvo como punto de partida los diálogos e instancias de participación promovidos durante el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, en los cuales se identificó y definió la necesidad de convocar a la academia para enriquecer la política pública y la discusión en torno al hechos religioso, con la contribución de insumos derivados de las investigaciones realizadas frente a la materia.

Por lo anterior se hace necesario contar con un presupuesto para la divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia, implementando las líneas de acción de la Red Académica para el Respeto y Garantía de la Libertad Religiosa mediante la contratación de 2 prestaciones de servicios para garantizar el cumplimiento de las líneas de gestión de la red

Costos.

Contratación de 2 prestaciones de servicios para garantizar el cumplimiento de las líneas de gestión de la red

Realización de 40 actividades de divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1. Fortalecimiento del Ministerio del Interior en lo relacionado con el derecho de libertad religiosa y de cultos de manera integral (Fortalecimiento institucional Actualización de formatos y protocolos en asuntos religiosos)				
Expedir certificados de existencia y representación legal de las entidades religiosas.	\$ 122.000.000,00	100%	\$ 145.180.000,00	100%
Apoyar la actualización del sistema de gestión documental, la generación del sistema de información geográfica, y la custodia de los expedientes de personerías jurídicas.	\$ 235.000.000,00	100%	\$ 279.650.000,00	100%
Realizar asistencias técnicas y acompañamientos a las entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) de manera presencial y virtual, sobre las metodologías y kit de herramientas proferidas por la Dirección	\$ 165.000.000,00	80	\$ 196.350.000,00	80
2. Fortalecimiento de la articulación intersectorial interinstitucional y territorial en el marco de la garantía del derecho de libertad religiosa y de cultos.				
Aplicar estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades religiosas y sus organizaciones	\$ 170.000.000,00	25%	\$ 202.300.000,00	25%
Organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio	\$ 390.000.000,00	32	\$ 464.100.000,00	32
3. Identificación y posicionamiento del aporte al bien común a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan				

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Apoyar económicamente iniciativas sociales interreligiosas, que contengan proyectos de impacto social, ambiental, humanitario y de emprendimiento.	\$ 355.000.000,00	34	\$ 422.450.000,00	34
4. Divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia				
Implementar las líneas de acción de la Red Académica para el Respeto y Garantía de la Libertad Religiosa.	\$ 97.800.000,00	40	\$ 116.382.000,00	40
	\$1.534.800.000		\$1.826.412.000	

3.1.1.4 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (\$3.152.432.945)

3.1.1.4.1 IMPUESTOS (\$204.784.945)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro Presupuestal	Concepto	Recurso	Recursos 2025
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	10	\$204.784.945
A-08-01	IMPUESTOS	10	\$204.784.945
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	10	\$204.784.945
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	10	\$190.103.315
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10	\$ 14.681.630

Impuesto predial y sobretasa ambiental (A-08-01-02-001)

El Ministerio del Interior, cuenta con quince (15) inmuebles de su propiedad relacionados en el cuadro siguiente, a los cuales debe garantizar la cancelación de impuesto predial que se genera anualmente:

Nº	INMUEBLES	CHIP	MATRICULA INMOBILIARIA
1	Carrera 8 # 12B-31 Piso 3 Bancol	AAA0032DOXR	050C00134131
2	Carrera 8 # 12B-31 Piso 4 Bancol	AAA0169CEXR	050C00127598
3	Carrera 8 # 12B-31 Piso 6 Bancol	AAA0169CEZM	050C00127596
4	Carrera 8 # 12B-31 Piso 7 Bancol	AAA0032DOYX	050C00560873
5	Carrera 8 # 12B-31 Piso 8 Bancol	AAA0169CFAW	050C00566775
6	Carrera 8 # 12B-31 Piso 9 Bancol	AAA0169CFBS	050C00566776
7	Carrera 8 # 12B-31 Piso 10 Bancol	AAA0169CFDE	050C00566774
8	Carrera 8 # 12B-31 Piso 11 Bancol	AAA0169CFCN	050C00566777
9	Carrera 8 # 12B-31 Piso 13 Bancol	AAA0032DPAW	050C00623796

N°	INMUEBLES	CHIP	MATRICULA INMOBILIARIA
10	Calle 8 # 8A-09 Parquadero	AAA0030MMDE	050C01272778
11	Carrera 10 # 15-22 Of. 801 Seguros Patria	AAA0031MALW	050C01205533
12	Calle 12 # 8-38, Edificio Camargo	AAA0032DPDE	050C00125573
13	Calle 12B #8-28, Edificio Hurtado	AAA0032DPCN	050C00125574
14	Carrera 8 # 7-83, Casa La Giralda	AAA0030MMEP	050C00288759
15	Carrera 8 #12B-17, Sótano	AAA0032DOWF	050C01182942

Para la vigencia 2025, se proyecta una apropiación de recursos por valor de \$190.103.315, resultado del valor asignado a la presente vigencia, más la variación anual del IPC 2024 del 9,28%, más el IPC del 6% (IPC proyectado para la vigencia 2025, $[(\$164.113.058 + 9,28\% = 179.342.750 + 6\% = 190.103.314)]$).

Impuesto sobre vehículos automotores (A-08-01-02-006)

El Ministerio del total de vehículos que hacen parte del de su parque automotor, de los cuales trece (15) son de propiedad del Ministerio, doce (12) entregados al servicio por la SAE- Sociedad de Activos Especiales, se les debe efectuar la cancelación de los impuestos pertinentes en cada vigencia.

PARQUE AUTOMOTOR MINISTERIO DEL INTERIOR

ITEM	CLASE	MARCA	PLACA	MODELO	OBSERVACIÓN
1	Campero	Mitsubishi Wagon	OBG-046	2008	PROPIO
2	Campero	Mitsubishi Wagon	OBG-047	2008	PROPIO
3	Campero	Mitsubishi Wagon	OBG-048	2008	PROPIO
4	Camioneta	Mitsubishi Wagon	OBG-049	2008	PROPIO
5	Camioneta	Hyundai Tucson	OBH-222	2009	PROPIO
6	Camioneta	Hyundai Tucson	OBH-223	2009	PROPIO
7	Camioneta	Hyundai Tucson	OBH-224	2009	PROPIO
8	Camioneta	Hyundai Tucson	OBH-225	2009	PROPIO
9	Camioneta	Hyundai Tucson	OBH-227	2009	PROPIO
10	Camioneta	Toyota Sequoia	OLN-006	2015	PROPIO
11	Campero	Chevrolet Dimax	OBG-555	2008	PROPIO
12	Camioneta	Ford Eco Sport	JQU-951	2021	PROPIO
13	Camioneta	Chevrolet Vitara	OBF-894	2005	PROPIO
14	Automóvil	Mazda 626	CZQ677	2005	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
15	Motocicleta	BMW	HKV 61A	2002	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
16	Campero	Toyota Land Cruiser	RIH-272	2008	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
17	Camioneta	Renault Duster 4x4	ISR-451	2016	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN

PARQUE AUTOMOTOR MINISTERIO DEL INTERIOR

ITEM	CLASE	MARCA	PLACA	MODELO	OBSERVACIÓN
18	Automóvil	Renault Stepway Sandero	JFS-467	2017	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
19	Campero	Chevrolet Tracker	JCO-802	2017	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
20	Camioneta	Hyundai Tucson	HZR-147	2015	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
21	Campero	Renault Koleos	IHZ-781	2017	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
22	Automóvil	Mazda 626	BSJ 972	2005	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
23	Camioneta	Chevrolet Orlando	HVL495	2020	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
24	Camioneta	Nissan Qashqai	FZL 542	2019	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
25	Camioneta	Kia	IAS631	2015	SAE (PROVISIONAL) ASIGNACION CON RESOLUCIÓN
26	Automóvil	Volkswagen	LIS 972	2016	PROPIO
27	Camioneta	Toyota	LIS971	2015	PROPIO

Para la vigencia 2025, se proyecta una apropiación de recursos por valor de \$14.681.630, resultado del valor asignado a la presente vigencia, más el IPC 2024 del 9,28%, más el IPC del 6% (IPC proyectado para la vigencia 2025, [(\$12.674.409 + 9,28% = 13.850.594 + 6% = 14.681.630)]).

Es importante mencionar que los recursos asignados para la vigencia 2024, son insuficientes toda vez que, en el último semestre del 2023, la DIAN entregó al Ministerio mediante donación dos vehículos (LIS 971 y LIS 972), los cuales no se habían tenido en cuenta para la proyección del anteproyecto 2024, de igual manera se debe indicar que para el periodo 2024 se proyectó sobre avalúos de la vigencia 2023.

3.1.1.4.2 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (\$2.947.648.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON RESPECTO A 2024
A-08-04-01	\$2.780.800.000	\$2.947.648.000	\$166.848.000	6%
TOTAL	\$2.780.800.000	\$2.947.648.000	\$166.848.000	6%

El valor asignado para la presente vigencia es de \$2.780.800.000, a los cuales se le aplicó el incremento del IPC del 6% (IPC proyectado para la vigencia 2025, para calcular el valor para la vigencia 2025 obteniendo un total de \$2.947.648.000.

3.1.2. SERVICIO A LA DEUDA (\$19.635.475.503)

3.1.2.1 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (\$19.635.475.503)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor Asignado 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia %
Servicio de la Deuda Pública	-	19.635.475.503	N.A.
TOTAL	-	19.635.475.503	N.A.

BASE LEGAL

Conforme con el artículo 2.4.4.7 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 1266 de 2020, es obligación de las entidades o agencias que forman parte del Presupuesto General de la Nación efectuar los aportes de contingencias judiciales que correspondan al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales – FCEE, creado a través de la Ley 448.

Esto con el fin de garantizar el pago de las condenas que se dicten en el marco de procesos cuya notificación del auto admisorio de la demanda se dio a partir del 1 de enero de 2019.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS

Teniendo en cuenta lo anterior, y las metodologías planteadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante circular externa 010 del 26 de febrero de 2.024, el Ministerio del Interior procedió a realizar el cálculo del contingente judicial para 2025. El valor de la necesidad para la próxima vigencia (\$19.635.475.503) fue el resultado obtenido al diligenciar el “formulario de cálculo de aportes a FCEE” del MHCP, con la información de los procesos del Ministerio del Interior que se encuentra registrada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa – eKOGUI y al aplicar la opción de metodología de exclusión automática que ofrece dicho formulario. Los datos obtenidos al aplicar este cálculo o fueron los siguientes,

Contingencia total: 30.062.450.489

Valor total aportes: 24.544.344.379

Valor de aportes vigencia 2025: 19.635.475.503

Es importante resaltar que este formulario fue enviado a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del MHCP, para la aprobación del valor de aporte FCEE 2025, si esta Dirección considera necesario un ajuste en el valor, este cambio será reportado en las mesas sectoriales para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo.

3.1.3 INVERSIÓN (\$1.493.012.821.904)

3.1.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN COLOMBIA. (\$59.378.570.300)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
C-3701-1000-30	\$ 40.034.612.918	\$59.378.570.300	\$19.343.957.382	48,31%
TOTAL	\$ 40.034.612.918	\$59.378.570.300	\$19.343.957.382	48,31%

BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia.
- Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. 2. Seguridad humana y justicia social. 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar. 6. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades. a. Prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, colectivo e individual. 5. Convergencia regional. 7. Reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, e integración de personas que dejan las armas para reconstruir el tejido social. a. Diálogo, memoria, convivencia y reconciliación para la reconstrucción del tejido social. Paz total e integral. A. Territorios que se transforman con la implementación del Acuerdo del Teatro Colón. 2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz.
- Decreto 2893 de 2011. Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
- Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
- Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015. Sector Inclusión Social y Reconciliación (Ley 1448 de 2011).
- Decreto 2340 de 2015. Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
- Decreto 1066 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.
- Decreto 1581 de 2017. Por el cual se adopta la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades.

- Documentos CONPES No 3931 de 2018: “Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC - EP” y 4031 de 2021: “Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
- Decreto 660 de 2018. Por el cual se crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
- Decreto 1444 de 2022. Política Pública de Reconciliación, Convivencia y no Estigmatización.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Ante la baja eficiencia en la identificación, advertencia y gestión de acciones preventivas por parte de los entes territoriales, originada en el desinterés en las temáticas de prevención del riesgo y las debilidades en la planeación territorial de la gestión del riesgo de violaciones de los derechos humanos, en especial los relacionados con los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad, así como al desconocimiento del contenidos y alcances de la política pública de prevención, aunado a la desarticulación entre las entidades del nivel territorial y nacional para dar respuesta a los riesgos en vulneraciones a los Derechos Humanos, el proyecto tiene como objetivo el mejorar el nivel de respuesta de las entidades territoriales y organizaciones frente a las amenazas, vulnerabilidades y las eventuales consecuencias de violaciones de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad.

Con tan propósito la Dirección de Derechos Humanos espera para la vigencia 2025 continuar desarrollando acciones enfocadas en mejorar la eficiencia de las entidades territoriales en la identificación, advertencia y gestión de acciones preventivas, con miras a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades y organizaciones ante eventuales hechos de violación de derechos humanos.

A través de estas acciones el grupo de prevención del riesgo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior fortalecerá a las administraciones locales, con énfasis en aquellas de categoría 5° y 6°, así como a las comunidades y organizaciones, a fin de que ante una eventuales hechos de violación de derechos humanos, fortalezcan la autogestión del riesgo, y en el marco de una mejor acción conjunta con las entidades locales y nacionales, conlleve a incidir en el mejoramiento de la capacidad de respuesta, advertencia y gestión de las acciones y medidas preventivas y de protección a violaciones de los derechos humanos.

Con base en el análisis de los diagnósticos de riesgo de violaciones de Derechos Humanos realizados por el Ministerio del interior, y el estudio de otras variables se evidencia lo siguiente:

- a) Incremento de riesgo de violaciones de Derechos Humanos en territorios inicialmente no priorizados que requieren la atención e intervención por parte del Ministerio del Interior.
- b) Aumento de demanda de acompañamiento a los Departamentos no priorizados que requieren asesoría del Ministerio del Interior en materia de Gestión Preventiva del Riesgo.
- c) Necesidad de ampliación de cobertura en los municipios con alta incidencia de conflictividad por reagrupamientos de grupos armados al margen de la ley.

- d) Necesidad de desplegar estrategias para incrementar la cobertura territorial que permita fortalecer en gestión preventiva de riesgo a un número mayor de entidades territoriales a lo largo del territorio nacional, entre las que se destacan:
- La gestión ante terceros privados y la coordinación de actores públicos para que a través de la inversión material o en especie, se incrementen los recursos con destino a la prevención de Violaciones de Derechos Humanos.
 - La definición de estrategias subregionales de intervención que permiten llegar con mayor rapidez a los municipios.
 - La ampliación de los recursos para garantizar el acompañamiento permanente en materia de Gestión Preventiva del Riesgo a lo largo del territorio Nacional.
- e) Necesidad de fortalecer las acciones de implementación de la política pública de prevención de violaciones a los Derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, ampliando su cobertura de acción a nivel nacional.
- f) Socializar y territorializar la política de Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización con miras a la elaboración de los planes territoriales, priorizando los lugares más afectados por el conflicto.
- g) Fortalecer la territorialización del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Con base en este panorama, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para la vigencia 2025 se plantea las siguientes metas:

- Ampliar la cobertura territorial, incluyendo los enfoques diferencial, étnico y de género en el marco de nuestros productos y actividades, con el fin de fortalecer las medidas de prevención y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres, mediante la actualización de la información sobre violaciones de Derechos Humanos e infracciones al DIH, la concertación de medidas de prevención y protección, y la generación de espacios de trabajo con miembros de comunidades, pueblos indígenas y organizaciones con enfoque de género.
- Llegar a más de 22.000.000 personas víctimas o en situación de vulnerabilidad de violaciones de los Derechos Humanos o hechos victimizantes por parte de grupos armados al margen de la ley.
- Tener presencia en 19 departamentos, 300 municipios con especial focalización en municipios de categoría 5ª y 6ª, a fin de aumentar el número de municipios intervenidos en el marco de la Política Pública de Prevención de violaciones a los Derechos Humanos, con miras a incrementar el nivel de desempeño institucional para la prevención de riesgos asociados a hechos victimizantes y violaciones a los Derechos Humanos y DIH.
- Capacitar en identificación y prevención del riesgo a 1250 personas integrantes de organizaciones sociales, servidores y funcionarios públicos y sujetos de especial protección constitucional en identificación a través de diplomados con Universidades con acreditación de alta calidad. Esta estrategia busca dotar a los grupos, organizaciones y comunidades con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para que puedan auto gestionar el riesgo en sus territorios con el fin de reducir las vulnerabilidades y riesgos de violaciones a sus Derechos Humanos y a los servidores y funcionarios

públicos de herramientas que les permita prepararse para enfrentar las amenazas y mitigar las vulnerabilidades de las eventuales consecuencias de las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de grupos y comunidades en situación de riesgo.

- Apoyar la formulación de 300 planes integrales de prevención a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en entidades territoriales con focalización especial en municipios de categoría 5ª y 6ª, por medio de la realización de talleres, planes que se constituyen en la herramienta máxima que tienen las entidades territoriales para la identificación de riesgos en su territorio con miras a su materialización o mitigación.
- Acompañar a 300 entidades en la formulación de los Planes de Acción para la instancia de prevención como lo es el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. Cada departamento contara con un asesor territorial asignado que se encargara de desarrollar los talleres para la formulación de los planes integrales de prevención, con el fin de dotar de capacidades de respuesta a las entidades territoriales como primeros respondientes frente a los hechos victimizantes que pueden suceder en los territorios.
- Formular el Plan de Acción de la Política Nacional de Prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH.
- Impulsar en su implementación 300 Planes Integrales de prevención formulados en entidades territoriales con focalización especial en municipios de categoría 5ª y 6ª, a través de iniciativas cofinanciadas, con miras a apoyar la materialización de las acciones incluidas en los Planes.
- Realizar talleres con las 300 entidades territoriales priorizadas para la implementación del Modelo de gestión preventiva del riesgo, fortaleciendo así las acciones de advertir, identificar y generar acciones de prevención para las comunidades en riesgo.
- Fortalecer e implementar la Política de Convivencia, Reconciliación, Tolerancia, y No Estigmatización, la cual tiene como objetivo el brindar las herramientas para la reconciliación nacional, la convivencia y la no estigmatización promoviendo un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad entre sus habitantes, funcionarios públicos y sus instituciones en el ejercicio de los derechos y deberes consagrados constitucionalmente, a través de acciones encaminadas a:
 - Territorializar la política con 32 entidades territoriales a fin de su socialización y formulación del Plan de Acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización el cual requiere actualización anual.
 - Desarrollar una campaña de medios a fin de divulgarla.
 - Desarrollar 33 jornadas territoriales como acciones de impulso a la implementación del Plan de Acción de la Política.
- Fortalecer el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios el cual busca adoptar medidas de protección integral para las Comunidades y Organizaciones en los territorios, que incluya los líderes,

lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos, a través de acciones encaminadas a:

- Formular 70 planes integrales de prevención y autoprotección para comunidades y organizaciones priorizadas por el Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales.
- Impulsar la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección previamente formulados a través de la cofinanciación de 60 iniciativas.
- Construir 30 protocolos de protección rural con participación de las organizaciones priorizadas por el Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales
- Impulsar el proceso de implementación del componente de promotores comunitarios de paz, a través del desarrollo de un diplomado dirigido a capacitar a 180 personas en promotores comunitarios de paz y convivencia en derechos humanos y resolución de conflictos
- Impulsar la implementación del componente de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales, a través de la cofinanciación de 30 iniciativas.

Es de anotar que este proyecto de inversión es respuesta a la implementación de la Ley Víctimas (Ley 1448 de 2011); al CONPES 4031 de 2021: “Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”; y a la política pública de prevención de violaciones a los Derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (decreto 1581 de 2017), razón por la cual tiene trazador VÍCTIMAS.

Aunado a los anterior, da cumplimiento a los indicadores de Plan Marco de Implementación BG-3; BG-4; B-144; B-446; C-256 y CMT-3, y al CONPES 3931 de 2018: “Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC - EP”, razón por la cual tiene trazador CONSTRUCCIÓN DE PAZ.

Los costeos de las actividades tienen como base: i) para el caso de prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para ese tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; ii) para las jornadas de trabajo, talleres, mesas y espacios los costos se basan en los históricos de operación logística que incluyen participación de sociedad civil, los cuales incluyen gastos relacionados con eventos, alimentación, hospedaje, tiquetes y apoyo de transporte, entre otras, con ampliación de la cobertura territorial en consideración a los compromisos asumidos por la Dirección; iii) para las impresiones se basa en los históricos de las previamente realizadas con la Imprenta Nacional; iv) para las iniciativas cofinanciadas, se basa en los valores históricos del programa con incremento del número de iniciativas a fin de ampliar la cobertura territorial; y v) para las campañas, se basa en los históricos de campañas previamente realizadas por la Dirección con el apoyo y supervisión de la Oficina de Información Pública del Ministerio, aunado a que la campaña cumple indicador de acuerdo de paz.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Capacitar en identificación y prevención del riesgo a organizaciones sociales y sujetos de especial protección constitucional	\$1.730.400.000	Realización de diplomados (14) con Universidad con acreditación de alta calidad. Mediante estos, las organizaciones comunitarias y líderes cualifican sus conocimientos, habilidades, técnicas y destrezas en materia de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos.	\$3.090.000.000	Realización de diplomados (25) con Universidad con acreditación de alta calidad. Mediante estos, las organizaciones comunitarias y líderes cualifican sus conocimientos, habilidades, técnicas y destrezas en materia de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos.
Capacitar en identificación del riesgo asociados a servidores y funcionarios públicos.	\$401.700.000	Realización de 13 Foros de formación en Gestión Preventiva del Riesgo (GPR) y fortalecimiento de estrategias de GPR.	\$556.200.000	Realización de 18 foros de formación en Gestión Preventiva del Riesgo (GPR) y fortalecimiento de estrategias de GPR.
Capacitar a Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos	N/A	N/A	\$123.600.000	Desarrollo de un (1) diplomado virtual con universidad acreditada los cuales beneficiaran a 180 personas de organizaciones sociales, fortaleciéndolas en el componente de Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, con una duración de mínimo 80 horas.
Formular Plan de Acción de la Política nacional de prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH	\$138.470.000	Documento que consensos a nivel Nacional, para fomentar la construcción de visión estratégica compartida frente a la prevención y cualificar lineamientos de Política Pública en materia de prevención.	\$162.750.000	Documento de concertación interinstitucional para la definición de acciones, responsables y fechas límite de ejecución. Consolidación y socialización del documento de plan de acción acordado.
Acompañar a las entidades en la formulación del Plan de Acción para la Instancia de prevención Subcomité Territorial de Prevención Protección Garantías de No Repetición	\$1.834.602.000	Realizar 220 talleres de formación en Gestión Preventiva del Riesgo - GPR, y fortalecimiento del desarrollo de estrategias de GPR.	\$2.895.372.800	Realizar 300 talleres de formación en Gestión Preventiva del Riesgo -GPR, y fortalecimiento del desarrollo de estrategias de GPR.
Apoyar a las entidades territoriales en la formulación y/o actualización Planes Integrales de prevención a las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados	\$6.515.508.750	220 entidades territoriales cuentan con Planes de Prevención, siendo éstos la herramienta de planeación de gobernaciones y alcaldías que orientan y articulan la institucionalidad para el análisis y la gestión de riesgo a nivel territorial, permitiendo el desarrollo de acciones directas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo identificadas.	\$8.244.841.500	300 entidades territoriales cuentan con Planes de Prevención, siendo éstos la herramienta de planeación de gobernaciones y alcaldías que orientan y articulan la institucionalidad para el análisis y la gestión de riesgo a nivel territorial, permitiendo el desarrollo de acciones directas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo identificadas.

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Acompañar a las entidades territoriales en la formulación del Plan de Acción de la Política nacional de prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH	\$361.664.840	33 entidades territoriales acompañada para la formulación del Plan de Acción de la Política nacional de prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH	\$582.978.000	33 entidades territoriales acompañada para la formulación del Plan de Acción de la Política nacional de prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH
Formular el plan de acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización.	\$1.115.812.800	Documento plan de acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización construida en coordinación con el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.	\$1.175.700.000	Documento plan de acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización construida con la participación de los Consejos Territoriales de Paz de los 32 departamentos. Diseño, elaboración y publicación de campaña de socialización de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización en medios de comunicación nacionales y locales. Actividad de cumplimiento de indicador de acuerdo de paz.
Cofinanciar iniciativas focalizadas en Planes de Prevención	\$18.810.000.000	209 iniciativas cofinanciadas focalizadas en Planes integrales de Prevención	\$29.505.600.000	300 iniciativas cofinanciadas para el impulso a la implementación de los planes integrales de prevención
Cofinanciar iniciativas focalizadas en Planes Integrales de Prevención y Autoprotección para comunidades	\$1.400.000.000	40 iniciativas cofinanciadas para el impulso a la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección para comunidades	\$5.400.000.000	60 iniciativas cofinanciadas para el impulso a la implementación de los planes integrales de prevención y autoprotección para comunidades
Cofinanciar iniciativas focalizadas en el impulso del programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales	\$200.000.000	20 iniciativas cofinanciadas para el impulso del programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales	\$300.000.000	30 iniciativas cofinanciadas para el impulso del programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales
Realiza seguimiento a la implementación de iniciativas cofinanciadas	\$332.388.300	Informes de revisión, parciales y finales, y balance de ejecución de las iniciativas.	\$491.838.400	Informes de revisión, parciales y finales, y balance de ejecución de las iniciativas.

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Formular y diseñar documentos metodológicos en Gestión Preventiva del Riesgo.	\$371.553.345	Consultoría para la actualización Jornadas de los documentos metodológicos de trabajo para la unificación de criterios, cualificación de lineamientos, definición de mecanismos de difusión y asistencia técnica para su aplicación y construcción de marcos conceptuales e instrumentales para Identificación, advertencia y gestión del riesgo. Diseño y publicación de cinco videos explicativos de la metodología. Impresión de 5000 unidades de los documentos metodológicos, caja de herramientas con el modelo de Gestión del Riesgo.	\$126.000.000	
Evaluar la implementación de Gestión en el Territorio	\$114.340.620	Documento evaluación implementación de Gestión en el Territorio.	\$100.600.000	Documento de genere indicadores del proceso de metodología de la Gestión.
Asesorar a las entidades territoriales en la implementación del Modelo de gestión preventiva del riesgo.	\$715.000.000	220 jornadas de asistencia técnicas a las entidades territoriales en el marco del Decreto 660 de 2018 para la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, las cuales se planean las siguientes actividades puntuales: • Impulsar la Ruta Metodológica Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia • Socialización del programa e identificación de las necesidades en medios de comunicación. • Construcción caja de herramientas para el Proceso de formación Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia.	\$1.200.000.000	300 jornadas de asistencia técnicas a las entidades territoriales en el marco del Decreto 660 de 2018 para la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, las cuales se planean las siguientes actividades puntuales: • Impulsar la Ruta Metodológica Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia • Socialización del programa e identificación de las necesidades en medios de comunicación. • Construcción caja de herramientas para el Proceso de formación Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia.
Acompañar a entidades territoriales / organizaciones sociales y comunidades en la atención de hechos victimizantes que se materializaron	\$715.000.000	220 jornadas de acompañamiento a organizaciones sociales y comunidades en la atención de hechos victimizantes que se materializaron.	\$1.200.000.000	300 jornadas de acompañamiento a organizaciones sociales y comunidades en la atención de hechos victimizantes que se materializaron, con las cuales se construirán rutas de respuesta inmediata y se dotarán a las mismas de estrategias para identificar, advertir y gestionar acciones preventivas

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Territorializar la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización, en territorios priorizados	\$509.850.000	33 jornadas de territorializaron de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización, en territorios priorizados	\$0	
Impulsar la implementación del plan de acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización, en territorios priorizados.	N/A	N/A	\$509.850.000	Realización de 33 jornadas dirigidas a impulsar la implementación del plan de acción de la Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización, en territorios priorizados.
Formular Planes de Prevención y Autoprotección para comunidades	\$3.582.932.560	64 organizaciones seleccionadas por el Comité serán fortalecidas a través de la formulación de planes de prevención y autoprotección en desarrollo del decreto 660 de 2018.	\$3.249.739.600	70 organizaciones seleccionadas por el Comité serán fortalecidas a través de la formulación de plane de prevención y autoprotección en desarrollo del decreto 660 de 2018.
Formular el Protocolo de protección de territorios rurales	\$386.250.000	25 entidades territoriales cuentan y aplican el Protocolo de Protección para Comunidades Rurales	\$463.500.000	30 entidades territoriales cuentan y aplican el Protocolo de Protección para Comunidades Rurales
Capacitar y difundir sobre las funciones del programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales	\$799.139.703	Documento recomendaciones para el fortalecimiento de la capacidad de denuncia en zonas focalizadas. 32 entidades territoriales capacitadas en la difusión de las funciones del programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales.	\$0	
TOTAL	\$40.034.612.918		\$59.378.570.300	

3.1.3.2 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA. (\$ 88.891.291.181)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3701-1000-32	\$40.500.000.000	\$88.891.291.181	\$48.391.291.181	119%

TOTAL	\$40.500.000.000	\$88.891.291.18 1	\$48.391.291.181	119%
-------	------------------	----------------------	------------------	------

BASE LEGAL

Los pueblos indígenas que habitan en el departamento del Cauca, organizados en el Consejo Regional Indígena Del Cauca CRIC, han evidenciado la necesidad de Mejorar la organización interna de la comunidad mediante la implementación de acciones que conduzcan a la reflexión, auto reconocimiento y orientación para definir caminos que garanticen la pervivencia de los pueblos indígenas frente a nuevos retos y dinámicas externas que enfrentan las comunidades en el empoderamiento de las formas propias de control territorial.

Los instrumentos de planeación propios para las comunidades indígenas del Cauca son considerados un proceso viviente, es carta de navegación de la vida política, jurídica, económica, y cultural de los pueblos, es el sueño, el horizonte de vida, el camino a seguir por las nuevas generaciones. En los instrumentos de planeación propios se consolida toda la sabiduría milenaria de los pueblos y se consagra los valores y principios enmarcados en la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio o Ley de Vida. En los instrumentos de planeación propios o sus equivalentes se fundamentan en la cosmovisión, el territorio, la naturaleza colectiva de los pueblos, la búsqueda de la armonía y el equilibrio, y la defensa integral de la vida. En ellos se conjugan la historia, el territorio, la autoridad, la identidad y la espiritualidad como un proyecto de vida para la permanencia de los pueblos. En consecuencia, todas nuestras acciones están orientadas al beneficio colectivo dentro de una relación armónica con la naturaleza, construida cuidadosamente desde la práctica cotidiana y a la vez comunitaria.

Los instrumentos de planeación propios o sus equivalentes, no se reducen a un documento ni a un listado de necesidades, son el legado de muchas generaciones que consolida las estrategias que les garanticen la pervivencia como pueblos autónomos.

Los principios que orientan los planes de vida o sus equivalentes de los Pueblos Indígenas son, entre otros, la autonomía y libre autodeterminación, identidad e integridad cultural y la territorialidad:

- Autonomía y libre autodeterminación. Es el ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios y vivenciar sus planes de vida o sus equivalentes.
- Identidad e integridad cultural: es el reconocimiento de la cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas, como fundamento para comprender el orden de la naturaleza y establecer las formas de convivencia en y con ella.
- Territorialidad: Es la fuente desde donde se explica y comprende la integralidad de la vida de los diversos seres de la naturaleza, donde la tierra es la madre, la maestra, el espacio donde se vivencia la ley de origen, y está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida.

Formular o actualizar nuestros instrumentos de planeación o sus equivalentes, se concibe como una acción desarrollada en un espacio donde el dialogo contribuye a fortalecer y concretar medidas para el Buen Vivir en armonía y equilibrio con la madre naturaleza mediante la definición de estrategias, acciones y recursos que promuevan y aseguren el respeto, protección, garantía y

goce efectivo de nuestros derechos y contribuyan a la superación del estado de riesgo de exterminio físico y cultural en que nos encontramos. De igual manera, se considera un escenario propicio para reivindicar las apuestas históricas y organizativas de los pueblos indígenas, y fomentar la necesaria coordinación y colaboración con las Autoridades Estatales que permita el cumplimiento estricto de lo acordado y el seguimiento al mismo.

Tal como lo plantea el acuerdo Final de Paz donde reconoce que los pueblos y comunidades étnicas han contribuido a la construcción de paz de la sociedad colombiana, que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones¹⁰ (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, pág. 205). Y que de igual manera, se menciona el derecho de los pueblos y comunidades étnicas sobre sus “tierras, territorios y recursos, que implica el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente” (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, pág. 205), teniendo en cuenta sus necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales. Se hace necesario fortalecer herramientas que permitan a los pueblos indígenas encontrar caminos que garanticen su pervivencia ante los constantes conflictos generados por dinámicas externa.

Con este proyecto propone fortalecer las estructuras propias de gobierno, tanto en lo político organizativo, como en lo administrativo y lo jurídico, teniendo como referente el derecho propio de los pueblos, se pretende entonces, generar espacios donde se pueda recoger desde la visión cultural de cada pueblo, mediante talleres y espacios de análisis que permitan identificar y caracterizar propuestas para el fortalecimiento de las estructuras de gobierno propio, generar políticas indígenas al interior de los territorios.

De acuerdo con el análisis del estado de los planes de vida o sus equivalentes cada uno de los territorios se establece que el 55% de los resguardos cuenta con un plan formulado pero desactualizado. El 20% cuenta con un plan formulado, operativizado desde las dinámicas propias, pero sin actualizar, y el 20 % no tiene plan de vida formulado.

Es necesario implementar estrategias, herramientas que permitan articular acciones entre las formas propias y los marcos institucionales e internacionales de planeación, ejecución y seguimiento, de tal manera que en el ejercicio administrativo y político organizativo los cabildos puedan aprovechar sus recursos para desarrollar acciones con impacto a largo plazo, con el propósito de consolidar la unidad, el territorio, la identidad como base para fortalecer los procesos sociales, y la cultura que recoge la identidad como el baluarte de todo proceso organizativo.

En consideración, las comunidades indígenas del Cauca, necesitan Formular y actualizar los planes de vida o sus equivalentes de cada uno de los resguardos, fortalecer estrategias de control y seguimiento desde el nivel zonal y regional a fin de consolidar su estructura de gobierno propio, resignificar cada uno de los principios y hacer partícipe a cada uno de sus grupos poblacionales de tal forma que se garantice el conocimiento, los usos y costumbres en el marco de su ley de origen.

¹⁰ Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI), 2016

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

Con estos recursos y a través de las actividades definidas se busca garantizar la formulación y actualización de los instrumentos de planeación propios o sus equivalentes, como una estrategia que garantice los espacios para el autorreconocimiento, fortalecimiento y resignificación de los principios que rigen los pueblos agrupados en el CRIC “unidad, tierra, cultura y autonomía”.

Los instrumentos de planeación propios o sus equivalentes establecen las directrices y políticas sobre el quehacer cultural, social, político y económico. El Plan de Vida está guiado por la Ley de Origen, la Naturaleza, los Tiempos – espacios propios, los sueños y orientaciones de los mayores y de esta manera, generar formas propias de administración, gestión y toma de decisiones con responsabilidad de las Autoridades Culturales, políticas y demás dinamizadores.

La estimación de los costos se hizo partiendo de la cotización o presupuesto presentado por el CRIC y la redistribución de los recursos en cada uno de los objetivos, dando un mayor presupuesto a las actividades relacionadas con la formulación y o actualización de instrumentos de planeación.

Existe la necesidad primordial de generar herramientas que permitan la sistematización, el seguimiento y el control de las acciones de reflexión, autorreconocimiento y orientación comunitarias para la búsqueda de caminos que garanticen la pervivencia de los pueblos indígenas frente a dinámicas y acciones externas a las que se ven sometidos permanentemente en su diario vivir las comunidades indígenas del Cauca; y de esta manera fortalecer las estructuras propias en lo político organizativo, administrativo y lo jurídico teniendo como referente el derecho propio de los pueblos desde la visión cultural de cada de cada uno, para garantizar el ejercicio la gobernabilidad y autonomía de los territorios indígenas del Departamento del Cauca.

La distribución de los recursos por actividades se realizó mediante concertación con representantes de las comunidades (Mesa Permanente de Concertación) y el gobierno nacional (MinInterior), tomando como referencia las asignaciones de los recursos de las vigencias anteriores y teniendo en cuenta las peticiones de las comunidades indígenas, las cuales nos recomiendan aumentar la inversión para cada actividad con el objetivo de fortalecer sus territorios.

Es de resaltar que este proyecto busca beneficiar a las comunidades a nivel nacional en Formulación o actualización de instrumentos de planeación propios, lo cual genera un aporte fundamental en la estructuración de las comunidad y fortalecimiento en el gobierno propio, con la ampliación del horizonte del proyecto a fin dar cumplimiento a los compromisos pactados en la consulta del PND 2022-2026 “*Colombia Potencia Mundial de Vida*”, con los pueblos indígenas.

Es de aclarar que se refleja un aumento significativo en la solicitud de recursos debido a que en la vigencia anterior no hubo por parte del gobierno nacional la asignación de todos los recursos solicitados, lo cual genero entre las comunidades una discusión y toma de decisiones con el fin de abordar de manera oportuna el presupuesto asignado, por esta razón las comunidades del CRIC solicita la totalidad de los recursos con el fin de dar cumplimiento a los acuerdo que se tienen y poder fortalecer a sus estructuras propias de gobierno como pilar fundamental en las bases del PND 2022-2026 Seguridad Humana y Justicia Social.

Los incrementos del presupuesto del 54,43% frente a la vigencia anterior corresponden a dos motivos principales, El primero el déficit presupuestal que se tuvo en la vigencia 2024 en lo correspondiente a la asignación presupuestal que fue por valor de \$40.500.000.000 y se tenía proyectado una asignación de \$78.581.410.167.

Como segundo motivo se realizó una proyección de los costos para cada vigencia del 13,12% lo cual equivale al cierre del IPC para la vigencia en la cual se formuló el proyecto vigencia 2023.

En consecuencia, con lo anteriormente expresado se permite afirmar que las distribuciones de cada actividad para cada vigencia pueden variar de acuerdo a los compromisos adicionales que salgan a partir de Mesas, Mingas y Paros con comunidades indígenas.

ANÁLISIS DE COSTOS.

A1: Realizar capacitación a los equipos de las zonas y resguardos que adelantan el proceso de acompañamiento y monitoreo y recolección de información.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$214.975.058
Transporte	\$134.359.411
Alquiler de maquinaria y equipo	\$123.010.306
Alimentación	\$767.768.064
Total	\$1.240.112.839

A2: Realizar jornadas de evaluación, foros académicos, diplomados, talleres comunitarios por resguardo, juntas directivas y/o talleres zonales.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$214.975.058
Transporte	\$134.359.411
Alquiler de maquinaria y equipo	\$123.010.307
Alimentación	\$767.768.064
Total	\$1.240.112.840

A3: Fortalecer mecanismos para garantizar la seguridad y convivencia.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$10.180.800.000
Transporte	\$4.751.040.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$2.166.882.151
Eventos en territorio	\$9.650.990.489
Alimentación	\$10.180.800.000
Total	\$36.930.512.640

A4: Fortalecimiento a sus estructuras propias de gobierno y generacionales para garantizar la pervivencia de sus comunidades. **(Documento de planeación preliminar)**

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$10.180.800.000
Transporte	\$16.289.280.000
Eventos con representantes.	\$2.086.781.655
Alquiler de maquinaria y equipo	4.294.288.860
Alimentación	\$10.180.800.000
Total	\$43.031.950.515

A5: Formular o actualizar Instrumentos de planeación propios o sus equivalentes a partir de la información consolidada en los ejercicios de evaluación de los 127 resguardos **(Documento de planeación validado)**

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$441.466.637
Alimentación	\$1.151.652.096
Transporte	\$134.359.410
Alquiler de maquinaria y equipo	\$2.769.250.914
Total	\$4.496.729.057

A6: Optimización y operatividad de una herramienta tecnológica para seguimientos y evaluación de los Instrumentos de planeación propios o sus equivalentes Construcciones de planes de acción y formulación de proyectos **(Implementación del sistema)**

INSUMOS	VALOR
Servicio de software para control y seguimiento	\$711.760.450
Total	\$711.760.450

A7: Fortalecer los Comités de seguimiento y equipos políticos del nivel local, zonal y regional a través de herramientas tecnológicas y banco de proyectos implementando dinámicas de monitoreo **(Pruebas y aseguramiento de calidad)**

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$271.278.049
Transporte	\$89.572.941
Alquiler de maquinaria y equipo	\$111.493.785
Alimentación	\$767.768.064
Total	\$1.240.112.839

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) C	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Realizar capacitación a los equipos de las zonas y resguardos que adelantan el proceso de acompañamiento y monitoreo y recolección de información.	\$0	600	\$1.240.112.839	650
Realizar jornadas de evaluación, foros académicos, diplomados, talleres comunitarios por resguardo, juntas directivas y/o talleres zonales.	\$0		\$1.240.112.840	
Fortalecer mecanismos para garantizar la seguridad y convivencia.	\$20.000.000.000		\$36.930.512.640	
Fortalecimiento a sus estructuras propias de gobierno y generacionales para garantizar la pervivencia de sus comunidades (Documento de planeación preliminar)	\$20.000.000.000	30	\$43.031.950.515	70
Formular o actualizar Instrumentos de planeación propios o sus equivalentes a partir de la información consolidada en los ejercicios de evaluación de los 127 resguardos (Documento de planeación validado)	\$0		\$4.496.729.057	
Optimización y operatividad de una herramienta tecnológica para seguimientos y evaluación de los Instrumentos de planeación propios o sus equivalentes Construcciones de planes de acción y formulación de proyectos (Implementación del sistema)	\$0	1	\$711.760.450	1

Fortalecer los Comités de seguimiento y equipos políticos del nivel local, zonal y regional a través de herramientas tecnológicas y banco de proyectos implementando dinámicas de monitoreo (Pruebas y aseguramiento de calidad)	\$500.000.000		\$1.240.112.839	
TOTAL	\$40.500.000.000		\$88.891.291.180	

3.1.3.3 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO Y EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL. (\$180.992.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3701-1000-35	\$45.700.000.000	\$180.992.000.000	\$135.292.000.000	296%
TOTAL	\$45.700.000.000	\$180.992.000.000	\$135.292.000.000	296%

BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia
- Convenio 169 OIT, "Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes"
- Ley 21 de 1991, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989".
- Ley 715 de 2001, artículo 83.
- Decreto 2893 de 2011.
- Decreto 1953 de 2014.
- Ley 1995 de 2019.
- Sentencia T-025 de 2004.
- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de Vida".

Colombia como Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, integrado por entidades territoriales regidas bajo principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, e impulsadas por la figura de la descentralización, ha venido avanzando en el reconocimiento de diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado social y democrático de

derecho, basado en los principios de pluralidad étnica y diversidad cultural¹. Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y pueblos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y ROM reconocidos como sujetos de derechos fundamentales, tanto en zonas rurales como urbanas. En conjunto estos grupos étnicos representaban en 2005 el 14,06% del total de la población nacional (10,62 % corresponde a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 3,43 % a los pueblos indígenas y 0,01 % al pueblo ROM) (DANE, 2007). Se estima que para 2016 esta población alcanzó 4.093.048 personas para el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 2.085.894 personas para el caso de los pueblos indígenas, y 8.982 para el pueblo Rom². De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Tierras, a julio de 2018 los grupos étnicos contaban con un área total titulada de aproximadamente 38.000 hectáreas, que representan cerca del 33% de la superficie continental del país.

Dada la significativa presencia de los grupos étnicos, el país estableció un marco de reconocimiento de derechos mediante la expedición de la Ley 21 de 1991 que aprobó el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y, posteriormente, mediante la Constitución Política de 1991 además de otros mecanismos normativos. De esta manera, el país ha venido avanzando en el diseño de políticas fundamentadas en el reconocimiento de la diferenciación sociocultural, el fortalecimiento de la autodeterminación y el autorreconocimiento desde un enfoque de derechos para la atención diferencial que contribuye a eliminar las formas de discriminación y de origen racial como causales de las barreras de acceso a las oportunidades de desarrollo.

Complementariamente se ha avanzado en políticas orientadas hacia la búsqueda de la igualdad y la no discriminación independientemente de la pertenencia étnica⁴. En este marco, actualmente se cuenta con acuerdos sociales construidos a partir de la concertación entre el Estado y los pueblos étnicos, que buscan promover el goce de derechos fundamentales, integrales y colectivos, y la igualdad de oportunidades.

No obstante, persisten condiciones particulares que constituyen barreras al mejoramiento de las condiciones de bienestar de dichos grupos, por lo que el ejercicio efectivo de derechos colectivos e individuales demanda acciones diferenciadas que generen condiciones de equidad en el acceso a bienes y servicios para avanzar en la inclusión social, cultural y económica de manera sustentable. Estas acciones afirmativas repercutirán positivamente en la superación de la discriminación y así garantizarán que los grupos étnicos cuenten con igualdad de oportunidades frente al resto de colombianos.

Como resultado de las rutas metodológicas, se adelantaron los escenarios de consulta previa de la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, a la que asistieron cinco organizaciones nacionales y cuatro pueblos indígenas (Kogui, Yukpas, Cofanes y Wayúu). En esta mesa se alcanzó un total de 216 acuerdos en los seis ejes propuestos, con solo cuatro propuestas no aprobadas y cuatro retiradas por los pueblos indígenas.

Para el caso de los pueblos indígenas, estas estrategias estarán agrupadas en los ejes que se acordaron entre el Gobierno Nacional y los pueblos y organizaciones indígenas en el marco de la mesa permanente de concertación: territorios ancestrales indígenas; gobierno propio; integridad cultural; mujer, familia y generación; armonía y equilibrio para la defensa de la vida; y pacto por y para las regiones, específicamente el pacto por la región Caribe y pacto por la Amazonía, con sus respectivos componentes, estrategias y acuerdos.

Lo anterior, busca superar barreras en materia de pobreza multidimensional: A pesar del cambio social acelerado que registra Colombia en las dos últimas décadas, los grupos étnicos mantienen importantes privaciones y desventajas con respecto a la población sin pertenencia étnica. En términos de las privaciones a las que se enfrentan los grupos étnicos determinan el índice de pobreza multidimensional de Colombia, los hogares con alguna pertenencia étnica se encuentran en condiciones más desfavorables que el resto de la población. Las mayores disparidades están en la inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de paredes, material inadecuado de pisos, y barreras de acceso a servicios de salud y trabajo infantil. En todas las privaciones los grupos étnicos poseen aproximadamente el doble de las carencias al resto de la población del país.

Es así como, el cumplimiento de lo consagrado en la ley de Plan Nacional de Desarrollo contribuye a la eliminación de brechas y es el espíritu del compromiso adquirido por el Gobierno nacional con las comunidades indígenas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

Con el presente proyecto, el Ministerio del Interior en cabeza de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías pretende fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas del país, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, consagrado en la ley 1995 de 2019 y a su vez, en la refrendación del mismo en la Minga Indígena desarrollada en la Delfina, Buenaventura (abril de 2019), que arrojó como compromiso la inclusión del mismo en el artículo 218 que hace referencia a la creación del fondo del buen vivir para apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas de Colombia. Dicho compromiso se sigue reafirmando en las diferentes mesas de concertación sostenidas durante esta vigencia, en las cuales las comunidades indígenas han expresado su necesidad de continuar con el proyecto el cual garantiza la sostenibilidad integral de sus comunidades.

Principalmente, busca facilitar la implementación y la garantía de acciones asociadas al buen vivir, teniendo como un primer producto el servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias, iniciativas propias de los Pueblos y comunidades indígenas. De igual manera, efectuando financiación de iniciativas con pilares priorizados por los mismos integrantes de las comunidades buscando implementar la seguridad alimentaria que garantice el desarrollo en esencia del buen vivir, fortalecimiento productivo, mujer, familia y generación, gobierno propio, integridad Cultural, armonía y equilibrio para la defensa de la vida, pacto por y para las regiones o infraestructura.

A sí mismo, se hace imperante fortalecer las instituciones propias de los Pueblos Indígenas, generando un segundo producto a través de un servicio de educación informal para comunidades indígenas, llevando a cabo formación para el desarrollo del ejercicio del gobierno propio reconocido en la Constitución Política de Colombia y en simultánea, propiciar procesos de discusión y concertación sobre temas asociados a gobernanza.

Con el objetivo de mitigar las problemáticas y consecuencias derivadas de las mismas las cuales generan pérdida de procesos sociales y culturales dada la migración de las comunidades a otros

territorios y ciudades lo cual genera desarraigo de la población de los territorios, en consecuencia el gobierno nacional tiene como objetivo generar condiciones de bienestar en los territorios para que así estos se transformen en territorios de paz estable y duradera manteniendo la identidad cultural de las comunidades indígenas, y ejerciendo autonomía e identidad cultural dentro de las mismas, lo cual conlleva a generar estructuras de representación de los pueblos, comunidades y organizaciones ante las instancias de participación en sus diferentes niveles.

Los pueblos indígenas requieren más que programas y proyectos estructurales y no inmediatistas, generando oportunidades de participación real y efectiva en el diseño e implementación de políticas públicas para la materialización de sus derechos, que permitan desarrollar sus potencialidades físicas, espirituales, intelectuales, culturales y políticas garantizando la pervivencia de sus pueblos; siendo precisamente el documento equivalente al plan de vida el instrumento mediante el cual se puede impulsar el desarrollo de sus comunidades, generando oportunidades las cuales pueden potenciar el desarrollo en materia de erradicar la desigualdad y generar progreso para estas comunidades y el país en general.

La materialización de lo anterior, es posible verlo reflejado en la financiación de proyectos e iniciativas donde las comunidades ejerzan su poder de determinación de prioridades según las particularidades y necesidades específicas de cada pueblo, estrechando lazos Nación-territorio y generando mecanismos de comunicación entre las comunidades y los entes territoriales (Municipios/Departamentos) pues, la formación en formulación e implementación de proyectos permitirá el desarrollo también en lo que corresponde al Sistema General de Regalías.

Para la vigencia 2025, se requieren de estos recursos para continuar con la implementación del proyecto de inversión *“FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO Y EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL”* con el compromiso que se viene reafirmando entre comunidades indígenas y representantes del actual gobierno en las Mesas Permanentes de Concertación – MPC. Lo que se pretende es financiar iniciativas de los diferentes pueblos indígenas con el fin de lograr mayor equidad entre las comunidades indígenas. Por tal razón se hace necesario obtener el presupuesto para vigencia 2025, a fin dar cumplimiento a los compromisos pactados. Como principal apuesta, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías consisten en superar las barreras de acceso de las comunidades indígenas en materia de garantía de derechos fundamentales. Sumado a que es necesario dar cumplimiento a los diferentes compromisos adquiridos en el PND 2022 – 2026 *“Colombia Potencia Mundial de Vida”*, a cargo del Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

ANÁLISIS DE COSTOS.

La distribución de los recursos por actividades se realizó mediante concertación con representantes de las comunidades (Mesa Permanente de Concertación) y el gobierno nacional (MinInterior). Es de resaltar que en la vigencia 2024 no se contaron con los recursos suficientes para el cumplimiento de todos los compromisos con las comunidades indígenas y las distintas actividades del proyecto, es preciso tener claridad que en la vigencia anterior para el proyecto se realizó la creación de una actividad el cual fue concertada y se decidió extender hasta el horizonte final del proyecto para dar cumplimiento efectivo a los compromisos que quedaron pactados en la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026.

En consecuencia, con lo anteriormente expresado se permite afirmar que las distribuciones de cada actividad para cada vigencia pueden variar de acuerdo a los compromisos adicionales que salgan a partir de Mesas, Mingas y Paros con comunidades indígenas, este proyecto busca beneficiar a las comunidades a nivel nacional en financiación de iniciativas, lo cual genera un aporte fundamental en cuanto a la seguridad alimentaria de las comunidades y pueblos indígenas en todo el territorio nacional.

Los incrementos del presupuesto del 74,74% frente a la vigencia anterior corresponden a dos motivos principales, El primero el déficit presupuestal que se tuvo en la vigencia 2024 en lo correspondiente a la asignación presupuestal que fue por valor de \$45.700.000.000 y se tenía proyectado una asignación de \$160.000.000.000.

Como segundo motivo se realizó una proyección de los costos para cada vigencia del 13,12% lo cual equivale al cierre del IPC para la vigencia en la cual se formuló el proyecto vigencia 2023.

A1: Realizar financiación de iniciativas en fortalecimiento productivo, mujer familia y generación, gobierno propio, integridad cultural, armonía y equilibrio para la defensa de la vida, pacto por y para las regiones o infraestructura.

INSUMOS	VALOR
Financiación de proyectos e iniciativas donde las comunidades ejerzan su poder de determinación de prioridades según las particularidades y necesidades específicas de cada pueblo, estrechando lazos Nación-territorio y generando mecanismos de comunicación entre las comunidades y los entes territoriales (Municipios/Departamentos)	\$162.576.064.000
Total	\$162.576.064.000

A2: Cumplimiento a los acuerdos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo-PND, enmarcados en la Mesa Permanente de Concertación-MPC y Mesa regional Amazónica-MRA.

INSUMOS	VALOR
Eventos con las comunidades indígenas.	\$4.971.624.000
Acuerdos cumplidos	\$7.635.600.000
Alquiler de Maquinaria y Equipo	\$718.312.000
Total	\$13.325.536.000

A3: Realizar formación para el desarrollo del ejercicio del gobierno propio de los pueblos indígenas

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$285.062.400
Transporte	\$158.368.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$1.696.800.000
Alimentación	\$122.169.600
Total	\$2.262.400.000

A4: Realizar procesos de discusión y concertación sobre temas asociados al gobierno propio.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$285.062.400
Transporte	\$158.368.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$1.696.800.000
Alimentación	\$687.769.600
Total	\$2.828.000.000

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) C	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Realizar financiación de iniciativas en fortalecimiento productivo, mujer familia y generación, gobierno propio, integridad cultural, armonía y equilibrio para la defensa de la vida, pacto por y para las regiones o infraestructura.	\$25.000.000.000	6	\$162.576.064.000	22
Cumplimiento a los acuerdos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo-PND, enmarcados en la Mesa Permanente de Concertación-MPC y Mesa regional Amazónica-MRA.	\$12.700.000.000		\$13.325.536.000	
Realizar formación para el desarrollo del ejercicio del gobierno propio de los pueblos indígenas.	\$4.000.000.000	420	\$2.262.400.000	211
Realizar procesos de discusión y concertación sobre temas asociados al gobierno propio.	\$4.000.000.000		\$2.828.000.000	
TOTAL	\$45.700.000.000		\$180.992.000.000	

3.1.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS KUMPAÑY RROM A NIVEL NACIONAL. (\$945.873.782)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3701-1000-36	\$800.000.000	\$945.873.782	\$145.873.782	18%
TOTAL	\$800.000.000	\$945.873.782	\$145.873.782	18%

BASE LEGAL

La Constitución Política, en su preámbulo, determina que los ejes centrales que motivaron la expedición de ella es la de asegurar la vida; la convivencia; el trabajo; la justicia; la igualdad; el conocimiento; la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político y social justo.

En el artículo segundo, donde se instituyen los fines esenciales del Estado, se establece que uno de ellos es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

El artículo 7, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Además, consagra para estas comunidades, derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación.

El decreto 2893 de 2011, Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior, determina:

[...]

Artículo 1°. Objetivo. El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y si derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

Artículo 13. Funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. Son funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes:

- 1.
2. Asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los pueblos indígenas y Rom en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y culturales.
3. Coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representen.

4. Propender por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, en coordinación con las entidades y organismos competentes.
5. Coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a comunidades indígenas, minorías y Rom.
6. Apoyar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior en la realización de los procesos de consulta previa que se efectúen en terreno, para proyectos de desarrollo que afecten a las comunidades indígenas y Rom.
7. Coordinar y realizar los procesos de consulta previa para la presentación de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional, de conformidad con los lineamientos acordados para el efecto.
8. Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización.
9. Llevar el registro de los censos de población, autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del pueblo Rom.
10. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom.
11. Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y Rom.
12. Promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a atender la población indígena y Rom, y la formulación de acciones conjuntas.
13. Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención a las comunidades indígenas, a las minorías, al pueblo Rom.
14. Promover en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental la formulación de agendas ambientales conjuntas con las comunidades indígenas y Rom.
15. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en las materias de su competencia.
16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
17. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia:
18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia".

El pueblo Rom tiene una condición diferencial que deviene de lo consagrado en la Constitución Política de 1991, específicamente en los artículos 7, 13 y 70. De igual manera la Ley 21 del 4 de marzo de 1991 aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 y dentro de los pueblos tribales se encuentra el grupo étnico Rom o Gitano.

El Decreto 2957 de 2010 "Por el cual se expide un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano", reconoce y consagra derechos colectivos en cabeza de esta población. En este marco se tratan asuntos de interés para el grupo étnico ROM, como son las definiciones de su organización social y política, ubicación geográfica, representatividad, participación, asuntos sectoriales en salud, educación, vivienda, saneamiento básico, formación, desarrollo económico calidad de vida, cultura entre otros aspectos de vital importancia.

De igual manera el Decreto consagra en su artículo 10º la conformación de la Comisión Nacional de Diálogo, como el espacio de interlocución con el Estado colombiano y el grupo étnico ROM o Gitano, el cual estará integrado por Entidades de Gobierno del orden nacional y los representantes de cada una de las Kumpaño y organizaciones registradas.

Fue así como desde el día 1 de diciembre de 2010, se instaló de la Comisión Nacional de Diálogo. Desde ese espacio se han coordinado diferentes acciones que permiten el goce efectivo de los derechos fundamentales y colectivos de los ROM.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

En el marco de las funciones establecidas en el Decreto 2893 de 2011, *“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”*, y de las competencias otorgadas mediante el Decreto 2957 de 2010 *“Por el cual se expide un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano”* la Dirección de asuntos indígenas, Rom y Minorías ha formulado este proyecto en coherencia con el cumplimiento de sus actividades misionales establecidas, especialmente aquellas relacionadas con el diseño programas de asistencia técnica y servicio de promoción de derechos de las comunidades étnicas.

En concordancia con las función de *“coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la ley, y promover la participación de las organizaciones y Autoridades que los representen”*¹¹, el Decreto 2957 de 2010 consagra en su artículo 10º la conformación de la Comisión Nacional de Diálogo, como el espacio de interlocución con el Estado colombiano y el grupo étnico Rrom o Gitano, el cual estará integrado por Entidades de Gobierno del orden nacional y los representantes de cada una de las Kumpaño y organizaciones registradas, y en el cual la Secretaria técnica es ejercida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

En atención a lo anterior y que para la vigencia 2025, la dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior cuenta con el proyecto **“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS KUMPAÑO RROM A NIVEL NACIONAL”** el cual se encuentra en estado **“Ejecución”**.

Se presupuestan 7 actividades para el fortalecimiento organizativo y reconocimiento institucional del pueblo Rrom, a saber:

1. Mejorar capacidades técnicas y organizativas de las Kumpaño y Organizaciones Rrom.
2. Mejorar las capacidades técnicas de la institucionalidad para la implementación de acciones en favor del pueblo Rrom.
3. Realizar la asistencia técnica a las Kumpaño y Organizaciones Rrom, para el fortalecimiento del gobierno propio y de su pervivencia como pueblo étnico.
4. Realizar mesas de concertación con el pueblo ROM, para acordar las propuestas de modificación del marco normativo.
5. Formular un documento técnico del Proyecto de modificación del decreto 2957 de 2010.

6. Registrar y actualizar las encuestas de la población Rrom con base en la información que los Representantes Legales de las Kumpaño y Organización reporten al Ministerio del Interior.
7. Generar espacios de diálogo para garantizar la representación política efectiva del Pueblo Rrom a través de las 5 sesiones al año de la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo RROM GITANO.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado se formuló un proyecto de inversión acuerdo con las necesidades establecidas en las Mesas de dialogo sostenidas con el gobierno nacional en el último trimestre de la vigencia 2022. Según los acuerdos sostenidos durante las mesas de dialogo se logró que el gobierno nacional asignara mayores recursos para las comunidades Rrom con el objetivo de fortalecer y crear equidad entre las comunidades indígenas y Rrom a nivel nacional, debido a estos compromisos se pactó que fueran incluidos en el PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”.

Para la vigencia 2025 y siguiendo con el orden lógico desde la vigencia 2020 hasta el 2024 se requieren estos recursos para continuar con el desarrollo del proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS KUMPAÑO RROM A NIVEL NACIONAL” con el fin de atender los compromisos adquiridos con la Kumpaño (ROM o Gitano). Lo que se pretende es generar espacios de dialogo de los diferentes pueblos indígenas con el fin de lograr mayor equidad entre las comunidades indígenas. Por tal razón se hace necesario obtener el presupuesto para vigencia 2025, a fin de continuar dando cumplimiento a los compromisos pactados en la consulta del PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”, con el pueblo ROM (Gitano).

ANÁLISIS DE COSTOS.

A1: Mejorar capacidades técnicas y organizativas de las Kumpaño y organizaciones Rrom.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$9.621.000
Transporte	\$17.104.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$8.338.200
Alimentación	\$21.593.800
Total	\$56.657.000

A2: Mejorar las capacidades técnicas de la institucionalidad para la implementación de acciones en favor del pueblo Rrom.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$9.621.000
Transporte	\$17.104.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$8.338.200
Alimentación	\$21.593.800
Total	\$56.657.000

A3: Realizar la asistencia técnica a las Kumpaño y Organizaciones Rrom, para el fortalecimiento del gobierno propio y de su pervivencia como pueblo étnico.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$49.303.482
Transporte	\$38.484.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$54.198.300
Alimentación	\$19.242.000
Total	\$161.227.782

A4: Realizar mesas de concertación con el pueblo ROM, para acordar las propuestas de modificación del marco normativo.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$85.520.000
Transporte	\$34.208.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$87.230.400
Alimentación	\$28.221.600
Total	\$235.180.000

A5: Formular un documento técnico del Proyecto de modificación del decreto 2957 de 2010

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$6.414.000
Total	\$6.414.000

A6: Registrar y actualizar las encuestas de la población Rrom con base en la información que los Representantes Legales de las Kumpaño y Organización reporten al Ministerio del Interior.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$2.138.000
Total	\$2.138.000

A7: Generar espacios de diálogo para garantizar la representación política efectiva del Pueblo Rrom a través de las 5 sesiones al año de la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo RROM GITANO

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$168.902.000
Transporte	\$85.520.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$94.928.000
Alimentación	\$78.250.000
Total	\$427.600.000

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) C	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Mejorar capacidades técnicas y organizativas de las Kumpańy y Organizaciones Rrom.	\$53.000.000	3	\$56.657.000	4
Mejorar las capacidades técnicas de la institucionalidad para la implementación de acciones en favor del pueblo Rrom.	\$53.000.000		\$56.657.000	
Realizar la asistencia técnica a las Kumpańy y Organizaciones Rrom, para el fortalecimiento del gobierno propio y de su pervivencia como pueblo étnico.	\$86.000.000		\$161.227.782	
Realizar mesas de concertación con el pueblo ROM, para acordar las propuestas de modificación del marco normativo.	\$200.000.000	8	\$235.180.000	9
Formular un documento técnico del Proyecto de modificación del decreto 2957 de 2010.	\$6.000.000		\$6.414.000	
Registrar y actualizar las encuestas de la población Rrom con base en la información que los Representantes Legales de las Kumpańy y Organización reporten al Ministerio del Interior.	\$2.000.000		\$2.138.000	
Generar espacios de diálogo para garantizar la representación política efectiva del Pueblo Rrom a través de las 5 sesiones al año de la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo RROM GITANO.	\$400.000.000		\$427.600.000	
TOTAL	\$800.000.000		\$945.873.782	

3.1.3.5 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS Y QUILLACINGAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (\$45.248.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3701-1000-37	\$20.000.000.000	\$45.248.000.000	\$25.248.000.000	126%
TOTAL	\$20.000.000.000	\$45.248.000.000	\$25.248.000.000	126%

BASE LEGAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, razón por la cual la pervivencia integral de los Pueblos Indígenas, sus culturas, sistemas e instituciones de organización social, política y normatividad es criterio fundamental al definir la estructura político-administrativa de la Nación. Estos territorios son el ámbito ancestral de gobierno y vida integral de los pueblos indígenas que hoy los poseen bajo la figura legal de resguardos indígenas, y sus autoridades tradicionales constituyen actualmente la figura legítima y efectiva de gobierno, bajo sus particulares sistemas e instituciones jurídicas, políticas y sociales, de organización social, representando la figura estatal colombiana de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política.

El Ministerio del Interior tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el Derecho individual a profesar una religión o credo, Consulta Previa y Derecho de autor y Derechos conexos.

Específicamente, en referencia con la Dirección de Asuntos Indígenas y ROM, acorde al Decreto 2340 de 2015 modificado por el Decreto 2353 de 2019, tiene las siguientes funciones: “Artículo 13. Funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. Son funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes:

1. Asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los pueblos indígenas y Rom en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y culturales.
2. Coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representen.
3. Propender por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, en coordinación con las entidades y organismos competentes.
4. Coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a comunidades indígenas, minorías y Rom.
- 5.

Prestar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el apoyo humano, técnico y financiero para la identificación, procedencia y realización de los procesos de consulta previa que esta determine. 6. Coordinar y realizar los procesos de consulta previa, para la adopción de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional, bajo los lineamientos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. 7. Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización. 8. Llevar el registro de los censos de población, autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del pueblo Rom. 9. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom. 10. Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y Rom. 11. Promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a atender la población indígena y Rom, y la formulación de acciones conjuntas. 12. Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención a las comunidades indígenas, a las minorías, al pueblo Rom. 13. Promover en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental la formulación de agendas ambientales conjuntas con las comunidades indígenas y Rom. 14. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en las materias de su competencia. 15. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 16. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 17. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia”.

El Convenio 169 de la OIT, menciona que los pueblos indígenas en muchos lugares del mundo no pueden ejercer sus derechos y libertades en el mismo grado que el resto de la población de los países que habitan, y que sus costumbres, valores y sistemas de pensamiento han sufrido un progresivo debilitamiento. Ante esta situación, los Estados que adoptan este convenio, entre ellos Colombia, se comprometieron a emprender con la participación activa de los pueblos indígenas interesados acciones coordinadas y sistemáticas para garantizar sus derechos y proteger su integridad (artículo 2).

Las medidas especiales o acciones afirmativas para grupos étnicos se fundamentan en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que establece: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas a favor de los grupos discriminados o marginados”.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

De acuerdo a los compromisos del Ministerio del Interior con el pueblo de Pastos y Quillacingas se tiene estipulado, lo siguiente:

- Realizar trabajos en conjunto para acordar líneas de acción para lograr conformar la fiducia por un valor de \$200.000.000.000 (doscientos mil millones de pesos m/cte.)
- Constituir fiducia por \$200.000.000.000 para el cuatrienio

De acuerdo a estos compromisos que vienen del Gobierno anterior el cual no tuvo un cumplimiento del 100% con los recursos que quedaron en el acuerdo la DAIRM continuó garantizando la ejecución del proyecto de inversión mediante la formulación de una nueva ficha con la cual busca cumplir con la totalidad de los recursos pactados en la mesa de los pastos en la minga la delfina del año 2019.

Por esta razón es preciso aclarar para el cuatrienio (2018-2022), se habían solicitado recursos por valor de \$200.000.000.000 en pro del fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos Pastos y Quillacingas, en la vigencia 2019 no se asignaron recursos, para la vigencia 2020 asignaron recursos por valor de \$25.000.000.000 para el proyecto de infraestructura en el mantenimiento de vías terciarias placas huellas en el departamento de Nariño, para la vigencia 2021 se destinaron recursos por valor de \$40.000.000.000, los cuales se incluyeron en el Banco de Proyectos para los pueblos Pastos y Quillacingas, para la vigencia 2022 se asignaron recursos por valor de \$40.000.000.000 los cuales se incluyeron en el Banco de Proyectos para los pueblos Pastos y Quillacingas, para la vigencia 2023 se realizó la asignación de \$35.000.000.000 los cuales fueron a ser destinados en el contrato de FINDETER 2023 para ejecutar en los pueblos de los pastos y Quillacingas, siguiendo con este orden lógico para el 2024 asignaron \$20.000.000.000 y para el 2025 se requieren la totalidad de los recursos para lograr cumplir con los compromisos que vienen en rezagos desde el gobierno anterior y garantizar la pervivencia de los pueblo de los pastos y Quillacingas.

Se han venido trabajando y refrendando los compromisos en la Mesa de Pastos con representantes del gobierno nacional saliente y entrante en las cuales se viene expresando por parte de los representantes de los Pastos y Quillacingas la necesidad de darle continuidad a los diferentes proyectos que se vienen trabajando ya que por medio de estos se garantiza el fortalecimiento, equidad y seguridad alimentaria en su territorio, por lo anterior los representantes de los Pastos y Quillacingas sentaron una posición firme frente al nuevo gobierno en la que piden que independientemente del cambio de gobierno los compromisos con las comunidades indígenas deben continuar, lo cual fue acogido por los representantes para buscar alternativas y seguir adelante con los proyectos y será tema de agenda para la próxima Mesa de Concertación.

El nuevo gobierno en su Plan de Desarrollo tiene como objetivo transformar al país en una tierra donde sean prioridades una vida digna, libre de violencia y con la paz como paradigma; con sólidos ejes de justicia social entre las comunidades que se agrupan en el país. Es por ello por lo que desde el minuto inicial potenciar esa transición y sentar las bases de desarrollo en materia de erradicar la desigualdad, frenar la recesión de la economía y combatir el cambio climático son premisas en el plan de desarrollo del actual Gobierno.

Las comunidades de los pastos y Quillacingas agrupados en la mesa de los pastos concertó con el gobierno nacional durante el primer trimestre del 2023 mayor inversión por parte del gobierno nacional para atender las necesidades incumplidas durante el gobierno anterior, dado que este incumplió el acuerdo pactado en la minga de la Delfina en abril de 2019 el cual se realizó por un compromiso de 200.000.000.000 y hasta la vigencia anterior solo se ejecutaron 140.000.000.000 creando un desequilibrio económico y social para las comunidades de los pastos y Quillacingas en el departamento de Nariño. Según los diálogos sostenidos en la mesa de pasto en el primer bimestre del año se acordó incluir mayor inversión para estas comunidades con el fin de garantizar una equidad entre los territorios y así facilitar la equidad de los pueblos.

Para la vigencia 2025, se requieren estos recursos para continuar con la implementación del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS Y QUILLACINGAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con el fin de atender los compromisos adquiridos con las comunidades de Pastos y Quillacingas. Lo que se pretende es financiar iniciativas que fortalezcan el bienestar de los diferentes pueblos indígenas del departamento de Nariño en cuanto a proyectos agroalimentarios, mejoramiento vial que permitan el transporte de alimentos y reduzca el costo de estos, con el fin de lograr mayor equidad, fortalecimiento y dialogo social entre las comunidades indígenas, así como el fortalecimiento del gobierno propio de una forma integral que garantice la pervivencia de los pastos y Quillacingas. Por tal razón se hace necesario obtener el presupuesto para vigencia 2025, con el fin dar cumplimiento a los compromisos pactados.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado de acuerdo con las necesidades establecidas en las Mesas de los pastos sostenidas con el gobierno nacional, Según los acuerdos sostenidos durante las mesas de los pastos se logró que el gobierno nacional asignara mayores recursos para las comunidades de los pastos y Quillacingas con el objetivo de fortalecer y crear equidad entre las comunidades indígenas y el pueblo de los pastos y Quillacingas, debido a estos compromisos se pactó que fueran incluidos en el PND 2022-2026 “*Colombia Potencia Mundial de Vida*”.

Los incrementos del presupuesto del 55,79% frente a la vigencia anterior corresponden a dos motivos principales, El primero el déficit presupuestal que se tuvo en la vigencia 2024 en lo correspondiente a la asignación presupuestal que fue por valor de \$20.000.000.000 y se tenía proyectado una asignación de \$40.000.000.000.

Como segundo motivo se realizó una proyección de los costos para cada vigencia del 13,12% lo cual equivale al cierre del IPC para la vigencia en la cual se formuló el proyecto vigencia 2023.

En consecuencia, con lo anteriormente expresado se permite afirmar que las distribuciones de cada actividad para cada vigencia pueden variar de acuerdo a los compromisos adicionales que salgan a partir de Mesas, Mingas y Paros con comunidades indígenas.

ANÁLISIS DE COSTOS.

A1: Realizar financiación de iniciativas en fortalecimiento principalmente en infraestructura vial mediante construcción de placas huellas que faciliten la movilidad de las comunidades de los pastos y quillacingas, adicionalmente en materia productiva, mujer familia y generación, gobierno propio, integridad cultural, armonía y equilibrio para la defensa de la vida.

INSUMOS	VALOR
Fondo para la cofinanciación de iniciativas	\$44.795.520.000
Total	\$44.795.520.000

A2: Realizar asistencia técnica en formulación y presentación de proyectos e iniciativas propias de las comunidades indígenas de los Pastos y Quillacingas.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$97.283.200
Transporte	\$11.312.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$22.624.000

Alimentación	\$95.020.800
Total	\$226.240.000

A3: Formación y fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio de las comunidades indígenas de los Pastos y Quillacingas.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$113.120.000
Total	\$113.120.000

A4: Realizar procesos de discusión y concertación sobre temas asociados al gobierno propio de los Pastos y Quillacingas.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$113.120.000
Total	\$113.120.000

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) C	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Realizar financiación de iniciativas en fortalecimiento principalmente en infraestructura vial mediante construcción de placas huellas que faciliten la movilidad de las comunidades de los pastos y quillacingas, adicionalmente en materia productiva, mujer familia y generación, gobierno propio, integridad cultural, armonía y equilibrio para la defensa de la vida.	\$19.000.000.000	3	\$ 44.795.520.000	4
Realizar asistencia técnica en formulación y presentación de proyectos e iniciativas propias de las comunidades indígenas de los Pastos y Quillacingas	\$0		\$ 226.240.000	
Formación y fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio de las comunidades indígenas	\$500.000.000	250	\$113.120.000	50

de los Pastos y Quillacingas.				
Realizar procesos de discusión y concertación sobre temas asociados al gobierno propio de los Pastos y Quillacingas.	\$500.000.000		\$113.120.000	
TOTAL	\$20.000.000.000		\$45.248.000.000	

3.1.3.6 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN ESPACIOS DE DIÁLOGO A NIVEL NACIONAL. (\$2.180.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 Respecto Presupuesto 2024
	NUEVO	\$2.180.000.000		100%
TOTAL	NUEVO	\$2.180.000.000		100%

BASE LEGAL

El proyecto de ley 2294 del 19 de mayo de 2023, presentado por el Gobierno Nacional “*Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*” Colombia, *Potencia Mundial de la Vida*”, el cual contiene los objetivos del Gobierno Nacional que promueven la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia, es decir, una cultura de paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común; en su artículo 3, se presentan 5 ejes de transformación, dentro de los cuales, se encuentra el eje número 5, *Convergencia Regional*, el cual lo describe de la siguiente manera:

“5. Convergencia regional. Es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos 1 intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Así mismo, se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público, poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre estas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno nacional garantizará la inclusión e implementación efectiva del enfoque diferencial e interseccional indígena, afrocolombiano, palenquero y raizal en todos los ejes de transformación y en los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo.”

Adicionalmente, y complementario al eje de *Convergencia Regional*, en el artículo 4, se contemplan 3 ejes transversales, dentro de los cuales, se encuentra el eje de “*Los Actores diferenciales para el cambio*”, descrito de la siguiente manera:

“2. Los actores diferenciales para el cambio. El cambio que propone es con la población colombiana en todas sus diversidades para lograr transformaciones que nos lleven a una

sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, religioso, cultural y político, así como las basadas en género, étnico -racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión. De igual forma busca superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por las divisiones entre lo urbano y lo rural. Actores como las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, las víctimas, las niñas y los niños, las comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad y la comunidad campesina son parte integral de las transformaciones propuestas por este Plan.”

“El cambio es con las mujeres

El cambio que propone este es con las mujeres en todas sus diversidades. Ellas representan más de la mitad de la población y serán el centro de la vida y de las transformaciones de nuestra sociedad. Las mujeres han sido históricamente tejedoras de la paz, guardianas del agua y defensoras del territorio y de la vida. Sin embargo, persisten las violencias y las discriminaciones. Entre las razones de estas desigualdades y discriminaciones, se destaca la normalización de roles, estereotipos, creencias, mitos, prácticas e imaginarios basados en la división sexual y de género de la sociedad.”

Así mismo, en el capítulo 8, “*Actores diferenciales para el cambio*”, Sección 3. “**GRUPOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS**”, indica lo siguiente:

“Artículo 355°. Partidas Presupuestales Para El Cumplimiento De Los Acuerdos Con Pueblos Indígenas Y Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras Y ROM. Las entidades en el marco de su autonomía y con la participación de los pueblos indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y ROM determinarán las partidas presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos pactados con estos e incorporados integralmente en la presente ley, el cual se dará en el marco de los tiempos establecidos normativamente con el fin de que cada entidad incluya estas en la priorización para la programación de su presupuesto. Con este fin, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la convocatoria de las entidades concernidas, siendo estas últimas las responsables de la programación de las partidas presupuestales y su determinación presentada en una sesión anual conjunta de la Mesa Permanente de Concertación y la Mesa Regional Amazónica”

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

En la actualidad, la CNMI está compuesta por siete comisionadas de las siguientes organizaciones indígenas AICO, AISO, CIT, CRIC, Gobierno Mayor, ONIC, OPIAC. El papel que desempeñan las comisionadas que integran la CNMI es imprescindible dentro del movimiento indígena, ya que son ellas quienes dan el direccionamiento político y espiritual en la

implementación y formulación de políticas públicas con injerencia en las mujeres, familias y generaciones indígenas. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1097 la CNMI tiene como “objeto orientar y contribuir técnicamente a la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes y proyectos que desarrollen los derechos de las mujeres, familias y generaciones indígenas”.

En esa medida, el fortalecimiento de la CNMI le apuesta a brindar los elementos necesarios para garantizar una participación adecuada de cada una de las comisionadas en los espacios de toma de decisiones. El fortalecimiento de la CNMI permitirá que esta pueda desarrollar las competencias institucionales para las cuales fue creada, al igual que aportar al fortalecimiento de las organizaciones que la componen y de los pueblos indígenas. Este proyecto también permitirá que las mujeres indígenas participen en los escenarios de concertación, regionales y nacionales, para el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.

Este proyecto también contempla iniciar un proceso de observancia frente a las violencias que afectan a las mujeres, familias y generaciones indígenas, con el objetivo de que las orientaciones y contribuciones a las políticas públicas, planes y proyectos tengan un sustento. El ejercicio de observancia permitirá que la CNMI pueda tener información precisa y actualizada frente a la situación de las mujeres, familias y generaciones indígenas. En este sentido, la CNMI le apuesta al fortalecimiento de su equipo humano y la adquisición de insumos para poder ejercer sus funciones, además de generar espacios de participación para las mujeres indígenas.

La creación de estos espacios de participación pretende escuchar a las mujeres indígenas en sus territorios y recoger insumos para poder identificar las acciones y recomendaciones que deben ser incluidas en las políticas públicas, planes, proyectos y demás. Estos espacios van a aportar también a los boletines y el informe final. Por esto, el fortalecimiento de la CNMI va a permitir visibilizar la situación de las mujeres, familias y generaciones indígenas y generar acciones adecuadas para su protección.

Se fortalecerán dichas organizaciones a partir del mejoramiento de las capacidades técnicas y políticas de las mujeres indígenas de las 7 organizaciones Nacionales, a través de la transferencia de conocimientos propios de normatividad política en el marco de la participación de los pueblos indígenas, derechos y deberes del pueblo indígena, procesos de toma de decisiones, diálogo social, negociación entre otros.

Es de resaltar que este proyecto busca beneficiar a las Mujeres indígenas de Colombia teniendo un enfoque diferencial en las macro metas del PND 202-2026 Mujeres autónomas, una sociedad para el cuidado de la vida, desigualdad social, lo cual genera un aporte fundamental en la estructuración de las comunidad y fortalecimiento en el gobierno propio, a fin dar cumplimiento a los compromisos pactados en la consulta del PND 2022-2026 “*Colombia Potencia Mundial de Vida*”, con los pueblos indígenas.

En consecuencia, con lo anteriormente expresado se permite afirmar que las distribuciones de cada actividad para cada vigencia pueden variar de acuerdo a los compromisos adicionales que salgan a partir de Mesas, Mingas y Paros con comunidades indígenas.

En conclusión, el proyecto de inversión busca de manera directa dar cumplimiento a uno de los compromisos que quedaron en la consulta previa del PND en el marco de la Mesa Permanente de Concertación-MPC.

“IM-154 Garantizar el cumplimiento efectivo del decreto 1097 de 2020 y 1158 de 2020 mediante la formulación e implementación de un proyecto de inversión específico para el fortalecimiento de la CNMI con participación de los pueblos y organizaciones indígenas”.

ANÁLISIS DE COSTOS.

A1: Generar espacios para el fortalecimiento de las capacidades de diálogo de las mujeres indígenas en territorio.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$44.743.124
Alquiler de maquinaria y equipo	\$20.000.000
Total	\$64.743.124

A2: Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas en el territorio Nacional

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$71.675.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$100.000.000
Total	\$171.675.000

A3: Realizar eventos de participación para las mujeres indígenas en articulación con entidades territoriales y actores sociales

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$249.203.433
Transporte	\$50.000.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$100.000.000
Alimentación	\$50.000.000
Total	\$449.203.433

ENTREGABLES:

ENTREGABLES	VALOR
Plan de trabajo	\$509.754.806
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$686.683.857
Documento con los resultados de las validaciones	\$148.947.722
Divulgación	\$148.992.056
Total	\$1.494.378.442

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		Entregables.	VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)		COSTO PROYECTADO (Pesos) C	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Generar espacios para el fortalecimiento de las capacidades de diálogo de las mujeres indígenas en territorio.				\$ 64.743.124	3
Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas en el territorio Nacional.				\$ 171.675.000	
Realizar eventos de participación para las mujeres indígenas en articulación con entidades territoriales y actores sociales.				\$ 449.203.433	
Definir el alcance del documento			Plan de trabajo	\$ 218.466.346	1
Definir el cronograma de entrega del documento				\$ 72.822.115	
Identificar grupos de valor a los que estará dirigido el documento.				\$ 218.466.346	
Recopilar la información			Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$ 99.328.016	
Clasificar la información				\$ 49.664.008	
Analizar la información recopilada				\$ 49.664.008	
Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada				\$ 99.328.016	
Realizar el marco conceptual del documento				\$ 49.664.008	
Establecer el marco metodológico que implementará el documento				\$ 76.596.022	
Diseñar prototipo				\$ 76.596.022	
Realizar trabajo de campo				\$ 76.596.022	
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico				\$ 109.247.735	
Adelantar mecanismos de validación:			Documento con los resultados de las validaciones	\$ 89.350.912	
Elaborar documento con el resultado de las validaciones				\$ 29.798.405	
Consolidar el documento final de acuerdo con el proceso de validación				\$ 29.798.405	
Socializar el documento con los actores involucrados			Divulgación	\$ 89.395.234	
Publicar el documento				\$ 59.596.823	
TOTAL	\$0			\$2.180.000.000	

3.1.3.7 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA LA VIDA, PERMITIENDO EL BIENESTAR Y LA PAZ TOTAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (\$6.540.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
	NUEVO	\$6.540.000.000		100%
TOTAL	NUEVO	\$6.540.000.000		100%

BASE LEGAL

El Proyecto de Inversión contribuye a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

En primer lugar, contribuirá a que se implementen los apartados 4 y 5 de las bases del PND Actores Diferenciales para el Cambio”, que expresan lo siguiente:

- Vida, seguridad y libertad de los territorios. En este apartado se establece que se avanzará en el empoderamiento de las formas propias de control territorial (guardias indígenas y otros mecanismos), como estrategia de protección territorial y de fortalecimiento a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades, debido a que la defensa de la vida y el territorio no puede seguir siendo un factor de riesgo.
- Pueblos y comunidades étnicas. En este apartado se establece que se avanzará en el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades étnicas. Adicionalmente se reconoce que para vivir con dignidad plena en paz y justicia social será necesario para el cambio convertir los territorios étnicos en potencias de la vida, con este fin se deberán proveer los principales servicios sociales como la educación y la conectividad. Asimismo, será necesario garantizar la seguridad física de las comunidades y los pueblos, así como la seguridad física de sus territorios.

En segundo lugar, contribuirá a la implementación del acuerdo aprobado y protocolizado en la consulta previa, libre e informada referente a un proyecto de inversión para la guardia indígena y otros mecanismos de protección, seguridad, control social / territorial y cuidado de la vida: “El gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior en coordinación armónica con la Unidad Nacional de Protección - UNP formulará e implementará un proyecto de inversión específico (...), el cual incluirá acciones de formación, dotación, auto sostenimiento, comunicación y visibilización”

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

El Ministerio del Interior, ha identificado que las guardias indígenas de Colombia no cuentan con dotación suficiente, integral y acorde a su identidad cultural y sus territorios. Por lo mismo, se requiere garantizarles dotación para que logren un desempeño efectivo de sus

funciones y roles de protección, seguridad, control social y territorial y cuidado de la vida de los Pueblos Indígenas, a partir de dotación que les garantice seguridad física y dignidad.

Las guardias indígenas tampoco cuentan con autonomía económica lo que imposibilita que puedan autofinanciarse o tener auto sostenimiento permanente. Por lo mismo, la Guardia Indígena Nacional y sus guardias regionales requieren financiación significativa para lograr generar empresas propias con esquema de sostenibilidad y gerencia, para que se garantice su fortalecimiento integral a corto, mediano y largo plazo a partir de su propia autonomía económica.

Las guardias indígenas no cuentan con suficientes conocimientos y habilidades en todos los temas de interés en los que cumplen roles. Por lo tanto, se propone como apuesta la constitución, registro, dotación y puesta en marcha de la Escuela Nacional de Formación de la Guardia Indígena para la Vida y la Paz.

El Ministerio ha identificado que las guardias indígenas experimentan estigmatización a partir de los roles que ejercen, situación que debe transformarse con el diseño e implementación de una Estrategia de Comunicaciones para la Visibilización y Posicionamiento de la Guardia Indígena de Colombia como tejido, colectivo, símbolo y cuidandero milenario y espiritual que cumple roles a favor de la vida y la paz, con las suficientes garantías técnicas, logísticas, operativas, entre otras.

En consecuencia, se hace necesario generar condiciones favorables desde una lógica de financiamiento de propuestas que conduzcan al fortalecimiento integral de las guardias indígenas de Colombia.

La necesidad de fortalecimiento busca solucionarse a través de cuatro acciones acordes a lo establecido en el documento “Acuerdos derivados de la Consulta Previa con los Pueblos y Comunidades étnicas”, anexo al PND 2022-2026 que incluyen acciones de: 1) Formación, 2) Dotación, 3) Auto sostenimiento, y 4) Comunicación / visibilización. Acciones que coadyudarán al fortalecimiento integral de las guardias indígenas para que logren mejorar significativamente su desempeño o desarrollo de sus roles.

Las estructuras de guardia indígena han dejado a las comunidades indígenas expuestas a los actores armados. Así mismo, la guardia no ha logrado su consolidación de manera más amplia e integral debido a la ausencia de las garantías para un proceso de formación educativa propia, autónoma y permanente a nivel nacional. Las comunidades han asumido el deber de desarrollar de manera autónoma e intergeneracional la formación, la dotación, el auto-sostenimiento, la comunicación y visibilización desde sus recursos propios, pero la escasez de recursos económicos ha imposibilitado el despliegue de una estrategia efectiva que asegure las sostenibilidades de la Guardia Indígena. En este sentido, desde años anteriores las autoridades indígenas han demandado reiteradamente el fortalecimiento efectivo de los mecanismos de autoprotección.

En conclusión, el proyecto de inversión busca de manera directa dar cumplimiento a uno de los compromisos que quedaron en la consulta previa del PND en el marco de la Mesa Permanente de Concertación-MPC.

“IT2-24 El gobierno nacional, a través del Ministerio del interior en coordinación armónica con la Unidad Nacional de Protección -UNP formulará e implementará un proyecto de inversión específico con el propósito de fortalecer el funcionamiento de las estructuras de la Guardia Indígena y otros mecanismos de protección, seguridad, control social y territorial, y cuidado de la vida de los pueblos indígenas, el cual incluirá acciones de formación, dotación, auto sostenimiento, comunicación y visibilización.”.

ANÁLISIS DE COSTOS.

A1: Realizar eventos de participación para las Guardias indígenas en articulación con entidades nacionales y territoriales.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$700.000.000
Transporte	\$500.000.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$100.000.000
Alimentación	\$200.000.000
Total	\$1.500.000.000

A2: Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de la Guardia indígena y sus mecanismos de protección en el territorio.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$1.000.000.000
Transporte	\$700.000.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$300.000.000
Alimentación	\$1.000.000.000
Total	\$3.000.000.000

A3: Realización de talleres con representantes de la guardia indígena en cartografía social y georreferenciación territorial.

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$500.000.000
Transporte	\$200.000.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$150.000.000
Alimentación	\$150.000.000
Total	\$1.000.000.000

A4: Realizar un diagnóstico e inventario de las principales necesidades de dotación y su utilización por parte de la comunidad indígenas

INSUMOS	VALOR
Mano de obra calificada	\$500.000.000
Transporte	\$200.000.000
Alquiler de maquinaria y equipo	\$190.000.000

Alimentación	\$150.000.000
Total	\$1.040.000.000

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) (c)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Realizar eventos de participación para las Guardias indígenas en articulación con entidades nacionales y territoriales.	\$0	0	\$1.500.000.000	6
Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de la Guardia indígena y sus mecanismos de protección en el territorio.	\$0		\$3.000.000.000	
Realización de talleres con representantes de la guardia indígena en cartografía social y georreferenciación territorial	\$0		\$1.000.000.000	4
Realizar un diagnóstico e inventario de las principales necesidades de dotación y su utilización por parte de la comunidad indígenas	\$0		\$1.040.000.000	
TOTAL	\$0		\$6.540.000.000	

3.1.3.8 FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$20.431.268.073)

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
C-3701-1000-39	\$12.120.337.176	\$20.431.268.073	\$8.310.930.897	68,57%
TOTAL	\$12.120.337.176	\$20.431.268.073	\$8.310.930.897	68,57%

BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia.

- Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 –Colombia, Potencia Mundial de la Vida. 7. Actores diferenciales para el cambio. 3. Reparación efectiva e integral a las víctimas. 4. Vida, seguridad y libertad de los territorios
- CONPES 4063 de 2021: “Política pública Garantías y Respeto a la labor de Defensa de los Derechos Humanos”
- Decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 1066 del 2015. Ministerio del Interior.
- Resolución No. A/RES/53/144 del 8 de marzo de 1999 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
- Resolución No. 1044 de 1990, la Asamblea General de la OEA “Defensores de los derechos humanos en las américas” Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y Organizaciones de la sociedad civil para la promoción y Protección de los derechos humanos en las Américas.
- Resolución No.1671 de 1999 de la Asamblea General de la OEA. OEA “Defensores de los derechos humanos en las américas” Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y Organizaciones de la sociedad civil para la promoción y Protección de los derechos humanos en las Américas.
- Resolución No. 72/247 de 2017 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vigésimo aniversario y promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
- Alerta Temprana No. 026 – 18, Defensoría del Pueblo, 28 de febrero de 2018.
- Tutela radicada 110013103045202000025-00. Sala Primera Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Mayo 2020.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Son defensores y defensoras de derechos humanos todas aquellas personas que, individual o colectivamente, promuevan y procuren, de forma pacífica, la protección y realización de los derechos humanos acorde con la definición de la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos” o “Declaración de los Defensores de Derechos Humanos

La constitución política colombiana es el hito fundamental para la garantía de los derechos de las personas que ejercen la labor de defensoras de los derechos humanos, quienes por la labor que ejercer se encuentran sometidos a mayores riesgos. Bajo este marco se han creado diversos programas de protección, prevención y espacios de coordinación dirigidos a promover el liderazgo social.

El Estado colombiano ha implementado diferentes acciones para brindar condiciones idóneas para el ejercicio de liderazgo y defensa de derechos humanos, buscando promover la cultura de promoción de derechos humanos; el fortalecimiento del tejido social y liderazgo; la prevención de vulneración de derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad; la protección en caso de que exista un alto riesgo a la vulneración de derechos; y la justicia en los casos en que se materialicen los riesgos. Sin embargo, se han mantenido una serie de agresiones y vulneraciones.

A pesar de estos avances, persisten las agresiones a las personas defensoras de los derechos humanos y los factores de riesgo que amenazan el libre ejercicio de esta labor, entre las que se encuentran las vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad.

En el informe anual de homicidios contra líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia, periodo 01 enero a 31 diciembre de 2021 emitido por el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el cual compila los avances institucionales al respecto, presenta las siguientes conclusiones:

- Conforme a los registros de la Defensoría del Pueblo se evidencia que el número de casos de homicidio en contra de líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos tuvo una disminución del 20% en el periodo enero – diciembre de 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior.
- Se evidencia que los hechos de homicidio en contra de líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos durante el periodo enero – diciembre de 2021 se presentan en 102 de los 1.103 municipios del país que representa el 9,2% del total. A escala departamental se evidencia que dichos municipios se encuentran dispersos en 24 departamentos del país.
- De acuerdo con las fuentes incluidas en el presente informe, es de especial atención el número de casos que se presentaron durante enero – diciembre de 2021 en los municipios de Cali – Valle del Cauca con siete (07) casos, San Andrés de Tumaco - Nariño con cinco (05) casos y Argelia – Cauca y Tuluá – Valle del Cauca con cuatro (04) casos, respectivamente, ya que son los municipios con mayor número de casos durante el periodo de tiempo analizado.
- Es de especial atención el número de casos de homicidio que se presentaron en los departamentos de Antioquia con veinticuatro (24) casos, Cauca con veintidós (22) y Valle del Cauca con diecinueve (19) casos.
- Los casos de homicidios documentados para el periodo enero – diciembre del año 2021, permiten identificar que la concentración de este fenómeno se encuentra localizado en el sur occidente del país, sobre todo en los departamentos del Cauca y Nariño, en el Pacífico colombiano, el bajo Cauca Antioqueno y el sur de Córdoba, estas zonas coinciden con la convergencia de fenómenos criminales como el narcotráfico, extracción ilícita de minerales y la presencia de actores armados ilegales. Además, estos territorios poseen alto valor geoestratégico como rutas para el narcotráfico. Esta convergencia de fenómenos criminales busca socavar el liderazgo social en cada territorio como medida de imposición de economías ilícitas, lo cual debe analizarse como un contexto particular e incomparable a nivel global por los factores de riesgo que enfrentamos en el país.
- El 29,0% del total de casos de homicidios en contra líderes/as sociales y/o personas defensoras de derechos humanos se presentó en municipios con porcentaje de población con NBI por debajo del 15%, principalmente en ciudades capitales Cali – Valle del Cauca (07 casos), Cúcuta – Norte de Santander (03 casos); Medellín – Antioquia (02 casos) y Pereira – Risaralda (02 casos).

- Del total de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y que se ubican en los municipios con casos de homicidios en contra de líderes/as y personas defensoras de DDHH, el 92,5% de alertas identificadas están relacionadas con la presencia de Grupos Armados Organizados -GAO- y Grupos Delincuenciales Organizados -GDO- y/o la disputa entre estos grupos por el dominio de negocios ilícitos, principalmente ligados al narcotráfico y la minería ilegal.
- En más de la mitad (54,9%) de los municipios con casos de homicidios contra líderes/as y personas defensoras de DDHH se han presentado delitos que se configuran como infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH-.
- De acuerdo a los datos que reposan en el sistema de información de la UARIV, en la mayoría de los municipios (98,3% del total) en los que se presentaron casos de homicidios contra líderes/as y personas defensoras de DDHH se registraron hechos victimizantes contra víctimas del conflicto armado -VCA-. De acuerdo con esta entidad, los casos que más se presentaron fueron desplazamiento forzado (26.623 casos), Confinamiento (8.256 casos) y Amenazas (6.892 casos).
- En el 95,1% de los municipios en los que se presentaron casos de homicidios en contra de líderes/as y personas defensoras de derechos humanos durante el periodo enero – diciembre del 2021 se vienen adelantando intervenciones relacionados ya sea a través de Planes de contingencia, Modelos de sustitución, Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas y/o Programa de atención a desvinculados.

Entre las recomendaciones realizadas a las diferentes entidades a partir de lo evidenciado se encuentran: Se recomienda al Ministerio del Interior avanzar en el seguimiento a la implementación de la política pública (CONPES) para la labor de los líderes/as sociales y defensores de derechos, promoviendo una articulación de planes y acciones alrededor de la cultura de derechos humanos, prevención a la vulneración de derechos, protección en situaciones de riesgo y facilitar el derecho de acceso a la justicia.

Es de recordar que el Ministerio del Interior lideró durante los años 2019 al 2021, un proceso participativo de formulación de una política pública para brindar garantías a los defensores de derechos humanos, la cual se materializa con la emisión, el 6 de diciembre de 2021, del CONPES 4063 de 2021: “Política pública Garantías y Respeto a la labor de Defensa de los Derechos Humanos”, cuyo objetivo es fortalecer el respeto y las garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los Derechos Humanos, a través del desarrollo de estrategias institucionales conjuntas para intervenir los factores de riesgo que amenazan el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos; fortalecer las capacidades institucionales para la prevención temprana y la protección oportuna de los Defensores de Derechos Humanos; adoptar estrategias que fortalezcan las etapas de investigación, juicio y sanción de las agresiones contra las personas defensoras de Derechos Humanos y el robustecer las capacidades individuales y colectivas de las personas defensoras de Derechos Humanos para la promoción de los derechos y el reconocimiento a su labor.

La Dirección de Derechos Humanos tiene bajo liderazgo o acompañamiento, 19 de las 57 acciones que componen la matriz PAS del conpes, a las cuales se espera dar cumplimiento a través de los recursos que se le asignen al proyecto de inversión para el Fortalecimiento a las Garantías para el Ejercicio del Liderazgo Social y Defensa de los Derechos Humanos a Nivel Nacional.

Con base en este panorama, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior genera este proyecto de inversión con el objetivo de fortalecer las garantías para el ejercicio del liderazgo social y defensa de los derechos humanos, a través del incremento de las capacidades institucionales para la garantía de la labor de defensa de derechos humanos; la promoción en la transformación de imaginarios, estereotipos, actitudes y prejuicios en contra del ejercicio de defensa de los derechos humanos; y el fortalecimiento de la capacidad de las personas y organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, el cual para la vigencia 2025 se plantea las siguientes metas:

- Formular 40 planes de acción para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de Derechos Humanos en territorios priorizados de las zonas especiales de garantías para el liderazgo social y defensa de los Derechos Humanos.
- Suscribir 5 pactos ciudadanos territoriales en contra de la estigmatización para consolidar una red nacional de respeto y apoyo de la defensa de los Derechos Humanos.
- Desarrollar 2 jornadas de autocuidado y autoprotección dirigidos a organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos.
- Realizar 13 jornadas para la aplicación de la encuesta de caracterización de organizaciones sociales y defensores.
- Generar 32 espacios departamentales y uno nacional para la garantía y respeto al ejercicio de defensa de los derechos humanos.
- Realizar 96 jornadas de implementación de la ruta interinstitucional para la garantía integral a la labor de defensa de derechos humanos.
- Impulsar en su implementación 80 planes de acción para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de Derechos Humanos a través de iniciativas cofinanciadas.
- Implementar el plan estratégico de cultura de respeto y de garantías a la labor de defensa de los Derechos Humanos.
- Implementar estrategia para fortalecer las capacidades de las personas y las organizaciones para gestionar y transformar conflictos interpersonales, colectivos y sociales en sus territorios.

Es de anotar que las entidades territoriales tienen un bajo nivel de conocimiento y apropiación de las obligaciones en materia de la labor ejercida por defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, aunado a que no se cuenta con información consolidada para la adopción de medidas en prevención temprana, prevención urgente y garantías de repetición frente a las vulneraciones de los derechos asociados a la labor de defensa.

Esto ha implicado situaciones de estigmatización de la labor que ejercen los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, disminución de la participación política y del control social sobre las actuaciones públicas, y homicidios, amenazas y agresiones contra quienes ejercen la labor de defensa de los derechos humanos.

Por lo anterior, es indispensable fortalecer los instrumentos y mecanismos que sustentan el marco de garantías para el ejercicio de labor que adelantan las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales; el desarrollo de acciones de apropiación a la labor de la defensa de los derechos humanos; el incremento de las capacidades de los servidores públicos en el orden nacional y territorial para la gestión del respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos; la mejora en los procesos de articulación y coordinación institucional en los órdenes nacional y territorial en la respuesta a la situación de los defensores de derechos humanos y; apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas y organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos.

Por lo cual, frente a esto se hace indispensable adelantar acciones que permitan brindar condiciones necesarias para adelantar los ejercicios de liderazgo y la defensa de los derechos humanos, evitando hechos que amenacen, vulneren o restrinjan los derechos de las personas que ejercen esta labor.

Los costeos de las actividades, las cuales buscan dar **cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ministerio y la Dirección en la matriz PAS del conpes 4063 de 2021: “Política pública Garantías y Respeto a la labor de Defensa de los Derechos Humanos”, cuya generación fue liderazgo del Ministerio del Interior**, tienen como base: i) para el caso de prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para ese tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; ii) para las jornadas de trabajo, talleres, mesas y espacios los costos se basan en los históricos de operación logística que incluyen participación de sociedad civil, los cuales incluyen gastos relacionados con eventos, alimentación, hospedaje, tiquetes y apoyo de transporte, entre otras, con ampliación de la cobertura territorial; iii) para las iniciativas cofinanciadas, se basa en los valores históricos del programa con incremento del número de iniciativas a fin de ampliar la cobertura territorial; y v) para los diplomados y consultorías, se basan en los históricos previamente realizados por la Dirección.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Diseñar e implementar un índice que incluya las diferentes variables institucionales y sociales relacionadas con la prevención, protección, garantías de no repetición y la generación de condiciones favorables a la labor de defensa de los DDHH	\$582.851.100	Documento índice diseñado que incluya las diferentes variables institucionales y sociales relacionadas con la prevención, protección, garantías de no repetición y la generación de condiciones favorables a la labor de defensa de los Derechos Humanos	\$0	N/A

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
		y socializado con 32 entidades territoriales.		
Construir, acompañar la implementación y monitorear los planes de acción de las Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo Social y Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del modelo de intervención nación - territorio para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de DDHH, garantizando la participación de los actores claves del territorio.	\$2.519.833.300	Formular 40 planes de acción para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de Derechos Humanos en territorios priorizados de las Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo Social y Defensa de los Derechos Humanos	\$3.452.834.964	Formular 40 planes de acción para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de Derechos Humanos en territorios priorizados de las Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo Social y Defensa de los Derechos Humanos
Cofinanciar iniciativas a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, con enfoque diferencial, de género, y orientación e identidad sexual diversa, priorizando Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos, dirigidas a su fortalecimiento organizacional.	\$1.220.000.000	Fortalecer organizativamente 40 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, con enfoque diferencial, de género, y orientación e identidad sexual diversa, a través de iniciativas cofinanciadas.	\$3.200.000.000	Fortalecer organizativamente 80 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, con enfoque diferencial, de género, y orientación e identidad sexual diversa, a través de iniciativas cofinanciadas.
Cofinanciar iniciativa dirigidas a apoyar la implementación de los planes de acción construidos en las zonas especiales de garantías para el liderazgo social y defensa de los derechos humanos.	\$1.220.000.000	Impulsar en su implementación 40 planes de acción para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de Derechos Humanos, a través de iniciativas cofinanciadas.	\$3.200.000.000	Impulsar en su implementación 80 planes de acción para la mitigación de riesgos de vulneraciones a las personas defensoras de Derechos Humanos, a través de iniciativas cofinanciadas.
Realizar seguimiento a la implementación de las iniciativas cofinanciadas	\$260.928.352	Realizar seguimiento a la implementación de las 40 iniciativas cofinanciadas	\$323.902.764	Realizar seguimiento a la implementación de las 160 iniciativas cofinanciadas
Realizar asistencia técnica para la implementación de Ruta Interinstitucional garantía integral a la labor de defensa de derechos humanos.	\$3.260.632.800	Desarrollar 76 jornadas de trabajo territorial con participación de las comunidades.	\$2.353.233.600	Desarrollar 96 jornadas de trabajo territorial con participación de las comunidades.
Acompañar el desarrollo de espacios para la garantía y respeto al ejercicio de defensa de los derechos humanos.	\$1.220.000.000	Impulsar la generación de 33 espacios para la garantía y respeto al ejercicio de defensa de los derechos humanos	\$1.339.560.000	Impulsar la generación de 33 espacios para la garantía y respeto al ejercicio de defensa de los derechos humanos
Consolidar pactos ciudadanos territoriales en contra de la estigmatización y a favor	\$500.000.000	Suscribir 5 pactos ciudadanos territoriales en contra de la estigmatización para	\$549.000.000	Suscribir 5 pactos ciudadanos territoriales en contra de la estigmatización para

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
de la sana controversia en el país, priorizando las Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo Social y la defensa de los Derechos Humanos, para consolidar una red nacional de respeto y apoyo de la defensa de los Derechos Humanos.		consolidar una red nacional de respeto y apoyo de la defensa de los Derechos Humanos.		consolidar una red nacional de respeto y apoyo de la defensa de los Derechos Humanos.
Implementar un programa de formación y fortalecimiento exclusivo para personas y organizaciones defensoras de DDHH, con enfoque diferencial y territorial	\$264.504.000	Capacitar en garantías al ejercicio de defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, con enfoque diferencial y territorial a 80 personas integrantes de organizaciones sociales, servidores y funcionarios públicos a través de 2 diplomados con Universidades con acreditación de alta calidad.	\$290.425.392	Capacitar en garantías al ejercicio de defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, con enfoque diferencial y territorial a 80 personas integrantes de organizaciones sociales, servidores y funcionarios públicos a través de 2 diplomados con Universidades con acreditación de alta calidad.
Implementar una estrategia de autocuidado y autoprotección dirigida a organizaciones y personas defensoras de DDHH	\$357.380.800	Desarrollar 2 jornadas de autocuidado y autoprotección dirigidos a organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos	\$118.584.000	Desarrollar 2 jornadas de autocuidado y autoprotección dirigidos a organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos
Implementar el plan estratégico de cultura de respeto y de garantías a la labor de defensa de los DDHH.	N/A	N/A	\$1.229.760.000	Desarrollar 32 espacios para la socialización como impulso a la implementación del plan estratégico de cultura de respeto y de garantías a la labor de defensa de los DDHH.
Implementar estrategia para fortalecer las capacidades de las personas y las organizaciones para gestionar y transformar conflictos interpersonales, colectivos y sociales en sus territorios.	N/A	N/A	\$1.229.760.000	Desarrollar 32 espacios para la socialización como impulso a la implementación de la estrategia para fortalecer las capacidades de las personas y las organizaciones para gestionar y transformar conflictos interpersonales, colectivos y sociales en sus territorios
Desarrollar iniciativa nacional de tolerancia y respeto a la diferencia dentro de la comunidad defensora de Derechos Humanos, con enfoque diferencial, de género y atendiendo la identidad sexual diversa.	N/A	N/A	\$1.229.760.000	Desarrollar 32 espacios para la socialización como impulso a la implementación de la iniciativa nacional de tolerancia y respeto a la diferencia dentro de la comunidad defensora de Derechos Humanos, con enfoque diferencial, de

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
				género y atendiendo la identidad sexual diversa
Realizar anualmente una Feria Nacional de Experiencias Exitosas en la defensa de los Derechos Humanos	\$233.576.824	Realizar una (1) feria de Experiencias Exitosas en la defensa de los Derechos Humanos	\$256.467.353	Realizar una (1) feria de Experiencias Exitosas en la defensa de los Derechos Humanos
Aplicar periódicamente la Encuesta de Caracterización de Organizaciones Sociales y Defensores que adelantan acciones en materia de Derechos Humanos y Paz, en los municipios de las Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los DDHH	\$150.000.000	Realizar 5 jornadas para la aplicación de la encuesta de caracterización de organizaciones sociales y defensores.	\$428.220.000	Realizar 13 jornadas para la aplicación de la encuesta de caracterización de organizaciones sociales y defensores.
Socializar el índice para prevención, protección, garantías de no repetición y la generación de condiciones favorables a la labor de defensa de los Derechos Humanos.	\$0	N/A	\$1.229.760.000	Realizar 32 espacios (1 jornadas por cada departamento) para socializar el índice para prevención, protección, garantías de no repetición y la generación de condiciones favorables a la labor de defensa de los Derechos Humanos.
Diseñar e implementar un plan estratégico de cultura de respeto y de garantías a la labor de defensa de los DDHH, que incluya la coordinación de espacios de participación de la ciudadanía nacional y territorial para el desarrollo de una campaña de reconocimiento a la labor de defensa de los Derechos Humanos, con enfoque de género y diferencial.	\$110.210.000	Diseñar un plan estratégico de cultura de respeto y de garantías a la labor de defensa de los Derechos Humanos.	\$0	N/A
Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer las capacidades de las personas y las organizaciones para gestionar y transformar conflictos interpersonales, colectivos y sociales en sus territorios.	\$110.210.000	Diseñar una estrategia para fortalecer las capacidades de las personas y las organizaciones para gestionar y transformar conflictos interpersonales, colectivos y sociales en sus territorios.	\$0	N/A
Desarrollar iniciativa nacional de tolerancia y respeto a la diferencia dentro de la comunidad defensora de Derechos Humanos, con enfoque diferencial, de género y atendiendo la identidad sexual diversa.	\$110.210.000	Diseñar iniciativa nacional de tolerancia y respeto a la diferencia dentro de la comunidad defensora de Derechos Humanos	\$0	N/A

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
	\$12.120.337.176		\$20.431.268.073	

3.1.3.9 FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL NACIONAL Y REGIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES TENDIENTES A ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LOS TERRITORIOS NACIONAL. (\$77.362.110.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3701-1000-40-53107A	\$74.000.000.000	\$ 77.362.110.000	\$ 3.362.110.000	4,54%
TOTAL	\$ 74.000.000.000	\$ 77.362.110.000	\$ 3.362.110.000	4,54%

BASE LEGAL

El diálogo es un ejercicio habitual en la democracia, así lo reconoce el artículo 1¹² y 2¹³ de la constitución política, de los cuales se desprende que la participación de la población en la vida política, social, económica y cultural del país busca afianzar la garantía de los principios y fines esenciales del Estado; pues posibilita la interacción, comunicación, consulta, deliberación y seguimiento por parte de la población frente a temas de interés común, políticas, planes o proyectos de las entidades públicas del orden territorial y nacional con el objeto de abordar conjuntamente los problemas e identificar soluciones.

En este sentido, la participación ciudadana además de ser un derecho fundamental, constituye un elemento primordial en la consolidación del Estado Social de Derecho y en el goce de otros derechos reconocidos en la legislación doméstica y en el derecho internacional¹⁴, como el derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, el derecho a la protesta

¹² ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

¹³ ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

¹⁴ Los cuales en concordancia con el artículo 93 constitucional hacen parte del Bloque de constitucionalidad, es decir hacen parte del cuerpo normativo de la constitución política colombiana de 1991. "Artículo 93 constitucional: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

pacífica, el derecho de libertad de reunión y asociación, entre otros que se ven robustecidos por la existencia y fortalecimiento de espacios que faciliten la deliberación de actores de la sociedad civil y entidades públicas respecto de sus intereses y percepciones alrededor de distintos asuntos de interés público en virtud de llegar a consensos democráticos y participativos frente a problemáticas importantes, que permiten además construir y mantener la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.

Así se establece en la Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” la cual, identifica el Diálogo social como un mecanismo democrático esencial para la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil; aunado a esto organizaciones internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, como la OIT, reconocen su importancia en el abordaje de diferencias y conflictividades culturales, étnicas, poblacionales desde el consenso, la deliberación y la no violencia; y en la identificación de buenas prácticas al interior de los gobiernos que permitan generar estabilidad en la interacción con la sociedad civil, fortaleciendo las bases del Estado.

Por su parte, el Diálogo social también da cuenta de las obligaciones de respeto, protección y garantía que ha adquirido el Estado respecto de los derechos de sus representados, para lo cual ha creado una estructura que permita atender las necesidades de Diálogo de la ciudadanía, orientada al servicio de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones¹⁵.

En este sentido, compromete por mandato legal, al Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, numeral 3 del Decreto 1152 de 2022¹⁶, fortalecer los procesos de diálogo social y concertación con las comunidades de su competencia, asistir en el relacionamiento con las comunidades étnicas, religiosas, organizaciones sociales; promover los derechos humanos, liderar los esfuerzos de diálogo social y articular en estos temas los esfuerzos necesarios con entidades del orden nacional y con los entes territoriales. Sin perjuicio de otras funciones establecidas en la ley¹⁷.

Es decir, compete a este Viceministerio, liderar, promover y atender las necesidades Diálogo social, pues el ordenamiento jurídico, como se ha mencionado en este acápite reconoce la capacidad del Diálogo social como herramienta para la superación y resolución de conflictividades, el cual debe estar orientado a garantizar la participación ciudadana, en condiciones de igualdad a fin de cumplir con las obligaciones en materia de garantía a los derechos humanos y con los fines del Estado Social de Derecho.

Además, las bases del plan de desarrollo 2022 – 2026, establecen dentro de sus ejes estructurales la Política de Diálogo Social y la creación del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida como mecanismos articulados e imprescindibles de fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Ello implica, fortalecer y reactivar los espacios de diálogo institucionales como el creado por el decreto 1130 de 2022, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Gestión de conflictos sociales y Diálogo Social (SINGESCO), que tiene por objeto orientar las acciones de las instituciones públicas nacionales y brindar recomendaciones a las entidades

¹⁵ Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia

¹⁶ Por el cual se modificó el artículo 11 del Decreto Ley 2893 de 2011

¹⁷ Artículo 62 de la Ley 489 de 1998, Decreto 1152 de 2022,

territoriales para la gestión pacífica de los conflictos sociales y la promoción del diálogo social. Este, a su vez, se ha venido articulando al Centro de Diálogo Social, Alertas Tempranas y Solución de Conflictos del Gobierno de Colombia (CEDISCO), el cual se consolidó como observatorio para el monitoreo, identificación y emisión de alertas tempranas de conflictividades, que ofrece atención preventiva a las mismas a través del diálogo y la generación de capacidades para su atención. En ambos espacios, el Ministerio del Interior participa de manera continua y activa con el propósito de contribuir a la articulación eficaz de un sistema de prevención y gestión de conflictos capaz de atender las diversas conflictividades existentes en el territorio nacional.

Entre tanto, el desarrollo de las 17 actividades propuestas en este proyecto se sustenta en las facultades otorgadas al Ministerio del Interior, señaladas especialmente en la Ley 1757 de 2015, que regula la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia. Esta ley establece que el Ministerio del Interior es la entidad encargada de liderar y coordinar la política pública de participación ciudadana, y que tiene como objetivo fomentar el diálogo social y la concertación entre los diferentes actores sociales. Asimismo, la Constitución Política de Colombia en su artículo 354, que establece que el Gobierno Nacional tiene la competencia para promover el diálogo social y la concertación, así como para tomar medidas para prevenir y solucionar conflictos.

Es de aclarar que la misión del Ministerio del Interior es “Fortalecer la Gobernabilidad local, la Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante la articulación permanente del Nivel Nacional con las Entidades Territoriales, Étnicas y las Poblaciones Vulnerables, Promoviendo el Respeto a los Derechos Humanos y la Adecuada Gestión de los Asuntos Nacionales en el Territorio”. Dentro de este contexto, el Viceministerio de Diálogo Social tiene entre sus funciones “fortalecer los procesos de diálogo social y concertación con las comunidades de su competencia”, por lo que muchas de sus acciones se sustentan en la Ley 1757 de 2015; en este sentido, se han establecido líneas de trabajo que fomenten la participación ciudadana y la garantía de sus derechos desde los diferentes enfoques y escenarios que van correlacionados con la misionalidad del Ministerio, tales como garantizar la participación a la protesta y los derechos humanos (protocolo) enmarcadas en la protesta social pacífica en el territorio nacional. De igual manera y en otra línea de trabajo, se plantea por este gobierno, mediante el presente proyecto, la elaboración e implementación de una política de diálogo social que trasciende a todos los escenarios de diálogo adelantados por el gobierno con las entidades y la comunidad, un mecanismo más amplio que no limita los procesos a un entorno en particular.

La Resolución 1956 de 2020 que establece los lineamientos para la presentación y evaluación de proyectos para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, incluyendo la posibilidad de implementar iniciativas presentadas por organizaciones sociales y comunitarias. El Decreto 4912 de 2011, que reglamenta la creación y funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo en Colombia. Estos consejos tienen como objetivo promover la participación ciudadana en la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo local, y el Ministerio del Interior tiene la facultad de cofinanciar estos proyectos. La Resolución 0893 de 2017, que establece los lineamientos para la presentación y evaluación de proyectos para la prevención y atención del riesgo en Colombia. Esta resolución establece que el Ministerio del Interior puede cofinanciar proyectos presentados por organizaciones comunitarias y sociales para la prevención y atención de riesgos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El diálogo social es una de las funciones principales del Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. Según lo establecido en el Decreto 1152 de 2022, el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos en este sentido las políticas públicas del ministerio se derivan del conocimiento de las necesidades de la población a través del necesario diálogo social que existe entre este Viceministerio, las comunidades y delegados de otras entidades estatales con competencia para la resolución de las necesidades que la población demanda. De este modo, el Viceministerio funciona como enlace fundamental entre las comunidades y todas las demás instituciones del estado (entes territoriales, ministerios, agencias, etc), en el año 2023 se formuló un proyecto de inversión el cual se presentó ante el DNP y el cual fue viabilizado para la vigencia 2024 “Fortalecimiento del Diálogo social nacional y regional mediante el desarrollo de acciones tendientes a atender las problemáticas sociales en los territorios” registrado bajo el código BPIN 2 023000000367” con una asignación presupuestal de \$74.000.000.000, este recurso está dirigido a la elaboración e implementación de la Política Pública para el Dialogo Social, la metodología de dialogo, asesoría técnica a entidades y comunidades, Iniciativas Comunitarias, entre otras actividades que permiten afianzar la misionalidad del Viceministerio y el fortalecimiento del dialogo social en los territorios.

En este sentido se hace necesario contar con los recursos proyectados para la vigencia 2025 los cuales permitirán la sostenibilidad del proyecto de inversión y consolidar la política de publica con las entidades del estatales y las comunidades en los territorios, fortaleciendo con especial énfasis la asistencia técnica, la estratégica de comunicación, los espacios participativos y las iniciativas comunitarias.

Para la estimación de los costos se utilizan diferentes fuentes de información; en el caso de la mano de obra calificada, se toma como referencia la Resolución 003 de enero 3 de 2024(tabla de honorarios y Prestación de Servicios) para establecer el monto de los honorarios, de igual manera mediante estudio de mercado del Contrato de Operador logístico del ministerio (Contrato 1077- 2023) y , se pueden establecer los costos logísticos de la asistencia técnica a comunidades y entidades al igual que los costos de los eventos e impresiones; el valor estimado de los tiquetes aéreos se tomó como referencia el contrato vigente de tiquetes aéreos del Ministerio del Interior 1129 de 2023, los recursos que se destinan a banco de proyectos equivalen a \$45.600.000.000 este valor se determinó por promedio de inversión del banco de proyectos de la vigencia 2023 (resolución 0665 de 26 de Abril de 2023).

De igual manera en documento adjunto se anexa el análisis de costos para la vigencia.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR VIGENCIA 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Elaborar documento de análisis: Diagnóstico nacional de los escenarios de Dialogo social	\$ 312.000.000	1	\$ 0	0

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Crear política pública de dialogo social (PPDS)	\$ 132.000.000	1	\$ 0	0
Impresión y distribución material pedagógico	\$ 300.000.000	10000	\$ 0	0
Socializar la política pública de diálogo social y otros documentos	\$ 2.400.000.000	1	\$ 0	0
Diseñar la guía metodológica de diálogo social.	\$ 132.000.000	1	\$ 0	0
Imprimir la guía metodológica de diálogo social	\$ 3.000.000.000	100000	\$ 0	0
Implementar curso virtual de diálogo social	\$ 235.000.000	1	\$ 0	0
Diseñar cuña publicitaria divulgar la guía metodológica de diálogo social	\$ 500.000.000	1000	\$ 575.000.000	1000
Brindar acompañamiento técnico a las comunidades y funcionarios del Estado para la implementación del diálogo social	\$ 5.535.400.000	2600	\$ 6.365.710.000	2600
Genera espacios de acompañamiento internacional en actividades y procesos de diálogo social	\$ 300.000.000	1	\$ 345.000.000	1
Llevar a cabo el desarrollo de espacios participativa con las comunidades en materia diálogo social	\$ 15.000.000.000	37500	\$ 17.250.000.000	37500
Implementar iniciativas comunitarias para el fortalecimiento Diálogo Social	\$ 45.600.000.000	304	\$ 52.440.000.000	304
Implementar una plataforma para el cargue de información de los compromisos de los escenarios de Diálogo Social	\$ 457.600.000	1	\$ 276.000.000	1
Construir una estrategia comunicacional y pedagógica para las comunidades y las entidades del Estado sobre los compromisos, avances y logros del Diálogo Social	\$ 96.000.000	1	\$ 110.400.000	1

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
TOTAL	\$ 74.000.000.000		\$77.362.110.000	

3.1.3.10 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS COMO RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN NACIONAL. (\$6.347.414.705)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIFERENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
C-3701-1000-42	\$4.610.958.546	\$6.347.414.705	\$1.736.456.159	38%

BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia.
- Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: 2. Seguridad humana y justicia social. 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar. 13. Justicia transicional para la reconciliación sustentada en la verdad, justicia, reparación y no repetición. **a. Fortalecimiento de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas**
- Ley 1408 de 2010. Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación
- Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno
- Decreto 303 de 2015. Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010
- Decreto 1066 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
- Ley 133 de 1994. Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.
- Decreto 2340 de 2015. Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
- Directiva 6 de la Procuraduría General de la Nación. Instrucciones a los funcionarios del Ministerio Público sobre el seguimiento a los procedimientos para garantizar y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
- Varios autos cuadernillos territoriales de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos, que tiene características especiales. Uno de los elementos que caracteriza este tipo de violación es que se trata de una violación múltiple y compleja de derechos, es un ejemplo de violación continua de

derechos humanos. (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 6)

Es obligación del Estado respetar y promover los derechos de las personas bajo su jurisdicción, como garantías jurídicas universales que buscan asegurar la dignidad humana y la libertad en la sociedad. Por ello, es necesario articular todos los programas, proyectos, planes y estrategias del Gobierno, con una política de derechos humanos con vocación de Estado, basada en la igualdad y en los principios contenidos en la Constitución Política, pues el ser humano es el eje alrededor del cual se concibe el desarrollo y por tanto las actividades previstas para el mismo están orientadas a asegurar que las personas puedan gozar de sus derechos de manera sostenible y progresiva.

Una de las acciones que apoyan la promoción y respeto de los derechos humanos, pero en especial las garantías de no repetición, es la búsqueda de las personas desaparecidas, las cuales tienen dos líneas internacionalmente reconocidas; i) búsqueda de personas vivas; y ii) la búsqueda de los cuerpos o restos humanos, cuando se presume que, por el tiempo transcurrido o la circunstancia de la desaparición, la persona puede haber fallecido.

En su informe la Comisión de la Verdad señala que la desaparición forzada es un crimen que busca eliminar cualquier prueba de que se cometió, que deja al círculo cercano de las víctimas sin información alguna de su ser querido y que se basa en el ocultamiento del paradero de la persona, el miedo y la zozobra. Es una violación de derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario con profundo impacto psicológico en aquellos que buscan sin encontrar a sus seres queridos.

Según la integración final de datos realizada por el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG afirma que entre 1985 y 2016 existen alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia. Las dificultades en la denuncia y acceso a la justicia implican que el universo de víctimas sea mucho más amplio de lo que se registra. Por medio de modelos estadísticos, que analizan el subregistro potencial, el proyecto permite estimar que el universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia puede llegar a ser alrededor de las 210 mil víctimas.

Por su parte la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas- UBPD, establece como 104.537 el universo de personas dadas por desaparecidas.

Cuando por las circunstancias en que se produce la desaparición o por los tiempos transcurridos y se presume que la persona buscada ha fallecido, los lugares de inhumación tradicional como los cementerios cobran transcendencia, por cuanto se constituyen en el eje central de la búsqueda.

El bien de relevancia municipal – cementerio –, en consideración a los diversos actores nacionales, territoriales y particulares que en él tienen incidencia, puede afirmarse posee carácter multidimensional, pero en su condición de ser el depositario y custodio de los cuerpos o restos humanos de Personas No Identificadas o inadecuadamente denominadas “NN”, cobra transcendencia en el marco de los Derechos Humanos, por constituirse en parte esencial de los procesos de búsqueda y localización de estas personas. Por ello el promover acciones dirigidas a su adecuada gestión que contribuyan a la adecuada conservación y custodia de estos lugares de inhumación, es eje central de los procesos de recuperación de restablecimiento de derechos de las personas desaparecidas y de sus familias.

Cuál es el número cierto de cementerios en Colombia, no es un dato de fácil determinación si tenemos en consideración que, debido a los problemas de orden público, y al miedo de sus pobladores de acercarse a los cascos urbanos hace que surjan en las veredas y corregimientos camposantos. Cuantos, y cuáles de ellos tienen en sus terrenos inhumados cuerpos o restos humanos de personas no identificadas, es un dato de mayor dificultad de consolidación. Si se tiene como base la divipola, cuyos datos a corte noviembre de 2022 indican que en Colombia hay 7716 áreas entre municipios y centros poblados, este podría indicar la línea base de cementerios en el país.

Como parte de los aportes del Ministerio del Interior al proceso de búsqueda de persona desaparecidas en Colombia, fue el liderazgo en el proceso de generación del Decreto 303 de 2015, reglamentario de la Ley 1408 de 2010, por medio del cual se implementan un conjunto de medidas que contribuyan a la búsqueda, localización, identificación, inhumación o entierro y homenaje de las víctimas del delito de desaparición forzada en Colombia, tiene dentro de las temáticas que reglamenta, los lineamientos básicos para la adecuada conservación y custodia de los cuerpos o restos humanos de personas no identificadas (NN) e identificadas no reclamadas inhumadas o enterradas en cementerios, cuya verificación de cumplimiento esta cargo de las Secretarías de Gobierno (Título V).

En el marco del Decreto 1066 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior en su artículo 2.1.1.1., señala que el “objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente del sector administrativo del interior expedida por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes de este sector”, el Decreto 303 de 2015 una de las normas que constituyen esta compilación.

Con base en esta normatividad, la Dirección de Derechos Humanos presentó proyecto de inversión dirigido al fortalecimiento de la gestión de los cementerios. Como parte de los avances del proceso de fortalecimiento de la gestión de los cementerios que tienen en sus terrenos inhumados cuerpos o restos humanos de personas no identificadas, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Humanos ha visitado 672 cementerios, ubicados en 578 municipios, 32 departamentos, lugares en los cuales ha ubicado un total de 31.328 registros encontrados de personas inhumadas en condición de No Identificadas o Identificadas No Reclamadas en los cementerios diagnosticados, de los cuales 27.141 corresponden a personas no identificadas (NN) y 4.187 a personas identificadas no reclamadas, información que es indicativa, ya que la confirmación de estos datos es competencia de las autoridades judiciales a través de los procesos de intervención.

Por ello, el generar acciones tendientes a la contribución de la ubicación de los cuerpos o restos humanos de las personas no identificadas o identificadas no reclamadas, a través del diagnóstico multidimensional y mapeo de los cementerios donde se encuentran inhumados, así como el fortalecer técnica y administrativamente a las entidades del orden nacional y territorial en una mejor gestión y tratamiento institucional de estas personas, independientemente de los tiempos que el proceso de identificación conlleve, contribuyen a la promoción de los derechos humanos, a las garantías de no repetición, pero también al impulso de los procesos de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de desaparición y los colombianos en general.

Es de recordar que la entrega en condiciones de dignidad de los cuerpos o restos humanos a los familiares de las víctimas de desaparición se constituye en la medida máxima de satisfacción, entrega que es generadora de acciones de construcción de paz, restitución de derechos,

restablecimiento de la dignidad, restitución de identidad, derecho a la verdad y garantías de no repetición.

En este sentido, el proyecto busca incrementar generar acciones dirigidas a fortalecer la gestión de los cementerios donde se encuentran inhumados cuerpos o restos humanos de personas no identificadas como acciones de apoyo al proceso de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia a través de la generación de documentos diagnósticos multidimensionales de los cementerios visitados; fortalecer técnicamente las administraciones de cementerios y administraciones locales en la gestión y adecuada conservación y custodia de los cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas; así como generar en cementerios priorizados espacios destinados a su inhumación los cuales a su vez se constituyen en espacios de homenaje y memoria, a través de las siguientes acciones:

- Elaborar **100 diagnósticos multidimensionales de cementerios que tengan en sus terrenos cuerpos o restos humanos de personas no identificadas o identificadas no reclamadas**, con base en la información recopilada in situ y las diversas fuentes (documentales y entrevistas estructuradas) consultadas.
- Elaborar **80 mapeos técnicos de cementerios priorizados previamente diagnosticados** que incluyan la generación de un ortofotomosaico, imágenes 360° de los puntos de interés y fichas de ubicación con coordenadas tomadas con estación total.
- Desarrollo de **5 encuentros de administraciones de cementerios y sepultureros** dirigidos a socializar la normatividad y buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas, los cuales se realizarán en sinergia con las siguientes entidades, las cuales a su vez serán ponentes: Ministerio de Salud, Fiscalía General de la Nación, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Procuraduría General de la Nación, y el SENA, quienes en el marco de la mesa exequial poseen una oferta educativa sobre el tema.
- Desarrollo de **32 jornadas técnicas dirigidas a administraciones locales** donde se espera socializar la normatividad que les indica el rol que tienen en los procesos de seguimiento a la implementación de buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas inhumadas en los cementerios de sus territorios, sino además incidir en la incorporación de la temática en sus instrumentos de planeación local; esta actividad se realizará en sinergia con las siguientes entidades, las cuales a su vez serán ponentes: Ministerio de Salud, Fiscalía General de la Nación, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Procuraduría General de la Nación, y el SENA, quienes en el marco de la mesa exequial poseen una oferta educativa sobre el tema.
- Desarrollo de una acción de homenaje en fechas simbólicas al tema de la desaparición forzada en Colombia, (última semana de mayo y 30 de agosto).
- **Apoyar seis (6) entidades territoriales priorizadas, para la adecuación de un espacio destinado a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en cementerios, el cual se convertirá en espacio de homenaje y memoria para las víctimas de desaparición forzada.**

Es de anotar que la información que genera el proyecto es parte de los insumos a tener en consideración en el proceso de implementación del Plan Nacional de Búsqueda generado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como información de aporte al desarrollo de varios cuadernillos dirigidos a proteger o generar medidas cautelares de lugares de inhumación o entierro, incluidos cementerios, que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz. Adicionalmente es desarrollo de la ley de víctimas por lo cual tiene **trazador presupuestal VICTIMAS**.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Recolectar información a través de mesas de trabajo, con los actores relevantes en los cementerios	\$1.329.317.869	Elaboración de 100 documentos base de diagnóstico de cementerios priorizados que tienen en sus terrenos inhumados cuerpos o restos humanos de personas no identificadas (NN) y/o reclamadas	\$1.535.952.455	Elaboración de 100 documentos base de diagnóstico de cementerios priorizados que tienen en sus terrenos inhumados cuerpos o restos humanos de personas no identificadas (NN) y/o reclamadas
Analizar y sistematizar el diagnóstico de los cementerios, con énfasis en las condiciones de inhumación de personas no identificadas e identificadas no reclamadas.	\$463.000.000	Generar 100 documentos de diagnóstico multidimensional de cementerios que tengan en sus terrenos cuerpos o restos humanos de personas no identificadas o reclamadas	\$555.600.000	Generar 100 documentos de diagnóstico multidimensional de cementerios que tengan en sus terrenos cuerpos o restos humanos de personas no identificadas o reclamadas
Realizar mapeo de los cementerios con énfasis en la ubicación de personas no identificadas e identificadas no reclamadas.	\$0	N/A	\$1.280.000.000	Elaborar 80 mapeos técnicos de cementerios previamente diagnosticados con énfasis en la ubicación de personas no identificadas e identificadas no reclamadas que incluyan ortofotomosaicos, fotografía 360° y fichas técnicas de localización de puntos de interés.
Capacitar administraciones de cementerios en derechos humanos y buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas.	\$500.000.000	Desarrollo de 5 encuentros dirigidos a capacitar administraciones de cementerios, personal de apoyo administrativo y sus sepultureros	\$500.000.000	Desarrollo de 5 encuentros dirigidos a capacitar administraciones de cementerios, personal de apoyo administrativo y sus sepultureros
Realizar asistencias técnicas a administraciones locales en derechos humanos y buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas.	\$50.000.000	Desarrollo de 10 encuentros territoriales con administraciones locales, especialmente secretarios de gobierno departamental y municipal, a fin de incorporar la línea de fortalecimiento a la gestión de los cementerios como acciones de apoyo al proceso de búsqueda de personas desaparecidas en	\$176.000.000	Desarrollo de 32 encuentros territoriales con administraciones locales, especialmente secretarios de gobierno departamental y municipal, a fin de incorporar la línea de fortalecimiento a la gestión de los cementerios como acciones de apoyo al proceso de búsqueda de personas desaparecidas en los instrumentos de

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
		los instrumentos de planeación local.		planeación local e impulsar la generación de planes de acción entre las administraciones locales y las administraciones de cementerios.
Realizar acciones de homenaje a las víctimas de desaparición y sus familias en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos.	\$40.000.000	Realización de acciones de homenaje en fechas simbólicas del tema de desaparición forzada (última semana de mayo y 30 de agosto) como iluminación del edificio Colpatría, Movistar Arena y mensajes por medios de comunicación masiva.	\$42.000.000	Realización de acciones de homenaje en fechas simbólicas del tema de desaparición forzada (última semana de mayo y 30 de agosto) como iluminación del edificio Colpatría, Movistar Arena y mensajes por medios de comunicación masiva.
Realizar seguimiento al apoyo a las entidades territoriales en la adecuación de espacios destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en cementerios	\$157.862.250	Seguimiento al proceso de adecuación de 6 espacios destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en cementerios priorizados	\$157.862.250	Seguimiento al proceso de adecuación de 6 espacios destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en cementerios priorizados
Apoyar a las entidades territoriales en la adecuación de espacios destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en cementerios.	\$2.070.778.427	Adecuación de tres (6) espacios al interior de cementerios priorizados destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas recuperadas en procesos de intervención. El valor unitario sería la suma máxima por aportar para la construcción de las bóvedas u osarios.	\$2.100.000.000	Adecuación de tres (6) espacios al interior de cementerios priorizados destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas recuperadas en procesos de intervención. El valor unitario sería la suma máxima por aportar para la construcción de las bóvedas u osarios.
	\$4.610.958.546		\$6.347.414.705	

Los costeos de las actividades tienen como base: i) para el caso de prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para ese tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; ii) para las jornadas de trabajo, talleres, mesas y espacios los costos se basan en los históricos de operación logística que incluyen participación de sociedad civil, los cuales incluyen gastos relacionados con eventos, alimentación, hospedaje, tiquetes y apoyo de transporte, entre otras, con ampliación de la cobertura territorial; iii) para los mapeos técnicos se basa en los valores históricos del programa con incremento del IPC 2023; y iv) para las iniciativas cofinanciadas, se basa en los valores históricos del programa con incremento del número de iniciativas a fin de ampliar la cobertura territorial que se basa en los diferentes cuadernillos emitidos por la JEP con órdenes relacionadas con realización o actualización de diagnósticos multidimensionales.

3.1.3.11 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES A NIVEL NACIONAL. (\$50.000.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

PRESUPUESTO (pesos)

RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento porcentual necesidad 2024 en relación con 2025
A-03-03-01-032	\$ 50.000.000.000	\$ 50.000.000.000	\$0	0%
TOTAL	\$ 50.000.000.000	\$ 50.000.000.000	\$0	0%

NOTA: En el valor del presupuesto 2025 hace parte del recurso aprobado por MINHACIENDA por vigencias futuras excepcionales.

BASE LEGAL

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante el documento CONPES 4064 de 2021, declaró de importancia estratégica el proyecto de inversión “Fortalecimiento de los sistemas integrados de emergencia y seguridad SIES a nivel nacional” para la adquisición de nuevas tecnologías en apoyo a la actividad policial, la ampliación de la cobertura de los sistemas existentes y el fortalecimiento de las capacidades funcionales, de las entidades del orden nacional y territorial, con el fin de garantizar el funcionamiento, sostenimiento y renovación de dichas herramientas tecnológicas.

Así mismo, el Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicación 20214320010006 del 13 de diciembre de 2021 emitió concepto favorable a la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el presupuesto de gastos de inversión del Ministerio del Interior. En este sentido, mediante radicado 2-2021-068593 del 27 de diciembre de 2021, se informó que en la sesión no presencial del día 24 de diciembre de 2021, el Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS aprobó el cupo de vigencias futuras excepcionales solicitado para los años 2022 a 2027, para la ejecución de las actividades de fortalecimiento de los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad SIES en desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, por un valor de \$303.008 millones de pesos

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Para la vigencia 2023, con el objetivo de garantizar la oportunidad y el acceso a los recursos por parte de las entidades del orden nacional y territorial en cada una de las líneas de proyectos contempladas por el FONSECON, se hace necesario solicitar modificación del recurso autorizado para la ejecución del documento CONPES 4064 de 2021 y de esta manera ejecutar los recursos en otro tipo de proyectos que impacte la seguridad nacional.

La determinación anterior no solamente responde a las nuevas realidades en materia de convivencia y seguridad ciudadana sino, a la materialización de la ley 418 de 1997 prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de

2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1941 de 2018 y 2272 de 2022 en los relativo a los artículos 122 y 119, respectivamente, que disponen la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON, al igual que los fondos territoriales desseguridad.

Finalmente, es importante mencionar que las entidades territoriales han radicado durante la vigencia 2023 a la fecha 44 proyectos para la seguridad a nivel tecnológico por valor de \$453.000 millones.

Con el fortalecimiento de los SIES, se adquieren nuevas tecnologías para el apoyo a la actividad policial, la ampliación de la cobertura de los sistemas existentes y el fortalecimiento de las capacidades funcionales de las Entidades del Orden Nacional y Territorial para garantizar el funcionamiento, sostenimiento y renovación de dichas herramientas tecnológicas.

Es importante el fortalecimiento de los subsistemas SIES CCTV, y la infraestructura de comunicaciones en algunas zonas priorizadas en el país, con el fin de mejorar la articulación en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas que se pondrán a disposición de la Policía Nacional para la gestión y la coordinación del servicio de policía. Esta actualización permite la flexibilidad en las comunicaciones en cuanto a cobertura, repuestos, inhibición de radios y administración del sistema, radios, repetidores y sitios de repetición, modernizando las capacidades y elementos de comunicación que soportan las comunicaciones a nivel nacional para el servicio de policía. De esta manera se facilita el control y la reacción inmediata en las patrullas de los cuadrantes.

Con lo anterior se logrará prevenir el delito de manera focalizada contribuyendo en la prestación de un servicio con perspectiva aérea amplia y aportando elementos esenciales para salvaguardar vidas humanas y mejorar en tiempos de respuesta ante cualquier tipo de requerimiento. Además, se focalizará el delito a través de zonas de incidencia, horas y modalidades en total integración con las patrullas de los cuadrantes, brindando información para la toma de decisiones de manera contundente y eficaz.

Los recursos solicitados son de gran importancia para el cumplimiento de las metas y las necesidades planteadas por las entidades territoriales, para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la reincidencia de los victimarios, y dificultar la comisión de delitos, en especial de alto impacto.
- Mejorar la prevención y respuesta de la policía, así como su capacidad disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación de redes criminales.
- Incrementar la judicialización y la condena de los responsables de delito, la orientación y atención a víctimas de delitos graves, y las resocializaciones viables.
- Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la ley que favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las diferencias y los conflictos.
- Concienciar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo dentro de la comunidad.
- Lograr decisiones de política pública a partir de un mejor sistema nacional de información del delito, el estudio y evaluación de las políticas sobre el tema.
- Facilitar la labor de las autoridades en las luchas contra el delito por medio de la adecuación del régimen penal y las disposiciones sobre convivencia ciudadana.

META Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/ LOGRO A ALCANZAR		NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Implementar cámaras de seguridad ciudadana en sistemas de CCTV. Fortalecimiento de los subsistemas SIES CCTV, y la infraestructura de comunicaciones.	Atender las necesidades presentadas por las Entidades Territoriales a través de los proyectos radicados para CCTV.	\$48.500.000.000	17	\$ 48.500.000.000	17
Ampliar sistemas 123.	Proporcionar estrategias para la ampliación de los sistemas 123, solicitados por las entidades territoriales y la policía Nacional.	\$ 0	0	\$0	0
Entregar CIEPS ó centros de control en funcionamiento.	Optimizar los centros de control de la policía nacional.	\$ 0	0	\$0	0
Realizar seguimiento a proyectos de CCTV y elaborar informes.	Ejecución de los recursos destinados para gastos operativos, logísticos y de administración	\$1.500.000.000	8	\$1.500.000.000	8
TOTAL		\$50.000.000.000	25	\$50.000.000.000	25

JUSTIFICACIÓN RECURSOS REQUERIDOS PARA LA VIGENCIA 2025

Teniendo en cuenta la demanda de proyectos SIES por parte de las Entidades Territoriales y atendiendo las líneas estratégicas; como el fortalecimiento de la institucionalidad civil para la seguridad y convivencia ciudadana "... el Ministerio del Interior fomentará el uso de los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES) y fortalecerá las capacidades de gestión en las administraciones locales, con el fin de asumir los costos de mantenimiento y operación de las Cámaras de Vigilancia, en el marco del Componente CCTV. De forma coordinada entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales se establecerán un conjunto de iniciativas para prevenir la comisión de delitos en zonas de miedo y tolerancia.

Se proyecta un crecimiento en solicitud por parte de las Entidades Territoriales de proyectos SIES, teniendo en cuenta los resultados en los municipios que se ha implementado el sistema, por lo anterior se requiere recurso por \$50.000 millones, con el fin de continuar apoyando a las

entidades territoriales y a la Policía Nacional en la prevención del delito y a la actualización y ampliación de los sistemas que en la actualidad vienen funcionando. El anterior cálculo se realiza teniendo cuenta el valor promedio de los sistemas integrados, en los que se realiza un estudio de mercado con las condiciones del proyecto y que incluye las siguientes actividades: contratación estudios y diseños, ejecución estudios y diseños, implementación del Sistema, y ejecución de implementación del sistema, de acuerdo con las necesidades planteadas por las diferentes entidades territoriales y las estadísticas de la Policía Nacional en materia de seguridad.

PROYECTO DE SEGURIDAD – CAMARAS:

Con estos proyectos se busca implementar el sistema integrado de emergencia y seguridad con el fin de incrementar la percepción de seguridad en los municipios, mediante la puesta en funcionamiento de cámaras de video vigilancia que contribuyan a la prevención, reacción y atención de hechos en materia de seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios, emergencias, desastres y eventos masivos en el territorio para la correcta toma de decisiones por parte de los responsables del tratamiento de la seguridad y la convivencia.

Igualmente, disminuir las estadísticas de criminalidad en el territorio nacional, a través del fortalecimiento de la plataforma de atención de emergencias SIES CCTV/123, permitiendo la integración de video vigilancia, comunicaciones y cartografía, en una única herramienta que permita mejorar la atención de las emergencias y así mismo mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Fortalecer las capacidades operacionales de la policía en el territorio, para efectos de mejorar la respuesta institucional, ante el flagelo de la delincuencia, mediante la guía de un sistema de cuadrantes ante la ocurrencia de un hecho delictivo que sea observado por las cámaras, garantizando con esto la presencia oportuna de la Policía Nacional, logrando con esto promover el cumplimiento de las normas, fomentar espacios seguros y confiables entre sus pobladores, generar un ambiente de confianza entre la institucionalidad y los pobladores del municipio.

Objetivos específicos:

- ✓ Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la reincidencia de los victimarios, y dificultar la comisión de delitos, en especial de alto impacto.
- ✓ Mejorar la prevención y respuesta de la Policía Nacional, así como su capacidad disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación de redes criminales.
- ✓ Incrementar la judicialización y la condena de los responsables de delito, la orientación y atención a víctimas de delitos graves, y las resocializaciones viables.
- ✓ Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la ley que favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las diferencias y los conflictos.
- ✓ Concienciar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo dentro de la comunidad.
- ✓ Lograr decisiones de política pública a partir de un mejor sistema nacional de información del delito, el estudio y evaluación de las políticas sobre el tema.
- ✓ Facilitar la labor de las autoridades en las luchas contra el delito por medio de la adecuación del régimen penal y las disposiciones sobre convivencia ciudadana.

Con este tipo de proyecto se potenciará los sistemas de seguridad en tres campos, Infraestructura e instalaciones, software y hardware, esto permitirá generar prevención creando zonas seguras y brindará mayor rapidez y eficiencia en la prevención y atención policial, como consecuencia se incrementará la atención oportuna y efectiva. Además, se dispondrá de una infraestructura tecnológica que permita la identificación y judicialización de hechos delictivos

por medio virtual, el cual lo permite la video vigilancia y atendiendo oportunamente los casos de emergencia de la ciudad.

Adicionalmente, se contara con unas adecuadas instalaciones y componentes tecnológicos de estos sistemas, que sumado al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes Permite la atención a todos los eventos de emergencias policiales y de desastres de manera coordinada; la ampliación y fortalecimiento del sistema en mención, permitirá mejorar la capacidad operativa y evaluar el impacto del mismo en factores como la reducción de las tasas de criminalidad, la efectividad de la atención, identificación de la demanda y mejoramiento de la seguridad y por ende el bienestar social.

Otros beneficios que se buscan con estos proyectos son los siguientes:

- ✓ Preservar la tranquilidad, convivencia y seguridad ciudadana.
- ✓ Reactivar la inversión de capital en la industria a través del mejoramiento de la seguridad en la ciudad.
- ✓ Incrementar la presencia policial con mejores medios logísticos y operativos.
- ✓ Dotar de instalaciones y puestos de trabajo a los operadores de estos componentes.
- ✓ Disminuir los altos índices delincuenciales.
- ✓ Incrementar los resultados policiales en el área urbana.
- ✓ Reducir la tasa de homicidios.
- ✓ Monitorear las zonas críticas de la ciudad en todas las manifestaciones criminales.
- ✓ Mejorar la capacidad operativa y de reacción para el control y reducción del delito.
- ✓ Incrementar la judicialización de los delitos

En los últimos años se ha incrementado el número de atracos en las calles, negocios y robos en viviendas, impidiendo que los barrios sean espacios de tranquilidad y convivencia, mostrando así incremento en la inseguridad y disminución de los ingresos económicos entre los comerciantes que a diario observan como las calles se van convirtiendo en focos de delincuencia, ilegalidad, drogas y caos, debido a que la autoridad policial no cuenta con un sistema robusto y eficiente, que permita a la autoridad policial actuar en tiempo real y de manera eficiente atender casos delictivos y realizar actividades preventivas.

3.1.3.12 FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. (\$21.100.445.201)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento % Necesidad 2024 en Relación con 2025
C-3702-1000-13	\$77.031.226.736	\$ 21.100.445.201	-\$55.930.781.535	-73%
TOTAL	\$77.031.226.737	\$ 21.100.445.201	-\$55.930.781.535	-73%

NOTA: En el valor del presupuesto 2025 hace parte del recurso aprobado por MINHACIENDA por vigencias futuras excepcionales – CONPES 4097 de 2022.

BASE LEGAL

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante el documento CONPES 4097 de 2022, declaró de importancia estratégica el proyecto de inversión “Fortalecimiento a las Entidades Territoriales a través de la financiación de infraestructura para La Seguridad y Convivencia Ciudadana a nivel Nacional” con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en Colombia a través del robustecimiento y modernización de la infraestructura para la prestación del servicio de policía.

Así mismo, el Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS aprobó el cupo de vigencias futuras excepcionales solicitado para los años 2023 a 2027, para la ejecución de las actividades de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales a través de la financiación de infraestructura para La Seguridad y Convivencia Ciudadana a nivel Nacional, por un valor de \$499.668 millones de pesos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Ministerio del Interior, con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, ejecuta el proyecto de inversión con código BPIN 2022011000002 “Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana a nivel Nacional”, que inicialmente programó los siguientes componentes:

Componente	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Áreas construidas y espacios físicos insuficientes	60.552.803.433	97.466.665.051	109.224.013.266	83.827.337.225	29.260.255.912	380.331.074.888

Componente	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Mitigar las afectaciones por condiciones naturales y antrópicas de las instalaciones físicas existentes.	32.859.538.467	38.160.333.061	23.700.197.689	18.510.427.380	6.106.542.326	119.337.038.923
Total general	93.412.341.901	135.626.998.113	132.924.210.955	102.337.764.605	35.366.798.238	499.668.113.811

A través del documento CONPES se identificaron 81 infraestructuras de la Policía Nacional (subestaciones, estaciones, distritos, comandos, Centros de Estándares Policiales, Centros de Validación y Entrenamiento y el edificio administrativo y operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) que por sus condiciones de antigüedad de infraestructura (vetustez), afectación por fenómenos naturales y condiciones climáticas y siniestros o afectaciones por acciones ofensivas requerían intervención.

El valor total de los 81 proyectos, asciende a \$980.252 millones de los cuáles el FONSECON hubiese aportado \$843.258 millones, sin embargo, debido al límite de recursos establecidos por el documento CONPES para el compromiso de vigencias futuras, fue necesario priorizar la intervención de 52 infraestructuras a través de las dos estrategias del documento, así:

En desarrollo del proyecto, el Comité de Contratación del Ministerio del Interior, mediante actas No. 14 del 04 de agosto del 2022 y No. 15 del 05 de agosto del 2022, aprobó el compromiso de recursos para 22 proyectos de los de los 52 priorizados por el documento CONPES, que contaban con el cumplimiento de requisitos del grupo de viabilidad.

Durante la finalización del año 2022, solamente 19 proyectos de los aprobados por el comité de contratación dieron cumplimiento a la totalidad de requisitos técnicos y jurídicos, suscribiendo los convenios correspondientes, en virtud de los cuales se solicitó las vigencias futuras para su ejecución, estos recursos quedaron comprometidos en cada una de las vigencias como se describe a continuación, de acuerdo con la priorización establecido en el documento CONPES:

Componentes	REC 2023	REC 2024	REC 2025	REC 2026	REC 2027	Total
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

Áreas construidas y espacios físicos insuficientes	16.301.685.793	26.487.090.849	15.770.824.261	14.825.390.632	7.235.924.929	80.620.916.464
Mitigar las afectaciones por condiciones Naturales y Antropológicas de las instalaciones físicas existentes.	24.025.702.133	30.544.135.887	5.329.620.939	2.377.625.630		62.277.084.590
Total general	40.327.387.926	57.031.226.736	21.100.445.201	17.203.016.263	7.235.924.929	142.898.001.054

En cuanto, al FONSECON es relevante precisar lo siguiente:

De esta manera y con el objetivo de garantizar la oportunidad y el acceso a los recursos por parte de las entidades del orden nacional y territorial, en cada una de las líneas de proyectos contempladas por el FONSECON, se requerirá realizar modificaciones entre las diferentes líneas, lo que implica frente al Presupuesto General de la Nación solicitar traslados presupuestales.

Por lo anteriormente expuesto, se realizó reunión virtual el 1 de marzo de 2023, entre los equipos técnicos del Departamento Nacional de Planeación -DNP y el Ministerio del Interior, como producto de esta reunión se radicó concepto al DNP con el fin de establecer la ruta a seguir en la modificación de las metas ajustada a los nuevos recursos y de igual manera la realización del trámite de traslado de recursos del proyecto en mención.

Finalmente, y de acuerdo con lo anterior, se hace necesario contar con el recurso solicitado con el fin de continuar con la ejecución de los 19 proyectos aprobados, los cuales se encuentra en ejecución con el siguiente comportamiento en cada una de las vigencias:

MUNICIPIO	VR. TOTAL PROYECTO	REC FONSECON – CONPES	REC ENTE TERRITORIAL	REC 2023	REC 2024	REC 2025	REC 2026	REC 2027	TOTAL REC FONSECON – CONPES
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	\$ 45.224.530.807	\$ 36.179.624.646	\$ 9.044.906.161		\$ 7.235.924.929	\$ 10.853.887.394	\$ 10.853.887.394	\$ 7.235.924.929	\$ 36.179.624.646
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	\$ 13.986.033.119	\$ 11.888.128.151	\$ 2.097.904.968	\$ 594.406.408	\$ 5.349.657.668	\$ 3.566.438.445	\$ 2.377.625.630		\$ 11.888.128.151
MUNICIPIO CANTON DE EL SAN PABLO	\$ 4.625.716.035	\$ 3.931.858.630	\$ 693.857.405	\$ 1.965.929.315	\$ 1.965.929.315				\$ 3.931.858.630
MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	\$ 3.484.941.813	\$ 2.787.953.450	\$ 696.988.363	\$ 1.393.976.725	\$ 1.393.976.725				\$ 2.787.953.450
MUNICIPIO DE ACACIAS	\$ 13.986.033.119	\$ 13.986.033.119	\$ 0	\$ 6.443.016.560	\$ 6.443.016.559				\$ 13.986.033.119
MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	\$ 4.625.716.036	\$ 3.931.858.630	\$ 693.857.406	\$ 1.965.929.315	\$ 1.965.929.315				\$ 3.931.858.630
MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	\$ 4.625.716.035	\$ 3.931.858.630	\$ 693.857.405	\$ 1.965.929.315	\$ 1.965.929.315				\$ 3.931.858.630
MUNICIPIO DE COROZAL	\$ 13.986.033.120	\$ 11.888.118.793	\$ 2.097.914.327	\$ 5.944.059.397	\$ 5.944.059.397				\$ 11.888.118.794
MUNICIPIO DE FLANDES	\$ 4.274.117.241	\$ 3.632.999.655	\$ 641.117.586	\$ 1.816.499.828	\$ 1.816.499.827				\$ 3.632.999.655
MUNICIPIO DE GUATEQUE	\$ 3.180.932.222	\$ 2.703.792.389	\$ 477.139.833	\$ 1.351.896.195	\$ 1.351.896.195				\$ 2.703.792.390
MUNICIPIO DE IPIALES	\$ 10.420.255.857	\$ 8.857.217.478	\$ 1.563.038.379	\$ 4.428.608.739	\$ 4.428.608.739				\$ 8.857.217.478
MUNICIPIO DE LIBORINA	\$ 3.128.644.316	\$ 2.605.903.042	\$ 522.741.274	\$ 1.302.951.521	\$ 1.302.951.521				\$ 2.605.903.042
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	\$ 3.484.941.813	\$ 2.962.200.541	\$ 522.741.272	\$ 1.481.100.271	\$ 1.481.100.271				\$ 2.962.200.541
MUNICIPIO DE MONTERIA	\$ 11.019.890.589	\$ 8.815.912.471	\$ 2.203.978.118	\$ 2.644.773.741	\$ 4.407.956.236	\$ 1.763.182.494			\$ 8.815.912.471
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	\$ 2.763.362.734	\$ 2.348.858.324	\$ 414.504.410	\$ 1.174.429.162	\$ 1.174.429.162				\$ 2.348.858.324
MUNICIPIO DE RONDON	\$ 2.786.146.531	\$ 2.368.224.550	\$ 417.921.980	\$ 1.184.112.275	\$ 1.184.112.275				\$ 2.368.224.550
MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 4.000.681.493	\$ 3.400.578.342	\$ 600.103.151	\$ 1.700.289.171	\$ 1.700.289.171				\$ 3.400.578.342
MUNICIPIO DE TUMACO	\$ 8.322.543.913	\$ 8.322.543.913	\$ 0	\$ 2.496.763.174	\$ 1.664.508.783	\$ 2.080.635.978	\$ 2.080.635.978		\$ 8.322.543.913
MUNICIPIO DE UBATE	\$ 11.122.748.586	\$ 9.454.336.298	\$ 1.668.412.288	\$ 472.716.815	\$ 4.254.451.334	\$ 2.836.300.889	\$ 1.890.867.260		\$ 9.454.336.298
Total general	\$ 169.048.985.379	\$ 143.998.001.051	\$ 25.050.984.327	\$ 40.327.387.926	\$ 57.031.226.736	\$ 21.100.445.201	\$ 17.203.016.263	\$ 7.235.924.929	\$ 143.998.001.054

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR		NECESIDADES 2024		NECESIDADES 2025	
		COSTO PROYECTADO O (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Brindar acompañamiento técnico en la formulación y revisión de documentos de proyectos de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana.	Garantizar espacios físicos funcionales para la preservación de la seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana.	\$ 0	0%	\$0	0%
Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la seguridad ciudadana	Garantizar espacios físicos funcionales para la preservación de la seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana.	\$ 57.051.226.736	100%	\$ 20.467.431.845	100%
Realizar la supervisión y el acompañamiento en la ejecución de los convenios de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana	Garantizar espacios físicos funcionales para la preservación de la seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana.	\$ 0	0%	\$0	0
Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la promoción de convivencia ciudadana	Garantizar espacios físicos funcionales para la preservación de la seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana.	\$ 19.980.000.000	100%	\$ 633.013.356	100%
TOTAL		\$77.031.226.736		\$21.100.445.201	

Teniendo en cuenta que se aprobaron 19 de proyectos para la seguridad, se requiere el presente recurso con el fin de realizar la financiación de los mismos hasta terminar su ejecución, lo anterior con el fin de continuar apoyando a las entidades territoriales y a la Policía Nacional en la prevención del delito y a la actualización y ampliación de los sistemas que en la actualidad vienen funcionando.

De igual manera se solicitan recursos por \$21.100.445.201, los cuales se encuentran dentro de la aprobación del trámite de vigencia futura con el fin de financiar proyectos direccionados a la seguridad y la convivencia ciudadana, específicamente estaciones de policía, centros administrativos municipales y el nuevo proyecto de convivencia, los cuales se detallan a continuación:

ESTACIONES DE POLICIA

Este proyecto forma parte de la línea denominada infraestructura para la seguridad, de acuerdo con las estrategias definidas por el mando institucional de la Policía Nacional, en el debido cumplimiento de la política integral de seguridad y defensa para prosperidad definida por el gobierno Nacional, y con el objetivo de aumentar el pie de fuerza policial, se

identifica la necesidad de construir nuevas Estaciones de Policía que garanticen espacios idóneos y suficientes, como solución definitiva en aquellas poblaciones donde la estación funciona provisionalmente en condiciones deficientes, indignas e inseguras para el personal policial.

Estos proyectos se orientan al mejoramiento del servicio policial en los Municipios, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La ubicación estratégica de la estación de policía, que contribuya a lograr una mayor acción preventiva y a controlar más eficientemente a los grupos delincuenciales.
- Prestar un mayor nivel de atención a la comunidad y a los turistas de los diferentes Municipios, y se obtendrá un mejor manejo de la seguridad, logrando igualmente mayores niveles de confianza hacia la institución.
- Se fortalecerán a los organismos de la policía con la infraestructura necesaria, la cual incluirá nuevas tecnologías para contrarrestar la delincuencia y prestar un servicio óptimo de seguridad ciudadana. Igualmente se logrará un acercamiento de la población con las nuevas tecnologías implementadas.
- Estos proyectos constituirán un factor determinante en el crecimiento económico, industrial y comercial de los Municipios, reflejando en un mejor nivel de vida de la población del municipio.
- El aumento del pie de fuerza en los municipios traerá beneficios en términos de cobertura policial y movilidad.
- Se tendrá un mejor control de las responsabilidades de cada una de las dependencias que funcionarían en estos nuevos bloques por parte de cada uno de los funcionarios encargados de cada área.
- Se logrará una distribución estratégica de la cobertura policial, disminuyendo los delitos de mayor afectación, tales como homicidios.

CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

Estos proyectos apoyan la gobernabilidad y la convivencia ciudadana en los municipios, con instalaciones que cumplan con los requisitos mínimos para prestar servicios de atención al público, para el personal de atención preferencial (adulto mayor, personal con discapacidad, mujeres embarazadas, etc.), por lo cual es necesario contar con instalaciones que cumplan con los requisitos mínimos de fácil acceso y seguridad; de acuerdo a lo anteriormente expuesto, es necesario eliminar el riesgo generado por fallas estructurales construyendo estructuras que cumplan con los requisitos de seguridad de acuerdo con la norma sismo resistente.

Así mismo, la ejecución de este tipo de proyecto tiene justificación en la necesidad del fortalecimiento de la gobernabilidad de las autoridades territoriales y la consolidación de la presencia institucional en una zona donde la problemática es la escases, cumpliendo con la responsabilidad constitucional de preservar el mantenimiento del orden público, la estabilidad y la convivencia ciudadana, dentro del marco del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en coordinación con los organismos de seguridad a nivel nacional, de ahí parte la necesidad urgente de que las Alcaldías de los Municipios, cuenten con una adecuada infraestructura administrativa, como parte del compromiso del Gobierno Nacional de reforzar y consolidar la gobernabilidad en las regiones del País.

PROYECTOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA:

Este proyecto se encuentra dirigido a la sana convivencia, son espacios multifuncionales de convivencia e interacción social, donde las comunidades encuentran la oportunidad de fortalecer su relación con los demás miembros de su comunidad, a través de lo que pasa en dichos espacios, algunas de las actividades que se pueden desarrollar en estos espacios son, entre otras:

- Práctica y presentación de la cultura y el folclor del lugar (Danza, teatro, música, entre otros).
- Reuniones entre los diferentes grupos de la comunidad.
- Comercialización de bienes y servicios propios de la comunidad (Ej. Mercados campesinos).
- Espacios de trabajo comunitario para la fabricación de productos. (Artesanos, productos tejidos, productos alimenticios, entre otros).
- Educación y capacitación en saberes autóctonos y ancestrales de las comunidades.
- Centros de interpretación comunitario.

Actividades que se pueden desarrollar:

- Actividades lúdicas y formación de niños y jóvenes.
- Encuentros comunitarios.
- Comercio y ferias.
- Comunidades autóctonas.
- Muestras culturales.
- Ferias de cine y arte.
- Fiestas municipales.
- Culto y oración.
- Expresión artística.
- Eventos para la infancia y adolescencia.
- Jornadas de salud.
- Mercado campesino.
- Juegos tradicionales.
- Elecciones.
- Actividades deportivas.

3.1.3.13 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD HUMANA A NIVEL NACIONAL. (\$9.760.961.113)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIFERENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
C-3702-1000-14	\$ 8.270.567.102	\$9.760.961.113	\$1.490.394.011	18%

TOTAL	\$ 8.270.567.102	\$9.760.961.113	\$1.490.394.011	18%
--------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------

BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia.
- Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2016 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: Actores diferenciales para el cambio. 1. El cambio es con las mujeres. 2. Mujeres en el centro de la política de la vida y la paz.
- Documento CONPES 4080 de 2022, por medio del cual se adoptó la política pública de equidad de género para las mujeres
- Ley 2272 de 2022, que adopta una política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización basada en enfoques de la equidad, no-discriminación y de género

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

En nuestro país la transversalización del enfoque de género no ha tenido mayor relevancia en la planeación y gestión pública de las entidades territoriales, lo cual se refleja en los diversos instrumentos de planeación local, donde no se contemplan o se contemplan de forma insuficiente, el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención de actos que afecten la convivencia, la seguridad y la garantía de los derechos humanos de las poblaciones objeto de la violencia basada en género o de acciones dirigidas a la promoción del respeto y la no discriminación.

Esto ha incidido en los altos índices de discriminación que coinciden a afectaciones en la convivencia, seguridad y garantía de los derechos humanos tanto de las mujeres como de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y por ende de las afectaciones y garantías de sus derechos.

Ante este escenario el proyecto tienen como objetivo el fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para transversalizar el enfoque de género en las políticas de gestión territorial de la convivencia y la seguridad humana, a través de la apropiación de herramientas y/o rutas de transversalización del enfoque de género en las estrategias, programas, planes de acción, planeación de políticas y presupuestos públicos en las entidades territoriales, así como la implementación de mecanismos y herramientas de resolución de conflictos que promuevan la comunicación no violenta, fomentar el respeto a la identidad, el autorreconocimiento, el buen vivir libre de prejuicios, menoscabar la utilización de lenguaje sexista, así como la construcción de procesos de gestión pública incluyentes, participativos y no discriminatorios, dirigidos a la reducción de prácticas xenófobas que afecten la seguridad de la población objeto de la violencia basada en razones en género y prejuicio.

En este sentido, el proyecto busca desarrollar acciones dirigidas a que las entidades territoriales apropien herramientas y/o rutas de transversalización del enfoque de género en los instrumentos de planeación local, estrategias, programas y planes de acción que promuevan la gestión de la convivencia y la seguridad humana, así como la implementación de mecanismos y herramientas de resolución de conflictos que promuevan la comunicación no violenta, la convivencia y la seguridad humana.

Dentro de las acciones a desarrollar en la vigencia 2025 se destacan:

1. El desarrollo de 32 encuentros territoriales constructivos y participativos, uno por departamento, dirigidos a identificar los factores de riesgo asociados a afectaciones de la seguridad de la población objeto de hechos de violencia basada en razones de sexo y género.

Con estos encuentros se busca facilitar la identificación colectiva de señales de alerta y factores de riesgo y de vulnerabilidad asociados con la ocurrencia de violencias contra mujeres y población OSIGD desde sus propias experiencias de vida y reconociendo que son ellas quienes mejor conocen las situaciones de inseguridad.

2. Desarrollar 80 jornadas territoriales de nivel departamental y municipal, para la difusión de referentes de políticas, programas, proyectos y protocolos en la prevención de violencias de género y prejuicio, autoprotección y gestión de seguridad comunitaria.

A través de estas jornadas se busca difundir estos referentes de experiencias exitosas y buenas prácticas en la prevención de violencias de género y prejuicio, donde el Ministerio de Interior espera ser el difusor y puente articulador entre distintas comunidades resilientes y así se fortalezca la construcción territorial de la seguridad de las mujeres y la población OSIGD.

3. Realizar 80 jornadas de acompañamiento a las entidades territoriales del orden departamental y municipal, en la articulación con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la gestión de la convivencia y seguridad humana con enfoque de género.

A través de estos espacios se busca fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias mediante el diálogo permanente entre entidades públicas y actores sociales como organizaciones de mujeres y población orientaciones sexuales y de género diversas -OSIGD, a fin de fortalecer la gestión territorial en marcos de convivencia, derechos humanos y enfoque de género, con priorización de las zonas en las que se presenten más amenazas a la seguridad de la población objeto de la violencia basada en género.

4. Realizar 80 talleres territoriales de con delegados de organizaciones sociales y funcionarios locales en los 32 departamentos y municipios priorizados en temas de gobernanza, convivencia y seguridad humana con enfoque de género.

Estos talleres buscan propiciar la gobernanza y derechos humanos con enfoque de género, especialmente en las zonas fronterizas, a través del fomento de la participación de las mujeres y población OSIGD en espacios de gestión de la convivencia y seguridad humana en aras de inclusión posicionar en las agendas de las instancias de toma de decisiones, la necesidad de construir una estructura de gobernanza que propenda por la inclusión, la igualdad y la promoción de derechos humanos en las instituciones y procesos que abanderan la incorporación de estas perspectivas en las políticas públicas territoriales.

5. Desarrollar 80 jornadas de socialización de la guía para transversalizar el enfoque de género en los Planes integrales de Seguridad Convivencia Ciudadana PISCC en los 32 departamentos y municipios focalizados.

El objetivo es la socialización y divulgación de la guía con los lineamientos de transversalización del enfoque de género y diversidad en los Planes Integrales de Seguridad, Convivencia Ciudadana PISCC, los cuales toman en cuenta las necesidades de seguridad humana de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género

diversas, las cuales suelen ser sujetas de discriminación y otro tipo de violaciones de derechos humanos.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1.1.1 Divulgación. Elaborar y socializar un documento de seguimiento y evaluación del proyecto a través de la conformación de un equipo de personas para la administración, funcionamiento y operación de las actividades del proyecto.	\$606.645.643	Generar un documento de seguimiento y evaluación de la administración, funcionamiento y operación de las actividades del proyecto.	\$676.715.990	Generar un documento de seguimiento y evaluación de la administración, funcionamiento y operación de las actividades del proyecto.
1.1.2 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas. Elaborar un diagnóstico sobre buenas prácticas en la gestión de la convivencia y seguridad humana con enfoque de género, que contenga descripción de procesos, métodos y herramientas.	\$249.405.979	Elaboración de documento diagnóstico sobre buenas prácticas en la gestión de la convivencia y seguridad humana con enfoque de género.	\$0	N/A
1.1.3 Documento con los resultados de las validaciones. Elaborar un documento de lineamientos técnicos para el seguimiento a los protocolos de prevención y autoprotección con enfoque de género para mujeres y población OSIGD que contenga el resultado de las validaciones.	\$214.656.200	Elaboración de documento de lineamientos técnicos para el seguimiento a los protocolos de prevención y autoprotección con enfoque de género para mujeres y población OSIGD.	\$0	N/A
1.1.4 Plan de trabajo. Formular un protocolo de prevención y autoprotección con enfoque de género para mujeres y población OSIGD, que contenga el plan de trabajo para el desarrollo del mismo.	\$214.656.200	Formular un protocolo de prevención y autoprotección con enfoque de género para mujeres y población OSIGD.	\$0	N/A
6041.11460.57748. Encuentros constructivos y participativos para identificar los factores de riesgo asociados a afectaciones de la seguridad de la población objeto de hechos de violencia basada en razones de sexo y género	\$551.360.906	Desarrollar 32 encuentros constructivos y participativos dirigidos a identificar los factores de riesgo asociados a afectaciones de la seguridad de la población objeto de hechos de violencia basada en razones de sexo y género	\$620.558.293	Desarrollar 32 encuentros constructivos y participativos dirigidos a identificar los factores de riesgo asociados a afectaciones de la seguridad de la población objeto de hechos de violencia basada en razones de sexo y género

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Difundir referentes de políticas, programas, proyectos y protocolos en la prevención de violencias de género y prejuicio, autoprotección y gestión de seguridad comunitaria.	\$722.202.838	Desarrollar 65 jornadas territoriales para la difusión de referentes de políticas, programas, proyectos y protocolos en la prevención de violencias de género y prejuicio, autoprotección y gestión de seguridad comunitaria.	\$992.596.484	Desarrollar 80 jornadas territoriales para la difusión de referentes de políticas, programas, proyectos y protocolos en la prevención de violencias de género y prejuicio, autoprotección y gestión de seguridad comunitaria.
1.2.3 Acompañar a las entidades territoriales en la articulación con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la gestión de la convivencia y seguridad humana con enfoque de género.	\$722.202.838	Realizar 65 jornadas de acompañamiento a las entidades territoriales en la articulación con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la gestión de la convivencia y seguridad humana con enfoque de género.	\$992.596.484	Realizar 80 jornadas de acompañamiento a las entidades territoriales en la articulación con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la gestión de la convivencia y seguridad humana con enfoque de género.
2.1.1 Documento con el diseño metodológico. Elaborar una guía para transversalizar el enfoque de género en los principales instrumentos de planificación territorial: Planes Integrales de Seguridad Convivencia y Ciudadana (PISCC) y Planes de Desarrollo Territorial.	\$214.656.200	Elaborar el documento guía para transversalizar el enfoque de género en los principales instrumentos de planificación territorial.	\$0	N/A
2.1.2 Plan de trabajo. Elaborar una metodología para la elaboración de proyectos que fortalezcan las capacidades técnicas para la transversalización del enfoque de género y acompañar técnicamente a las entidades territoriales en su implementación	\$214.656.200	Elaborar metodología para la elaboración de proyectos que fortalezcan las capacidades técnicas para la transversalización del enfoque de género y acompañar técnicamente a las entidades territoriales en su implementación	\$0	N/A
2.2.1 Realizar talleres en temas de gobernanza, convivencia y seguridad humana con enfoque de género	\$1.119.951.840	Realizar 65 talleres territoriales en temas de gobernanza, convivencia y seguridad humana con enfoque de género	\$1.484.595.584	Realizar 80 talleres territoriales en temas de gobernanza, convivencia y seguridad humana con enfoque de género
2.2.2 Realizar mesas técnicas para la elaboración de proyectos que fortalezcan las capacidades de las entidades territoriales para la transversalización del enfoque de género.	\$722.202.838	Realizar 65 mesas técnicas para la elaboración de proyectos que fortalezcan las capacidades de las entidades territoriales para la transversalización del enfoque de género.	\$978.995.585	Realizar 80 mesas técnicas para la elaboración de proyectos que fortalezcan las capacidades de las entidades territoriales para la transversalización del enfoque de género.

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
6042.11458.57756. Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la gestión de recursos de cooperación internacional orientados a fortalecer las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género	\$722.202.838	Realizar 65 jornadas de asistencia técnica a entidades territoriales en la gestión de recursos de cooperación internacional orientados a fortalecer las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género	\$1.110.794.702	Realizar 80 jornadas de asistencia técnica a entidades territoriales en la gestión de recursos de cooperación internacional orientados a fortalecer las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género
3.1.1 Socializar de la guía para transversalizar el enfoque de género en los Planes integrales de Seguridad Convivencia Ciudadana PISCC y acompañar a las entidades territoriales en este proceso.	\$722.202.838	Desarrollar 65 jornadas de socialización de la guía para transversalizar el enfoque de género en los Planes integrales de Seguridad Convivencia Ciudadana PISCC.	\$1.110.794.702	Desarrollar 80 jornadas de socialización de la guía para transversalizar el enfoque de género en los Planes integrales de Seguridad Convivencia Ciudadana PISCC.
3.1.2 Acompañar la implementación del enfoque de género y los componentes de convivencia y seguridad humana en los planes de desarrollo, programas y proyectos.	\$ 722.202.838	Realizar 65 talleres de acompañamiento a la implementación del enfoque de género y los componentes de convivencia y seguridad humana en los planes de desarrollo, programas y proyectos.	\$1.110.794.702	Realizar 65 talleres de acompañamiento a la implementación del enfoque de género y los componentes de convivencia y seguridad humana en los planes de desarrollo, programas y proyectos.
Socializar los lineamientos para transversalizar el enfoque de género y la guía práctica para la Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en los instrumentos de planeación territorial.	\$ 551.360.906	Realizar 32 jornadas de socialización de los lineamientos para transversalizar el enfoque de género y la guía práctica para la Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en los instrumentos de planeación territorial.	\$682.518.587	Realizar 32 jornadas de socialización de los lineamientos para transversalizar el enfoque de género y la guía práctica para la Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en los instrumentos de planeación territorial.
	\$8.270.567.102		\$9.760.961.113	

Los costos de las actividades tienen como base: i) para el caso de prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para ese tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; y ii) para las jornadas de trabajo, talleres, mesas y espacios los costos se basan en los históricos de operación logística que incluyen participación de sociedad civil, los cuales incluyen gastos relacionados con eventos, alimentación, hospedaje, tiquetes y apoyo de transporte, entre otras, con ampliación de la cobertura territorial.

3.1.3.14 MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ LIDERADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR A NIVEL NACIONAL. (\$56.334.053.376).

NECESIDADES DEL RECURSO 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2023- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2023 CON PRESUPUESTO 2024
C-3702-1000-15	\$ 10.010.239.439	\$56.334.053.376	\$ 46.323.813.937	463%
TOTAL	\$ 10.010.239.439	\$56.334.053.376	\$ 46.323.813.937	463%

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" en su artículo 1 contempla como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la *paz total*, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una *cultura de la paz* que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El artículo 4 del PND describe como uno de sus ejes transversales a la *paz total*, entendida como una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; con estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, en el artículo 5 referido al Plan Nacional de Inversiones Públicas 2023-2026, incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y lo estima en un valor de 50,4 billones.

En Capítulo I del Plan Nacional de Desarrollo, se describen los proyectos, políticas y programas para la construcción de paz, y en su artículo 7 se menciona que, "en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 418 de 1997, el Plan Plurianual de Inversiones de que trata el artículo 5 de esta ley contiene los proyectos y programas para la construcción de paz. Las políticas en torno a la construcción de paz se encuentran previstas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo". Acá es fundamental mencionar que las bases del plan contemplan cinco componentes para la paz: 1. Territorios que se transforman con la implementación del Acuerdo Final; 2. Nuevas negociaciones. El diálogo: un camino; 3. Desescalamiento de la violencia; 4. La cultura de paz en la cotidianidad de poblaciones y territorios y; 5. La Paz en la esencia del Gobierno.

El Ministerio del Interior en su Plan Estratégico, ha asociado dentro de sus Macrometas, la "Implementación del acuerdo de paz con las FARC" y el "Tránsito hacia la paz total", como una de sus mayores apuestas, en concordancia con lo contemplado en el PND.

Para cumplir con ese propósito el Ministerio del Interior se ha propuesto adecuar la institucionalidad, por ello, creó el Grupo Interno de Trabajo denominado *Equipo de Paz*, adscrito al despacho del Ministro, mediante la Resolución 1996 del 14 de Nov de 2023. Su objetivo es coordinar y articular de manera interna, interinstitucional e intersectorial los asuntos de paz de

competencia del Ministerio del Interior, con el fin de mejorar la efectividad de los programas e iniciativas de construcción de paz lideradas por el mismo a nivel nacional. En ese sentido se le han asignado, entre otras, las siguientes funciones y tareas:

1. Promover, desarrollar, impulsar e implementar políticas, acciones, lineamientos, estrategias, espacios y otros instrumentos que apoyen la implementación de los acuerdos de paz alcanzados por el Gobierno colombiano en los asuntos de competencia del Ministerio del Interior.
2. Acompañar y asesorar a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Instancia Especial de Mujeres (IEM) y demás instancias creadas para implementar los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno colombiano y ejercer las secretarías técnicas de las mismas cuando se requiera.
3. Contribuir con el desarrollo de procesos de concertación, diálogo y acompañamiento técnico a las Instancias creadas para implementar los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno colombiano.
4. Brindar asistencia técnica a nivel territorial frente a la aplicación de instrumentos y lineamientos normativos y metodológicos en los procesos de construcción de paz.
5. Apoyar en la construcción de estrategias y espacios para la generación de una cultura de paz en la cotidianidad de poblaciones y territorios.
6. Impulsar y acompañar la gestión y ejecución de iniciativas sociales, comunitarias e institucionales en construcción de paz; así como la formulación, implementación y seguimiento de proyectos de inversión relacionados con la materia.
7. Apoyar la implementación de los enfoques étnicos y de género en las acciones relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz alcanzados por el Gobierno Nacional.
8. Desarrollar procesos, métodos y herramientas para la adecuación normativa en la implementación de los acuerdos de paz, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior.

Para desarrollarlas, se formuló el proyecto de inversión denominado, *Mejoramiento de la efectividad de los programas e iniciativas de construcción de paz lideradas por el mismo a nivel nacional*, con tres grandes objetivos y 14 actividades que recogen los compromisos del ministerio en cada uno de los cinco componentes para la paz contemplados en el PND y que apuntan a cumplir las Macrometas relacionadas con la Implementación del acuerdo de paz con las FARC y el tránsito hacia la paz total.

En el primer componente, *Territorios que se transforman con la implementación del Acuerdo Final*, el Ministerio del interior es responsable de la implementación de 49 indicadores del PMI, para lo cual se vienen avanzando en un plan de choque liderado por el Equipo de Paz, que ha permitido hacer un diagnóstico y evaluar el estado actual de la implementación. La coordinación y articulación del equipo con las direcciones responsables de los indicadores PMI, ha permitido crear estrategias de registro y actualización de la información y establecer acciones para estar al día frente las fichas técnicas y los retos del reporte y registro en el SIPO, sin embargo, para fortalecer estas acciones es ineludible su continuidad para el año 2025 y lograr avanzar en los reportes e implementación de indicadores.

El proyecto contempla fortalecer la implementación del PMI, de manera coordinada con las direcciones, entidades responsables, instancias de paz y la participación de las poblaciones

beneficiarias. Existen indicadores que requieren un gran despliegue territorial y espacios de concertación, como por ejemplo el Pacto Político Nacional, el cual es una apuesta importante del presente Gobierno, cuya planeación a cargo del Equipo de Paz está desarrollándose en el presente año y se busca lograr su adopción y suscripción para el año 2025, incluyendo su implementación y seguimiento a los compromisos y evaluación.

Adicionalmente, contamos con el indicador relacionado con los Planes de Acción Inmediata para los pueblos indígenas en riesgo de extinción que no fueron priorizados en las 16 subregiones PDET. Este indicador, que también quedó contemplado en apoyo a la implementación del Capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz en el PND, compromiso IT- 276 concertado en la MPC, para el 2025 tiene contemplado en articulación con la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, continuar con la formulación de los PAI, y avanzar con la implementación de aquellos planes que se formulen en la vigencia 2024, cuya meta para el 2025 es un 10% de avance en la implementación de las acciones de competencia del ministerio.

Reconociendo el rezago que aún tiene el ministerio en materia de PMI, se tiene proyectado acelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz, en cada uno de los puntos asociados al Ministerio del Interior, especialmente los relacionados con el punto 2 sobre participación política, el punto 3 sobre Fin del Conflicto y el punto 6 sobre Implementación y verificación, aquellos relacionados con el Capítulo Étnico, el enfoque transversal de género y las Instancias de paz tanto a nivel nacional como territorial; lo que implica duplicar esfuerzos en 2025 para cumplir con las macrometas propuestas.

A lo anterior se suma, la responsabilidad del Ministerio del Interior con 169 iniciativas PDET identificadas por movilizar y 42 en estado de implementación que se avanzará de manera parcial el presente año, siendo necesario la continuidad del cumplimiento de las iniciativas para el año 2025. Del mismo modo, es necesario continuar con la articulación y coordinación interna con las distintas direcciones, acompañando las acciones de coordinación con la ART y la concertación en los espacios de diálogo a nivel territorial con las comunidades. En esta materia, el alcance que tiene el proyecto de inversión y sus proyecciones para la vigencia 2025, en relación con lo presupuestado en el 2024 es mucho más ambicioso, teniendo en cuenta que para la vigencia 2024 no se asignaron todos los recursos solicitados y viabilizados por el DNP, especialmente en las acciones que se plantean para asistencia técnica y financiación de los compromisos e iniciativas sociales, comunitarias e institucionales en construcción de paz de competencia de la entidad.

En relación con el 2 componente, *Nuevas negociaciones. El diálogo: un camino*, el artículo 23 del PND, crea los Instrumentos para la paz total. Uno de ellos está relacionado con los acuerdos parciales para la paz total, como política pública intersectorial del Estado en materia de garantía para el cumplimiento del derecho a la paz; el cual requiere un ejercicio de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, debido a los compromisos que se van generando al Ministerio en el marco de las nuevas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y de los que se lleguen a generar en el marco de los procesos de diálogo y de conversación que lidera la OACP, tanto socio-jurídicos como socio-políticos, dada la naturaleza de los acuerdos parciales reglamentados por la Ley 2272 de 2022. El Ministerio del Interior adquiere gran responsabilidad frente a la implementación de lo que se está pactando y acordando de manera parcial en las diferentes mesas o espacios desarrollados por el gobierno nacional en las diferentes zonas críticas dispuestas a nivel nacional. Si bien el Ministerio del Interior no es competente para desarrollar diálogos de paz, sí tiene competencia en la implementación de los acuerdos parciales

y finales que suscriba el Gobierno Nacional. En ese marco, el proyecto tiene contemplado en 2025, fortalecer las acciones y presencia del ministerio en cabeza del equipo de paz a nivel territorial, la coordinación interinstitucional e intersectorial y la implementación de Iniciativas sociales y comunitarias para la paz, las cuales se suman a las ya mencionadas iniciativas PDET, lo que requiere de mayor inversión presupuestal.

En el tercer componente, sobre *desescalamiento de la violencia*, el equipo de paz viene adelantando acciones de coordinación con distintas dependencias internas y entidades del orden nacional y territorial, con el fin de fortalecer la prevención y la protección de líderes y comunidades, la inclusión de excombatientes y las actividades interrelacionadas con la seguridad humana y la cultura de paz, como apuestas integrales para el logro de la paz total.

El cuarto componente es, *La cultura de paz en la cotidianidad de poblaciones y territorios*, una de las apuestas más ambiciosas que contempla el proyecto para 2025. La construcción de paz se debe fortalecer en los territorios, lo que implica regionalizar las actividades contempladas en el proyecto fortaleciendo la presencia del equipo. Más allá de la implementación de los acuerdos y las nuevas negociaciones, la paz se construye con la sociedad, en lo local, en lo cotidiano. El proyecto le apuesta a fortalecer dichas experiencias de construcción de paz. A ello se suma las actividades relacionadas con la estrategia de información, pedagogía y comunicación para la paz contemplada en el primer objetivo del proyecto, que también se deben fortalecer en 2025.

Y en el último componente (5) de paz contemplado en el PND, *La Paz en la esencia del Gobierno*, en 2024 el Ministerio del Interior, espera definir los componentes de política pública de paz en los asuntos de su competencia, tal como lo mandata el artículo 8A de la ley 2272 de 2022, lo que incluye la participación de los distintos actores en materia de construcción de Paz en dicho proceso. La proyección 2025 incluye su implementación, lo que implica que los retos que surjan de este ejercicio se deben tener en cuenta en la asignación de los rubros presupuestales. La paz en la esencia del gobierno requiere adecuar la institucionalidad para atender los asuntos de paz, fortalecer el Gabinete de Paz, las Regiones de Paz y demás instrumentos contemplados en el PND y los instrumentos normativos mencionados. Asimismo, estos compromisos generan demandas en el marco del desarrollo de las actividades relacionada con los lineamientos de paz, asistencia técnica a nivel territorial, instrumentos normativos y metodológicos en la construcción de paz; lo cual deberá incorporar componentes asociados a las nuevas negociaciones y las acciones de articulación interna, interinstitucional y nación territorio contempladas en el proyecto para 2024 y 2025.

Por último, se está trabajando en la identificación y planificación de actividades para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de competencia del Ministerio del Interior, lo que contempla su inclusión en los componentes de política pública de paz, asistencia técnica a nivel interno, entes territoriales, organizaciones sociales y comunidades y la ejecución de nuevas iniciativas de paz, con la finalidad de incorporar la implementación de estas recomendaciones en los planes, políticas y actividades a desarrollar en el marco del proyecto de inversión; lo cual tendrá un rol importante para la vigencia 2025.

A continuación, se detalla las variaciones por actividad asociadas al proyecto:

Actividad	RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor necesidad 2025 (costo proyectado)	Diferencia necesidades 2025- Presupuesto2024	Incremento en % 2025 respecto presupuesto 2024
Entregable: 1.1.2 Documento metodológico de validez. Generar los procesos de concertación e implementación de los componentes de la política pública de paz que hagan parte de las competencias del Ministerio del Interior.	C-3702-1000-15-600011-3702003-02	\$425.797.731	\$623.020.029	\$197.222.298	46%
	C-3702-1000-15-600012-3702003-02	\$283.865.154	\$415.346.686	\$131.481.532	46%
	C-3702-1000-15-600013-3702003-02	\$425.797.730	\$623.020.028	\$197.222.298	46%
	C-3702-1000-15-600014-3702003-02	\$283.865.154	\$415.346.686	\$131.481.532	46%
Entregable :1.1.1 Documento metodológico preliminar Definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de las competencias del Ministerio del Interior.	C-3702-1000-15-600011-3702003-02	\$124.184.639	\$281.352.719	\$157.168.080	127%
	C-3702-1000-15-600012-3702003-02	\$82.789.759	\$187.568.478	\$104.778.719	127%
	C-3702-1000-15-600013-3702003-02	\$124.184.640	\$281.352.721	\$157.168.081	127%
	C-3702-1000-15-600014-3702003-02	\$82.789.760	\$187.568.481	\$104.778.721	127%
Construir estrategias y espacios para la generación de una cultura de paz en la cotidianidad de poblaciones y territorios, con enfoque territorial.	C-3702-1000-15-600011-3702023-02	\$648.160.465	\$1.741.806.196	\$1.093.645.731	169%
	C-3702-1000-15-600012-3702023-02	\$432.106.977	\$1.161.204.132	\$729.097.155	169%
	C-3702-1000-15-600013-3702023-02	\$648.160.465	\$1.741.806.196	\$1.093.645.731	169%
	C-3702-1000-15-600014-3702023-02	\$432.106.977	\$1.161.204.132	\$729.097.155	169%
Implementar una estrategia de información, pedagogía y comunicación para la paz.	C-3702-1000-15-600011-3702023-02	\$225.522.560	\$426.945.977	\$201.423.417	89%
	C-3702-1000-15-600012-3702023-02	\$150.348.373	\$284.630.651	\$134.282.278	89%
	C-3702-1000-15-600013-3702023-02	\$225.522.560	\$426.945.977	\$201.423.417	89%
	C-3702-1000-15-600014-3702023-02	\$150.348.372	\$284.630.649	\$134.282.277	89%
Articular las orientaciones técnicas, metodológicas y operativas con los actores involucrados para la formulación y seguimiento de proyectos para la construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702021-02	\$82.789.760	\$70.338.180	\$12.451.580	-15%
	C-3702-1000-15-600012-3702021-02	\$55.193.173	\$46.892.120	\$8.301.053	-15%
	C-3702-1000-15-600013-3702021-02	\$82.789.760	\$70.338.180	\$12.451.580	-15%
	C-3702-1000-15-600014-3702021-02	\$55.193.173	\$46.892.120	\$8.301.053	-15%

Actividad	RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor necesidad 2025 (costo proyectado)	Diferencia necesidades 2025- Presupuesto2024	Incremento en % 2025 respecto presupuesto 2024
Realizar asistencia técnica a las comunidades y entidades territoriales en formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública en construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702021-02	\$107.808.269	\$664.470.022	\$556.661.753	516%
	C-3702-1000-15-600012-3702021-02	\$71.872.180	\$442.980.019	\$371.107.839	516%
	C-3702-1000-15-600013-3702021-02	\$107.808.269	\$664.470.022	\$556.661.753	516%
	C-3702-1000-15-600014-3702021-02	\$71.872.180	\$442.980.019	\$371.107.839	516%
Apoyar la financiación de los compromisos e iniciativas Sociales, comunitarias e institucionales en construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702027-02	\$311.310.808	\$9.741.327.957	\$9.430.017.149	3029%
	C-3702-1000-15-600012-3702027-02	\$207.540.539	\$6.494.218.648	\$6.286.678.109	3029%
	C-3702-1000-15-600013-3702027-02	\$311.310.809	\$9.741.327.988	\$9.430.017.179	3029%
	C-3702-1000-15-600014-3702027-02	\$207.540.540	\$6.494.218.680	\$6.286.678.140	3029%
Desarrollar una metodología para la presentación, viabilización, priorización, financiación, ejecución y seguimiento de iniciativas Sociales, comunitarias e institucionales en construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702027-02	-	\$422.029.079	\$422.029.079	NA
	C-3702-1000-15-600012-3702027-02	-	\$281.352.719	\$281.352.719	NA
	C-3702-1000-15-600013-3702027-02	-	\$422.029.080	\$422.029.080	NA
	C-3702-1000-15-600014-3702027-02	-	\$281.352.721	\$281.352.721	NA
Entregable: 3.1.2 Documento con los resultados de las validaciones. Fortalecer la coordinación interna, interinstitucional e intersectorial en la construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702002-02	\$49.673.856	\$56.270.544	\$6.596.688	13%
	C-3702-1000-15-600012-3702002-02	\$33.115.904	\$37.513.696	\$4.397.792	13%
	C-3702-1000-15-600013-3702002-02	\$49.673.856	\$56.270.544	\$6.596.688	13%
	C-3702-1000-15-600014-3702002-02	\$33.115.904	\$37.513.696	\$4.397.792	13%
Entregable: 3.1.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas Apoyar las necesidades de adecuación normativa para la	C-3702-1000-15-600011-3702002-02	\$33.115.904	\$37.513.696	\$4.397.792	13%
	C-3702-1000-15-600012-3702002-02	\$22.077.269	\$25.009.130	\$2.931.861	13%
	C-3702-1000-15-600013-3702002-02	\$33.115.904	\$37.513.696	\$4.397.792	13%
	C-3702-1000-15-600014-3702002-02	\$22.077.269	\$25.009.130	\$2.931.861	13%

Actividad	RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor necesidad 2025 (costo proyectado)	Diferencia necesidades 2025- Presupuesto2024	Incremento en % 2025 respecto presupuesto 2024
implementación de paz					
Acompañar las instancias relacionadas con la implementación y puesta en marcha de los procesos de Paz.	C-3702-1000-15-600011-3702012-02	\$233.596.306	\$777.118.861	\$543.522.555	233%
	C-3702-1000-15-600012-3702012-02	\$155.730.870	\$518.079.238	\$362.348.368	233%
	C-3702-1000-15-600013-3702012-02	\$233.596.305	\$777.118.857	\$543.522.552	233%
	C-3702-1000-15-600014-3702012-02	\$155.730.870	\$518.079.238	\$362.348.368	233%
Apoyar la Implementación de los lineamientos étnicos y Planes de Acción Inmediata (PAI) relacionados con los procesos de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702012-02	\$384.402.850	\$777.118.857	\$392.716.007	102%
	C-3702-1000-15-600012-3702012-02	\$256.268.567	\$518.079.239	\$261.810.672	102%
	C-3702-1000-15-600013-3702012-02	\$384.402.851	\$777.118.859	\$392.716.008	102%
	C-3702-1000-15-600014-3702012-02	\$256.268.567	\$518.079.239	\$261.810.672	102%
Articular con los actores involucrados la realización de procesos de concertación con las instancias, comunidades y líderes sociales en la construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702012-02	\$41.394.880	\$46.892.120	\$5.497.240	13%
	C-3702-1000-15-600012-3702012-02	\$27.596.587	\$31.261.414	\$3.664.827	13%
	C-3702-1000-15-600013-3702012-02	\$41.394.880	\$46.892.120	\$5.497.240	13%
	C-3702-1000-15-600014-3702012-02	\$27.596.586	\$31.261.413	\$3.664.827	13%
	C-3702-1000-15-600011-3702022-02	\$41.394.880	\$46.892.120	\$5.497.240	13%
	C-3702-1000-15-600012-3702022-02	\$27.596.587	\$31.261.414	\$3.664.827	13%
	C-3702-1000-15-600013-3702022-02	\$41.394.880	\$46.892.120	\$5.497.240	13%
	C-3702-1000-15-600014-3702022-02	\$27.596.587	\$31.261.414	\$3.664.827	13%
Realizar asistencia técnica a nivel territorial frente a los lineamientos normativos y metodológicos en la construcción de paz.	C-3702-1000-15-600011-3702022-02	\$293.918.923	\$1.187.119.629	\$893.200.706	304%
	C-3702-1000-15-600012-3702022-02	\$195.945.949	\$791.413.087	\$595.467.138	304%
	C-3702-1000-15-600013-3702022-02	\$293.918.923	\$1.187.119.629	\$893.200.706	304%

Actividad	RUBRO	Valor Presupuesto 2024	Valor necesidad 2025 (costo proyectado)	Diferencia necesidades 2025- Presupuesto2024	Incremento en % 2025 respecto presupuesto 2024
	C-3702-1000-15-600014-3702022-02	\$195.945.949	\$791.413.087	\$595.467.138	304%
Total		\$10.010.239.439	\$56.334.053.376	\$46.323.813.937	463%

Con relación a lo anterior y atendiendo a lo solicitado por la OAP presentamos las metas y logros propuestos para la vigencia 2025.

METAS Y LOGROS PARA ALCANZAR 2025

El personal idóneo para la ejecución de las actividades mediante la figura de Prestación de Servicios Profesionales, tomando como referencia la resolución 003 de 2023 (tabla de honorarios y prestaciones de servicio) “Por el cual se adopta la tabla de honorarios para la contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio del Interior con personas naturales, y se dictan otras disposiciones”.

se puedo establecer los costos logísticos de la asistencia técnica, eventos e impresiones; el valor estimados de los tiquetes aéreos se tomó como referencia el contrato de operador logístico 1077 de 2023.

Para el cálculo del costo promedio de las iniciativas sociales, comunitarias e institucionales asociadas al Ministerio del Interior en la construcción de paz. se tuvo en cuenta el listado de iniciativas identificadas por la ART por el sector interior, que tenían un valor estimado; para el 2022 el promedio presentado alcanza un costo de \$1.488.474.878; este fue el valor tomado para el primer año del proyecto; para los años subsiguientes se consideró el incremento del conforme el IPC.

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR (Indicador)		RECURSOS 2024		NECESIDAD E RECURSOS 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Total, Producto No. 1: Documentos metodológicos (Código 3702003)	Documentos metodológicos elaborados (Código 370200300)	\$ 1.833.274.567	1	\$ 3.014.575.829	1
Total, Producto No. 2: Servicio de divulgación (código 3702023)	Estrategias implementadas (código 370202301)	\$ 2.912.276.749	16	\$ 7.229.173.908	40
Total, Producto No. 3: Servicio de asistencia técnica (Código 3702021)	Entidades asistidas técnicamente (Código 370202104)	\$ 635.326.764	2	\$ 2.449.360.680	32

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR (Indicador)		RECURSOS 2024		NECESIDAD E RECURSOS 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Total, Producto No. 4: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Código 3702014)	Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente (Código 370201400)	\$ 1.037.702.696	2	\$ 33.877.856.871	17
Total, Producto No. 5: Documentos de lineamientos técnicos elaborados (Código 3702002)	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (Código 370200200)	\$ 275.965.866	20	\$312.614.133	20
Total, Producto No. 6: Servicio de divulgación en seguridad, paz y convivencia ciudadana. (Código 3702012)	Eventos de divulgación para la seguridad y convivencia ciudadana realizados (Código: 370201200)	\$ 2.197.980.119	10	\$ 5.337.099.456	20
Total Producto No. 7: Servicio de educación informal (consiste en la realización de asistencias técnicas asociadas a la construcción de paz)	Número de personas	\$ 1.117.712.678	140	\$ 4.113.372.498	640
Total		\$10.010.239.439		\$56.334.053.376	

A continuación, se relaciona la distribución del presupuesto 2025 para el proyecto de inversión:

RUBRO	Valor necesidad 2025 (costo proyectado)
C-3702-1000-15-600011-	\$16.900.215.985
C-3702-1000-15-600012-	\$11.266.810.671
C-3702-1000-15-600013-	\$16.900.216.017
C-3702-1000-15-600014-	\$11.266.810.703
TOTAL, GENERAL	\$ 56.334.053.376

3.1.3.15 FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL. (\$134.135.488.315)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor Presupuesto 2024	Valor Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento % necesidad 2024 con presupuesto 2025
	NUEVO	\$ 134.135.488.315	\$ 134.135.488.315	100 %
TOTAL	NUEVO	\$ 134.135.488.315	\$ 134.135.488.315	100 %

BASE LEGAL

El proyecto denominado, “Fortalecimiento de la capacidad de articulación territorial para la incorporación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, integral, corresponsable, contextualizada y preventiva a nivel Nacional” se ejecuta actualmente con el propósito de construir un marco institucional para la reconfiguración del paradigma securitario predominante, desde el cual se han definido las políticas, programas y proyectos de convivencia y seguridad ciudadana en los últimos veinte años. Sin embargo, se espera ejecutar en la vigencia 2025 un proyecto con mayor alcance, denominado “Fortalecimiento de la articulación territorial con enfoque social y participativo por la paz e incorporación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana integral a nivel nacional”, cuyo objetivo general es: Fortalecer la articulación territorial con enfoque social y participativo por la paz e incorporación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana integral a nivel nacional.

Este proyecto se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, 2022-2026 **“Colombia, potencia mundial de la vida”**, en el segundo eje de transformación **“Seguridad humana y justicia social”** **“Paz Total”**, en virtud del cual se establecen unos anclajes conceptuales para definir sus contenidos y alcances en el abordaje de la gestión de la convivencia y la seguridad, como pilar del buen vivir, de la siguiente manera:

1. La seguridad humana pone en el centro de las acciones de gobierno en materia de convivencia y seguridad, a las personas y las comunidades.
2. La seguridad humana compromete de manera corresponsable a las autoridades nacionales y territoriales en la comprensión, prevención y atención de factores de riesgo y vulnerabilidades del territorio y sus comunidades, en materia de convivencia, gestión de conflictos y orden público.
3. En la perspectiva de la seguridad humana, la convivencia se entiende como un proceso relacional que se puede orientar/fortalecer hacia dinámicas libres de violencias, mediante acciones preventivas y preventivas.
4. El enfoque de seguridad humana se nutre de los enfoques de: **Acción sin daño, territorial, interseccional, restaurativo**

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo, en el Catalizador 2 Modelos de desarrollo de la Transformación 5 Convergencia Regional, establece **“2. MUJERES EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA DE LA VIDA Y LA PAZ.** La representación política será más diversa y paritaria, y tendrá un enfoque interseccional y territorial, en los diferentes cargos públicos y niveles del Estado, incluyendo la rama legislativa y judicial y promoviendo la paridad como piso y no como techo. Se fortalecerán los sistemas de monitoreo de la paridad para contar con información pública, desagregada tanto por categoría de cargos como con un enfoque interseccional. Los programas de formación política promoverán la participación de mujeres en toda su diversidad, y deberán asegurar su conexión con los partidos y espacios de decisión política, evaluando su efectividad. Se fortalecerá el seguimiento a recursos para el fomento de la participación política y se adelantará una estrategia para la eliminación de la violencia política contra las mujeres. Se fortalecerá la Política de Participación Ciudadana y Electoral promoviendo los derechos políticos de las mujeres bajo el principio de paridad y alternancia.

Se buscará también la paridad en los Consejos de Planeación y en los cargos de dirección en Organismos de Acción Comunal. Se identificarán e impulsarán organizaciones de mujeres diversas (rurales, étnicas, con discapacidad, LBTIQ+, víctimas, jóvenes, mayores, migrantes, entre otras), articulándolas a las instancias de participación nacional y local. Los proyectos con participación comunitaria (infraestructura, vivienda, minas y energía, agua, entre otros) tendrán cláusulas para promover la participación efectiva de las mujeres. Se deberán definir lineamientos para superar las barreras para su participación en la planeación territorial y para la inclusión del enfoque de género en los instrumentos de ordenamiento territorial. Se reconocerá y visibilizará el papel fundamental de las mujeres en la cultura, las artes y los saberes desde una perspectiva que valore y promueve su rol como artistas, creadoras gestoras culturales que salvaguardan los conocimientos tradicionales, fortalecen la paz, y el tejido social y comunitario. Se asegurará la implementación y los recursos para el Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderesas y Defensoras de los Derechos Humanos, que contará con un enfoque étnico-territorial y de curso de vida con el objetivo de establecer mecanismos integrales que promuevan el autocuidado y el cuidado colectivo, y que permitan generar mayor conocimiento y toma de conciencia acerca de la importancia de la gestión de las lideresas y defensoras de derechos, los riesgos y las violencias que enfrentan.

RECAUDO POR COMPARENDOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL MARCO DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- LEY 2197 DE 2022, ARTS. 44 Y 45.

Comparendos CNSCC: Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha iniciado con este recaudo, toda vez que se encuentra en elaboración y construcción el Sistema de Información que se requiere para este fin, la proyección de recaudo 2025 únicamente se incluirá en el documento justificativo del anteproyecto, dejando vacíos los formularios y el registro SIIF Nación, con el fin de no generar distorsión en los cálculos a nivel nación, por la incertidumbre que a la fecha se mantiene sobre el ingreso real para el próximo año por este concepto. Manejo acordado con la DGPPN - MHCP. El cálculo de ingresos 2025 no ha sido entregado a la OAP, por lo que se estima temporalmente un incremento del 6%, siguiendo lineamientos de la circular 009 del MHCP.

JOVENES EN PAZ

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 'Colombia Potencia Mundial de Vida' en su Eje transversal "Actores diferenciales para el cambio" contempla en su estrategia 6 "jóvenes

con derechos que lideran las transformaciones para la vida", objetivo 3 "Juventudes artífices de la Paz Total", implementar el Programa Nacional Jóvenes en Paz, dirigido a las juventudes en condición de pobreza, vulnerabilidad y en riesgo de vincularse a dinámicas de violencia y criminalidad a través de los componentes educativos, de corresponsabilidad y de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario para generar entornos protectores y reducir índices de violencia.

Para el desarrollo e implementación del Programa Nacional Jóvenes en Paz se entenderá por corresponsabilidad el trabajo comunitario que comprende las acciones asumidas por el o la joven participante su territorio para la construcción de paz y para el fortalecimiento de las juventudes como agentes transformadores, mediante diferentes acciones que se definan en cada municipio donde se desarrolla el programa.

El Decreto 1649 del 12 de octubre de 2023 establece que La corresponsabilidad estará orientada a la reconstrucción del tejido social afectado por la violencia y el conflicto armado en los territorios que han sido históricamente marginados y excluidos, la prevención del reclutamiento y la generación de vínculos entre los y las jóvenes y su comunidad.

De igual manera en el Artículo 28 establece que el Ministerio de Interior en coordinación con el Ministerio de Igualdad y Equidad elaborará el componente de corresponsabilidad o trabajo comunitario del Manual Operativo del programa en el que se desarrollará el ciclo operativo de cada una de las actividades y líneas estratégicas que se requieran.

En el manual operativo se estableció que, de acuerdo con las funciones y competencias del Ministerio del Interior, definidas en el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los artículos 4 del Decreto 1140 de 2018, 1 del Decreto 2353 de 2019, y 1 del Decreto 1152 de 2022, entre las cuales están las de "liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a fortalecer las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales y la gobernabilidad territorial; así como el orden público interno y la convivencia ciudadana; Planear, coordinar, proponer políticas y trazar directrices, que orienten el marco político de un Estado Social de Derecho, la autonomía y gobernabilidad territorial, de acuerdo con los lineamientos del Ministro"; serán las direcciones de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal; y por su parte la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, las áreas misionales del Ministerio del Interior, que coordinarán interinstitucionalmente la oferta de corresponsabilidad del Programa y adelantarán las acciones de coordinación del componente en los términos del Decreto 1649 de 2023.

De igual forma la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata desplegará acciones de articulación con los entes territoriales, y las áreas anteriormente referidas podrán, impulsar y generar líneas de inversión dirigidas al buen desarrollo del Programa Nacional Jóvenes en Paz, en clave de generar impacto en los niveles de seguridad y convivencia en los territorios.

Considerando lo anterior, el Ministerio del Interior:

1. Liderará la articulación con entidades del orden nacional y territorial con el fin de levantar la oferta de planes, programas y proyectos que puedan ser implementados desde este componente en el marco de este Programa Nacional.
2. Recibirá los soportes de participación de las y los beneficiarios del Programa en este componente.

3. Allegará los respectivos soportes a la Dirección de Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad y Equidad, que demuestren el cumplimiento de este componente.

4. Participará en el Comité Directivo del Programa Nacional Jóvenes en Paz con voz y voto.

Esta labor de articulación se realizará con las entidades de que trata el Artículo 27 del Decreto 1649 de 2023, y con todas aquellas que cuenten con oferta institucional en corresponsabilidad, las cuales, para efectos de la caracterización de su oferta, definirán:

1. Línea estratégica en la que se encuentra inmersa
2. Denominación del plan, programa o proyecto.
3. Objetivos del plan, programa o proyecto.
4. Metodología del plan, programa o proyecto.
5. Intensidad horaria en horas y semanas.
6. Requisitos para cumplir el plan, programa o proyecto.
7. Estrategia de seguimiento del plan, programa o proyecto.
8. Número de cupos para cada municipio y en cada vigencia.
9. Necesidades en cuanto a espacios físicos y dotación requerida.
10. Si la oferta se puede complementar con alguno de los otros componentes del Programa.

En línea con lo expuesto, el proyecto propone un marco institucional para la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana para el período 2022-2026, compuesto por dos componentes estructurales, a saber:

COMPONENTE 1. Una política pública que defina un horizonte y sentido de las acciones de gobierno en materia de convivencia y seguridad ciudadana:

Si los acentos de las políticas públicas que hasta ahora han regido la voluntad y acción de la administración, han estado situados sobre el paradigma securitario y se han evidenciado sus repercusiones negativas sobre la calidad de la democracia, se hace necesario desarrollar un marco de política pública que incorpore el nuevo acento de la seguridad humana con todo su valor público en los diseños institucionales que se definan para la gestión de la convivencia, el conflicto social, el orden público y la seguridad ciudadana.

Las líneas que se abordarán desde este escenario son:

1. Actualizar los lineamientos de política pública para la articulación territorial con enfoque de seguridad humana.
2. Fortalecer los lineamientos y capacidades para la destinación de recursos territoriales para la convivencia y la seguridad ciudadana en el territorio.

3. Promover la articulación entre las autoridades competentes en torno a la creación e implementación de estrategias de convivencia y seguridad del orden Nacional y Territorial.

El seguimiento y la evaluación de la política deben obedecer a los catalizadores que permitan establecer si:

Luego de la formalización de las actividades de la política pública con las entidades públicas, su respuesta fue eficiente a través de soluciones a problemas sociales complejos.

1. Ha habido participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones institucionales que impactan sus vidas en lo cotidiano en función de fortalecer la democracia.

2. Se ha buscado reconstruir el tejido social, transformando valores, creencias y actitudes para lograr una relación pacífica entre las personas, que permita una interacción respetuosa en medio de la diversidad.

COMPONENTE 2. Implementación del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, SNCPV:

Para garantizar la adecuada implementación de la política pública descrita, el segundo componente define una infraestructura institucional congruente con los objetivos que esta persigue. En este sentido, el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida es un modelo de convivencia y seguridad que resignifica la relación entre la nación y los territorios, en lo que refiere a la forma democrática y pacífica de brindarle tratamiento y gestión a los conflictos sociales.

Carácter multinivel y multiescala

El SNCV articula la acción de gobierno en perspectiva multiescala. Esto es, que integra actores estatales, académicos, así como movimientos sociales y sujetos colectivos, al tiempo que enfoca su actuación en los niveles nacional, departamental y municipal, sin desconocer que existen regiones y subregiones culturales o geográficas, o que las escalas de lo local también existen al interior de lo municipal o distrital. Entre otras escalas, existe la dualidad del apartheid social o de los estados paralelos.

Líneas estratégicas del SNCV

Investigación y Gestión del Conocimiento – de Observación y Análisis para la Transformación Social – COATS-

El COATS es una red de observatorios locales y nacionales que se enfoca en la lectura de fenómenos con base en un fundamento paradigmático que reconoce en los conflictos el núcleo esencial de los procesos democráticos, en los que la posibilidad de cambio social pacífico se materializa en la medida en que se cuente con dispositivos adecuados y pertinentes para su gestión y tratamiento.

En tal sentido, el COATS se nutre del diálogo con observatorios nacionales o locales tanto de entidades del Estado (alcaldías, corporaciones autónomas, centros públicos de investigación, etc.), de actores académicos (semilleros, grupos de investigación, observatorios, centros de

pensamiento, universidades, etc.), así como también de organizaciones, movimientos sociales y sujetos colectivos (ONG, centros de documentación, archivos de organizaciones, etc.). Sin embargo, el COATS enriquece a sus observatorios aliados en la medida en que si bien, produce reportes de análisis, también les ofrece retorno local, visibilización, posicionamiento e interlocución.

El COATS simultáneamente con la caracterización local de la convivencia, entrega orientaciones para el desarrollo de planes de acción para la gestión y manejo de conflictos, a través de la estrategia territorial.

Estrategia de gestión territorial: Acción local y respuesta sistémica.

El SNCV se conecta con la territorialidad a través del conjunto de actores que ocupan un lugar en el ecosistema de la gestión y tratamiento de conflictos, de tal manera que reconoce la existencia de capacidades locales para la paz en los múltiples líderes de procesos sociales de gestión de conflicto presentes en las organizaciones comunales, en los operadores de justicias comunitarias (instituida o propia), las guardias campesinas, cimarrona e indígena, los mediadores comunitarios, mediadores escolares, los programas de justicia restaurativa y terapéutica. etc.

Si los efectos devastadores del conflicto armado no han desintegrado la sociedad colombiana es porque existen capacidades locales que conectan y sostienen el vínculo social. Ese es el principal recurso social para la construcción de la paz desde un enfoque de Acción Sin Daño, Interseccional y Restaurativo.

No obstante, la violencia se disemina en los ámbitos básicos de la sociabilidad, tales como las relaciones domésticas, vecinales, comunitarias, de género, en el espacio público, en el transporte, en los entornos educativos, en los espacios laborales, etc. Si el conflicto armado produce cerca del 25% de las muertes violentas en Colombia, la violencia cotidiana aporta tres cuartas partes de los homicidios, indicando que los conflictos que no se tratan adecuadamente son los generadores de buena parte de las tragedias.

Por esa razón, es inaplazable trabajar de manera eficiente con todos los actores locales que gestionan conflictos y contribuyen con la generación de convivencia. De ese modo, establecer planes de acción y entregar lineamientos técnicos a los tomadores de decisiones locales para que fortalezcan la capacidad de ofrecer respuestas integrales ante los conflictos que se presentan en sus contextos.

Estrategia formativa: Fortalecimiento comunitario e institucional, pedagogía y cultura de paz

De acuerdo con los propósitos del Plan de Gobierno, que fueron plasmados en el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo, la Seguridad Humana apunta a la satisfacción de necesidades humanas, como vehículo para la expansión de capacidades y el logro del bienestar integral. Por esa razón es coherente el trabajo orientado a fortalecer las capacidades locales comunitarias e institucionales para que la gestión de los conflictos posibilite la superación de situaciones de discriminación, represión y desigualdad.

Es así que el SNCPV busca afianzar estrategias de intervención pedagógica que ofrezca recomendaciones y lineamientos para los entes territoriales y los decisores locales para la

formulación y ejecución de proyectos, la orientación de la inversión, y la evaluación de sus efectos sobre problemas y demandas sociales cuyas respuestas han sido postergadas. De ese modo, el cambio se produce en epicentros territoriales con apoyo del SNCPV y la provisión de herramientas para la mejor gestión de la convivencia y la seguridad.

Por otro lado, las comunidades y organizaciones recibirán cajas de herramientas que les ayuden en el desarrollo de rutas de gestión y abordaje de conflictos estructurales y directos, tales como conflictos ambientales, conflictos en el espacio público, en las comunidades educativas, en la vecindad en la ruralidad o en propiedad horizontal y copropiedades, en los hogares, etc., a través de las cuales se logre modificar estados de cosas sociales en los que se reproducen violencias como el racismo, el clasismo, la hegemonía patriarcal y las violencias basadas en género, así como otras formas de discriminación y segregación.

Además, se creó el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como FONSECON, como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, con el objeto de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.

Posteriormente, en el año 2011 fue promulgado el Decreto 399 el cual estableció la organización y funcionamiento del FONSECON y por supuesto de los FONSET, así como también introdujo modificaciones al Decreto 2615 de 1991 al respecto de los Consejos de Seguridad y la figura de los Comités Territoriales de Orden Público como una instancia encargada de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET. Según el Decreto, la destinación prioritaria de estos recursos del FONSET será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana del nivel nacional.

En virtud de lo anterior, le corresponde al Ministerio del Interior, no solo la administración del FONSECON, sino también verificar la creación de los FONSET en las entidades territoriales y realizar seguimiento a las inversiones que las entidades territoriales realizan con los recursos de los FONSET. Conociendo los recursos que anualmente ingresan a cada fondo cuenta territorial de seguridad, así como los proyectos y actividades que se financian con éstos, lo que supone diseñar un modelo de servicios y una metodología de aplicación de indicadores que permita cumplir el mandato de la ley y del decreto en la implementación de esa política de seguridad ciudadana en lo local, enfocada hacia los ejes de la oferta institucional, para su aplicación en el nivel territorial, atención a poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana y afianzamiento de la gobernabilidad territorial, como sustento de la seguridad nacional, todo lo anterior soportado en el modelo sinérgico de la política de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Adicional a lo anterior, la Ley 1801 de 2016 por la cual se expidió el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estableció para los Alcaldes y Gobernadores, a través de sus artículos 201 y 205, la obligación de crear o actualizar el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia y de elaborar e implementar dentro de los seis primeros meses de gobierno el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, acorde a las políticas del Gobierno Nacional y del Plan de Desarrollo Nacional y Territorial, de igual forma en su artículo 180 se establece la destinación de recursos obtenidos de las diferentes multas de su aplicación a la

cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad.

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, constituyen un instrumento de planeación estratégica a través con el cual las Entidades Territoriales buscan la dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen, inseguridad y convivencia que afectan su territorio; de igual forma es un insumo para determinar las inversiones y abordar de manera integral los temas de seguridad y convivencia.

Dichos PISCC no son una herramienta nueva, sino que por el contrario hacen referencia al documento de planeación estratégica con líneas de acción, programas y proyectos que tienen por finalidad solucionar las problemáticas de seguridad y convivencia, y que fueron creados a partir de la Ley 62 de 1993 e introducidos por la Ley 418 de 1997 y la Ley 1421 de 2010 como el instrumento para focalizar los recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia – FONSET. Adicionalmente, en referencia al fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana a nivel regional o de áreas metropolitanas y la reglamentación parcial del Código de Policía y Convivencia, es posible su diseño, implementación, seguimiento y evaluación según sea el caso (Art. 2.2.8.2.12 del Decreto 1070 de 2015).

En la Ley 4 de 1991 se dictan normas sobre el orden público las cuales comprenden la obligación por parte de las autoridades territoriales en cuanto la rendición de informes sobre situaciones generales y especiales de orden público, de igual forma se establece el Régimen Normativo del Orden Público Interno y también el régimen disciplinario en la materia, el cual se integra con las sanciones por incumplimiento de órdenes del Presidente de la República en materia de Orden Público en la Ley 418 de 1997.

Para garantizar la seguridad, la convivencia y el orden público en los Departamentos y Municipios del país, buscan el fortalecimiento de roles y competencias de las Entidades Territoriales y de los actores involucrados en la seguridad, la convivencia y el orden público a partir de la adecuación de la arquitectura institucional en la materia.

Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”

El proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional “*Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026” Colombia, Potencia Mundial de la Vida*”, el cual contiene los objetivos del Gobierno Nacional que promueven la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia, es decir, una cultura de paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común; en su artículo 3, se presentan 5 ejes de transformación, dentro de los cuales, se encuentra el eje número 2, *Seguridad Humana y Justicia Social*, el cual lo describe de la siguiente manera:

“2. Seguridad humana y justicia social. Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad.”

Adicionalmente, y complementario al eje de Seguridad Humana y Justicia Social, en el artículo 4, se contemplan 3 ejes transversales, dentro de los cuales, se encuentra la Paz Total, descrita de la siguiente manera:

“1. Paz total. Entendida como la apuesta para que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos. Busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza.”

Así mismo, dentro de su artículo 90, el PND, contempla la estrategia de diálogo social, la cual, se llevará a cabo mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Ciudadana, dicho artículo en mención, se describe a continuación:

“ARTÍCULO 90. ESTRATEGIA DE DIÁLOGO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL Y LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL. EI

Ministerio del Interior como coordinador y enlace de las entidades del orden nacional y de los entes territoriales, liderará la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la Política Pública de Diálogo Social en el marco de la Seguridad Humana.

Los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -FONSECON-, igualmente podrán ser destinados para financiar las estrategias del Sistema Nacional de Convivencia Ciudadana. “

La gestión de la convivencia y la seguridad es una agenda prioritaria de la ciudadanía, dado la creciente preocupación por el desamparo de las personas, las comunidades y los territorios, ante la proliferación de riesgos y vulnerabilidades, sean estos objetivos o percibidos (ver cifras en acápite de antecedentes). Lo anterior reproduce condiciones que obstaculizan el goce efectivo de los derechos ciudadanos, asociados a la vida digna, libre de miedo y libre de necesidad.

Por ello, en el marco expuesto, el presente proyecto de inversión atiende los lineamientos del Programa de gobierno 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, para diseñar e implementar un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana, partiendo desde el enfoque de seguridad humana, corresponsable, integral, contextualizado y preventivo, en cuyo marco las entidades territoriales y las comunidades cuenten con estrategias diferenciales y territoriales, conforme a sus realidades y necesidades de convivencia, seguridad y gestión pacífica de conflictos.

Por último, es importante agregar, que en la base de este proyecto está la certeza de que la paz total debe anclarse a procesos que revalorizan la convivencia, la participación y enfoque social como pilares esenciales en este propósito, toda vez que en ella reposan las posibilidades de dar sentido y fortalecer el tejido social, estimulando habilidades para la vida en comunidad, en el que en buena medida subyace la sostenibilidad de los acuerdos, en términos de una paz estable y duradera. Es a través de los vínculos sociales que la sociedad va a poder apropiarse de sus procesos de construcción de convivencia, promoviendo los derechos políticos de las mujeres bajo el principio de paridad y alternancia. mientras el Estado proporciona condiciones para el desarrollo humano y social, reconstituyendo su valor público y la confianza social en las materias

de que se ocupa este proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La gestión de la convivencia y la seguridad es una agenda prioritaria de la ciudadanía, dado la creciente preocupación por el desamparo de las personas, las comunidades y los territorios, ante la proliferación de riesgos y vulnerabilidades, sean estos objetivos o percibidos (ver cifras en acápite de antecedentes). Lo anterior reproduce condiciones que obstaculizan el goce efectivo de los derechos ciudadanos, asociados a la vida digna, libre de miedo y libre de necesidad.

Ante este escenario, las respuestas institucionales han orientado sus acciones desde marcos en los que el concepto de convivencia se diluye, entre dispositivos orientados por una fuerte ligazón con la mirada policial y securitaria de la seguridad, lo que se traduce en:

- (i) La prevalencia de modelos de vigilancia policial, que derivan en la exigencia inviable de la ampliación de fuerza pública en todos los ámbitos de la sociedad donde haya conflicto o afectaciones a la convivencia;
- (ii) Políticas de tolerancia cero, agravando el ECI en cárceles, extendido a las URI y estaciones de policía;
- (iii) Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en materia de control del orden público, con graves afectaciones a los derechos a la manifestación pública y la protesta social;
- (iv) Promoción del populismo punitivo, incrementando la presión y los cuellos de botella del aparato de justicia y la profundización de la crisis de confianza en las instituciones estatales.

El modelo de gestión descrito, además de connotar rasgos represivos y autoritarios, no ha demostrado un impacto coherente con la necesidad de generar transformaciones de fondo a las causas de las violencias sociales, las vulnerabilidades poblacionales y territoriales a distintos fenómenos de inseguridad producidos por la expansión del crimen y la delincuencia en sus contextos, igualmente vulnerables; tampoco ha contenido la diseminación de la violencia instaurada y normalizada en la cultura de la gestión violenta de los conflictos en los distintos ámbitos de la vida cotidiana como la familia, la escuela y la universidad, los espacios públicos, entre otros; o la victimización de sujetos vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los pueblos étnicos, los habitantes de calle, etc.

Así mismo, el rol de las entidades territoriales resulta marginal y subordinado al apoyo operativo y logístico de las estrategias mencionadas, con el consecuente debilitamiento de sus capacidades y competencias para gestionar respuestas integrales orientadas a la transformación de los vínculos entre inequidad, discriminación, desigualdad, falta de oportunidades y conflicto violento. En este sentido, es necesario fortalecer la participación ciudadana con el fin de promover los diálogos territoriales implementando metodologías y herramientas que permita incidir en asuntos públicos, tanto en instancias reglamentadas de participación, como en otras expresiones y manifestaciones de la sociedad y los actores en el territorio.

En consonancia con lo anterior, se impulsarán iniciativas para mejorar las capacidades de las mujeres diversas bajo el principio de paridad y alternancia en los organismos de acción comunal

Por ello, en el marco expuesto, el presente proyecto de inversión atiende los lineamientos del Programa de gobierno 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, para diseñar e implementar un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana, partiendo desde el enfoque de seguridad humana, corresponsable, integral, contextualizado y preventivo, en cuyo marco las entidades territoriales y las comunidades cuenten con estrategias diferenciales y territoriales, conforme a sus realidades y necesidades de convivencia, seguridad y gestión pacífica de conflictos.

Lo anterior, en congruencia con lo establecido por el Decreto 1152 de 2022, por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se definen las siguientes competencias y funciones del Viceministerio General Funciones del Despacho del Viceministro General del Interior. Son funciones del Viceministro General del Interior, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas públicas del Ministerio dirigidas a fortalecer las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales y la gobernabilidad territorial; así como el orden público interno y la convivencia ciudadana.
2. Liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas públicas del Ministerio, dirigidas a fortalecer las relaciones del Gobierno nacional con la Rama Legislativa a través del impulso, seguimiento y control de la Agenda Legislativa del Gobierno nacional y las relativas a la democracia, la participación ciudadana, la acción comunal y la coordinación del control a la gestión misional de la entidad.
3. Planear, coordinar, proponer políticas y trazar directrices, que orienten el marco político de un Estado Social de Derecho, la autonomía y gobernabilidad territorial, de acuerdo con los lineamientos del Ministro.
4. Asistir al Ministro en la función de enlace, comunicación y coordinación entre las entidades públicas del orden nacional, del sector central y descentralizado, y los entes territoriales y sus entidades descentralizadas.
5. Apoyar la elaboración de la planeación estratégica del Sector Administrativo, en los temas de su competencia.
6. Coordinar y hacer seguimiento de las actividades de las direcciones del Ministerio adscritas a su despacho, para garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos del Ministerio.
7. Apoyar la gestión estratégica del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana en cumplimiento de las disposiciones legales.
8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de la Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
9. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Por último, es importante agregar, que en la base de este proyecto está la certeza de que la paz total debe anclarse a procesos que revalorizan la convivencia como un pilar esencial en este propósito, toda vez que en ella reposan las posibilidades de dar sentido y fortalecer el tejido social,

estimulando habilidades para la vida en comunidad, en el que en buena medida subyace la sostenibilidad de los acuerdos, en términos de una paz estable y duradera. Es a través de los vínculos sociales que la sociedad va a poder apropiarse de sus procesos de construcción de convivencia, mientras el Estado proporciona condiciones para el desarrollo humano y social, reconstituyendo su valor público y la confianza social en las materias de que se ocupa este proyecto.

Con respecto a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, se espera que, al tener la estructura y los respectivos documentos de política pública, documentos normativos, e implementación del Sistema Nacional de Convivencia Para la Vida, se realizará la respectiva solicitud ante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la creación de un rubro que soporte el funcionamiento y/o actividades del Sistema y las demás relacionadas en el presente proyecto. Dado que, en la actualidad, el Despacho del Viceministerio General del Interior, únicamente cuenta con un programa de funcionamiento relacionado con la atención, coordinación y/o articulación de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el cual corresponde a las funciones relacionadas en el Decreto 2124 de 2017, y el cual creado por la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, la cual indica lo siguiente:

- La Sentencia de Tutela T-025 de 2004, emitida por la Honorable Corte Constitucional, declara el Estado de Cosas Inconstitucional, en el marco de la violación generalizada y permanente a los derechos humanos, y a la falta de atención integral del Estado colombiano a las víctimas por desplazamiento del conflicto armado.
- La Sentencia T-025 de 2004 exhorta al Estado colombiano a generar acciones de coordinación con las entidades nacionales y territoriales, destinar presupuestos específicos, aplicar el enfoque diferencial y garantizar el goce efectivo de derechos a la población víctima del desplazamiento, de manera integral con políticas públicas, programas y estrategias.

Por otro lado, en la medida en que se ejecuten las actividades, se fortalecerán las capacidades del personal de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, lo cual facilitará el seguimiento y/o continuidad de los objetivos del proyecto.

OBJETIVO 1.

Formular instrumentos de política, normativos y técnicos que permitan la articulación de la gestión para la convivencia y seguridad en el territorio Nacional.

Si los acentos de las políticas públicas que hasta ahora han regido la voluntad y acción de la administración, han estado situados sobre el paradigma securitario y se han evidenciado sus repercusiones negativas sobre la calidad de la democracia, se hace necesario desarrollar un marco de política pública que incorpore el nuevo acento de la seguridad humana con todo su valor público en los diseños institucionales que se definan para la gestión de la convivencia, el conflicto social, el orden público y la seguridad ciudadana.

Formular política pública de convivencia y seguridad

La política pública de convivencia y seguridad para la vida será el documento que garantice la articulación y cumplimiento de los designios del plan de desarrollo, ejecutando las acciones de la seguridad humana y la justicia social, en la garantía de la dignidad humana, el ejercicio de las libertades y el desarrollo de las capacidades necesarias para que las personas y los hogares puedan llevar a cabo el plan de vida que consideran valioso

En el ciclo de las políticas públicas, se requiere previo a la formulación de la política pública elaborar una serie de documentos que le den vida y viabilidad al documento final. Ellos son:

1. Documento de diagnóstico de la política Marco de convivencia y seguridad de la vigencia anterior, cuya caducidad se produce por el cumplimiento del tiempo de su ejecución, se requiere evidenciar la situación en la que se cierra el documento y el alcance de su implementación.
2. Levantamiento de la línea base de los problemas de convivencia y seguridad tanto del orden nacional como del orden territorial, con una perspectiva temporal que abarque los retos del proceso de paz adelantado en el país.
3. Identificación del marco normativo que sustenta el documento CONPES de política en temas de convivencia, seguridad y definición de los marcos presupuestales y de financiamiento de las acciones en el territorio.
4. Identificar un marco de referencia para la política, el cual incluye, entre otros, las estrategias o programas de orden nacional o sectorial precedentes o relacionados, iniciativas de proyectos con los mismos propósitos, estudios técnicos o académicos previos sobre el estado y resultados de los temas de convivencia y seguridad, al igual que experiencias internacionales relacionadas.
5. Desarrollar acciones de consulta y validación con los actores sociales para la formulación de la política pública de convivencia y seguridad, para ello se requiere la formulación de un documento metodológico que oriente la agenda pública en dos etapas, la primera grupos focales con expertos de convivencia y seguridad, con quienes se identificarán los problemas generales de la política y la segunda la validación con comunidades en el territorio, en este ejercicio se requiere del apoyo de un equipo técnico que sistematice y analice los resultados obtenidos en la etapa de agenda pública. Descripción de la actividad:
6. El procedimiento de elaboración del documento debe contener el máximo nivel de consulta posible para validación con los actores territoriales priorizados por su condición especial en temas de convivencia, seguridad o conflictividad social. Se espera llegar a todos los departamentos para recoger las necesidades de convivencia y seguridad en los territorios, comprendiendo las diferencias de las distintas poblaciones. Para la definición de los actores, se tendrá en cuenta las orientaciones del Documento CONPES 3867, 1. territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado; 2. requieran mejorar la colaboración y gobernanza multinivel en el posconflicto; 3. requieran alinear los objetivos de desarrollo y construcción de paz entre la Nación, los departamentos y los municipios; 4. Requieran promover la concurrencia de esfuerzos en los territorios; todo esto debe ser orientado por con la participación de las comunidades; con ellas, se fortalecerán los procesos de planeación, priorización, ejecución y seguimiento de proyectos para el desarrollo y la consolidación de la paz en el territorio.

OBJETIVO 2:

Mejorar la gestión de la información referente a la convivencia y seguridad entre actores territoriales, nacionales e interinstitucionales.

Considerando la relevancia de la gestión de la información en el diseño de estrategias pertinentes y contextualizadas para la convivencia y la seguridad, este objetivo apunta a la construcción de vínculos colaborativos entre actores multiescalares y las fuentes de información de los diferentes

sectores del gobierno y la academia.

Una vez consolidadas las instancias y procesos articulados entre estos, la gestión de la información se enfocará en el análisis de la conflictividad social en los distintos territorios priorizados. En consecuencia, el SNCPV nutrirá el diseño de estrategias encaminadas a la gestión territorial de la convivencia y la seguridad, en una perspectiva integral y preventiva, en plena correspondencia con el objeto del sistema. Esto se realiza a través de las siguientes actividades:

OBJETIVO 3:

Crear mecanismos de articulación, coordinación, atención y seguimiento de las conflictividades sociales en el marco de la seguridad humana en el territorio.

A partir de la acción continua y presencia articulada del SNCPV en los territorios, en la que se produzca un diálogo fluido con interlocutores y actores fundamentales en los procesos de convivencia local, se priorizará agendas específicas de convivencia a partir de las cuales el equipo de gestión territorial, formulará estrategias locales de intervención y acción (éstas pueden ser sobre diálogo social, cultura ciudadana, gestión de conflictos ambientales, espacio público, prevención y atención a violencias basadas en género, comités de convivencia escolar, etc.). Esta priorización permitirá desarrollar escenarios de convivencia en los que todos los actores locales involucrados trabajarán en la construcción de modelos de intervención y tratamiento de la conflictividad desde los enfoques de Acción Sin Daño, Interseccionalidad y Restaurativa, frente a los cuales el SNCPV entregará recomendaciones, herramientas o instrumentos para las entidades territoriales y actores locales, y establecerá propuestas para la incorporación de módulos al modelo de información del Centro de Observación y Análisis para la Transformación Social –COATS.

OBJETIVO 4:

Implementar estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia en el marco de la seguridad humana.

Se realizará un diseño (protocolos de intervención) teniendo en cuenta los niveles de complejidad de la conflictividad social y la misionalidad de las entidades de orden nacional y territorial, para tener un lineamiento frente a la atención de resolución de conflictividades sociales en los territorios, en el marco de la convivencia y la seguridad humana.

Se formularán documentos de lineamientos técnicos que desarrollen los procedimientos técnico-legales para definir, a escala local, los instrumentos de gestión territorial de la convivencia y la seguridad.

El Ministerio del Interior, desde su misionalidad, acompaña a las entidades territoriales en la correcta formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, por lo que ésta es una actividad que en el próximo periodo de los gobiernos locales demandará ingentes esfuerzos para acompañarlas en su debida formulación, proceso que se propone, que se realice en conjunto entre el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior.

Esta guía se diseñará con el fin de que las nuevas autoridades locales cuenten con una fuente de consulta a la mano, actualizada y con enfoque de seguridad humana, para que puedan hacer su respectivo PISCC con los elementos técnicos y conceptuales pertinentes para su implementación, seguimiento y evaluación.

OBJETIVO 5:

Implementar estrategias para fortalecimiento de los instrumentos de participación ciudadana, en el marco del desarrollo comunitario y la construcción de paz a mujeres y jóvenes en el territorio.

Teniendo en cuenta el cumplimiento a lo establecido en las bases del plan nacional de desarrollo 2022-2026 se implementarán acciones que permitan articular y garantizar la participación ciudadana con enfoque social, territorial y de género para la construcción de paz, donde se fortalecerán iniciativas para mejorar las capacidades técnicas, económicas y políticas de las mujeres bajo el principio de paridad y alternancia, en el marco de la convivencia y seguridad humana.

A continuación, se relaciona la distribución del presupuesto 2025 para el proyecto de inversión: **“FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL”**.

NOMBRE UEJ	RUBRO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	VALOR 2025
DESPACHO VICEMINISTERIO GENERAL DEL INTERIOR		FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL.	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / CONVERGENCIA REGIONAL A NUEVO MODELO NACIÓN TERRITORIO PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD	\$ 5.319.612.583
		FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL.	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA PARA LA VIDA	\$44.730.891.693
		FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL.	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA PARA LA VIDA	\$44.730.891.693
		FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL.	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / A NUEVO MODELO NACIÓN TERRITORIO PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD	\$ 5.218.604.031

NOMBRE UEJ	RUBRO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	VALOR 2025
		FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y PARTICIPATIVO POR LA PAZ E INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL.	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / CONVERGENCIA REGIONAL / PAZ TOTAL INTEGRAL/ NUEVO MODELO NACIÓN TERRITORIO PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD	\$ 34.135.488.315
TOTAL VIGENCIA 2025				\$ 134.135.488.315

3.1.3.16 FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE TRATA PERSONAS. (\$1.120.458.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3702-1000-17	\$ 1.000.000.000	\$1.120.458.000	\$ 120.458.000	12,05%
TOTAL	\$ 1.000.000.000	\$1.120.458.000	\$ 120.458.000	12,05%

BASE LEGAL

De conformidad con los artículos 12, 13, 16, 17 y 28 de la Constitución Política de 1991, los cuales señalan:

*Artículo 12. “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”.

*Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”.

*Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”.

*Artículo 17. “Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.”.

*Artículo 28. “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley”.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la Ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”.

Del mismo modo, el Congreso de la República expidió la Ley 800 de 2003 “Por medio de la cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)”. Aprueba los textos de la Convención y el Protocolo anotados y obliga al país a perfeccionar el vínculo internacional respecto a estos.

La primera consagra el desarrollo de la cooperación entre Estados para la lucha contra el crimen organizado, la protección de la soberanía, las penas para los miembros de estos grupos, la protección de pruebas, las medidas anticorrupción, aspectos procesales en general, la aplicación de la extradición, legislación sobre testigos y víctimas.

El Protocolo contiene las disposiciones acerca de la trata de personas, las formas de combatirla, el cuidado y tratamiento de la víctima, la prevención al flagelo, medidas de contención fronteriza y mecanismos de solución de controversias en la interpretación del tratado.

Así mismo, el Estado Colombiano expidió la Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”. Así mismo la presente Ley hace más gravosa la situación para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, modificando el Art. 188A de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 747 de 2002 y modificado por la Ley 890 de 2004.

Dando cumplimiento a la Ley 985 de 2005 en el Capítulo VII “Sistema Nacional de Información” cuyos artículos 17, 18 y 19 establecen que:

(...) Artículo 17. Definición y Funcionamiento. El Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas será un instrumento de recolección, procesamiento y análisis de la información estadística y académica relativa a las causas, características y dimensiones de la trata interna y externa en Colombia, que servirá de base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas, y para la medición del cumplimiento de los objetivos trazados en la Estrategia Nacional.

La Secretaría Técnica del Comité desarrollará, coordinará y mantendrá la operación del sistema de información. Para ello recogerá y sistematizará la información estadística que suministren las distintas entidades que integran el Comité, los resultados de las

investigaciones académicas, sociales y criminológicas a las que se refiere el artículo 19 de esta ley, datos que serán actualizados permanentemente.

Artículo 18. Suministro de información. La Secretaría Técnica diseñará un formulario dirigido a las instituciones que integran el Comité, con el fin de facilitar la recolección de datos.

Las entidades y organismos del Estado que manejen información relacionada con la trata de personas deberán colaborar con la Secretaría Técnica, suministrándole los datos que esta requiera para el desarrollo del sistema de información a las que se refiere la presente disposición, que en ningún caso podrán referirse a asuntos de reserva legal.

Los datos suministrados a la Secretaría Técnica se podrán dar a conocer al público en resúmenes numéricos y estadísticos, que no incluyan datos personales de las víctimas y que no hagan posible deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse con fines discriminatorios o que pudiera amenazar los derechos a la vida y a la intimidad de las víctimas.

Artículo 19. Investigaciones Acerca de la Trata de Personas. El Gobierno Nacional, y las entidades que integran el Comité Interinstitucional, realizarán por sí mismas en asocio con instituciones de educación superior y centros de investigación, investigaciones sobre aspectos relacionados con la trata de personas, tales como, las causas que la propician, las consecuencias para menores y adultos, la efectividad de la legislación existente, las características de sus víctimas y de la criminalidad nacional e internacional relacionada con estos hechos, y las particularidades regionales del fenómeno al interior del país. El resultado de estas investigaciones servirá para orientar las políticas públicas del Estado sobre trata de personas. (...).

De otra parte, la Ley 985 de 2005, “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”, en su artículo 4° señala que el Gobierno Nacional adoptará, mediante decreto, la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas.

En el capítulo VI de la Ley 985 Art. 12, modifica la denominación del Comité, el cual en adelante se denominará Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, y le asigna funciones como organismo consultivo del gobierno Nacional y coordinador de las acciones que desarrolla el Estado Colombiano. Está conformado por dieciséis entidades, entre las cuales se encuentra el Ministerio del Interior, entidad que ejerce la Secretaría Técnica. Las funciones del Comité son: asesorar, coordinar, elaborar, recomendar y proponer las políticas, estrategias, acciones, campañas e investigaciones relacionadas con la trata de personas y la política criminal que la sustenta.

En el artículo 13 de la Ley 985 del 2005 otorga al Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, la condición de “organismo consultivo y ente coordinador de las acciones que desarrolló el Estado colombiano a través de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas”.

A partir de las funciones de planeación de la política criminal y la política pública del Estado colombiano para la prevención, asistencia y protección a víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, y por mandato de la Ley 985 de 2005, el Comité elaboró la primera Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas, en el marco de un taller Interinstitucional

para el análisis y la formulación de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, la cual se constituye en el eje de la política estatal en esta materia, que fue aprobada el 14 de agosto de 2006, según consta el acta No. 003 del mismo año. En el año 2007 en taller participativo interinstitucional, el Comité en pleno concertó el texto contentivo de la estrategia. La Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas (2007-2012) fue adoptada mediante el Decreto 4786 de 2008, con el objetivo de desarrollar la política de Estado para la lucha contra la trata de personas interna y externa y reducir el fenómeno, desde los enfoques de DDHH, género, protección integral y territorial.

El Decreto 1036 de 2016 adoptó la Estrategia Nacional para el período 2016-2018. En 2018 debía evaluarse su impacto y formulársela nueva Estrategia Nacional. Sin embargo, y a pesar de que las Bases del Plan Nacional de Desarrollo establecieron como meta la formulación de esta estrategia, no fue sino hasta junio de 2020 que se consolidó la evaluación y se adoptó, mediante el Decreto 1818 de 2020, la nueva Estrategia Nacional.

La Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas fue creada como herramienta para combatir el delito de la Trata de Personas, y garantizar los derechos humanos de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, asistencia, persecución y sanción penal, para ser implementada en el orden nacional, departamental y municipal, bajo los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad.

Decreto 1152 de 2022 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior”. Artículo 18. Funciones de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra La Trata. Son funciones de la Subdirección las siguientes:

- a. Coordinar, participar, promover el diagnóstico, diseño y formulación de la política pública en materia de Lucha contra la Trata de Personas.
- b. Liderar, coordinar, proponer, evaluar y ejecutar los planes, acciones y/o rutas que permitan la articulación con las entidades competentes a nivel nacional, departamental y/o municipal, en el desarrollo de los programas y/o protocolos de asistencia inmediata y mediata a las víctimas del delito de trata de personas establecidos en la normatividad vigente.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

En Colombia el fenómeno de la trata de personas es un delito que afecta y violenta de manera directa, la dignidad de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional. Esta forma de violencia que produce una violación continua y permanente de los Derechos Humanos de las víctimas restringe las libertades individuales y vulnera la igualdad. La Organización de las Naciones Unidas, en particular en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los protocolos adicionales sobre la trata de personas y tráfico de migrantes, estableció que la trata de personas se perfila como una actividad que tiene como características: a) El reclutamiento, transporte, transferencia o recepción de personas; b) El uso de medios impropios, como la fuerza, la obducción, el fraude, o la coerción; y c) tiene como objetivo la explotación, bien sea sexual, bien por trabajos forzados, servilismo o esclavitud.

Para dimensionar la magnitud del problema se tiene como referencia el fortalecimiento que se ha tenido en el Ministerio del Interior con el proceso de difusión de este delito a nivel territorial, es

por eso que el Ministerio del Interior a través de sus canales de atención para el año 2023 apoyo con la atención de 261 casos de trata de personas. Este proyecto pretende atender los casos reportados al Ministerio del Interior en el todo el Cuatrienio con el 100%. (Fuente: Ministerio del interior).

En primer lugar, como describe Ripolli (2008), entrado el siglo XIX, pese a los esfuerzos del Estado colombiano, las denuncias por trata de personas han aumentado significativamente. Viéndose el país afectado por comercio sexual, tráfico de menores, y explotación laboral. El autor explica que los países en vía de desarrollo son más propensos a sufrir de estos problemas delictivos. Esto se explica desde los derechos humanos; cuando se suplen las necesidades básicas en relación con los derechos humanos de primera generación, que están en cabeza del Estado, las personas no resultan, en su mayoría, siendo víctimas de este delito. Naturalmente, las circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas regiones del país son completamente adversas. En últimas, con una desigualdad socioeconómica acentuada.

Henao (2008) describe otro de los grandes problemas en relación con el delito de trata de personas y que, a su vez, tiene estrecha relación con la incapacidad del Estado para combatirlo y la premisa de la desigualdad económica como factor de vulnerabilidad. Este problema es la existencia de grupos criminales organizados. El mismo autor menciona que la mayoría de los casos de trata de personas están ejecutados por grupos criminales. Además, menciona que “En Colombia las organizaciones criminales dedicadas a este delito tienen su origen en el núcleo familiar o aquellas formadas por vecinos. La forma como contactan a las víctimas es camuflando la actividad y haciendo que esta aparezca como lícita.” (Henao, 2008, p. 6).

De lo anterior podemos inferir que la forma en la que operan estos grupos en relación con el contacto de las víctimas hace provecho de las circunstancias económicas de las mismas. Pues al no contar con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, cualquier circunstancia que pueda tener un provecho económico será atractiva, mucho más si tiene apariencia de legalidad.

Ahora bien, uno de los problemas que presenta la política pública en Colombia para la investigación y sanción de este delito es la complejidad de la denuncia por la presencia de bandas criminales y la necesidad del testimonio de la víctima dentro del proceso penal (Henao, 2008).

Estos problemas son descritos desde la crítica propia al aparato jurisdiccional, pero son importantes por cuanto el objetivo de este proyecto es fortalecer la implementación de las acciones interinstitucionales y la divulgación de prevención, protección y asistencia en la lucha contra el delito de trata de Personas a nivel nacional.

Finalmente, descritos brevemente los problemas mencionados con anterioridad, se puede evidenciar que en Colombia hay dos grandes problemas en torno a la lucha contra el delito de trata de personas: Por un lado, la falta de divulgación de este delito y en segundo la falta de articulación interinstitucional efectiva para prevenir y sancionar el delito y, por otro lado el efecto más grande, es la desigualdad socioeconómica que pone a los colombianos desfavorecidos por este fenómeno, en una situación de especial vulnerabilidad frente a los grupos criminales dedicados a la trata de personas. En este orden de ideas, este proyecto se justifica con base en la búsqueda del fortalecimiento a las acciones mencionadas anteriormente.

OBJETIVOS

Objetivo General: Fortalecer la implementación de los lineamientos técnicos en la prevención, protección y asistencia en la lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional.

Objetivos Específicos: I. Mejorar las acciones de divulgación en prevención, protección y asistencia en la lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional. II. Apoyar la articulación institucional e interinstitucional en la prevención, protección y asistencia en la lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional. III. Fortalecer la capacidad institucional en la prevención, protección y asistencia en la lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de las acciones a realizar, se hace necesario continuar con la financiación a través de los recursos asignados para el proyecto de inversión “Fortalecimiento en la prevención, protección y asistencia en la lucha contra el delito de trata personas.”, con código BPIN: 202300000000093, el cual tiene un horizonte de planeación desde el año 2024 al 2027, recursos con los cuales se promoverá la realización de actividades descritas previamente.

El valor definido como necesidad corresponde al valor requerido históricamente para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subdirección en sus distintas actividades. Para el desarrollo del proyecto de inversión en referencia se requiere la producción de piezas audiovisuales en formato físico y digital, posteriormente se requiere difusión de dicho material en diferentes medios de comunicación de comunicación como periódicos, emisoras, televisión, redes sociales institucionales. Además, se deben realizar campañas de prevención en articulación con las entidades territoriales, campañas de prevención que deben contemplar el valor de los gastos de operador logístico, tiquetes, viáticos, honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica, entre otros.

Respecto los costos asociados al operador logístico se tiene que durante la vigencia anterior se celebró el contrato interadministrativo No. 1077 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA. Cuyo objeto es: “Prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”. Donde según la ejecución de la Subdirección se puede establecer que una asistencia técnica en un evento de pequeña magnitud requiere aproximadamente un valor mínimo de \$363.315, valor promedio de \$3.604.779 y un valor máximo de \$ 11.557.528, en lo que se refiere a gastos de operador logístico.

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores que están en comisión de servicios, con el fin de cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo, gastos que incluyen algunos traslados de transporte terrestre, hospedaje y alimentación. Según la ejecución presupuestal del año 2023 del Ministerio del Interior, especialmente esta Subdirección se puede evidenciar que el valor de viáticos por persona en promedio es de \$561.156, valor mínimo \$28.034 y valor máximo \$2.380.928. Valor que depende entre otras cosas, del lugar de realización de la asistencia técnica, número de días de comisión y honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica.

El Ministerio del Interior mediante la resolución No.0003 del 23 del 3 de enero de 2024, aclarada mediante resolución 0020 del 9 de enero de 2024, se adoptó la Tabla de Honorarios del Ministerio del Interior para la vigencia 2024, se establece el valor de los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales de acuerdo con su perfil académico y experticia o

conocimiento. Así las cosas, en la siguiente tabla se exponen los valores definidos para algunos profesionales según dicha resolución:

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 17.912.214	ASESOR 7	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Maestría, Doctorado o Posdoctorado.	66 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 102 meses de experiencia profesional O 78 meses de experiencia profesional y título de posgrado modalidad especialización.
\$ 11.508.813	ASESOR 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	42 meses de experiencia profesional.	Título profesional 66 meses de experiencia profesional.
\$ 10.273.876	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	36 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 60 meses de experiencia profesional.
\$ 9.639.276	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 5	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	30 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 54 meses de experiencia profesional.
\$ 8.481.332	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	24 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 48 meses de experiencia profesional.
\$ 7.487.316	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	18 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 42 meses de experiencia profesional.
\$ 6.281.321	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	12 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 36 meses de experiencia profesional.
\$ 5.417.495	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	6 meses de experiencia profesional.	N/A
\$ 5.106.281	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6	Título profesional.	30 meses de experiencia laboral.	Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y 6 meses de experiencia profesional.
\$ 4.738.302	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5	Título profesional.	24 meses de experiencia laboral.	Título profesional y Título de postgrado en la modalidad de especialización.
\$ 4.327.589	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4	Título profesional.	18 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.984.704	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3	Título profesional.	12 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.577.404	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	Título profesional.	6 meses de experiencia laboral.	N/A

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 3.096.652	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A
\$ 2.920.239	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A

Lo concerniente con el valor de los tickets de avión dependen del lugar donde se desarrollará el acompañamiento técnico y el punto de partida del vuelo, así como de la demanda de tickets que se presente en el momento de la compra.

Es imperativo resaltar que cada acompañamiento técnico tiene una naturaleza distinta dependiendo de la complejidad de la temática a desarrollar, la cual está relacionada directamente con los honorarios que deben ser cancelados al personal que realiza la capacitación, la tipología de asistencia técnica, el lugar geográfico donde se desarrollara el acompañamiento, la magnitud del evento donde se expone la asistencia técnica, y la cantidad de público que asiste al evento. Variables que indiscutiblemente hacen que los costos de cada asistencia técnica sean diferentes.

En el marco de la transformación digital y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de las administraciones en los territorios y en consonancia con uno de los objetivos del Gobierno Nacional en el marco de la Transformación Digital como motor de oportunidades e igualdad, y una fuente de desarrollo para impulsar la sostenibilidad de las regiones, innovación territorial, eficiencia en la gestión pública y así implementar soluciones digitales en facilite la prestación de servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología y hacer de nuestro territorio un lugar más competitivo en la era digital. En ese orden y dirección, se propone desarrollar y/o potenciar herramientas tecnológicas que permita mejorar el Sistema Nacional de Información de Lucha Contra la Trata de Personas.

Se considera un incremento porcentual promedio del 12.05% en comparación con el presupuesto del año 2024, considerando, lo establecido en el proyecto de inversión en referencia para el año 2025.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas - Elaboración de documentos técnicos en la prevención y protección en la	\$ 22.110.000	1	\$ 23.657.700	1

lucha contra la trata de personas a nivel nacional.				
Plan de trabajo - Elaboración de contenidos en la prevención y protección en la lucha contra la trata de personas.	\$ 103.180.000	1	\$ 110.402.600	1
Realizar mesas técnicas de socialización de los contenidos en la prevención en la lucha contra la trata.	\$ 123.990.000	1	\$ 132.669.300	1
Difusión y divulgación en la prevención, protección de la lucha contra el delito de trata de personas.	\$ 385.120.000	4	\$ 412.078.400	4
Realizar articulación y asistencias técnicas en el abordaje de la lucha contra el delito de trata de personas	\$ 35.000.000	8	\$ 124.470.000	8
Realizar diagnósticos y evaluaciones en la lucha contra la trata de personas a nivel nacional	\$ 5.000.000	1	\$ 183.430.000	1
Fortalecer la capacidad administrativa en la prevención, protección y asistencia de la lucha contra el delito de trata de personas.	\$ 325.600.000	1	\$ 0	0
Mejorar las diferentes estrategias de innovación en la prevención y asistencia del delito de trata de personas a nivel nacional.	\$ 0	0	\$ 133.750.000	1
Total	\$ 1.000.000.000		\$1.120.458.000	

3.1.3.17 FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CORPORACIONES PÚBLICAS Y LÍDERES LOCALES EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y DESCENTRALIZACIÓN. (\$23.038.019.200).

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3702-1000-18	\$ 20.000.000.000	\$ 23.038.019.200	\$ 3.038.019.200	15,19%
TOTAL	\$ 20.000.000.000	\$ 23.038.019.200	\$ 3.038.019.200	15,19%

BASE LEGAL

El Ministerio del Interior, a través de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra la Trata da inicio al cumplimiento del proyecto teniendo como línea el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA y que según lo establecido en la Sección II EL AGUA Y LAS PERSONAS, EN EL CENTRO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en donde se especifica que el ordenamiento del territorio parte de fortalecer la gobernanza y la participación para construir visiones comunes y visibilizar cuales son las intervenciones más estratégicas en los territorios, y con ello, ayudar a ordenar la compleja institucionalidad y simplificar los instrumentos que la acompañan, de manera que las decisiones que se tomen tengan implicaciones en el mediano y largo plazo en la sostenibilidad, en la productividad y en la calidad de vida de la población y la paz total se logrará cuando la justicia ambiental sea verdaderamente un hecho en todo el territorio nacional.

Con lo anterior se busca la ejecución de las asistencias técnicas enfocadas a las entidades territoriales para la promoción de la descentralización a través de la política de la Ley 1454 de 2011 (Ley orgánica de ordenamiento territorial) como instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales para la construcción colectiva del país con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, con el fin de propender por el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, económicamente, competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente adecuado, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia.

El Aprovechamiento de las funcionalidades territoriales que se extienden más allá de los límites político- administrativos y busca potencializarlas a través de la identificación de proyectos e intervenciones regionales y subregionales de gran impacto y del impulso a la coordinación y a la asociatividad territorial, estas estrategias surgen como línea de conexión con los territorios como instrumento para garantizar la gobernanza regional y el desarrollo territorial.

Decreto 1152 de 2022 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior”. Artículo 18. Funciones de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra La Trata.

El proceso de descentralización que ha liderado el Gobierno Nacional en los últimos cuatro años ha tenido grandes avances, en cuanto a la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios. La Ley tiene por objeto establecer los principios rectores del ordenamiento, definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial, definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las Áreas Metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial.

Con la expedición de esta Ley y la Ley 1962 de 2019 "Ley de Regiones", se han fortalecido las competencias otorgadas a las entidades territoriales; de tal manera que se reglamentó el Régimen Municipal- Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; el Régimen de Áreas metropolitanas - Ley 1625 de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas” y el Régimen Especial de Distritos- Ley 1617 de 2013 “Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.”, entre otra normatividad.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

En primer lugar, es de suma importancia tener claro la definición de descentralización y ordenamiento territorial. La descentralización; “es el proceso de otorgamiento que parte del poder gubernamental y de la responsabilidad transfiriéndose desde el nivel central nacional a los niveles municipales o estatales. Por otro lado, el ordenamiento territorial es un método, con fuerza de ley, que reglamenta el uso del territorio, precisando los usos viables para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio.

Existen herramientas e instrumentos importantes que hacen parte de la administración pública que promueven o determinan el desarrollo de las regiones mediante la aplicación de estrategias de fortalecimiento a la descentralización, la cual incluye la prestación de servicios públicos por parte de las entidades territoriales, mediante el otorgamiento de responsabilidades por parte del gobierno nacional a los municipios.

Es por ello, que las situaciones negativas que han sido identificadas en la población objetivo (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles) tiene que ver por una parte con la escasez de información sobre el funcionamiento de las entidades territoriales y corporaciones públicas, contemplada en los regímenes Departamental, Municipal, Distrital y Áreas Metropolitanas, con la que cuentan los mandatarios locales y miembros de las Corporaciones públicas en su período de gobierno, más cuando podemos observar que contamos con 1104 Municipios, de los cuales 968 son de 6 Sexta Categoría, eso equivale a un 88% de los municipios del País, con unas características deficientes que marcan el desarrollo de estas localidades.

Es importante resaltar que para el ejercicio de la función pública se requiere de un conocimiento específico respecto de normas relacionadas con el ordenamiento territorial, que no hacen parte del conocimiento práctico que exige otro tipo de disciplina u oficio, por tal motivo se identifica en ello un problema de acceso a información y del conocimiento requerido para el ejercicio de las funciones como mandatarios o como miembros de corporaciones públicas.

La descentralización fue planteada para el acatamiento de un doble objetivo: una primera parte, para mejorar la prestación de los servicios a cargo de las entidades territoriales, buscando que la gran mayoría de la población pueda acceder a más y mejores condiciones de vida, especialmente en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y una segunda parte, para democratizar la gestión pública en los departamentos y los municipios, a través de la institucionalización de espacios y mecanismos de participación.

Se ha notado que durante el transcurso de entrada en vigencia la Constitución de 1991, la cual impulsa y fomenta el principio de descentralización, que algunas regiones han logrado un mayor desarrollo económico y social para sus comunidades, sin embargo también existen otras regiones que por el contrario no han encontrado ese motor, porque existen divergencias regionales que imposibilitan un crecimiento armónico de la Nación, lo que a su vez también ha ocasionado la ampliación de brechas, lo cual se puede ver claramente en los indicadores sobre necesidades básicas insatisfechas en las entidades territoriales que cuentan con menores recursos para la prestación de los servicios.

Es así, que han sido notorias las debilidades que se están presentando con relación a las entidades territoriales, en el buen funcionamiento de lineamientos de descentralización y ordenamiento territorial en Colombia, es por ello que podemos mencionar la habilidad del gobierno de debilitar la descentralización y el ordenamiento territorial mediante la reducción de

los recursos de transferencia y, al mismo tiempo, el incremento de la inversión del gobierno central en los territorios, en campos que son de competencia de los gobiernos municipales y departamentales.

La débil capacidad de gestión, sus bajos niveles de transparencia y su dificultad para generar recursos propios y manejarlos adecuadamente.

Un problema que se evidencia en las regiones es que existe una completa desarticulación en la formulación de planes y programas que apuntan a la solución de impacto regional, porque existe desconocimiento en los instrumentos que contempla la Ley 1454 de 2011, tales como Esquemas Asociativos, Comisiones de Ordenamiento Territorial y Contratos Plan, por lo que se hace necesario formular una estrategia de comunicación y articulación entre las regiones y el nivel nacional, ya que actualmente todos los esquemas de planeación se limitan simplemente a las fronteras geográficas de cada uno de los municipios y los departamentos dejando de lado el enfoque de región para tener uno que se circunscribe solo a los límites territoriales.

Las entidades territoriales tienen asignados a sus presupuestos recursos de inversión que muchas veces no son llevados a cabo adecuadamente, lo cual es ocasionado por el desconocimiento de las normas que aplica a los funcionarios de mayor jerarquía en los municipios y gobernaciones, influencias políticas que desestimulan el uso eficiente de los recursos y la ejecución de programas y proyectos que impacten el beneficio en la población.

La transferencia de conocimiento en reformas normativas para el funcionamiento de las entidades territoriales y corporaciones públicas es un eslabón para fortalecer la institucionalidad y la descentralización, de competencia del Ministerio del Interior.

El problema en la legislación que, dentro del marco de la descentralización, busca la asignación de competencias. Algunos sectores presentan dificultades para entender sus funciones por cuanto el cuerpo normativo es múltiple y complejo. Naturalmente, este problema afecta la toma de decisiones por los organismos territoriales idóneos y la respuesta concreta e inmediata a los problemas que afectan los territorios de forma local.

Sumado a esto, según lo descrito en Bonet-Moron (2006) existen algunos desequilibrios regionales de la descentralización en relación con los ingresos de los gobiernos subnacionales. El autor menciona que, bajo la medición de transferencia de recursos per cápita, el desequilibrio se presenta por la incapacidad de las regiones subdesarrolladas de aumentar sus ingresos tributarios. Es decir, la incapacidad de los gobiernos locales de competir con las regiones desarrolladas más grandes genera un índice considerable de desigualdad. Este factor, sin duda, es fundamental para entender la situación de algunos municipios especialmente municipios PDET, ZOMAC y municipios de sexta categoría y su situación en torno a la paz.

Ahora bien, otro factor fundamental que presenta problemas dentro de estos modelos es la situación incómoda de los departamentos. Este problema es descrito por Restrepo (2002), pues aduce que la corrupción y las malas administraciones, además de la apertura económica creciente y el problema del contrabando, afectan seriamente su designación presupuestal. Además, dada su falta de recursos propios, no tienen funciones de gran envergadura como las entidades territoriales superiores o inferiores. Lo que al final, también se traduce en un problema de competencias.

En cuanto al clientelismo y la falta de transparencia en los procedimientos de selección de candidatos para el fortalecimiento de la democracia participativa, según Maldonado (2001), no

hay datos oficiales suficientes que permitan corroborar que este proceso es, hoy en día, óptimo y democrático. Así las cosas, gran parte de la población en general y, para no caer en falacias, la doctrina, consideran aún que estos procesos han mejorado muy poco y siguen siendo permeados por la corrupción y el clientelismo, de allí el que se tiene que fortalecer a los líderes locales para hacer procesos justos, control a las rendiciones de cuentas y eso traduce en una buena gestión pública.

Por otro lado, encontramos también carencia en la formulación de políticas públicas locales que permitan la participación ciudadana. Aunque en los últimos años hemos visto un avance significativo en este sentido, la falta de representación política en términos de decisiones generales genera un enorme sinsabor entre la ciudadanía. Si la formulación de dichas políticas fuera mayor, el porcentaje de satisfacción sería significativamente más grande, evitando probablemente el estado de inconformidad, inseguridad y rebelión en que se encuentran algunas regiones del país.

Con este proyecto se pretende fortalecer las entidades territoriales, los líderes locales y los esquemas asociativos territoriales generando herramientas que permitan el correcto ordenamiento territorial, la buena planeación y una excelente gestión pública en las regiones, con el fin de generar objetivos y metas comunes que beneficien a las comunidades, permitiendo generar propuestas de distribución de funciones entre gobierno subnacionales, buscando, esencialmente, generar un entorno de paz.

Por lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con las nuevas líneas del programa de Gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, es preciso ejecutar este proyecto con la ejecución de las actividades contenidas en el mismo las cuales se encuentran enfocadas al proceso de Fortalecer la gestión político administrativa, en el Ordenamiento del territorio alrededor del agua, desarrollo institucional y gestión pública a fin de realiza un acompañamiento exitoso en territorio y fortalecer la misionalidad de la dependencia en el territorio nacional.

OBJETIVOS

Objetivo General: Fortalecer la Articulación, Coordinación y participación de las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales en los procesos de ordenamiento territorial alrededor el agua y descentralización.

Objetivos Específicos. I. Articular el ordenamiento territorial en competencias institucionales (orgánico) con enfoque alrededor del agua. II. Desarrollar Herramientas tecnológicas encaminadas a la transferencia del conocimiento del conocimiento a las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales. III. Fortalecer el conocimiento de las autoridades territoriales y líderes locales en descentralización y ordenamiento territorial alrededor del agua. IV. Fortalecer los esquemas asociativos en el marco de la consolidación de la Paz.

Por otra parte, La transformación digital en las instituciones públicas es crucial para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos. Es importante resaltar que la transformación digital no se limita a la implementación de herramientas tecnológicas; también implica un cambio cultural profundo.

Desde la perspectiva de la cultura digital en las personas, existen razones sólidas para impulsar esta transformación digital en los procesos misionales de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata:

- Alineación con las necesidades de las personas: la transformación digital se sintoniza con las demandas de los actores en territorio, las víctimas de trata de personas y las organizaciones externas; y además a las necesidades de los funcionarios y contratistas al Ministerio del Interior. La cultura digital se refleja en agilidad, autonomía, crecimiento y equilibrio entre esfuerzo y resultados.
- Cambio de mentalidad: la transformación cultural implicará un cambio en la mentalidad dentro del equipo de trabajo de la Subdirección; en especial, la aleación de la digitalización con comportamientos de adaptabilidad, experimentación e innovación.
- Mejora de eficiencias y resultados: se considera la transformación digital como una gran oportunidad para mejorar la eficiencia y lograr mejores resultados por parte de las personas. Al abrazar la digitalización, las personas pueden crear un entorno dinámico, innovador y competitivo.
- Compromiso de la dirección: el liderazgo de la Subdirección se reflejará en la apuesta firme por la digitalización y transmitir esta visión al resto de la Institución.

Desde la perspectiva de los procesos y la tecnología la transformación digital, existen razones sólidas para impulsar esta transformación digital en la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata

- Mejora de procesos internos: La digitalización permitirá automatizar tareas, reducir la burocracia y agilizar los procedimientos administrativos; proteger los datos y la trazabilidad de la información.
- Optimización de recursos: La transformación digital ayudará a hacer uso de los recursos de manera más eficiente, reduciendo el trabajo operativo y el uso del papel como instrumento transaccional y de reportes.
- Mayor transparencia y participación ciudadana: la digitalización facilitará la publicación de información relevante en línea, lo que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la implementación de herramientas de participación ciudadana en línea facilita la colaboración entre la administración pública y los ciudadanos.
- Mejora en la toma de decisiones: la disponibilidad de datos en tiempo real permitirá tomar decisiones informadas y ayudará a identificar asuntos de mejora y a diseñar políticas públicas más efectivas.
- Adaptación a las demandas actuales: la sociedad está cada vez más digitalizada, y los ciudadanos esperan servicios ágiles y accesibles. La transformación digital permite satisfacer estas demandas y mejorar la experiencia del usuario.

En el marco de la transformación digital y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de las administraciones en los territorios y en consonancia con uno de los objetivos del Gobierno Nacional en el marco de la Transformación Digital como motor de oportunidades e igualdad, y una fuente de desarrollo para impulsar la sostenibilidad de las regiones, innovación territorial, eficiencia en la gestión pública y así implementar soluciones digitales en facilite la prestación de servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología y hacer de nuestro territorio un lugar más competitivo en la era digital. En ese orden y dirección, se propone desarrollar y/o potenciar herramientas tecnológicas que

permita mejorar significativamente la Gestión de las relaciones con los actores democráticos en todo el territorio nacional.

Para finalizar es preciso indicar que la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra La Trata, trabaja con Entidades Territoriales, Corporaciones Públicas y líderes locales, a través de la implementación del programa misional de funcionamiento, generando estrategias que le permitan a la entidad dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en el Artículo 18 del Decreto 1152 de 2022 y de esta manera impulsar y fortalecer a las administraciones territoriales, corporaciones públicas y líderes locales, en la profundización de la descentralización y el desarrollo de experiencias que promuevan la gestión, el buen gobierno local y en el territorio nacional.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de las acciones realizadas, se hace necesario continuar con la financiación a través de los recursos asignados para el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Articulación, Coordinación y participación de las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales en los procesos de ordenamiento territorial alrededor el agua y descentralización.”, con código BPIN: 202300000000167, el cual tiene un horizonte de planeación desde el año 2024 al 2027, recursos con los cuales se promoverá la realización de actividades descritas previamente.

El valor definido como necesidad corresponde al valor requerido históricamente para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subdirección en sus distintas actividades. Además, es importante indicar que el valor de cada una de los acompañamientos técnicos está compuesto por el valor de los gastos de operador logístico, tiquetes, viáticos, honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica, entre otros.

Respecto los costos asociados al operador logístico se tiene que durante la vigencia anterior se celebró el contrato interadministrativo No.1077 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA. Cuyo objeto es: “Prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”. Donde según la ejecución de la Subdirección se puede establecer que una asistencia técnica en un evento de pequeña magnitud requiere aproximadamente un valor mínimo de \$363.315, valor promedio de \$3.604.779 y un valor máximo de \$11.557.528, en lo que se refiere a gastos de operador logístico.

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores que están en comisión de servicios, con el fin de cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo, gastos que incluyen algunos traslados de transporte terrestre, hospedaje y alimentación. Según la ejecución presupuestal del año 2023 del Ministerio del Interior, especialmente esta Subdirección se puede evidenciar que el valor de viáticos por persona en promedio es de \$561.156, valor mínimo \$28.034 y valor máximo \$2.380.928. Valor que depende entre otras cosas, del lugar de realización de la asistencia técnica, número de días de comisión y honorarios del profesional que desarrolla la asistencia técnica.

El ministerio del interior mediante la resolución No.0003 del 23 del 3 de enero de 2024, aclarada mediante resolución 0020 del 9 de enero de 2024, se adoptó la Tabla de Honorarios del Ministerio del Interior para la vigencia 2024, se establece el valor de los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales de acuerdo con su perfil académico y experticia o

conocimiento. Así las cosas, en la siguiente tabla se exponen los valores definidos para algunos profesionales según dicha resolución:

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 17.912.214	ASESOR 7	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Maestría, Doctorado o Posdoctorado.	66 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 102 meses de experiencia profesional O 78 meses de experiencia profesional y título de posgrado modalidad especialización.
\$ 11.508.813	ASESOR 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	42 meses de experiencia profesional.	Título profesional 66 meses de experiencia profesional.
\$ 10.273.876	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	36 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 60 meses de experiencia profesional.
\$ 9.639.276	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 5	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	30 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 54 meses de experiencia profesional.
\$ 8.481.332	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	24 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 48 meses de experiencia profesional.
\$ 7.487.316	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	18 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 42 meses de experiencia profesional.
\$ 6.281.321	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	12 meses de experiencia profesional.	Título profesional y 36 meses de experiencia profesional.
\$ 5.417.495	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	6 meses de experiencia profesional.	N/A
\$ 5.106.281	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6	Título profesional.	30 meses de experiencia laboral.	Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización y 6 meses de experiencia profesional.
\$ 4.738.302	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5	Título profesional.	24 meses de experiencia laboral.	Título profesional y Título de postgrado en la modalidad de especialización.
\$ 4.327.589	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4	Título profesional.	18 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.984.704	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3	Título profesional.	12 meses de experiencia laboral.	N/A
\$ 3.577.404	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	Título profesional.	6 meses de experiencia laboral.	N/A

HONORARIOS 2024	PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA
IVA INCLUIDO				Frente al Manual de Funciones del Ministerio
(M/L)				
\$ 3.096.652	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A
\$ 2.920.239	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	Título profesional.	No requiere.	N/A

Con lo cual, es evidente que el costo del recurso humano empleado es altamente variable ya que depende de la complejidad de la temática a desarrollar.

Lo concerniente con el valor de los tiquetes de avión dependen del lugar donde se desarrollará el acompañamiento técnico y el punto de partida del vuelo, así como de la demanda de tiquetes que se presente en el momento de la compra.

Es imperativo resaltar que cada acompañamiento técnico tiene una naturaleza distinta dependiendo de la complejidad de la temática a desarrollar, la cual está relacionada directamente con los honorarios que deben ser cancelados al personal que realiza la capacitación, la tipología de asistencia técnica, el lugar geográfico donde se desarrollara el acompañamiento, la magnitud del evento donde se expone la asistencia técnica, y la cantidad de público que asiste al evento. Variables que indiscutiblemente hacen que los costos de cada asistencia técnica sean diferentes.

Se considera un incremento porcentual del 13.12% respecto del valor destinado para la vigencia 2024, esto considerando que la variación del índice de precios al consumidor IPC del año 2023, equivalente a la inflación del año 2022, cerró en 13.12 %, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –Dane. Además, el proyecto de inversión en referencia se formuló considerando el incremento anual del 13.12% correspondiente al año 2022, por lo que, para guardar la coherencia entre el proyecto de inversión en referencia y la solicitud de incremento actual se mantiene el porcentaje de inflación del año 2022 equivalente al 13.12%.

Adicionalmente, la actividad “Realizar asistencias técnicas a las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales en ordenamiento territorial orgánico.”. Se tiene previsto en el proyecto de inversión en referencia para el año 2025 un valor de \$ 2.601.760.000 y una meta de 147 asistencias técnicas, lo cual es superior en valor y alcance a la establecida en el año 2024. Por lo que, el incremento anual del proyecto es un poco mayor al 13.12%.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Documento con los resultados de las validaciones - Realizar seguimiento a los procesos de ordenamiento territorial y descentralización.	\$ 288.000.000	3	\$ 325.785.600	3
Plan de trabajo - Articulación de lineamientos en la creación del observatorio en ordenamiento Territorial.	\$ 288.000.000	3	\$ 325.785.600	3
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas - Apoyar la articulación de Lineamientos Orgánicos en ordenamiento territorial de las entidades territoriales indígenas, áreas no municipalizadas, fronteras entre otros.	\$ 576.000.000	6	\$ 651.571.200	6
Desarrollo de herramientas tecnológicas de optimización en la gestión administrativa.	\$ 1.500.000.000	2	\$ 1.696.800.000	2
Desarrollo de estrategias tecnológicas en la Transferencia de conocimientos a las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales	\$ 1.500.000.000	3	\$ 1.696.800.000	3
Realizar asistencias técnicas a las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales en descentralización, desarrollo institucional y gestión pública.	\$ 2.700.000.000	173	\$ 3.054.240.000	173
Realizar asistencias técnicas a las entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales en ordenamiento territorial orgánico.	\$ 1.934.000.000	124	\$ 2.601.760.000	147
Realizar eventos de articulación de oferta institucional y difusión del conocimiento a entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales en Ordenamiento territorial orgánico y descentralización.	\$ 1.800.000.000	5	\$ 2.036.160.000	5
Divulgación de criterios de ordenamiento orgánico regional y la asociatividad para la consolidación de la Paz.	\$ 400.000.000	1	\$ 452.480.000	1

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Implementación de programas de formación como la estrategia multiplicadora del conocimiento "Generadores del cambio" en Gestión pública.	\$ 150.000.000	51	\$ 169.680.000	51
Apoyar la transferencia de conocimiento de los líderes locales a la población territorial.	\$ 288.000.000	99	\$ 325.785.600	99
Promoción de esquemas asociativos territoriales para la paz	\$ 288.000.000	10	\$ 325.785.600	10
Implementación de una estrategia de mejora de las capacidades administrativas, técnicas y políticas de los esquemas asociativos a través de la asociatividad para la paz	\$ 288.000.000	10	\$ 325.785.600	10
Fortalecimiento de iniciativas de los esquemas asociativos territoriales (EAT).	\$ 4.000.000.000	5	\$ 4.524.800.000	5
Fortalecimiento de iniciativas de las entidades territoriales y corporaciones públicas en Ordenamiento territorial y descentralización.	\$ 4.000.000.000	5	\$ 4.524.800.000	5
Total	\$ 20.000.000.000		\$ 23.038.019.200	

A continuación, se relaciona la distribución del presupuesto 2025 para el proyecto de inversión:

Rubro	Nombre del proyecto	Descripción	Valor \$ Necesidad 2025
C-3702-1000-18-10204A	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CORPORACIONES PÚBLICAS Y LÍDERES LOCALES EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR EL AGUA Y DESCENTRALIZACIÓN.	1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL / A. EMPODERAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SUS COMUNIDADES	\$ 11.519.009.600

C-3702-1000-18-53105B	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CORPORACIONES PÚBLICAS Y LÍDERES LOCALES EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR EL AGUA Y DESCENTRALIZACIÓN.	5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	\$ 11.519.009.600
TOTAL			\$ 23.038.019.200

3.1.3.18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL. (\$ 2.795.667.437)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON RESPECTO A 2024
C-3703-1000-3	\$ 2.612.773.306	\$ 2.795.667.437	\$ 182.894.131	7%
TOTAL	\$ 2.612.773.306	\$ 2.795.667.437	\$ 182.894.131	7%

BASE LEGAL

El Ministerio del Interior, en cumplimiento de las competencias establecidas por la Ley 1448 de 2011, decretos leyes y decretos reglamentarios, así como las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 en materia de articulación nación territorio, para la vigencia 2025, presenta grandes apuestas en el marco de la implementación de la política pública de víctimas y, por ende, para el Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado, los cuales se pueden resumir en:

- Ampliación de la Ley de Víctimas y compromisos asumidos en el Plan de Acción y Seguimiento del CONPES 4031 de 2021.
- Articulación institucional e interinstitucional para definir las estrategias que permitan el acompañamiento a las entidades territoriales en el marco de la ampliación de la Ley.
- Ajuste de la estrategia de corresponsabilidad con énfasis en el enfoque étnico y las herramientas de seguimiento territorial.
- Generación de rutas para la inclusión de la política pública de víctimas como hecho interjurisdiccional y eje estratégico en los esquemas asociativos territoriales en respuesta

a los desarrollos normativos que brindan herramientas más efectivas para la asociatividad (Decreto 1033 de 2021).

- Articulación con Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Departamentos (FND) para el fortalecimiento institucional de las ciudades capitales y las gobernaciones para generar redes y acuerdos para promover el desarrollo autónomo y sostenible de las víctimas del conflicto armado.
- Robustecimiento de las capacidades institucionales a través de la implementación de proyectos de fortalecimiento institucional a municipios PDET ZOMAC Y PATR.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Con la ejecución del proyecto de inversión, se pretende dar cumplimiento a las siguientes actividades: Reporte Unificado del Sistema de información, coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno – RUSICST De acuerdo con el Decreto Reglamentario 4800 de 2011, el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno – RUSICST “es un mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las políticas públicas y planes de acción de prevención, asistencia y reparación integral a las víctimas”. El RUSICST permite fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales mediante la divulgación de la política pública, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un plan de mejoramiento que permita avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima. Adicionalmente, permite la aplicación de los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación y la medición de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Finalmente, el Decreto 4800 de 2011, en su artículo 260, establece que “[será responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes garantizar el personal y los equipos que permitan el suministro adecuado y oportuno de la información requerida [mediante este reporte]”. Así mismo, el artículo en mención reglamenta que para la operación del RUSICST, las autoridades de las gobernaciones y alcaldías designarán un enlace que se encargue de reportar la información actualizada por semestres.

Para la vigencia 2025, se requiere realizar ajustes a las herramientas de seguimiento en el marco de la modificación al Decreto 2460 de 2015 por medio del cual se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad. Herramienta de gestión local. La herramienta tiene como objeto servir de instrumento de consolidación de la información de las entidades territoriales y como fuente para alimentar los sistemas de información del orden nacional en lo referente a la implementación de la política pública de víctimas. Frente a los avances de la herramienta de gestión local se han adelantado las siguientes etapas:

1. Preconcepción de una solución para las entidades territoriales en cuanto a la gestión de la información, gestión documental, formularios de caracterización, custodia de la información, manejo de ofimática, que facilite a las entidades territoriales unificar dicha gestión en una herramienta.
2. Etapa de consultoría, donde se determinaron las necesidades desde las entidades territoriales en lo relacionado con la gestión de la información. Como resultado, se

determinó la necesidad de una herramienta de uso exclusivamente local.

3. Etapa de diseño y desarrollo de la aplicación, en la cual se realizaron los documentos de requerimientos técnicos, se construyó de la herramienta y cuatro módulos de la aplicación, HGL, HGC, HGL WEB y HGL SERVICIOS, las cuales componen la herramienta.

Escuela virtual La escuela virtual sobre la política pública de víctimas del conflicto armado, promovida por el Ministerio del Interior, busca facilitar la comprensión y el acercamiento de los nuevos funcionarios y personas interesadas en los conceptos de la Ley de víctimas, la política pública de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la política de atención y reparación integral a las víctimas pertenecientes a comunidades y grupos étnicos y al reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial (RUSICST). Para la vigencia 2025, se requiere actualizar los contenidos de la Escuela Virtual, así como realizar la difusión a nivel territorial para su uso y apropiación.

Asistencia técnica a entidades territoriales y coordinación nación - territorio Estrategia de Corresponsabilidad La estrategia de Corresponsabilidad es un modelo de gestión articulada de las entidades en los distintos niveles gubernamentales responsables de la implementación de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno, para garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población. En esta medida, las actividades están direccionadas a acompañar a las entidades territoriales, en la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el territorio de su jurisdicción, con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima. Para 2025, es necesario prestar asistencia técnica territorial y realizar la coordinación institucional e interinstitucional de acuerdo con la modificación del Decreto 2460 de 2015. Asistencia técnica a entidades territoriales en la planeación, gestión e implementación de la política de víctimas. Estos servicios buscan fortalecer los espacios, escenarios, prácticas e instrumentos que permitan articular y coordinar las acciones de las entidades en diferentes niveles de gobierno, para generar resultados más eficaces y eficientes en la atención y reparación integral a las víctimas, promoviendo la descentralización como transferencia de competencias; la delegación de competencias mediante procesos de corresponsabilidad y están orientados a contribuir en la descentralización política y administrativa, y delegación de funciones para la implementación de la política pública de víctimas en el territorio.

Los servicios de Asistencia Técnica implican el desarrollo actividades de acompañamiento a las entidades territoriales a través de eventos, jornadas de trabajo, material pedagógico, entre otros, las cuales para 2025 se requiere adelantar con las 1133 entidades territoriales. Proyectos de Fortalecimiento Institucional. Los Proyectos de Fortalecimiento institucional tienen por objetivo fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para la implementación de la política pública de atención y reparación a población víctima del conflicto armado. La propuesta que se ha venido construyendo desde el Grupo de Articulación para la Política pública de Víctimas (GAPV), incorpora tres componentes a saber: Fortalecimiento Técnico; Fortalecimiento Administrativo, y Fortalecimiento de Gestión Financiera; los cuales son desarrollados en las etapas de Alistamiento, en la cual se parte de los resultados del diagnóstico de capacidad institucional y permite definir de manera preliminar cuáles son las problemáticas de las entidades territoriales con referencia a la implementación de la política, resultados que son socializados con las entidades territoriales locales para dar inicio a la construcción colectiva de planes de trabajo.

Posteriormente se sigue la formulación y evaluación de proyectos que hace uso de la Metodología General Ajustada (MGA). Los proyectos formulados son evaluados por el comité técnico conformado por miembros del Ministerio del Interior y el operador de los proyectos, para establecer en el marco de competencias del Ministerio la viabilidad técnica y financiera de los mismos. Y, una vez aprobados los proyectos, se inician las acciones de seguimiento de estos. Finalmente, se pasa a la fase de ejecución y acompañamiento, que inicia con la construcción de un cronograma de entrega con el operador de los proyectos, se definen cuáles son los requerimientos para el cumplimiento de cada proyecto y se inicia el proceso de compra y contratación de los insumos solicitados. Una vez entregados los insumos materiales y las asistencias técnicas requeridas, se realiza una actividad de entrega y cierre del proyecto a la administración municipal. Todas las etapas cuentan con el acompañamiento de asesores territoriales del GAPV para garantizar el alcance de los resultados planteados en el proyecto.

Los recursos serán asignados de la siguiente forma de acuerdo a las actividades planeadas para la vigencia 2025.

ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base, este indicador es calculado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Variación anual últimos tres años:

AÑO	IPC %
2.021	5,62 %
2.022	13,12%
2.023	9,28 %

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%, es decir, 3,84 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,12%

En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%. El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. La división Transporte registró una variación anual de 15,42%, siendo esta la mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (44,80%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (20,19%) y compra y cambio de aceite (15,85%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,03%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-1,30%).

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 13,22%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,98%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,84%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (comida, bebidas, cover) (8,29%), servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (12,11%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (12,93%).

La división Información y comunicación registró una variación anual de 0,12%, siendo esta la menor variación anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (1,10%) y servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,05%).

Las asistencias técnicas tienen como finalidad llevar a cabo la retroalimentación del diligenciamiento del RUSICST y generar procesos de gestión de información para la toma de decisiones al interior de las administraciones municipales y departamentales, se requiere realizar jornadas presenciales para la sensibilización y explicación de este enfoque de gestión, se proyectan 32 asistencias entre ciudades capitales y gobernaciones.

350 asistencia técnica a entidades territoriales en la articulación de la política de víctimas y el Acuerdo de Paz, en los territorios PDET Y ZOMAC de acuerdo a lo plasmado en el CONPES 4031.

Las 1133 Asistencias a las entidades territoriales en la planeación, gestión e implementación de la política de víctimas, se realizan de acuerdo a los compromisos plasmado en el CONPES 4031.

Atendiendo a que el direccionamiento estratégico implica un fortalecimiento no solo a las alcaldías sino a las organizaciones de víctimas identificadas por las entidades territoriales en las líneas de fortalecimiento institucional, proyectos productivos, gestión social, cultural y deportiva, se requiere disponer de recursos logísticos necesarios para la realización de la

identificación de las necesidades de fortalecimiento en las administraciones locales, la formulación de los proyectos de fortalecimiento institucional en las administraciones priorizadas, la Realización de las asistencias técnicas en el marco de la implementación de los proyectos de fortalecimiento y la implementación de los proyectos de fortalecimiento institucional en las entidades territoriales.

Lo antes descrito tiene como incremento porcentual de la vigencia 2024 a la vigencia 2025 de un 7%

A continuación, se relaciona un consolidado de lo requerido en la vigencia 2025 en cuanto a logros y metas para dar cumplimiento a la misionalidad del Grupo de Articulación Interna para la política de víctimas.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO	RECURSOS 2024		NECESIDAD RECURSO 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACION DE LA META
Asistir técnicamente a entidades territoriales en la implementación del mecanismo de corresponsabilidad con los diferentes niveles de Gobierno.	\$ 376.876.945	32	\$403.258.331	32
Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la planeación, gestión e implementación de la política de víctimas.	\$ 393.503.844	1133	\$421.049.113	1133
Prestar asistencia técnica a entidades territoriales en la articulación de la política de víctimas y el Acuerdo de Paz	\$ 191.609.926	350	\$219.374.204	350
Identificar las necesidades de fortalecimiento en las administraciones locales	\$ 216.347.326	20	\$217.140.055	14
Formular los proyectos de fortalecimiento institucional en las administraciones priorizadas.	\$ 146.057.543	20	\$156.281.571	14
Implementar proyectos de fortalecimiento en los municipios priorizados	\$ 504.228.686	5	\$539.524.694	5
Realizar asistencia técnica en el marco de la implementación de los proyectos de fortalecimiento	\$ 216.693.320	20	\$231.861.852	14
Generar desarrollos tecnológicos	\$ 246.191.979	3	\$263.425.418	3
Brindar soporte técnico a los usuarios de los sistemas de información de seguimiento territorial.	\$ 59.110.297	1	\$ 63.248.018	1
Realizar seguimiento a la información reportada en los sistemas de información de fortalecimiento de la cultura de paz y seguimiento territorial.	\$ 262.153.440	2	\$280.504.181	2
TOTAL	\$2.612.773.306		\$2.795.667.437	

3.1.3.19 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE SUS PROPÓSITOS Y ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES EN EL MARCO DE LA LEY 2166 DE 2021 A PARTIR DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NACIONAL. (\$234.300.000.000).

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3704-1000-7	\$50.000.000.000	\$234.300.000.000	\$184.300.000.000	369%
TOTAL	\$50.000.000.000	\$234.300.000.000	\$184.300.000.000	369%

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Ley 2166	2018	Por la cual se deroga la ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la constitución política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones.
2	Decreto 1066	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.
3	Ley 1551	2012	Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
4	Sentencia C-100	2013	La Corte Constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 6, 31 y 35 de la Ley 1551 de 2012. Señaló que la expresión “departamental y” el parágrafo 4 del artículo 6 de la ley 1551 de 2012, al regular la posibilidad de que las JAC celebren convenios de solidaridad con entes territoriales del orden departamental, no desconoce el principio de unidad de materia.
5	Sentencia C-126	2016	La Corte Constitucional estableció la legalidad de la expresión “hasta por mínima cuantía”, contenida en el parágrafo 4 ° del artículo 6 ° de la Ley 1551 del 2012, mediante el cual se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las JAC, con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía
7	Bases Nacional Plan de Desarrollo	2022	Pacto por Colombia. Pacto por la equidad XIV. Pacto de equidad para las mujeres
8	Decreto 1501	2023	Por el cual se sustituyen los Capítulos 1 y 2 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para reglamentar la Ley 2166 de 2021, referente a la acción comunal

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

El gobierno del Cambio ha resaltado y valorado la labor solidaria de los organismos comunales como actores fundamentales para el desarrollo del país, la construcción de la paz total y la creación de Colombia como potencia mundial de la vida. Por ello, desde la Dirección de democracia, participación ciudadana y la acción comunal, se han realizado diferentes estrategias en materia de desarrollo de los organismos y sus comunidades, priorizando el acompañamiento en territorio de acuerdo al marco jurídico.

La ley 2166 de 2021, es la base legal de un nuevo escenario para el fortalecimiento de la Acción Comunal a nivel nacional específicamente en sus artículos 84, 93,94,95,101,106 y 108, que implica incrementar los esfuerzos por parte del Ministerio del Interior para el desarrollo de sus organizaciones, motivo por el cual, se requiere contar con recursos de inversión para las próximas

vigencias que respalden propósitos conjuntos y el mejoramiento de la calidad de vida en sus comunidades.

La acción comunal es una forma de organización y representación social que ha contribuido significativamente al desarrollo social, económico y democrático del país, este tipo de organizaciones encuentran su legitimidad no solamente en la elección democrática de sus representantes sino también en el hecho de que, al ser sus dignatarios miembros mismos de la comunidad, conocen a profundidad las necesidades de sus representados. De esta manera, en gran parte del territorio nacional son los organismos de acción comunal los principales actores a través de los cuales pueden canalizarse las solicitudes comunitarias. Así, esta forma de participación ciudadana se constituye en un mecanismo importante de representación e interacción entre actores sociales y políticos en el país (Jaramillo, 2009).

De igual manera, su estructura democrática de representación social logra que se posicionen a nivel nacional los temas que preocupan a los habitantes de las veredas más remotas del país. Por lo anterior, los organismos de Acción Comunal forman parte del engranaje de las estructuras de poder local y micro - local, en la medida en que tienen que ver con la toma de decisiones, la construcción de alianzas, la distribución de beneficios, los vínculos con instituciones o actores sociales o políticos desde las comunidades pequeñas hasta el nivel nacional. Estas relaciones se sustentan en el liderazgo, los lazos de vecindad y el reconocimiento social.

De acuerdo con el incremento en la necesidad de recursos, se presentan las actividades más relevantes que conllevan al incremento de necesidades:

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
13.1 Implementar estrategias de formación y educación oportuna y adecuada para los miembros de los Organismos de Acción Comunal	\$11.080.800.000	\$22.300.000.000

Los incrementos del presupuesto frente a la vigencia anterior corresponden al incremento de la meta la cual está proyectada en tres programas estratégicos teniendo en cuenta que actualmente existen 64.619 Organismos de Acción Comunal, se busca llegar a más organismos en cada una de las estrategias. Para el 2024 se busca capacitar 1200 Organismos de Acción Comunal y para el 2025 se busca incrementar a 2400 comunales formados en marco jurídico. Dentro del programa Formador de Formadores Para el 2024 se busca capacitar a 800 líderes a nivel departamental y para el 2025 se busca llegar a 1600 formadores municipales. Por último, en la Educación Básica y Superior se propone y se está revisando la viabilidad de crear el Fondo Comunal de Educación en el cual para el 2024 se busca apoyar 200 comunales en educación básica y 800 para educación superior, para el año 2025 de 400 educación básica y 1600 para educación superior.

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
13.2 Generar incentivos y mecanismos de participación ciudadana para la promoción de la inclusión de nuevos liderazgos en los escenarios de los Organismos de Acción Comunal.	\$12.000.000.000	\$74.000.000.000

Se requiere apoyar a las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y participación de las mujeres, los jóvenes, de los organismos de Acción Comunal. Lo anterior para incrementar la participación de mujeres en los organismos de Acción Comunal que actualmente se cuenta con un porcentaje de participación del 48 % como meta de Gobierno se busca incrementar al 51 % en el cuatrienio. Lo anterior se proyecta con base en la necesidad de dar continuidad a la contratación del Operador Logístico quien realizara la operación logística para 5 eventos nuevos regionales, que busca tener una participación de 300 personas por evento.

Así mismo, la contratación de Convenios que permiten el desarrollo de las actividades programadas. Lo anterior, guardando coherencia con la base de incremento anual de Ley, así como el costo de los eventos cotizados por el operador para vigencias anteriores, no obstante, el aumento de recursos en estas contrataciones reflejará un mayor número de requerimientos para dichos procesos, los cuales proyectan 2 programas para jóvenes y mujeres.

G	COSTOS 2024	COSTOS 2025
13.3 Fortalecer las capacidades de la población comunal en la estructuración y gestión de proyectos para el desarrollo comunitario	\$26.070.000.000	\$58.000.000.000

Se incrementa el presupuesto toda vez que para el año 2024 son priorizadas 400 organizaciones adicionales para apoyo en sus iniciativas productivas y sociales, enfocadas a los lineamientos de gobierno el cual busca la contratación con los Organismos Comunales para la atención de obras de impacto social como comunidades energéticas, desarrollo de TICS, proyectos de infraestructura, proyectos ambientales, entre otros.

Para el 2025 se tiene una meta de 1000 iniciativas productivas y sociales, enfocadas a los lineamientos de gobierno el cual busca la contratación con los Organismos Comunales para la atención de obras de impacto social como comunidades energéticas, desarrollo de TICS, proyectos de infraestructura, proyectos ambientales, entre otros.

Programa de Restauración Ecológica

Para el 2024 se implementará un programa de desarrollo ambiental en cumplimiento del marco Jurídico Artículo 94 Ley 2166 beneficiando a 80 Organismos de Acción Comunal para el 2025 se busca dar continuidad con el programa llegando a 1000 Organismos de Acción Comunal

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
13.4 Desarrollar acuerdos y acciones concertadas entre los organismos de acción comunal y las instituciones estatales	\$849.200.000	\$80.000.000.000

Para el 2024 se realizarán los lineamientos y socialización de la política pública y para el 2025 se realizará la implementación del plan de Acción para el cumplimiento de la Política Pública, para dicha implementación se requieren incrementar el presupuesto para desarrollar cada una de las actividades proyectadas, de acuerdo con el Art. 84 de la Ley 2166 - Política pública de acción comunal.

Adicional este incremento se debe a que un porcentaje de estos recursos pertenecen a la operación logística, organización y producción de los eventos, tiquetes, papelería, Gastos de transporte del Ministerio, Viáticos, OPS entre otros, para el desarrollo de las actividades asociadas a las iniciativas que hacen parte integran de los instrumentos de planeación, adicional a los incrementos del presupuesto frente a la vigencia anterior obedecen a dos motivos principales, los aumentos en las tablas salariales para la contratación de servicios profesionales del Ministerio del Interior, así mismo se ve la necesidad en realizar un cambio del tipo de profesionales requeridos para la vigencia 2025.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD	LOGRO POR ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
13.1 Implementar estrategias de formación y educación oportuna y adecuada para los miembros de los Organismos de Acción Comunal					
Capacitar a los organismos de acción comunal mediante cursos para afianzar sus conocimientos en áreas y temáticas de importancia para la acción comunal	Para el 2025 se busca Capacitar a 2400 más Organismos de Acción Comunal en marco Jurídico, procesos administrativos y fortalecimiento.	\$4.000.000.000	0	\$8.000.000.000	2400
Capacitar a las organizaciones de acción comunal con el programa de formación de formadores para el empoderamiento de sus dignatarios y afiliados.	Para el 2025 se incrementa la meta de Formación de 1600 líderes de organizaciones de acción comunal en el Programa de Formador de Formadores a nivel departamental, el cual se llevará a cabo de manera presencial en los 32 departamentos del país.	\$3.000.000.000	0	\$6.000.000.000	1600
Apoyar el acceso de jóvenes y adultos integrantes de los organismos de acción comunal a la educación básica primaria y secundaria	Educación básica: Para el 2025 se busca incrementar el número de afiliados a organismos de Acción Comunal para el acceso a la educación básica primaria y secundaria de 400 jóvenes y adultos integrantes de los organismos de acción comunal.	\$900.000.000	0	\$1.800.000.000	400

ACTIVIDAD	LOGRO POR ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Apoyar el acceso a la educación superior de jóvenes, mujeres y miembros de los organismos de acción comunal	Educación Superior: Crear el Fondo de educación comunal para 1600 jóvenes, mujeres y miembros de los organismos de acción comunal. Se aumenta el presupuesto para cupos nuevos en programas tecnológicos, profesionales, especializaciones y maestrías.	\$3.180.800.000	0	\$6.500.000.000	1600
13.2 Generar incentivos y mecanismos de participación ciudadana para la promoción de la inclusión de nuevos liderazgos en los escenarios de los Organismos de Acción Comunal.					
Apoyar los diferentes espacios de participación de los organismos de acción comunal y en el Congreso Nacional de Acción Comunal.	Realizar encuentros regionales para promover la participación de los organismos de Acción Comunal 5 Asambleas o encuentros regionales Asistencia de 2500 organismos Comunales	\$ 3.000.000.000	1	\$6.000.000.000	1
Implementar un programa de incentivos para promover la participación de los jóvenes en el ejercicio comunal	Programas para Generar incentivos y mecanismos de participación ciudadana de los jóvenes para la promoción de la inclusión de nuevos liderazgos en los escenarios de los Organismos de Acción Comunal.	\$4.500.000.000	1	\$18.000.000.000	1
Implementar el programa de incentivos para promover la participación y liderazgo de las mujeres en las Organizaciones de Acción Comunal	Programas para Generar incentivos y mecanismos de participación ciudadana de las mujeres para la promoción de la inclusión de nuevos liderazgos en los escenarios de los Organismos de Acción Comunal.	\$4.500.000.000	1	\$50.000.000.000	1

ACTIVIDAD	LOGRO POR ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
13.3 Fortalecer las capacidades de la población comunal en la estructuración y gestión de proyectos para el desarrollo comunitario					
Apoyar económicamente iniciativas productivas y sociales para el desarrollo comunitario, lideradas por las organizaciones de acción comunal. Banco de Proyectos	Banco de Proyectos: Apoyo a 1000 iniciativas productivas y sociales, enfocadas a los lineamientos de gobierno el cual busca la contratación con los Organismos Comunales para la atención de obras de impacto social como comunidades energéticas, desarrollo de TICS, proyectos de infraestructura, proyectos ambientales, entre otros.	\$12.070.000.000	400	\$50.000.000.000	
Articular con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible la implementación del Programa de Restauración Ecológica. Art 94 ley 2166 2023	Ambiental: implementación de programas enfocados a la restauración ecológica para mejorar la gestión ambiental en todo el territorio nacional de acuerdo al artículo 94 de la Ley 2166 de 2023. Fortalecer 1000 Organismos de Acción Comunal	\$14.000.000.000	0	\$8.000.000.000	
13.4 Desarrollar acuerdos y acciones concertadas entre los organismos de acción comunal y las instituciones estatales					
Implementar las acciones de fortalecimiento de las organizaciones de acción comunal identificadas en los diagnósticos.	Se incrementa el recurso con el fin de ejecutar las acciones establecidas en el plan de acción para la ejecución de la política Pública Comunal	\$849.200.000	1	\$80.000.000.000	1
	TOTAL	\$50.000.000.000	404	\$234.300.000.000	6004

3.1.3.20 MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPESINADO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$15.080.088.609)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3704-1000-7	\$ 2.000.000.000	\$ 15.080.088.609	\$ 13.080.088.609	654%
TOTAL	\$ 2.000.000.000	\$ 15.080.088.609	\$ 13.080.088.609	654%

BASE LEGAL

o.	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Constitución Política	1991	El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales, Artículo 64
2	Ley 2219	2022	"Por la cual se dictan normas para la constitución operación de las asociaciones campesinas y de las asociaciones agropecuarias, se facilitan sus relaciones con la administración pública, y se dictan otras disposiciones".
3	Ley 2294	2023	"Por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"
4	Resolución 0727	2020	Por la cual se modifica el Artículo 1 de la Resolución 1817 de 2017, se traslada un grupo Interno de Trabajo y se dictan otras disposiciones"
5	Directiva No. 007	2019	Lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del campesinado
6	Resolución No 1817	2017	creó el Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Campesinos, para formular, implementar y apoyar la política pública de atención a la población campesina.
7	Resolución No 0727	2020	Definió las funciones del Grupo de Asuntos campesinos, entre las que se encuentra: i) el fortalecimiento a los procesos de política pública para el campesinado; ii) fortalecimiento de los procesos organizativos y de las instancias de participación; y iii) articulación territorial y acceso a la oferta por parte de la población campesina.
8	Acto Legislativo 01	2020	modificó el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia y reconoció al campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional, lo que incluye la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado colombiano, esto implica que en cumplimiento de este artículo las instituciones diseñen programas específicos que atiendan los diferentes derechos del campesinado, de manera particular en el caso del Ministerio del Interior lograr materializar el derecho a la participación reforzada, las territorialidades campesinas y el fortalecimiento organizativo

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, contempla en el numeral 8, denominado “El campesinado colombiano como actor de cambio” del Subtítulo 4, “Mayor participación del campesinado con fortalecimiento de los mecanismos de interlocución”, promueve el fortalecimiento de las asociaciones campesinas y agropecuarias, así como el avance en la garantía de derechos para las organizaciones y movimientos sociales y la presencia del campesinado en espacios de toma de decisión, dándole prioridad a las mujeres rurales y a los jóvenes.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La adhesión del Estado colombiano a la “Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales”, se convierte en un marco de referencia para la construcción de políticas dirigidas al campesinado, la declaración hace un especial énfasis en el derecho a la participación reforzada del campesinado, reconociendo su calidad como sujeto político. En este sentido, establece el deber de garantizar en condiciones de igualdad la participación de los campesinos y campesinas en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo. Además, asegura que se debe consultar al campesinado frente a la explotación de los recursos naturales de sus comunidades. Finalmente, hace un llamado a promover su participación en la creación de normas en materia de seguridad alimentaria, trabajo y medio ambiente que puedan concernirles.

De acuerdo con las mediciones realizadas por el DANE, se registra un déficit en la participación de las organizaciones campesinas en la gestión pública reflejado en primera medida en el nivel de confianza del campesinado en el sistema democrático el cual indica que un 42,7% no confía en las instituciones y la manera como este sistema se desarrolla en el país; y segundo, la vinculación a ejercicios organizativos por parte del campesinado en donde más de un 69% no tiene el interés, ni se encuentra vinculado a ningún proceso organizativo.

Esto hace necesario el desarrollo de un programa de participación para el campesinado que contemple el fortalecimiento de las instancias, las organizaciones campesinas y aporte en la visibilización y reconocimiento del campesinado. Lo anterior, considerando las funciones establecidas en la Resolución 727 de 2020 la cual demanda del grupo construir una estrategia o programa que formule acciones encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones, visibilización y reconocimiento y el fortalecimiento de los espacios de diálogo social. Esta alternativa de solución se aunada con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, en las cuales se centralizará las acciones acordes con lo contemplado en el apartado actores diferenciales para el cambio, mediante el cual se promueve el fortalecimiento de las asociaciones campesinas y agropecuarias, el avance en la garantía de derechos para las organizaciones y movimientos sociales y el fortalecimiento de la presencia del campesinado en espacios de toma de decisión, con especial atención a la participación de jóvenes y mujeres campesinas.

Bajo este marco, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, a través del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la participación del campesinado en la formulación de políticas, programas y proyectos en el territorio nacional, busca:

- Fortalecer el trabajo de las entidades territoriales y nacionales con las organizaciones campesinas

- Mejorar la capacidad de interlocución y articulación de las Instancias de Participación e Instituciones Públicas con la población campesina.
- Promover el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos.

De acuerdo al incremento en la necesidad de recursos, se presentan las actividades más relevantes que conllevan al incremento de necesidades:

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
Fortalecer el trabajo de las entidades territoriales y nacionales con las organizaciones campesinas	\$610.000.000	\$1.806.513.609

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
Mejorar la capacidad de interlocución y articulación de las Instancias de Participación e Instituciones Públicas con la población campesina	\$440.000.000	\$3.995.775.000

ACTIVIDAD	COSTOS 2024	COSTOS 2025
Promover el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos	\$950.000.000	\$9.277.800.000

Para la vigencia 2024 el proyecto de inversión tenía aprobado un presupuesto de \$14.361.989.151, de los cuales fueron aprobados tan solo \$2.000.000.000 lo cual implicó la reducción de las metas a cumplir para esa vigencia y la financiación de tan solo una actividad por producto del proyecto. Con el fin de ejecutar en su integridad las actividades y cumplir con las metas proyectadas para el 2025, se solicita el monto programado del presupuesto del proyecto para esta vigencia el cual corresponde a \$15.080.088.609, adicional a los incrementos del presupuesto frente a la vigencia anterior obedecen a los aumentos en las tablas salariales para la contratación de servicios profesionales del Ministerio del Interior, así mismo se ve la necesidad en realizar un cambio del tipo de profesionales requeridos para la vigencia 2025.

En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%. El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

Este incremento se debe a que un porcentaje de estos recursos pertenecen a la operación logística, organización y producción de los eventos, tiquetes, papelería, Gastos de transporte del Ministerio, Viáticos, OPS entre otros) para el desarrollo de las actividades asociadas a las iniciativas que hacen parte integran de los instrumentos de planeación

Para el 2024 solo se desarrollaron tres actividades y se logró cumplir el objetivo, pero no pudieron ser ejecutados todos los productos del proyecto de inversión, para tener mejores resultados y cumplir con todo lo establecido en el proyecto de inversión aprobado es necesario obtener el aumento en los recursos para el 2025.

La solicitud de recursos para la vigencia 2025 refleja un incremento del presupuesto correspondiente al 654% representados en la suma de \$13.080.088.609, sin embargo, es importante resaltar que el monto total del proyecto de inversión para la vigencia 2025 equivalente a \$ 15.080.088.609 hace parte de la formulación inicial del proyecto realizada en el año 2023, en el

cual se habían proyectado los recursos mencionados actualmente y con los cuales se pretende facilitar el desarrollo del proyecto y la ejecución de cada una de sus actividades, dando cumplimiento a lo demandado por el gobierno del Cambio, quien ha resaltado y valorado la labor de las organizaciones campesinas como actores fundamentales para el desarrollo del país, la construcción de la paz total y la creación de *Colombia como potencia mundial de la vida*.

La solicitud de recursos planteada se proyecta con base en la necesidad de poder implementar el conjunto de actividades que tiene el proyecto en mención dado que para el 2024 solo se tenían recursos para desarrollar tres actividades y así cumplir con el objetivo de este. Esta demanda se hace necesaria toda vez que el mandato constitucional del campesinado obliga a establecer proyectos de inversión específicos para esta población y avanzar en los procesos de adecuación institucional de cara a garantizar los derechos del campesinado.

Por otra parte, es importante resaltar que las actividades por cada uno de los productos del proyecto que no pudieron ser ejecutadas y frente a la cual se espera obtener recursos en el 2025.

Producto 1: Servicios de promoción a la participación ciudadana (Producto principal del proyecto), para el cual son requeridas las siguientes actividades:

- **Actividad 1: Desarrollar un sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas:** Se creará e implementará una estrategia de caracterización de las organizaciones campesinas a nivel nacional, esto con la finalidad de fortalecer el acercamiento y la participación de estas en las acciones que realicen las entidades nacionales y territoriales que los puedan beneficiar. De igual forma, la caracterización será un insumo para diseñar las acciones de fortalecimiento y participación del Ministerio del Interior para el campesinado.
- **Actividad 2: Realizar fortalecimiento a los funcionarios que hacen parte de las entidades territoriales para la política pública del campesinado:** Se realizarán actividades, reuniones, conversatorios y jornadas de asistencia técnica con los funcionarios responsables a nivel departamental y municipal de los temas campesinos y el desarrollo rural en los territorios. En estas se brindarán lineamientos y herramientas que permitan la construcción participativa e incidente de las organizaciones campesinas en la formulación, implementación y seguimiento de los programas y proyectos a nivel territorial.
- **Actividad 3: Apoyar investigaciones y estudios sobre el campesinado:** Dar cumplimiento al numeral octavo de la Resolución 727 de 2022, la cual establece que el Grupo de Asuntos Campesinos debe apoyar los procesos de investigación y caracterización en articulación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, con el fin de obtener y consolidar los insumos que apoyen a los procesos de formulación de la política pública.

Producto 2: Servicio de Asistencia Técnica, para el cual son requeridas las siguientes actividades:

- **Actividad 4: Realizar acciones de capacitación y formación:** Esta actividad está enfocada en capacitar a las organizaciones campesinas mediante cursos para afianzar sus conocimientos en áreas y temáticas de importancia para el desarrollo rural. Para este punto es requerido realizar alianzas con instituciones académicas de educación media y superior para construir el portafolio de cursos de formación y realizar los ajustes técnicos necesarios a los contenidos de acuerdo con las necesidades de las organizaciones

campesinas.

- **Actividad 5: Construir una estrategia de identificación y de socialización de la oferta institucional para las organizaciones campesinas:** Esta actividad, parte de la coordinación institucional con otras entidades del nivel nacional a las cuales se les solicitará los programas y proyectos en los cuales pueden participar las organizaciones campesinas como operadores o beneficiarios, esto con el objetivo de facilitar su acceso a la oferta institucional. La estrategia inicia con la identificación de la oferta, promoción, comunicación y socialización a través de plataforma virtual y acciones presenciales en el territorio de la oferta seleccionada con los actores protagonistas de las diferentes instituciones.
- **Actividad 6: Fortalecer espacios de diálogo y articulación interinstitucional del sector campesino:** En el marco de la estrategia de diálogo social que tiene el Ministerio, se fortalecerán las mesas territoriales que se adelantan entre el gobierno nacional y las organizaciones campesinas, con la finalidad de poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios.

Por último, para el producto 3: Servicio de apoyo financiero en participación ciudadana, por el cual son requeridas las siguientes actividades:

- **Actividad 7: Realizar acciones de visibilización y reconocimiento social de la población campesina:** Para esta actividad se realizarán encuentros en el marco de la conmemoración del día del campesino y se promoverán en los territorios actos de reconocimiento y celebración de los campesinos. Además de cuatro encuentros de intercambios de saberes en los diferentes territorios con apoyo financiero y técnico.
- **Actividad 8: Realizar acciones de promoción para la participación de los jóvenes y mujeres campesinas:** Se realizarán encuentros conmemorativos del día de la mujer rural y el diseño e implementación a través de talleres, conversatorios, así como el intercambio de experiencias relacionados con la relevancia y el protagonismo de la mujer rural y su correlación con la economía del cuidado. De otra parte, se promoverá la construcción de una red de jóvenes rurales para promover nuevos liderazgos que contribuyan al relevo generacional en el sector rural.
- **Actividad 9: Establecer un banco de proyectos para el apoyo de iniciativas de las organizaciones campesinas:** Esta actividad busca apoyar iniciativas de las organizaciones campesinas que fortalezcan la participación ciudadana. Los proyectos son de carácter sociales, cultural, ambientales y comunitarios, con un especial énfasis en jóvenes y mujeres.
- **Actividad 10: Construir una estrategia de posicionamiento del campesinado como sujeto político de derechos:** Se implementará una estrategia comunicativa y pedagógica, cuyo fundamento es la Declaración de los Derechos del Campesinado de las Naciones Unidas y el reconocimiento que adelanta el Estado sobre el campesinado como sujeto político de derechos. El objetivo de esta es lograr el posicionamiento del campesinado en la agenda pública de las entidades nacionales y territoriales, que permitan el diseño de políticas, programas y proyectos, que fortalezcan las relaciones de las organizaciones con el estado y permitan avanzar en la construcción de un nuevo imaginario del campesinado en la sociedad.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
14.1 Fortalecer el trabajo de las entidades territoriales y nacionales con las organizaciones campesinas					
Desarrollar un sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas	Fortalecer el acercamiento y la participación de estas en las acciones que realicen las entidades nacionales y territoriales que los puedan beneficiar	0	0	\$66.412.500	1
Realizar fortalecimiento a los funcionarios que hacen parte de las entidades territoriales para la política pública del campesinado	Brindar lineamientos y herramientas que permitan la construcción participativa e incidente de las organizaciones campesinas en la formulación, implementación y seguimiento de los programas y proyectos a nivel territorial.	0	0	\$ 1.299.101.109	96
Apoyar investigaciones y estudios sobre el campesinado	Dar cumplimiento al numeral octavo de la Resolución 727 de 2022, la cual establece que el Grupo de Asuntos Campesinos debe apoyar los procesos de investigación y caracterización en articulación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, con el fin de obtener y consolidar los insumos que apoyen a los procesos de formulación de la política pública.	\$610.000.000	35	\$441.000.000	10
14.2 Mejorar la capacidad de interlocución y articulación de las Instancias de Participación e Instituciones Públicas con la población campesina					

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar acciones de capacitación y formación a la población campesina en temas de participación ciudadana.		\$440.000.000	200	\$672.000.000	300
Construir una estrategia de identificación y de socialización de oferta institucional para las organizaciones campesinas.	Coordinar institucionalmente con otras entidades del nivel nacional a las cuales se les solicitará los programas y proyectos en los cuales pueden participar las organizaciones campesinas como operadores o beneficiarios, esto con el objetivo de facilitar su acceso a la oferta institucional.	-	0	\$360.150.000	1
Fortalecer espacios de diálogo y articulación del interinstitucional del sector campesino.	Se fortalecerán las mesas territoriales que se adelantan entre el gobierno nacional y las organizaciones campesinas, con la finalidad de poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios	-	0	\$2.963.625.000	12
14.3 Promover el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos					
Realizar acciones de visibilización y reconocimiento social de la población campesina.	Se realizarán encuentros en el marco de la conmemoración del día del campesino y se promoverán en los territorios actos de reconocimiento y celebración de los campesinos	-	0	\$1.575.000.000	15
Realizar acciones de promoción para la participación de los jóvenes y mujeres campesinas.	Se realizarán encuentros conmemorativos del día de la mujer rural y el diseño e implementación a través de talleres, conversatorios, así como el intercambio de experiencias relacionados con la relevancia y el protagonismo de la mujer rural y su correlación con la economía del cuidado.	-	0	\$1.470.000.000	10

ACTIVIDAD	LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
		COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Establecer un banco de proyectos para el apoyo de iniciativas de las organizaciones campesinas.	Apoyar iniciativas de las organizaciones campesinas que fortalezcan la participación ciudadana.	950.000.000	32	\$ 5.250.000.000	50
Construir una estrategia de posicionamiento del campesinado como sujeto político de derechos.	Implementar una estrategia comunicativa y pedagógica, cuyo fundamento es la Declaración de los Derechos del Campesinado de las Naciones Unidas y el reconocimiento que adelanta el Estado sobre el campesinado como sujeto político de derechos	-	0	\$982.800.000	1
TOTAL		\$2.000.000.000	267	\$15.080.088.609	496

3.1.3.21 FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA COORDINACIÓN DE ENTIDADES, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL CONOCIMIENTO, PARA BRINDAR GARANTÍAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (\$ 3.566.722.740.)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3704-1000-8	\$ 2.997.246.000	\$ 3.566.722.740	\$ 569.476.740	19%
TOTAL	\$ 2.997.246.000	\$ 3.566.722.740	\$ 569.476.740	19%

BASE LEGAL

En el marco de la Constitución Política de 1991, se consagró en su artículo 19, la libertad de cultos, el derecho de toda persona a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva, y la igualdad ante la ley de todas las confesiones religiosas e iglesias.

La personería jurídica especial es el tipo de personería específicamente previsto en el derecho colombiano para las iglesias y confesiones religiosas no católicas que desean ser claramente identificadas como tales en la vida social y que le permite al ente religioso el desarrollo institucional y público de sus actividades, con pleno reconocimiento de su naturaleza religiosa, y la protección específica de su autonomía reconocida por la Ley Estatutaria.

En Colombia la libertad de culto se encuentra regulada en la Constitución Política de 1991 artículo 19, establece que "Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley".

En la Ley 133 de 1994 proyectada por el congreso en su artículo 3. el Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales.

Con la expedición de la Ley Estatutaria 133 de 1994, y sus Decretos Reglamentarios 782 de 1995, 1396 de 1997, 1455 de 1997, 354 de 1998 y 505 de 2003, desarrollaron aspecto relativos a la libertad religiosa y de cultos, incluido el reconocimiento de personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas.

El artículo 1° del Decreto 1140 de 2018, se crea la Dirección de Asuntos Religiosos como órgano rector de la libertad religiosa en el país, toda vez que tiene a su cargo el asesoramiento, desarrollo, promoción, acompañamiento, articulación y coordinación de la política pública de libertad religiosa y de cultos en Colombia, frente a todos las entidades nacionales y territoriales, así mismo, el Ministerio del Interior tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley "(...) formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de (...), libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo (...)

Política Publica

De conformidad con el artículo 1° del Decreto Ley 2893 de 2011, se promulgó la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, mediante el Decreto 437 de 2018, y se creó la Dirección de Asuntos Religiosos con la expedición del Decreto 1140 de 2018.

Habiéndose formulado la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 437 de 2018 que adicionó el Decreto 1066 de 2015, la misma debe ser aplicada por todas las entidades nacionales y territoriales, en desarrollo de los principios y los derechos constitucionales relativos a libertad religiosa y de cultos, para garantizar el ejercicio de éstos.

Programa de Gobierno

Considerando que, en el Programa de Gobierno, en el Capítulo 4 Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida, numeral 4.2. Por una seguridad humana que se mida en vidas, que reza:

“Protegeremos la diversidad religiosa y de culto. En nuestro gobierno garantizaremos a todas las ciudadanías las condiciones para el ejercicio de la igualdad y la libertad de culto según sus opciones religiosas y espirituales. Toda política pública relativa a la igualdad y libertad religiosa estará armonizada con la Constitución Política y la ley (Página 46)”

Plan de Desarrollo

De igual manera, en aras de dar cumplimiento a los objetivos del Ministerio del Interior descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” contenidos en la Transformación V. Convergencia regional, Catalizador 7.Consolidación del diálogo, la

memoria, y la reconciliación como políticas de estado y reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, para reconstruir el tejido social, en el componente a. Diálogo, memoria, convivencia y reconciliación para la reconstrucción del tejido social (Página 171),

Para atender específicamente la Acción estratégica: 1. Creación y conformación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, y No Estigmatización - "LIBRE"

Mediante la creación de este Sistema, el Ministerio del Interior continuará en la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, además de visibilizar, fortalecer y reconocer las entidades religiosas y sus organizaciones, desde su papel como transformadores y generadores de cambio en medio de la sociedad, por lo cual, para el debido cumplimiento a las metas dispuestas en el plan de acción de la Dirección tanto para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, y No Estigmatización - "LIBRE, la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos de la Dirección de Asuntos Religiosos, así como el desarrollo de las campañas departamentales que promuevan el respeto y garantía de la libertad religiosa y la no estigmatización.

Considerando que el artículo 312 de la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, dispone:

“Artículo 312. Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización-SINALIBREC. Créese el Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización-SINALIBREC. Estará constituido por las entidades públicas nacionales y territoriales y demás entidades públicas o privadas encargadas de formular, ejecutar e impulsar los planes, programas, proyectos y acciones tendientes a la implementación de la política pública de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, con el propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones religiosas.

El Ministerio del Interior, bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Religiosos, emprenderá acciones para la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial del SINALIBREC. Así mismo, articulará los espacios de carácter interreligioso, entre ellos, el Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e intersectorial de Libertad Religiosa; la Mesa Nacional del Sector Religioso; así como los Consejos, Comités y Mesas Territoriales para el diálogo social interreligioso, multitemático y multisectorial.

En desarrollo de estas funciones se hace necesario realizar las siguientes actividades:

- Reconfiguración de instancias y espacios de participación con enfoque confesional, mujer, juventud y territorial (Consejo Nacional, Mesa Nacional, Mesa de Paz, Mesa de Educación, Mesa de Mujeres, Mesa de Juventud, Espacio con el SENA, y Mesa de articulación con Cancillería).
- Expedir un acto administrativo de creación y conformación del Sistema
- Formular e implementar Plan Estratégico Nacional de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, con mecanismos de seguimiento y monitoreo.
- Territorialización de la Política Pública con enfoque diferencial (confesional, ruralidad, mujer y juventud) con Generación de aportes para la construcción de Paz Total - Asistencia técnica territorial, sectorial e institucional.

- Asistencias técnicas a las entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) de manera presencial y virtual, sobre las metodologías y kit de herramientas proferidas por la Dirección realizadas"
- Red Humanitaria Interreligiosa en articulación con oferta institucional.
- Conformación de la red rural interreligiosa
- Implementar una estrategia de cooperación internacional.
- Alistamiento, socialización, Convocatoria y trámite para suscripción de Convenios de Derecho Público Interno.
- Realizar una caracterización de las entidades religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso (de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación y enfoque diferencial).
- Ajuste e implementación de Banco de Iniciativas Interreligiosas con enfoque en mujeres, juventud y ruralidad con impacto económico, social y ambiental.
- Fortalecimiento de Iniciativas Interreligiosas con enfoque en mujeres, juventud y ruralidad con impacto económico, social y ambiental.
- Implementar procesos pedagógicos, de transferencia de conocimiento y Campaña de Diálogo Social para la no estigmatización y cero discriminaciones en articulación con la Red Académica, el sector y el territorio.
- Implementar las líneas de acción de la Red Académica para el Respeto y Garantía de la Libertad Religiosa.
- Organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran

Estrategias:

El Ministerio del Interior implementará la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, garantizando su articulación con los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 437 de 2018.

El Ministerio del Interior, en el marco de la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, fortalecerá las organizaciones del sector religioso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 437 de 2018, buscando garantizar el derecho a la libertad religiosa y de cultos.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, desarrollará programas de capacitación y formación a líderes de distintas entidades religiosas, sin distinción de creencias, y a funcionarios públicos, orientados en la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos. Dichos programas deberán estar acordes con la cultura, hecho y sentir religioso, así como a disminuir las posibles violaciones al derecho de libertad religiosa y de cultos.

En el marco del decreto 437 de 2018, el Ministerio del Interior caracterizará las organizaciones religiosas, teniendo en cuenta su contribución en la construcción de capital social y al desarrollo sostenible.

Cabe anotar que uno de los enfoques de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos es el "territorial", en busca del fortalecimiento de las facultades de las entidades territoriales, el cual debe estar con el gobierno nacional, principalmente en cabeza del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, de acuerdo con la política pública de libertad religiosa, las entidades de orden nacional y territorial deben estar en permanente coordinación intersectorial, interinstitucional y

territorial en los asuntos religiosos frente a la planeación nacional y territorial, la creación y promoción de instancias de participación ciudadana y la coordinación de mecanismos o rutas de seguimiento y acción para la formulación y complementación de dicha política, como así lo establece el Decreto 437 de 2018 .

Convirtiéndose entonces la Dirección de Asuntos Religiosos en órgano rector, no solo en lo que tiene que ver con la implementación de la política pública de libertad religiosa y de cultos y la expedición de actos administrativos frente a las personas jurídicas para las iglesias, confesiones y denominaciones, entre otros, sino también, en impulsor de los proyectos normativos y la emisión de los conceptos en la materia religiosa.

De allí que sean sus principales funciones: i) fortalecer el derecho a la libertad e igualdad religiosa, de cultos y de conciencia; ii) reconocer a los colectivos religiosos; iii) promover lineamientos de la política pública de libertad religiosa; iv) emitir líneas conceptuales como órgano rector en el tema religioso; e, v) impulsar programas nacionales que se deban reflejar en Entidades territoriales.

En ese sentido, el Ministerio mediante la Resolución 0583 de 2018 creó la Mesa Nacional del Sector Religioso como instancia nacional para la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, y de conformidad con el artículo 2.4.2.4.1.4 del Decreto 1066 de 2015, en concordancia con el parágrafo 7 de la Resolución 1195 de 2018, los lineamientos y directrices que surjan del cumplimiento de las funciones de la Mesa Nacional del Sector Religioso, constituirán un marco de referencia para las mesas del sector religioso e instancias de participación y/o consulta en asuntos de libertad religioso y de cultos, de los niveles departamentales, distrital y municipal.

Alineación Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

14 Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial

Transformación V. Convergencia regional

Catalizador: 7. Consolidación del diálogo, la memoria, y la reconciliación como políticas de estado y reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, para reconstruir el tejido social

Componente: a. Diálogo, memoria, convivencia y reconciliación para la reconstrucción del tejido social

C-3704-1000-8-53106a Condiciones y capacidades institucionales organizativas e individuales para la participación ciudadana.

Acción estratégica: Creación y conformación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización -SINALIBREC

Propuesta Indicador: Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización -SINALIBREC creado y conformado mediante Decreto

Propuesta Meta Cuatrienio: 1 Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización -SINALIBREC creado y conformado

Legados y Macrometas de Gobierno

Una sociedad para la vida, garante de derechos y en condiciones de igualdad hasta que la dignidad se haga costumbre

Paz Total y Acuerdo de Paz

2.2.4. Garantías para la convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

Se describe las razones por las cuales en el Presupuesto General del próximo año se debe incluir este gasto.

A partir de la Constitución de 1991 se abrieron espacios de participación los cuales son necesarios propiciarlos con la apropiación de la Dirección, para visibilizar y reconocer la pluralidad religiosa en la nación colombiana, y como fruto de esto, se establecieron las condiciones constitucionales y legales para la protección de este derecho fundamental.

Sin embargo, entre los funcionarios públicos, las entidades educativas a todos los niveles, miembros de las entidades religiosas y público en general, existe un desconocimiento de su conceptualización, alcance, derechos, deberes y acciones que reconozcan y protejan el actuar en todas las materias y una sana pluralidad de las confesiones, religiones, organizaciones basadas en la fe religiosa y espiritualidades, lo cual se hace necesario para la Dirección de Asuntos Religiosos poder contar con un presupuesto suficiente, con el cual se pueda llegar a todos los niveles del Estado y Sociedad Civil para el conocimiento de las Libertades religiosas y de cultos.

Teniendo en cuenta el excepcional crecimiento del número de iglesias y demás entidades religiosas, que para el 31 de diciembre de 2023 había ascendido a más de 11.000 Entidades Religiosas con personería jurídica reconocida por el Ministerio,¹⁸ y las situaciones de orden político, social y económico que se pueden derivar de tal número de comunidades religiosas en el entorno nacional, se han presentado periódicos cuestionamientos en la opinión pública sobre el papel del Estado frente al sector religioso, así como la transparencia en el manejo, en algunos casos, de los asuntos al interior de entidades religiosas, por lo cual se ha convertido en una necesidad dar más relevancia y capacidad de acción a las funciones relacionadas con los asuntos religiosos en el Ministerio del Interior.

El presupuesto histórico con el que ha contado la Dirección de Asuntos Religiosos ha registrado el entre el 95% y el 100% de ejecución en cada una de las vigencias puesto que la apropiación ha sido limitada, no obstante, se trabaja y se le cumple al sector religioso. La solicitud que se está realizando a través de este documento para la vigencia 2025 - 2026, es justo lo que se necesita para poder continuar con el fortalecimiento a las entidades religiosas en el marco de la Ley 133 de 1994 y Decreto 437 de 2018, para cumplirle al sector.

En desarrollo de la implementación de la política pública, Decreto 437 de 2018¹⁹, se plantean los ejes, líneas de acción y actividades así:

¹⁸ Fuente: Registro Público de Entidades Religiosas.

¹⁹ Literal f) del artículo 2.4.2.4.1.8. del Decreto 1066 de 2015.

Eje 1 Promoción y garantía del ejercicio de la Libertad religiosa y de cultos y sus ámbitos (Proyecto de Inversión)

Líneas de Acción

- Líneas de acción para la identificación y posicionamiento del aporte al bien común, a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad, a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios, que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan (Estrategia de mapeo y caracterización, Protocolo de mecanismos para la articulación de programas y proyectos de aporte al bien común)
- Líneas de acción para la promoción en la sociedad civil, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación de la no discriminación, la tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos. (Campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos, Capacitaciones a medios de comunicación)
- Líneas de acción para el fortalecimiento del Ministerio del Interior, en lo relacionado con el derecho de libertad religiosa y de cultos, de manera integral. (Fortalecimiento institucional, Actualización de formatos y protocolos en asuntos religiosos.)
- Líneas de acción para la divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia. (Estrategia de transferencia de conocimiento, Estrategia de educación continuada, Conformación de un espacio permanente de investigación y análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa, Promoción de espacios de relacionamiento e interacción para el alcance de objetivos comunes, Implementación de la ruta de actualización del Código Nacional de Ocupación, en lo relacionado con el oficio y la ocupación de los ministros de culto y líderes religiosos, Canales de comunicación en materia de visas que tramiten las entidades religiosas, Estrategia para la adopción de medidas efectivas en la prevención de ataques al derecho de la libertad religiosa y de cultos.)
- Líneas de acción para el efectivo ejercicio de la participación ciudadana de las entidades religiosas y sus organizaciones (Estrategia de formación en participación ciudadana (Formador de Formadores), Promoción de la participación ciudadana en las entidades religiosas y sus organizaciones.)
- Líneas de acción para las modificaciones de instrumentos y normatividad vigente, que reconozca las nuevas realidades en la aplicación del derecho de libertad religiosa y de cultos, su pluralidad y diversidad, y su incidencia en el orden religioso, social, cultural y educativo (Revisión al marco normativo vigente, Convenios de derecho público interno con entidades religiosas, Modificación y actualización del Registro Público de Entidades Religiosas.)
- Líneas de acción para el fortalecimiento de la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial, en el marco de la garantía del derecho de libertad religiosa y de cultos (Asistencia técnica a las entidades territoriales, Acompañamiento a los espacios oficiales de libertad religiosa y de cultos en los territorios, Creación de herramientas para la gobernanza en asuntos religiosos, Fomento de estrategias de interlocución nación – territorio, Estrategia para la identificación de las problemáticas de las entidades religiosas, relacionadas con el ordenamiento territorial.)

- Líneas de acción para la generación de actividades que faciliten el entendimiento de la conexidad entre el derecho de libertad religiosa y el derecho a la educación conforme a las creencias religiosas de cada uno (Mesa Interinstitucional para el análisis de la conexidad entre el derecho a la educación y la libertad religiosa y de cultos).

Eje 2 Reconocimiento y fortalecimiento de las entidades religiosas y sus organizaciones como gestoras de paz, perdón y reconciliación.

- Promoción de la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en los escenarios de perdón y reconciliación, para la construcción de la paz
- Mesa para el reconocimiento y fortalecimiento del aporte a la paz, el perdón y la reconciliación, de las entidades religiosas y sus organizaciones (Funciones y sesiones)
- Estrategia de pedagogía y sensibilización en la implementación de estrategias de construcción de paz
- Estrategia de promoción de las actividades de paz, perdón y reconciliación llevadas a cabo por las entidades religiosas y sus organizaciones
- Procesos para la identificación, análisis y actuación interinstitucional de las entidades del sector religioso y sus organizaciones, con ocasión de sus creencias religiosas en el marco del conflicto armado
- Estrategia de coordinación y actuación interinstitucional para la conformación de alianzas estratégicas del sector religioso

Eje 3 Estrategias para la cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo

Fortalecimiento de la colaboración, cooperación y coordinación entre las entidades públicas de nivel nacional y territorial, las entidades religiosas y sus organizaciones y los organismos y organizaciones internacionales de cooperación, en la contribución al desarrollo de la Nación en el marco del logro de los objetivos del desarrollo sostenible.

- Capacitación en formulación y gestión de proyectos y cooperación internacional.
- Oferta de cooperación internacional en proyectos de interés de las entidades religiosas y sus organizaciones.
- Identificación de los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Eje 4 Seguimiento y monitoreo de la Política Pública

- Línea estratégica para el seguimiento y monitoreo.
- Puesta en común de los avances en la implementación de la política pública
- Articulación con otras instancias para el seguimiento de la implementación de la política pública.

Para el propósito tenemos definidas como prioritarias las siguientes actividades y subactividades:

Iniciativa 6. Promoción en la sociedad civil las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación de la no discriminación la tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos

1. Agilizar y dinamizar los mecanismos de articulación entre las entidades territoriales y las entidades religiosas y sus organizaciones \$1.785.000.000

1.1.1. Identificación de los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible \$ 1.130.500.000,00

1.1.2. Línea estratégica para el seguimiento y monitoreo \$ 238.000.000,00

1.1.3. Promoción de espacios de relacionamiento e interacción para el alcance de objetivos comunes Red Humanitaria \$ 416.500.000,00

Iniciativa: 4. Divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia

2. Construir los instrumentos de transmisión y profundización de Conocimiento en las entidades nacionales, territoriales y religiosas en materia de asuntos religiosos

2.1.1. Divulgación Red Académica \$ 446.250.000,00

2.1.2. Documento con el diseño metodológico Red Académica \$ 155.890.000,00

3. Fortalecer los procesos de coordinación, articulación y seguimiento interinstitucional, intersectorial y nación territorio, en los planes, instrumentos y procesos para la implementación la política de libertad religiosa y de cultos.

3.1.1. Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas \$ 171.360.000,00

3.1.2. Documento con los resultados de las validaciones \$ 1.008.222.740,00.

JUSTIFICACIÓN

1. Banco de proyectos

Es importante mencionar que el BIIR dentro de su creación contempla los siguientes principios:

- ✓ Impacto comunitario: Análisis y estudio de las iniciativas que promuevan el desarrollo y aporten a la satisfacción de necesidades básicas en los contextos más vulnerables, en los cuales las entidades y organizaciones religiosas tengan presencia y generen impacto.
- ✓ Participación ciudadana: La participación y el reconocimiento de las iniciativas sociales interreligiosas en todos los departamentos del país, y la posibilidad de realizar gestión de recursos de cooperación internacional.
- ✓ Creatividad y Emprendimiento: Proyectos que contengan ideas y transformación de contextos sociales que de forma acertada atiendan necesidades de los colectivos y poblaciones vulnerables.

Y busca que en cada uno de los proyectos existan:

- ✓ Iniciativas de desarrollo con enfoque diferencial: acciones, programas o proyectos orientados a la atención de niñez, juventud, mujer y ayuda humanitaria.
- ✓ Iniciativas de participación ciudadana: acciones, programas o proyectos que fomenten espacios de formación en liderazgo e incidencia social.

- ✓ Iniciativas de economía naranja: acciones programas o proyectos basados en la transformación social de los entornos a través de ideas creativas y/o fortalecimiento cultural, artístico y tecnológico.

A través del BIIR, el Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Religiosos, reconoce al sector religioso como un actor clave en pro de la construcción y fortalecimiento del tejido social y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las diferentes iniciativas e impacto social que ha venido consolidando, con sus distintas acciones en todo el país, y en forma histórica a través del tiempo, así como su aporte en la aceleración del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las diferentes áreas o lugares del accionar del Sector Religioso, desde su gran componente espiritual junto con el accionar social aportan para que exista una transformación social dentro de la sociedad civil. No obstante, se ha podido evidenciar que las buenas prácticas o iniciativas religiosas tienen ausencia de recursos o acceso a una financiación solida o estable, las cuales no les permite generar impacto a escalas mayores. Por tal motivo y con el fin de fortalecer y visibilizar el accionar del sector religioso, la Dirección de Asuntos Religiosos, pretende crear el Banco de Iniciativas Interreligiosas para ayudar en la construcción de un mejor país.

El Banco de Iniciativas se estableció para fortalecer y maximizar el aporte social que desarrollan las entidades religiosas, teniendo en cuenta su trabajo en favor del impacto social, humanitario y de emprendimiento dentro de sus comunidades.

Promoción de la tolerancia y la no discriminación

El Ministerio del Interior diseñará y desarrollará, al menos cinco (5) campañas pedagógicas e interactivas, de difusión masiva, en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos. Para el cumplimiento de esta línea de acción, las entidades territoriales facilitarán las herramientas a su alcance

Capacitaciones a medios de comunicación.

El Ministerio del Interior realizará actividades de acercamiento con los medios de comunicación, con el fin de capacitar a sus integrantes sobre el lenguaje y las características propias del hecho y la cultura religiosa en Colombia. Las capacitaciones deberán realizarse con un lenguaje ajustado a las necesidades de los comunicadores a quienes van dirigidas, buscando consolidar una forma adecuada para transmitir los mensajes relacionados con la cultura, el hecho y el sentir religioso, así como informarles la realidad actual de los mismos, para que, con esto, se disminuyan las posibles vulneraciones al derecho de libertad religiosa y de cultos.

Seguimiento

Se elaborará e implementará el piloto de una Metodología de seguimiento y evaluación en los 32 departamentos

Así mismo definiremos todos los lineamientos técnicos y metodológicos para la puesta en marcha y operativización del sistema de Libertad Religiosa y de Cultos

2. Red Académica

Mediante la Resolución 987 del 2020 del Ministerio del Interior, se consolida la Red Académica, como herramienta encaminada a facilitar la investigación, estudio y análisis, para conceptuar y orientar acerca de la historia y las realidades del hecho y la cultura religiosa en el país, que permita transferir dicho conocimiento a todos los componentes del sector religioso; lo que evidencia el compromiso del Ministerio del Interior en seguir fortaleciendo el análisis e investigación del derecho de libertad religiosa y sus ámbitos, como una apuesta desde su misionalidad a través de la Dirección de Asuntos Religiosos.

La Red Académica para el Respeto y la Garantía de la Libertad Religiosa, servirá de estrategia investigativa del hecho y el actor religioso, que permita la articulación de grupos, centros, universidades y en general actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se dedican a investigar en relación con los actores, el hecho y los asuntos religiosos en general.

La metodología, funcionamiento y articulación de la Red Académica, estará en cabeza de la Dirección de Asuntos Religiosos, al igual que su planeación y presupuesto.

La Red Académica para el Respeto y la Garantía de la Libertad Religiosa, tuvo como punto de partida los diálogos e instancias de participación promovidos durante el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, en los cuales se identificó y definió la necesidad de convocar a la academia para enriquecer la política pública y la discusión en torno al hecho religioso, con la contribución de insumos derivados de las investigaciones realizadas frente a la materia.

El Ministerio del Interior propenderá por la conformación de un espacio permanente de investigación y análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa, el cual funcionará como herramienta que facilite la investigación, estudio y análisis, para conceptuar y orientar acerca de la historia y las realidades del hecho y la cultura religiosa en el país y transfiera dicho conocimiento a las comunidades religiosas, a todos aquellos interesados en la materia y en especial a las entidades públicas del orden nacional y territorial.

El Ministerio del Interior podrá buscar, a través de procesos de relacionamiento, de proyectos de inversión, de convenios con universidades públicas y/o privadas, entidades y organizaciones de carácter privado y/o cooperantes internacionales, que cuenten con grupos de investigación y/o interés en el desarrollo del derecho de libertad religiosa y de cultos, el hecho y la cultura religiosa, la conformación y funcionamiento del espacio acá mencionado, contando con el aporte de sus conocimientos, investigaciones y experiencia. Deberá garantizarse un enfoque interdisciplinario al interior del espacio permanente, que atienda a los asuntos de conocimiento de este, así como el estudio objetivo de la pluralidad religiosa presente en el país.

Por lo anterior se hace necesario contar con un presupuesto para la divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia, implementando las líneas de acción de la Red Académica para el Respeto y Garantía de la Libertad Religiosa

El Ministerio del Interior diseñará y desarrollará estrategias de educación continuada, tales como diplomados y escuelas de formación, que profundicen en los conocimientos acerca del hecho, la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas y el público en general, buscando brindar un ambiente propicio para el goce efectivo del derecho de

libertad religiosa y de cultos, sus manifestaciones individuales y colectivas y la prevención de discriminaciones en todas las dimensiones en las que este derecho se desarrolla

El Ministerio del Interior podrá buscar, a través de procesos de relacionamiento, de proyectos de inversión, de convenios con universidades públicas y/o privadas, entidades y organizaciones de carácter privado y/o cooperantes internacionales, que cuenten con grupos de investigación y/o interés en el desarrollo del derecho de libertad religiosa y de cultos, el hecho y la cultura religiosa, la conformación y funcionamiento del espacio acá mencionado, contando con el aporte de sus conocimientos, investigaciones y experiencia. Deberá garantizarse un enfoque interdisciplinario al interior del espacio permanente, que atienda a los asuntos de conocimiento de este, así como el estudio objetivo de la pluralidad religiosa presente en el país.

Costos

- Contratación de 6 prestaciones de servicios para garantizar el cumplimiento de las líneas de gestión de la red
- Realización de 40 actividades de divulgación y promoción del conocimiento de la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Colombia

3. Fortalecer los procesos de coordinación, articulación y seguimiento interinstitucional, intersectorial y nación territorio, en los planes, instrumentos y procesos para la implementación la política de libertad religiosa y de cultos.

3.1.1. Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas

3.1.2. Documento con los resultados de las validaciones

El Ministerio del Interior promoverá y facilitará escenarios para el encuentro interreligioso, tanto a nivel nacional como territorial, que generen reconocimiento, fomenten una cultura de respeto por las libertades individuales y colectivas, construyan un ambiente de paz y respeto por la identidad propia y la dignidad humana y faciliten la creación de redes y lazos de cooperación y apoyo en el alcance de objetivos comunes. Estos escenarios funcionarán como espacios de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas y de ningún modo buscarán promover diálogos de carácter doctrinal o de aquellos que hagan parte exclusiva de la autonomía de las entidades religiosas

Para este fin se realizarán encuentros interreligiosos y la contratación de 4 OPS para gestionar este tema en los niveles territoriales de la gestión

Convenios de derecho publico

Así mismo, en desarrollo de dicho marco constitucional, a través de la Ley 25 de 1992 se reconocieron los efectos jurídicos de los matrimonios celebrados conforme a los cánones de cualquier confesión religiosa que suscribiera concordato, tratado o convenio de derecho público con el Estado, y se establecieron las reglas generales para la celebración de tales acuerdos. Con la expedición de la Ley Estatutaria 133 de 1994, y sus Decretos Reglamentarios 782 de 1995, 1396 de 1997, 1455 de 1997, 354 de 1998 y 505 de 2003, desarrollaron aspecto relativos a la libertad religiosa y de cultos, incluido el reconocimiento de personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas.

En desarrollo de los actos administrativos y en el ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley Estatutaria 133 de 1994 y los Capítulos 1 y 2, del Título 2, Parte 4, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior 1066 de 2015, en concordancia con el Decreto Ley 2893 de 2011, subrogado por el Decreto 1140 del 4 de julio de 2018, la Resolución 1156 del 26 de julio de 2018, y la Resolución 675 del 19 de mayo de 2021, y confiriendo la Personería jurídica Especial es una atribución que el Estado le confiere a través del Ministerio del Interior, a las Iglesias, Confesiones y Denominaciones Religiosas, sus Federaciones y Confederaciones y Asociaciones de Ministros, que les otorga la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones.

En desarrollo de los actos administrativos y en el ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley Estatutaria 133 de 1994 y los Capítulos 1 y 2, del Título 2, Parte 4, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior 1066 de 2015, en concordancia con el Decreto Ley 2893 de 2011, subrogado por el Decreto 1140 del 4 de julio de 2018, la Resolución 1156 del 26 de julio de 2018, y la Resolución 675 del 19 de mayo de 2021, y confiriendo la Personería jurídica Especial es una atribución que el Estado le confiere a través del Ministerio del Interior, a las Iglesias, Confesiones y Denominaciones Religiosas, sus Federaciones y Confederaciones y Asociaciones de Ministros, que les otorga la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones.

De otro lado, el Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 1749 de 2020 señala que:

“El Ministerio del Interior establecerá y desarrollará los parámetros para la celebración de los nuevos convenios de derecho público interno entre el Estado colombiano y las iglesias sus confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, de conformidad con la Ley estatutaria 133 de 1994 y demás normas concordantes y aplicables a la materia.”

En efecto, en desarrollo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 782 de 1995, incorporado al artículo 2.4.2.1.11 del Decreto 1066 de 2015, precisa que “Es potestativo del Estado colombiano celebrar convenios de derecho público interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, especialmente para regular lo establecido en los literales d) y g) del artículo 6, inciso 2 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 y en el artículo 1 de la Ley 25 de 1992”.

Tales normas constitucionales y el ordenamiento jurídico colombiano propende por garantizar a todas las entidades religiosas, la igualdad de trato por el Estado, como lo ordena el artículo 19 de la Constitución Política, lo que requiere garantizar el acceso en condiciones de igualdad a todas las entidades religiosas que estén interesadas en suscribir el convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, para lo cual es necesario determinar con qué entidades se celebraría un nuevo convenio de forma clara, participativa y transparente.

Los Convenios de Derecho Público son una garantía para que todos los ciudadanos puedan profesar libremente su religión y difundirla de manera individual y colectiva. Permite que las confesiones religiosas sean libres y puedan ejercer su espiritualidad. El Estado Colombiano una vez expedida la Ley Estatutaria 133 de 1994, en su artículo 15 abrió el espacio para la celebración de tratados internacionales o convenios de derecho público con Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros que gocen de personería jurídica y ofrezcan garantía de duración. El día 2 de diciembre de 1997 se dio ese primer paso con la suscripción del Primer Convenio de Derecho Público Interno No. 1 de 1997,

aprobado mediante Decreto 354 de 1998, el cual fue suscrito solamente con 13 Entidades del sector religioso entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no católicas.

Que tratándose del matrimonio, vínculo jurídico por medio del cual se constituye la familia, núcleo fundamental de la sociedad, el Estado garantiza a los contrayentes el derecho de escoger los ritos, formas y procedimientos de acuerdo con sus creencias religiosas de conformidad con la Constitución Política y la ley, los cuales tendrán plenos efectos civiles, además de los vínculos espirituales; respetando plenamente el fuero que caracteriza a las Entidades Religiosas, en materia sacramental y al vínculo religioso.

El Estado reconoce plenos efectos civiles a los matrimonios celebrados a partir de la vigencia del presente Convenio, por los ministros de culto de las entidades religiosas que suscriben el presente Convenio, previo el lleno de los requisitos contenidos en sus doctrinas internas y el fiel cumplimiento de la Constitución Política y las disposiciones legales vigentes y las que se acuerdan en el presente Convenio, sin perjuicio de la competencia estatal para regularlos.

Que el Ministerio del Interior tiene la competencia administrativa relativa a la negociación y desarrollo de los Convenios de Derecho Público Interno establecida en el artículo 15 del Decreto 782 de 1995.

A través de la Resolución 2118 de 2021, el Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Religiosos establecieron los parámetros para la celebración de los nuevos convenios de derecho público con iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros.

Mediante la Ley Estatutaria 133 de 1994, que, reguló el tema de convenios de derecho público interno, atribuyéndole la competencia administrativa relativa a negociaciones y desarrollo de estos al Ministerio del Interior sobre temas religiosos, entre los cuales se destaca el matrimonio religioso con efectos civiles.

Se garantizará el derecho de ser parte del Convenio de Derecho Público Interno de las 8 entidades religiosas que quedaron aprobadas en el anterior proceso, el artículo 2.4.2.1.13 del Decreto 1066 de 2015, establece que "(corresponde al Ministerio del Interior la competencia administrativa relativa a la negociación y desarrollo de los Convenios de Derecho Público Interno (...)", en concordancia con lo previsto por el artículo 12 de la Ley 133 de 1994.

El artículo 2.4.2.1.19 incorporado al Decreto 1066 de 2015, por el Decreto 1749 de 2020 señala que: "El Ministerio del Interior establecerá y desarrollará los parámetros para la celebración de los nuevos convenios de derecho público interno entre el Estado colombiano y las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, de conformidad con la Ley Estatutaria 133 de 1994 y demás normas concordantes y aplicables a la materia."

A su vez, el artículo 13 del Decreto 782 de 1995, incorporado al artículo 2.4.2.1.11 del Decreto 1066 de 2015, precisa que "Es potestativo del Estado colombiano celebrar convenios de derecho público interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, especialmente para regular lo establecido en los literales d) y g) del artículo 6, inciso 2 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 y en el artículo 1 de la Ley 25 de 1992"

De tal manera, el ordenamiento jurídico colombiano propende por garantizar a todas las entidades religiosas, la igualdad de trato por el Estado, como lo ordena el artículo 19 de la Constitución Política, lo que requiere garantizar el acceso en condiciones de igualdad a todas las entidades religiosas que estén interesadas en suscribir el convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, para lo cual es necesario determinar los parámetros que desarrollen los requisitos exigidos por la ley y que permitan determinar con qué entidades se celebraría un nuevo convenio de forma clara, participativa y transparente.

De igual forma, en desarrollo de dicho marco constitucional, se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no católicas. A través de la Ley 25 de 1992 se reconocieron los efectos jurídicos de los matrimonios celebrados conforme a los cánones de cualquier confesión religiosa que suscribiera concordato, tratado o convenio de derecho público con el Estado, y se establecieron las reglas generales para la celebración de tales acuerdos.

Mediante la Resolución 2118 de 2021 se definen los parámetros para la firma de nuevos convenios y en el Decreto 922 de 2023, se Aprueba la minuta 1 del Convenio de Derecho Público Interno número 2 de 2023, suscrito entre el Estado colombiano y unas Iglesias, Confesiones y Denominaciones Religiosas, sus Federaciones, Confederaciones y Asociaciones de Ministros, en la ciudad de Bogotá, D. C., el 1 de junio del 2023

Costos

Actualmente, se requiere los recursos para financiar recurso humano, recurso técnico y el pago de gastos logísticos para la implementación y puesta en marcha del Convenio de Derecho Público.

Por tal razón y con las condiciones antes mencionadas, la Dirección Asuntos Religiosos, emprendió las acciones tendientes a definir lo que hará posible la suscripción del Convenio de Derecho Público Interno con las entidades religiosas, lo cual se dará a conocer al Sector Religioso y a las entidades interesadas.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1. Agilizar y dinamizar los mecanismos de articulación entre las entidades territoriales y las entidades religiosas y sus organizaciones		100		50
1.1.1. Identificación de los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	\$ 950.000.000		\$ 1.130.500.000	
1.1.2. Línea estratégica para el seguimiento y monitoreo	\$ 200.000.000		\$ 238.000.000	
1.1.3. Promoción de espacios de relacionamiento e interacción para el alcance de objetivos comunes.	\$ 350.000.000		\$ 416.500.000	

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
2. Construir los instrumentos de transmisión y profundización de Conocimiento en las entidades nacionales, territoriales y religiosas en materia de asuntos religiosos		3		3
2.1.1. Divulgación	\$ 375.000.000		\$ 446.250.000	
2.1.2.Documento con el diseño metodológico	\$ 131.000.000		\$ 155.890.000	
3. Fortalecer los procesos de coordinación, articulación y seguimiento interinstitucional, intersectorial y nación territorio, en los planes, instrumentos y procesos para la implementación la política de libertad religiosa y de cultos.		2		2
3.1.1. Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$ 144.000.000		\$ 171.360.000	
3.1.2. Documento con los resultados de las validaciones	\$ 847.246.000		\$ 1.008.222.740	
	\$ 2.997.246.000		\$ 3.566.722.740	

Se relaciona la actividad con su costo y meta, tanto del año en curso como la proyección para 2025.

Es así como se evidencia que son necesarios los recursos vigencia 2025 por un valor de \$3.566.722. 740.00 para cubrir todas las inversiones que comprenden la Creación y puesta en marcha del Sistema de libertad religiosa y de cultos, así como la implementación efectiva de la política pública de libertad religiosa, en aplicación del Decreto 437 de 2018, que adicionó el Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015, se adopta la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos. De la Resolución 1274 de 2020 y la Resolución 2118 de 2021, el Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Religiosos y los compromisos establecidos por la DAR.

Acorde con la programación y solicitud de recursos del proyecto de inversión, hasta el momento se ha desarrollado la primera de las Líneas de acción, definida para la identificación y posicionamiento del aporte al bien común, a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad, a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios, que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan (Estrategia de mapeo y caracterización, Protocolo de mecanismos para la articulación de programas y proyectos de aporte al bien común, de tal manera que se hace prioritario continuar con la implementación de los diferentes ejes, líneas de acción y actividades contempladas en el Decreto 437 de 201820.

De esta manera, y teniendo como referencia las competencias y responsabilidades otorgadas por la Constitución y la Ley al Ministerio del Interior; se pretende desarrollar a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, la implementación estructural de la política de libertad religiosa y de cultos; para la Promoción y garantía del ejercicio de la Libertad religiosa y de cultos y sus ámbitos, así como lograr el Reconocimiento y fortalecimiento de las entidades religiosas y sus organizaciones como gestoras de paz, perdón y reconciliación y la debida implementación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos acorde con el mandato del artículo 312 del Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo, los costos unitarios corresponden con los precios promedios aceptados en la región y corresponden a los utilizados en este tipo de actividades.

3.1.3.22. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS, EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. (\$11.399.299.384)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2025 CON RESPECTO A 2024
C-3799-1000-12	\$ 6.362.758.078	\$ 11.399.299.384	\$ 5.036.471.306	79%
TOTAL	\$ 6.362.758.078	\$ 11.399.299.384	\$ 5.036.471.306	79%

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	LEY 594	2000	Ley General de Archivos como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
2	Ley 527	1999	Manejo de datos y firmas digitales.
3	Decreto 1080	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura
4	Acuerdo 049	2000	Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos".
4	Acuerdo 004	2019	Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS

El Ministerio del Interior presenta este proyecto de inversión, el cual tiene como objeto Recuperar el patrimonio documental y la memoria institucional del Ministerio del Interior, acorde con este, se viene trabajando en cuatro frentes de trabajo descritos en el proyecto, como son mejorar la aplicación de procesos, instrumentos y técnicas documentales en los archivos del Ministerio del Interior, en primer lugar se encuentran actividades enfocadas a la actualización, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Archivos, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Sistema Integrado de Conservación y continuar con la convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD, que son herramientas necesarias para la administración de la información, lo cual permiten identificar la información histórica del Ministerio para darle tratamiento de acuerdo a las funciones que se realizaban dando orden y valoración a la información con el fin de determinar la disposición final de los expedientes, recuperando espacios, identificando información trascendental para el país y asimismo eliminar documentos obsoletos que ya cumplieron su ciclo de vida de acuerdo a la normatividad vigente.

En segundo lugar, se inicia con una actividad denominada en realizar la intervención archivística del patrimonio documental del Ministerio del Interior aplicando los procedimientos y técnicas archivísticas, el cual se desarrollará la actividad de digitalización de documentos de archivo previamente organizados.

Otro objetivo consiste en mejorar la capacidad para custodiar y conservar el patrimonio documental del Ministerio del Interior dentro de la cual se desarrollarán actividades de adquisición y/o adecuación de las áreas para la operación y conservación de la información como son los depósitos de archivo, acorde a la normatividad vigente especialmente, el acuerdo 049 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”, expedido por el Consejo directivo del Archivo General de la Nación.

Otro objetivo importante en el desarrollo del proyecto es la adquisición e implementación de una herramienta tecnológica que permita administrar la información que produce o recibe la entidad la cual en la actualidad se encuentra fase 2 se espera culminar su implementación en la vigencia 2024.

Es necesario enfocar esfuerzos en la vigencia 2025 en las siguientes actividades: continuar con la actualización y seguimiento de procesos e instrumentos archivísticos, realizar la adquisición y/o adecuación de las áreas de archivo, realizar mantenimiento de las áreas de archivo y dar continuidad a la implementación de la solución tecnológica para la administración y gestión de documentos de la entidad, por lo que se hace necesario incrementar costos en estas actividades debido a su importancia y requeridas en la normatividad archivística.

Estas últimas actividades están determinadas en el decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, Acuerdo 049 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de conservación documentos el reglamento general de archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos" y la Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA del Archivo General de la Nación.

Por último, es importante generar una cultura de compromiso y posicionamiento frente a la gestión documental, diseñando estrategias de comunicación y manteniéndolas a través del tiempo en

especial a lo largo de la ejecución del proyecto, con el fin de general un cambio de cultura organizacional frente a Los procedimientos de gestión documental.

Ajuste en costos y cronograma de actividades del 3% adicional a lo proyectado en el tercer año 2024, de acuerdo al cronograma inicial con el fin de realizar intervención archivística a los documentos de conformidad con las Tablas de Retención Documental, para llevar a cabo la intervención archivística del patrimonio documental del Ministerio del Interior correspondiente a documentos de series misionales de los archivos de gestión y archivo central, lo anterior teniendo en cuenta las directrices establecidas por el Archivo General de la Nación, además para realizar la depuración, selección eliminación y transferencias secundarias al Archivo General de la Nación de acuerdo a lo estipulado en las Tablas de Valoración Documental

METAS Y LOGROS POR ALCANZAR 2025-2026

	Actividades	Costo Vigencia 2021	Costo Vigencia 2022	Costo Vigencia 2023	Costo Vigencia 2024	Costo Vigencia 2025	Costo Vigencia 2026
OBJETIVO	Descripción de la Actividad	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste
1	Realizar un Diagnóstico sobre estado actual del proceso Gestión Documental	\$ 66.000.000,00	\$ 43.386.000	\$ -	\$ -	\$ 49.259.250	\$ 49.402.724
2	Elaborar y/o actualizar los instrumentos definidos en las normas archivísticas y su Implementar los instrumentos archivísticos en articulación con el Modelo	\$ 198.000.000,00	\$ 282.640.000	\$ 476.017.704	\$ 133.711.222	\$ -	\$ -
	Realizar la intervención archivística del patrimonio documental del Ministerio del	\$ -	\$ -	\$ 429.922.177	\$ 4.158.848.631	\$ 10.335.455.425	\$ 6.973.843.094
	Realizar seguimiento a la implementación de los procesos instrumentos y técnicas	\$ 66.000.000,00	\$ 21.000.000	\$ 108.000.000	\$ 159.116.694	\$ 23.842.813	\$ 23.912.257
4	Evaluar las áreas de archivo de la entidad para la operación, custodia y conservación	\$ 40.000.000	\$ -			\$ -	\$ -
	Realizar la adquisición y/o adecuación de las áreas para la operación y	\$ 171.500.000	\$ 24.966.500	\$ 600.000.000	\$ 425.000.000	\$ 319.197.000	\$ 309.900.000
	Realizar mantenimiento de las áreas para la operación y conservación de la	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000	\$ 391.705.600	\$ 40.873.393	\$ 40.992.441
1	Realizar un Diagnóstico integral sobre el es	\$ 80.000.000	\$ 190.463.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Adquirir la solución tecnológica para la adm	\$ -	\$ 1.549.640.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Implementar la solución tecnológica para l	\$ -	\$ -	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 521.605.788	\$ -
	Realizar seguimiento y mantenimiento de la solución tecnológica	\$ -	\$ -	\$ 31.200.000	\$ 918.800.000	\$ -	\$ 223.073.586
3	Diseñar la estrategia de posicionamiento e interiorización de los procesos de	\$ 40.132.457	\$ -	\$ 31.200.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Implementar la estrategia de posicionamiento e interiorización de los	\$ -	\$ 71.760.000		\$ 78.000.000	\$ -	\$ -
	Realizar seguimiento de la estrategia de posicionamiento e interiorización de los	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 108.995.714	\$ 109.313.178
	TOTAL	\$ 694.632.457	\$ 2.227.126.098	\$ 2.293.939.881	\$ 6.362.758.078	\$ 11.399.229.384	\$ 7.730.437.280

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR		RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
		COSTO PROYECTADO (pesos)	META	COSTO PROYECTADO (pesos)	META
Realizar un Diagnóstico sobre estado actual del proceso Gestión Documental	Modernizar al Ministerio del Interior introduciendo nuevas prácticas y soluciones tecnológicas para la Administración y gestión de los documentos de la entidad	\$ -	0	\$ 49.259.250	0
Elaborar y/o actualizar los instrumentos definidos en las normas archivísticas y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Mejorar la aplicación de procesos, instrumentos y técnicas documentales en los archivos del Ministerio del Interior	\$ 133.711.222	1	\$ -	1
Implementar los instrumentos archivísticos en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Mejorar la aplicación de procesos, instrumentos y técnicas documentales en los archivos del Ministerio del Interior	\$ 97.575.931	1	\$ -	1
Realizar la intervención archivística del patrimonio documental del Ministerio del Interior aplicando los procedimientos y técnicas archivísticas.	Mejorar la aplicación de procesos, instrumentos y técnicas documentales en los archivos del Ministerio del Interior	\$ 4.158.848.631	1	\$ 10.335.455.425	1
Realizar seguimiento a la implementación de los procesos instrumentos y técnicas archivísticas.	Mejorar la aplicación de procesos, instrumentos y técnicas documentales en los archivos del Ministerio del Interior	\$ 159.116.694	1	\$ 23.842.813	1
Evaluar las áreas de archivo de la entidad para la operación, custodia y conservación la información.	Mejorar la capacidad para custodiar y conservar el patrimonio documental del Ministerio del Interior	\$ -	1	\$ -	1
Realizar la adquisición y/o adecuación de las áreas para la operación y conservación de la información.	Mejorar la capacidad para custodiar y conservar el patrimonio documental del Ministerio del Interior	\$ 425.000.000	1	\$ 319.197.000	1
Realizar mantenimiento de las áreas para la operación y conservación de la información.	Mejorar la capacidad para custodiar y conservar el patrimonio documental del Ministerio del Interior	\$ 391.705.600	1	\$ 40.873.393	1
Realizar un Diagnóstico integral sobre el estado actual de aspectos y necesidades tecnológicas, de talento humano, administrativas y financieras, para la adquisición e implementación de una solución tecnológica.	Modernizar al Ministerio del Interior introduciendo nuevas prácticas y soluciones tecnológicas para la Administración y gestión de los documentos de la entidad	\$ -	0	\$ -	0
Adquirir la solución tecnológica para la administración y gestión de los documentos del Ministerio del Interior.	Modernizar al Ministerio del Interior introduciendo nuevas prácticas y soluciones tecnológicas para la Administración y gestión de los documentos de la entidad	\$ -	0	\$ -	0
Implementar la solución tecnológica para la administración y gestión de los documentos de la entidad	Modernizar al Ministerio del Interior introduciendo nuevas prácticas y soluciones tecnológicas para la Administración y gestión de los documentos de la entidad	\$ -	0	\$ 521.605.788	0
Realizar seguimiento y mantenimiento de la solución tecnológica.	Modernizar al Ministerio del Interior introduciendo nuevas prácticas y soluciones tecnológicas para la Administración y gestión de los documentos de la entidad	\$ 918.800.000	0	\$ -	0
Diseñar la estrategia de posicionamiento e interiorización de los procesos de Gestión Documental.	Generar una cultura de compromiso e interiorización frente a los procesos de la Gestión documental en el Ministerio del Interior	\$ -	1	\$ -	1
Implementar la estrategia de posicionamiento e interiorización de los procesos de Gestión Documental.	Generar una cultura de compromiso e interiorización frente a los procesos de la Gestión documental en el Ministerio del Interior	\$ 78.000.000	1	\$ -	1
Realizar seguimiento de la estrategia de posicionamiento e interiorización de los procesos de Gestión Documental.	Generar una cultura de compromiso e interiorización frente a los procesos de la Gestión documental en el Ministerio del Interior	\$ -	1	\$ 108.995.714	1

CALCULO VALORES VIGENCIA 2025									
ITEM	PROFESIONAL			TÉCNICO			SUBTOTAL	VALOR EMPRESA ESPECIALIZADA	TOTAL
	CANTIDAD	HONORARIOS	MESES	CANTIDAD	HONORARIOS	MESES			
Realizar un Diagnóstico sobre estado actual del proceso Gestión Documental	1	\$ 4.104.938	12				\$ 49.259.250		\$ 49.259.250
Realizar la intervención archivística del patrimonio documental del Ministerio del Interior aplicando los procedimientos y técnicas								\$ 10.335.455.425	\$ 10.335.455.425
Realizar seguimiento a la implementación de los procesos instrumentos y técnicas archivísticas				1	\$ 1.986.901	12	\$ 23.842.813		\$ 23.842.813
Realizar la adquisición y/o adecuación de las áreas para la operación y conservación de la información								\$ 319.197.000	\$ 319.197.000
Realizar mantenimiento de las áreas para la operación y conservación de la información								\$ 40.873.393	\$ 40.873.393
Implementar la solución tecnológica para la administración y gestión de los documentos de la entidad								\$ 521.605.788	\$ 521.605.788
Realizar seguimiento de la estrategia de posicionamiento e interiorización de los procesos de Gestión Documental	2	\$ 4.541.488	12				\$ 108.995.714		\$ 108.995.714
TOTAL									\$ 11.399.229.384

3.1.3.23 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO AMPLIANDO LA COBERTURA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$ 2.957.400.000.)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3799-1000-15	\$ 1.079.669.245	\$ 2.957.400.000	\$ 1.877.730.755	174%
TOTAL	\$ 1.079.669.245	\$ 2.957.400.000	\$ 1.877.730.755	174%

BASE LEGAL

La Oficina de Información Pública fue establecida en el DECRETO 2893 DE 2011 de la Función Pública.

Mediante el Decreto 2893 de agosto 11 de 2011 “*Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.*”, entre otras disposiciones, se establecieron las funciones de la Oficina de Información

Pública del Ministerio del Interior - OIPI, como rectora de los asuntos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Posteriormente con la Resolución 0529 del 22 de marzo de 2012, fue creado el Grupo de Servicio al Ciudadano en el Ministerio, dependiente de la Oficina de Información Pública, con el fin de implementar estrategias y herramientas de atención efectiva al ciudadano sobre trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y proporcionar información que sea de interés para la ciudadanía y que contribuya a la ejecución de la política de racionalización de trámites.

Es importante resaltar, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 *“Colombia, Potencia Mundial de la Vida”*, el Gobierno Nacional le apuesta a que las instituciones públicas pongan al ciudadano en el centro de su accionar, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, lo cual impulsa al Servicio al Ciudadano como el primer medio de contacto directo con el ciudadano para conocer sus necesidades de manera personalizada y lograr su atención efectiva y especializada por parte de nuestro Ministerio.

Precisamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto se encuentra asociado al catalizador de *Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía* con los componentes de *Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas* y el de *Gobierno digital para la gente*

Adicional a ello, se muestra a continuación el marco normativo que soportan los gastos que se derivan de la ejecución del proyecto:

Constitución Política:

- Artículo 2... “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
- Artículo 23... “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
- Artículo 83... “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
- Artículo 84... “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.
- Artículo 123... “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”.

- Artículo 209... “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
- Artículo 366... “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.
- Artículo 369... “La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio”.

Leyes:

- Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración Pública”.
- Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1346 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
- Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decretos:

- Decreto 1151 de 2008, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
- Decreto 2893 de 2011, Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
- Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Resoluciones Internas:

- Resolución 529 del 22 de marzo de 2012, por la cual se crea el Grupo de Servicio al Ciudadano en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior.
- Resolución 1655 de 2012, por la cual se delega a dos funcionarios del Ministerio del Interior para integrar el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, GRAT.
- Resolución 252 de 2013, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición y la interposición de recursos ante el Ministerio del Interior.

Otras

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- CONPES 3292 de 2004, establece la política de racionalización y automatización de trámites.
- CONPES 3649 de 2010, establece la política Nacional de Servicio al Ciudadano.
- CONPES 3650 de 2010, establece la Estrategia de Gobierno en Línea.
- CONPES 3785 de 2013, Política Nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de USD 20 millones destinados a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del ciudadano.
- NTC-GP: 1000: 2009 Numerales 7.2 y 8.2.1.
-

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA EL 2025:

La misión institucional del Ministerio del Interior es diversa e impacta a muchos grupos minoritarios en situación de vulnerabilidad social, que requieren el acompañamiento del Estado para el goce de sus derechos fundamentales.

El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, definido como el conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas para las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, encaminadas a la generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración y orientado por el Departamento de Planeación Nacional, de carácter vinculante para las entidades del gobierno.

Adicionalmente, la Estrategia de Gobierno en Digital, orientada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contribuye a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos; mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y comprende cinco fases: información, interacción, transacción, transformación y democracia en línea.

Es de gran importancia articular este proyecto con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual considera como uno de sus objetivos fundamentales, el fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía, avanzar en términos de transparencia, digitalización, capacidad de desarrollo inclusivo e innovación para combatir de manera eficaz las diferentes formas de corrupción. Fortalecer la Institucionalidad, con el fin de garantizar la no discriminación de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, con garantía de derechos y sin discriminación. Considerar los parámetros para la inclusión social, garantizando la accesibilidad al entorno físico, la información, las comunicaciones, servicios e instalaciones

abiertos al público, tanto en zonas urbanas como rurales. Finalmente, modernizar los sistemas de información del Ministerio, realizar seguimientos y evaluaciones sobre las realidades de los pueblos y comunidades, y propiciar procesos de adecuación institucional para avanzar en temas referentes a los pueblos étnicos.

Estos grupos minoritarios y de interés están ubicados en todo el territorio nacional y en la mayoría de los casos han sido víctimas del conflicto y por consiguiente demandan mayor atención en la actual etapa de postconflicto; el Ministerio debe estar preparado y fortalecer sus canales de atención para el cumplimiento de sus funciones misionales a nivel nacional.

El Ministerio del Interior debe contar con las herramientas suficientes, para atender la demanda de los ciudadanos, proporcionarles información confiable, oportuna, completa y facilitarles el acceso a los trámites y servicios.

Por lo anterior, es importante fortalecer cada uno de los canales de atención de la entidad; presencial, telefónico, virtual y escrito, así como integrarlos y articularlos con el fin de poder centralizar y estandarizar la atención prestada a los ciudadanos, poder registrarlos, identificarlos, caracterizarlos y generar estadísticas, cifras y datos concretos que le permitan mejorar permanentemente sus niveles de servicio y mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos.

El propósito general de las acciones propuestas para el fortalecimiento de la comunicación y los canales de atención es continuar con la efectiva implementación de las políticas de servicio al ciudadano, racionalización de trámites y gobierno digital, Estado simple, entre otras; con el fin de generar confianza, acercar a la ciudadanía al estado y mejorar los niveles de satisfacción de la ciudadanía con respecto a los trámites y servicios prestados por el Ministerio del Interior. Se proyecta el mejoramiento de la infraestructura y las condiciones para que el servicio al ciudadano cumpla con parámetros transversales de calidad y efectividad, que garanticen la protección y respeto de los derechos de las personas, así como el aumento de la legitimidad de del Estado.

De igual forma, siguiendo los lineamientos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, es preciso realizar las adecuaciones tanto físicas, como en los sistemas de información, por medio de los cuales las personas con discapacidad tengan una mayor accesibilidad a la información y generen una interacción continua con los servidores públicos a fin de poder resolver sus inquietudes y lograr la garantía de sus derechos fundamentales.

Con base en lo anterior se espera que, en el corto y mediano plazo, las actividades de mejoramiento de los canales sean encaminadas a la integración y funcionalidad tecnológica de los mismos con el objeto de mejorar el servicio y de dar acceso a los trámites y servicios del ministerio a nivel nacional.

El Ministerio como líder del Sector Interior debe ser ejemplo y referente en calidad, eficacia y eficiencia en la atención y el servicio a los ciudadanos; así como en la implementación de políticas como servicio al ciudadano, racionalización de trámites, gobierno digital, accesibilidad, usabilidad, múltiples canales, inclusión, participación ciudadana y demás lineamientos relacionados con la eficiencia administrativa.

De esta manera, el Ministerio del Interior formuló en la vigencia 2023 el presente proyecto que tiene como principal reto fortalecer y mejorar la relación con el ciudadano, de tal manera que se

reconozca la calidad y eficiencia de los servicios que el Ministerio del Interior brinda a la ciudadanía en todo el país, generando el valor público para las acciones del ministerio y su gestión.

Este proyecto fue diseñado para un horizonte de cuatro años (2024-2027) y tiene como objetivo mejorar la estrategia de Servicio al Ciudadano del Ministerio del Interior. Este proyecto fue diseñado inicialmente para un presupuesto total de \$12.272.654.678 durante los cuatro años, para el logro total de sus metas y objetivos; no obstante, durante la distribución de recursos de inversión para la vigencia 2024, se conoció que debido a los límites presupuestales definidos para nuestra entidad en el Decreto de liquidación de Presupuesto para el 2024 el proyecto contaría solo con \$ 1.079.669.245 de los \$2.790.000.000 que se solicitaron para esta vigencia. Situación, que implicó reajustar el alcance de las actividades y realizar un ejercicio de priorización en el cual una de las actividades no pudo contar con recursos en esta vigencia, lo cual presentará un impacto negativo para el desarrollo adecuado del proyecto.

De esta manera, y realizando un análisis técnico y detallado, la Oficina de Información Pública del Interior realizó un costeo de cada una de las actividades, comparándolas con el presupuesto de la presente vigencia, el cual sirvió de base para los cálculos realizados, utilizando variables de crecimiento definidas en los supuestos de macroeconómicos entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, se incluyeron las necesidades adicionales que no pudieron ejecutarse en el 2023 por falta de presupuesto, y que en su gran mayoría ya estaban contempladas desde la formulación inicial como se mencionó anteriormente, lo que representa que el proyecto tendrá un incremento total de 174% frente a la presenta vigencia, siendo así, la Oficina Pública del Interior, como líder de este proyecto, se permite solicitar un presupuesto para 2025 de \$2.957.400.000, que corresponde al valor solicitado desde la formulación del proyecto para ese proyecto, cuya distribución se relaciona a continuación:

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) (c)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Crear alianzas estratégicas con entidades nación y territoriales para incrementar la presencia en el territorio.	260.866.666,00	5 Sistemas de información actualizados	710.000.000,00	43 Sistemas de información actualizados
Mejoramiento de la eficiencia en la divulgación de la oferta institucional del ministerio	151.502.579,00		350.000.000,00	
Realizar diagnóstico de la gestión stakeholders (usuarios, ciudadanía y grupos de valor) frente a la estrategia de Servicio al Ciudadano	180.766.667,00	1 Sistemas de información implementados	421.000.000,00	4 Sistemas de información implementados
Implementación de nuevos canales de atención	175.300.000,00		480.000.000,00	
Desarrollar capacitaciones de servicio al ciudadano	91.200.000,00	100 Personas capacitadas	346.400.000,00	1660 Personas capacitadas
Actualizar los procesos y procedimientos de servicio al ciudadano	140.033.333,00		250.000.000,00	
Desarrollar eventos de divulgación para promocionar el portafolio y la oferta institucional	80.000.000,00		400.000.000,00	
TOTALES	1.079.669.245,00		2.957.400.000,00	

De acuerdo con la tabla anterior, se procede entonces a describir de manera breve la justificación de gasto para cada una de las actividades del proyecto:

- ***Crear alianzas estratégicas con entidades nación y territoriales para incrementar la presencia en el territorio:***

Las alianzas estratégicas contribuyen en el avance hacia la convergencia regional, fortaleciendo los vínculos entre los territorios, el Estado y los ciudadanos; por lo cual, para lograr alianzas estratégicas que garanticen la cobertura y la disponibilidad de la oferta institucional del Ministerio del Interior, se llevará a cabo la contratación de profesionales que se encargarán de mantener y crear nuevas alianzas estratégicas con entidades nacionales y territoriales, con el fin de, articular la institucionalidad para garantizar la cobertura nacional de la oferta de servicios del Ministerio del Interior ante las diferentes comunidades, favoreciendo la cooperación interinstitucional y el aprovechamiento de las capacidades entre entidades.

- ***Mejoramiento de la eficiencia en la divulgación de la oferta institucional del ministerio:***

Mediante el mejoramiento de la eficiencia de la divulgación de la oferta institucional, se fortalecerán los vínculos interregionales, a partir de conectividad e innovación, que aportan al desarrollo incluyente en la relación estado - ciudadano y territorios. Para mejorar la divulgación de la oferta se llevará a cabo la contratación de profesionales que se encargarán de dar continuidad a la estrategia de divulgación, a partir de un plan de acción detallado donde se definen los potenciales aliados, las necesidades de nuestros públicos, los canales de comunicación, el mensaje y la medición de los resultados.

- ***Realizar diagnóstico de la gestión stakeholders (usuarios, ciudadanía y grupos de valor) frente a la estrategia de Servicio al Ciudadano:***

Mediante el mejoramiento de la eficiencia de la divulgación de la oferta institucional, se fortalecerán los vínculos interregionales, a partir de conectividad e innovación, que aportan al desarrollo incluyente en la relación estado - ciudadano y territorios. Para mejorar la divulgación de la oferta se llevará a cabo la contratación de un equipo de investigación y análisis con experiencia en la gestión de stakeholders, que se encargarán de dar continuidad a las estrategias para la identificación de oportunidades y desafíos que enfrenta el Ministerio del Interior en su gestión de stakeholders y cómo pueden afectar la implementación de la estrategia de Servicio al Ciudadano.

- ***Implementación de nuevos canales de atención:***

Mediante el mejoramiento de la eficiencia de la divulgación de la oferta institucional, se fortalecerán los vínculos interregionales, a partir de conectividad e innovación, que aportan al desarrollo incluyente en la relación estado - ciudadano y territorios. Para mejorar la divulgación de la oferta se llevará a cabo la contratación de un equipo de investigación y análisis con experiencia en la gestión de stakeholders, que se encargarán de dar continuidad a las estrategias para la identificación de oportunidades y desafíos que enfrenta el Ministerio del Interior en su gestión de stakeholders y los canales de comunicación y atención efectivos.

- **Desarrollar capacitaciones de servicio al ciudadano:**

Mediante el mejoramiento de la eficiencia de la divulgación de la oferta institucional, se fortalecerán los vínculos interregionales, a partir de conectividad e innovación, que aportan al desarrollo incluyente en la relación estado - ciudadano y territorios. Para desarrollar competencias y habilidades de los servidores públicos del Ministerio del Interior que tienen contacto directo con la ciudadanía y grupos de valor en los territorios, se llevará a cabo la contratación de profesionales que se encargarán de dar continuidad a la estrategia de servicio al ciudadano con capacitaciones en temáticas encaminadas al debido procesamiento de las PQRSD, el control y seguimiento de estas, actitud y habilidades de los servidores públicos en la atención al ciudadano, manejo y resolución de conflictos, y desarrollo de conceptos como calidad, cultura al ciudadano, lenguaje claro e inclusivo.

- **Actualizar los procesos y procedimientos de servicio al ciudadano:**

Mediante el mejoramiento de la eficiencia de la divulgación de la oferta institucional, se fortalecerán los vínculos interregionales, a partir de conectividad e innovación, que aportan al desarrollo incluyente en la relación estado - ciudadano y territorios. Para desarrollar competencias y habilidades de los servidores públicos del Ministerio del Interior que tienen contacto directo con la ciudadanía y grupos de valor en los territorios, se llevará a cabo la contratación de profesionales que se encargarán de dar continuidad a la estrategia de servicio al ciudadano con el fin de fortalecer la institucionalidad mediante la revisión y actualización de los procedimientos que conlleven a mejorar el óptimo servicio al ciudadano.

- **Desarrollar eventos de divulgación para promocionar el portafolio y la oferta institucional:**

La realización de eventos para la divulgación del portafolio institucional del Ministerio del Interior pone al ciudadano en el centro del accionar del Gobierno Central - Ministerio del Interior, para así poder responder de manera acertada a sus necesidades y expectativas. Para lo cual se llevará a cabo la contratación de un operador logístico que facilitará la llegada del Ministerio del Interior a las regiones a través de ferias de servicio al ciudadano.

C-3799-1000-15-53105B	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON CIUDADANO AMPLIANDO LA COBERTURA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	\$1.478.700.000
C-3799-1000-15-53105D	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON CIUDADANO AMPLIANDO LA COBERTURA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D.GOBIERNO DIGITAL PARA LA GENTE	\$1.478.700.000
VALOR TOTAL			2.957.400.000

3.1.3.24 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$2.705.066.237)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 con presupuesto 2024
C-3799-1000-16	\$ 2.500.000.000	\$ 2.705.066.237	\$ 205.066.237	8%
TOTAL	\$ 2.500.000.000	\$ 2.705.066.237	\$ 205.066.237	8%

BASE LEGAL

- Decreto 2482, de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”. Que fue derogado por el Decreto [1083](#) de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- Decreto 1499, del 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

La importancia de los sistemas de gestión en el sector público, enmarcado en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) busca promover una gestión eficiente, transparente y orientada al servicio de los grupos de valor e interés de las entidades, para contribuir en la toma de decisiones, en la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como en el fortalecimiento de la democracia y la confianza en las instituciones.

Se resalta que este proyecto para la vigencia 2025 seguirá orientado al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, con acciones que permitan mejorar el modelo e implementar las nuevas actualizaciones que en materia normativa se han presentado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual busca contribuir a la eficiencia y transparencia de las entidades públicas, en beneficio del ciudadano, con integridad y calidad en el servicio. Por su parte la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Interior, en su rol de segunda línea de defensa dentro del modelo estándar de control interno, también realiza seguimientos periódicos a la gestión y desempeño de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, a través de las “rutas de implementación Scorecard –RSC, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y a las necesidades que demande la entidad para la promoción, desarrollo y mejora del modelo.

En el proceso de implementación de la política de planeación institucional de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico del MIPG, los instrumentos de planeación son herramientas fundamentales que permiten establecer estrategias, objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, proporcionando una guía clara para la toma de decisiones y la asignación de recursos.

Desde la Oficina Asesora de Planeación - OAP, en su rol de asesor, se brindan asistencias técnicas a las dependencias y entidades del sector interior, en la formulación y seguimiento de los instrumentos de planeación, así como en la formulación de fichas técnicas de indicadores y monitoreo a los compromisos adquiridos por el Ministerio en los diferentes marcos de seguimiento, tal como, compromisos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), compromisos en acciones CONPES, compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre otros. Es por ello por lo que se hace necesario disponer de profesionales calificados, a fin de aprovechar el conocimiento y la experiencia de estos en el proceso de asistencia técnica, así como en el fortalecimiento de las herramientas de planeación, que permitan la eficiencia y eficacia en los ejercicios de seguimiento a compromisos, mejora en la toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de gobierno y fines del Estado.

Por otra parte, el Ministerio del Interior lidera y participa en diversas políticas públicas que promueven el bienestar social, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, desde las competencias de asesoría de la OAP se encuentran también las relacionadas con el acompañamiento en los procesos de formulación y seguimientos de las políticas públicas y acciones CONPES en las que tenga compromisos el Ministerio del Interior. Por consiguiente, se hace necesario disponer de profesionales calificados en planeación estratégica, análisis de datos, coordinación intersectorial y evaluación de políticas, que permita un enfoque informado y basado en evidencias para la formulación y seguimiento de las acciones gubernamentales.

Adicionalmente y de conformidad con las funciones de la Oficina Asesora de Planeación se le da principal relevancia a la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, en la Dimensión 2; Direccionamiento Estratégico y Planeación; así como al marco normativo vigente de programación presupuestal y a los lineamientos del Ministerio de Hacienda en materia de programación presupuestal.

Así mismo, la programación del presupuesto para la vigencia fiscal 2025 se enmarca en la estrategia contenida en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y se adoptará en un escenario económico internacional para el cual se prevén importantes signos de recuperación, un avance significativo en la reducción de la inflación y una moderada relajación de las restricciones monetarias.

Los costos se proyectan para la siguiente vigencia con un supuesto de incremento de inflación del 8.35% basados en el dato emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el mes de enero de la vigencia 2024.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Actualización del modelo de operación por procesos en el Ministerio del Interior	\$ 325.660.883	1	\$ 349.960.456	1
Implementación de los lineamientos y mecanismos que integran el Modelo de Planeación y Gestión en la Entidad	\$ 325.660.883		\$ 349.960.456	
Desarrollo de actividades que permitan la mejora en la gestión institucional de acuerdo con los lineamientos normativos y técnicos.	\$ 319.876.142		\$ 343.770.784	
Acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento de Políticas Públicas, documentos CONPES en los que tenga responsabilidad el Ministerio del Interior.	\$ 286.211.036		\$ 307.749.120	
Fortalecer la programación presupuestal del Ministerio del Interior.	\$ 378.325.067		\$ 406.311.134	
Atender los lineamientos previstos en las normas para la formulación, actualización y seguimiento de Planes Estratégicos.	\$ 266.987.869	317	\$ 289.435.300	317
Acompañamiento en la formulación y seguimiento de los indicadores para el monitoreo efectivo de los compromisos adquiridos por el Ministerio del Interior.	\$ 214.767.589		\$ 233.559.600	
Formación y mejora de competencias en planeación y gestión a los funcionarios del Ministerio del Interior.	\$ 78.585.815	100	\$ 87.845.102	100
Socialización de las mejoras y actualizaciones del SIGI a los colaboradores del Ministerio del Interior.	\$ 105.509.538		\$ 116.653.485	
Fortalecimiento en el diseño del tablero de control sobre la planeación estratégica que orientará la toma de decisiones de la entidad.	\$ 99.207.589	1	\$ -	1
Seguimiento y control de la información registrada en el tablero de control sobre la planeación estratégica que orientará la toma de decisiones de la entidad.	\$ 99.207.589		\$ 219.820.800	
TOTAL	\$ 2.500.000.000		\$ 2.705.066.237	

3.1.3.25 FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL. (\$10.765.710.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3799-1000-17	\$ 10.068.223.868	\$ 10.765.710.000	\$ 697.486.132	6.9%
TOTAL	\$ 10.068.223.868	\$ 10.765.710.000	\$ 697.496.132	6,9%

BASE LEGAL

En virtud del artículo 2° de la Ley 1444 de 2011, se escindió el Ministerio del Interior y de Justicia, reorganizándose el Ministerio del Interior y creándose el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Mediante el Decreto 2893 de agosto 11 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.”, entre otras disposiciones, se establecieron las funciones de la Oficina de Información Pública del Ministerio del Interior - OIPI, como rectora de los asuntos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022- 2026 – Colombia, potencia mundial de la vida:

- **ESTRATEGIA TRANSVERSAL:**

El Ministerio del Interior tiene dentro de sus alcances misionales la construcción de una ruta para la interoperabilidad entre los sistemas de información de diferentes entidades del orden nacional, en búsqueda de una garantía real de derechos, acceso a la información y transparencia hacia el ciudadano, fungir como un puente entre la ciudadanía y el estado para lograr que las metas fijadas por el Gobierno Nacional se ejecuten de una manera más eficiente y transparente, así como para una adecuada toma de decisiones conjuntas en materia de políticas públicas.

- **SECCIÓN II TERRITORIOS MÁS HUMANOS: HÁBITAT INTEGRAL**

ARTÍCULO 235. FORTALECIMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO. Se fortalecerán las inversiones en los componentes de i) Agua Potable y Saneamiento Básico, ii) Energización Rural y Energías Alternativas Sostenibles y iii) Mejoramiento de la Conectividad en Transporte, y se crea el componente de iv) Conectividad Digital, en el ámbito de competencia para la actuación territorial del Fondo Para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP). Asimismo, en atención al Decreto 1874 de 2022, se amplía la competencia para la intervención en los municipios de los departamentos del Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional.

- **SECCIÓN III GARANTÍA DE DERECHOS COMO FUNDAMENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y CONDICIONES PARA EL BIENESTAR**

ARTÍCULO 89. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL LOGRO DE LA PAZ TOTAL. El Ministerio del Interior, articulará la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública de Derechos Humanos para el logro de La Paz Total, con las demás entidades competentes, con un enfoque integral, territorial, diferencial, social y de género.

ARTÍCULO 90. ESTRATEGIA DE DIALOGO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL Y LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL. El Ministerio del Interior como coordinador y enlace de las entidades del orden nacional y de los entes territoriales, liderará la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la Política Pública de Diálogo Social en el marco de la Seguridad Humana.

ARTÍCULO 91. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO. El Ministerio del Interior liderará, ampliará y fortalecerá la Política Pública de Participación Ciudadana y Electoral, con el fin de fortalecer la organización de la sociedad civil, las organizaciones sociales y proteger el voto libre.

ARTÍCULO 94. MECANISMO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIAS Y ACTOS DE DISCRIMINACIÓN A POBLACIÓN LGBTIQ+. El Ministerio de Igualdad y Equidad en articulación con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, junto con la participación de la Comisión Accidental de Diversidad Sexual del Congreso de la República, el Ministerio Público, representantes de la academia y organizaciones sociales, conformarán un mecanismo de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación oportuna a casos de violencias contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en conexidad con el Sistema Nacional LGBTIQ+ o el que haga sus veces.

ARTÍCULO 115. TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones diseñará e implementará una estrategia integral para democratizar las TIC y desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología en el país.

ARTÍCULO 116. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoverá la consolidación de la Industria TIC nacional como un motor de crecimiento, empleo y desarrollo para el país.

ARTÍCULO 120. Modifíquense los incisos primero y segundo del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO 169. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, adelantados con recursos públicos, el Estado como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de estos proyectos podrá ceder dichos derechos a través de la entidad financiadora, sin que ello le constituya daño patrimonial. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato, convenio o demás instrumentos generados en el marco de las competencias de cada entidad financiadora

- **SECCIÓN IV CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS COMUNIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**

ARTÍCULO 29. FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES. El Gobierno nacional Implementará una estrategia diferenciada de fortalecimiento y asistencia técnica para los Esquemas Asociativos Territoriales -EAT-, en el ejercicio de sus competencias y funciones para la ejecución de sus planes estratégicos.

- **SECCIÓN V CONSOLIDACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO Y TRÁNSITO HACIA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO - SAT-**
- **SECCIÓN V JUSTICIA PARA EL CAMBIO SOCIAL, DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO Y GARANTÍA DE DERECHOS Y LIBERTADES**

ARTÍCULO 32. GESTIÓN CATASTRAL EN TERRITORIOS Y TERRITORIALIDADES DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y EN TERRITORIOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS.

Se crearán e implementarán mecanismos y disposiciones especiales con enfoque intercultural para la gestión catastral multipropósito en territorios y territorialidades de comunidades indígenas y en territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el fin de crear, modificar, adicionar o suprimir trámites, procesos, procedimientos, modelos, sistemas de información y/o requisitos relacionados con el servicio público de la gestión catastral conforme a un esquema diferencial regulado por el Gobierno nacional, en concertación con los pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, a través de sus estructuras representativas.

Adicionalmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto se encuentra asociado a los catalizadores y componentes que se indican a continuación:

Catalizador	Componente
5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	d. Gobierno digital para la gente
4. Acceso, uso y aprovechamiento de datos para impulsar la transformación social	a. Implementación del Programa de Datos Básicos
4. Acceso, uso y aprovechamiento de datos para impulsar la transformación social	b. Interoperabilidad como bien público digital
8. Seguridad digital confiable para la garantía de las libertades, la protección de la dignidad y el desarrollo integral de las personas	b. Protección de las personas, de las infraestructuras digitales, fortalecimiento de las entidades del Estado y garantía en la prestación de sus servicios en el entorno digital

En este sentido, el marco normativo que soportan los gastos que se derivan de la ejecución del proyecto es el siguiente:

Constitución Política:

- Artículos 20 y 74 consagran el acceso a la información como derecho fundamental. Partiendo de esta premisa, Colombia adopta un marco legal que garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los ciudadanos Ley 1712 de 2014.

Leyes:

Ley de “Transparencia y acceso a la información”, establece procedimientos para garantizar este

derecho y obliga a las entidades – en el marco de la seguridad y privacidad de la información respetando los datos reservados y clasificados- a publicar o liberar datos abiertos

- Ley 1519 del 2020 y anexo Cuatro (4). Requisitos mínimos de datos abiertos - Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.
- Ley 962 de 2005, que determina en su artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite”.
- ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo menciona en el “Artículo 45. Estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano. Bajo la plena observancia del derecho fundamental de habeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los trámites y servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano, los cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales y aplicarán, entre otros, para el siguiente caso: (...) j) Interoperabilidad de datos como base para la estructuración de la estrategia que sobre la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y publicación de grandes volúmenes de datos (Big Data) formule el Departamento Nacional de Planeación. (...)”
- ley 2052 de 2020 por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones según el artículo 10 servicio de interoperabilidad. los sujetos obligados en los términos de la presente ley, deberán crear, diseñar o adecuar los mecanismos de intercambio de información de los sistemas y soluciones tecnológicas que soportan sus trámites, dando cumplimiento al Marco de interoperabilidad y los lineamientos de vinculación al servicio de interoperabilidad de los servicios ciudadanos digitales según lo establecido sobre el particular por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (...).

Decretos:

- Decreto 1081 de 2015. Define pautas relacionadas con la forma en que las entidades públicas deben implementar lo definido en la ley y así mismo Resolución 3564 de 2015 Ministerio TIC establece, entre otros aspectos, los estándares para la publicación de información, incluyendo las condiciones técnicas para la apertura de los datos abiertos en Colombia.
- Decreto 1008 2018, Establece lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.
- Decreto 088 de 2022 del 24 de enero, Por el cual se adiciona el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los artículos 3, 5 y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea.

- Decreto 1151 de 2008 y su Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, en lo que respecta a la fase de Transformación, en la cual “las entidades deben realizar cambios en la manera de operar para eliminar límites con otras entidades y organizar sus trámites y servicios alrededor de necesidades de ciudadanos y empresas, a través de cadenas de trámites, ofreciendo servicios por medio de múltiples canales e intercambiando eficientemente la información, logrando establecer una visión unificada del Estado”.
- Decreto 235 de 2010, regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de la función pública y determina la obligación de las entidades de establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para el intercambio de información con otras entidades que así lo requieran, sin que genere costo alguno para la entidad que la solicita.
- Decreto 2573 de 2014, dispone los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea en lo que respecta a los fundamentos de la estrategia en los cuales se menciona la Interoperabilidad para fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores
- Decreto 1078 de 2015 “Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, título 17, capítulo 1 Artículo 2.2.17.1.3” el cual define al Marco de interoperabilidad como “el conjunto de principios, políticas y recomendaciones que busca facilitar y optimizar la colaboración entre 14 organizaciones privadas y entidades del Estado para intercambiar información y conocimiento, en el marco de los procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras entidades para intercambiar información, aporte de documentos y datos en línea”.
- Decreto 415 de 2016 de “fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones” que en el numeral 8 del “ARTÍCULO 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones las entidades y organismos a que se refiere el presente decreto deberán: (...) 8. Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación entre entidades del sector y del Estado en materia de integración e interoperabilidad de información y servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de mejores servicios al ciudadano. (...)”.
- Decreto 1413 de 2017, el cual define en el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales, Artículo 2.2.17.2.1.1. Descripción de los servicios ciudadanos digitales. Los servicios ciudadanos digitales se clasifican en básicos y especiales siendo el Servicio de Interoperabilidad (...) aquel que brinda las capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo de información y de interacción entre los sistemas de información de las entidades del Estado, permitiendo el intercambio, la integración y la compartición de la información (...)
- Decreto 1008 de 2018 en el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital para Colombia y el Manual de Política de Gobierno Digital y a la interoperabilidad como parte fundamental del habilitador transversal de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Resoluciones Internas:

- Resolución 529 del 22 de marzo de 2012, por la cual se crea el Grupo de Servicio al Ciudadano en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior.
- Resolución 1655 de 2012, por la cual se delega a dos funcionarios del Ministerio del Interior para integrar el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, GRAT.

- Resolución 252 de 2013, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición y la interposición de recursos ante el Ministerio del Interior.

Otras

- CONPES 3920 de 2018, Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data) y con ello definió las condiciones habilitantes para aumentar el aprovechamiento de datos públicos y garantizar que estos sean gestionados como activos capaces de generar valor social y económico
- Resolución No. 02893 del 30 de diciembre del 2020, por la cual se expiden lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales específicos de programas transversales, sedes electrónicas, trámites OPAs y consulta de acceso a información pública, así como la integración al portal único del Estado Colombiano y se dictan otras disposiciones
- CONPES 3292 de 2004: Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA EL 2025:

El Ministerio del Interior es la entidad cabeza del Sector Administrativo del interior, tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, los cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio debe responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos, promover la asimilación de las TIC como herramientas de comunicación, el cual es uno de los retos principales para incrementar la eficacia y eficiencia. Es por esto que la gestión de la administración pública siempre va a tener asociados unos riesgos que pueden entorpecer su misión, a saber:

- ✓ Problemas en la disponibilidad de los servicios por obsolescencia tecnológica.
- ✓ Resistencia al uso de la Tecnología de la Información (TI).
- ✓ Falta de automatizar algunos procesos misionales y de apoyo del Ministerio del Interior, lo que genera falta de control y seguimiento a los servicios que se prestan al ciudadano.
- ✓ Falta de integración entre sistemas de información, lo cual implica desgastes administrativos y desagregación de la información.
- ✓ Falta de implementación de nuevos trámites en línea.
- ✓ Se debe proyectar el soporte y mantenimiento de los sistemas de información.

Teniendo en cuenta que la información que maneja el Ministerio del Interior es de alta importancia, sensible y de impacto institucional, es necesario minimizar los riesgos de pérdida, intrusión y posible modificación de la misma; para ello se debe disponer de elementos y estándares modernos de seguridad que garanticen un adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad y construir, formalizar y comunicar los procesos que soportan la Gestión de TI.

El Ministerio del Interior ha realizado acciones para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica, pero aún existen dificultades en la Gestión de TI, pues la arquitectura actual de los sistemas de información es compleja y poco flexible, presentando sistemas de información desarticulados y con bajo nivel de utilización e integración, lo cual puede generar la no disponibilidad de información y la falta de oportunidad y efectividad en la atención de las solicitudes y responsabilidades de la Entidad. Por tal razón es necesario implementar una oficina de gerencia de proyectos que permita la gestión, administración y seguimiento de los proyectos de TI, dichas acciones conllevan a centralizar los requerimientos de implementación y desarrollo de soluciones informáticas dentro de la entidad.

Por otra parte, la infraestructura tecnológica actual del Ministerio del Interior soporta las aplicaciones y servicios de red, sin embargo, existen temas para generar mejoras. En este sentido, se diseñarán e implementarán nuevas soluciones tecnológicas e informáticas que respondan a la gestión interna y transversal de la Entidad, incluyendo la construcción, implementación y adopción de herramientas computacionales basadas en TIC, así como soluciones de alta disponibilidad.

En este orden, se requiere el mejoramiento de la gestión tecnológica para soportar los servicios informáticos de carácter transversal y misional de manera eficiente y oportuna, aumentando el nivel de confiabilidad, actualización y oportunidad de la información, para lo cual, es necesario el fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación de TI, optimizar la gestión de los sistemas de información, fortalecer la estrategia de seguridad de la información y optimizar la gestión de los servicios tecnológicos de cara al ciudadano.

De esta manera, el Ministerio del Interior formuló en la vigencia 2023 el presente proyecto que tiene como principal reto fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad de manera que sea lo suficientemente robusta y que cumpla con las políticas de seguridad de la información y gobierno digital para que den soporte a todas las acciones operativas y administrativas que tiene el Ministerio para el cumplimiento de su misionalidad y la creación de valor público de cara a la ciudadanía.

Este proyecto fue diseñado para un horizonte de cuatro años (2024-2027) y tiene como objetivo mejorar la estrategia de Servicio al Ciudadano del Ministerio del Interior. Este proyecto fue diseñado inicialmente para un presupuesto total de \$53.447.078.552 durante los cuatro años, para el logro total de sus metas y objetivos; no obstante, durante la distribución de recursos de inversión para la vigencia 2024, se conoció que debido a los límites presupuestales definidos para nuestra entidad en el Decreto de liquidación de Presupuesto para el 2024 el proyecto contaría solo con \$10.068.223.868 de los \$21.345.250.000,00 que se solicitaron para esta vigencia. Situación, que implicó reajustar el alcance de las actividades y realizar un ejercicio de priorización en el cual una de las actividades no pudo contar con recursos en esta vigencia, lo cual presentará un impacto negativo para el desarrollo adecuado del proyecto.

De esta manera, y realizando un análisis técnico y detallado, la Oficina de Información Pública del Interior como líder de este proyecto, se permite solicitar un presupuesto para 2025 de \$ 10.765.710.000. Valor que proviene del análisis de costo de operación del anteproyecto que se realizó en el mes de marzo de 2024 en el cual se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Un análisis en el SECOP comparando precios de procesos de tecnología con similares características de entidades de magnitud muy parecida a las del Ministerio del Interior en materia tecnológica.
- Se hizo la proyección del IPC para el año 2025 para hacerlo comparable, conforme a los supuestos definidos por MinHacienda.
- Se utilizaron precios de lista de algunos fabricantes de tecnología que existen en el mercado tales como HP, Cisco, Lenovo, Aruba, Streem, LG, high ref, apc, titan, eatom, vertiv, socomec.
- Se analizaron precios de la plataforma de la tienda virtual del estado colombiano Colombia Compra Eficiente de las diferentes soluciones tecnológicas que están disponibles en dicha plataforma.
- Se verificó la tabla de honorarios de servicios de apoyo y profesionales del Ministerio del Interior para la vigencia 2024 y se hizo una proyección para el año 2025 teniendo en cuenta el IPC.
- Se analizó el comportamiento de la TRM del Dólar y el valor que definió MinHacienda en sus supuestos macroeconómicos, manteniendo como techo a solicitar el valor solicitado desde la formulación del proyecto para la próxima vigencia, cuya distribución se relaciona a continuación:

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar la actualización tecnológica de hardware y facíli del Ministerio	628.939.999	25% en el Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnologías	2.028.404.333	25% en el Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnologías
Realizar la adquisición de nueva tecnología de software del Ministerio	730.000.000		751.900.000	
Realizar el desarrollo y actualización de los sistemas de información	3.117.567.202		2.904.394.000	
Contratar el personal especializado e interdisciplinario suficiente para la administración de Software, Hardware y sistemas de información	612.000.000		630.360.000	
Contratar personal especializado para la creación de la gerencia de proyectos (PMO)	225.400.000		232.162.000	
Adoptar los controles que permitan elevar el nivel de seguridad informática basados en la norma ISO 27001:2022.	1.736.583.333	8 Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados	1.428.180.833	8 Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados
Implementar el MSPi	175.300.000		278.718.000	
Contratar el talento humano especializado e interdisciplinario para implementar política de Seguridad de la Información	399.766.667		411.759.667	
Fortalecer la implementación de la interoperabilidad interna y externa	93.066.667	4 Sistemas de información implementados.	95.858.667	4 Sistemas de información implementados.
Fortalecer el diagnóstico de la arquitectura empresarial	911.500.000		829.922.500	
Fortalecer y actualizar los planes y programas de tecnologías de la información acorde con la política de gobierno digital (lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales específicos de programas transversales, sedes electrónicas, trámites, OPAs y consultas de acceso a información pública, enmarcado en el portal GOV.CO)	1.000.000.000		1.030.000.000	
Actualizar los procesos y procedimientos enmarcados en buenas prácticas que obedezcan a un ciclo de vida de desarrollo de software correcto.	438.100.000		144.050.000	
	10.068.223.868		10.765.710.000	

De acuerdo con la tabla anterior, se procede entonces a describir de manera breve la justificación de gasto para cada una de las actividades del proyecto:

- **Realizar la actualización tecnológica de hardware y facíli del Ministerio**

Dentro de la actualización tecnológica de hardware se requiere con urgencia la actualización de los equipos de la red LAN del Ministerio del Interior, por lo que es importante la renovación de los switches de comunicación.

Por obsolescencia tecnológica y por deterioro se requiere el cambio de las UPS del tercer piso para sostenibilidad eléctrica de la energía regulada del data center.

- **Realizar la adquisición de nueva tecnología de software del Ministerio**

Por necesidades del servicio de comunicaciones y por seguridad se requiere la renovación del licenciamiento de los tres productos.

- **Realizar el desarrollo y actualización de los sistemas de información**

Por necesidades del servicio se requiere la renovación del licenciamiento office 365 para las cuentas de correo.

Para dar cumplimiento a todas las actividades relacionadas con los sistemas de información de las diferentes dependencias del Ministerio se requiere el fortalecimiento del personal especializado.

- **Contratar el personal especializado e interdisciplinario suficiente para la administración de Software, Hardware y sistemas de información**

Para brindar soporte técnico y administración del software y hardware del Ministerio se requiere de la contratación de los respectivos ingenieros y técnicos.

- **Contratar personal especializado para la creación de la gerencia de proyectos (PMO)**

Se requiere de la contratación de los ingenieros especializados para realizar actividades de actualización y administración de la PMO de la oficina.

- ***Adoptar los controles que permitan elevar el nivel de seguridad informática basados en la norma ISO 27001:2022.***

El rubro se requiere para mantener actualizado el software y hardware que se requiere para aplicar los respectivos controles en materia de seguridad de la información e informática.

- ***Implementar el MSPI***

Se requiere de la contratación de ingenieros para la continuidad del proceso de implementación del MSPS en la entidad.

- **Contratar el talento humano especializado e interdisciplinario para implementar política de Seguridad de la Información**

Se requiere de la contratación de ingenieros especializados para realizar actividades de administración de la seguridad dentro del Ministerio.

- **Fortalecer la implementación de la interoperabilidad interna y externa**

Se requiere de la contratación de un profesional que administre y gestione la interoperabilidad de los sistemas de información del Ministerio con las demás entidades públicas.

- **Fortalecer el diagnóstico de la arquitectura empresarial**

Se requiere de la continuidad de las actividades de fortalecimiento de la arquitectura empresarial en temas relacionados con la tecnología dentro del Ministerio. Además, Se requiere contratar a un ingeniero que realice las actividades de administración y gestión del fortalecimiento de la arquitectura empresarial.

- **Fortalecer y actualizar los planes y programas de tecnologías de la información acorde con la política de gobierno digital (lineamientos para estandarizar ventanillas únicas,**

portales específicos de programas transversales, sedes electrónicas, trámites, OPAS y consultas de acceso a información pública, enmarcado en el portal GOV.CO)

Se requiere del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de seguridad, capacidad de almacenamiento y actualización de los componentes de la sede electrónica con el fin de brindar un mejor servicio de cara a los grupos de interés y valor.

- **Actualizar los procesos y procedimientos enmarcados en buenas prácticas que obedezcan a un ciclo de vida de desarrollo de software correcto.**

Se requiere contratar de un ingeniero que realice actividades de control en la implementación de las buenas prácticas de desarrollo dentro de la entidad.

Por último, se presenta una desagregación de la necesidad presupuestal 2025 a nivel del anexo de decreto de liquidación de presupuesto y cargue aplicativo SIIF:

RUBRO	PROYECTO	DESCRIPCION	NECESIDAD PRESUPUESTAL 2025
C-3799-1000-17-20104A	FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL	2 SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / A. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DATOS BÁSICOS	2.691.427.500
C-3799-1000-17-20104B	FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL I B. INTEROPERABILIDAD COMO BIEN PUBLICO DIGITAL	2.691.427.500
C-3799-1000-17-20108B	FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, DE LAS INFRAESTRUCTURAS DIGITALES, FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GARANTIA EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EN EL ENTORNO DIGITAL	2.691.427.500
C-3799-1000-17-53105D	FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL	5. CONVERGENCIA REGIONAL/ D. GOBIERNO DIGITAL PARA LA GENTE	2.691.427.500
VALOR TOTAL			10.765.710.000,00

3.1.3.26 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS. (\$6.322.528.029)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 respecto a
C-3799-1000-18	\$ 4.500.000.000	\$ 6.322.528.029	\$ 1.822.528.028	41%
Total	\$ 4.500.000.000	\$ 6.322.528.029	\$ 1.822.528.028	41%

BASE LEGAL

Según el artículo primero de la Constitución Política, Colombia está constituida como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Adicionalmente, en el título V “De la organización del Estado”, capítulo I “De la estructura del Estado”, artículo 13 de la Carta Magna, son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Las anteriores son autónomas e independientes, con capacidad de colaboración dentro del sistema de pesos y contrapesos.

En virtud de lo anterior, es importante resaltar el respeto por la autonomía e independencia entre las Ramas del Poder Público, especialmente la existente entre el Ejecutivo y el Legislativo, como la relación que primordialmente se genera entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República y en especial desde el Ministerio del Interior como principal intermediario de la misma dadas sus funciones relacionadas a continuación.

El decreto número 2893 de 2011, por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior. En su Artículo 1, el Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencia y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. Adicionalmente, el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa del Gobierno Nacional.

Aunque la totalidad de los Ministerios que componen el Gobierno Nacional, y demás entidades del Ejecutivo, tienen una relación directa con el Congreso de la República, es importante mencionar que el Ministerio del Interior es la única entidad del orden Nacional que cuenta con una Dirección de Asuntos Legislativos es por esto que tiene la responsabilidad de coordinar la agenda legislativa del Gobierno Nacional y la interlocución con el Congreso de la República. Por lo anterior entre sus funciones encontramos en el artículo 2 del decreto número 2893 de 2011, numeral 13: Coordinar, con el concurso de los demás ministerios, la agenda legislativa del Gobierno Nacional

en el Congreso de la República y las demás entidades del orden nacional. Además, en el artículo 6 del mismo, encontramos entre las funciones del Despacho del Ministro del Interior en los numerales 2 y 8: primero, coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, así como con los organismos de control y la Organización Electoral, para el desarrollo y consolidación de la política pública de competencia del Ministerio. Adicional, impulsar los proyectos de ley y actos legislativos ante el Congreso de la República que sean de origen gubernamental y coordinar la acción del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, con el concurso de los demás ministerios y las demás entidades públicas del orden nacional.

Dada la variedad de temas que abarca el Ministerio del Interior y la importancia de cada uno de ellos, es importante resaltar el apoyo que brinda el Despacho del Viceministro General del Interior, quien es el encargado de soportar al Ministro en los temas que tienen que ver con el relacionamiento antes mencionado del Ejecutivo con el Legislativo. Entre las funciones del Despacho encontramos en el mismo decreto mencionado: liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas dirigidas a fortalecer las relaciones del Gobierno Nacional con la Rama Legislativa a través del impulso, seguimiento y control de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional.

Dentro de la misma estructura organizacional del Ministerio del Interior, encontramos adscrita al Despacho del Viceministro General del Interior, a la Dirección de Asuntos Legislativos, cuyas funciones se encuentran encaminadas a brindar apoyo en el relacionamiento entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa del Estado, son las siguientes:

1. Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer las relaciones entre el Gobierno Nacional y la Rama Legislativa para el cumplimiento de la Agenda Legislativa.
2. Coordinar con las entidades que conforman el Sector Administrativo del Interior, y con las demás que considere estratégicas el Gobierno Nacional, la presentación, discusión y seguimiento de los proyectos de ley y de actos legislativos.
3. Hacer seguimiento a la presentación, estudio, discusión y trámite de los proyectos de ley y de actos legislativos presentados en el Congreso de la República.
4. Analizar y evaluar la dinámica política y participativa de la actividad legislativa del Congreso de la República.
5. Proyectar las respuestas del Ministro o Viceministros a los cuestionarios y citaciones de control político en coordinación con las dependencias del Ministerio.
6. Coordinar con las entidades del Sector Administrativo del Interior y con las entidades del Estado que lo requiera, la presentación de respuestas a cuestionarios y citaciones de control político que el Ministerio deba atender en el Congreso de la República.
7. Mantener actualizada la base de datos de los proyectos de Acto Legislativo y de Ley que cursan en el Congreso de la República, con el fin de generar información sobre el estado y desarrollo de los mismos.
8. Promover, realizar y presentar análisis, estudios e investigaciones de apoyo que requiera el Ministro, con respecto a la actividad legislativa y de control político.
9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
10. Obtener las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Dadas las funciones de la Dirección de Asuntos Legislativos y la variedad e importancia de las mismas en el apoyo a las funciones del Viceministro General del Interior y del Ministro del Interior, la Dirección se dividió en dos grupos de trabajo según la resolución 2434 de 2011. Los grupos de

trabajo constituidos son, primero el Grupo de Trámite Legislativo y Control Político; y el Grupo de Conceptos y Apoyo Informativo, las funciones de los mismos son las siguientes:

Grupo de Trámite y Control Político:

1. Acompañar el trámite de los proyectos de Ley en el Congreso de la República. 2. Coordinar y evaluar, la dinámica política y participativa de la actividad legislativa del Congreso de la República. 3. Coordinar y hacer seguimiento a la actividad legislativa de los proyectos de Ley y/o de Acto Legislativo que cursan en el Congreso de la República. 4. Analizar, alimentar y mantener la información necesaria de los proyectos presentados en el Congreso de la República. 5. Asistir al Ministro y Viceministros en las discusiones de los proyectos de Ley en el Congreso de la República. (...)

Grupo de Conceptos y Apoyo Informativo:

1. Presentar los análisis y estudios que requiera el Ministro, sobre el Proceso Legislativo Ordinario y Constituyente. 2. Analizar y estudiar previamente a su radicación en el Congreso de la República los Proyectos de Ley de iniciativa del Ministerio y conservar los registros de acuerdo con las tablas de retención documental. 3. Analizar previamente a su radicación en el Congreso de la República los Proyectos de Acto Legislativo de iniciativa del Ministerio. 4. Presentar los conceptos y análisis de constitucionalidad de los Proyectos de Ley que cursan en el Congreso de la República, que sean de interés del Ministerio del Interior, en los asuntos de su competencia. 5. Presentar los conceptos y análisis de constitucionalidad de los Proyectos de Acto Legislativo que cursan en el Congreso de la República que requiera el Ministerio. 6. Presentar los análisis y estudio de conveniencia de los proyectos de Acto Legislativo que cursan en el Congreso de la República que sean de interés del Ministerio del Interior, en los asuntos de su competencia. (...)

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

Dadas las funciones del Ministerio del Interior, del Viceministerio General del Interior y de la Dirección de Asuntos Legislativos, es importante recalcar que es la Dirección de Asuntos Legislativos la articuladora y responsable del buen desarrollo del relacionamiento del Gobierno Nacional con el Congreso de la República. Para lo cual desarrolla un número importante de tareas.

- **Trámite legislativo**

En primer lugar, la Dirección de Asuntos Legislativos es responsable por el seguimiento al trámite legislativo de todos los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo que cursan en el Congreso de la República, esto comprende no solo los de iniciativa del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior, que en la práctica se convierten en prioridad, sino también los de iniciativa parlamentaria.

Con corte a febrero del 2024 la Dirección de Asuntos Legislativos se encuentra realizando seguimiento a 832 iniciativas legislativas que en encuentran en trámite en el Congreso de la República, de los cuales 356 se encuentra en trámite en el Senado de la República, 476 en la Cámara de Representantes.

Para este ejercicio, es necesario que la Dirección de Asuntos Legislativos tenga presencia en cada una de las siete Comisiones Constitucionales en cada una de las dos Cámaras, Cámara de Representantes y Senado de la República, en la cuales se tramitan los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo. Adicionalmente, los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo que cursan en el

Congreso, luego de ser aprobados en la Comisión respectiva, deben ser también discutidos en la Plenaria de cada corporación, por lo que es necesario de nuevo la presencia constante de la Dirección de Asuntos Legislativos en todas las sesiones Plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.

Es importante tener en cuenta que lo anterior aplica para el general de los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo que cursan en el Congreso de la República. En cuanto a los Proyectos de Autoría del Gobierno Nacional, es responsabilidad de la Dirección de Asuntos Legislativos, el seguimiento a los mismos, el impulso y la coordinación, lo que incluye la coordinación de reuniones, la revisión del texto ante el Congreso de la República, la preparación de las ponencias con las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas ponentes de los Proyectos, la agilización en la radicación y publicación de las ponencias y documentos de interés en la Gaceta del Congreso, la inclusión de los Proyectos en las órdenes del día de las intervenciones para defensa. Así como toda la información que el Director de Asuntos Legislativos, Viceministro y Ministro del Interior puedan requerir durante el trámite de los Proyectos de autoría del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.

Del 8 de agosto del 2022 a la fecha se han aprobado un total de 32 iniciativas legislativas de la agenda prioritaria del Gobierno en el Congreso de la República y se encuentran en trámite un total de 33 proyectos, a subes es importante resaltar que se pretende radicar una ambiciosa agenda legislativa en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

Al ser el Ministerio del Interior el responsable del relacionamiento entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa, también recae responsabilidad por el buen término en el Congreso de la República de toda la agenda legislativa del Gobierno Nacional, lo que significa realizar seguimiento y apoyar el trámite de todos los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo presentados por todos los Ministerios y entidades del orden nacional que comprenden el Gobierno, así como los presentados por entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, y en las demás con iniciativa legislativa. Para el cumplimiento de esta agenda, la Dirección de Asuntos Legislativos participa en reuniones de coordinación entre las distintas entidades, con las personas responsables del relacionamiento con el Congreso de la República y sus equipos jurídicos en la consolidación y unificación de criterios, definición de prioridades, construcción de ponencia y documentos, además de servir como mediador en la relación de las entidades con los Congresistas.

Finalmente, en lo respectivo al trámite y seguimiento legislativo, la Dirección de Asuntos Legislativos ha implementado una serie de procedimientos que se aplican a cada uno de los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo que cursan trámite en el Congreso de la República, desde su radicación hasta su promulgación o sanción. Al radicarse un Proyecto de Ley, se informa a las entidades a las cuales afecta de forma positiva o en sus funciones y misionalidad; se abre un expediente individual por Proyecto, en el que se consolida toda la información del mismo llamado Ficha Técnica; esta información y otra adicional se incluye en una matriz de seguimiento por legislatura; adicionalmente, la Dirección debe contar con todos los documentos relacionados con el trámite individual de cada Proyecto como el texto original, ponencias, textos definitivos, proposiciones, actas de sesión, votaciones, y demás documentos publicados en la Gaceta del Congreso.

- **Control político**

Por otro lado, en lo pertinente a la atribución Constitucional del Congreso de la República al control político, es responsabilidad de la Dirección de Asuntos Legislativos la consolidación de toda la información dentro del Ministerio del Interior de las respuestas a debates de control político aprobados previamente en las distintas corporaciones del Congreso de la República. En el año 2023 se atendieron 219 invitaciones y 60 Cuestionario Debate de Control Político.

Para el cumplimiento de esta responsabilidad, es necesario realizar seguimiento en cada Comisión o en las Plenaria generando alertas de la aprobación de debate de control político, foro o audiencia pública en el cual se encuentra citado o invitado el Ministerio del Interior o cualquiera de sus funcionarios.

En casos de contener cuestionario, la Dirección de Asuntos Legislativos es responsable de dar respuesta al mismo en lo que comprende sus funciones o de dar trámite a cada una de las preguntas a las Direcciones, Subdirecciones, Grupos u Oficinas dentro o fuera del Ministerio del Interior de acuerdo a sus competencias. La Dirección debe realizar seguimiento a esas solicitudes y asegurar que se den respuestas dentro de los tiempos establecidos por la Ley. Así mismo, es función de la Dirección consolidar la información brindada por las distintas dependencias y preparar un documento para dar respuesta a la citación del Congreso de la República.

Finalmente, es responsabilidad de la Dirección de Asuntos Legislativos dar respuesta en coordinación con las demás dependencias del Ministerio del Interior, a las peticiones y consultas, remitidas por el Congreso de la República, durante la vigencia 2023 la dirección atendió oportunamente 1226 peticiones.

- **Conceptos y apoyo informativo**

La Dirección de Asuntos Legislativos es responsable de analizar y conceptuar la constitucionalidad de los proyectos de Ley y de Acto Legislativo que cursan trámite en el Congreso de la República. Estos conceptos se emiten según la necesidad, por solicitud expresa del Congreso de la República o de uno de sus miembros, o por iniciativa interna de la Dirección por posible afectación positiva o inconveniente de las funciones y atribuciones del Ministerio del Interior y del Sector Administrativo del Interior.

Al análisis de revisión por competencia de un proyecto de ley o acto legislativo, o por solicitud expresa del Congreso de la República, la Dirección debe responder directamente si se relaciona con sus funciones, o remitiendo a la dependencia del Ministerio del Interior o entidades adscritas para dar respuesta al concepto requerido. Desde la Dirección de asuntos legislativos se realiza el análisis de constitucionalidad que se requieren, y se da respuesta formal dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Por otro lado, al momento de la radicación de un Proyecto de Ley o Acto Legislativo en el Congreso de la República, desde la Dirección de Asuntos Legislativos se debe hacer una revisión de conveniencia en lo que respecta a las funciones y atribuciones del Ministerio del Interior, de encontrarse una posible afectación positiva o inconveniente, se deben solicitar un concepto técnico sobre el Proyecto, sea este emitido desde la Dirección de acuerdo a sus funciones, o tramitándose el concepto con la dependencia correspondiente. En este caso, la Dirección debe consolidar nuevamente la información, unificar un concepto, y revisar la conveniencia política del

mismo y definir las medidas a tomar sobre el respectivo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo como la radicación o no del concepto ante el Congreso de la República.

Para el ejercicio de emitir conceptos técnicos sobre Proyectos de Ley o de Acto Legislativo, la Dirección de Asuntos Legislativos debe estar en coordinación constante con todas las dependencias del Ministerio del Interior, realizar reuniones técnicas, seguimiento a las solicitudes y asegurar que se cumpla con los tiempos permitidos.

Además de lo anterior, la Dirección de Asuntos Legislativos es responsable por presentar análisis y estudios sobre el proceso legislativo; analizar y estudiar los Proyectos que serán radicados por el Ministerio del Interior; realizar análisis de constitucionalidad de los Proyectos de interés del Gobierno Nacional; realizar estudios de antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional; compilar jurisprudencia sobre la Ley 5 de 1992; prestar asesoría al Ministerio del Interior sobre el trámite de los Proyectos; así como coordinar con las entidades del Gobierno Nacional en la emisión de conceptos técnicos sobre Proyectos de Ley y de Acto Legislativo, revisando viabilidad técnica y política.

- **Legislapp**

Es una plataforma de seguimiento al trámite de Proyectos de Ley y de Acto Legislativo es una herramienta implementada por la Dirección de Asuntos Legislativos para centralizar la información generada, esta plataforma es de consulta ciudadana, cada proyecto cuenta con información como los autores, ponentes, fechas correspondientes a su trámite, justificación y contenido de los mismos, ponencias, proposiciones y demás documentos del trámite legislativos.

Adicionalmente, este proyecto se justifica en la necesidad del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior en dar cumplimiento a los compromisos derivados de las bases del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2023-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

Esta plataforma requiere de un rediseño con el fin de presentar a la ciudadanía de una forma fácil y concreta la información relevante del trámite de los proyectos de la agenda legislativa del Gobierno Nacional.

Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Gobierno

Este proyecto de invención aporta en el cumplimiento de todas aquellas metas del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” que requieran del seguimiento e impulso de iniciativas legislativas en el Congreso de la República para su cumplimiento, sin embargo, se identificaron las siguientes líneas.

Eje de Transformación Bases PND: Seguridad Humana y Justicia Social

Catalizador Bases PND: Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar.

Componente Bases PND: Datos al Servicio del Bienestar Social y el Bien Común

Eje de Transformación Bases PND: Convergencia regional

Catalizador Bases PND: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía.

Componente Bases PND: Gobierno digital para la gente

A su vez se realiza la alineación del presente proyecto de inversión con las 37 macro metas del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el cual aportaría al cumplimiento de las siguientes:

- 8. Reducir la Desigualdad Social.
- 22. Conocimiento que aporta al país.
- 33. Tránsito hacia la paz total

Las necesidades presupuestales solicitadas para la vigencia 2025 se calcularon basados en los requerimientos necesarios para el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas, entre los cuales se encuentran:

1. Personal de apoyo, tomando como base la resolución 003 de 03 de enero de 2024 “Por la cual se adopta la tabla de honorarios para la contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio del Interior con personas naturales, y se dictan otras disposiciones” con un incremento del 6% según lo planteado en el Anexo 1 de la circular externa del Ministerio de Hacienda “Supuestos Macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar”
2. Operador Logístico se tomó como referencia el Tarifario y análisis de mercado del contrato 1077 operador logístico Ministerio del Interior 2023 así como el número de eventos desarrollados durante dicha vigencia y un análisis aproximado de las socializaciones que se realizar en el marco del cumplimiento de las actividades planteadas.
3. Viáticos y tiquetes se tomó como base el decreto presidencial 303 de 2024 Por el cual se fijan las escalas de viáticos” y análisis de mercado contrato 1129 suministro de tiquetes Ministerio del Interior, analizando el comportamiento del número de sesiones del Congreso de la Republica y mesas de trabajo descentralizadas, que se pretenden hacer.
4. Adquisición de equipos de cómputo se tomó como base los precios de referencia Colombia Compra Eficiente.
5. Servicios de impresión, diagramación y distribución se tomó como referencia el estudio de mercado del contrato 2573 de 2023 firmado entre la Dirección de Asuntos Legislativos y la Imprenta General de la Nación.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

Actividad / Logro a Alcanzar	Vigencia 2024		Vigencia 2025	
	Costo Proyectado (Pesos)	Cuantificación de la Meta	Costo Proyectado (Pesos)	Cuantificación de la Meta
Generar documentos de análisis, acción y seguimiento estratégico para los proyectos priorizados por el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional	\$ 2.218.350.234,40	87 Documentos de planeación	\$ 2.534.170.892	143 Documentos de planeación
Realizar sesiones de trabajo y socialización de los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo de interés del Gobierno Nacional con los grupos de interés.	\$ 452.341.640,00		\$ 750.000.000	
Generar documentos de análisis de constitucionalidad del trámite de las iniciativas legislativas de interés o autoría del Gobierno Nacional	Nueva		\$ 881.745.116	
Mantenimiento y rediseño de la plataforma Legislapp	\$ 879.777.840,00	2 servicios de información actualizados	\$ 283.500.000,00	2 servicios de información actualizados
Actualizar periódicamente la plataforma de seguimiento de Proyectos de Ley y de Acto Legislativo del Ministerio del Interior –Legislapp-.	\$ 160.000.000,00		\$ 169.600.000,00	
Actualizar periódicamente el banco de respuestas a derechos de petición, control político y conceptos técnicos y jurídicos.	\$ 789.530.285,60		\$ 918.786.186,00	
Elaborar un documento de investigación que permita identificar los países que tengan un permanente relacionamiento entre el ejecutivo y el legislativo.	0	Teniendo en cuenta la diferencia entre el presupuesto solicitado y el asignado la meta se reprograma el objetivo específico "Mejorar las prácticas en las relaciones entre el ejecutivo con el legislativo" para la vigencia 2025.	\$ 163.946.628,00	4 Documentos de lineamientos técnicos.
Desarrollar y participar en cumbres, foros, mesas de trabajo y capacitaciones con expertos de los países identificados con el fin de realizar un intercambio de experticias referentes al relacionamiento entre el ejecutivo y el legislativo.	0		\$ 448.635.246,91	
Elaboración de memorias, cuadros comparativos y documentos de conclusiones del intercambio de experiencias.	0		\$ 172.143.959,00	
	0			
Total	\$ 4.500.000.000		\$ 6.322.528.028,91	

3.1.3.27 IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL MIPG DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A NIVEL NACIONAL. (\$ 5.061.898.122)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % necesidad 2025 con presupuesto 2024
C-3799-1000-19-	\$ 3.500.000.000	\$ 5.061.898.122	\$ 1.561.898.122	45%
TOTAL	\$ 3.500.000.000	\$ 5.061.898.122	\$ 1.561.898.122	45%

BASE LEGAL

Que, a través de la Resolución 0339 de 12 de marzo de 2021, modificada por la Resolución 0439 de 24 de marzo de 2022, se creó el Comité Asesor de los Bancos de Proyectos para Comunidades y del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia, como instancia encargada de emitir las directrices para la financiación de los programas o proyectos, así como de su evaluación y seguimiento.

Que a través de la Resolución 0439 del 24 de marzo de 2022 se modificó la Resolución 339 del 12 de marzo de 2021, y se asignó la Secretaria Técnica del Comité Asesor de los Bancos de Proyectos para Comunidades y del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia a la Oficina Asesora de Planeación.

Que, con cargo a los recursos del Ministerio del Interior, se financian proyectos que benefician a las poblaciones sujeto de atención de esta cartera, por medio de diversas iniciativas y bancos de proyectos, cuya relevancia requiere del diseño de estrategias que permitan optimizar su planeación, ejecución y seguimiento, mediante la unificación de criterios administrativos y financieros.

Que el Departamento de la Función pública dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y conforme al Decreto 1499 de 2017, CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 2.2.22.2.1. define en el numeral 14, la Gestión del Conocimiento y la Innovación como una de sus políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

Que en aras de cumplir con la implementación de la Política Pública de Gestión de Conocimiento y la Innovación el Ministerio del Interior emprende iniciativas y designa recursos para adoptar cada uno de los lineamientos que hacen parte de la mencionada Política Pública, sin embargo a la fecha no se cuenta con las herramientas tecnológicas que soporten una red de gestión del conocimiento, pieza clave y fundamental para el cumplimiento de la implementación de la política de gestión del conocimiento.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025.

La organización de la información y la calidad de la data es sin lugar a duda el insumo principal y transversal para cada uno de los procesos de las diferentes entidades que conforman la estructura organizacional del Ministerio del Interior, pues de ello depende que de cara al público esta cartera logre cumplir con las metas propuestas de manera oportuna, transparente y eficiente.

Es por ello que desde el Departamento de la Función Pública se desarrolló la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, dentro del marco del MIPG para que las instituciones de orden público, logren trazar una estrategia que les permita fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones, de esta manera dinamizar el ciclo de política pública, adoptando nuevas tecnologías como base para la producción, apropiación e intercambio de conocimiento y la promoción de buenas prácticas de gestión, lo que conlleva directamente a mejorar la prestación de bienes y servicios a sus grupos de valor.

Sin embargo es necesario reconocer que la entidad al momento se encuentra en la fase primaria para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, pero que es urgente definir para el cuatrienio una estrategia de impacto que permita diseñar e implementar herramientas tecnológicas para centralizar los datos de manera organizada y ponerlos a disposición de cada uno de los procesos en todas las dependencias, lo que redundará en la erradicación de reprocesos, eliminar la pérdida de la memoria institucional y facilitar en tiempo real hacer seguimiento, tomar decisiones frente a la continuidad de los diferentes planes, programas y proyectos, y la formulación de nuevas iniciativas a partir de la innovación.

Los sistemas de información han evolucionado hacia sistemas de gestión, apoyados por un conjunto de estrategias que combinan análisis de negocios, minería de datos, visualización de datos, herramientas e infraestructura de datos, estrategia que permite disponer de datos en tiempo real y ejecutar prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones disminuyendo el margen de error y los riesgos.

Implementar este tipo de tecnologías e integrarlas de manera transversal a la misión de la institución determina un ámbito de transparencia en la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos misionales del Ministerio, y cumple con total efectividad no solo en la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, sino que adicionalmente permite crear y articular una Red de Conocimiento en donde los funcionarios, contratistas y comunidades tengan acceso a la información de acuerdo a cada uno de sus roles en tiempo real, consiguiendo una sinergia total que permitirá el seguimiento y la interacción tendiente a la consolidación de propuestas de alto impacto y de beneficio para las comunidades.

Durante el inicio de la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento se han venido invirtiendo los recursos en la ambientación de la cultura empresarial que facilite la ejecución de estrategias tecnológicas para desarrollar una red de gestión del conocimiento robusta. Ahora el desafío de la Oficina Asesora de Planeación es implementar una plataforma tecnológica que cumpla las expectativas y satisfaga las necesidades del Ministerio en cuanto a los resultados, disponibilidad y calidad de la información, es por ello que se toma como base del proyecto el planear el uso de nuevas tecnologías, de manera tal que la solución permita entregar resultados en una línea de tiempo futura anticipada minimizando el riesgo de la obsolescencia.

La respuesta eficiente de las instituciones públicas, será un camino para ayudar a dar soluciones a problemas sociales complejos; es por ello que a través de la red de acceso a la información de funcionarios, contratistas y comunidades que se proyecta implementar, contribuiría al indicador de primer nivel: **Índice de Confianza Institucional**, perteneciente a la quinta línea de transformación “Convergencia regional” del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Los costos descritos en el proyecto 2025, deberán incluir los valores de las actividades que, para la vigencia anterior, *no se le asignaron recursos, pues se priorizó el diseño y adecuación del centro de innovación para la paz del Ministerio del Interior, las estrategias de difusión y marketing, el implementar metodologías y estrategias que permitan plantear proyectos de innovación. Por tanto, el incremento debe suplir lo que no se pueda adelantar desde el 2024, de modo que pueda llevarse a culminación de las metas en el 2025.*

Finalmente, es de precisar que, a fin de dar sostenibilidad al proyecto, el Ministerio del Interior, desde el despacho del Viceministerio para el Dialogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, de se encargará de llevar a cabo el seguimiento y dar continuidad a la ejecución de actividades a través de los programas misionales del Ministerio. Si bien este proyecto está planificado para los cuatro años de gobierno, se espera que se le dé continuidad como parte de la política pública de Diálogo Social que se está creando.

ANÁLISIS DE COSTOS.

Los costos descritos en el proyecto 2025, deberán incluir los valores de las actividades que, para la vigencia anterior, no se le asignaron recursos, pues se priorizó el diseño y adecuación del centro de innovación para la paz del Ministerio del Interior, las estrategias de difusión y marketing, el implementar metodologías y estrategias que permitan plantear proyectos de innovación. Por tanto, el incremento debe suplir lo que no se pueda adelantar desde el 2024, de modo que pueda llevarse a culminación de las metas en el 2025.

Finalmente, es de precisar que, a fin de dar sostenibilidad al proyecto, el Ministerio del Interior, desde el despacho del Viceministerio para el Dialogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, de se encargará de llevar a cabo el seguimiento y dar continuidad a la ejecución de actividades a través de los programas misionales del Ministerio. Si bien este proyecto está planificado para los cuatro años de gobierno, se espera que se le dé continuidad como parte de la política pública de Diálogo Social que se está creando.

Los incrementos del presupuesto del 31% frente a la vigencia anterior corresponden a dos motivos principales, El primero el déficit presupuestal que se tuvo en la vigencia 2024 en lo correspondiente a la asignación presupuestal que fue por valor de \$3.500.000.000 y se tenía proyectado una asignación de \$ 5.785.613.302.

Como segundo motivo se realizó una proyección de los costos para cada vigencia, teniendo en cuenta la circular 0010 de 2023 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CONPES 4103 DE 2022, donde se fija el Marco de Gasto de Mediano Plazo, en las variaciones presupuestales que tengan los productos en los años siguientes con una variación de, entre el 5,1% y el 6,9%. Se tomó el mayor porcentaje (6.9%) teniendo en cuenta que los productos de tecnología y comunicaciones, tienen variaciones más rápidas en el mercado.

A1: Desarrollar estrategias de difusión y marketing disruptivas y de alto impacto para dar a conocer la Red de Gestión de Conocimiento y la Innovación.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 166.764.000
Total	\$ 166.764.000

A2. Contratar operador Logístico especializado para activaciones.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 116.791.462
Total	\$ 116.791.462

A3. Desarrollar e implementar metodologías y estrategias que permitan plantear proyectos de innovación pública en el Ministerio del Interior, mediante la creación de un Portafolio de innovación.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 438.098.379
Total	\$ 438.098.379

A4. Gestionar alianzas estratégicas con Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación, de orden nacional e internacional, para el fortalecimiento en los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 416.910.000
Total	\$ 416.910.000

A5. Consultoría especializada para el diseño de reportes estadísticos que permitan medir el avance de la innovación en el Ministerio del interior.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 165.065.560
Total	\$ 165.065.560

A6. Diseñar y elaborar informes y reportes estadísticos con base en la información operativa y misional del Ministerio del Interior.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 70.742.384
Total	\$ 70.742.384

A7. Garantizar la integridad y unicidad de la solución de la herramienta tecnológica para la Red de Gestión del Conocimiento.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 50.217.226
Total	\$ 50.217.226

A8. Optimizar todos los procesos tecnológicos definidos en la herramienta para la Red de Gestión del Conocimiento.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 51.875.363
Total	\$ 51.875.363

A9. Implementar una solución tecnológica integral que permita la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 855.200.000
Total	\$ 855.200.000

A10. Implementar soluciones con base en analítica de datos que permitan automatizar los distintos procesos o procedimientos requeridos en el Ministerio.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 293.975.000
Total	\$ 293.975.000

A11. Diseñar e implementar métodos de recolección de los datos cuantitativos y cualitativos que se requieran para realizar procesos estadísticos y de analítica de datos.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 260.349.639
Total	\$ 260.349.639

A12. Realizar campañas de difusión y marketing disruptivas y de alto impacto para dar a conocer la Plataforma para la Gestión de Conocimiento y la Innovación.

INSUMOS	VALOR
Capacitaciones	\$ 62.358.650
Contratar mano de obra calificada	\$ 124.717.300
Total	\$ 187.075.950

A13. Realizar convenios con instituciones de educación para definir estrategias para la apropiación del manejo de las herramientas tecnológicas y la creación de manuales multimedia en línea.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 351.331.126
Total	\$ 351.331.126

A14. Asistencia técnica para el diagnóstico de necesidades, estructuración de procedimiento y diseño metodológico.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 514.529.130
Total	\$ 514.529.130

A15. Asistencia técnica para la gestión y negociación con actores públicos, privados y de cooperación.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 795.717.795
Total	\$ 795.717.795

A16. Elaborar documentos metodológicos que sirvan como insumo y apoyo para la formulación de proyectos e iniciativas innovadoras, la ruta que deben surtir las iniciativas desde su postulación hasta su etapa de aprobación por el Comité Asesor de Bancos del Ministerio del Interior que beneficien a los grupos de valor del Ministerio del Interior.

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 163.627.554
Total	\$ 163.627.554

A17. Diseñar una estrategia integral de apalancamiento de recursos para proyectos e iniciativas innovadoras dirigidas a los grupos de valor del Ministerio del Interior

INSUMOS	VALOR
Contratar mano de obra calificada	\$ 163.627.554
Total	\$ 163.627.554

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2024-2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Diseñar la adecuación de un espacio físico para el intercambio, apropiación y generación de conocimiento e innovación.	\$ 70.000.000	1	No aplica a esta vigencia	0
Adecuación del espacio para el centro de innovación para la paz	\$ 149.989.327		No aplica a esta vigencia	
Desarrollar estrategias de difusión y marketing disruptivas y de alto impacto para dar a conocer la Red de Gestión de Conocimiento y la Innovación (Diseño técnico y funcional)	\$ 146.000.000	1	\$ 166.764.000	1
Contratar operador Logístico especializado para activaciones (Plan de trabajo)	\$ 100.710.327		\$ 116.791.462	
Desarrollar e implementar metodologías y estrategias que permitan plantear proyectos de innovación pública en el Ministerio del Interior, mediante la creación de un Portafolio de innovación (Documento de planeación validado)	\$ 300.000.000	1	\$ 438.098.379	1
Gestionar alianzas estratégicas con Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación, de orden nacional e internacional, para el fortalecimiento en los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación (Plan de trabajo)	\$ 281.278.074		\$ 416.910.000	

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Consultoría especializada para el diseño de reportes estadísticos que permitan medir el avance de la innovación en el ministerio del interior (Documento con el diseño de recolección de información)	\$ -	0	\$ 165.065.560	1
Diseñar y elaborar informes y reportes estadísticos con base en la información operativa y misional del Ministerio del Interior. (Informe de fase de recolección)	\$ -		\$ 70.742.384	
Garantizar la integridad y unicidad de la solución de la herramienta tecnológica para la Red de Gestión del Conocimiento.	\$ -	0	\$ 50.217.226	1
Optimizar todos los procesos tecnológicos definidos en la herramienta para la Red de Gestión del Conocimiento	\$ -		\$ 51.875.363	
Implementar una solución tecnológica integral que permita la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (Diseño técnico y funcional)	\$ 800.000.000	1	\$ 855.200.000	1
Implementar soluciones con base en analítica de datos que permitan automatizar los distintos procesos o procedimientos requeridos en el Ministerio. (Implementación del sistema)	\$ 197.616.105		\$ 293.975.000	
Diseñar e implementar métodos de recolección de los datos cuantitativos y cualitativos que se requieran para realizar procesos estadísticos y de analítica de datos. (Levantamiento de requerimientos)	\$ 153.545.032		\$ 260.349.639	
Realizar un estudio diagnóstico que permita identificar el estado de la información y de los datos.(Documento con la	\$ 256.000.000	1	No aplica a esta vigencia	0

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
descripción de procesos, métodos y herramientas)				
Diseñar un modelo de arquitectura para la implementación de una solución tecnológica acorde a las necesidades del Ministerio del Interior y en el marco de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. (Plan de trabajo)	\$ 237.457.328		No aplica a esta vigencia	
Realizar campañas de difusión y marketing disruptivas y de alto impacto para dar a conocer la Plataforma para la Gestión de Conocimiento y la Innovación	\$ -	0	\$ 187.075.950	50
Realizar convenios con instituciones de educación para definir estrategias para la apropiación del manejo de las herramientas tecnológicas y la creación de manuales multimedia en línea	\$ -		\$ 351.331.126	
Asistencia técnica para el diagnóstico de necesidades, estructuración de procedimiento y diseño metodológico	\$ 262.600.000	2	\$ 514.529.130	3
Asistencia técnica para la gestión y negociación con actores públicos, privados y de cooperación	\$ 463.214.479		\$ 795.717.795	
Elaborar documentos metodológicos que sirvan como insumo y apoyo para la formulación de proyectos e iniciativas innovadoras, la ruta que deben surtir las iniciativas desde su postulación hasta su etapa de aprobación por el Comité Asesor de Bancos del Ministerio del Interior que benefician a los grupos de valor del Ministerio del Interior. (Documento con el diseño metodológico)	\$ 40.794.664	1	\$ 163.627.554	2

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Diseñar una estrategia integral de apalancamiento de recursos para proyectos e iniciativas innovadoras dirigidas a los grupos de valor del Ministerio del Interior. (Plan de trabajo)	\$ 40.794.664		\$ 163.627.554	
TOTAL	\$ 3.500.000.000		\$ 5.061.898.122	

3.1.3.28 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR NACIONAL. (\$5.152.580.000.)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 respecto Presupuesto 2024
C-3799-1000-20	\$ 2.000.000.000	\$ 5.152.580.000	\$ 3.152.580.000	158%
TOTAL	\$ 2.000.000.000	\$ 5.152.580.000	\$ 3.152.580.000	158%

BASE LEGAL

La Oficina de Información Pública fue establecida en el DECRETO 2893 DE 2011 de la Función Pública. “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.”

Posteriormente El Grupo de Comunicaciones se establece según Resolución 2115 del 19 de octubre de 2011 del Ministerio del Interior con el objetivo de asesorar y acompañar a los despachos del Ministro, Viceministros, Secretaría General y demás dependencias del Ministerio del Interior, en el diseño e implementación de estrategias de comunicación para la divulgación de las actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos.

Además de coordinar con las dependencias del Ministerio, la preparación de la información y divulgación referentes al desarrollo de actividades propias de la entidad, desarrollar estándares y buenas prácticas en el sector del Interior para el desarrollo de la información y las comunicaciones y proponer el uso de los medios de comunicación internos para apoyar la gestión de la entidad.

El Grupo de comunicaciones es también el encargado de diseñar boletines y servicios informativos internos en forma periódica, relacionados con el desarrollo de las funciones, planes, programas y proyectos del Ministerio que sean de interés y motivación para los servidores del

Ministerio del Interior, desarrollar estrategias de comunicación externa y sectorial de interés de los ciudadanos, para mantenerlos bien informados, participar activamente de los mecanismos de control definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que el Ministerio del Interior y las entidades del sector apliquen los estándares y lineamientos y apoyar la divulgación de los Trámites y Servicios que deba prestar el Ministerio en línea al ciudadano.

Adicionalmente, el Capítulo 3 del Decreto 1499 de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”* adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, el cual establece como una de sus dimensiones la de “Información y Comunicación”, que tiene como propósito: *garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.*

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.²¹

Adicional a ello, a continuación, se muestra el marco normativo que soportan los gastos que se derivan de la ejecución del proyecto.

Constitución Política:

- Artículo 2... “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
- Artículo 83... “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
- Artículo 123... “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”.
- Artículo 209... “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

²¹ Fuente: Función Pública: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>

- Artículo 366... “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.
- Artículo 369... “La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio”.

Leyes:

- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decretos:

- Decreto 1151 de 2008, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2893 de 2011, Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
- Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Resoluciones Internas:

- Resolución 2115 del 19 de octubre de 2011 *“Por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior”*

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA EL 2025:

El Ministerio del Interior, como organismo central del sector interior, pertenece a la rama ejecutiva del poder público y cumple con la misionalidad de velar por la garantía y goce de los derechos y libertades de los ciudadanos, el derecho internacional humanitario, la integración de la Nación con las entidades territoriales, la seguridad y convivencia ciudadana, los asuntos étnicos, los derechos de la población LGBTIQ+, la protección de las comunidades vulnerables, la democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho a la consulta previa, los derechos de autor y los derechos conexos.

En desarrollo de esta misionalidad, y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, el Ministerio es el encargado de liderar, articular y acompañar los Ejes de Transformación Seguridad Humana y Justicia Social y Convergencia Regional (Artículo 3); y los Ejes Transversales Actores Diferencias para el Cambio y Paz Total e Integridad (Artículo 4).

De esta forma, el Ministerio del Interior se integra con los objetivos fundamentales del Plan de Desarrollo, que tiene como propósito hacer que el país se convierta en líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza; proceso que debe desembocar en la Paz Total en todo el territorio nacional.

Por esta razón, el proceso de Comunicaciones del Ministerio cobra una dimensión estratégica, por cuanto vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de las comunicaciones internas y externas, proporcionándole a la comunidad y demás grupos de interés y de valor, una participación directa en el logro de los objetivos, siendo un factor determinante, cuando se articula con todos los niveles y procesos del Ministerio.

Como se mencionó anteriormente, esto lo confirma el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que contiene una dimensión enfocada precisamente en la información y comunicación, de acuerdo con la cual, las entidades deberán diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro de ella y en su entorno, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor.

Así mismo, el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades del Estado – MECI, contiene un eje transversal enfocado en la información y comunicación, que apunta a velar porque las entidades cuenten con mecanismos y sistemas adecuados para generar y dar a conocer información y comunicación veraz y oportuna, de manera transparente garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente.

En este marco, en el 2023, el Ministerio del Interior formuló el proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicaciones Interna y Externa del Ministerio del Interior, con el fin de cumplir la normatividad aplicable y posicionar al Ministerio del Interior como una entidad de alto nivel en atención de las necesidades de la comunidad y de sus diferentes grupos de interés y valor, a través de una estrategia de comunicación fortalecida, articulada con todas las áreas y con el recurso humano y técnico suficiente, para entregar a los y las ciudadanas, información de calidad en forma asertiva y oportuna, para garantizar el acceso a la oferta institucional.

Este proyecto fue diseñado para un horizonte de cuatro años (2024-2027) y tiene como objetivo fortalecer el impacto de la estrategia de comunicación interna y externa del Ministerio del Interior con el cual se busca generar valor público y reconocimiento de las acciones que realiza el Ministerio en pro de la ciudadanía colombiana. Este proyecto fue diseñado inicialmente para un presupuesto total de \$21.852.855.494 durante los cuatro años, para el logro total de sus metas y objetivos; no obstante, durante la distribución de recursos de inversión para la vigencia 2024, se conoció que debido a los límites presupuestales definidos para nuestra entidad en el Decreto de liquidación de Presupuesto para el 2024 el proyecto contaría solo con \$2.000 millones de los \$5.304.000.000 que se solicitaron para esta vigencia. Situación, que implicó reajustar el alcance de las actividades y realizar un ejercicio de priorización en el cual una de las actividades no pudo contar con recursos en esta vigencia, lo cual presentará un impacto negativo para el desarrollo adecuado del proyecto.

De esta manera, y realizando un análisis técnico y detallado, la Oficina de Información Pública del Interior realizó un costeo de cada una de las actividades, comparándolas con el presupuesto de la presente vigencia, el cual sirvió de base para los cálculos realizados, utilizando variables de crecimiento definidas en los supuestos de macroeconómicos entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, se incluyeron las necesidades adicionales que no pudieron ejecutarse en el 2023 por falta de presupuesto, y que en su gran mayoría ya estaban contempladas desde la formulación inicial como se mencionó anteriormente, lo que representa que el proyecto tendrá un incremento total de 157,6% frente a la presenta vigencia, siendo así, la Oficina Pública del Interior, como líder de este proyecto, se permite solicitar un presupuesto para 2025 de \$5.152.580.000, que corresponde al valor solicitado desde la formulación del proyecto para ese proyecto, y cuya distribución, se relaciona a continuación:

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (Pesos) (c)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)
Generar campañas para actualizar y visibilizar la oferta institucional del Ministerio	1.152.000.000	24 servicios de Información Implementados	1.231.488.000	24 servicios de Información Implementados
Difundir contenido pedagógico e informativo, a través de los diferentes canales de divulgación del Ministerio del Interior. (Free Press)	252.000.000		269.388.000	
Realizar el Plan de medios, como herramienta que organice y articule las acciones de comunicación de las diferentes campañas de la oferta institucional del Ministerio del Interior y sus áreas.	0		3.207.000.000	
Realizar la definición y seguimiento a los procesos comunicación (Monitoreo de medios y Análisis Digital).	400.000.000	1 Sede Dotada	427.600.000	1 sede dotada
Adquirir herramientas tecnológicas para la generación de contenidos para promocionar la oferta institucional.	196.000.000		17.104.000	
TOTALES	2.000.000.000		5.152.580.000	

De acuerdo con la tabla anterior, se procede entonces a describir de manera breve la justificación de gasto para cada una de las actividades del proyecto:

- ***Generar campañas para actualizar y visibilizar la oferta institucional del Ministerio***

Se llevará a cabo la contratación de profesionales que se encargarán de la generación y realización de contenidos informativos, en diferentes formatos, que permitirán visibilizar la oferta institucional del Ministerio del Interior ante los diferentes públicos, de acuerdo con la estrategia de comunicaciones.

Para llevar a cabo la efectiva visibilización de la oferta institucional del Ministerio del Interior, atender los compromisos con las comunidades y fortalecer la institucionalidad como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y el vínculo con el Estado, es necesario contar con una estrategia de comunicación en constante desarrollo, que permita la implementación de campañas que visibilicen la gestión y servicios a los que tienen derecho las comunidades y llegar así a todos los territorios.

- ***Difundir contenido pedagógico e informativo, a través de los diferentes canales de divulgación del Ministerio del Interior. (Free Press)***

Se llevará a cabo la contratación de profesionales para realizar la divulgación de contenidos pedagógicos e informativos, a través del contacto y relacionamiento con medios de comunicación (free press), que permitan incrementar el alcance de los mensajes del Ministerio, y llegar al mayor número de comunidades.

Para mejorar la difusión de contenidos pedagógicos e informativos del Ministerio del Interior, es necesario contar un componente que fortalezca la comunicación a través de los canales de divulgación de la entidad, al tiempo que se establecen relaciones con medios de comunicación (free press), para mejorar el posicionamiento de los mensajes del Ministerio y fortalecer la relación Estado - Ciudadanía.

- ***Realizar el Plan de medios, como herramienta que organice y articule las acciones de comunicación de las diferentes campañas de la oferta institucional del Ministerio del Interior y sus áreas.***

Se requiere la contratación de un plan de medios que permita integrar las acciones de comunicación de las campañas institucionales del Ministerio y llevarlas a los ciudadanos a través de medios de comunicación masivos, digitales, alternativos y comunitarios.

El fortalecimiento del vínculo Estado - Ciudadanía como motor de cambio para generar mayores y mejores relaciones de confianza con las comunidades, hace necesario contar con una herramienta como el plan de medios que facilita el posicionamiento de mensajes estratégicos en medios de comunicación, para llegar a todas las comunidades en los diferentes territorios, de acuerdo con las directivas sobre austeridad del gasto emitidas por la Presidencia de la República.

- ***Realizar la definición y seguimiento a los procesos comunicación (Monitoreo de medios y Análisis Digital).***

La estrategia de comunicaciones del Ministerio del Interior, necesita de un componente que permita realizar el análisis y seguimiento de las acciones para medir su impacto y efectividad, en el entendido que, a través de una comunicación efectiva, se fortalece la

relación con las comunidades, y se aumenta la confianza por parte de los ciudadanos. En este sentido, con los recursos de esta actividad se requiere contratar el personal calificado y las herramientas tecnológicas para la definición, seguimiento y análisis de la estrategia de comunicaciones del Ministerio del Interior, que brinden datos e información de calidad y de primera mano, para mantener la efectividad de las comunicaciones de la Entidad con sus diferentes públicos.

Adicionalmente, es necesario contar con un servicio especializado que facilite el seguimiento de las acciones de comunicación de la Entidad y que permita, atender y responder asertivamente a las necesidades de información por parte de las comunidades, en el propósito de fortalecer el vínculo Estado - Ciudadanía como motor de cambio, por lo cual se llevará cabo la contratación de un servicio que permita hacer seguimiento a las acciones de comunicación, para determinar su efectividad e impacto, y así mejorar la toma de decisiones en materia de comunicaciones con las comunidades.

- **Adquirir herramientas tecnológicas para la generación de contenidos para promocionar la oferta institucional.**

Los equipos tecnológicos necesitan de un adecuado mantenimiento y soporte para asegurar su vida útil y capacidad de respuesta a las necesidades de la estrategia de comunicaciones, al tiempo que es fundamental contar con software licenciado y actualizado para atender los requerimientos de producción de contenidos del Ministerio del Interior. Por tal razón, con los recursos solicitados, se llevará a cabo la actualización de licencias y el mantenimiento de los equipos que se adquieran en 2024, para contar con herramientas de hardware y software acordes con las necesidades de producción de contenidos de la estrategia de comunicaciones.

C-3799-1000-20-53105B	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR NACIONAL	5, CONVERGENCIA REGIONAL/ B, ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	\$ 5.152.580.000
VALOR TOTAL			\$ 5.152.580.000

3.1.3.29 FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS PROPIOS, SISTEMAS ORGANIZATIVOS Y AUTOSOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS A NIVEL NACIONAL. (\$176.000.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR PRESUPUESTO 2024	VALOR NECESIDAD 2025	DIFERENCIA NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO PORCENTUAL NECESIDAD 2024 EN RELACIÓN CON 2025
	NUEVO	\$ 176.000.000.000	\$176.000.000.000	100%

TOTAL	NUEVO	\$176.000.000.000	\$ 176.000.000.000	100%
-------	-------	-------------------	--------------------	------

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Constitución Política de Colombia	1992	Medidas para proteger y reconocer la diversidad étnica
2	Convenio 169 OIT	1991	Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".
3	Ley 21	1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 DE 1991
4	Ley 70	1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
5	Ley 1753	2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".
6	Decreto 1320	1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
7	Ley 22	1981	Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
8	Ley 1955	2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
9	Ley 2160	2021	Por medio de la cual se modificó la Ley 80 de 1993, permitiendo la contratación de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de base con entidades del Estado.
10	Decreto 1640	2020	En el cual se trata "CAPÍTULO 5 Registro público único nacional de consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas,

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera, en cumplimiento de lo establecido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en lo relacionado con el “Capítulo de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras”, fórmula para la vigencia 2026, el proyecto “Fortalecimiento de los gobiernos propios, sistemas organizativos y autosostenibilidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras” para el cual se solicita recursos por valor de \$176.000.000.000, para cumplir con los compromisos y misionalidad de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Para la vigencia 2024 esta Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ejecuta y se ejecuta el proyecto de inversión: “Fortalecimiento de los gobiernos propios, sistemas organizativos y autosostenibilidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras”. Para esta vigencia se le asignaron recursos por valor de \$44 mil millones de pesos m/cte.

El Estado social de derecho que adoptó la Constitución Política de 1991, instituyó como principio fundamental del Estado Colombiano el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, con lo cual queda plasmado la nueva concepción del Estado Colombiano, modelo en el cual se privilegia al hombre y la sociedad por encima de las leyes y del Estado mismo.

En desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución, el 27 de agosto de 1993 se expide

la Ley 70, “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, como el primer instrumento de derecho interno que permite un reconocimiento y una materialización de la política pública en beneficio de la población Afrodescendiente de Colombia.

El Decreto 2893 de 2011, por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior, señala en su artículo 14, las funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, siendo la principal la de asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública orientada al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural en favor de dicha población, así como coordinar interinstitucionalmente la realización de los espacios de participación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras previstos por ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representan.

Dentro de este contexto se diseñan programas de asistencia técnica y social, conservación de costumbres, fortalecimiento de gobierno propio, autosostenibilidad, protección de conocimientos tradicionales y ancestrales, fortalecimientos administrativos y financiero que propenden por la protección y promoción de los derechos y la construcción de la paz total de los pueblos y comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales en el territorio nacional.

Para la vigencia 2025 la Dirección de asuntos para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, formula el proyecto “Fortalecimiento de los gobiernos propios, sistemas organizativos y autosostenibilidad de los pueblos y comunidades negros afrocolombianos raizales y Palenqueras Nacional”, para el cual se solicitan recursos por valor de \$176.000 millones de pesos m/cte para cumplir las expectativas del Gobierno del Cambio.

Con la ejecución del presente proyecto la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras cumplirá con lo establecido en el artículo 14 del decreto 2893 del 2011.

En el plan nacional de desarrollo a través del presente gobierno se han establecido una macrometas las cuales han sido tomadas como tareas ejecutivas para su logro en este periodo, las cuales son:

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Apoyo en la formulación de las iniciativas y/o proyectos de fortalecimiento técnico, tecnológico, administrativo, económico, social y cultural de los consejos comunitarios, organizaciones de base y otras formas de expresiones organizativas de las Comunidades	\$ 0	0	\$ 4.274.700.000	58

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales				
Apoyar la ejecución de las iniciativas o proyectos de fortalecimiento técnico, tecnológico, administrativo, económico, social y cultural, seleccionados para su financiación de los consejos comunitarios, organizaciones de base y otras formas de expresiones organizativas de las Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 134.375.300.000	1119
Apoyar los procesos censales en los Consejos Comunitarios.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	50
Apoyar la construcción e implementación de los Planes de manejo ambiental y las agendas de los mismos en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios	\$ 0	0	\$ 1.400.000.000	20
Realizar eventos de fortalecimiento organizativo, económico, social y cultural de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 1.000.000.000	20
Apoyar los procesos de implementación de economía Propia en los Consejos Comunitarios, organizaciones de bases y demás expresiones organizativas de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 6.000.000.000	50
Apoyar campañas y eventos para la conservación del medio ambiente y los recursos hídricos en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	10

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Acompañar los Consejos Comunitarios con territorio colectivo titulados en la formulación de Planes de Etnodesarrollo.	\$ 0	0	\$ 11.000.000.000	100
Nivel 1 - 1: Diseño técnico y funcional.			\$ 1.200.000.000	50
Nivel 1 - 2: Implementación del sistema.			\$ 800.000.000	20
Nivel 1 - 3: Levantamiento de requerimientos.			\$ 100.000.000	20
Nivel 1 - 4: Plan de trabajo			\$ 100.000.000	50
Nivel 1 - 5: Pruebas y aseguramiento de calidad.			\$ 800.000.000	10
Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el PMI del acuerdo final de paz y en especial las del capítulo étnico de las comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 700.000.000	1
Acompañar a la Unidad Nacional de Protección – UNP, en la concertación, implementación y socialización de las estrategias de protección individual o colectivas en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales, que la requieran	\$ 0	0	\$ 200.000.000	2
Desarrollar una estrategia de acompañamiento integral a la implementación de la Política Nacional de Víctimas.	\$ 0	0	\$ 300.000.000	2
Realizar talleres de prevención en desarrollo de la Estrategia de Prevención con enfoque diferencial para Afrocolombianos, Negros, Palenqueros y Raizales.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	10

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Desarrollar e Implementar estrategia de conservación de la Medicina ancestral en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 600.000.000	2
Apoyar el cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016 mediante la cual se reconoció al Río Atrato, sus cuencas y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y comunidades étnicas.	\$ 0	0	\$ 800.000.000	1
Apoyar el cumplimiento de la Sentencia mediante la cual se reconoció al Amazonas, como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y comunidades étnicas.	\$ 0	0	\$ 800.000.000	1
Realizar eventos de fortalecimiento de articulación institucional con las autoridades étnicas, para que puedan ejercer su autoridad y autogobierno, reconociendo sus capacidades y conocimientos previos.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	20
Apoyar las conmemoraciones de fechas históricas representativas de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Implementar programas para el fortalecimiento de liderazgos de la mujer afrocolombianas, negra, palenqueras y raizales para la toma de decisiones, generando perspectiva de género que reconozcan a las mujeres en su diversidad étnica, cultural, sexual, ciclo vital, nivel de ingresos basados en una economía productiva y sostenible.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	20

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar eventos de fortalecimiento de consejeros de juventud pertenecientes a las curules especiales y representantes del FECECN de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 360.000.000	3
Hacer seguimiento a la implementación en las instituciones educativas en el territorio nacional de la Catedra Afrocolombiana.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
Realizar eventos para impulsar la implementación de la Catedra Etnoeducación en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Realizar eventos para la igualdad étnica y racial en el marco del plan. (conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales).	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Concertar y realizar con la población raizal las acciones adelantar en el marco de la continuidad de la consulta previa del estatuto raizal.	\$ 0	0	\$ 40.000.000	2
Fortalecimiento a los procesos organizativos de la comunidad organizadas de San Basilio de Palenque - Bolívar.	\$ 0	0	\$ 400.000.000	2
Adelantar acciones para la disminución de la estigmatización en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales de la población LGTBQ+	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Apoyar encuentros para la promoción, fortalecimiento y conservación de las costumbres de los Pueblos y Comunidades	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.				
Apoyar los ajustes que se realicen al Decreto 900 de 2020 sobre el funcionamiento de las Regiones Administrativas y de planeación - RAP, para que en el ARTÍCULO 2.2.1.5.15. indique específicamente la participación de un representante por Departamento de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en cada comité técnico asesor de cada RAP.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
El Ministerio del Interior en articulación con el Ministerio de Educación y el ICETEX, Apoyar la modificación e implementarán la reglamentación del fondo Especial de Comunidades Negras, (DECRETO 1627 DE 1996 y reglamento operativo) que permita incrementar los cupos de créditos de educación superior y mejorar las condiciones de los 20. Beneficiarios y la operatividad del mismo. La Concertación de esta modificación se realizará con la red de jóvenes FECEN Y la comisión pedagógica Nacional.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
Apoyar la creación formulación e implementación del plan de retorno digno, voluntario de la población inmigrante del Archipiélago a sus lugares de origen.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
Apoyar en la construcción y aplicación de los lineamientos y herramientas para la prevención y solución de conflictos territoriales y socio ambientales intraétnicos, interétnicos e interculturales, teniendo en cuenta sus usos y costumbres y las normas establecidas en el Bloque de constitucionalidad.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
TOTAL	\$ 0		\$ 176.000.000.000	

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Nivel 1 - 1: Diseño técnico y funcional.			\$ 1.200.000.000	50
Nivel 1 - 2: Implementación del sistema.			\$ 800.000.000	20
Nivel 1 - 3: Levantamiento de requerimientos.			\$ 100.000.000	20
Nivel 1 - 4: Plan de trabajo			\$ 100.000.000	50
Nivel 1 - 5: Pruebas y aseguramiento de calidad.			\$ 800.000.000	10
Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el PMI del acuerdo final de paz y en especial las del capítulo étnico de las comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 700.000.000	1
Acompañar a la Unidad Nacional de Protección – UNP, en la concertación, implementación y socialización de las estrategias de protección individual o colectivas en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales, que la requieran	\$ 0	0	\$ 200.000.000	2
Desarrollar una estrategia de acompañamiento integral a la implementación de la Política Nacional de Víctimas.	\$ 0	0	\$ 300.000.000	2
Realizar talleres de prevención en desarrollo de la Estrategia de Prevención con enfoque diferencial para Afrocolombianos, Negros, Palenqueros y Raizales.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	10
Desarrollar e Implementar estrategia de conservación de la Medicina ancestral en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 600.000.000	2
Apoyar el cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016 mediante la cual se reconoció al Río Atrato, sus cuencas y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y comunidades étnicas.	\$ 0	0	\$ 800.000.000	1

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Apoyar el cumplimiento de la Sentencia mediante la cual se reconoció al Amazonas, como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y comunidades étnicas.	\$ 0	0	\$ 800.000.000	1
Realizar eventos de fortalecimiento de articulación institucional con las autoridades étnicas, para que puedan ejercer su autoridad y autogobierno, reconociendo sus capacidades y conocimientos previos.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	20
Apoyar las conmemoraciones de fechas históricas representativas de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Implementar programas para el fortalecimiento de liderazgos de la mujer afrocolombianas, negra, palenqueras y raizales para la toma de decisiones, generando perspectiva de género que reconozcan a las mujeres en su diversidad étnica, cultural, sexual, ciclo vital, nivel de ingresos basados en una economía productiva y sostenible.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	20
Realizar eventos de fortalecimiento de consejeros de juventud pertenecientes a las curules especiales y representantes del FECECN de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 360.000.000	3
Hacer seguimiento a la implementación en las instituciones educativas en el territorio nacional de la Catedra Afrocolombiana.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
Realizar eventos para impulsar la implementación de la Catedra Etnoeducación en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar eventos para la igualdad étnica y racial en el marco del plan. (conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales).	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Concertar y realizar con la población raizal las acciones adelantar en el marco de la continuidad de la consulta previa del estatuto raizal.	\$ 0	0	\$ 40.000.000	2
Fortalecimiento a los procesos organizativos de la comunidad organizadas de San Basilio de Palenque - Bolívar.	\$ 0	0	\$ 400.000.000	2
Adelantar acciones para la disminución de la estigmatización en los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales de la población LGTBQ+	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Apoyar encuentros para la promoción, fortalecimiento y conservación de las costumbres de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales.	\$ 0	0	\$ 250.000.000	5
Apoyar los ajustes que se realicen al Decreto 900 de 2020 sobre el funcionamiento de las Regiones Administrativas y de planeación - RAP, para que en el ARTÍCULO 2.2.1.5.15. indique específicamente la participación de un representante por Departamento de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en cada comité técnico asesor de cada RAP.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
El Ministerio del Interior en articulación con el Ministerio de Educación y el ICETEX, Apoyar la modificación e implementarán la reglamentación del fondo Especial de Comunidades Negras, (DECRETO 1627 DE 1996 y reglamento operativo) que permita incrementar los cupos de créditos de educación superior y mejorar las condiciones de los 20. Beneficiarios y la operatividad del mismo. La Concertación de esta modificación se	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
realizará con la red de jóvenes FECEN Y la comisión pedagógica Nacional.				
Apoyar la creación formulación e implementación del plan de retorno digno, voluntario de la población inmigrante del Archipiélago a sus lugares de origen.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
Apoyar en la construcción y aplicación de los lineamientos y herramientas para la prevención y solución de conflictos territoriales y socio ambientales intraétnicos, interétnicos e interculturales, teniendo en cuenta sus usos y costumbres y las normas establecidas en el Bloque de constitucionalidad.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	5
TOTAL	\$ 0		\$ 176.000.000.000	

3.1.3.30 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS EN LOS ESCENARIOS DE DIÁLOGOS SOCIALES CON LAS COMUNIDADES NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS DE LA REGIÓN PACÍFICA COMO APOORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. (\$100.000.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR PRESUPUESTO 2024	VALOR NECESIDAD 2025	DIFERENCIA NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO PORCENTUAL NECESIDAD 2024 EN RELACIÓN CON 2025
	NUEVO	\$ 100.000.000.000	\$100.000.000.000	100%
TOTAL	NUEVO	\$100.000.000.000	\$ 100.000.000.000	100%

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Constitución Política de Colombia	1992	Medidas para proteger y reconocer la diversidad étnica
2	Convenio 169 OIT	1991	Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".
3	Ley 21	1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 DE 1991
4	Ley 70	1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.

5	Ley 1753	2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".
6	Decreto 1320	1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
7	Ley 22	1981	Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
8	Ley 1955	2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
9	Ley 2160	2021	Por medio de la cual se modificó la Ley 80 de 1993, permitiendo la contratación de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de base con entidades del Estado.
10	Decreto 1640	2020	En el cual se trata "CAPÍTULO 5 Registro público único nacional de consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas,
11	Ley 2294	2023	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera, en cumplimiento de lo establecido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA", "Capítulo de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", no ha ejecutado en vigencias anteriores proyectos que cubran la necesidad de impulsar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos derivados en los diálogos sociales con comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica, por lo tanto se requieren recursos en la vigencia 2025 para suplir las necesidad de impulsar el cumplimiento de los acuerdos derivados en los diálogos sociales de las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica.

Teniendo en cuenta que, en la región pacífica Colombiana se cuenta con 4 subregiones donde se firmaron acuerdo y compromisos durante los diálogos sociales generados para atender las inconformidades que conllevan a conflictos sociales; para la vigencia 2025 se formula el proyecto "Fortalecimiento de las estrategias de implementación y seguimiento a los acuerdos derivados en los escenarios de diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica como aporte a la construcción de paz" para lo cual se solicita recursos por un valor de cien mil millones de pesos m/cte. (\$100.000.000.000).

El Estado social de derecho que adoptó la Constitución Política de 1991, instituyó como principio fundamental del Estado Colombiano el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, con lo cual queda plasmado la nueva concepción del Estado Colombiano, modelo en el cual se privilegia al hombre y la sociedad por encima de las leyes y del Estado mismo. En desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución, el 27 de agosto de 1993 se expide la Ley 70, "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política", como el primer instrumento de derecho interno que permite un reconocimiento y una materialización de la política pública en beneficio de la población Negras, Raizales, Palenqueras y Afrodescendiente de Colombia.

El artículo 14 del decreto 2893 de 2011, por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior, señala las funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, siendo la principal la de asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública orientada

al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural en favor de dicha población, así como coordinar interinstitucionalmente la realización de los espacios de participación y dialogo para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras previstos por ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representan.

El artículo 355 y 356 de la ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, establece que “Las entidades en el marco de su autonomía y con la participación de los pueblos indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom determinaron las partidas presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos pactados con estos e incorporados integralmente en la presente ley... Con este fin, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la convocatoria de las entidades concernidas, siendo estas últimas las responsables de la programación de las partidas presupuestales...” “Las entidades con compromisos derivados de escenarios de diálogo y concertación con i) comunidades negras, afrocolombianos, raizales... conforme a la priorización efectuada por las entidades en el PPI, destinarán los recursos para su cumplimiento, los cuales deberán estar acorde con el marco de gasto de mediano plazo y el marco fiscal de mediano plazo”.

En este contexto para la vigencia 2025 la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, formula el proyecto “Fortalecimiento de las estrategias de implementación y seguimiento a los acuerdos derivados en los escenarios de diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica como aporte a la construcción de paz” como principal alternativa para dar cumplimiento a las obligaciones legales antes enunciadas. Con el presente proyecto se pretende cumplir las siguientes macro mentas.

MACRO META

- 6. Disminución de la pobreza extrema
- 8. Reducción de la desigualdad social
- 32. Implementación del acuerdo de paz con las Farc
- 35. Justicia étnica y racial.

Para el logro de esta Macro meta se buscará el logro de metas y productor de los siguientes objetivos:

1. Consolidar los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica para la construcción de paz.
2. Fortalecer capacidades de los actores sociales en el territorio para el cumplimiento de acuerdos con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica, en el marco del dialogo social y manejo de conflictos.
3. Implementar un plan de cumplimiento a los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica.

La Dirección para Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenquera, a través de la implementación de la actividad “Cumplir acuerdos derivados de los diálogos sociales en responsabilidad de la Dirección” consumará la finalidad del presente proyecto así también con lo establecido en los artículos 355 y 356 de la ley 2294

del 2023 y el artículo 14 del decreto 2893 del 2011, además es la actividad donde más se refleja la asignación de recursos del presente proyecto.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1.1 Realizar eventos de socialización de las estrategias a implementar para consolidar los acuerdos derivados de los diálogos sociales.	\$ 0	0	\$ 3.200.000.000	8
1.2 Revisar y consolidar los acuerdos derivados de los diálogos sociales con comunidades afrocolombianas y negras de la región pacífica.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	1
1.3 Realizar eventos de verificación evaluación de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con comunidades afrocolombianas y negras de la región pacífica.	\$ 0	0	\$ 3.200.000.000	8
1.4 Realizar un balance de cumplimiento de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con comunidades afrocolombianas y negras de la región pacífica.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	1
2. 1. Realizar diagnóstico de identificación de las entidades gubernamentales y los actores sociales involucrados en el cumplimiento de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades afrocolombiana y negras de la región pacífica.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	1
2. 2 Realizar eventos de socialización de la estrategia de fortalecimiento con los actores sociales e instituciones involucradas en el cumplimiento de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombiana.	\$ 0	0	\$ 3.200.000.000	8
2. 3. Construcción y ejecución conjunta de agenda metodológica para el fortalecimiento de las instituciones y actores sociales en la atención de inconformidades de las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica, que conlleven a posteriores conflictos sociales	\$ 0	0	\$ 4.000.000.000	1
2. 4 Implementar mesas de articulación y concertación que prevean y prevenga	\$ 0	0		16

ACTIVIDAD/LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN DE LA META
conflicto e inconformidades sociales entre las comunidades negras y afrocolombianas y las instituciones			\$ 6.400.000.000	
3. 1. Construir plan de cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombiana	\$0	0	\$500.000.000	1
3. 2. Desarrollar evento de socialización del plan de cumplimiento de los acuerdos derivado de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica	\$0	0	\$1.600.000.000	1
3. 3 Desarrollar mesas de seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombiana.	\$0	0	\$6.400.000.000	1
3. 4. Cumplir acuerdos derivados de los diálogos sociales en responsabilidad de la Dirección de asuntos para comunidades negras	\$0	0	\$70.000.000.000	1
TOTAL			\$100.000.000.000	

2. 4 Implementar mesas de articulación y concertación que prevean y prevenga conflicto e inconformidades sociales entre las comunidades negras y afrocolombianas y las Instituciones	\$ 0	0	\$ 6.400.000.000	16
3. 1. Construir plan de cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombiana.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	1
3. 2. Desarrollar evento de socialización del plan de cumplimiento de los acuerdos derivado de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombianas de la región pacífica.	\$ 0	0	\$ 1.600.000.000	1
3. 3 Desarrollar mesas de seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos derivados de los diálogos sociales con las comunidades negras y afrocolombiana.	\$ 0	0	\$ 6.400.000.000	1
3. 4. Cumplir acuerdos derivados de los diálogos sociales en responsabilidad de la Dirección de asuntos para comunidades negras	\$ 0	0	\$ 70.000.000.000	1
TOTAL	\$ 0		\$ 100.000.000.000	

3.1.3.31 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, PALENQUERAS Y RAIZALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. (\$98.650.000.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR PRESUPUESTO 2024	VALOR NECESIDAD 2025	DIFERENCIA NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO PORCENTUAL NECESIDAD 2024 EN RELACIÓN CON 2025
	NUEVO	\$98.650.000.000	\$98.650.000.000	100%
TOTAL	NUEVO	\$98.650.000.000	\$ 98.650.000.000	100%

BASE LEGAL

ID	NORMA	AÑO	OBJETO
1	Constitución Política de Colombia	1992	Medidas para proteger y reconocer la diversidad étnica
2	Convenio 169 OIT	1991	Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".
3	Ley 21	1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 169 DE 1991
4	Ley 70	1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
5	Ley 1753	2015	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".
6	Decreto 1320	1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
7	Ley 22	1981	Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
8	Ley 1955	2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
9	Ley 2160	2021	Por medio de la cual se modificó la Ley 80 de 1993, permitiendo la contratación de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de base con entidades del Estado.
10	Decreto 1640	2020	En el cual se trata "CAPÍTULO 5 Registro público único nacional de consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas,
11	Decreto 1396	2023	Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 70 de 1993
13	Decreto 1384	2023	Por medio del cual se reglamentó el capítulo IV de la Ley 70 de 1993
14	Decreto 0129	2024	Mediante el cual se adiciona al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural la reglamentación de los procedimientos de ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros,

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Estado social de derecho que adoptó la Constitución Política de 1991, instituyó como principio fundamental del Estado Colombiano el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, con lo cual queda plasmado la nueva concepción del Estado Colombiano, modelo en el cual se privilegia al hombre y la sociedad por encima de las leyes y del Estado mismo.

En desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución, el 27 de agosto de 1993 se expide la Ley 70, "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política", como el primer instrumento de derecho interno que permite un reconocimiento y una materialización de la política pública en beneficio de la población Afrodescendiente de Colombia.

Con lo anterior se observa además que, en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece los siguientes derechos a estas comunidades:

Derechos de las comunidades étnicas: La Constitución reconoce y garantiza los derechos de las comunidades étnicas, incluidas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, a la diversidad étnica y cultural. Esto incluye el derecho a mantener

y desarrollar sus propias tradiciones y formas de organización social, así como el derecho a la protección de sus territorios ancestrales.

Derechos territoriales: La Constitución reconoce el derecho de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales. Estos derechos son protegidos y regulados por la ley, en este caso, por la Ley 70 de 1993, que establece los procedimientos para la delimitación, titulación y protección de estos territorios.

Derechos culturales: La Constitución reconoce el derecho de todas las personas a la igualdad y a la no discriminación por motivos étnicos, lo cual incluye el respeto y la protección de la identidad cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esto implica la promoción de políticas públicas que reconozcan, valoren y promuevan la diversidad cultural del país.

Participación y consulta: La Constitución establece el principio de participación ciudadana y consulta previa, libre e informada de las comunidades étnicas en decisiones que puedan afectar sus derechos. Esto implica que las autoridades deben consultar a las comunidades afrodescendientes de manera adecuada y oportuna antes de tomar medidas que puedan afectar sus territorios ancestrales u otros aspectos de su vida.

Derechos de las comunidades étnicas: La Constitución reconoce y garantiza los derechos de las comunidades étnicas, incluidas las comunidades afrodescendientes, a la diversidad étnica y cultural. Esto incluye el derecho a mantener y desarrollar sus propias tradiciones y formas de organización social, así como el derecho a la protección de sus territorios ancestrales.

En el mes de agosto de 2023, el Señor presidente de la Republica, Sanciono los Decreto 1396, Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1384 Por medio del cual se reglamentó el capítulo IV de la Ley 70 de 1993.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 2893 de 2011, se resalta entre la misionalidad de esta dirección, los numerales 8, 12 y 13 de este artículo que nos obliga a velar por la implementación a nivel nacional de la Ley 70 de 1993.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2024-2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar eventos de divulgación para fortalecer el conocimiento y apropiación de la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios.	\$ 0	0	\$ 2.500.000.000	50
Realizar diplomados en el marco del desarrollo normativo de la Ley 70 de 1993	\$ 0	0	\$ 1.000.000.000	20

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar eventos para capacitar a líderes comunitarios, funcionarios públicos y demás miembros de las comunidades en los aspectos legales y técnicos relacionados con la gestión territorial y la aplicación de la Ley 70 de 1993.	\$ 0	0	\$ 3.500.000.000	70
Realizar mesas técnicas de trabajo con representantes de las comunidades afrocolombianas, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para identificar necesidades y prioridades en la implementación de la ley 70 de 1993 de tal manera que las acciones respondan a las necesidades del territorio.	\$ 0	0	\$ 2.250.000.000	150
Realizar estudio de diagnóstico que incluya aspectos de la etnohistoria, estado actual de los territorios ancestrales afrodescendientes, identificando amenazas, vulnerabilidades y oportunidades de conservación	\$ 0	0	\$ 2.500.000.000	100
Apoyar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en articulación con la instancia competente de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras el instrumento normativo para la ampliación y el saneamiento de los títulos colectivos de las tierras de las comunidades negras.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	1
Apoyar iniciativas de educación ambiental y conservación de la memoria ancestral que promuevan el respeto por la biodiversidad y el patrimonio cultural material e inmaterial de las comunidades afrodescendientes	\$ 0	0	\$ 2.500.000.000	50
Apoyar la implementación de medidas específicas para la conservación de recursos naturales y la protección de ecosistemas.	\$ 0	0	\$ 700.000.000	10

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Apoyar actividades económicas en los territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras que contribuyan al desarrollo sostenibles de las comunidades.	\$ 0	0	\$ 30.000.000.000	200
Apoyar la continuidad de la Ruta metodológica para la formulación e implementación del protocolo de consulta previa en cumplimiento de la orden cuarta de la sentencia T-576 de 2014. y Coordinar las acciones necesarias para la continuación y terminación del reglamento interno y protocolización de acuerdo en el ENCP	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	1
Realizar evento para recolectar insumos de medidas específicas para la conservación de recursos naturales, la protección de ecosistemas frágiles y la gestión sostenible de los recursos	\$ 0	0	\$ 2.500.000.000	50
Implementar medidas específicas para la conservación de recursos naturales, la protección de ecosistemas frágiles y la gestión sostenible de los recursos	\$ 0	0	\$ 5.000.000.000	100
Realizar seguimiento y Monitoreo a la implementación de medidas específicas para la conservación de recursos naturales, la protección de ecosistemas frágiles y la gestión sostenible de los recursos	\$ 0	0	\$ 3.000.000.000	100
Apoyar iniciativas de educación ambiental y cultural que promuevan el respeto por la biodiversidad y el patrimonio cultural de las comunidades afrodescendientes	\$ 0	0	\$ 5.000.000.000,00	100
Realizar campañas de sensibilización y difusión sobre la importancia de la cultura Y la identidad afrocolombiana en la sociedad colombiana	\$ 0	0	\$ 4.000.000.000	100
Crear comité de evaluación de implementación de la Ley 70 de 1993	\$ 0	0	\$ 4.000.000.000	100

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar mesas de evaluación de la implementación de la ley 70 de 1993	\$ 0	0	\$ 8.000.000.000	200
Realizar eventos de socialización de avances en la implementación de la Ley 70 de 1993 a líderes comunitarios, funcionarios públicos y miembros de las comunidades en los aspectos legales y técnicos relacionados con la gestión territorial	\$ 0	0	\$ 2.500.000.000	50
Apoyar el proceso de Reglamentación del capítulo VI de la Ley 70/93.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	1
Apoyar los procesos para la legalización de los territorios colectivos a los Consejos Comunitarios de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales	\$ 0	0	\$ 3.000.000.000	100
Apoyar a la Unidad Nacional de Protección – UNP, en concertación con la Comisión VI y la Comisión I del ENCP el diseño e implementación de un protocolo de análisis de riesgo individual para dirigentes, representantes, líderes y lideresas de las comunidades negras, raizales y palenqueras	\$ 0	0	\$ 200.000.000	1
Generar las condiciones técnicas y presupuestales que garanticen la Reglamentación Integral de la Ley 70 de 1993 y las acciones para su desarrollo en el marco del derecho fundamental a la Consulta Previa.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	10
Apoyar la Ruta Metodológica para la Formulación e implementación del protocolo de consulta previa en cumplimiento de la orden cuarta de la sentencia T-576 de 2014. Este compromiso podrá articularse con otros temas de consulta previa a que haya lugar.	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	1
Apoyar las acciones de formulación, desarrollo e implementación de del Reglamento Interno del Espacio Nacional de Consulta Previa	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	10

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		NECESIDAD DE RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
(ENCP) en cumplimiento del Decreto 1372 de 2018.				
Diseñar e implementar las estrategias necesarias para la revisión técnica de los Artículos 246 y 286 de la CP relacionada con la organización político administrativo de los Territorios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	10
Apoyar la revisión y ajuste del documento borrador del Estatuto Raizal, según el Decreto 1211 de 2018, y presentación ante el Congreso de la República del proyecto de Ley del Estatuto Autonomo Raizal en el marco de las legislaciones internacionales sobre los pueblos no autónomos.	\$ 0	0	\$ 500.000.000	1
Apoyar la implementación mediante acciones o estrategias de la reglamentación del capítulo VI de la ley 70 de 1993	\$ 0	0	\$ 2.000.000.000	10
TOTAL			\$98.650.000.000	

3.1.3.32 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL PARA LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL. (\$34.449.908.100)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

RUBRO	VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2025- PRESUPUESTO 2024	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2024
PROYECTO NUEVO	0	\$34.449.908.100	\$34.449.908.100	N/A
TOTAL	0	\$34.449.908.100	\$34.449.908.100	N/A

BASE LEGAL

- Constitución Política de Colombia.

- Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2016 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: Paz total e integral. B. El diálogo: Un camino. 3. Espacios de conversaciones socio jurídicas con grupos no rebeldes. C. Desescalamiento de la violencia. D. La cultura de paz en la cotidianidad de las poblaciones y territorios. E. La paz en la esencia del Gobierno
- Decreto 2893 de 2011. Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior
- Decreto 2340 de 2015. Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
- Decreto 4100 de 2011, actual Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1066 de 2018: sectorial del sector interior.
- Decreto 4100 de 2011. Crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
- Sentencia C-009-18 Corte Constitucional. Los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) surge desde finales de los años noventa como propuesta conceptual, a partir de la cual se considera a los derechos humanos como fines constitutivos de los procesos de desarrollo. Es un marco de referencia fundamentado en el conjunto de valores, principios y normas universales sobre los derechos humanos, cuya estrategia se concentra en fortalecer las capacidades de los ciudadanos para exigirlos y de las instituciones para promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos, con el propósito de transformar las condiciones de vida de las personas, lo cual implica que las intervenciones prioricen los procesos y no solo los resultados. Con tal propósito se requiere adoptar una visión integral de lo que sucede a nivel individual, familiar, comunitario y social para también dar una respuesta integral a las problemáticas y realidades territoriales.

Al respecto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha indicado que el EBDH: “es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.” (OACDH, 2006: 15)

El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) se fundamenta en:

- Mejorar las capacidades de los titulares de deberes (servidores públicos) para el cumplimiento de sus obligaciones, y las de los titulares de derechos (ciudadanos) para reclamarlos.
- Lograr la inclusión, la participación, el empoderamiento y la defensa de los valores democráticos, especialmente de los grupos que tienen más vulnerados sus derechos.

- Promover la incorporación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, asegurando la participación ciudadana.
- Fortalecer el papel de las instituciones del Estado (como titulares de deberes) para que sean conscientes que sus obligaciones deben ser transparentes y respetuosas de los derechos humanos.
- Fomentar los procesos de incidencia política de los ciudadanos para conseguir la realización de los derechos, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de los diversos grupos poblacionales.
- Tiene como propósitos eliminar la desigualdad y la discriminación y transformarlas condiciones de vida de las personas, lo cual implica que las intervenciones prioricen los procesos y no sólo los resultados.
- Esta apuesta requiere adoptar una visión integral de lo que sucede a nivel individual, familiar, comunitario y social para dar una respuesta integral a las problemáticas y realidades territoriales.

Dada la necesidad de que las instituciones adopten el Enfoque Basado en Derechos Humanos, en el marco de la garantía del goce efectivo y real de los derechos de las comunidades en territorio, se requiere fortalecer la capacidad de gestión de los entes territoriales a través de la formación y capacitación de los funcionarios responsables en cada instancia.

Los diagnósticos construidos por la Dirección en materia de capacidades institucionales para la gestión en derechos humanos concluyen la necesidad imperiosa de desarrollar estrategias inmediatas para el fortalecimiento institucional y comunitario. En ese sentido, las prioridades para la gestión en derechos humanos identificadas fueron: i) estrategias de fortalecimiento institucional y organizativo; ii) cualificación en el enfoque basado en derechos humanos, dirigidos a autoridades locales, funcionarios públicos y sociedad civil; iii) gestión de recursos para la materialización del enfoque basado en derechos humanos; iv) procesos de articulación y coordinación entre los tres niveles de gobierno; v) socializar y poner en marcha acciones de política pública contra las diferentes formas de discriminación y vulneración de derechos, con especial énfasis en los sectores, sociales Étnicos Campesinos y LGBTI y/o personas con orientación sexual diversa; y vi) lo concerniente a la adopción de una estrategia territorial de cultura institucional en Derechos Humanos.

En este sentido, el proyecto busca profundizar en el fortalecimiento comunitario, institucional e interinstitucional para la gestión en Derechos Humanos, así como el diálogo y la participación, como acciones para adoptar la política pública que tiene por objeto la promoción y garantía del ejercicio efectivo de los derechos y con ello orientar al cumplimiento de la obligación de promover y procurar el goce efectivo de los derechos y libertades, mediante la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y desarrollos institucionales encaminados a materializar progresivamente este goce en condiciones de igualdad y no discriminación.

Si bien el Estado colombiano se ha comprometido en el fortalecimiento de la democracia como una de las grandes estrategias orientadas a lograr la paz y la construcción de una sociedad de ciudadanos libres y responsables, incluyendo el fortaleciendo de su

institucionalidad y el marco normativo para garantizar los derechos de las personas y prevenir su vulneración.

Pese a lo anterior y de acuerdo con la Encuesta de Cultura Política del DANE-2021, aplicada a 71.986 personas de 18 años y más con ciudadanía colombiana (que expandidas corresponde a 35 millones de personas aproximadamente), en 24.331 hogares de todo el territorio nacional, los entrevistados consideran que en Colombia el porcentaje de garantía de los derechos son los siguientes, datos que comparados con los resultados obtenidos en 2019 reflejan un importante descenso:

DERECHOS PROTEGIDOS Y GARANTIZADOS	ENCUESTA 2019	ENCUESTA 2021
Derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad	33,8%	30,5%
Derechos de las mujeres	30,5%	26%
Derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de la información	34%	29%
Derechos a la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda	34,8%	31,6%

Lo anterior es consecuencia de una débil articulación institucional, tanto intersectorial como entre el nivel nacional y territorial. Adicionalmente, los planes de acción de las diferentes políticas sectoriales deben fortalecer su enfoque basado en derechos humanos, incluyendo indicadores de gestión que permitan la participación en términos de rendición de cuentas, veeduría ciudadana que contribuyan mediante la evaluación de impacto y seguimiento a la mejora y toma de decisiones frente a los estándares mínimos necesarios para el efectivo y goce de los derechos.

El Ministerio del Interior, en el marco de lo consagrado por el Decreto 2893 de 2011, sirve de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promueve la integración de la nación con su territorio y su desarrollo, a través de la profundización de la descentralización, ordenamiento y autonomía local y la coordinación y armonización de las agendas de los diversos sectores administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este objetivo.

Adicionalmente en el marco sus competencias misionales, tiene como objetivos la formulación de planes y proyectos en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como el diseño e implementación de conformidad con la ley, de las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades del Estado competentes, en observancia del Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial y social.

Aunado a lo anterior el Decreto 2340 de 2015, que modificó el Decreto ley 2893 de 2011, establece que son funciones de la Dirección de Derechos Humanos, artículo 15 numeral 4º: *“Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de políticas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en la incorporación de un enfoque de derechos en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de implementación en el ámbito municipal y departamental.* A reglón seguido en el numeral 5º

se indica: *“Desarrollar, en coordinación con las entidades competentes acciones tendientes a la consolidación de una cultura de Derechos Humanos”.*

El Decreto 1066 de 2018, decreto sectorial del sector interior, tiene como objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, incluye como parte de la normatividad que compila e impulsa bajo el liderazgo de la Dirección de Derechos Humanos, la relacionada con la prevención de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género diversa y la generación de espacios de confianza dirigidos a impulsar la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de los integrantes de los sectores sociales LGBTIQ+ en los territorios.

Adicionalmente el Ministerio ha impulsado es la generación de la Resolución 1190 de 2018 por medio de la cual adopta el protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica, como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz, el cual reconoce que la movilización y la protesta pacífica “enriquecen a la inclusión política y forjan una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de nación” al tiempo que advierte que en “un escenario de fin de conflicto se debe garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica” (punto 2.2.2)

El Sistema Nacional de Derechos Humanos, creado mediante el Decreto 4100 de 2011, compilado por el Decreto 1081 de 2015, se asignan responsabilidades específicas al Ministerio del Interior en lo relacionado con la puesta en marcha y sostenibilidad técnica del Sistema en lo territorial, adicionalmente, en el ámbito nacional la Dirección de Derechos Humanos hace parte del Sistema Nacional de Derechos Humanos y coordina el subsistema de Derechos Civiles y Políticos, comparte la coordinación del Subsistema de Igualdad y No Discriminación con el Ministerio de Cultura y participa del Subsistema de Cultura y Educación en Derechos Humanos; igualmente, en razón de su gran responsabilidad sobre el funcionamiento del mecanismo de Nación-Territorio participa de los restantes subsistemas en coordinación con la Secretaría Técnica del mismo para este fin.

El ejercicio y goce efectivo de derechos requiere: i) el fortalecimiento institucional y comunitario, que pasa por la articulación de los niveles de gobierno, la gestión de información y el desarrollo de capacidades técnicas en los territorios; ii) promover la incorporación del Enfoque Basado en la Garantía de los Derechos Humanos como herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas; y iii) fortalecimiento de las capacidades de los líderes, lideresas y organizaciones sociales promotoras de los derechos humanos, acompañadas de acciones afirmativas de cultura, igualdad y no discriminación en el ejercicio de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, los diagnósticos construidos por la Dirección en materia de capacidades institucionales para la gestión en derechos humanos concluyen la necesidad imperiosa de desarrollar estrategias inmediatas para el fortalecimiento institucional y comunitario. En ese sentido, las prioridades para la gestión en derechos humanos identificadas fueron: i) estrategias de fortalecimiento institucional y organizativo; ii) cualificación en el enfoque

basado en derechos humanos, dirigidos a autoridades locales, funcionarios públicos y sociedad civil; iii) gestión de recursos para la materialización del enfoque basado en derechos humanos; iv) procesos de articulación y coordinación entre los tres niveles de gobierno; v) socializar y poner en marcha acciones de política pública contra las diferentes formas de discriminación y vulneración de derechos, con especial énfasis en los sectores, sociales Étnicos Campesinos y LGBTI y/o personas con orientación sexual diversa; y vi) lo concerniente a la adopción de una estrategia territorial de cultura institucional en Derechos Humanos.

En este sentido, el proyecto busca fortalecer las capacidades de las entidades territoriales y de la sociedad civil en la adopción del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) como garantía de prevención de la vulneración y protección de los derechos humanos y del goce efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los diversos sectores sociales, mediante la adopción de medidas, mecanismos y desarrollos institucionales encaminados a materializar progresivamente el derecho a la igualdad y no discriminación y demás derechos, a través de las siguientes acciones:

- Elaborar documento metodológico para la asistencia técnica y participación en las instancias territoriales de interlocución para la defensa, promoción y garantía de derechos humanos.
- Elaborar un documento de lineamientos para materializar los derechos a la participación de los derechos de los sectores LGBTIQ+ desde la perspectiva poblacional e interseccional.
- Actualizar los protocolos territoriales para la garantía de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones públicas y protesta social pacífica.
- Asistir técnicamente a 270 entidades territoriales en la adopción del enfoque de derechos humanos en sus procesos de gestión y el fortalecimiento de instancias de articulación y coordinación en materia de Derechos Humanos.
- Impulsar la adopción de los 64 protocolos territoriales, departamentales y de ciudades capitales, para la garantía de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones públicas y protesta social pacífica.
- Realizar 40 espacios de formulación de planes de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTIQ+ en los territorios.
- Asistir 270 entidades territoriales en la medición de la incorporación del enfoque basado en los derechos humanos en su gestión.
- Asistir 270 entidades territoriales en el proceso de caracterización y fortalecimiento de las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.
- Capacitar a 50 funcionarios en política pública de derechos humanos, gestión institucional y enfoque diferencial.

- Asistir técnicamente a las 32 entidades departamentales y sus ciudades capitales para la creación y fortalecimiento de escenarios o instancias de participación LGBTQ+.
- Acompañar técnicamente 12 instancias de coordinación y articulación de la política pública LGBTQ+ del orden nacional.
- Realizar acompañamiento a las 32 mesas o espacios de nivel territorial (departamental y sus ciudades capitales) con frecuencia bimestral, para el seguimiento a la implementación de los protocolos territoriales de garantía de los derechos humanos en contextos de manifestaciones públicas y protesta social pacífica y de conciliación.
- Cofinanciar 60 iniciativas territoriales seleccionados en el marco de los planes de trabajo en derechos humanos de las entidades territoriales.
- Cofinanciar 60 iniciativas de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTQ+, en el marco de los planes de autoprotección territorial.
- Cofinanciar 60 iniciativas para el fortalecimiento de la participación incidente de los sectores LGBTQ+.
- Capacitar 50 personas integrantes de organizaciones en política pública de derechos humanos, gestión institucional y enfoque diferencial.
- Realizar 6 jornadas de fortalecimiento a organizaciones sociales para la defensa y autoprotección de los derechos humanos y prevención de violaciones a los mismos.
- Capacitar 160 personas integrantes de las organizaciones y colectivos LGBTQ+, en participación incidente, democracia y mecanismos de exigibilidad de derechos.
- Desarrollar 32 jornadas dirigidas a fortalecer a los actores sociales LGTBI en la exigibilidad de derechos.
- Conmemorar el día nacional de los derechos humanos (9 de septiembre en virtud de la Ley 95 de 1985) y el día internacional de los derechos humanos (10 de diciembre), con el fin de avanzar en una cultura sobre los derechos humanos.
- Desarrollar la convención anual nacional LGBTQ+ la cual contará con la participación de delegados de los 32 departamentos (300 personas) en una jornada de 2 días.
- Desarrollar sendas campañas de comunicaciones dirigidas a la prevención de la estigmatización en el marco de las manifestaciones públicas y la protesta social pacífica, y a divulgar los protocolos territoriales de garantía de los Derechos Humanos en contextos de manifestaciones públicas y protesta social pacífica.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

NECESIDAD DE RECURSOS 2025			
ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	COSTO PROYECTADO (Pesos)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Elaborar documento metodológico para la asistencia técnica y participación en las instancias territoriales de interlocución para la defensa, promoción y garantía de derechos humanos	\$198.000.000	El documento de lineamientos técnicos y metodológicos para la asistencia técnica y participación en las instancias territoriales de interlocución para la defensa, promoción y garantía de derechos humanos	1 documento de lineamientos técnicos
Documento de lineamientos para materializar el derecho a la participación de los derechos de los sectores LGBTIQ+ desde la perspectiva poblacional e interseccional	\$600.341.100	Documento de lineamientos para materializar los derechos a la participación de los derechos de los sectores LGBTIQ+ desde la perspectiva poblacional e interseccional, para cuya construcción se realizarán 33 jornadas en las capitales de departamento con la participación de delegados de las instancias de participación LGBTIQ+ y de las entidades territoriales.	1 documento de lineamientos técnicos
Asistir técnicamente a entidades territoriales en adopción del enfoque de derechos humanos en sus procesos de gestión y el fortalecimiento de instancias de articulación y coordinación en materia de Derechos Humanos	\$2.616.132.000	270 entidades territoriales asistidas en la adopción del enfoque de derechos humanos en sus procesos de gestión y el fortalecimiento de instancias de articulación y coordinación en materia de Derechos Humanos	270 entidades territoriales asistidas
Impulsar la adopción de los protocolos territoriales para la garantía de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones públicas y protesta social pacífica.	\$2.410.460.200	64 entidades territoriales (departamentos y ciudades capitales) con protocolos territoriales para la garantía de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones públicas y protesta social pacífica adoptados.	64 entidades territoriales con protocolos territoriales adoptados.
Realizar espacios de formulación de planes de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTIQ+ en los territorios	\$1.341.494.800	Se acompañará técnicamente a las organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTIQ+ en los territorios, en la formulación de planes de autoprotección, con el fin de identificar escenarios y factores de riesgo basados en las dinámicas territoriales, las modalidades recurrentes de violencia, y las rutas prevención y protección existentes.	40 planes de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTIQ+ en los territorios formulados
Asistir a las entidades territoriales en la medición de la incorporación del enfoque basado en los derechos humanos en su gestión.	\$1.215.000.000	270 entidades territoriales asistidas en la medición de la incorporación del enfoque basado en los derechos humanos en su gestión.	270 entidades territoriales asistidas
Asistir a entidades territoriales en el proceso de caracterización y fortalecimiento de las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.	\$2.160.000.000	Se acompañará técnicamente a 270 entidades territoriales en el proceso de caracterización y fortalecimiento de las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, con miras a identificar las condiciones administrativas, de funcionamiento y gestión con que cada una de las organizaciones posee.	270 entidades territoriales acompañadas
Fortalecer la capacidad técnica de funcionarios en política pública de derechos humanos, gestión institucional y enfoque diferencial	\$90.000.000	Se desarrollará 1 diplomado con universidad acreditada los cuales beneficiarán a 50 funcionarios en política pública de derechos	50 funcionarios capacitados

NECESIDAD DE RECURSOS 2025			
ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	COSTO PROYECTADO (Pesos)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN DE LA META
		humanos, gestión institucional y enfoque diferencial, entre otros.	
Asistir técnicamente a entidades territoriales para la creación y fortalecimiento de escenarios o instancias de participación LGBTQ+.	\$1.296.000.000	Se acompañará técnicamente a los 32 departamentos con sus ciudades capitales en la creación y fortalecimiento de escenarios o instancias de participación LGBTQ+.	288 jornadas técnicas de acompañamiento para la creación y fortalecimiento de escenarios o instancias de participación LGBTQ+.
Acompañar técnicamente las instancias de coordinación y articulación de la política pública LGBTQ+ del orden nacional	\$54.000.000	Se acompañará técnicamente a las instancias de coordinación y articulación de la política LGBTQ+ a través de la modalidad de 12 sesiones territoriales.	12 instancias de coordinación y articulación de la política LGBTQ+ acompañadas técnicamente
Realizar seguimiento a la implementación de los protocolos territoriales de garantía de los derechos humanos en contextos de manifestaciones públicas y protesta social pacífica y de conciliación.	\$2.472.000.000	Acompañar las 32 mesas y/o espacios de seguimiento a la implementación de los protocolos de la garantía de los derechos humanos en desarrollo de manifestaciones y protesta social pacífica.	32 mesas y/o espacios de seguimiento acompañados
Cofinanciar proyectos territoriales seleccionados en el marco de los planes de trabajo en derechos humanos de las entidades territoriales	\$5.400.000.000	Se cofinanciarán 60 iniciativas focalizadas en el impulso a los planes de trabajo en derechos humanos de las entidades territoriales con un tope de 90 millones de pesos cada una.	60 iniciativas focalizadas en el impulso a los planes de trabajo cofinanciadas
Cofinanciar iniciativas de autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTQ+, en el marco de los planes de autoprotección territorial	\$5.400.000.000	Se cofinanciarán 60 iniciativas focalizadas en la autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTQ+, en el marco de los planes de autoprotección territorial, con un tope de 90 millones de pesos cada una.	60 iniciativas focalizadas en la autoprotección de organizaciones y colectividades de los sectores sociales LGBTQ+ cofinanciadas
Cofinanciar iniciativas para el fortalecimiento de la participación incidente de los sectores LGBTQ+	\$5.400.000.000	Se cofinanciarán 60 iniciativas para el fortalecimiento de la participación incidente de los sectores LGBTQ+, con un tope de 90 millones de pesos cada una.	60 iniciativas para el fortalecimiento de la participación incidente de los sectores LGBTQ+.
Apoyar el proceso de selección y seguimiento a la ejecución de los proyectos cofinanciados.	\$232.880.000	Profesionales con experiencia cuyos honorarios se tasan de acuerdo con la tabla de referencia utilizada por el Ministerio, los que incluyen gastos de desplazamiento para trabajo en campo encargado de realizar el seguimiento a la implementación y desarrollo de proyectos cofinanciados, así como al evalúo del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	12 informes de seguimiento a la implementación de las iniciativas, uno por mes.
Fortalecer la capacidad técnica de las organizaciones en política pública de derechos humanos, gestión institucional y enfoque diferencial	\$90.000.000	Se desarrollará 1 diplomados con universidad acreditada los cuales beneficiarán a 50 personas integrantes de organizaciones sociales en política pública de derechos humanos, gestión institucional y enfoque diferencial, entre otros.	50 personas integrantes de organizaciones sociales capacitadas

NECESIDAD DE RECURSOS 2025			
ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	COSTO PROYECTADO (Pesos)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN DE LA META
Realizar proceso de fortalecimiento a organizaciones sociales para la defensa y autoprotección de los derechos humanos y prevención de violaciones a los mismos.	\$1.977.600.000	Se desarrollarán 64 espacios de fortalecimiento a organizaciones sociales para la defensa y autoprotección de los derechos humanos y prevención de violaciones a los mismos.	64 espacios desarrollados
Fortalecer la capacidad técnica de las organizaciones y actores LGBTIQ+ participación incidente, democracia y mecanismos de exigibilidad de derechos	\$360.000.000	Se desarrollará 4 diplomados con universidad acreditada los cuales beneficiarán a 160 personas integrantes de las organizaciones y colectivos LGBTIQ+, en participación incidente, democracia y mecanismos de exigibilidad de derechos.	160 personas integrantes de las organizaciones y colectivos LGBTIQ+ capacitadas.
Fortalecer actores sociales LGTBI en la exigibilidad de derechos	\$256.000.000	Desarrollar 32 jornadas con actores sociales de los colectivos LGBTIQ+ en los territorios	32 jornadas desarrolladas.
Conmemorar el día de los derechos humanos y de lucha contra la discriminación, con el fin de avanzar en una cultura sobre los derechos humanos.	\$100.000.000	Desarrollo de espacio de conmemoración y realización acciones de homenaje en fechas simbólicas: el día nacional de los derechos humanos (9 de septiembre en virtud de la Ley 95 de 1985) y el día internacional de los derechos humanos (10 de diciembre), con el fin de avanzar en una cultura sobre los derechos humanos.	1 espacio de conmemoración y realización acciones de homenaje en fechas simbólicas en temas de derechos humanos realizados.
Realizar la convención nacional LGBTIQ+	\$600.000.000	Desarrollar la convención anual nacional LGBTIQ+ la cual contará con la participación de delegados de los 32 departamentos (300 personas) en una jornada de 2 días.	Convención anual desarrollada
Implementar una estrategia de comunicaciones para la prevención de la estigmatización en el marco de las manifestaciones públicas y la protesta social pacífica.	\$90.000.000	Diseño y elaboración de piezas comunicativas en formatos multimedia para la difusión de la estrategia de comunicaciones para la prevención de la estigmatización en el marco de las manifestaciones públicas y la protesta social pacífica.	Una campaña de prevención de la estigmatización en el marco de la protesta social pacífica diseñada y publicada
Divulgar los protocolos territoriales de garantía de los Derechos Humanos en contextos de manifestaciones públicas y protesta social pacífica.	\$90.000.000	Diseñar y publicar una campaña de divulgación de los protocolos de garantía de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones y protesta social pacífica.	Una campaña de divulgación de los protocolos de garantía de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones y protesta social pacífica, diseñada y publicada
	\$34.449.908.100		

Los costos de las actividades tienen como base: i) para el caso de prestaciones de servicios, los honorarios según la tabla establecida por el ministerio para ese tipo de contrataciones, con inclusión de proyección de gastos de viajes y tiquetes; ii) para las jornadas de trabajo, talleres, mesas y espacios los costos se basan en los históricos de operación logística que incluyen participación de sociedad civil, los cuales incluyen gastos relacionados con eventos, alimentación, hospedaje, tiquetes y apoyo de transporte, entre otras, con ampliación de la cobertura territorial en consideración a los compromisos asumidos por la Dirección; iii) para las impresiones se basa en los históricos de las previamente realizadas con la Imprenta Nacional; iv) para las iniciativas cofinanciadas, se

basa en los valores históricos del programa con incremento del número de iniciativas a fin de ampliar la cobertura territorial; y v) para las campañas, se basa en los históricos de campañas previamente realizadas por la Dirección con el apoyo y supervisión de la Oficina de Información Pública del Ministerio, aunado a que la campaña cumple indicador de acuerdo de paz.

3.2. UNIDAD EJECUTORA 37-01-02 MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA CONSULTA PREVIA (\$114.501.183.305)

3.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (\$110.778.397.526)

3.2.1.1 GASTOS DE PERSONAL (\$10.726.221.626)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

VALOR \$ PRESUPUESTO 2024	VALOR \$ NECESIDAD 2025	DIREFENCIA \$ NECESIDAD 2024- PRESUPUESTO 2025	INCREMENTO % NECESIDAD 2024 CON PRESUPUESTO 2025
\$ 9.091.000.000	\$ 10.726.221.626	\$ 1.635.221.626	18%
\$ 9.091.000.000	\$ 10.726.221.626	\$ 1.635.221.626	18%

CONTEXTO ACTUAL

Actualmente la planta de personal del Ministerio del Interior, unidad 370102, presenta el siguiente escenario:

DENOMINACIÓN DE CARGO	Grado	Planta Actual	Nómina Provista			Total Cargos Provistos	Cargos Vacantes
			Libre Nombramiento	Carrera Administrativa			
		1	2	Propiedad	Provisionales	5=2+3+4	6=1-5
Empleados Públicos							
DIRECTOR TÉCNICO	24	1	1			1	0
SUBDIRECTOR TÉCNICO	23	3	3			3	0
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	22	6		4		4	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	20	2		2		2	0
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	19	6		5		5	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	15	37		19	16	35	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	12	1				0	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11	6			3	3	3
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	18	3		2		2	1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	13	1		1		1	0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	7	7			5	5	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	1				0	1
CONDUCTOR MECÁNICO	19	1		1		1	0
Total Empleados Públicos		75	4	34	24	62	13
Trabajadores Oficiales							
Total Trabajadores Oficiales		0	0	0	0	0	0
Total Personal		75	4	34	24	62	13

*Fuente: Subdirección de Gestión Humana

La información del cálculo del presupuesto del anexo 1, se realizó con sueldos del 2024 e incrementados en 15%, de acuerdo con el Anexo 1 de la circular externa 009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3.2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (\$5.012.952.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-02	4.729.200.000	\$ 5.012.952.000	\$ 283.752.000	6%
TOTAL	4.729.200.000	\$ 5.012.952.000	\$ 283.752.000	6%

RUBRO	CONCEPTO	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2024 - Presupuesto 2025	Incremento % necesidad 2025 con respecto a 2024
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 6.740.578	\$ 7.145.013	\$ 404.435	6%
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 6.740.578	\$ 7.145.013	\$ 404.435	6%
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 15.000.000	\$ 15.900.000	\$ 900.000	6%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 8.000.000	\$ 8.480.000	\$ 480.000	6%
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 450.000.000	\$ 477.000.000	\$ 27.000.000	6%
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 79.100.000	\$ 83.846.000	\$ 4.746.000	6%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 200.000.000	\$ 212.000.000	\$ 12.000.000	6%
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 2.410.923.303	\$ 2.555.578.701	\$ 144.655.398	6%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 675.136.000	\$ 715.644.160	\$ 40.508.160	6%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 117.000.000	\$ 124.020.000	\$ 7.020.000	6%
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 738.745.619	\$ 783.070.356	\$ 44.324.737	6%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 12.000.000	\$ 12.720.000	\$ 720.000	6%
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 6.384.500	\$ 6.767.570	\$ 383.070	6%
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 10.170.000	\$ 10.780.200	\$ 610.200	6%
TOTAL DIFERENTES DE ACTIVOS		\$ 4.722.459.422	\$ 5.005.806.987	\$ 283.347.565	6%
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 4.729.200.000	\$ 5.012.952.000	\$ 283.752.000	6%

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa acorde con su misionalidad y funciones asignadas por el Decreto 2353 del 26 de diciembre de 2019, requiere contar con la infraestructura física adecuada y todos los servicios que de ésta se derivan. Por lo que, la Dirección realizó un estudio de los servicios administrativos requeridos para su funcionamiento, teniendo en cuenta la implementación del decreto 2354 de 2019 *“Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones”*.

En tal sentido, la proyección presupuestal para la adquisición de bienes y servicios de la vigencia 2025, se efectuó acorde con las necesidades básicas y prioritarias de esta autoridad, atendiendo a las políticas de austeridad en el gasto y las exigencias en materia ambiental, sumando un valor total de \$5.012.952.000, lo que representa un incremento frente al presupuesto apropiado 2024 del 6%.

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	VALOR \$ 2025
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.012.952.000
A -02 -01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 7.145.013
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 7.145.013
Adquisición de impresoras y consumibles de impresión para el Ministerio del Interior	Para la vigencia 2025, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa asignó recursos por valor de \$7.145.012 que le permitirán adquirir insumos de papelería para el uso de la misma. Es importante mencionar que para la vigencia 2024 se asignó un consumo de \$6.747.736, razón por la cual se ajusta el valor asignado, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 7.145.013
A -02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24.380.000
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS.	\$ 15.900.000
Papelería	Para la vigencia 2025, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa asignó recursos por valor de \$15.900.000, que le permitirán adquirir insumos de papelería para el uso de la misma. Es importante mencionar que para la vigencia 2024 se asignó un consumo de \$15.000.000, razón por la cual se ajusta el valor asignado, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 15.900.000
A-02-02-01-003-003	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	\$ 8.480.000
Suministro de Combustible	Para la vigencia 2025, La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa asignó recursos por valor de \$8.480.000, que le permitirán adquirir el suministro de combustible para el vehículo asignado a la DANCP. Es importante mencionar que para la vigencia 2024 se asignó un consumo de \$8.000.000, razón por la cual se ajusta el valor asignado, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 8.480.000
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 4.981.426.987
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 477.000.000

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	VALOR \$ 2025
Servicio de operación logística	Con el fin dar respuesta a las diferentes actividades de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se debe contar con el servicio de operación logística, y además pautar y divulgar en los diferentes medios de comunicación masiva los planes, programas, y los proyectos y oferta institucional del Ministerio del Interior, por un periodo de 12 meses, se asignó un total de \$477,000,000 para la vigencia 2025. Es importante mencionar que para la vigencia 2024 se asignó un consumo de \$450.000.000, razón por la cual se ajusta el valor asignado, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 477.000.000
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 83.846.000
Servicios Públicos	Para la vigencia 2025 se proyectó un consumo de 12 meses por valor de \$83.846.000 en servicios públicos, incrementando el 6% sobre el valor ajustado del consumo del 2024. Es importante mencionar que para la vigencia 2024 se asignó un valor de \$79.100.000, razón por la cual se ajusta el valor asignado, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 83.846.000
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 212.000.000
Seguros	Para la vigencia 2025, se asignó a este rubro el monto \$212,000.000, que cubre los seguros que garantiza y ampara la responsabilidad civil de Servidores Públicos y la protección de los activos e intereses patrimoniales actuales y futuros, bienes propios, o bienes que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos en un futuro; se incrementó el 6% sobre el valor real del costo de los seguros adquiridos. Es importante mencionar que para la vigencia 2023 se asignó un valor de \$200.000.000, razón por la cual se ajusta el valor asignado, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 212.000.000
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 2.555.578.701
Arriendo sede	Teniendo en cuenta que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - Ministerio del Interior para la vigencia 2024 proyectó el pago de canon de arriendo por un periodo de 12 meses por valor de \$2.410.923.303, para el funcionamiento de la sede, y contando que en la vigencia 2025, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, seguirá funcionando en la sede, se asignara el pago de canon de arrendamiento por un periodo de 12 meses por valor de \$2.555,578,701, incrementando en un 6% correspondiente a incremento del IPC.	\$ 2.555.578.701
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 715.644.160
Prestación de Servicios	Para la vigencia 2024, se asignó a este rubro el monto \$675.136.000, para cubrir gastos de contratación de servicios profesionales, asistenciales y técnicos. Teniendo en cuenta los lineamientos de austeridad del gasto, para la vigencia 2025, se realiza un incremento del 6%, garantizando que este rubro no aumente significativamente, y se pueda cubrir el aumento del IPC para 2024.	\$ 715.644.160
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 124.020.000
Mantenimiento a la plataforma BPM	Para la vigencia 2024, se asignaron a este rubro el monto \$117.000.000, para cubrir gastos de mantenimiento a la plataforma BPM, para la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - Ministerio del Interior; para el 2025 se incrementó en un 6% sobre el valor de la anterior vigencia, obteniendo un valor a solicitar por \$124.020.000	\$ 124.020.000
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 783.070.356

NECESIDAD / ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	VALOR \$ 2025
Aseo y Cafetería	Para la vigencia 2024, se asignó a este rubro el monto de \$184,333,014, para cubrir el servicio de aseo y cafetería, por un tiempo de 12 meses, por lo tanto, para la vigencia 2025 se proyectó este servicio por un periodo de 12 meses por un valor de \$195.392.995, se incrementó en 6% correspondiente al aumento del IPC con base en el valor real del servicio.	\$ 195.392.995
Servicio de Vigilancia	Para la vigencia 2023 se proyectó contratar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con armas y sin arma, con medio humano, con la utilización de medios tecnológicos incluyendo supervisión del servicio para la protección de los funcionarios, usuarios, bienes muebles e inmuebles de las instalaciones de la sede de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa de conformidad con lo establecido en las condiciones técnicas, por un tiempo de 12 meses por valor de \$449,412,605 para la vigencia 2025 aplicando el ajuste del presupuesto de IPC de 6%. correspondiente al valor de \$476.377.361	\$ 476.377.361
Kactus	Para la vigencia 2024, se asignó a este rubro el monto de \$105.000.000, para cubrir el servicio del aplicativo de Kactus, por un tiempo de 12 meses, por lo tanto, para la vigencia 2025 se proyectó este servicio por un periodo de 12 meses por valor de \$111.300.000 aplicando el ajuste del presupuesto de IPC de 6% sobre lo contratado en el 2023 toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 111.300.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 12.720.000
Mantenimiento Automóvil	Para la vigencia 2024, se asignó a este rubro el monto de \$12.000.000, para cubrir el servicio de mantenimiento de parque automotor de la DANCP por un tiempo de 12 meses, por lo tanto, Para la vigencia 2025 se proyectó contratar el servicio de mantenimiento automóvil, por un tiempo de 12 meses por valor de \$12,720,000, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas	\$ 12.720.000
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 6.767.570
Exámenes Médicos Ocupacionales (Periódicos- Ingreso y Retiro)	Para la vigencia 2024, se asignó a este rubro el monto \$6.384.000, Para la vigencia 2025 se proyectó contratar exámenes médicos, por valor de \$6.767.570, realizando el incremento de 6% del IPC, toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 6.767.570
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 10.780.200
Servicio de Acueducto	En la vigencia 2024 se apropió \$10.170.000 en servicios de acueducto por un periodo de 12 meses, en la vigencia 2025 se asignó un consumo por valor de \$10,780,200 incrementando 6% con respecto a lo apropiado en el 2024. toda vez que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades requeridas.	\$ 10.780.200

RUBRO	CONCEPTO	Valor \$ Necesidad 2025
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	7.145.013
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS		7.145.013
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	15.900.000
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	8.480.000
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	477.000.000
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	83.846.000
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	212.000.000
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.555.578.701
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	715.644.160
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	124.020.000
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	783.070.356
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	12.720.000
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	6.767.570
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.780.200
TOTAL DIFERENTES DE ACTIVOS		5.005.806.987
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		5.012.952.000

3.2.1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (\$94.942.657.900)

3.2.1.3.1 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993. (\$84.937.418.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-03-034	\$ 37.446.500.000	\$ 84.937.418.000	\$ 47.490.918.000	127%
TOTAL	\$ 37.446.500.000	\$ 84.937.418.000	\$ 47.490.918.000	127%

BASE LEGAL

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia, potencia mundial de la vida, pretende sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Colombia se propone como un ejemplo mundial de lucha por la vida, de la humanidad y de la naturaleza. Esta preocupación por la vida tiene su razón de ser en la injusticia secular que ha caracterizado el desarrollo nacional. Las injusticias son de muy diversa naturaleza: económica, social, ambiental. Frente a esta realidad abundan los sentimientos de indignación; y quienes votaron por el cambio perciben que la situación actual es profundamente injusta, y que debe transformarse de manera sustantiva.

Así que los elementos constitutivos de este plan son tres: primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua; segundo, la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y, tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión.

La convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia, es necesario avanzar en el fortalecimiento de los vínculos intra e interregionales.

Las injusticias y las inequidades históricas no podrán revertirse sin el involucramiento de la ciudadanía, reconociendo sus particularidades y sus visiones de territorio, de futuro y de desarrollo. En una sociedad injusta y polarizada, la percepción del otro como competidor por unos recursos escasos ha sido una constante, y ello ha generado una fragmentación y atomización del tejido social, un relacionamiento poco empático y una falta de reconocimiento de las vulnerabilidades de poblaciones específicas. Todas estas apuestas requieren que haya una transformación de las instituciones y de la gestión de lo público. Este proceso es una apuesta de largo aliento que implica transformaciones estructurales, principalmente culturales. Se debe buscar que las instituciones públicas pongan al ciudadano en el centro de su accionar, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas.

Se fortalecerá la gobernanza ambiental con el objetivo de emprender una restauración ecológica y acceso a la justicia ambiental en territorios en situación de vulnerabilidad, y se logrará a partir de una mayor participación ciudadana mediante la consulta previa con pueblos y comunidades étnicas, sobre las decisiones que los puedan afectar, en especial a proyectos de extracción de recursos naturales o proyectos de infraestructura en los territorios con presencia de pueblos étnicos.

Por otra parte, la transición energética tiene como uno de sus epicentros los territorios étnicos. Esto ha dado lugar a reconfiguraciones desde los pueblos, el Estado y las empresas que son un desafío para comprender la diversidad étnica, sus derechos y la obligación del Estado de garantizarlos en el marco de políticas y proyectos de desarrollo. Los proyectos de energía solar y eólica tienen impactos socioculturales y ambientales en las comunidades que deben ser valorados y compensados de manera justa en el marco de procesos de consulta previa. Se trabajarán con los pueblos y comunidades étnicas las adecuaciones institucionales para el diseño de esquemas que les permitan obtener beneficios de los proyectos para el fortalecimiento de su propio desarrollo.

Por todo lo anterior, este PND busca avanzar en procesos de fortalecimiento organizativo y de gobierno propio, de manera que, tanto en los territorios étnicos como en el territorio nacional, los pueblos y comunidades tengan la capacidad de hacer incidencia efectiva en la gestión pública en defensa de sus derechos. Esto deberá trascender el derecho fundamental a la consulta previa, para garantizar que haya una efectiva inserción y participación de los representantes de los pueblos y comunidades étnicas en la vida política del país y en las decisiones y así llevar a otras instancias los debates esenciales sobre su importancia.

Actualmente, el estado enfrenta grandes retos para lograr el objetivo propuesto. Por un lado, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior encuentra desafíos importantes para cumplir adecuadamente su obligación de determinar la procedencia y oportunidad de la consulta para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de proyecto, obras o actividades y de igual manera proteger el derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa por insuficiencia de capacidad institucional.

Por otro lado, no existe un marco normativo claro que dé seguridad jurídica a los actores involucrados en los procesos de consulta previa ejecutores de proyectos, comunidades étnicas, entidades públicas y órganos de control; y finalmente, existe un gran vacío en la gestión de la información sobre consulta previa debido a que no se cuenta con un sistema de información único sobre comunidades étnicas y tampoco hay información estadística sólida sobre la forma en como se ha venido desarrollando las consultas en el país.

El gobierno nacional creó la Dirección de Consulta Previa a través del decreto 2893 de 2011, y posteriormente, con la expedición del decreto 2353 de 2019, reconoció el carácter de **“Autoridad Nacional de Consulta Previa”** con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, atendiendo a la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018.

Dichos propósitos de fortalecimiento no son congruentes con el exiguo presupuesto asignado a esta entidad para garantizar el desempeño eficiente y eficaz del diálogo genuino

del derecho fundamental a la Consulta Previa, que demanda una reingeniería que garantice el cumplimiento del programa de gobierno y el plan de desarrollo ya anunciados.

Y en aras de dar cumplimiento al PND y a la máxima guardiana de la constitución en sentencia SU 123 de abril de 2018, la cual exhorto al Gobierno Nacional para la creación de una entidad con plena autonomía técnica, administrativa y financiera que se ocupe de garantizar la manera plena el derecho a la consulta previa. Es decir, para la Corte Constitucional el diseño y funcionamiento actual de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta previa, resulta insuficiente para tal finalidad.

Como lo manifiesta la Alta Corte, en el numeral 12.5 de la parte considerativa de la sentencia, así:

“12.5. La primera dificultad radica en la debilidad administrativa y financiera y la precaria independencia técnica de esa dirección, que le impide muchas veces realizar adecuadamente sus funciones, por lo cual en casos decididos por esta Corte esa dirección ha certificado equivocadamente que no existían grupos étnicos en territorios en donde efectivamente había presencia de esos grupos, con lo cual no fue realizada una consulta previa que era requerida constitucionalmente. Estas situaciones afectan los derechos de los grupos étnicos y generan inseguridad jurídica para los inversionistas. La Corte concluye que es necesario fortalecer la capacidad institucional del Estado en esta materia, por lo cual exhortará en la parte resolutive de esta sentencia al gobierno y al congreso a que tomen las medidas institucionales para que exista una institucionalidad sólida e independiente en relación con la expedición de este tipo de certificaciones, que compatibilice así el derecho a la consulta de los grupos étnicos con la seguridad jurídica a los inversionistas” se subraya por su importancia.

Ahora, la misma Corte en la parte decisoria de la misma providencia en cita, indicó: “SEXTO.- EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, con base en los lineamientos expuestos en esta sentencia: adopten las medidas pertinentes para regular lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, en los términos del Convenio 169 de la OIT; así mismo se realicen los ajustes para que la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas cuente con autonomía e independencia administrativa y financiera, necesarias para ejercer adecuadamente su función.

Dicha regulación puede afectar directamente a las comunidades étnicas, por tal razón se deben realizar los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas, mediante procedimientos adecuados, garantizando la participación de las comunidades a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.

Para poder realizar la Consulta Previa de la nueva regulación, de la creación de una entidad con plena autonomía técnica, administrativa y financiera que se ocupe de garantizar la manera plena el derecho a la consulta previa, se requiere la suma de **\$42.000.000.000**.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026”, incorporó en la agenda estratégica un conjunto de compromisos contenidos en el pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos, que constituye un hito en los planes de

desarrollo porque, por primera vez, se logró una concertación con todas las organizaciones representantes de los grupos étnicos en aspectos que van desde la narrativa, la estructura de cada capítulo y el nivel de estrategias y componentes.

Las estrategias y componentes concertados, tienen como escenario cada una de las dimensiones o ejes en que los grupos étnicos y pueblos indígenas conciben en su desarrollo. De esta forma, el Gobierno nacional se comprometió con la igualdad de oportunidades de los grupos étnicos, a través del respeto e impulso a sus usos y costumbres, de tal manera que tengamos una sociedad que respete la diferencia y en la que todos gocemos de los mismos derechos y oportunidades.

Entre los acuerdos adquiridos en el proceso consultivo de la hoja de ruta nacional, estuvo el compromiso de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, así como de los proyectos de iniciativa privada en territorio que afecten los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

Es de anotar, que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 2353 de 2019, corresponde a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa liderar, dirigir y coordinar el ejercicio del derecho a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados, que garanticen la participación de las comunidades étnicas a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural, implicando un conjunto de esfuerzos administrativos y operacionales concatenados, para cumplir este propósito.

En la actualidad, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa reporta un total histórico de 17.144 procesos de consulta previa, de los cuales se encuentran en estado activo 10.432, representando el 61% del total, de acuerdo con los datos obtenidos del Sistema de Información de Consulta Previa – SICOP.

Es pertinente precisar, que las cifras indicadas previamente, son el resultado de un proceso de actualización de la información de la plataforma SICOP que maneja la entidad, realizado en el segundo semestre del año 2023, con una revisión, depuración y verificación de 16.729 de los expedientes digitales, correspondiendo al 97% de los procesos consultivos a la fecha.

La dinámica de los procesos consultivos para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, ha generado retos y desafíos que enfrentan la capacidad institucional de esta Autoridad, conllevando a la intervención gubernamental y a la adopción de decisiones judiciales, que se encaminen a resolver y responder las expectativas de las comunidades étnicas en la construcción de un diálogo genuino.

El gobierno nacional creó la Dirección de Consulta Previa a través del decreto 2893 de 2011, y posteriormente, con la expedición del decreto 2353 de 2019, reconoció el carácter de **“Autoridad Nacional de Consulta Previa”** con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, atendiendo a la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018.

Se transcribe literalmente lo expresado por la Alta Corte, en el numeral 12.5 de la parte considerativa de la sentencia, así:

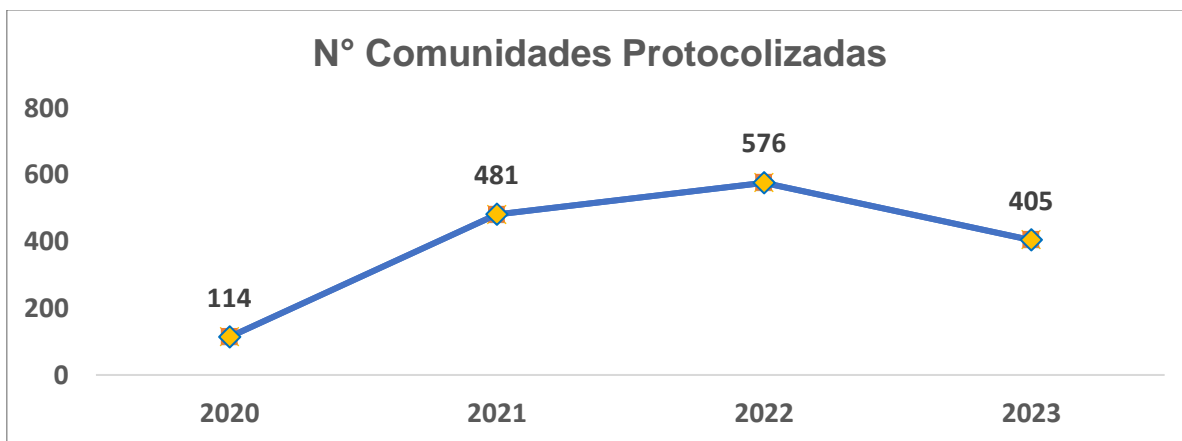
“12.5. La primera dificultad radica en la debilidad administrativa y financiera y la precaria independencia técnica de esa dirección, que le impide muchas veces

realizar adecuadamente sus funciones, por lo cual en casos decididos por esta Corte esa dirección ha certificado equivocadamente que no existían grupos étnicos en territorios en donde efectivamente había presencia de esos grupos, con lo cual no fue realizada una consulta previa que era requerida constitucionalmente. Estas situaciones afectan los derechos de los grupos étnicos y generan inseguridad jurídica para los inversionistas. La Corte concluye que es necesario fortalecer la capacidad institucional del Estado en esta materia, **por lo cual exhortará en la parte resolutive de esta sentencia al gobierno y al congreso a que tomen las medidas institucionales para que exista una institucionalidad sólida e independiente** en relación con la expedición de este tipo de certificaciones, que compatibilice así el derecho a la consulta de los grupos étnicos con la seguridad jurídica a los inversionistas”.(Subrayado y negrita fuera del texto)

En la parte decisoria de la sentencia en cita, la Corte ordenó:

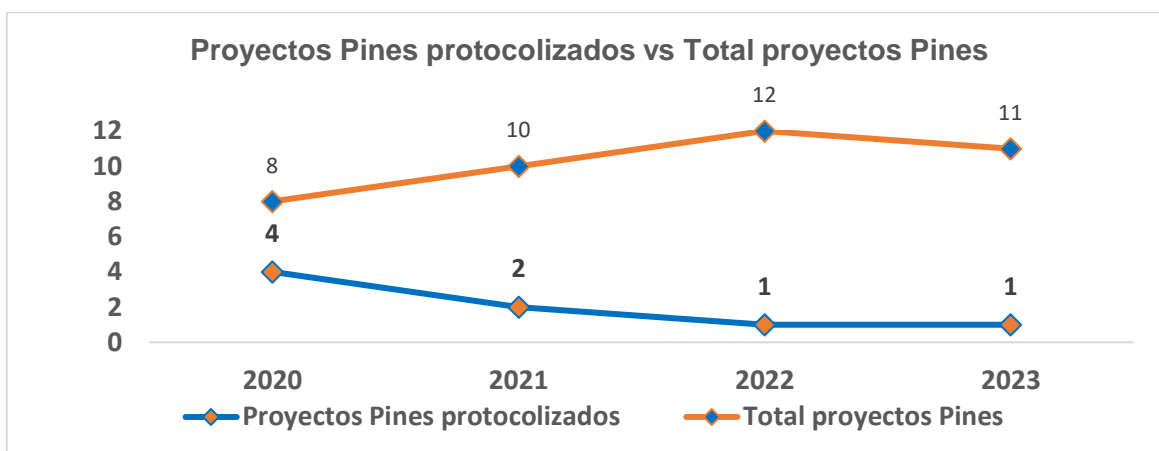
“SEXTO.- EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, con base en los lineamientos expuestos en esta sentencia: adopten las medidas pertinentes para regular lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, en los términos del Convenio 169 de la OIT; así mismo se realicen los ajustes para **que la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas cuente con autonomía e independencia administrativa y financiera, necesarias para ejercer adecuadamente su función**”. (Subrayado y negrita fuera del texto)

Conforme a lo anotado, el fortalecimiento institucional deviene de manera imperativa en la disposición de recursos para responder de manera eficiente a las realidades de los procesos consultivos, que a pesar de tener un número progresivo ascendente, en el ámbito cualitativo de su desarrollo incorporan condiciones particulares derivadas de los contextos sociales, que se traducen en mayores costos, tiempos y agendas de articulación, para lograr la concertación de acuerdos, como resultado de este tipo de procesos, pudiéndose evidenciar en la gráfica siguiente las dinámicas en la protocolización de acuerdos entre el año 2020-2023:

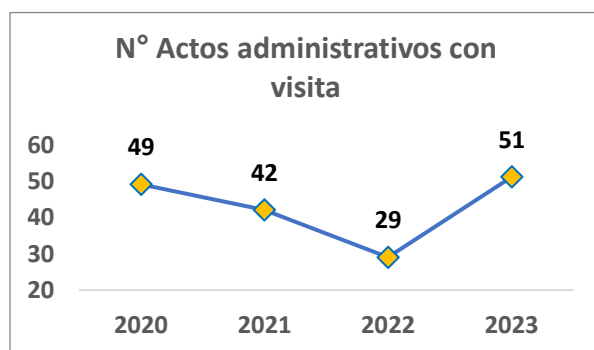


Para satisfacer los gastos demandados, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, ha apelado como estrategia de apalancamiento financiero, a la suscripción de convenios con agencias del gobierno nacional como la ANI, la ANH, la ANM, otras entidades y fondos especiales como FENOGE, en aras de aunar esfuerzos que permitan cubrir los gastos administrativos, de personal y operacionales requeridos, para garantizar la materialización efectiva del derecho fundamental a la consulta previa.

Esta Autoridad, debe adelantar el seguimiento de un número importante de procesos consultivos que fueron en su momento debidamente protocolizados con acuerdos totales o parciales y cuyo incumplimiento puede generar la inconformidad de las comunidades, a través de la movilización social. En este escenario se destacan los seguimientos a proyectos de infraestructura vial y proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, protocolizados en el marco de los proyectos de interés nacional y estratégico “PINES”:



El fortalecimiento institucional de la Autoridad de Consulta Previa, se consolida además, con el diseño e implementación de sistemas de información sobre comunidades étnicas, su caracterización y georreferenciación para hacer de la función de determinación de procedencia de la consulta previa un ejercicio sólido, desde los componentes, jurídicos, tecnológicos, antropológicos y culturales, que permita optimizar la gestión de los procesos consultivos, teniendo como base los actos administrativos de procedencia que requirieron visita en el periodo de 2020-2023:



Como estrategia complementaria para la garantía del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, está en marcha una agenda de formación dirigida al

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los grupos étnicos, los ejecutores e institucionalidad interviniente en los procesos de consulta previa de POAs, medidas legislativas y administrativas, mediante herramientas pedagógicas, metodológicas y tecnológicas que permitan su participación efectiva en dichos procesos, a partir de la cual se generen diferentes ejes estratégicos para la difusión del conocimiento de este derecho fundamental con el diseño de diversas herramientas, con énfasis en lo digital.

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1. Implementar los instrumentos jurídicos, requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa alineado a los fundamentos del plan nacional de desarrollo.	\$ 3.978.372.482	100% de porcentaje de avance en las actividades necesarias para implementar los instrumentos jurídicos requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa.	\$ 4.745.074.800	100% de porcentaje de avance en las actividades necesarias para implementar los instrumentos jurídicos requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa.
2. Garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.	\$ 15.201.777.082	100% Porcentaje de avance en las actividades necesarias para garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.	\$ 58.233.353.100	100% Porcentaje de avance en las actividades necesarias para garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.
3. Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.	\$ 15.442.994.066	100% de porcentaje de avance en las actividades para el diseño, implementación y evaluación de la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.	\$ 18.486.232.300	100% de porcentaje de avance en las actividades para el diseño, implementación y evaluación de la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.
4. Articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.	\$ 2.823.356.370	100% de porcentaje de avance en las actividades requeridas para articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.	\$ 3.472.757.800	100% de porcentaje de avance en las actividades requeridas para articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
TOTAL	\$ 37.446.500.000		\$ 84.937.418.000	

El Ministerio del Interior, dentro de su asignación presupuestal, cuenta con un rubro asignado para el programa Misional de Funcionamiento “FORTALECIMIENTO A LA

CONSULTA PREVIA CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993”, destinado para el cumplimiento de las obligaciones misionales del Ministerio del interior a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa correspondiente al rubro A-03-03-01-034, recurso 10.

Se hace necesario contar con los rubros de funcionamiento para impulsar la gestión de las Subdirecciones de Técnica y de Gestión de Consulta Previa, la primera, encargada de aplicar visitas de verificación en territorio de los proyectos alineados con el programa de gobierno y el plan de desarrollo, identificación de actores, necesidades, diagnóstico y formulación del plan de trabajo requerido para la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa e implementación de la agenda de formación, para grupos de interés, y la segunda encargada de adelantar el proceso establecido para la gestión de la consulta previa.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades necesarias para impulsar la subdirección técnica y la de gestión son: suministro de tiquetes, suministro de viáticos, gestión de operador logístico, sistemas de información, prestación de servicios personales y finalmente demás actividades de contratación de bienes y servicios misionales, se presupuesta la suma de. \$84.937.418.000, distribuidos de la siguiente manera:

- El 18% del presupuesto se prevé asignarlo a la contratación de recurso humano, para asegurar la contratación de personas por prestación de servicios, que permitan cumplir y apoyar el trámite de determinación de la procedencia de la consulta y la gestión de las rutas metodológicas establecidas en los procesos de consulta previa, y así mismo, fortalecer la capacidad física y tecnológica; sin perjuicio de los avances que en materia de formalización laboral logre el ministerio del interior a través de la Subdirección de Gestión Humana, caso en el cual este porcentaje será objeto de revisión y ajuste en su oportunidad.
- El 9% del presupuesto será asignado a gastos de viáticos y tiquetes aéreos, necesarios para el desplazamiento del personal tanto de planta como de contratación de servicio, para el cumplimiento de sus obligaciones.
- El 24% restante se encuentra distribuido en gastos para el Cumplimiento autos y sentencias relacionadas con el derecho fundamental a la consulta previa, actualización de software, escuela de formación, contratación de operador logístico, suscripción jurídica dentro de la plataforma de los procesos judiciales en defensa del estado, sistema de información.
- Y un 49% para realizar la consulta previa de la normatividad que garantice la creación de una entidad con plena autonomía técnica, administrativa y financiera que se ocupe de garantizar la manera plena el derecho a la consulta previa, así como el trámite de un proyecto de ley reglamentario de la Consulta Previa y la norma que reconozca la autonomía total de la autoridad, tal como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia SU-123 de 2018.

3.2.1.3.2 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993- FRISCO (\$ 10.005.239.900)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-03-03-03-034	\$ 17.094.000.000	\$ 10.005.239.900	-\$ 7.088.760.100	-41,50%
TOTAL	\$ 17.094.000.000	\$ 10.005.239.900	-\$ 7.088.760.100	-41,50%

PRESUPUESTO DEL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) \$ 10.005.239.900

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se encuentra adelantado consultas previas para la erradicación de cultivos ilícitos en el marco de las sentencias SU-383/03, T-236/17, T300/17, T370/21. al rubro A-03-03-01-034, recurso 11.

Cuando se habla de un exiguo presupuesto, resulta oportuno advertir a título de ilustración, que del presupuesto apropiado para la vigencia de 2024, el TREINTA Y UN CIENTO (31 %) corresponde al convenio suscrito por la DANCP con el Fondo Para la Rehabilitación e Inversión Social y la Lucha Contra el Crimen Organizado “FRISCO” dirigido a la atención de seis (6) sentencias de tutela de etno-reparación y erradicación de cultivos de uso ilícito, expedidas por jueces constitucionales, es decir, recursos de destinación específica, que si bien se incorporan al presupuesto del Ministerio del Interior, estos están limitados a esa actividad focalizada y concreta.

Dado lo anterior y en atención a la solicitud de estimación de presupuesto para el desarrollo de los procesos de consulta previa en cumplimiento de las sentencias SU-383 de 2003, T-080 de 2017, T-236 de 2017 y T-300 de 2017 y de los resguardos que serán priorizados por el sector Defensa para la vigencia 2022 en marzo de la sentencia SU-383 de 2003, realizada mediante MJD-OFI21-0007625-DCD-3300 del 08 de marzo de 2021 por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se realizó el ejercicio de estimación de presupuesto para el desarrollo logístico de las reuniones requeridas para llevar a cabo dichas consultas, el cual será solicitado ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, quien tomará la decisión de la destinación de dichos recursos mediante el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), de la siguiente manera:

Estimación presupuestal para los procesos de consulta previa que se espera serán priorizados en el marco de las Sentencias fallo de tutela 2020-00302-01 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto - Sala de Decisión Pena, Sentencias T-300 de 2017, T-236 de 2017, para la vigencia 2025. Se estima un valor de NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.047.000.000)

Teniendo en cuenta la falta de notificación por parte del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, se retoma la proyección a la vigencia 2025 “En conclusión, el presupuesto estimado para la propuesta

de priorización para la vigencia 2025, para las comunidades antes referidas y el equipo profesional, asciende a la suma de DIEZ MIL CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$10.005.239.900), discriminados así:

No.	PROCESO	MONTO
1	Tutela 2020-00302-01	\$ 2.400.000.000
2	Sentencia T-300 de 2017	\$ 3.000.000.000
3	Sentencia T-236 de 2017	\$ 3.647.000.000
4	Equipo Técnico para la realización de las consultas previas (Incluye honorarios, viáticos y tiquetes)	\$ 958.239.900
TOTAL		\$ 10.005.239.900

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se hace necesaria una asignación presupuestal para gastos de funcionamiento correspondiente al rubro A-03-03-01-034, recurso 10 y recurso 11, para la vigencia 2025 de \$ 94.942.657.900, distribuidos de la siguiente manera:

No. INICIATIVA	INICIATIVAS ASOCIADAS A LA PRIORIDAD	ACTIVIDAD ASOCIADA A LA INICIATIVA	PRESUPUESTO APROPIADO INICIATIVA 2024	PROYECTO PRESUPUESTO 2025
1	Implementar los instrumentos jurídicos, requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa alineado a los fundamentos del plan nacional de desarrollo.	Construcción del inventario y valoración del marco normativo Priorización de los ejes normativos acorde con los fundamentos del plan nacional de desarrollo. Planeación de las fases de proceso de construcción, adopción y puesta en ejecución de los instrumentos jurídicos. Construcción colectiva de los instrumentos jurídicos con los actores de la consulta.	\$ 3.978.372.482	\$ 4.745.074.800
2	Garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.	Construcción colectiva de las metodologías técnicas de los procesos de consulta previa. Aplicación visitas de verificación en territorio de los proyectos alineados con el programa de gobierno y el plan de desarrollo. Construcción de los términos de referencia por sector para garantizar el derecho a la consulta previa. Determinación de la procedencia de la consulta previa. Gestión y coordinación los procesos consultivos Coordinación de los procesos de Consulta previa para la etnoreparación de los grupos étnicos en el marco de las órdenes judiciales para erradicación de cultivos de uso ilícito.	\$32.295.777.082 de los cuales \$17.094.000.000 son recursos FRISCO	\$68.238.593.000 de los cuales \$10.005.239.900 son recursos FRISCO
3	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.	Implementación del comité interdisciplinario de expertos para el estudio, evaluación y orientación de procesos críticos. Identificación de actores, necesidades, diagnóstico y formulación del plan de trabajo requerido para la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa. Creación e implementación de la Escuela de formación, para grupos de interés. Divulgación y comunicación efectiva, explicativa de las sentencias judiciales proferidas por la H. Corte Constitucional.	\$ 15.442.994.066	\$ 18.486.232.300
4	Articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.	Gestión de la autonomía técnica, administrativa y financiera que garantice la misionalidad. Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas y sistemas de información. Desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en materia de consulta previa a los funcionarios y contratistas de la DANCP	\$ 2.823.356.370	\$ 3.472.757.800
			\$ 54.540.500.000	\$ 94.942.657.900

En términos específicos, el incremento del presupuesto para gastos de funcionamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta previa para la vigencia 2025 es del 174%, el cual se sustenta en las siguientes necesidades:

1. Implementar los instrumentos jurídicos, requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa alineado a los fundamentos del plan nacional de desarrollo.

Dicha actividad contempla el desarrollo de cuatro subactividades que son: 1. Construcción del inventario y valoración del marco normativo, 2. Priorización de los ejes normativos acorde con los fundamentos del plan nacional de desarrollo, 3. Planeación de las fases de proceso de construcción, adopción y puesta en ejecución de los instrumentos jurídicos y 4. Construcción colectiva de los instrumentos jurídicos con los actores de la consulta.

Para el desarrollo de esta actividad se requiere aumentar el presupuesto asignado en un 19,3%, pasando de \$ 3.978.372.482 a \$4.745.074.800, toda vez que se requiere implementar y socializar los instrumentos jurídicos requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa alineados a los fundamentos del plan nacional de desarrollo y la construcción colectiva de los instrumentos jurídicos con los actores de la consulta.

2. Garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos: 1. Construcción de los términos de referencia por sector para garantizar el derecho a la consulta previa, 2. Aplicación de visitas de verificación en territorio de los proyectos alineados con el programa de gobierno y el plan de desarrollo, y 3. Determinación de la procedencia de la consulta previa, 4. Construcción colectiva de las metodologías técnicas de los procesos de consulta previa, 5. Gestión y coordinación de los procesos consultivos.

Para el desarrollo de dicha actividad se requiere aumentar el presupuesto asignado en un 211%, pasando de \$ 15.201.777.082 a \$ \$68.238.593.000, toda vez que se requiere Garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos, ya que según datos del Sistema de Información de Consulta Previa – SICOP de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, reporta un total histórico de 17.144 procesos de consulta, de los cuales permanecen en estado activo 10.432 trámites, es decir que el 61% de procesos de consulta están activos.

Por otra parte, en aras de dar cumplimiento la Corte Constitucional en sentencia SU 123 de abril de 2018, reiteró el exhorto al Gobierno Nacional para la creación de una entidad con plena autonomía técnica, administrativa y financiera que se ocupe de garantizar la manera plena el derecho a la consulta previa. Es decir, para la Corte Constitucional el diseño y funcionamiento actual de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta previa, resulta insuficiente para tal finalidad.

3. Diseñar implementar y evaluar la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa: 1. Implementación del comité interdisciplinario de expertos para el estudio, evaluación y orientación de procesos críticos, 2. Identificación de actores, necesidades, diagnóstico y formulación el plan de trabajo requerido para la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa, 3. Implementación y formación para grupos de interés y 4. Divulgación y comunicación efectiva, explicativa de las sentencias judiciales proferidas por la H. Corte Constitucional.

Para el desarrollo de dicha actividad se requiere aumentar el presupuesto asignado en un 19,7%, pasando de \$15.442.994.066 a \$18.486.232.300, toda vez que se requiere Diseñar implementar y evaluar la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa, adicionalmente en esta actividad se incluyó la **Subactividad 4. Divulgación y comunicación efectiva, explicativa de las sentencias judiciales proferidas por la H. Corte Constitucional**, esto debido que

la Corte Constitucional ha expedido más de 200 sentencias que guardan relación de la consulta previa, generando el crecimiento constante de solicitudes de certificación de procedencia y de gestión del proceso consultivo, y, porque no expresarlo, generando zozobra e incertidumbre en el sector de inversión, que a juicio de los interesados generan moras injustificados en el desarrollo, ejecución y operación de proyectos, obras o actividades y en el trámite de medidas legislativas y administrativas, obviamente tesis que no se comparte por esta Autoridad

4. Articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa: 1. Gestión de la autonomía técnica, administrativa y financiera que garantice la misionalidad, 2. Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas y sistemas de información, y 3. Fortalecimiento de competencias, habilidades y destrezas en materia de consulta previa a los funcionarios y contratistas de la DANCP.

Para el desarrollo de dicha actividad se requiere aumentar el presupuesto asignado en un 23%, pasando de \$ \$2.823.356.370 a \$ 3.472.757.800, toda vez que se requiere actualizar o generar nuevas herramientas tecnológicas que permiten Articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, permitiendo mayor celeridad de respuesta a los tramites tanto para los clientes interno y externos de esta entidad

METAS Y LOGROS PARA ALCANZAR 2024-2025

ACTIVIDAD / LOGRO A ALCANZAR	RECURSOS 2024		RECURSOS 2025	
	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META	COSTO PROYECTADO	CUANTIFICACIÓN DE LA META
1. Implementar los instrumentos jurídicos, requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa alineado a los fundamentos del plan nacional de desarrollo.	\$ 3.978.372.482	100% de porcentaje de avance en las actividades necesarias para implementar los instrumentos jurídicos requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa.	\$ 4.774.046.978	100% de porcentaje de avance en las actividades necesarias para implementar los instrumentos jurídicos requeridos para garantizar el derecho a la consulta previa.
2. Garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.	\$ 32.295.777.082	100% Porcentaje de avance en las actividades necesarias para garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.	\$ 68.242.132.498	100% Porcentaje de avance en las actividades necesarias para garantizar el derecho a la consulta previa, mediante la construcción colectiva de los procedimientos técnicos requeridos para la determinación de la procedencia y la coordinación y aplicación de dichos procesos.
3. Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.	\$ 15.442.994.066	100% de porcentaje de avance en las actividades para el diseño, implementación y evaluación de la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.	\$ 18.531.592.880	100% de porcentaje de avance en las actividades para el diseño, implementación y evaluación de la estrategia de fomento y sensibilización en materia de Consulta Previa.
4. Articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.	\$ 2.823.356.370	100% de porcentaje de avance en las actividades requeridas para articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.	\$ 3.388.027.644	100% de porcentaje de avance en las actividades requeridas para articular y consolidar la gestión operacional de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
TOTAL	\$ 54.540.500.000		\$ 94.935.800.000	

3.2.1.4. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA. (\$96.566.000)

3.2.1.4.1. CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (\$96.566.000)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$	Incremento % necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
A-08-04-01	\$ 91.100.000	\$ 96.566.000	\$ 5.466.000	6%
TOTAL	\$ 91.100.000	\$ 96.566.000	\$ 5.466.000	6%

Al valor asignado para esta vigencia 2024 se le aplicó el incremento del 6%, para calcular el valor para la vigencia 2025, obteniendo un total de \$96.566.000.

3.2.2 INVERSIÓN (\$3.722.785.779)

3.2.2.1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES CON QUE CUENTAN LOS GRUPOS ÉTNICOS, EJECUTORES E INSTITUCIONALIDAD INTERVINIENTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA NACIONAL. (\$3.722.785.779)

NECESIDAD DE RECURSOS 2025

Rubro	Valor \$ Presupuesto 2024	Valor \$ Necesidad 2025	Diferencia \$ Necesidad 2025 - Presupuesto 2024	Incremento % Necesidad 2025 respecto presupuesto 2024
C-3799-1000-1	\$ 4.000.000.000	\$ 3.722.785.779	-\$ 277.214.221	-6,90%
TOTAL	\$ 4.000.000.000	\$ 3.722.785.779	-\$ 277.214.221	-6,90%

BASE LEGAL

El artículo 6º literales a) y c) de la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad, asigna al Gobierno Nacional la obligación de consultar a los grupos étnicos del país, "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean adoptar medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente" y de establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin".

De igual manera, la Constitución Política en su artículo 1º define, entre otras cosas, que Colombia es un Estado social de derecho, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana; y, en su artículo 2º, determina que uno de los fines del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Así mismo, la Constitución Política determina en el artículo 7º que: "[e]l Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana".

En cumplimiento de los postulados y principios Constitucionales, el Estado colombiano en aras de proteger la identidad étnica y cultural de los grupos étnicos, estableció dentro de la estructura interna del Ministerio del Interior la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la cual tiene dentro de sus competencias en el marco de lo establecido en el Decreto 2353 de 2019 liderar, dirigir y coordinar el ejercicio del derecho a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados, garantizando la participación de las comunidades a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural”; así como también establecer directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas para realizar los procesos de consulta previa, de conformidad con lo establecido en la legislación sobre la materia,” y adoptar los criterios para brindar la capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de consulta previa. Aunado a lo anterior, el Ministerio del Interior a través de la ejecución del proyecto, orientará su gestión para contribuir con las metas establecidas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026) Colombia, potencia mundial de la vida, el cual busca la transformación a través del desarrollo económico, social y ambiental.

De igual manera, el Ministerio del Interior apunta, con fundamento en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 Colombia, potencia mundial de la vida, a “modernizarse bajo un modelo de gobernanza descentralizado, que promueva transformaciones encaminadas a establecer marcos normativos y arreglos institucionales, sistemas de gestión de recursos, que sean eficaces y transparentes”, y “además, promover el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones”, con lo cual se pretende apoyar con el aumento del indicador: “Índice de Confianza Institucional”.

Así mismo, articulado a la transformación de convergencia regional del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, el Ministerio del Interior a través del proyecto de inversión busca fortalecer las capacidades institucionales, organizativas e individuales para garantizar la participación efectiva y activa en los procesos de consulta previa mediante un diálogo genuino.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

El proyecto de inversión se lleva a cabo porque en los procesos de consulta previa de los proyectos, obras, actividades, medidas legislativas y administrativas, se ha identificado la necesidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los actores que intervienen en dichos procesos consultivos, para que coadyuven al desarrollo integral de los grupos étnicos, las regiones y el país en general.

De igual manera, se ha identificado la debilidad en las capacidades y habilidades con que cuentan los grupos étnicos, los ejecutores e institucionalidad interviniente para participar en los procesos de consulta previa de POAS, medidas legislativas y administrativas, se ha visto reflejada en: (i) Las áreas estratégicas de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Subdirecciones Técnica y de Gestión) se conforman por 57 contratistas, los cuales por la modalidad de vinculación no presentan continuidad entre vigencias. (ii) De acuerdo con el sondeo realizado en el año 2022 a 297 personas, el 30% de los encuestados se encuentra insatisfecho con la claridad en la explicación del proceso de consulta previa por parte de los funcionarios. (iii) De acuerdo con el sondeo realizado en el año 2022 a 297 personas, el 31% manifestó su insatisfacción con la socialización y presentación del marco normativo que sustenta la consulta previa por parte de los profesionales de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. (iv) De acuerdo

con el censo DANE 2018 para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los indicadores Los indicadores que presentan mayores niveles de privación en todos los dominios y que presentan mayor brecha entre las cabeceras y los centros poblados y rural disperso, son: Bajo logro educativo (32,7 p.p.) y analfabetismo (17,8 p.p.). El porcentaje de alfabetismo en la población de 5 años a más de las comunidades indígenas es del 82,8% y el porcentaje de alfabetismo en la población de 5 años y más es del 91,3%. (v) De acuerdo con el sondeo realizado en el año 2022 a 297 personas, el 31% manifestó su insatisfacción con la socialización y presentación del marco normativo que sustenta la consulta previa por parte de los profesionales de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. (vi) De acuerdo con el sondeo realizado en el año 2022 a 297 personas, el 30% de los encuestados se encuentra insatisfecho con la claridad en la explicación del proceso de consulta previa por parte de los funcionarios. (vii) De 6.679.426 personas que conforman los grupos étnicos en Colombia de acuerdo con el censo DANE 2018, solo se ha capacitado sobre consulta previa a 2.778 personas en el año 2022. (viii) De acuerdo con el sondeo realizado en el año 2022 a 297 personas, el 12 % de los encuestados se encuentra insatisfecho con los espacios de participación generados con las comunidades (ix) En el año 2022 se tramitaron 198 acciones de tutela y 22 incidentes de desacato. **(x)** De acuerdo con el sondeo realizado en el año 2022 a 297 personas, el 50 % de los encuestados se encuentra insatisfecho con la metodología utilizada para brindar la capacitación en consulta previa, y el 42% de los encuestados se encuentra insatisfecho con claridad en la explicación del proceso de consulta previa por parte de los funcionarios.

En este sentido, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, del 2014 al 28 de febrero de 2023 ha adelantado 2.207 eventos sobre el derecho fundamental a la consulta previa, beneficiando a 18.555 personas. No obstante, para fortalecer las capacidades y habilidades de los funcionarios y contratistas de la entidad y de los grupos étnicos, ejecutores e institucionalidad interviniente en los procesos de consulta previa, ha identificado la necesidad de establecer mecanismos y herramientas para contribuir al cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo en búsqueda del bienestar general, reconociendo las particularidades de los grupos étnicos en la construcción de la nación a través del diálogo social.

Para la sostenibilidad del proyecto, se empoderará a los funcionarios de planta, con el propósito de que sirvan de multiplicadores del conocimiento a los nuevos contratistas, y para fortalecer a los grupos étnicos, ejecutores e institucionalidad interviniente de los nuevos procesos consultivos. Igualmente, se mantendrán activas las herramientas tecnológicas para la autoformación digital. Así mismo, se continuará con la realización de los foros, diplomados y conversatorios para lo cual se gestionarán alianzas de cooperación con instituciones educativas y la cooperación internacional.

Para poder determinar la proyección de recursos del proyecto, se analizó cada una de las actividades necesarias para el logro de cada uno de los objetivos del proyecto así:

- 36 capacitaciones en fortalecimiento de capacidades institucionales sobre el marco jurídico y alcances de la consulta previa, se requerirá del apoyo logístico consistente en material pedagógico y alimentación.
- Adelantar alianzas de cooperación con instituciones de educación superior para dictar 6 diplomados bajo los módulos concertados con el Ministerio del Interior.
- 6 curso Digital de Autoformación en Consulta Previa para fortalecimiento de capacidades institucionales.

- Realización de 8 Foros y Conversatorios sobre consulta previa, para esta actividad, se requerirá la contratación de la logística del evento consistente en la consecución del lugar dónde se llevará a cabo, material pedagógico y metodológico, alimentación, el reconocimiento de transporte multimodal a los líderes de los grupos étnicos, reconocimiento de honorarios a los expertos y académicos.
- Diseño y publicación de documentos pedagógicos, metodológicos y lineamientos técnicos.
- Apoyo pedagógico, gráfico y de comunicación. Para esta actividad se deberá adelantar la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades durante la ejecución del proyecto
- Apoyo logístico para las 423 capacitaciones en los territorios étnicos.

METAS Y LOGROS A ALCANZAR 2025

ACTIVIDAD /LOGRO A ALCANZAR	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025		
	COSTO PROYECTADO (pesos) (a)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (b)	COSTO PROYECTADO (pesos) (c)	CUANTIFICACIÓN DE LA META (d)	
1	Objetivo específico 1: Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y contratistas de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre el derecho fundamental de consulta previa.				
1.1	Fortalecimiento de capacidades institucionales sobre el marco jurídico y alcances de la consulta previa.	\$ 180.000.000	13	\$ 198.000.000	13
1.2	Adelantar alianzas de cooperación con instituciones de educación superior para dictar diplomados bajo los módulos concertados con el Ministerio del Interior	\$ 410.000.000		\$ 451.000.000	
1.3	Curso Digital de Autoformación en Consulta Previa para fortalecimiento de capacidades institucionales	\$ 500.000.000		\$ 50.000.000	
2	Objetivo específico 2: Incrementar los conocimientos sobre el derecho fundamental de consulta previa de los grupos étnicos, ejecutores e institucionalidad interviniente.				
2.1	Adelantar alianzas de cooperación con instituciones de educación superior para dictar diplomados bajo los módulos concertados con el Ministerio del Interior.	\$ 410.000.000	20.000	\$ 451.000.000	30.000
2.2	Curso Digital de Autoformación en Consulta Previa para grupos étnicos, ejecutores e institucionalidad interviniente.	\$ 500.000.000		\$ 50.000.000	
2.3	Realización de Foros y Conversatorios sobre consulta previa.	\$ 517.012.928		\$ 891.000.000	
2.4	Fortalecimiento de capacidades en los procesos concertación de los grupos étnicos en territorio.	\$ 450.000.000		\$ 495.000.000	
2.5	Diseño y publicación de documentos pedagógicos, metodológicos y lineamientos técnicos.	\$ 250.000.000	100	\$ 275.000.000	147
2.6	Divulgación	\$ 332.987.072		\$ 366.285.779	
2.7	Plan de trabajo	\$ 450.000.000		\$ 495.000.000	
TOTAL		\$ 4.000.000.000		\$ 3.722.785.779	